

Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, entre los días 28 de septiembre de 2021 y 17 de mayo de 2022, tuvo lugar la audiencia de juicio oral ante este Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el que estuvo **constituido por los jueces** Bernardita González Figari, quien presidió, Olga Ortega Melo y José María Toledo Canales.

Asistieron como intervinientes, por **el ministerio público**, la fiscal Constanza Encina Calquín; por el **querellante Consejo de Defensa del Estado**, el abogado Ricardo Segundo González Benavides, Fernando Guerra Avilés y David Martínez Aránguiz.; por la **defensa de los acusados CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO** (rol único nacional de identidad 8.820.427-1, nacido el 31 de julio de 1969, 52 años, casado, ingeniero comercial, domiciliado en Los Estanques N° 9366, Vitacura), **NELSON ANDRÉS BUSTOS MORGADO** (rol único nacional de identidad 10.286.188-4, nacido el 23 de septiembre de 1976, 45 años, casado, ingeniero civil industrial, domiciliado en calle Gastón Hamel N° 355, dpto. 901, Viña del Mar) y **RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO** (rol único nacional de identidad 10.285.773-9, nacido el 20 de octubre de 1980, 40 años, casado, ingeniero comercial, domiciliado en Las Lomas 5477, los abogados Alejandro Peña Ceballos, Vinko Fodich y Camila Porto Cornejo..; por el acusado **FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO** (rol único nacional de identidad 15.829.500-8, nacido el 19 de abril de 1984, 37 años, casado, ingeniero en construcción, domiciliado en Av. Placeres N° 646, Cerro Placeres, Valparaíso) los abogados Juan Carlos Manríquez, Yamil Yuivar Carneiro, Isidora Albornoz Carrasco y Brinti Bahamondez; por el acusado **CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** (rol único nacional de identidad 13.282.338-3, nacido el 26 de mayo de 1977, 44 años, soltero, constructor civil, domiciliado en Manuel Plaza N° 1044, Lampa) los abogados Álvaro González Lorca y Guillermo Giugliano Jaramillo; y por el acusado **CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE** (rol único nacional de identidad 10.966.672-6, nacido en Santiago el 28 de noviembre de 1989, 51 años, casado, ingeniero químico, domiciliado en calle Los Olmos N° 2209, Macul) el abogado Omar Carrasco García.

SEGUNDO: Que, la acusación fiscal fue del siguiente tenor:

“HECHO 1

*En el marco del desarrollo del proceso de reposición de cuarteles de Carabineros de Chile, en el año 2012 correspondió generar los procesos para la ejecución de obras para los proyectos de Reposición, entre otros, de la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto, Proyecto de Reposición Retén Lago Castor, Retén Isla Huar, y Retén Villa Ortega. En el desarrollo de dichos procesos de reposición de cuarteles le correspondió participar a la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile originariamente y luego al Departamento de Cuarteles L.1, ubicado en Av. Quilín N° 1.500, comuna de Macul, Santiago; que estaba a cargo del imputado **FÉLIX FLORES SANTIS** -en aquel entonces Coronel y actualmente General en retiro- y donde desempeñaban funciones los imputados **CHRISTIÁN BUSTOS MORGADO**, Jefe del Área de Coordinación, Ejecución y Gestión de Proyectos y **FRANCISCO PIZARRO DASSO**, Ingeniero, Inspector Técnico de Obras designado en tal calidad por el Comandante Bustos Morgado.*

Una vez realizados todos los análisis técnicos y financieros de las obras a ejecutar, se resolvió licitar los proyectos través del portal www.mercadopublico.cl. Los procesos respectivos posteriores incluyeron, entre otros aspectos, visitas a terreno por parte de los representantes de las empresas, llamados a los oferentes, entrega de los antecedentes técnicos por parte del Departamento de Cuarteles L1, una fase de aclaración de preguntas a través del portal, formuladas por los representantes de las empresas interesadas, realización de apertura de sobres en el Departamento de Cuarteles L1 a la que acudieron las empresas respectivas para la recepción de sus ofertas y antecedentes obligatorios de las mismas.

Luego, el representante del Departamento de Cuarteles L1, junto a los asesores, debían proceder a la revisión de los antecedentes de las empresas postulantes y determinar si cumplían con toda la documentación solicitada. En ese ámbito, era determinante y gravitante la intervención de los jefes superiores del Departamento de Cuarteles L1, Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, quienes tenían dichas operaciones a su cargo. como consta de la pr como consta de la prueba documental de la fiscalía, N° 698ueba documental de la fiscalía, N° 698

Con posterioridad, correspondía la recepción de las boletas de garantía, la confección de los respectivos contratos y su suscripción por el representante de la empresa adjudicataria y el Director Nacional de Logística de Carabineros de Chile. Una vez firmado el contrato de obra, por parte del Director de Logística de Carabineros, el Jefe de Área de Coordinación, Ejecución y Gestión de Proyectos del Departamento de Cuarteles L1, a la época Teniente coronel Christian Bustos Morgado, debía coordinar cuándo se debían efectuar las entregas de terrenos a la empresa responsable, debiendo dirigir cada detalle de la ejecución de las obras que serían adjudicadas.

*Como se indicó, el año 2012 Carabineros de Chile adjudicó a través de las resoluciones No. 989 de fecha 14.09.2012, No. 1463 de fecha 06.12.2012, No. 1469 de fecha 06.12.2012 y No. 1468 de fecha 06.12.2012, dictadas por el Director Nacional de Logística de la época, los contratos de construcción de las obras Reposición Villa Ortega, Tenencia Coyhaique Alto, Retén Lago Cástor y Retén Isla Huar, a la Empresa Constructora CGM Limitada, representada legalmente por el imputado **CRISTIÁN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**. Este último, fue contactado para participar en la licitación por el imputado **CÉSAR ROJAS GAETE**, quien participó en la práctica como socio capitalista, y quien tenía información privilegiada sobre los procesos de licitación a través de sus vínculos directos con funcionarios de carabineros activos.*

De esta manera, se suscribieron los siguientes contratos entre Carabineros de Chile y la empresa Constructora CGM Ltda.:

- 1. Con fecha 16.10.2012 se suscribió contrato correspondiente a la reposición del Retén VILLA ORTEGA, ubicado en la Región de Aysén, por un monto de \$357.948.236.-, equivalente a 9028 UTM, a esa fecha, con un plazo de ejecución de 140 días corridos.*
- 2. Con fecha 11.12.2012, se suscribió contrato correspondiente a la reposición de la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto, por un monto de \$389.997.322 equivalente a 9700 UTM a esa fecha y un plazo asociado para la ejecución de 220 días a contar del 13.12.12.*

3. Con fecha 12.12.2012, se suscribió contrato correspondiente al Proyecto de Reposición Retén Lago Castor, por un monto de \$389.157.350, equivalentes a 9679 UTM a esa fecha y un plazo de ejecución asociado de 200 días corridos, contados desde el día 13.12.12.

4. Con fecha 05.01.2013 se suscribió contrato correspondiente a la reposición del Retén Isla Huar, en la región de Los Lagos, por un monto de \$373.389.992 equivalentes a 9334 UTM a esa fecha y un plazo de ejecución de 160 días corridos, a contar de 18.01.2013.

Respecto de este último contrato, la empresa Constructora CGM, presentó, como exigían las bases, una boleta de garantía falsa, íntegramente forjada, correspondiente a la N° 1689517 del Banco Security, con el objeto de reSPAldar la seriedad de la oferta del proyecto, la cual habría sido tomada supuestamente con fecha 9 de noviembre de 2012.

En total se firmaron contratos por un total de \$1.510.492.900 equivalentes 37.741 UTM a esa fecha.

Cabe hacer presente que la empresa CGM no contaba con experiencia en construcciones de la envergadura que se requería para la ejecución de los retenes, considerando las condiciones geográficas extremas de la zona.

En Agosto del año 2012, el imputado, Teniente coronel Christian Bustos Morgado, designó en calidad de funcionario Inspector Técnico de Obras en adelante ITO, al imputado Francisco Pizarro Dasso, de la dotación del Departamento de Cuarteles L1, para las cuatro obras adjudicadas a la empresa CGM.

En el desempeño de su cargo público, el imputado Francisco Pizarro Dasso, debía realizar visitas periódicas a las obras, fiscalizar en terreno y constatar el avance y correcta ejecución de las mismas. Para tramitar los respectivos estados de pagos debía recibir la respectiva factura de la empresa CGM Ltda., generar un informe técnico de los avances de la obra y realizar la constancia al reverso de la factura, que además debía firmarse por el imputado Bustos Morgado. Posteriormente, los documentos debían ser enviados a la oficina del imputado

Flores Santis, para que éste visara y autorizara el pago de la factura respectiva, previa revisión de los documentos de respaldo.

El imputado Pizarro Dasso, incumplió dolosamente sus deberes de fiscalización y constatación del real avance de las obras contratadas, permitiendo así que se efectuaran pagos que no correspondía realizar, atendido el real avance de las obras. En efecto, el imputado Pizarro Dasso, con la autorización de los imputados Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, cursó estados de pago fundados en informes técnicos falsos, elaborados por él, que simulaban avances de obra que en realidad no existían, lo que se tradujo en el pago de obras no realizadas, permitiendo de este modo que se perjudicara el patrimonio fiscal.

Estas conductas las realizaba por instrucciones del imputado Christian Bustos Morgado, y con pleno conocimiento del imputado Flores Santis; todo ello a cambio de recibir un beneficio económico, a cambio de infringir gravemente los deberes de sus cargos.

A modo de ejemplo, los imputados Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, registran durante el período de desarrollo de las obras, diversos depósitos de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales; en específico entre el período comprendido entre el año 2012 y 2013, en el cual se desarrollaron los procesos de publicación de licitación pública, adjudicación y construcción de las referidas obras, registran depósitos de dinero en efectivo por montos totales de \$217.593.500 y \$22.435.778, respectivamente; montos que no se condicen con el nivel de ingresos que habrían percibido por su desempeño como funcionarios públicos, cuyo promedio de rentas mensuales, entre el año 2010 y 2016, asciende a \$1.853.563 en el caso de Félix Flores; y de \$2.799.023 en el caso de Christian Bustos.

A modo de ejemplo, consta además una transferencia electrónica de fecha 30 de octubre del año 2013, por la suma de \$1.000.000, desde la cuenta corriente del Banco Santander N° 20036761, perteneciente al imputado César Rojas Gaete, a la cuenta corriente del Banco de Chile No. 1970206301, perteneciente al imputado Félix Flores Santis.

Asimismo, el imputado Christian Bustos Morgado, en el mes de enero el año 2013, constituyó junto a sus hermanos Rodrigo y Nelson Bustos Morgado, la sociedad de transportes, Asesorías y Servicios Logísticos, RUT 76.235.695-3, aportando en efectivo la suma \$100.000.000, a través de la cual adquirió, entre los meses de abril y octubre del año 2013, un total de 6 camiones de construcción, valuados en la suma de \$228.639.114, los cuales fueron pagados con dinero en efectivo, y no se condicen con las utilidades registradas por esta empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, ni con los ingresos registrados ante dicha entidad por ninguno de los socios de la misma.

De esta forma, el imputado Pizarro Dasso, tramitó los estados de pago que se indican a continuación en favor de la empresa CGM, sin que las obras estuvieran totalmente ejecutadas:

I. Estados de Pago N° 1

- 1. Estado de pago N° 1, por la suma de \$81.032.184.- para la reposición del Retén Villa Ortega mediante factura N° 29 de fecha 13.12.2012;*
- 2. Estado de pago N° 1, por la suma de \$46.747.334 para el caso de la tenencia Coyhaique Alto, mediante factura N° 30 de fecha 27.12.12;*
- 3. Estado de pago N° 1 por la suma de \$45.527.806 para el Retén Lago Castor, mediante factura N°31 de fecha 27.12.2012.*

II. Estados de Pago N° 2

- 1. Estado de pago N° 2, por la suma de \$33.348.195, mediante factura N° 34 de fecha 31.01.2013, correspondiente a la obra de la Reten Villa Ortega;*
- 2. Estado de pago N° 2 por la suma de \$19.306.001, mediante factura N° 35 de fecha 01.02.2013, correspondiente a la obra del Tenencia Coyhaique Alto;*
- 3. Estado de Pago N° 2, por la suma de \$22.863.994, mediante factura 36 de fecha 01.02.2013, correspondiente a Retén Lago Castor.*

III. Estados de pago N° 3 y Estado de Pago N° 1 Retén Isla Huar

1. Estado de Pago N°3, por una suma de \$12.354.741 mediante factura N°40 de fecha 01.03.13 correspondiente a la obra del Retén Villa Ortega;
2. Estado de pago 3, por una suma de \$34.699.207 mediante factura N° 38 de fecha 28.02.2013, correspondiente a las obras de la Tenencia Coyhaique Alto;
3. Estado de pago N°3, por una suma de \$38.332.575 mediante factura N° 39 de fecha 01.03.2013, correspondiente a la obra de Retén Lago Castor;
4. Estado de pago N° 1 por un monto de \$58.031.299 mediante factura N°37 de fecha 28.02.2013 correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

IV. Estados de Pago N° 4 y estado de pago N° 2 Isla Huar

1. Estado de Pago n° 4 por un monto de \$40.261.562 mediante factura N°43 de fecha 27.03.13 correspondiente a la obra de Retén Villa Ortega;
2. Estado de Pago N°4 por un monto de \$31.984.648 mediante factura 44 de fecha 27.03.2013 correspondiente a la obra de Tenencia Coyhaique Alto;
3. Estado de pago N°4 por un monto de \$35.395.931 mediante factura N° 41 de fecha 27.03.2013 correspondiente a la obra Retén Lago Castor.
4. Estado de Pago N° 2 por un monto de \$25.855.235 mediante factura N° 42 de fecha 27.03.2013 correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

V. Estados de Pago N° 5 y estado de pago N° 3 Isla Huar

1. Estado de Pago N°5 por un monto de \$79.430.225 mediante factura N°48 de fecha 17.04.13 correspondientes a la obra de Retén Villa Ortega;
2. Estado de pago N° 5 por un monto de \$54.847.886 mediante factura 46 de fecha 17.04.2013 correspondiente a la obra Tenencia Coyhaique Alto;

3. Estado de pago N°5 por un monto de \$53.278.216 mediante factura 45 de fecha 17.04.2013 correspondiente a la obra Retén lago Castor;

4. Estado de Pago N°3 por un monto de \$27.806.411 mediante factura 47 de fecha 17.04.13, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

VI. Estados de pago N° 6 y estado de pago N° 4 Isla Huar

1. Estado de pago N°6 por un monto de \$55.159.101, mediante factura N°49, de fecha 14.05.2013, correspondiente a la obra de Retén Villa Ortega

2. Estado de pago N°6, por la suma de \$54.140.184 mediante factura N°52 de fecha 20.05.13 correspondiente a la Tenencia de Coyhaique Alto.

3. Estado de pago N° 6 por un monto de \$53.839.490 mediante Factura N°54 de fecha 27 de mayo de 2013, correspondiente a la obra Retén Lago Cástor.

4. Estado de pago N°4 por un monto de \$62.758.872 mediante factura N°53 de fecha 27 de mayo de 2013, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

VII. Estado de pago N° 7 y estado de pago N° 5 Isla Huar

1. Estado de pago N° 7, por un monto de \$56.735.820 mediante factura N° 55, de fecha 10.06.2013, correspondiente a la obra del Retén de Villa Ortega.

2. Estado de pago N° 7, por un monto de \$34.244.168 mediante factura N° 57, de fecha 28.06.2013, correspondiente a la obra Tenencia Coyhaique Alto.

3. Estado de pago N° 7, por un monto de \$36.825.402 mediante factura N° 58, de fecha 28.06.2013, correspondiente a la obra Retén Lago Cástor.

4. Estado de pago N°5 por un monto de \$70.554.210 mediante factura N°56 de fecha 12.06.2013, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

VIII. Estado de pago N° 8 y estado de pago N° 6 Isla Huar

1. Estado de pago N° 8, por un monto de \$2.999.526 mediante factura N° 68, de fecha 16.08.2013, correspondiente a la obra del Retén de Villa Ortega.

2. Estado de pago N° 8, por un monto de \$32.026.396 mediante factura N° 66, de fecha 05.08.2013, correspondiente a la obra Tenencia Coyhaique Alto.
3. Estado de pago N° 8, por un monto de \$35.032.021 mediante factura N° 65, de fecha 02.08.2013, correspondiente a la obra Retén Lago Cástor
4. Estado de pago N°6 por un monto de \$32.817.666 mediante factura N°59 de fecha 28.06.2013, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

IX. Estado de pago N° 7 Isla Huar

1. Estado de pago N° 7 por un monto de \$42.618.942 mediante factura N°67 de fecha 01.08.2013, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

X. Estado de pago N° 8 Isla Huar

1. Estado de pago N° 8 por un monto de \$44.622.227 mediante factura N°69 de fecha 03.09.2013, correspondiente a la obra Retén Isla Huar.

En el caso del Retén Villa Ortega, las obras no se encontraban terminadas, no obstante tener fecha de término de 08.05.13, por lo que correspondía notificar el incumplimiento y efectuar el procedimiento de aplicación de multas y término de contrato, sin embargo, el imputado Bustos Morgado instruyó una recepción provisoria de obras con observaciones menores, 7 y se efectuó el pago de todo el saldo restante sin que las obras se encontraran terminadas.

Con ocasión del análisis que se efectuó de las respectivas obras, y los informes técnicos elaborados por la Institución de Carabineros, se lograron establecer los siguientes pagos en exceso por parte de Carabineros de Chile: en el caso del Proyecto Reposición Coyhaique Alto, en una suma de \$106.796.115.- (2.653,9 UTM); en el caso de Retén Lago Castor, la suma de \$147.147.353 – (3.659,2 UTM); y en el caso del Retén Isla Huar, la suma de \$140.419.849. – (3.489,5 UTM).

En el caso del Retén Villa Ortega, la obra fue Íntegramente pagada, sin que fuera terminada en su totalidad; y en el caso del Retén de Isla Huar, la boleta de garantía de fiel cumplimiento por el término de la obra, fue devuelta al imputado César Rojas, por instrucción expresa del Comandante Christian Bustos Morgado,

la cual finalmente no pudo ser cobrada, pese a que las obras no fueron terminadas.

Para encubrir este pago en exceso, entre los días 28 y 31 de octubre de 2013, los imputados Christian Bustos y Félix Flores, infringiendo gravemente los deberes propios de sus cargos, instruyeron al Inspector Técnico de Obras, Francisco Pizarro Dasso, que gestionara una Comisión de Servicio a la XI Región, junto a un grupo de funcionarios del Departamento de Cuarteles L1, con el propósito de realizar los correspondientes trabajos de normalización de obras exteriores correspondientes a la obra de Villa Ortega. No obstante, el real objetivo era dar término a las obras que no se habían finalizado por la empresa CGM.

De esta manera se autoriza la comisión de servicio y tramitación de pasajes aéreos para las siguientes personas:

- *Cabo 1°, Leandro Donoso Vilches, pintor.*
- *Cabo 2°, Juan Jeldres Aguirre, electricista;*
- *C.P.R. Ricardo Parra Ortega, cerrajero;*
- *C.P.R. Jaime Meliqueo Neico, carpintero;*
- *C.P.R. Alfonso Acevedo Jara, albañil;*
- *C.P.R. Walter Avila Saenz, gáster.*

Estas personas, junto con el imputado Pizarro Dasso, viajaron a la Región de Coyhaique entre los días 11 y 22 de noviembre de 2013, procediendo a realizar los trabajos de terminación de la obra inconclusa del retén Villa Ortega.

*Los materiales utilizados para la terminación de la referida obra, fueron **gestionados** por parte de Bustos Morgado, **para ser retirados** del stock de bodega del Departamento de Cuarteles L1, y **trasladados** al lugar de las obras por un camión proporcionado por el imputado César Rojas Gaete.*

De esta manera, se irrogó un perjuicio fiscal ascendente a la suma de \$2.607.989, equivalentes a 64 UTM por concepto de viáticos; \$1.579.137, equivalentes a 38,7 UTM por concepto de pasajes aéreos y \$3.476.447 equivalentes a 85,3 UTM por concepto de materiales que fueron trasladados en el camión aportado por César Rojas desde Santiago al lugar de las obras, sin perjuicio de los recursos humanos mal utilizados en labores que no les correspondían; sumando un total de \$7.663.573.- equivalentes a 188,1 UTM.

*En relación a las obras de reposición de retenes de Isla Huar, Lago Castor y Coyhaique Alto, y debido a los manifiestos incumplimientos en el término de las obras por parte de la empresa Constructora CGM, se ordenó mediante resoluciones de **DILOCAR N° 851, 859 y 860, de fechas 30 de octubre del año 2013**; poner término anticipado a los contratos de obras celebrados con dicha empresa. Amparándose en el artículo 1° de la Ley 18.785, se decidió contratar mediante la fórmula de Trato Directo a una nueva empresa constructora para que, con nuevos fondos proporcionados por Carabineros de Chile, finalizara las obras de cuarteles que se encontraban inconclusas.*

Es así como en el mes de octubre del año 2013, los imputados César Rojas Gaete y Félix Flores Santis, contactan a Carlos Grossman Badrian, representante legal de la empresa Construcciones GROSSMAN S.A., RUT 96.062.000-3, la cual no se encontraba inscrita en el registro de contratistas de Carabineros de Chile, ni había efectuado obras de construcción para la institución con anterioridad; ofreciéndole ambos imputados, adjudicar el Trato Directo para la terminación de las obras de cuarteles de Carabineros correspondientes a los retenes de Isla Huar y Coyhaique Alto, por montos ascendientes a \$19.130.505 y \$83.340.915 respectivamente.

El Representante Legal de la misma, Carlos Grossman Badrian, quien tenía un vínculo comercial y de amistad con el imputado César Rojas, aceptó el acuerdo ofrecido por ambos imputados, nombrando a Rojas como Director de la referida sociedad, y a Ignacio Labra, arquitecto que se había desempeñado como arquitecto residente de las obras de construcción de la empresa CGM, a cargo de las nuevas obras adjudicadas.

La inscripción de la empresa Grossman S.A. en el registro de contratistas de Carabineros de Chile, se realizó con fecha 28 de octubre del año 2013, mediante Resolución Exenta N° 847 de la Dirección Nacional de Logística; dos días antes del traspaso de un millón de pesos que fue detectado desde la cuenta de César Rojas Gaete a la cuenta bancaria de Félix Flores Santis.

Posteriormente, se procede a la adjudicación de las obras de terminación de la construcción de los retenes de Coyhaique Alto e Isla Huar a la empresa Grossman S.A., mediante resoluciones de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile números 940 y 941 respectivamente, ambas de fecha 15 de noviembre de 2013. Los contratos firmados por la empresa Grossman, fueron terminados anticipadamente por incumplimiento grave del mismo, término anticipado que se decretó mediante resolución N° 124 de fecha 10 de febrero de 2014, y resolución N° 211 de fecha 14 de marzo de 2014; toda vez que la empresa constructora Grossman S.A., tampoco dio cumplimiento íntegro a las obras de construcción, incumpliendo el contrato celebrado, y dejando nuevamente el imputado César Rojas Gaete, los cuarteles de Isla Huar y Coyhaique Alto, inconclusos.

Así, los funcionarios públicos Bustos Morgado, Flores Santis y Pizarro Dasso, interviniendo en labores propias de sus cargos, beneficiaron a la empresa CGM, en las etapas de postulación, adjudicación y ejecución de las cuatro obras, permitiendo que se pagaran obras que no habían sido ejecutadas, mediante la tramitación de estados de pagos, realizados sobre la base de informes técnicos falsos, elaborados por el imputado Pizarro Dasso, por instrucciones de Bustos Morgado; e intentando encubrir dicha defraudación mediante la utilización de fondos fiscales en el término de la obra de Villa Ortega; consintiendo en que se defraudara al Fisco, y defraudando al Fisco directamente en un monto total de a lo menos 9.990,7 UTM.

Por su parte, los imputados Bustos Morgado y Flores Santis, aceptaron recibir un beneficio económico de parte de CGM Ltda., el que fue pagado por los imputados Gutiérrez y Rojas, a cambio de ejecutar las acciones y omisiones con infracción a los deberes de sus cargos, descritas precedentemente.

HECHO 2:

Desde el año 2011 al año 2013, el imputado CHRISTIAN BUSTOS MORGADO, en su calidad de Jefe del Área de Coordinación, Ejecución y Gestión de Proyectos del Departamento de Cuarteles L1, con infracción a los deberes de su cargo, se interesó y participó activamente en las negociaciones y tuvo intervenciones directas y positivas en la adjudicación de una serie de proyectos de reposición de retenes de Carabineros de Chile, todos en beneficio de las empresas Juan Alejandro Soto Jara EIRL, nombre de fantasía “FEALFRA E.I.R.L.”, de propiedad de Juan Alejandro Soto Jara hasta el día 29 de febrero de 2012; y a la empresa Sociedad Constructora FEALFRA SPA, RUT 76.071.037-7, de propiedad del imputado OSVALDO TOBAR FERNÁNDEZ; con quien tenía vínculos de amistad, empresariales y profesionales. Por su parte, el imputado Tobar Fernández, tenía vínculos con los hermanos CHRISTIAN BUSTOS MORGADO, NELSON BUSTOS MORGADO Y RODRIGO BUSTOS MORGADO; y con la sociedad formada por los tres, Inversiones Bustos Morgado Ltda., RUT 76.669.180-3, siendo incluso, Osvaldo Tobar el contador de la citada sociedad y representante ante el Servicio de Impuestos Internos.

De igual forma, el imputado Rodrigo Bustos Morgado, hermano del imputado Christian Bustos Morgado; mantenía una relación comercial informal con el representante legal de la empresa Juan Alejandro Soto Jara EIRL, recibiendo de la misma, pagos de dinero por cada proyecto de licitación que les era adjudicado.

Así las cosas, el imputado Christian Bustos Morgado, se interesó indirectamente en los contratos que le correspondió adjudicar, en favor de las empresas Juan Alejandro Soto Jara EIRL y FEALFRA SPA, a través de su participación como integrante de la comisión evaluadora de dichas licitaciones, recomendando la adjudicación de estas empresas, debiendo haberse abstenido por tener interés en las mismas.

El detalle de las licitaciones referidas corresponde al siguiente:

I. Respecto de la empresa Juan Alejandro Soto Jara EIRL, participó en la comisión evaluadora, recomendando la adjudicación de:

- Reposición de Retén Loica (ID 3172-14LP11) por la suma de \$234.071.395; adjudicada mediante resolución Exenta de DILOCAR N° 340 a la empresa*

FEALFRA E.I.R.L según Informe Técnico de Evaluación N° 117 de 24 de marzo del año 2011, suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.

- *Reposición Retén Hualañé (ID 3172-143LP11) por la suma de \$287.715.531; adjudicada a la empresa FEALFRA E.I.R.L, mediante resolución de DILOCAR N° 1247 de fecha 19 de octubre de 2011; según Informe Técnico de Evaluación N° 750, de fecha 03 de octubre del año 2011; mediante intervención directa del imputado Christian Bustos Morgado.*

II. Respecto de la empresa FEALFRA SPA, participó en la comisión evaluadora, recomendando la adjudicación de:

- *Reposición Retén Coronel de Maule (ID 3172-95-LP12) por la suma de \$214.999.954; adjudicada a FEALFRA SPA, mediante resolución Exenta DILOCAR N° 980 de fecha 14 de septiembre de 2012; según Informe Técnico de Evaluación N° 848, de fecha 10 de septiembre de 2012, suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.*
- *Reposición de Retén Itahue (ID3172-93-LP12) por la suma de \$212.792.021; adjudicada a FEALFRA SPA, mediante resolución N° 981 de fecha 14 de septiembre del año 2012; según Informe Técnico N° 846 de fecha 6 de septiembre de 2012; suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.*
- *Reposición Retén Lontué (ID 3172-92LP12) por la suma de \$ 291.002.153; adjudicado a FEALFRA SPA, mediante resolución Exenta N° 982 de fecha 14 de septiembre del año 2012; según informe Técnico de Evaluación N° 847, de fecha 6 de septiembre de 2012; suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.*
- *Reposición Retén la Islita (ID 3172-31-LP13) por la suma de \$261.900.587-; adjudicada a FEALFRA SPA mediante resolución 394 de fecha 24 de mayo del año 2013; según informe Técnico de Evaluación N° 339 de fecha 10 de abril de 2013, suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.*
- *Reposición Subcomisaría San Francisco de Mostazal (ID 3172-79-LP13) por la suma de \$385.829.542; adjudicado a FEALFRA SPA mediante resolución Exenta N° 653 de fecha 19 de agosto de 2013; según Informe Técnico suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado.*

De esta forma, las empresas Juan Alejandro Soto Jara EIRL, y FEALFRA SPA, a través de sus representantes Juan Alejandro Soto Jara y Osvaldo Tobar

Fernández, se adjudicaron las obras antes individualizadas por un monto cercano a los \$1.366.524.257, gracias a la intervención directa que realizó el imputado Christian Bustos Morgado en su favor, con infracción a los deberes del cargo que este último tenía, y a su vez, aceptando recibir un beneficio económico de parte de Juan Soto Jara y Osvaldo Tobar Fernández, quienes consintieron en dar dicho beneficio a través de los hermanos de aquél, Rodrigo y Nelson Bustos Morgado y de terceros vinculados a la empresa FEALFRA SPA; consistentes en diversas sumas de dinero que eran pagadas a través de depósitos en efectivo y transferencias bancarias a las cuentas del imputado Christian Bustos Morgado durante todo el periodo de ejecución y de avances de pagos de las obras adjudicadas, pudiendo detectarse los siguientes movimientos:

*Con fecha **30/08/2013** Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 de Corpbanca abono por la suma de **\$ 30.000.000**, efectuado de la cuenta corriente del Banco Santander perteneciente a FEALFRA E.I.R.L, de la cual Constructora FEALFRA SPA es continuadora. Con igual fecha **30/08/2013** Osvaldo Tobar realiza deposito en efectivo anónimo por la suma de **\$ 2.000.000** en la sucursal Viña Libertad del Banco de Chile, en la cuenta corriente del mismo Banco, perteneciente a **Nelson Bustos Morgado**. El mismo día **30/08/2013**, Hugo Migani, tercero vinculado a los imputados, quien no registra ingresos formales superiores a \$ 600.000 anuales; deposita en la cuenta corriente del Banco BCI de Rodrigo Bustos Morgado, en la sucursal “Libertad” de Viña del Mar, la suma de **\$2.500.000**.*

*Con fecha **24/10/2013** Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 del Banco Corpbanca, pago de la Dirección de Logística de Carabineros por un monto de **\$103.214.759** correspondiente al pago de obras de retenes; con fecha **04/11/2013**, Hugo Migani, tercero vinculado a los imputados, quien no registra ingresos formales superiores a \$ 600.000 anuales, cobra en efectivo cheque de la constructora FEALFRA SPA, cheque pagado por caja (efectivo) en la Sucursal Viña del Mar por un monto de **\$ 7.800.000**. Posteriormente Hugo Migani deposita ese mismo día **04/11/2013** en la oficina denominada Viña Arlegui, en efectivo el monto de \$ 4.500.000 en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente al imputado **Nelson Bustos Morgado**; quien a su vez, el mismo día **04/11/2013**, deposita en forma anónima, en la cuenta*

corriente del Banco BCI, perteneciente a **Rodrigo Bustos Morgado**, la suma de **\$2.500.000** en la sucursal de Viña del Mar.

Posteriormente, **Nelson Bustos Morgado**, a cuenta del depósito recibido, ya que antes de este movimiento no mantenía saldo suficiente su cuenta, y con fecha **05/11/2013**, realiza una transferencia por la suma de **\$2.000.000** de su cuenta del Banco de Chile, a la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente al imputado **Christian Bustos Morgado**.

Con fecha **25/11/2013** Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 de Corpbanca pago de la Dirección de Logística de Carabineros por un monto de **\$60.351.091** correspondiente a pago por construcción de retenes; con fecha **02/12/2013** Osvaldo Tobar transfiere desde la cuenta de esta constructora a su cuenta del Banco Chile Edwards los montos de **\$ 4.500.000 y \$ 3.300.000**. Posteriormente el mismo día **02/12/2013** deposita en la sucursal denominada OF. Viña Edwards, en efectivo, el monto de **\$4.500.000** en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente a Nelson Bustos Morgado. Igualmente ese mismo día **02/12/2013**, deposita en forma anónima en la cuenta del Banco BCI del imputado Rodrigo Bustos Morgado, en la sucursal ubicada en calle 8 Norte de la ciudad de Viña del Mar, la suma de **\$ 2.500.000**. Posteriormente, Nelson Bustos Morgado a cuenta del depósito recibido, ya que antes de este movimiento no mantenía saldo suficiente su cuenta, y con fecha **03/12/2013**, es decir, un día después de recibido el depósito en efectivo, realiza una transferencia por el monto de **\$ 2.000.000** desde su cuenta del Banco de Chile, a la cuenta del mismo Banco de Chile, perteneciente al imputado **Christian Bustos Morgado**.

Con fecha **30/12/2013** Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 de Corpbanca pago de Carabineros de Chile, por construcción de obras de cuarteles, por un monto de **\$117.090.206**; con igual fecha, Osvaldo Tobar cobra en efectivo cheque de esta constructora, pagado por caja de la Sucursal Libertad de la ciudad de Viña del Mar por un monto de **\$ 7.800.000**. Posteriormente, Osvaldo Tobar realiza un depósito anónimo ese mismo día **30/12/2013**, en la oficina denominada Viña Edwards (a cuerdas de la institución bancaria de donde se realizó el cobro del cheque) de un monto ascendente a **\$ 4.500.000** en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente a **Nelson Bustos Morgado**. Igualmente ese mismo día **30/12/2013** se deposita en forma

anónima, en la cuenta del Banco BCI de la sucursal Libertad de la ciudad de Viña del Mar, la suma de **\$2.500.000** al imputado **Rodrigo Bustos Morgado**.

Asimismo, con fecha 24 de marzo del año 2011, Juan Soto Jara, representante legal de la empresa de construcción JUAN SOTO JARA EIRL (Nombre de Fantasía FEALFRA EIRL), giró un cheque por \$12.577.950 pesos a Rodrigo Bustos Morgado, misma fecha en la que Christian Bustos Morgado, suscribió el informe técnico N° 117 de evaluación de la licitación, recomendando la adjudicación a la empresa de propiedad de Juan Soto Jara. Posteriormente, con fecha, 08 de julio del año 2011, Juan Soto Jara EIRL depositó un cheque por el monto de \$4.000.000 a Rodrigo Bustos Morgado.

El imputado Christian Bustos Morgado recibe durante el año 2013, además de los depósitos y transferencias en sus cuentas corrientes, de la sociedad Asesorías Servicios Logísticos RUT 76.235695-3, transferencias de sus hermanos, los imputados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, también socios de dicha sociedad, por montos totales ascendentes a la suma de \$135.350.840 pesos, montos que no se condicen con las utilidades declaradas por dicha sociedad, ni con las rentas declaradas por los propios imputados, y que provendrían de pagos recibidos a cambio de realizar gestiones en favor de la empresa FEALFRA SPA.

Asimismo, se registran el año 2013, 8 depósitos de dinero en efectivo realizados por un total de \$22.940.000 pesos, realizados por José Vargas Silva, en la cuenta del imputado Christian Bustos Morgado, quien fue director de la empresa FEALFRA SPA en el año 2012.”

Los hechos descritos son constitutivos de los siguientes delitos:

HECHO 1:

Respecto de los imputados **CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO**, **FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO**, **CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE** y **CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** se configura el delito reiterado de **FRAUDE AL FISCO**, contemplado en el artículo. 239 del Código Penal, en calidad de consumado, correspondiéndoles participación como autores del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Respecto del imputado **CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO**, se considera el delito de **COHECHO** contemplado en el artículo 248 bis Código Penal, en grado de consumado, en carácter de reiterado, correspondiéndole participación como autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Respecto de los imputados **CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** y **CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE**, se configura además, el delito reiterado de **SOBORNO**, contemplado en el artículo 250 del Código Penal, en relación con el artículo 248 bis del mismo cuerpo legal, en calidad de consumado, correspondiéndoles la calidad de autores directos en conformidad al 15 del Código Penal.

HECHO 2:

Respecto del imputado **CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO**, el delito de **COHECHO**, del artículo **248 bis** del Código Penal, en carácter reiterado, consumado y en calidad de autor en conformidad con el artículo 15 del Código Penal.

Respecto de los imputados **NELSON ANDRÉS BUSTOS MORGADO** y **RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO**, los hechos configuran el delito reiterado de **SOBORNO** del artículo 250 del Código Penal, en relación con el artículo 248 bis del mismo cuerpo legal, consumado, correspondiéndoles la calidad de autores directos en conformidad con el artículo 15 del Código Penal.

Se indica que respecto de todos los imputados, concurre la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es irreprochable conducta anterior.

El Ministerio Público solicita se imponga a los acusados las siguientes penas:

1. **CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO**, la pena de **12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, multa del 50% del total defraudado, inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado; la pena **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, inhabilitación

absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo de lo aceptado, por el delito de cohecho en carácter de reiterado.

2. CRISTIÁN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTINEZ, la pena de **10 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, multa del 10% del perjuicio causado, inhabilitación absoluta temporal en su grado medio, para cargos, empleos u oficios públicos, por delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado; la pena de **540 DÍAS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÍNIMO**, inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para cargos, empleos u oficios públicos, multa del tanto del beneficio ofrecido, por delito de soborno en carácter de reiterado.

3. CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE, la pena de **12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, multa del 50% del perjuicio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, por delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado; la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO** inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, multa del duplo de lo ofrecido, por el delito de soborno en carácter de reiterado.

4. FRANCISCO JOSE PIZARRO DASSO, la pena de **10 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, multa del 10% del perjuicio causado, inhabilitación absoluta temporal en su grado medio, para cargos, empleos u oficios públicos, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado.

5. RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO, a la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN GRADO MÁXIMO**, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, multa del duplo de lo ofrecido por el delito de soborno en carácter de reiterado.

6. NELSON ANDRES BUSTOS MORGADO, a la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN GRADO MÁXIMO**, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, multa del duplo de lo ofrecido, por el delito de soborno reiterado; todos en grado de desarrollo consumado.

Del mismo modo, solicita que se condene a los acusados al pago de las costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal”.

TERCERO: Que, la parte **querellante, Consejo de Defensa del Estado**, presentó “**acusación particular en contra de todos los acusados**, relatando los hechos 1 y 2 de la misma forma en que se consignan en la acusación fiscal, hechos que se dan por reproducidos. Se realiza la misma calificación jurídica, grado de desarrollo de los delitos reiterados referidos; se atribuye a los acusados la misma participación y se invoca la misma atenuante conforme a lo señalado en la acusación del Ministerio Público”.

En cuanto a las penas solicitadas, la acusadora particular requirió imponer las siguientes penas:

“1. CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO, a la pena de 12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa del 50% del total defraudado, inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias del artículo 28 del Código Penal, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, incrementada dicha penalidad según lo dispuesto en el inciso tercero del tipo penal ya citado. Por su participación como autor de delitos reiterados de cohecho agravado del artículo 248 bis del Código Penal (hechos 1 y 2), uno de los cuales, además, se encuentran en conexión funcional con el delito de fraude, se solicita se aplique la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, multa del duplo del beneficio aceptado y accesorias del artículo 29 del Código Penal;

2. CRISTIÁN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTINEZ, a la pena de 10 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa del 20% del total defraudado (perjuicio), inhabilitación absoluta temporal en su grado medio, para cargos, empleos u oficios públicos, accesorias del artículo 28 del Código Penal, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, incrementada dicha penalidad, según lo dispuesto en el inciso tercero del tipo penal ya citado. Por su participación como autor de delitos reiterados de soborno del artículo 250 en relación a los artículos

248 bis y 249 del Código Penal se solicita se aplique la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, multa del tanto del beneficio ofrecido y accesorias del artículo 29 del Código Penal;

3. **CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE**, a la pena de **12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, multa del 50% del total defraudado (perjuicio), inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias del artículo 28 del Código Penal, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, incrementada dicha penalidad según lo dispuesto en el inciso tercero del tipo penal ya citado. Por su participación como autor de delitos reiterados de soborno del artículo 250 en relación a los artículos 248 bis y 249 del Código Penal se solicita se aplique la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, multa del tanto del beneficio ofrecido y accesorias del artículo 29 del Código Penal;

4. **FRANCISCO JOSE PIZARRO DASSO**, a la pena de **12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, multa del 50% del total defraudado (perjuicio), inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, accesorias del artículo 28 del Código Penal, por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, incrementada dicha penalidad según lo dispuesto en el inciso tercero del tipo penal ya citado;

5. **RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO**, a la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, multa del duplo de lo ofrecido, accesorias del artículo 29 del Código Penal, por el delito de soborno en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal;

6. **NELSON ANDRES BUSTOS MORGADO**, a la pena de **4 AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN GRADO MÁXIMO**, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, multa del duplo de lo

ofrecido, accesorias del artículo 29 del Código Penal, por el delito de soborno reiterado, previsto y sancionado en el artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal; todos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.

Del mismo modo, solicita que a todos los acusados se les condene al pago de las costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal”.

CUARTO: Alegatos de apertura. Que, efectuada la lectura de la acusación se ofreció la palabra a los intervinientes a objeto que presentaran sus argumentos, quienes expusieron:

a) el ministerio público: ratificó los hechos contenidos en la acusación, narrando, además, su origen y desarrollo en el tiempo, la intervención que en ellos les habría cabido a los acusados, las normas legales infringidas y los delitos que sus conductas habrían configurado;

b) la parte querellante: hizo suyo los dichos del ministerio público.

c) la defensa de los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado: solicitó la absolución por falta de participación, la cual, en todo caso, no se lograría acreditar en el curso del juicio, y por el contrario, con sus medios de prueba se demostraría los errores y mendacidades de varios pasajes de la acusación. Hizo extensa referencia al currículum académico y laboral del acusado Christian Bustos, además de las varias destinaciones que tuvo dentro de la institución policial, destacando la última, a saber, traslado a la Plana Mayor del Departamento de Obras, correspondiendo a él la gestión de los proyectos, no teniendo injerencia alguna en las decisiones de fondo. Refirió que la ejecución de las obras estaba a cargo del respectivo inspector técnico de obras, a la sazón, el acusado Pizarro Dasso, siendo éste el único responsable de la supervisión de la ejecución de las obras, además, normativamente obligado a informar el cumplimiento de la ejecución y la finalización de los trabajos y, asimismo, obligado también a dar cuenta de los incumplimientos en la ejecución de las obras, en tanto que la revisión de sus informes y cursos de pago correspondían al encargado de análisis y verificación. Refirió que la empresa CGM no dio instrucciones al acusado Pizarro

para falsear los estados de pago. En cuanto a la citada empresa, esta fue creada con créditos bancarios, tal como lo demostrarían las correspondientes cartolas y solicitudes de crédito. Respecto de la compra de los camiones que refiere la acusación, estos no fueron seis ni tampoco estaban destinados a la construcción y cuya adquisición se hizo con crédito y su pago en cuotas. Respecto de la reparación final del cuartel de Villa Ortega refirió que el acusado Christian Bustos no tuvo ninguna relación toda vez que fue “Flores”, como Director de Logística, quien contrató a la empresa Grossman para la reparación del mentado cuartel. Hizo presente que él no firmó la resolución de contratación de la empresa CGM como miembro de la Comisión que tomó la decisión, sino sólo como una suerte de secretario o ministro de fe. Señaló que el Director de Logística es quien adjudica las licitaciones, sin que tampoco le hubiera correspondido a Christian Bustos intervenir en la etapa previa a la licitación. Añadió la defensa que el acusado no realizó conductas de cohecho ni soborno, sin perjuicio de faltar en la acusación la descripción concreta de los hechos que los configurarían.

En cuanto al “hecho 2”, refirió que los acusados negaban su responsabilidad. Los depósitos de la empresa CGM corresponden a devolución de las cuotas que el acusado pagó por el crédito que se solicitó para la compra de los camiones.

Por lo anterior, solicitó el rechazo de la demanda civil, y en subsidio, la prescripción de cuatro años que establece el artículo 2332 del Código Civil.

d) la defensa del acusado Francisco Pizarro Dasso señaló que los juicios penales eran juicios de atribución, por lo que con su declaración se sabría, además de otros hechos, quién era el gerente fáctico. Añadió que no podría acreditarse el engaño que es propio del delito de fraude al Fisco, como tampoco el dolo directo que exige el tipo penal. Calificó el “hecho 1” como un acto de comisión conjunta y sucesiva. Consecuencia de lo dicho, la demanda civil debía ser rechazada.

e) la defensa del acusado Cristián Gutiérrez Martínez refutó lo sostenido por la fiscalía en el sentido que la empresa del enjuiciado había sido creada con anterioridad a los hechos, el año 2007, y que sí estaba inscrita en el Registro de Contratistas por lo que sí tenía experiencia en el rubro de la construcción. Refirió que César Rojas lo contactó, le otorgó un poder General el que más tarde revocó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, luego de lo cual interpuso una

querella en su contra, la cual abrió la puerta a la develación de los hechos. El 31 de diciembre interpuso querella por apropiación indebida y extorsión, esto último habida cuenta de las amenazas de muerte que recibió por Fernando Delgado y Rodrigo Contreras, añadiendo que existían grabaciones de tales amenazas, como asimismo de César Rojas retirando sesenta millones de pesos de la cuenta de Gutiérrez haciéndose pasar por él, por lo que al día siguiente le pidió que le hiciera devolución de una retroexcavadora. El delito reiterado de fraude al Fisco no podría acreditarse desde que el acusado nunca recibió dinero. Señaló que el 18 de febrero de 2014 Carabineros, a partir de un sumario que abrió por estos hechos, emitió un informe y denunció los hechos. Añadió que Gutiérrez no fue parte en el delito sino víctima, y que el hecho de haber asumido la gerencia General de CGM había sido su único delito.

f) la defensa del acusado César Rojas inició su alegato diciendo que su situación actualmente era estar endeudado y acusado a raíz de una aventura comercial que había terminado mal y por la cual había perdido sus bienes. Refirió que la investigación había sido sesgada y carente de objetividad, basada en personas y no en hechos, conforme a los cuales faltaban personas que también habrían tenido que ser acusadas. Hizo presente que la Boleta de Garantía que señala la acusación haber retirado correspondía a una Boleta de Garantía de seriedad, la cual el mismo acompañó al momento de prestar declaración ante la Policía de Investigaciones. En cuanto al acusado, señaló que había sido un oficial destacado que más tarde se insertó en la sociedad civil. Señaló que él había sido el contactado, y no él quien contactó a la empresa CGM, la cual había anteriormente postulado a varias licitaciones, pero sin éxito, siendo éste el motivo por el cual lo contactaron, para que la asesora. Refirió que le prestó dinero a la empresa, la cual era administrada por Gutiérrez, señalando que éste le hizo entrega de una máquina en forma de pago del dinero que le prestó para la postulación a la licitación de reparación de los cuarteles, la que finalmente ganó. Agregó que con dicho dinero compró camiones y terrenos, los que posteriormente traspasó a su madre. Indicó que CGM se encontraba inscrita antes de que lo contactaran. Respecto de que habría dejado inconcluso los cuárteles, refirió que en ello no tenía responsabilidad alguna y que él no había firmado ningún contrato, ni aún con el mandato General que se le otorgó, de cuya existencia se enteró días antes de su revocación. Respecto de la falta de experiencia de la empresa CGM, hizo presente que el Decreto 294 no la exigía. En cuanto a la empresa Grossman indicó que era una empresa antigua y que se encontraba inscrita en el Registro,

aunque no en el de Carabineros. Señaló que el acusado Rojas no fue parte de las empresas CGM ni Grossman, y que sólo había aportado dinero a la primera para un proyecto que no funcionó

DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS.

QUINTO: Declaración de Christian Bustos Morgado. Consultado el acusado Bustos si ejercería su derecho a guardar silencio, expresó que no, y que deseaba declarar, lo que hizo en el siguiente tenor: el año 2010 fue destinado a la Dirección de Logística, Departamento de Cuárteles, para efectos de realizar un catastro de daños a los cuárteles de las regiones 7ª, 8ª y 9ª, afectados por el terremoto del mismo año, lo que sirvió para extender el catastro a otras zonas del país. En dicho cometido le correspondió gestionar y coordinar un gran número de proyectos, alrededor de trescientos (300), los cuales estaban atrasados desde el año 2007. Entre los años 2010 y 2013 se construyeron y repararon 127 cuárteles, y que a partir del año 2014, hasta el 2016, bajó considerablemente el número de proyectos, ejecutándose en ese período sólo nueve proyectos. A continuación explicó lata y pormenorizadamente en qué consistía un “proceso licitatorio”, destacando las etapas de que se componía, lo anterior a partir de lo que dispone el Reglamento que regula la construcción de cuárteles, Decreto N° 294, haciendo presente que no debía confundirse con el 294 del MOP (ministerio de obras públicas). Indicó que el proceso se inicia con la resolución que llama a licitación y que contiene las bases administrativas Generales y las especiales, todo ello a cargo de los abogados y técnicos en construcción; la licitación se levanta al portal de manera informática, se publica en Chile Compra, no obstante que el reglamento dispone que se haga de manera presencial, y no, en caso alguno, a puerta cerrada. Posteriormente, en una sala abierta, a la cual puede ingresar cualquier persona, se procede a la apertura de los sobres, para lo cual los postulantes deben concurrir al Departamento de Cuárteles, debiendo estar presente un oficial de la institución y profesionales tales como abogados, arquitectos, entre otros. Cada oponente debe presentar dos sobres, uno que contiene información de tipo administrativo, y otro con información financiera. Una vez abiertos los primeros se procede a la apertura del segundo sobre, respecto de aquellos oponentes que hubieren cumplido con los requisitos señalados en las bases. Hizo presente que él no participaba en este proceso de apertura de sobres. Concluida la fase de apertura de sobres, se procede a la evaluación legal y

financiera de las propuestas, emitiendo cada área un informe. Superada esta segunda etapa se procede a una de revisión técnica, en la cual se emite un informe final, el cual “firmaba como visto bueno”, certificando la participación de los diversos profesionales que hubieren intervenido en proceso licitatorio. En este citado informe final se sugiere a un proponente, siendo en todo caso la decisión final del Director de Logística, quien firma la Resolución de Adjudicación, para cuya adopción cuenta con asesoría legal y técnica. En cuanto a él, su función era de gestión y coordinación, en tanto que la de ejecución le corresponde al inspector técnico de obra (ITO), siendo éste quien asume la responsabilidad en el control de avance, y en cuya virtud se relaciona directamente con el Director de Logística. Hizo presente que el acusado Pizarro, había llegado antes que él al Departamento de Cuarteles, en el año 2010, precisando que aquél se comunicaba directamente con el personal de su unidad. En cuanto al cuartel Villa Ortega, refirió que el proceso de licitación correspondía al plan cuadrante del año 2007 y que anteriormente había sido licitado. A dicho proyecto se sumaron otros tres, Coyhaique Alto, Lago Castor e Isla Huar, situados en la X región. Respecto del proyecto de Villa Ortega, este se licitó nuevamente el año 2012, en el mes de julio, concurriendo sólo dos oferentes, uno de los cuales no pasó la etapa de apertura por lo que el proceso de evaluación continuó sólo con el otro proponente, la empresa CGM. El informe legal consideró que la empresa reunía las condiciones necesarias, sin que la experiencia formase parte de ellas, añadiendo el acusado que, en consecuencia, no se le podía excluir por ese motivo. Señaló que una vez concluida la etapa de evaluación, se pasaba a la de ejecución, momento en el que él regresaba a sus funciones de coordinador de otros proyectos. Indicó que las bases de licitación del proyecto de Villa Ortega consideraban estados de pago mensuales, y que para ello el contratista debía dirigir una carta al ITO informando el estado de avance de la obra, pidiéndole que lo verifique o curse el estado de pago. Ante ello el ITO debía concurrir y verificar el estado de avance de la obra, emitiendo a continuación un informe de tales avances el cual finalmente es recibido por el Departamento de Pagos. Señaló que “nosotros” firmábamos la factura porque finanzas nos obligaba hacerlo, no obstante que la ley no lo dispone. Si surgían obras extraordinarias se incluían como addendum, las cuales eran visadas y gestionadas por el ITO. Cuando salía a revisión de obra se coordinaba con asesoría legal a efectos de dictar la correspondiente resolución, en tanto que la coordinación de pasajes, alojamiento, viáticos y otros lo hacía la Dirección de Logística. Todos los meses el ITO debía concurrir a la obra. Agregó que había firmado una “altísima cantidad de facturas” sin verificar, lo cual en todo caso la ley

no disponía. Refirió que la ley señala que con una anticipación de 15 días debe solicitar al ITO la autorización para la recepción de la obra, solicitud que debe ser autorizada por el Director de Logística, previo acto administrativo de una comisión, la cual dispone de 35 días para informar si las obras están o no finalizadas. En dicha comisión participa un oficial, en este caso él, personal técnico y el ITO. La obra en cuestión estaba en condiciones de ser recepcionada provisoriamente, esto es, con observaciones, las cuales deben ser corregidas en un plazo máximo de seis meses, durante los cuales la boleta de garantía continúa en poder de la institución. En la especie, señaló que se le dieron diez días para resolver las observaciones, añadiendo que la ley dispone que la comisión debe concurrir nuevamente a verificar que las correcciones, pero que en la práctica, y por distintos motivos, no se hacía, concurriendo sólo el ITO, sin perjuicio que después toda la comisión firmaba. Señaló que posteriormente se envió personal para resolver los detalles que estaban pendientes y para el hermoseamiento, lo que a él no le llamó la atención, aclarando sí que eso lo coordinó el jefe del Departamento con el ITO, habiendo sido el Director de Logística quien posteriormente lo autorizó. Explicó que la licitación tuvo lugar en septiembre de 2012 y que en diciembre del mismo año se adjudicó, conjuntamente con alrededor de otras diez licitaciones, entre ellas Isla Huar, Alto Coihayque y Lago Castor, que fueron adjudicadas a CGM, *“supongo” que fue porque la empresa ya tenía otra obra en la zona*. Negó que a él le hubiere correspondido designar al ITO, toda vez que tanto la Resolución como la ley dicen que eso lo hace el Director de Logística. Preciso que no se designaba uno en particular sino que a varios, para precaver cualquier situación que pudiera acontecer. Añadió que los ITO se ponían de acuerdo entre ellos para distribuirse las visitas a terreno, indicando que en ese entonces había dos mujeres con hijos menores de edad, por lo que iban a zonas más cercanas. Añadió que antes de que él llegara al Departamento había una designación zonal. Señaló que nunca designó ni obligó a designar a un ITO para una obra. Continúo su declaración diciendo que en el mes de septiembre de 2013 el jefe del Departamento fue a visitar la X región, lo que aprovechó para visitar la obra de Isla Huar, y que a su vuelta le dijo que las obras estaban dentro de lo normal, considerando la zona, ante lo cual él (acusado) le señaló que la obra estaba en plazo, por lo que dispuso que fuera él y la comisión, verificando que las obras estaban avanzadas pero no lo suficiente como para ser recepcionada, decidiendo la comisión no recepcionar la obra, generando un informe en el cual se señaló que la obra no fuera recepcionada, sin perjuicio que por ley el ITO debe emitir un informe a dicho respecto, lo cual se le comunicó al Coronel Flores, disponiendo

éste el término anticipado de la obra o contrato. Indicó que se le preguntó al ITO por otras dos obras, esto es, si estaban igual que la anterior, respondiendo que sí, por lo cual se le pidió que hiciera un informe en tal sentido. Por lo anterior se generaron tres resoluciones de término de contrato y cobro de las boletas de garantía. Explicó el acusado que dio cuenta de lo anterior al jefe del Departamento y que éste “debió haber dado cuenta al Director” a fin de que cuando le llegaran las resoluciones supiera a qué se debían. Respecto de las boletas de garantía señaló que se accedía a su devolución para generar otras boletas, como ocurrió con las obras de Coyhaique Alto, Lago Castor e Isla Huar, precisando que respecto de éstas se hizo el cobro de las boletas de garantía después que se dio término al contrato y se dictó la correspondiente resolución de término. En el caso de Villa Ortega, la boleta no se devolvió. Respecto de los montos que quedaron disponibles para finalizar las obras, señaló que en el caso de Isla Huar fueron \$40.000.000, y que respecto de las otras dos el monto fue superior a esa cantidad. Reiteró que esos dineros debían destinarse para el término de las respectivas obras. Añadió que cuando él vio las obras de Isla Huar, éstas estaban casi terminadas, sólo faltaban detalles. A efectos de terminar las obras pendientes se realizó un “trato directo”, toda vez que la ley lo permitía. Para dichos efectos el jefe del Departamento habló con el abogado Nicolás López a fin de saber si se podía hacer el trato directo. Añadió que le dijeron que el General Flores lo iba a hacer directamente. En cuanto a la empresa en cuestión, refirió no conocerla, tampoco a su dueño u otras personas vinculadas a la misma.

En cuanto al “Hecho 2”, declaró no haber recibido dinero de la empresa a través de sus hermanos, explicando que él y sus hermanos tienen una empresa familiar, la cual se formó el año 2013 a instancias de su hermano Nelson, a quien un tercero, José Vargas, le dijo que tenía la posibilidad de incorporar más camiones a la empresa Agrosuper, para la cual él trabajaba prestando servicio de transporte. A tales efectos, solicitó un crédito bancario, ya que él era el único de los tres que tenía posibilidades de obtener créditos, lo cual, por lo tanto, explica los movimientos bancarios con su hermano. Detalló que: en noviembre de 2011 solicitó un crédito por la suma de \$30.000.000, de los cuales transfirió \$10.000.000 a Vargas en el mes enero para los efectos de la compra de camiones, el cual se compró e inscribió a nombre de Pedro Vargas, hermano del anterior.

Posteriormente, en marzo extendió un cheque por la cantidad de \$8.000.000. Agregó que con José Vargas registra una serie de movimientos debido a que se obligó a pagar dineros correspondientes a la compra de camiones.

Con el producto de los servicios de transporte que prestaban los camiones se pagó, y sigue pagando, el crédito mencionado.

Con posterioridad el banco le ofreció un nuevo crédito, el cual contrató y destinó para el mismo fin que el primer crédito. Más tarde, en el mes de agosto de 2012, obtuvo un nuevo crédito por la cantidad de \$29.000.000, de los cuales, mediante giro de un cheque, le entregó \$10.00.000 a su hermano. El camión costó \$27.000.000. La solicitud de crédito fue efectuada por él y su hermano Nelson en el mes de noviembre de 2012. Reiteró que se compraron sólo 2 camiones, por \$25.000.000 cada uno, y no 6 camiones en \$228.000.000, como se dijo en la acusación, agregando que también se compraron tres (3) semirremolques, los que fueron pagados con cheques, lo cual consta en las facturas respectivas. En el mes de diciembre de 2013, cuando estaba yéndose del Departamento, solicitó un nuevo crédito por alrededor de \$20.000.000, girando un cheque a su hermano para la compra de otro camión.

Posteriormente, en agosto de 2014, solicitó otro crédito, esta vez por \$40.000.000. Los movimientos bancarios con su hermano Nelson, por \$2.000.000 mensuales, corresponden al pago de los créditos, aclarando que no era él quien los pagaba, sino que el servicio de transporte que prestaban los camiones.

Precisó que desde el año 2013 se comenzó a comprar mediante *leasing*. Añadió que después obtuvo un crédito por \$80.000.000.

Finalizó su declaración diciendo que “al día de hoy” continuaba pagando las cuotas de los créditos y que sólo era dueño de una casa que había comprado en el año 2003, con un crédito hipotecario a treinta años.

Interrogado por el ministerio fiscal, respondió que *la ejecución propiamente tal* de las obras no estaba dentro de su competencia. A efectos de **evidenciar contradicción se le exhibió el documento signado con el numeral 977**, el cual reconoció y dio lectura en lo pertinente: *Carabineros de Chile*,

Departamento de Logística. Constancia: el valor que figura en el anverso, de 6 de diciembre de 2013, por \$79.000.000 y fracción, corresponde al tercer estado de pago..., firman Francisco Pizarro,, Christian Bustos Morgado, jefe Área de Coordinación y Ejecución, Félix Flores santis, jefe de Departamento.. Consultado si el porcentaje de avance no forma parte del área de licitaciones, y si por lo tanto no constituía un control de ejecución de la obra, respondió que *no, porque es una factura de pago basado en un informe técnico.* Consultado si a través del porcentaje que señalaba la factura se enteraba del avance de la obra, respondió que *no, agregando firmé porque me lo ordenaron.* Negó enterarse del porcentaje de avance a través de los informes técnicos, añadiendo que *sólo me enteraba a través de la constancia en la factura.* Respondió afirmativamente a la pregunta respecto de si había participado en la comisión de Isla Huar, añadiendo que ésta fue dispuesta por el Director de Logística. Respondió afirmativamente que conforme a la Resolución N° 381, que nombró la Comisión de Recepción, se solicitó autorización para la compra de pasajes aéreos para los días 4 de junio de 2013 y 7 de junio del mismo año. A efectos de **evidenciar contradicciones se le exhibieron tres documentos, signados con los numerales 1.010, 1.009 y 837,** cuyo tenor fue el siguiente: el primero, *Resolución Exenta 381, de 23 de mayo de 2013. Vistos: La ley 18.785, de 12 de abril de 1989; el artículo 127 de su Reglamento; y el certificado de 23 de abril de 2013, que da cuenta de la solicitud de la empresa CGM solicitando la recepción provisoria de la obra, DESÍGNASE como integrantes de la Comisión de Recepción a Christian Bustos Morgado, como Presidente de la Comisión; Andrea Campusano, CPR, Guillermo Nadal, CPR, Francisco Pizarro, CPR Héctor Salamanca, Isidro Martínez, abogado. Suscribe Félix Flores Santis, Coronel de Carabineros;* el segundo y tercer documento citados (1.009 y 837), *Acta de Recepción provisoria con observaciones, N° 46, de 7 de junio de 2013. MAT: a 24 de junio de 2013, CGM hace entrega de trabajos al Teniente Christian Bustos Morgado, a cargo de la Comisión* Concluida la lectura, el acusado tomó la palabra para señalar que la Comisión sólo se limita a recibir lo que ve, la Comisión recibió provisoriamente y dio un plazo de diez (10) días a CGM para solucionar las observaciones. A la pregunta de la fiscalía, respecto a si la referida acta era aquella por la cual se propuso en el sumario una sanción de cuatro (4) días de arresto por cuanto existían trabajos pendientes, respondió el acusado que esa sanción había quedado sin efecto por decisión de la Contraloría. Respondió afirmativamente respecto a si era efectivo que los pasajes aéreos que utilizó la Comisión correspondieron, el de ida, al 4 de junio de 2013, en la mañana, y el de vuelta, al 7 de junio de 2013, en la tarde. A continuación, dentro del acápite

“**otros medios de prueba**”, se le exhibió el N° 19, correspondiente a una fotografía de una obra en construcción, consultándosele al acusado si dicha foto la había tomado el abogado Isidro Martínez, miembro de la Comisión, respondió que sí. Posterior a ésta afirmativa, el acusado dijo que no le constaba que esa foto correspondiera a la obra. Consultado respecto de si la obra que exhibe la fotografía estaba en ese estado, respondió, *no es la que yo vi*. Consultado acerca de que eran para él observaciones menores, respondió no saberlo porque yo voy en la comisión como carabinero, y que para eso van los técnicos. Consultado si cuando viajó la Comisión él sabía que ya se habían hecho seis (6) de un total de ocho (8) pagos, respondió *no, yo firmaba lo que informaba el ITO* (inspector técnico de obras, en lo sucesivo ITO), en quien confiaba en un cien por ciento (100%). Consultado si en el sumario administrativo se propuso sancionar a todos los miembros de la Comisión por haber hecho recepción de obras que se encontraban aún pendientes, respondió el acusado *no lo sé*. Convino con la fiscalía que el 13 de junio de 2013 había firmado una constancia de una (1) factura de estado de pago, y que lo había hecho siguiendo la información del ITO, añadiendo que *esa factura pasó con otras diez (10)*. A continuación se le exhibió el documento signado con el número 1.046, el cual, junto con su firma, reconoció, explicando que se trataba de un oficio mediante el cual se remite una factura, precisando que si bien lo firmó, ello lo hizo como jefe subrogante del Departamento siendo su tenor el siguiente: *Remite factura; REF: Contrato de obras de carabineros, N° 1.046, de 17 de junio de 2013, Departamento de Finanzas: Con fecha 16 de octubre de 2012, Carabineros suscribe contrato de obras para ejecución de trabajos en Villa Ortega, con la empresa CGM, por \$359.948.236, IVA incluido; adjunta factura N° 61, por adendum, de 9 de junio de 2013, CGM, por \$24.943.971, firma Christian Bustos Morgado Teniente coronel , jefe subrogante del Departamento de Cuarteles*. Reconoció el acusado que con fecha 5 de septiembre de 2013, efectuó una evaluación de desempeño de Francisco José Pizarro Dasso, ingeniero en ejecución, consignando en el apartado “observaciones”: *se destaca en su desempeño tanto como técnico como por su conocimiento; responsable, cooperador, con merecimiento de grado*. Al respecto, refirió el acusado haber firmado ese documento como jefe directo de Francisco Pizarro. Se le exhibió el documento N° 838, reconociendo el acusado que se trataba de un acta de recepción provisoria y que en el aparece su firma con visto bueno. Se dio lectura en el siguiente tenor: *24 de junio de 2013, la empresa CGM hace entrega de trabajo de reposición del cuartel Villa Ortega; firmapor CGM, y Christian Bustos Morgado, jefe del Departamento de Coordinación y Ejecución de*

Proyectos. Leído el documento, el acusado declaró que la Comisión sólo se limita a revisar visualmente; la Comisión recibió sin observaciones. Dijo no recordar haber conversado con Andrea Campusano después de la Comisión. Negó que fuese cierto que dicha persona hubiere firmado a petición suya, además *el sumario dice que esa firma la pidió el ITO.*

Consultado respecto al acusado César Rojas, respondió inicialmente que lo conocía desde el año 1992, que no fueron compañeros en la escuela de suboficiales, que sólo lo ubicaba; trabajaron en el mismo destino, pero no con él, dependía de otro jefe; lo vio tres (3) veces, no tuvo con él reuniones a puerta cerrada, no sabe si él no se registraba al ingreso del Departamento. A efectos de evidenciar una contradicción se le hizo leer parte de su declaración en fiscalía, previo reconocimiento de su firma; *3 de febrero de 2016, ...recuerdo que en una primera oportunidad el señor César Rojas concurrió al Departamento a entrevistarse con Flores y con él, antes de iniciarse la licitación, no se registró por su calidad de ex Comandante.* Consultado si lo anterior constituía un encuentro casual, respondió “yo no lo cité, fue a ver a Flores, nos encontramos con él”. A la pregunta de si César Rojas le había planteado su intención de postular a las licitaciones, respondió el acusado que sí. Habiendo negado el acusado saber que César Rojas trabajaba en la empresa CGM, se le exhibió parte de la referida declaración a fin de evidenciar contradicción: *“yo me enteré que César Rojas se había adjudicado las obras una vez que se iniciaron, nunca dijo que tenía una empresa. Lo importante es que la licitación se adjudicó conforme a la norma, que se hicieron los trabajos. Alguien me comentó que representaba a la empresa adjudicataria, CGM”.* Respondió a la fiscalía que *durante la ejecución de las obras tuvo contacto con él cuando fueron a una reunión en el Departamento.* Dijo no recordar si el 9 de enero de 2013, u otra fecha, le habría hecho entrega a César Rojas, en representación de CGM, de una boleta de garantía respecto de Isla Huar, y tampoco si delante suyo, un tercero de nombre Luis Parra, le hizo devolución de dicha boleta de garantía. Señaló que el 30 de octubre de 2013 fue la fecha de término de la obra. Dijo no saber que César Rojas trabajaba o tuviere alguna relación con Grossman, a diferencia de Coyhaique Alto y Retén Isla Huar, en que cuando tuvo lugar la postulación para el término de obras, sabía que César Rojas pertenecía a la empresa Grossman. A efectos de evidenciar contradicción se le exhibió una declaración de 2 de noviembre de 2015, en la que reconoció su firma, y cuyo tenor fue: *¿conocía a alguien de la empresa Grossman?, no originalmente, cuando postularon señalaron que esta pertenecía a César Rojas,*

por lo que, antes de admitir su postulación, fue revisado por Asesoría Jurídica, añadiendo que no sabía por qué esta última tenía que revisar el caso ya que eso lo dispuso el jefe del Departamento.

En el segundo día de interrogatorio de la fiscalía, el acusado respondió que en una de las reuniones con César Rojas también estuvieron los acusados Pizarro y Gutiérrez, un arquitecto, el Teniente Parra, otra persona que no recordaba, y él; el objetivo fue analizar el avance de las obras de Villa Ortega ya que la fecha de entrega se encontraba próxima; no se analizaron las otras obras. A fin de evidenciar contradicción se le exhibió la declaración de fecha 3 de febrero de 2016, de cuya lectura constó que la reunión fue *para analizar el avance de las obras porque sentíamos que estaba atrasada*; respondió que de las jefaturas sólo había estado él; que en el mes de septiembre fue a hablar con el Coronel Flores y el Director de Logística para decirles que Lago Castor, Coyhaique Alto e Isla Huar estaban atrasadas y que había que ponerles término, a lo que añadió que *primero habló con Flores cuando éste regresó de Isla Huar y posteriormente, ambos, con el Director de Logística*; que efectivamente él propuso crear una comisión técnica para ir a completar la obra de Huar, pero que eso se debió a que los plazos estaban vencidos, lo propuso de conformidad a la ley. A fin de evidenciar contradicción se le exhibió la misma declaración anterior: *en septiembre de 2013, más o menos, hablé con Flores y además fuimos con el Director de Logística a decirle que estaban atrasadas las obras y que había que terminirlas; entonces le propuse crear una comisión compuesta por técnicos, fuimos a Isla Huar, se decidió poner término a la obra y proceder al cobro de la boleta de garantía*. A la pregunta respecto de si proponer la comisión no formaba parte de sus funciones de Gestión y Coordinación, respondió afirmativamente. Señaló que ejercía sus funciones de acuerdo con la ley y las instrucciones que le impartía el Director de Logística, pero que no había un reglamento específico. A la pregunta acerca de si él, junto con visitar Villa Ortega, fue también con la Comisión había ido a visitar Coyhaique Alto e Isla Castor, respondió que no. Procedió la fiscalía a exhibirle el documento signado con el numeral 1.009, el que reconoció e hizo lectura de lo siguiente: 1º) el nombre de los miembros de la Comisión registrados en el documento: “yo a cargo”, Andrea Campusano, Guillermo Nadal, Francisco Pizarro, Héctor Salamanca e Isidro Martínez; 2º) el objetivo de la Comisión: recepción de Villa Ortega y revisión técnica de Coyhaique Alto y, 3º) la fecha del documento: 28 de mayo de 2013. Consultado si ir en estas comisiones formaba parte de sus funciones, respondió que *originalmente no, pero sí desde que existe una*

*resolución del Director de Logística que así lo disponía. Procedió a continuación la fiscalía a exhibir al acusado el documento N° 899, el cual reconoció e hizo referencia a su contenido, a saber, solicitud de autorización para comisión de servicio de fecha 14 de enero de 2013, por los días 21 a 25 de enero de 2013, con la finalidad de hacer entrega de los terrenos de Isla Huar y otros, y fiscalización de obras para cursar pagos, documento firmado por Francisco Pizarro. Se le exhibió documento N° 984, respondió que sí lo reconocía, que provenía del Departamento de Cuarteles y estaba dirigido a él, que su fecha era 14 de mayo de 2013, que el objetivo que allí se indica era para verificar el estado de avance de las obras conforme a las especificaciones y lineamientos técnicos, que las unidades a fiscalizar eran Isla Castor, Coyhaique Alto y Villa Ortega, y que la firma que se registra al pie era la de Félix Flores. A la pregunta de si él había formado parte de la comisión de Isla Huar, respondió que *sí*; que según le dijeron los técnicos faltaba entre un 10% y un 15% para el término de la obra; que ahí se decidió no recepcionar la obra, y que no era habitual poner término a un contrato, no obstante lo cual no había verificado que los pagos se correspondieran con la realidad de los avances de la obra. A la pregunta de si había puesto en conocimiento de Flores que se había propuesto poner término al contrato, respondió que de ello sí le dio cuenta. Consultado respecto de si había conversado con Flores acerca de una empresa que se había adjudicado una obra en Río Tranquilo, respondió que había sido Flores quien se lo comentó. A fin de **evidenciar contradicción** le exhibió nuevamente la aludida declaración de 3 de febrero de 2016: *por lo tanto se evaluó que Grossman podía estar interesado porque anteriormente había postulado en la zona, “yo conversé esto con Flores”*. Consultado por la fecha en que había dejado de trabajar en el Departamento de Cuarteles, respondió que ello había sido *el año 2013, entre diciembre y enero, ya que fui trasladado*.*

Refirió que entre los años 2010 a 2013 no realizó otra actividad que su trabajo en Carabineros. Consultado respecto de si sus cuentas corrientes, entre los años 2012 a 2014, habían tenido movimientos cuantiosos, respondió *sí*. Al efecto **le fueron exhibidos los documentos N°107 y N°581**, los cuales reconoció, refiriendo que: el primer documento correspondía a *una cartola, la N° 72, cuenta corriente N° 0361514-6, del Banco Santander, titular Bustos Morgado, Christian Patricio, correo electrónico christian.bustos@vtr.net; período 30 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011; 12 de enero de 2011 depósito en efectivo por \$1.000.000, 21 de enero de 2011 depósito pago de remuneración Carabineros de Chile por \$1.536.544*; el segundo documento es *una cartola de la cuenta corriente*

N° 5890810, Banco de Chile, titular Christian Patricio Bustos Morgado; 12 de enero de 2011, depósito en efectivo por \$4.000.000, sucursal Llo-Lleo;; 18 de octubre de 2011, depósito en efectivo, misma sucursal y monto; depósito en efectivo por \$4.700.000, sucursal Marina Arauco, Viña del Mar. Posteriormente se le consultó por la fecha de su primer crédito, respondiendo que había sido el 13 de diciembre de 2011, del Banco de Chile, precisando que hubo créditos anteriores. El monto de las cuotas era de \$2.600.000. Al efecto se le exhibió el documento N° 792, consistente en boletas de depósito, señalando que *el primero no es mi letra*. Se hizo lectura de diez (10) boletas de depósito a su nombre, por las siguientes cantidades y personas; entre éstas de **José Vargas**; 15 millones, **José Vargas**; 15 millones, **José Vargas**; 10 millones, 10 millones, **Nelson Bustos Morgado**; 10 millones, **José Vargas**; 7 millones, **José Vargas**. A continuación **se le exhibieron nueve (9) boletas de depósito en la cuenta corriente N° 5890810, del Banco de Chile**, en las fechas y montos siguientes: 23 de julio de 2012, por la cantidad de 6 millones de pesos, a la cuenta de Christian Bustos Morgado, efectuado por Nelson Bustos Morgado; 3 de enero de 2012, por la suma de \$4.700.000, mismo titular, depósito efectuado por Rodrigo Bustos Morgado; 15 de marzo de 2012, por \$15.000.000, a nombre del mismo titular, efectuado por Nelson Bustos Morgado; 17 de julio de 2012, 14 de agosto de 2012 y 12 de septiembre de 2012, por la suma de 2 millones de pesos cada uno, mismo titular, depositante José Vargas; 13 de septiembre de 2012, por 10 millones de pesos, mismo titular, efectuado por Nelson Bustos Morgado; 27 de febrero de 2013 y 28 de mayo de 2013, por 5 y 7 millones de pesos, respectivamente, mismo titular, depositante José Vargas en ambos. Consultado si las iniciales CBM correspondían a él, respondió *no*, es *Luis Núñez*. Consultado si las iniciales JVS, correspondían a José Vargas Silva, respondió *sí*. Consultado si esta persona, a esa época, era director de la empresa FEALFRA, respondió *no*. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibió su declaración de 28 de junio de 2016, cuya firma reconoció, dando lectura en el siguiente tenor: se le exhibe escritura de constitución de FEALFRA, donde aparece José Vargas, puedo decir que no sabía que él estaba en el directorio, primera vez que veo esto, no sabía, diría que no tiene siquiera que ver con esto, no tiene vinculación con la empresa. Respondió que efectivamente durante los años 2012 y 2013 FEALFRA siguió adjudicándose obras. Consultado si sabía que su hermano Rodrigo trabajaba para FEALFRA, respondió *no*. Consultado si sabía que su hermano Nelson trabajaba para FEALFRA, respondió *no*. Negó conocer a la empresa Miguel Torrejón, la cual se adjudicaba obras por trato directo. Negó saber que Nelson Bustos prestaba asesoría a la empresa Miguel Torrejón. Negó

saber que su hermano Rodrigo prestaba asesoría a la empresa FEALFRA EIRL, cuyo representante era Juan Soto Jara. Dijo no saber que Miguel Torrejón había comprado acciones de la empresa FEALFRA. Dijo además que no conocía al representante legal de la empresa FEALFRA, y que *no conocía en ese momento a Osvaldo Tobar*, no sabía que él era el representante de FEALFRA. No sabía que Osvaldo Tobar era amigo de la infancia de su hermano Rodrigo. No sabía que Osvaldo Tobar era el contador de la empresa de inversiones que tenía su hermano, ni tampoco si dicha persona era el representante de esa empresa.

Exhibidos los documentos singularizados en el numeral 14 del acápite otros medios de prueba, a saber, correos electrónicos, dijo no reconocerlos y que nunca los recibió. Consultado por la fecha de constitución de la sociedad BM, respondió que había sido el año 2010. Respecto de la fecha en que él había llegado al Departamento, señaló que había sido el año 2010. Refirió que la empresa de Transportes Bustos Morgado Ltda., se había constituido el 26 de diciembre de 2012, fecha a la cual él ya era jefe del Departamento de Gestión y Coordinación. Señaló que el 9 de enero de 2013 el Servicio de Impuestos Internos autorizó a la referida empresa. A la pregunta de si la Sociedad Bustos Morgado había subcontratado con FEALFRA por la suma de 71 millones de pesos, respondió que *sí*. Reconoció haber alguna vez propuesto declarar desierta una licitación. Consultado si eso había ocurrido con el retén Hualañé, el año 2011, respondió *no, yo estaba con licencia médica desde el mes de septiembre de 2011*, misma respuesta que entregó a la pregunta acerca de si sabía que esa obra se la adjudicó a FEALFRA.

Interrogado por el querellante, Consejo de Defensa del Estado, el acusado reiteró varias de las respuestas que antes había entregado a la acusadora fiscal, toda vez que la mayoría de las preguntas del acusador particular versaron sobre los mismos temas que anteriormente habían sido abordados por la fiscalía. No obstante, requirió del acusado saber si era él quien disponía (decidía) qué cuartel trabajar, a lo que respondió que *eso lo hacía el Departamento de Planificación, y que su Departamento se preocupaba de llamar a licitación*. Respecto de la entrega de los terrenos correspondientes a las obras licitadas, señaló que *cuando se trataba de lugares alejados, Generalmente no se hacía dicha entrega*. Respecto de la primera visita a terreno que realizaban los oponentes de la licitación, refirió que él no iba, y que entre esa primera visita y hasta que se hacía la entrega simbólica transcurrían alrededor de tres (3) meses. Respecto de los pagos,

respondió que él *los visaba porque el mando lo disponía*, explicando que “visar” quería decir *certificar que el funcionario ha dado cumplimiento a su tarea*.

Interrogado el acusado por su defensa letrada, respondió que llegó a trabajar en abril del año 2010. Consultado por las facultades legales del ITO, señaló que contaba con amplias facultades, a saber, controlar, fiscalizar, supervisar, verificar el estado de avance de las obras, dejar constancia de sus visitas en el libro de obras, multar a los contratistas, detener las obras hasta que no se cumplieran las observaciones, además de otras. Respecto del proyecto retén Villa Ortega indicó que databa del año 2007. Para efectos de reconocimiento **se le exhibió el documento N° 268**, acápite prueba documental del interviniente ministerio público, el cual reconoció, explicando al efecto que se trataba de las bases Generales de licitación del citado proyecto, las cuales fueron confeccionadas por asesoría jurídica. Hizo lectura resumida de los apartados 6.7 (visita a terreno al proyecto Villa Ortega), 6.5.11 (licitación y adjudicación), 10.8 (inspección y supervisión de la obra), 10.9 (causales de término anticipado del contrato), 11.1 (*recepción provisional de las obras: 15 días antes el contratista solicitará la inspección técnica de la obra a efectos de la recepción provisoria, el Director designará una Comisión que deberá constituirse en no más de 30 días, asistirá la Comisión técnica y el contratista, si no se hubiere terminado la obra y presente defectos no se recepcionará y se dará un plazo de diez días para solucionarlos; recepción definitiva se hará 270 días después de la fecha de recepción provisoria y 30 días después se devolverán las garantías*). **Se le exhibió además el documento N° 266, Resolución Exenta 989, de 214 de septiembre de 2012**, adjudica licitación pública proyecto reposición Retén Villa Ortega; resuelvo: adjudíquese la licitación de la obra a la empresa contratista CGM Ltda., representada por Cristian Andrés Gutiérrez Martínez, por la cantidad de \$357.948.236, plazo de ejecución 140 días; firma Jorge Enrique Rojas Langer. Asimismo la **documental N° 340**, Resolución Exenta N° 1.302, de 9 de noviembre de 2012, nombra a Francisco Pizarro y otros inspector técnico de diversas obras, entre ellas retén Villa Ortega. Interrogado por la defensa, señaló el acusado que el ITO debía concurrir físicamente una vez al mes a verificar el estado de avance de las obras. Respecto del proceso de pago explicó que comenzaba con una carta del contratista que iba dirigida al ITO, luego de lo cual éste realizaba un informe técnico con el real estado de avance de la obra conforme al itemizado y de esa forma el monto a pagar. Al efecto **le fueron exhibidos los documentos 272, 273, 270 y 275**, correspondientes a una carta de solicitud de 8 de noviembre de 2012

de CGM al ITO Francisco Pizarro, para *cancelación* de estado de pago N° 1, con firma de recepción del mencionado ITO; estado de pago N° 1, firmado por Cristian Gutiérrez, ITO Francisco Pizarro y en el pie Félix Flores Santis, jefe de Departamento; factura N° 29, de 13 de diciembre de 2012, dirigida por CGM a la Dirección de Logística de Carabineros, primer estado de pago reposición retén Villa Ortega, \$81.032.184 (documento recibido por Andrea Campusano, arquitecto del Departamento de Cuarteles); informe técnico N° 1.322, de 17 de diciembre de 2012, proyecto Villa Ortega, dirigido al jefe de Departamento Cuarteles, Félix Flores, objetivo: recepción primer estado de pago, visita a terreno 4 de diciembre de 2012, evaluación 23% de avance, conclusión: aprueba estado de pago por encontrarse conforme al estado de avance de las obras, firma Francisco Pizarro. Señaló el acusado que con este informe el jefe de Departamento de Cuarteles debe tramitar el pago y remitir a L8 para tal efecto, indicando el deponente que la tramitación mencionada consiste sólo en recibir los documentos y “tramitarlos”, que no es más que remitir los documentos mediante oficio. Al efecto se le exhibió el documento N° 269, Oficio del jefe de Departamento de Cuarteles dirigido al Departamento de Finanzas y Contabilidad, por el que remite factura de estado de pago N° 29, de 13 de diciembre de 2012, firmado por Félix Flores, jefe de Departamento. A continuación **se le exhibieron los documentos signados con los números 281, 282, 278 y 279**, concernientes al estado de pago N° 2, en los cuales constan las misma etapas que en el estado de pago anterior: carta de solicitud de 28 de enero de 2013, estado de pago de 29 de enero de 2013; factura N° 34, de 31 de enero de 2013, por \$33.348.141; informe técnico de 1° de febrero de 2013, estado de pago N° 2, visita a terreno 9 de enero de 2013, verifica 32% de avance de la obra, conclusión aprueba estado de pago, firma Francisco Pizarro; oficio remitido de 13 de febrero de 2013, del ITO al Departamento de Cuarteles, firmado por Christian Bustos Morgado como subrogante, se remite a L8. Asimismo, se le exhibió al acusado los documentos números 291, 292, 290, 294 y 289, concernientes al estado de pago N° 4: carta de solicitud de 28 de marzo de 2013, firmado por Cristian Gutiérrez, gerente General CGM, factura N° 43, de 27 de marzo de 2013, \$40.261.562; informe técnico N° 310, de 1° de abril de 2013, objetivo recepción 4° estado de pago, comisión de servicio visita a terreno de 19 de marzo de 2013, evaluación obras 54% estado de avance, firma Francisco Pizarro Dasso; oficio N° 549 de 17 de abril de 2013, remite factura al Departamento de Contabilidad y Finanzas L8, firma Félix Flores Santis. Respecto del proyecto Isla Huar, **se exhibió al acusado los documentos números 214, 217, 216, 215 y 212**, procedimiento de estados de pago: Carta solicitud de 17 de

abril de 2013, CGM a Francisco Pizarro, retén Isla Huar, cancelación tercer estado de pago, firma recepción Francisco Pizarro, firma Cristian Gutiérrez, representante legal CGM, V°B° Félix Flores, jefe Departamento Cuarteles, remite a la Dirección de Logística la factura N° 47, de 17 de abril de 2013, por \$27.806.411, recepcionada por Francisco Pizarro; informe técnico de 18 de abril de 2013, comisión de servicio de 8 de abril de 2013, aprueba estado de pago conforme estado de avance de las obras; Oficio N° 666, de 7 de mayo de 2013, remite factura al Departamento de Finanzas y Contabilidad, firma Félix Flores, jefe de Departamento de Cuarteles. En cuanto al proyecto Lago Castor, exhibió al acusado el documento N° 47, quien lo reconoció y refirió tratarse de un informe técnico de evaluación de proyecto: “Informe técnico N° 1.214, de 28 de noviembre de 2012, Reposición Retén de Carabineros Lago Castor, recibe propuestas, licitación pública, apertura sobres, propuesta CGM por \$365.511.766, plazo ejecución 200 días corridos, ofertas rechazadas no hubo, ofertas rechazadas administrativamente no hubo según Oficio N° 142 de Isabel Ojeda Palma, asesoría jurídica, conclusiones y recomendaciones: contratar a CGM, por cumplir con todos los requisitos de las bases administrativas, firman Juan Francisco Socías, Gutiérrez Salazar, Romina Parraguez, Soledad Ojeda, firma V°B° Christian Bustos Morgado, jefe de Área de Gestión y Coordinación. En cuanto a los estados de pago de la obra Lago Castor, **exhibió al acusado: primero, documentos números 60, 59, 63, 61 y 64**, carta de solicitud estado de pago N° 2 por \$22.863.994, de 28 de enero de 2013, CGM a Francisco Pizarro, firmado por Cristian Gutiérrez Martínez, ITO Francisco Pizarro, V°B° Félix Flores Santis, “pero firmo yo, estaba subrogando”; factura N° 36, de 1° de febrero de 2013, a nombre de Dirección de logística, estado de pago N° 2, por \$22.863.994, recepcionada por ITO Francisco Pizarro; informe técnico N° 106, de fecha 1° de febrero de 2013, evaluación de las obras 11% de avance, aprueba estado de pago; Oficio N° 205, de 13 de febrero de 2013, remite factura con antecedentes, firma Christian Bustos Morgado Jefe subrogante Departamento de Cuadrantes; segundo, **documentos números 66, 67, 69 , 69 y 71**, tercer estado de pago: carta solicitud de 28 de febrero dirigido al ITO, solicitud estado de pago N° 3, firma Cristián Gutiérrez, gerente General empresa CGM, firma Francisco Pizarro: estado de pago por \$38.332.575, firman Cristián Gutiérrez, gerente General CGM, Francisco Pizarro y V°B° Félix Flores; factura N° 39, de 1° de marzo de 2013, a nombre de Dirección Nacional de Logística, estado de pago N° 3, monto \$37.332.575, recepcionada por Francisco Pizarro, ITO; informe técnico N° 200, de 1° de marzo de 2013, objetivo: recepción tercer estado de pago, conclusión 10% ejecutado, se aprueba estado de

pago conforme al estado de avance; remisión de factura N° 39 al Departamento de Finanzas, Oficio de 8 de marzo de 2013, firma jefe del Departamento de Cuadrantes; tercero, **documental números 74, 75, 73, 77 y 72**: carta solicitud de cancelación estado de pago N° 4, de fecha 28 de marzo de 2013, dirigida al ITO Francisco Pizarro, reposición retén Lago Castor; estado de pago N° 4 por \$35.395.931, firmado por Cristian Gutiérrez M., factura N° 41, de 27 de marzo de 2013, a nombre de Dirección Nacional de Logística, estado de pago N° 4, monto ya indicado, recepciona Guillermo Nadal, constructor, Departamento de Cuarteles; informe técnico N° 309, de 1° de abril de 2013, estado de pago N° 4, comisión de servicio de fecha 19 de marzo de 2020, resultado: se verifica en terreno avance del 30%, aproximadamente, aprueba estado de pago conforme estado de avance; Oficio N° 547, de fecha 17 de abril de 2013, Departamento de Cuadrante a Departamento de Finanzas L8, remite factura N° 41, firma Félix Flores Santis. En cuanto al proyecto Alto Coihayque, **se exhibió al acusado resolución N° 1.213, de fecha 28 de noviembre de 2012**, evaluación de propuesta reposición cuartel Alto Coihayque, fecha apertura sobres 13 de noviembre de 2012, oferentes: CGM; empresas rechazadas, no hubo; evaluación técnica: empresas rechazadas técnicamente, no hubo; conclusión y recomendación: adjudicar a empresa contratista CGM, firma Francisco Socías, Fabián Gutiérrez, Romina Parraguez, entre otros, Oficina de verificación de Proyectos, firma V°B°, Christian Bustos Morgado; cuarto. **Documentos número 158, 157, 156, 155 y 153: carta de 17 de abril de 2013**, solicitud de cancelación estado de pago N° 5, CGM a Francisco Pizarro (ITO), estado de pago N° 5 por \$54.847.886, firma Cristián Gutiérrez Martínez, representante legal CGM, Francisco Pizarro Dasso, Departamento L1, V°B° de Félix Flores Santis, jefe del Departamento de Cuadrantes: factura N° 46, de 17 de abril de 2013, a nombre de Dirección Nacional de Logística, por la suma ya indicada, recibe Francisco Pizarro Dasso,; informe técnico de 18 de abril de 2013, resultado: 48% avance de obras, aproximado, suscrito aprueba estado de pago conforme a avance, firma Francisco Pizarro Dasso; Oficio N° 665, de 7 de mayo de 2013, remite factura con antecedentes, Departamento de Cuadrantes a Departamento de Finanzas L8, firma Félix Flores Santis, jefe Departamento de Cuarteles. Consultado respecto de quién tomaba la decisión de *recepción con observaciones menores* de la obra Villa Ortega, respondió “la Comisión”, “y yo como jefe de la Comisión”, precisando el acusado que la decisión de recepción de la obra es una propuesta técnica ya que se trata de una recepción provisoria, puede hacerse ser con o sin observaciones; se levanta un acta y se firma por los técnicos de la Comisión, cumplido el plazo otorgado para solucionar las

observaciones debía concurrirse nuevamente a verificar el cumplimiento efectivo, pero por diversas razones la Comisión no iba, sólo viajaba el ITO; de vuelta en Santiago se firmaba una nueva acta. Consultado por los trabajos de “hermoseamiento”, señaló que estaba a cargo del Departamento de Mantención y Reparación, sin perjuicio que la tramitación de la solicitud respectiva la hacía el Departamento de Cuarteles. Consultado respecto de qué persona decidía poner término a los contratos, señaló que eso le correspondía al Jefe del Departamento, a sugerencia suya y después de la visita a las obras, añadiendo que esa jefatura era la que decidía si le daba o no cuenta de la situación al Director Nacional de Logística. En relación al proyecto Isla Huar, negó haber tenido participación en la contratación directa que se efectuó con la empresa Grossman, en la medida que esa decisión le correspondía al *mando*. En cuanto a Lago Castor, refirió que los dineros para el término de las obras provinieron del no pago del último estado de pago, alrededor de \$93 millones de pesos, y de la boleta de garantía. Consultado por el proyecto Alto Coyhaique, señaló que se había seguido el mismo procedimiento y que el monto con el que se efectuó el término de las obras ascendió a \$113 millones de pesos, aproximadamente, proveniente del no pago del último estado de pago.

Interrogado respecto del “hecho 2”, refirió que solicitó varios créditos. El primero fue en abril de 2011, por \$30 millones de pesos, de los cuales transfirió a \$10 millones a José Vargas mediante giro de un cheque, se cobró en enero y con él se compró un camión, además de un segundo cheque por \$8 millones de pesos, en el mes de marzo, para gastos operacionales. **Se le exhibe el documento N° 402**, el cual reconoció, señalando que se trataba de cartolas del Banco de Chile; cartola N° 13, del año 2011, abono en cuenta moneda nacional por \$30 millones; 2 cheques, uno girado a nombre de José Vargas, el 1° de enero de 2012, y el otro girado a la misma persona por \$8 millones de pesos, el 22 de marzo de 2012. Señaló que el crédito se pagaría con el servicio de transporte del camión. El saldo de \$20 millones se los prestó a su hermano Rodrigo, transfiriéndoselos entre el 30 de enero de 2012 y el 14 de febrero del mismo año, por los siguientes montos:

30 de enero, \$3 millones;

31 de enero \$2 millones setecientos mil pesos;

31 de enero, \$2 millones;

8 de febrero, \$1 millón de pesos;

13 de febrero, \$5 millones;

14 de febrero, \$5 millones.

En cuanto a los \$8 millones de José Vargas, estos se los entregó mediante depósitos que le hizo su hermano Rodrigo, por \$2 millones y otro por \$6 millones. El 15 de marzo de 2012 Rodrigo depositó, por medio de su hermano Nelson, \$15 millones de pesos, 7 de los cuales en el Banco Santander. A continuación le exhibió el **documento N° 421**, consistente en facturas electrónicas emitidas por la empresa Bustos Morgado Ltda. a la empresa Vía Monte: 31 de enero de 2012, armado y montaje de estructura, Talca, \$6.134.442; factura N° 4, de fecha 24 de febrero de 2012, armado y montaje de estructura, Talca, 12.488.202; factura N° 5, de fecha 27 de febrero de 2012, ídem anterior, \$6.153.763; N° 6, de 22 de marzo de 2012, ídem anteriores, \$8.128.548; N° 7 de 4 de abril de 2012, “adicionales”, N° 8, de 24 de abril de 2012, estructura metálica altillo Home Center, \$7.091.966; N° 10, de 17 de mayo de 2012, ídem motivo, \$5.639.251; factura N° 12, de 3 de septiembre de 2012, ídem, \$2.246.393.

El segundo crédito fue en agosto de 2012, y conforme a la cartola que tuvo a la vista, el 30 de agosto de 2012 se registró abono crédito moneda nacional por \$29.000.000, los cuales fueron destinados a la compra de un camión, para lo cual le entregó un cheque nominativo a nombre de su hermano Rodrigo por \$21 millones, cobrado por caja el 7 de septiembre de 2012, y, además, una transferencia por \$5 millones, en la misma fecha; el camión se inscribió a nombre de la empresa Inversiones BM.

Se le exhibió el documento N° 419, refiriendo el acusado que se trataba de un tercer cheque, serie N° 2008AA2541575, por \$21 millones, girado contra su cuenta corriente N° 000-58908-10, con fecha 6 de septiembre de 2012.

A continuación **el documento N° 422**, refiriendo el acusado que se trataba del contrato de adquisición de un Tracto Camión y 9 cheques: 1) Contrato de

compraventa Tracto camión, año 2007, comprador Inversiones BM Ltda., de fecha 4 de diciembre de 2012, por la suma de \$27 millones de pesos, pagados con \$15 millones al contado y una cuota de \$12 millones con vencimiento el 31 de enero de 2013; 2) dos cheques, uno de fecha 3 de diciembre de 2012, por \$15 millones de pesos, Banco Corpbanca, a nombre de Comercial Labbe, firmado por Nelson Bustos Morgado, y el otro, de fecha 3 de enero de 2013, por la cantidad de \$12 millones de pesos, firmado por Rodrigo Bustos Morgado; 3) factura N° 1.267 de Comercial Labbe y Cía. Ltda., sin señalamiento de monto, 7 cheques girados por Rodrigo Bustos Morgado a nombre de dicha empresa, por la compra de un semirremolque, el primero con fecha 3 de diciembre de 2012, por la cantidad de \$3 millones de pesos, y otros seis cheques por \$1.880.000, fecha de giro los días 3 de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013.

Señaló que los camiones se los arrendaron a José Vargas, quien mantenía desde el año 2007 un contrato de servicio de transporte con la empresa Agrosuper. Al efecto, **se le exhibió el documento N° 411**, el cual reconoció, señalando que se trataba de un contrato de prestación de servicios de fecha 1° de abril de 2007, entre la empresa Agrosuper Ltda. y Sociedad Comercial Sunpack Ltda., representada por José Vargas Silva, cuyas cláusulas 1ª y 2ª disponen: Sunpack es una empresa dedicada al servicio de transporte conforme indica su giro; acepta comprar y vender productos de Agrosuper.

Consultado por otros créditos, indicó que hubo un tercero, por la cantidad de \$27.950.000, tomado en abril de 2013, traSPAsando \$27.750.000 a la empresa que ese año constituyeron él y sus hermanos, precisando que ese dinero estuvo destinado a la compra de dos (2) camiones para transporte de carga, cantidad que se vio incrementada con \$22.500.000, aproximadamente, aportados por su hermano Rodrigo, obtenido de un crédito de consumo.

Dio **lectura a una cartola de cuenta corriente**, la que señala que el 19 de abril de 2013, se efectuó un abono por concepto de crédito por la cantidad de \$27.950.000, los cuales fueron transferidos a otro banco de la empresa de transporte, los días 22 de abril de 2013, cuatro (4) transferencias, el mismo día, por \$5 millones de pesos cada una, y tres (3) más el 24 de abril del mismo año, por \$5 millones y \$2.500.000. **Se le exhibió el documento N° 405**, correspondiente a 6 cartolas de cuenta corriente N° 88158799, titular Sociedad de

Asesorías de Servicios Logísticos y Transportes Bustos Morgado Ltda., en las cuales consta que con fecha 19 de abril de 2013 se efectuó el depósito de un cheque en la sucursal Buin, por \$22.500.000, correspondiente, según explicó el acusado, a un cheque de su hermano Nelson, depositado a la cuenta de la empresa, con posterioridad a la solicitud del crédito al Banco de Chile. Consta asimismo que el 22 de abril de 2013 se realizaron tres (3) transferencias de Christian Bustos por \$5 millones cada una, más otras dos el día 24 de abril del mismo año, por \$5 millones, una, y la otra por \$2.500.000. Se **le exhibe también el documento N° 418**, cheque de la cuenta corriente de Nelson Bustos Morgado, por \$22.500.000, de 19 de abril de 2013, a nombre de Servicios Logísticos BM Ltda. Consultado por las utilidades de la empresa, contestó que desde el año 2013 permitieron pagar los créditos. Asimismo, se **le exhibe documento N° 406**, balance tributario de BM Ltda.: 2013, utilidades por 108 millones, aprox., 2014, utilidades por 242 millones, aprox., y 2015, utilidades por \$110 millones de pesos.

Posteriormente se le consultó por otros créditos, respondiendo el acusado que hubo un cuarto crédito de consumo, solicitado en diciembre de 2013, por \$20.800.000, **exhibiéndole la prueba documental N° 402** (anteriormente exhibido), consistente en una cartola del Banco de Chile, en la que consta que efectivamente en el mes indicado, el día 13, se efectuó en su cuenta un abono por concepto de crédito moneda nacional por la cantidad de \$20.8000.000, explicando que el destino de este crédito era ingresarlo adquirir un nuevo camión, para lo cual giró un cheque por la cantidad de \$18.00.000, presentado a cobro el 17 de diciembre del mismo año. A continuación **le exhibió para reconocimiento el documento N° 449**, consistente en un cheque de la cuenta corriente de Christian Bustos Morgado, por la cantidad de \$18 millones de pesos, girado con fecha 14 de diciembre de 2013, a nombre de Servicios de Transportes BM Ltda., timbre de caja 16 de diciembre de 2013, Quillota.

A continuación **le exhibió el documento N° 405**, correspondiente a una cartola de cuenta corriente de la empresa Servicios de Transporte BM Ltda., en que consta que el 16 de diciembre de 2013, en la sucursal Quillota, se efectuó el depósito de un cheque por la cantidad de \$18 millones de pesos. Consultado el acusado, señaló que con ese dinero se compró otro camión, marca Mack, destinados a los fines de la empresa.

Consultado por otros créditos, dio cuenta de un 5° crédito, solicitado en agosto de 2014, por \$40.000.000, con el cual se pagaron deudas y se aportó como capital a la empresa para la adquisición de más camiones.

Después de esta última adquisición con créditos de consumo, se comenzó a comprar con sistema leasig. Se **le exhibe el documento 402**, cartola del Banco de Chile, 25 de agosto de 2014, depósito \$9.869.63.

Posteriormente hubo un sexto crédito, en diciembre de 2015, por \$81 millones y fracción, del Banco Santander, el cual se ocupó en parte para la adquisición de camiones y otra para disponer de un capital de trabajo. Respecto a esto último, se **le exhiben los documentos acompañados con el N° 420**, a saber, certificados de inscripción de vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados: WK 6414-3, Tracto camión, año 2007, propietario Inversiones Bustos Morgado Ltda., fecha adquisición 6 de diciembre de 2012; JN 1505, semirremolque, año 2006, mismo propietario anterior, adquisición 4 de diciembre de 2012. En esta parte hizo presente el acusado que la empresa de transporte se creó a fines de diciembre y principios de enero, por lo que estos dos camiones se compraron a nombre de la empresa de Inversiones BM.

Continuó con la lectura de los siguientes certificados: tracto camión, año 2007, marca International, propietario Asesoría de Servicios Logísticos y Transporte BM, fecha adquisición 30 de abril de 2013; PW 4916, mismo tipo de vehículo, año, marca y propietario que el anterior, fecha de adquisición el 30 de abril de 2013; DGPT 55, mismo tipo de vehículo, año 2011, marca Mack, mismo propietario anterior, fecha de adquisición 16 de diciembre de 2013, TRTV 91, camión, año 2014, marca Chevrolet, mismo propietario que los anteriores, anterior, fecha adquisición 20 de agosto de 2014; GRTV 90, camión marca Chevrolet, año 2014, mismo propietario y fecha de adquisición; GSPF 82, mismo vehículo, marca, año y fecha de adquisición anteriores, inscrito a nombre de NP Leasing y Sistemas Financieros S.A; GSPF 83, ídem anterior; HHDC 80, tracto camión, año 2015, marca Mercedes Benz, propietario VSKA leasing, fecha de adquisición 26 de mayo de 2015, mera tenencia Asesorías y Servicios Logísticos MB Ltda., 18 de agosto de 2015; HXRK 80, camión año 2016, Chevrolet, propietario Asesorías y servicios Logísticos MB Ltda., adquisición 31 de mayo de 2016; HXRK 79, mismos datos que el anterior; KHWY, año 2018, marca Chevrolet, propietario Asesorías y

Servicios Logísticos MB Ltda., adquisición 28 de febrero de 2018; KHHC 27, año 2018, marca Chevrolet, propietario Scotiabank, adquisición 13 de septiembre de 2018, mero tenedor Asesorías y Servicios Logísticos MB Ltda.

Concluyó el interrogatorio de la defensa diciendo el acusado que las cartolas que antecedian habían llegado a la carpeta de investigación porque fueron abiertas por él, en junio de 2016, se le pidió abrirlas y él accedió, período 2010 en adelante, hasta el 2016, sin perjuicio de haber acompañado sus registros de correo y de telefonía celular, tanto personal como institucional.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, ratificó que varias de las facultades con las que contaba en aquella época no estaban señaladas en la ley; fue designado por el General Muñoz, pero éste no le dio ninguna instrucción en tal sentido, sólo que trabajara en los proyectos y que aprovechara de hacer lo mismo con los que estaban atrasados; ratificó que él no le daba órdenes al ITO, sólo tenía un control administrativo; las órdenes que se daban en la institución eran verbales y escritas; los documentos electrónicos tienen un número y el nombre de quien lo emite, y que en el caso de los suyos aparecía su número de teléfono al dorso del documento; declaró no haber dicho o instruido que lo llamaran por teléfono en caso necesario; dijo no recordar si había dado una instrucción escrita un día domingo respecto de lo que había que hacer acerca de un determinado un informe técnico. Al efecto, se **le exhibió el documento N° 24**, de los medios de prueba de la defensa del acusado Pizarro, el cual reconoció, diciendo que se trataba de un documento electrónico dirigido al Teniente Luis Parra, procediendo a continuación el abogado defensor a hacer lectura del documento (antes leído) Consultado acerca de las instrucciones a que hacía referencia el documento, dijo no recordar; negó haber ordenado pedir comisión de servicio para las personas mencionadas en el documento, señalando que a él no le correspondía; ratificó que los ITOS son CPR y no tienen formación militar por no estar adscritos, los cuales cumplen instrucciones administrativas pero no técnicas; Pizarro no tuvo secretaria; consultado respecto de dos personas de sexo femenino que hacían papeleo, dijo no recordarlas; se le hizo mención a la cabo Claudia Zenteno y Sabrina Vargas, a quienes recordó pero aclarando que ellas no cumplían esas funciones, estaban a cargo de archivos, eran profesionales, no hacían papeles; dijo no saber de la existencia de una denuncia por el extravío de documentos en el Departamento, los cuales eran relevantes para la investigación; negó haber dado instrucciones a

Pizarro para alterar los informes técnicos, tampoco haberle dicho que necesitaba sacar pronto un informe porque le iba a llegar un dinero, tampoco haberle ofrecido dinero a cambio. Consultado si le había dicho a Pizarro *esto hay que sacarlo o, si no, no vamos a cumplir con la asignación presupuestaria*, respondió “así no lo dije”. Consultado si alguna de las sugerencias que había dado en aquel entonces no había sido aceptada, respondió que sí, citando a modo de ejemplo un sumario administrativo, la cual no se aceptó, no hubo sumario. Consultado respecto de si se acordaba haber dividido alguna de las Comisiones que le tocó participar, respondió que no se acordaba, rectificando de inmediato, señalando que sí se dividieron, pero que él no sabía dónde había ido cada una; reconoció que durante una de esas comisiones había ido a las termas de Puyuhapi, pero que *“también llegaron” los demás*.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez dijo conocer a César Rojas y ubicar a Cristian Gutiérrez, no recordando dónde lo había visto la primera vez. Respecto de la empresa CGM señaló haber sabido de ella cuando le fueron adjudicando los proyectos, desconociendo quién era el representante de dicha empresa. A las preguntas de la defensa respondió no haber recibido ningún documento de licitación ni tampoco entregar documentos relacionados con ellas, y que tampoco ordenaba hacer devolución de documentos. Al efecto, se le **exhibió el documento N° 13, de la prueba documental de la defensa del acusado Gutiérrez**, consistente en un acta de entrega, la que el acusado reconoció, señalando que era una acta de entrega de una boleta bancaria de seriedad de la oferta del proyecto de reparación retén Isla Huar. Consultado acerca de quién aparecía en el cuerpo del documento ordenando la entrega, respondió yo. Se procedió a la lectura del documento, siendo su tenor el que sigue: *Acta de entrega de boleta bancaria, Santiago 9 de enero de 2013; conforme lo dispuesto por el Teniente coronel Christian Bustos Morgado, el subteniente Parra hace entrega de la boleta de garantía de seriedad N° 1689517, de fecha 9 de enero de 2013, Banco Security, monto \$10.230.000, objeto “seriedad de la oferta” reposición retén; recibe César Orlando Rojas Gaete (firma encima del nombre), entregó conforme: subteniente Parra*. Consultado si le había correspondido participar en otras comisiones como lo hizo en Isla Huar, respondió que sí, pueden haber sido 3 o 4, no recordando exactamente cuáles. Consultado si las obras referidas a esas comisiones habían sido recepcionadas, respondió “me parece que sí”, y que *entonces sólo las obras de CGM no se recepcionaron*, conforme le planteó la defensa.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, negó haber tenido cercanía con César Rojas ni su señora; señaló que si Rojas se jubiló con el grado de Mayor, entonces tuvo que haber pasado por la Academia de Ciencias Policiales; dijo haber sabido que Rojas tuvo interés en la licitación cuando las obras ya se estaban realizando; respondió que el ITO Pizarro fue alrededor de 7 veces a visitar las obras de CGM; refirió que cuando iba en la Comisión se alojaba en la casa de huéspedes de Carabineros, al igual que los demás miembros de la Comisión; negó que el ITO le hubiere alguna vez dado cuenta que se había alojado en el Hotel El Lago por una invitación de CGM y tampoco haber ido de pesca como su invitado. Indicó que la relación de trabajo era buena, explicó qué significaba "conducto "regular", esto es, comunicarse directamente con el superior jerárquico de la jefatura, concepto que no era aplicable para el personal CPR, quienes pueden ir directamente al superior jerárquico suyo. En cuanto al financiamiento de las obras contratadas mediante trato directo, explicó que eso se hacía con los dineros no pagados al contratista con motivo del término de contrato. Explicó que las boletas de seriedad se deben devolver cuando se adjudica la obra a la empresa contratista, pero que luego debe llegar con una boleta de garantía de fiel cumplimiento de la obra. Negó haber recibido dineros ni beneficios de César Rojas, tampoco de Francisco Pizarro, ni tampoco sus familiares.

SEXTO: Declaración del acusado Francisco Pizarro (días martes, miércoles y viernes 8 de octubre de 2021). Que, el acusado Francisco Pizarro decidió prestar declaración, señalando al efecto que fue contratado para mantención y reposición de cuarteles, labores en las que se desempeñó desde finales del año 2008 hasta el año 2010, lo que coincidió con la llegada del Comandante Bustos Morgado, indicándosele que él sería su nueva jefatura y que debía dar cumplimiento a sus órdenes, tanto verbales como escritas. A partir de ese momento se le empezó a dar comisiones de servicio para la constatación de obras, lo cual comenzó con el retén Loica, cerca de San Antonio. Indicó que dicha obra le había sido adjudicada a la empresa Juan Soto Jara EIRL, en la cual "había un personaje", Rodrigo Bustos Morgado, quien trabaja en un contenedor de la obra. De tal persona le dio cuenta al Comandante Bustos Morgado, quien le dijo que él no tenía nada que ver con esa persona y que no tenía ningún hermano. Señaló que también le consultó por la persona de Juan Soto Jara, lo que el Comandante también desestimó. Señaló que cuando concurrió aquella vez lo hizo formando parte de la Comisión, en calidad de ITO, a fin de aclarar cualquier duda que pudiera suscitarse. Preciso en este punto que todas las Comisiones eran generadas en el Departamento de

Cuarteles, cuyo destino final era la Dirección de Logística. En aquella oportunidad formaron parte de la Comisión Patricia Albornoz, en calidad de jefe, Andrea Campusano, Héctor Salamanca, Guillermo Nadal. Una vez en el lugar se verificó que existían ítems pendientes, pero que antes de proceder al rechazo de la obra se recibió un llamado telefónico del Comandante Bustos Morgado, quien ordenó que los trabajos se *receptionaran* (recibieran) con observaciones menores y se le diera plazo para subsanarlos. La llamada en cuestión quedó consignada en el Acta de Recepción. Preciso que en esos momentos el Comandante Bustos Morgado se encontraba con licencia médica por seis meses. Señaló que después de esa Comisión nunca más se le asignó como ITO de esa empresa, comenzando a partir de ese momento a destinársele en dicha calidad a zonas extremas. Continuó su declaración refiriendo que entre el año 2011 y 2012 se le asignó como ITO en 44 obras, por más de \$12.000.000.000 millones. A fines de 2011, principio de 2012, se le informó que sería ITO de zonas extremas, en las que laboraba la empresa CGM. Refirió que a instancia del Comandante Bustos Morgado se generó una reunión con todos los ITO, la que tuvo lugar en la sala de reuniones del Departamento de Cuarteles de Quilín. En dicha oportunidad el Comandante Bustos ingresó con una planilla diciéndoles que se procediera al pago de varias obras porque no estaban licitadas ni tampoco iniciadas. Señaló el deponente que se le representó la situación al Comandante pero este ordenó que se procediera con los estados de pago. Después de esa reunión comenzó a hostigar a varios de los profesionales que habían participado en esa reunión. En cuanto a la orden, esta se cumplió, iniciándose la tramitación de los estados de pago, precisando que para ello es (era) necesario que la totalidad de los antecedentes, debidamente validados, hayan (hubieren) sido acompañados. El primer estado de pago no pudo tramitarse por encontrarse impagas las imposiciones de los trabajadores. Cuando concurrió la Comisión verificó que la obra se había iniciado, aunque su avance era mínimo, lo cual significaba que de alguna manera alguien había autorizado el inicio de las obras. Indicó que las Comisiones comenzaron a suceder de forma extemporánea pues cuando viajaba los trabajos ya se habían iniciado. Preciso que la carta de solicitud de pago no ingresaba por la oficina de partes, de manera que no se podía determinar su fecha de ingreso, con lo cual la extemporaneidad se salvaba acomodando la fecha. Consultado por el nombre de César Rojas Gaete, respondió que lo ubicaba por haberlo visto anteriormente cuando éste trabajaba en el Departamento de adquisiciones, señalando que en el Departamento de Cuarteles lo había visto con Bustos Morgado, y que le había dicho que ahora era empresario. En cuanto a la empresa CGM, indicó que siempre estaba atrasada en

lo concerniente a la contratación de seguros, pago de cotizaciones de los trabajadores, implementos técnicos, etc. Añadió que en el segundo estado de pago verificó mayor cantidad de personal e implementación de maquinaria en la obra, haciendo mención a una retroexcavadora, la que en el cuarto estado de pago ya no estaba. Señaló que cuando regresaba de la comisión de servicio disponía de alrededor de tres días para la tramitación administrativa correspondiente, después de lo cual volvía a salir en otra comisión. Señaló también que trató de entrevistar con el Director de Logística, pero no pudo, como tampoco otros compañeros de trabajo. En ese momento los malos tratos aumentaron. Añadió que todo acto administrativo era de conocimiento del Departamento de Cuarteles y de Christian Bustos Morgado, quien tramitaba todo en “proformas” y a veces sacaba directamente las firmas que se requerían para la tramitación del acto. Indicó que el citado Bustos le dijo que había que regularizar la parte administrativa del proyecto Villa Ortega ya que el plazo para finalización de las obras estaba casi vencido y que había que tramitar la recepción. Representó la situación al mando diciendo que eso no se podía hacer atendido el estado de avance de la obra, para lo cual aportó fotografías que graficaban el estado en que se encontraban. Bustos ordenó se formara una Comisión, asumiendo este la jefatura, pero sin señalamiento ni funciones del resto de la Comisión, y que en su caso su participación fue para presentar la obra a los demás integrantes. Al llegar se entrevistaron con el jefe de Zona, quien le hizo ver a Bustos Morgado que en su concepto las obras estaban atrasadas. Refirió el acusado que sin necesidad de ingresar se veía que faltaban muchas cosas, como por ejemplo el empalme eléctrico). La revisión duró cuatro (4) minutos. Posteriormente Bustos les explicó la metodología que se seguiría, a saber, aceptar provisoriamente las obras con observaciones menores, dando un plazo de 5 días para subsanarlas, y luego de ello regresar a verificar que se hubieren cumplido, para lo cual se envió a Guillermo Nadal, en circunstancias que correspondía que la verificación la realizara la misma Comisión u otra. Señaló que con posterioridad se le ordenó viajar en Comisión a *repcionar* (recibir) la obra, indicándosele que señaladamente dejara constancia del *itemizado* pendiente. En esta Comisión viajó otra persona en calidad de jefe. Al llegar verificó que no había nadie en la obra, dando cuenta verbalmente a Bustos. Éste le ordenó que verificara qué personal estaba libre y que viajara con ellos a la obra a terminar el “hermoseamiento”. Al efecto, se presentó Grossman con un camión *tres cuarto* ($\frac{3}{4}$), color blanco, marca Hyundai, en el cual se trasladó al personal y los materiales, precisando en este punto que los materiales debían salir de bodega con un acta, ante lo cual Bustos

Morgado le dijo que él firmaría el acta, la que posteriormente llevó al Director Nacional de Logística. Señaló que viajaron con él gasfiteros, carpinteros, cerrajeros, eléctricos, entre otros. Al llegar a la obra estuvieron tres (3) días ordenando y catorce (14) días trabajando. Al regreso quedó pendiente el empalme eléctrico, debido a que CGM tenía deudas pendientes con la empresa de electricidad, ante lo cual Bustos se comunicó con César Rojas Gaete a fin de solucionar el problema, lo que efectivamente ocurrió pues al día siguiente se hizo el pago de esa deuda. Se cobraron multas por sólo 10 días, luego de lo cual se inauguró la obra. En cuanto a Isla Huar, indicó que lo enviaron en Comisión después de que se había tramitado el estado de pago, y que posteriormente, cuando el plazo estaba por vencerse, Bustos viajó en la Comisión, la que integraron otras personas, tales como Andrea Campusano, Héctor Salamanca y él como ITO s presentar la obra. La metodología que se aplicó fue la misma que en Villa Ortega, pero en esta oportunidad los profesionales que iban en la Comisión decidieron rechazar la recepción cuando superior que se seguiría el mismo procedimiento anterior. De esta situación no se informó al Director Nacional de Logística, que era lo que correspondía, siendo Bustos quien fue directamente a hablar con él. Se decidió poner término al contrato, aunque el plazo de finalización de las obras ya había vencido. Ante ello, se contrató en forma directa el término de las obras, ordenándole Bustos que hiciera calzar los montos pendientes con los *itemizados* (situación que también ocurrió con otros dos proyectos), lo que no logró terminar pues debió salir nuevamente en otra Comisión. A su regreso le mostraron contratos celebrados de manera directa, advirtiéndole que aparecía el nombre de Grossman, pero la firma no era la suya. En el intertanto asumió la jefatura el General Osses, quien lo *segregó*. Refirió que Bustos le dijo que ese guatón chanta no se quedaría y que llegaría un amigo, Héctor Nail, de quien supo después se encontraba ligado a otras problemáticas institucionales. Dos semanas después, en reemplazo de Félix Flores llegó otro Coronel , con el que se entrevistó a instancias de este, después de lo cual ordenó un sumario y dio cuenta a la fiscalía de alta complejidad. Indicó que como no existía oficina de partes trató de reSPAldarse digitalmente con la documentación, alrededor de 6.000 documentos, lo que no pudo terminar porque el mayor Nail se lo ordenó, diciéndole que eso no formaba parte de “mis” funciones. Cuatro días después declaró en el sumario, con el General Gamboa. Posteriormente se le trasladó a la Dirección de Gestión y Control de la Dirección de Logística, cuyo jefe era un Comandante, por tanto, de menor rango que los Coronel es que cumplían funciones en dicho lugar. Estuvo allí un año, al término del cual no se le renovó el contrato. Posteriormente le llegó

una citación a su domicilio en la que se le ordenaba comparecer para notificarse de la vista fiscal, la que dispuso su destitución pero que él no firmó, ni se le dio copia de ella.

Interrogado por su abogado defensor respondió: dentro del Departamento de Cuarteles su jefe era el Comandante Bustos Morgado, le impartía órdenes escritas y verbales, estas últimas en su gran mayoría. Las órdenes decían relación mayoritariamente con los estados de pago. Su vínculo laboral era CPR. Existía un reglamento en el que se señalaban sus obligaciones, y dentro de ellas una que decía que debía dar cumplimiento a las órdenes de sus superiores. Señaló que estaba sujeto a jerarquía y obediencia. **Se le exhibió el documento N° 2**, de sus medios de prueba, a saber, directiva del personal contratado por Resolución CPR. Refirió que lo reconocía, y que se trataba de un reglamento que contiene la directiva del personal CPR. Consultado si en ella se contienen menciones a leyes, respondió que sí. Respondió no haber leído la LOC (Ley Orgánica) de Carabineros. Señaló que la fuente de la jerarquía y disciplina se encontraba establecida en el artículo 7 de la Ley 18.961, además de los artículos 2°, 36 y 37 del DFL 2, de 1968, estatuto y directiva del personal de CPR. En cuanto a la facultad de evaluación del personal CPR, ello se encontraba establecido en el Título IV, artículos 33 y 34. Consultado por el artículo 37, dio lectura a éste. Señaló que el Comandante Bustos Morgado evaluó su desempeño desde el año 2010 hasta que fue trasladado del Departamento. **Se le exhibe el documento N° 1.211**, de las pruebas de la fiscalía y, previo examinarlo y reconocerlo, refirió que en el consta su evaluación, de fecha 9 de julio de 2007, apareciendo en la última hoja la firma del Comandante Bustos – Christian Patricio Bustos Morgado, Teniente coronel , jefe de sección -, y del 5 de septiembre de 2013. En el documento aparece su cargo y función, y que conforme al artículo 36 se emite la información técnica que detalla, concluyendo que su desempeño fue sobresaliente. Aclaró que el documento en cuestión no lo había visto antes. Las órdenes verbales, respecto de los hechos, se relacionaban con los proyectos de reposición, a veces relacionados directamente con los pagos y fechas de estos. Éstas órdenes verbales las recibía cuando se encontraba en el Departamento de Cuarteles, también por teléfono o al IP de la comisión de servicio en que se encontrase en determinado momento, o sea, teléfonos con los que cuenta la institución. Explicó que la IP es lo mismo que un anexo telefónico. Explicó también qué es un informe técnico de obra, refiriendo que dice relación con la descripción de las obras encomendadas y su ejecución porcentual, el cual se asocia al estado de pago.

Señaló haber recibido instrucciones en documentos electrónicos, por ejemplo un día domingo. Entre la evaluación y el informe recibió instrucciones para ajustar los montos con las fechas de pago, esto con la finalidad que antes de salir en comisión esto quedara listo, o sea, sin haber visitado físicamente la obra, situación de la que Bustos Morgado estaba enterado. **Se le exhibió el documento N° 24**, de sus medios de prueba: lo reconoce y refiere que *se trata de un documento electrónico ordinario, del sistema electrónico institucional, N° 13887745, del Teniente coronel Christian Bustos Morgado, jefe área de coordinación y ejecución, dirigido al subteniente Luis Parra, e informativo, Andrea Campusano, arquitecto, Isidro Martínez y Nicolás López, abogados; asunto: instrucciones, domingo 30 de junio de 2013* (señala que a esa fecha Bustos se encontraba con feriado legal), *al pie de firma Christian Bustos Morgado Teniente coronel , jefe de coordinación y ejecución, Departamento de cuarteles, anexo 20525. En cuanto a él las instrucciones fueron tener presente los plazos, recepciones de los proyectos y definiciones de plazo, reuniones con abogados de quienes tengan que declarar, solicitar comisión de servicios para Héctor Salamanca, del 9 al 11; Nicolás debe generar oficio solicitando formalmente lo que debía solicitar Pizarro, dando 5 días de plazo, ellos saben.* Lo anterior era el método que utilizaba Bustos para sanear los proyectos en caso de retrasos, para recepción provisoria y partidas no ejecutadas, dando plazo para solucionar las observaciones, con señalamiento de tratarse de observaciones menores; documento tuvo que ser enviado desde una unidad policial. Emitió informes técnicos de las cuatro obras. En cuanto a los hechos, visitó las obras de Lago Castor, alrededor de 7 a 8 veces. El informe técnico contenía alguna de sus observaciones, más que nada de tipo descriptivo de la obra. Señaló que se le imponía concurrir después de tramitar la orden de pago, incluso sin haber hecho entrega del terreno. Así se hizo porque así lo dispuso el Comandante Bustos. Esto ocurría de manera frecuente, era normal. Nunca Bustos le ofreció ni él le pidió dinero. Tampoco le dijo que tenía interés en relación con algún contratista. Tampoco ofreció ni pidió de los contratistas pago alguno. En cuanto al proyecto Alto Coyhaique venía en la misma licitación que Isla Huar y Lago Castor. Consultado acerca de la licitación de las obras, dijo que no vio los presupuestos y que no tenía intervención, sólo los conocía cuando se le entregaba la carpeta del proyecto respectivo. Respondió que en su opinión los presupuestos eran insuficientes debido a que correspondían a proyectos tipo, o sea, sin consideración de la condición geográfica u otros aspectos propios de cada proyecto, situación que le hizo presente a Bustos Morgado, quien desestimó su reparo señalándole que en ese caso el proyecto superaría cierta cantidad de UTM

(unidades tributarias mensuales), con lo cual el proyecto pasaría a la Contraloría General de la República. Respondió que sí conoció a Alejandro Puga Gordón, era el encargado de la zona geográfica. Esta persona también le dio cuenta a Bustos de la situación mencionada. **Se le exhibió el documento N° 6** de sus medios de prueba, el cual reconoce, señalando que su *N° es el 6086835, de CPR Alberto Puga a CPR Parraguez, quien estaba a cargo del paquete licitatorio; informativo a Christian Bustos Morgado, José Reveco, Fabián Gutiérrez, Andrea Campusano, Juan Socías, Francisco Pizarro; asunto: reposición retén Villa Ortega; firma: Alberto Puga Gordón.* Explicó que el asunto decía relación con el envío de una lámina técnica que sirviera de modelo y ejemplo de los disipadores de nieve, para que se incluyera en la licitación de manera aclaratoria, precisando que no sabía si se incluyó en la licitación, pero que las obras si se hicieron. Consultado por la empresa FEALFRA, indicó que el representante legal de la empresa era Osvaldo Tobar Fernández, dedicada a la reposición de cuarteles policiales. Explicó que cuando regresaba de las comisiones demoraba entre 1 a 3 días en hacer los informes técnicos. **Se le exhibió el documento N° 3**, de sus medios de prueba, lo reconoce y señala que se trata de una Resolución Exenta, N° 493, de 6 de mayo de 2011, por la cual se designaron ITO en 25 proyectos y a él en 12 de ellos, aunque no los correspondientes a este. Consultado por el cargo de Félix Flores Santis, respondió que ésta era el jefe del Departamento de Cuarteles, el cual estaba al tanto de su carga de trabajo. **Se le exhibió el documento N° 11**, de sus medios de prueba, el que reconoce, señalando que *se trata de un documento electrónico, N° 83809999, del Departamento de Cuarteles dirigido al Director Nacional de Logística; informativo: Teniente Carla Salinas, Salamanca, Francisco Pizarro, sección financiera E3, Campos y Oficina Contable; recepción obra: observaciones y obras adicionales en obras licitadas anteriormente, de fecha 14 de noviembre de 2012, firmado por Félix Flores Santis.* A continuación se le interrogó respecto de la entrega de los terrenos, respondiendo que en el paquete de licitaciones se dispuso que el sería el ITO de Villa Ortega; que lo primero que debía hacerse era la entrega del terreno en el lugar, pero que el Comandante Bustos Morgado dispuso que la entrega se hiciera en Santiago. Cuando posteriormente concurrió al terreno, después de la tramitación del estado de pago, se dio cuenta que el terreno había sido entregado con anterioridad por alguna jefatura del Departamento y el jefe de la zona, lo que según Bustos se hacía para que la empresa ganara tiempo, ya que el acto administrativo podía demorar alrededor de diez (10) días. De lo anterior dio cuenta al regresó de la Comisión, con señalamiento de que la empresa ya tenía instalada las obras. Lo mismo

ocurrió las obras de Lago Castor y tenencia Alto Coyhaique. Por tanto, a veces se pagaba antes de la visita. **Se le exhibió el documento N° 574**, de las pruebas del ministerio público, el cual reconoció, refiriendo que se trataba de un *acta de entrega de terreno, N° 046, de 12 de diciembre del año 2012, en la que se señala que se procede a hacer entrega a la empresa CGM por las obras de Lago Castor, a Cristian Gutiérrez Martínez, firmando Francisco J. Pizarro Dasso, ITO, L1*. Añadió que antes de esta entrega ya se había pagado el primer estado de pago, lo cual había sido ordenado por el Comandante Bustos Morgado, y no él pues no tenía facultad para ello. Precisó que el estado de pago, para su tramitación, requiere más que una firma y recepción de factura, siendo necesario otras cosas, como por ejemplo estar al día en el pago de las cotizaciones, haber enviado una lista con el nombre del personal que trabajaría en la obra. **Se le exhibió el documento N° 139**, de la prueba de la fiscalía (acta de entrega de terreno N° 45), el que el acusado reconoce y refiere *que se trata de otra acta de entrega, de fecha 13 de diciembre de 2012, en la cual se señala que el ingeniero que suscribe, procede a hacer entrega de terreno a CGM por trabajos de reposición de la tenencia Alto Coyhaique*, en la cual se hace presente que el contratista debe enviar una lista del personal que trabajará en la obra. De manera semejante a Lago Castor, los pagos de los estados de pago, por disposición de Christian Bustos Morgado, se hacían con antelación a la entrega del terreno y sin los antecedentes que eran requeridos (cotizaciones previsionales, seguros, etc.). La factura de la empresa sí constaba, y estaba firmada por él, por Bustos y Félix Flores. Señaló que visitó el terreno dos o tres semanas después. **Se le exhibió el documento N° 300**, de los medios de prueba de la fiscalía, el que el acusado reconoce, y refiere que se trata de un documento de fecha 17 de diciembre de 2012, *carta solicitud dirigida a Francisco Pizarro Dasso, firmado por Cristián Gutiérrez Martínez, gerente General de CGM Ltda., en la cual se solicita pago del estado de pago N°1*. Refirió el acusado que existía discordancia con la fecha de visita a terreno ya que ésta se hizo con posterioridad, no obstante habersele dado curso al estado de pago por orden verbal de Bustos Morgado, no pudiendo él dejar de cumplir lo ordenado, y sin perjuicio de haber conversado la situación con el Coronel Félix Flores, quien le manifestó que tenía que cumplir con lo ordenado por el Comandante Bustos. **Se le exhibió el documento N° 301**, de los medios de prueba de la fiscalía, consiste *en un resumen de los estados de pago del proyecto tenencia Coyhaique Ato, adjudicada a la empresa CGM Ltda.: solicitud de pago por \$51 millones y más, pago que ordenó el Comandante Bustos Morgado; firmas de Pizarro y del Coronel Félix Flores*. Le señaló a su defensa que este estado de

pago se había cursado sin que él hubiera ido antes al terreno. **Se le exhibió el documento N° 303**, de la prueba del ministerio público, el cual reconoció, refiriendo a su respecto que *se trata de un informe técnico, N° 1.323, de 27 de diciembre 2012; proyecto: Alto Coyhaique; objetivo: pago primer estado de pago, de 27 de diciembre de 2012, por \$46 millones y fracción*. Infrascrito aprueba el estado de pago, sin embargo la visita habría sido posterior al 13 de diciembre, o sea, antes del primer pago. Aclara que los informes técnicos eran proforma, en los que sólo se cambiaban los montos. Por este pago la empresa no le ofreció ni él le solicitó pago alguno, como tampoco Bustos Morgado. Respondió que había abierto su cuenta corriente y también las cuentas de su familia, además de otros medios o antecedentes que fueren necesarios para la investigación. En cuanto a Lago Castor dijo haber emitido informe técnico. **Se le exhibió el documento N° 559**, prueba de fiscalía, consistente en un *informe técnico de fecha 27 de diciembre de 2012; objetivo: primer estrado de pago, factura N° 31 de fecha 27 de diciembre de 2012, CGM por \$45 millones y fracción, acta de entrega de terreno 13 de diciembre 2012; inicio de obras misma fecha, 12% de avance de obra; aprueba estado de pago por encontrarse conforme al avance de la obra; firma Francisco Pizarro Dasso, oficina L1*. Refirió que con posterioridad al primer estado de pago concurrió al terreno, después del 27 de diciembre de 2012, para lo cual solicitó una comisión al Comandante Bustos a fin de visitar esta obra y también Alto Coyhaique y otra más. Lo anterior, mediante solicitud escrita. **Se le exhibió documento N° 898**, de la prueba de la fiscalía, el cual reconoce y señala que se trata de una *solicitud de comisión para fiscalización de retén Villa Ortega, Alto Castor y Coyhaique Alto, dirigida al subteniente Luis Parra, fecha 2 de enero de 2013, firmado por Francisco Pizarro Dasso*. Visitó la primera obra el 8 de enero de 2013. Indicó que en sus visitas tomaba fotos de las obras y que de ellas hizo entrega en el sumario administrativo y en la investigación de la fiscalía. Los viajes de fiscalización debían hacerse una vez al mes. Para efectuar los informes técnicos disponía, en promedio, sólo de algunas horas, atendida la carga de trabajo General. Preciso que CGM siempre ejecutó los trabajos con muy buena calidad, pero el perjuicio era la dilación en el tiempo, o sea, que entre uno y otro estado de pago no podían alcanzar el avance informado. El proyecto Villa Ortega se terminó con sus recursos propios, \$160.000 más \$170.000 por sobre precio para el traslado de materiales. En el caso de Isla Huar la situación fue algo semejante, porque si bien tenía menos problemas geográficos, presentaba la complicación de que la obra debía efectuarse en una isla. Cuando llegó en la visita N° 1, la obra estaba en ejecución, por lo que se adelantó la entrega. Existían

instrucciones del Director Nacional de Logística, en orden a que al término de la comisión debía emitir un informe detallado de la visita y del estado de avance de las obras, lo que sin embargo no se hizo, sin perjuicio de las constancias fotográficas que dejaba de todas las obras que visitaba. En algunas Comisiones participó Bustos Morgado y Félix Flores. En las actas de recepción el acusado no intervenía, sin perjuicio de haber concurrido con la Comisión. Las fotos fueron ofrecidas a fiscalía, primero al fiscal Gajardo, segundo a uno de apellido Sáez, y a la fiscal Constanza Encina, sin perjuicio de otras dos veces en el sumario. **Se le exhibió el documento N° 37, de la prueba de la defensa, NCU 16536953, de 10 de octubre de 2013, de Christian Bustos Morgado. Jefe de Departamento de Gestión y Ejecución de Proyectos dirigido a CPR Francisco Pizarro Dasso, asunto retén Villa Ortega, detecta observaciones que hizo notar el jefe de la prefectura de la respectiva zona.** Consultado acerca de si había observado irregularidades en la empresa CGM, respondió que sí, en lo que dice relación el avance de las obras, nunca se pudo poner al día en el avance entre un estado de pago y el siguiente, además de no entregar la documentación técnica de la obra, como por ejemplo, estudios de suelo, calidad de los materiales, rotación de personal. De ello fue informado Bustos Morgado. Se le **exhibe documento N° 29, de la prueba de la defensa (NCU 15626698, de fecha 5 de septiembre de 2013):** señala que *se trata de un documento electrónico, del Teniente coronel Christian Bustos Morgado, jefe de Gestión, Coordinación y Ejecución del Departamento de Cuarteles, a Francisco Pizarro Dasso; asunto: fiscalización de servicio de salud, fecha de 5 de septiembre de 2013, con seis (6) referencias de trazabilidad; se constituyó en las obras del nuevo cuartel de Villa Ortega, con faenas a cargo la empresa CGM, don Roberto Alvarado, inspector de la Inspección del Trabajo, quien decretó la suspensión de las obras por las malas condiciones higiénicas; asimismo, e la misma fecha, concurre posteriormente Daniela Gallardo Hernández, fiscalizadora del servicio de salud de Aysén, en compañía del fiscalizador anterior, quien reiteró la paralización de la obra, y solicitó el nombre del ente contralor del encargado de la obra.* En este documento consta que Christian Bustos Morgado le solicita a él estudiar los cursos de acción a seguir con la finalidad de resguardar los intereses institucionales y el cumplimiento de los plazos. Señaló el acusado haber cumplido lo instruido, para lo cual tomó contacto con la empresa CGM, informándole que debía solucionar las dificultades porque de lo contrario se harían efectivas las multas.

Se le exhibió el documento N° 18, prueba de la defensa (NCU 9706731, de 14 de enero de 2013). Acusado dice que lo reconoce y señala que se trata de una *comunicación electrónica institucional, a Christian Bustos Morgado, jefe; informativo para Parra y otros; asunto: solicita comisión de servicio para varios profesionales, él incluido; fecha 21 al 25 de enero de 2013; objetivo, realizar la entrega de terreno de Isla Huar, y además la fiscalización de otras obras a fin de proceder a los estados de pago; firma Francisco Pizarro Dasso*. Señaló el acusado que la entrega se hizo, en Santiago y con anterioridad a que los profesionales efectuaran la visita; cuando se constituyó la Comisión la empresa ya estaba operando; de la entrega no se levantó acta; tampoco vio alguna acta que diere cuenta de la entrega (supongo que Bustos Morgado lo hizo telefónicamente). **Se le exhibió el documento N° 901**, prueba del ministerio público, señala que lo reconoce y que *se trata de un acta de entrega, N° 1, de 18 de enero de 2013, en la cual se indica que Francisco Pizarro Dasso de dotación L1, procede a hacer entrega a CGM por trabajos de reposición retén Isla Huar; se indica que la empresa debe enviar documentación varia dentro de 7 días; firmas de Cristián Gutiérrez Martínez, la que no reconoce, en el pie de firma dice “por”, y de Francisco Pizarro Dasso*. Del acápite **otros medios de prueba de la fiscalía**, se le exhibieron fotografías, a la vista de las cuales declaró: las que se exhiben: *estado final cuartel Villa Ortega, previas a la concurrencia para la recepción de las obras, o en su defecto, la Comisión; 2ª, cuartel Villa Ortega: cierre perimetral, pavimentos exteriores sin terminar, empalme eléctrico no conectado, entre otras observaciones; 3ª, Isla Huar, estructura correspondiente a la materialidad base del destacamento (obra gruesa, puntales, serchas, paneles); 4ta, caballerizas del destacamento de Isla Huar, sólo estructura de madera; 5ta, corresponde al estado de las obras a la fecha en que concurrió la Comisión a la recepción de la obra de reposición Villa Ortega, a cargo de Bustos Morgado, constituida por la arquitecto Campusano y otros, en la que consta que no está materializado el empalme eléctrico por lo que las obras no pueden funcionar; 6ª., otra vista del retén sin terminar exteriores; 7ª, Coyhaique Alto, obra en estado de ejecución (muros primer y segundo piso con paneles); 8ª, casa anexa obras Lago Castor, incompleta; 9ª, destacamento Lago Castor con primer piso en pie y palillaje en la techumbre, señalando el acusado que a ese momento restaban sólo dos semanas para que se cumpliera el plazo para la entrega de la obra; 10ª, casa anexa destacamento Lago Castor, se aprecia que los paneles están instalados pero faltaban la instalación de aislantes y otros. Las fotos precedentes quedaron registradas en su computador*. Relató que cuando fue a retirar sus pertenencias, terminado el

sumario institucional, no estaba su computador, diciéndosele que había sufrido un desperfecto y que se lo habían llevado. Se le **exhibió el documento N° 46, prueba de la defensa** (Oficio N° 50): consultado por su tenor y contenido señaló que lo reconocía, que se trataba de un Oficio Ordinario de él dirigido al Departamento de Cuarteles, firmado por él; aparece recepción de oficina de partes, Sabina Varas: estado ejecución obras de CGM, a cargo de cuatro obras: *Villa Ortega*, ejecución 100%; Isla Huar, en ejecución, contrato directo entre Carabineros de Chile y la empresa Grossman, de fecha 27 de noviembre de 2013, autorizado por Resolución Exenta N° 941, de fecha 15 de noviembre de 2013, por 19 millones de pesos y fracción, plazo 50 días para ejecución; *tenencia Coyhaique Alto*, en ejecución por medio de trato directo entre Carabineros de Chile y la empresa Grossman, suscrito el 27 de noviembre de 2013, por Resolución Exenta N° 940, de 15 de noviembre de 2013, de la Dirección de Logística de Carabineros; Retén Lago Castor, obras paralizadas porque la empresa CGM las abandonó, disponiéndose el término anticipado del contrato, manteniéndose en custodia el 5% del precio de la obra y el último estado de pagos, sin perjuicio de otras retenciones. Respecto del informe que contiene este Oficio, señaló el acusado que éste le fue ordenado por el Coronel Águila. **Se le exhibió el documento N° 47** (prueba de la defensa), respecto al cual el acusado señaló que lo recuerda, indicando que se trata de una información que le ordenó el Coronel Edgardo Osses, después del cual lo separó de las obras, a saber: Oficio N° 50, de 9 de enero de 2014; estado de ejecución de las obras, estado actual de pagos conforme estado de las obras, estado de ejecución obras por trato directo, informar vínculos de CGM y César Rojas y Cristián Gutiérrez, y la misma información en relación a la empresa Grossman. Señaló que levantó informes parciales respecto de Villa Ortega (v.gr., calefacción). **Se le exhibió el documento N° 48** (prueba de la defensa), respecto del cual declaró que lo reconocía, se trata de un documento de dos (2) páginas, de Francisco Pizarro Dasso al Departamento de Cuarteles L1, con reparto a terceros; fecha 3 de febrero de 2014; asunto: *Ud. procederá a ratificar lo informado el día de hoy en reunión*; responde diciendo que el *itemizado* no se correspondía a la realidad, sino que al estado de pagos pendientes, lo anterior conforme instrucciones que le impartía Bustos Morgado. Contiene planilla excell de las obras Coyhaique Alto. Consultado, señaló haber solicitado al mando información relacionada con la designación de ITO y del proceso de licitación, información que no le fue proporcionada.

Interrogado por la fiscalía respondió primeramente que su jefe directo era Christian Bustos Morgado; que él llegó a trabajar fines del año 2008; que había una forma de distribución distinta, y que su función era *mantención y remodelación*; su sección se llamaba mantención y remodelación; en la nueva estructura Bustos Morgado era el único encargado de Proyecto, Coordinación y Ejecución. Señaló el acusado que él se desempeñaba en el área de fiscalización, sin perjuicio de otras funciones que Bustos le asignó de manera verbal. Los ITO eran designados por Resolución que preparaba el Departamento de asesoría jurídica, la que posteriormente tramitaba directamente Christian Bustos, inclusive llevando la resolución al Director Nacional del Logística para su firma. En esa época el Directo era Jorge Rojas Lander. Señaló que era falso que él haya tenido que reportar directamente a Rojas. Las entregas de terrenos las hizo todas en su oficina. Reconoció que efectivamente emitió informes de fiscalización falsos, pero que lo hizo por instrucciones de Bustos Morgado, en el sentido de hacer calzar el estado de pago con un avance de obra que no se correspondía con la realidad. Consultado por la participación del Coronel Flores, respondió que éste no era entendido en la materia, y que era Bustos Morgado quien dirigía el Departamento; él era quien ordenaba efectuar pagos antes de la fiscalización, lo que se podía verificar contrastando la fecha del estado de pago con la fecha de visita de fiscalización a terreno. Al efecto. **Le exhibió el documento N° 911**, prueba de la fiscalía, consistente en una *constancia en el reverso, de una factura por \$19.306.001, IVA incluido, constancia que valida el pago del estado de pago, firmada Christian Bustos y él*. El monto de los pagos los determinaba Bustos Morgado. Negó el acusado haberse coordinado directamente con Cristián Gutiérrez respecto del monto que debía incluirse en el estado de pago, señalando que era *el mando quien lo decidía y que luego se le comunicaba a él los montos del estado de pago*. Esto ocurría con todos los ITO de los distintos Departamentos. Convino con la fiscalía en que los informes falsificados, con miras a gastar el presupuesto asignado a este ítem, no siempre correspondían al final del año, pues había algunos fechados de principios del año siguiente. Al efecto, **le exhibió el documento N° 318**, informe técnico 1.107, de 1° de febrero de 2013, el que reconoce, señalando que corresponde a la tramitación del segundo estado de pago del proyecto Alto Coyhaique: *evaluación de las obras 17% de avance, se recibe el segundo estado de pago, se corresponde con el estado de avance. Firma Francisco Pizarro Dasso*. Consultado si Bustos tenía un trato diferente hacia César Rojas, respondió que sí ya que lo atendía personalmente en su oficina y le servía café. Bustos se reunió varias veces con Rojas. Asimismo, varias veces Bustos le

ordenó trasladarse con él al Mall Florida Center a fin de entrevistarse Bustos con su amigo César Bustos. Indicó que desde que Bustos llegó al Departamento cambió de vehículo dos veces, siempre de alta gama. Además viajaba al extranjero, y una vez viajó a ver un partido de football de Manchester City. **Le exhibe correo electrónico** (N° 9, otros medios de prueba), de 10 de mayo de 2013. Consultado el acusado, respondió que correspondía a un correo suyo, dirigido a CGM, a Cristián Gutiérrez: “Estimado, necesito concretar una reunión urgente contigo para un proyecto de construcción de una casa en Chicureo”; dirigido a CGM; motivo: trabajo particular. Se **le exhibe además el documento N° 1.009** (antes incorporado), lo reconoce, NCU 12985571, Departamento de Cuarteles L1 a sección de Gestión Financiera N°3: *fecha de comisión de servicio: Salida 4 de junio y regreso el 7 de junio en horas de la tarde; encargado Christian Bustos Morgado, objetivo: recepción Villa Ortega y revisión de obras Coyhaique Alto y Lago Castor; concurren Campusano, Nadal, Salamanca, abogado Isidro Martínez, y otros, además de él. Le exhibió fotografías contenidas en el N° 11* (acápites otros medios de prueba): retén Villa Ortega, estado en que se encontraba el día en que se visitó la obra; el revestimiento exterior forma parte de una partida; faltaba alrededor de un 15% a lo menos para el término de la obra, ese pago se realiza cuando el trabajo esté totalmente terminado, pero se puede hacer también si la recepción dice “sin observaciones”. **Le exhibió correo electrónico** (N° 9, otros medios de prueba), de Francisco Pizarro Dasso a Alcides Yevenes Sanhueza, asunto Re: RV: Calefacción Retenes XI Región, de 27 de septiembre de 2013. Aclaró que *este correo se puso en conocimiento de Bustos y de Gutiérrez*. Este proyecto tuvo un addendum consistente en instalación de calefacción, lo que hizo ampliar el plazo de terminación, el cual debía terminar en mayo pero por el addendum se amplió al 20 de junio, fecha a la cual debía estar terminada la obra, y que en caso contrario correspondía rechazar la recepción, sin perjuicio del cobro de multas, las que sin embargo no se cobraron. Negó que de él dependiera el cobro de las multas. *La comisión debía rechazar la recepción y proceder al cobro de multas*. El día que concurrió la Comisión a *repcionar* (recibir) esta obra, Bustos se molestó mucho al ver el estado en que se encontraba, desconociendo el motivo de ello, sin perjuicio de haberlo hecho saber a los miembros de la Comisión que debían firmar el acta de recepción. Bustos presionó a los miembros para que firmaran el acta con observaciones menores. El acta se firmó el día 7, a lo cual Bustos decía que eran tres días ganados para la empresa y a la vez menos días multas. Señaló que a ese plazo debían sumarse los diez días que se le daban para solucionar las observaciones, más el tiempo

que transcurría hasta la recepción material de la solicitud, esto último en atención a que no había constancia de la fecha de ingreso y, además debía sumarse la concurrencia de una nueva Comisión y visita a terreno. Esto último no lo hizo la Comisión sino que Guillermo Nadal, conforme dispuso Bustos que se hiciera. Al regreso de la visita Nadal le informó verbalmente que las obras seguían en el mismo estado, información que no le ocultó a Bustos, agregando que *nadie le ocultaba información a Bustos, era él quien la ocultaba*. **Se le exhibió el documento N° 1.012**, de la prueba de la fiscalía (antes exhibido por la defensa de Pizarro): *de Francisco Pizarro a Luis Parra, informativo a Bustos y otros; constatación de observaciones menores: confirma fecha de los pasajes aéreos, 17 al 18 de junio de 2013; se envía a Nadal a constatar lo que la Comisión debía verificar. Nadal les informó a su regreso que obras continuaban en el mismo estado. Tres días después de su regreso se firmó el acta de recepción sin observaciones, y 180 días después se procede a la recepción definitiva*. El cobro de las retenciones fue el 15 de julio de 2013. **Le exhibió el documento N° 1.022**, *Oficio 1046 de 17 de julio de 2013, mediante el cual se solicita proceder con el pago de la factura N° 61, de 9 de julio de 2013 a CGM por \$24 millones de pesos y fracción, firma Patricio Bustos Morgado; adjunto se remito factura de adendum contrato de Villa Ortega, firma Bustos Morgado*. Sin embargo, al 15 de junio de 2013 el retén Villa Ortega no estaba terminado. Dijo el acusado que no recordaba si el 28 de junio se había tramitado el pago de otros dos estados de pago, Alto Coyhaique y Lago Castor. Se buscó **refrescar su memoria** con la exhibición y lectura parcial de una declaración anterior efectuada por el acusado, de 28 de mayo de 2014, previo reconocimiento de su firma. Luego de leída parte de su declaración respondió que *sí, que los dos estados de pago se efectuaron el 28 de junio de 2013, que de ello Bustos Morgado tuvo pleno conocimiento, siendo los pagos por los montos que ordenó el mismo Bustos, y ello conforme a lo que le señaló César Rojas Gaete*. Dijo no recordar cuando se hizo pago de las retenciones, para lo cual **se le exhibe la misma declaración anterior**, la que una luego de su lectura respondió que *el 15 de junio de 2013 se ordenó el pago de las retenciones de Villa Ortega, esto porque ya se había firmado el acta de recepción de esas obras*. Lo anterior estuvo en conocimiento de Bustos, no estando terminada la obra. Entre el 19 y 23 agosto señaló haber concurrido en Comisión por orden del mando a fin de verificar todo lo que faltara para el término de la obra, debiendo concurrir posteriormente con personal de la institución, materiales de trabajo y herramientas, estando presente César Rojas. Dijo no recordar que en la Comisión hubiere participado Andrea Campusano y el suboficial mayor Aurelio

Zúñiga, con quienes fue a Coyhaique Alto y Lago Castor, *verificando que el avance de las obras era prácticamente nulo, y que había un decreto de paralización de las obras por parte de la seremi de salud, que había poco personal trabajando*. Al regreso los tres le informaron verbalmente a Bustos. Entre el 23 y 24 de septiembre concurrió en la **Comisión que viajó a Isla Huar**, de la cual en esta oportunidad formó parte Félix Flores. La obra tenía fecha de término el 19 de agosto de 2013, por lo que al 23 y 24 de septiembre el plazo se encontraba vencido hacía más de un mes, verificando tanto él como Flores que las obras no estaban terminadas. Consultado respecto de la boleta de garantía señaló que Luis Parra procedió a su devolución por orden expresa de Bustos Morgado. Respondió que, efectivamente, el 1° de octubre de 2013 firmó *acta de entrega uso de Villa Ortega*, lo que hizo por instrucciones de Bustos Morgado. **Se le exhibió el documento N° 1.051** (acta de entrega uso N° 72, de 1° de octubre de 2013, obra Villa Ortega, sin observaciones, firmada por Pizarro y el jefe de retén, Javier González Mancilla, a quien se le hace entrega). Hizo presente que el suboficial no quería firmar porque había trabajos pendientes, pero luego de que Bustos habló telefónicamente con él aceptó a firmar la recepción. El 10 de octubre la Prefectura de Aysén envió una comunicación al Departamento de Cuarteles haciendo presente que había trabajos pendientes, tales como puertas mal instaladas, cubiertas de granito, empalme eléctrico inconcluso. Señaló que Bustos ordenó proceder al cobro de boletas de garantía pero ellas ya habían sido devueltas anteriormente por instrucciones del mismo Bustos. Señaló que en la semana del 21 de octubre de 2013, hubo una reunión en el Departamento de Cuarteles, organizada por Christian Bustos, a la que asistieron el amigo de éste, César Rojas, Cristián Gutiérrez Martínez, el subteniente Parra Ávila y él. Señaló que no asistieron Flores ni el jefe de la Dirección Nacional de Logística. En esa reunión Bustos indicó a Gutiérrez que debían enviar nuevas boletas de garantía, porque de lo contrario él iba a terminar el contrato, ante lo cual Rojas le dice a Gutiérrez que la solución era que le traspasara la empresa a su nombre. Posterior a esa reunión Bustos lo citó a su oficina a una reunión en la cual estuvo presente César Rojas. Allí Bustos le ordenó la tramitación de un pago, sin mostrar preocupación por el hecho de que las obras aún no estaban terminadas. Respondió que Bustos le dijo en esa reunión que Rojas estaba tramitando la inscripción de una sociedad de nombre Grossman S.A. Señaló que en la semana del 21 de octubre aún no se había puesto término de manera anticipada a los contratos de obras correspondientes a Isla Huar, Lago Castor y Coyhaique Alto.

Consultado acerca de la Comisión que revisó la finalización de la obra de Villa Ortega entre el 11 y 21 de noviembre de 2013, dijo no recordar, por lo que se le **exhibió el documento N° 637**, prueba de la fiscalía (documento electrónico NCU 17194904, del Departamento de Cuarteles L1, de 5 de noviembre de 2013, solicitud de pasaje aéreo). Lo reconoce y da lectura: *Departamento de Coordinación y Ejecución a Director Nacional de Logística: solicitud de pasaje aéreo para Christian Bustos, Pizarro, subteniente Luis Parra Ávila: en virtud de trabajos de normalización gestionar la pronta recepción de ese destacamento, comisión de Lunes 11 al viernes 22: pintor, eléctrico, ingeniero Pizarro, Parra Villa Ortega y otros cuatro funcionarios: cerrajero, carpintero, albañil y carpintero. Remite Jefe de Departamento, Félix Flores Santis, a Dirección de Logística; en caso que se acceda se solicita el traslado desde aeropuerto hasta la obra). La comisión la dispuso Bustos, aunque la firmó Flores.* El personal solicitado para la Comisión pertenecía al área de mantención de cuarteles, quienes no estaban a cargo de Bustos sino de una funcionaria de apellido Salinas. Señaló que ese personal está destinado a solucionar problemas puntuales, tanto en Santiago como en regiones. Dentro de sus funciones no estaba el dar término a obras licitadas. Además de pasajes se gestionaron viáticos y traslado de materiales. Consultado si Bustos Morgado pagó el término de las obras con sus recursos, respondió no recordarlo. **Se le exhibe su declaración y da lectura:** *“entre el 28 y 31 de octubre de 2013, Coronel Flores y Comandante Bustos le ordenaron solicitar la conformación de una comisión de servicio a la XI región, para trasladarse junto a un grupo de personas del Departamento de Cuarteles, ya que no existía boleta de garantía de fiel cumplimiento”.* Respondió que cumplió generando el documento electrónico precedente. Los materiales fueron sacados bajo acta firmada por Flores ya que Bustos no quiso firmar. Cuando llegaron a las obras éstas se encontraban en el mismo estado que la última vez que concurrió, o sea, con ítems pendientes. **Se le exhibe N° 11, de otros medios de prueba**, set de fotos: 0379 (retén Villa Ortega, pendientes trabajos de cierre perimetral, compactación, limpieza, instalación de pavimento perimetral, disipadores de nieve, cámaras eléctricas, cámaras de alcantarillado, empalme eléctrico, entre otros); 0370 (foto de costado de la casa anexa, esto es, vivienda de 90 m2 destinada al personal que tenga familia); 0371 (vista posterior, partidas inconclusos semejantes a la anterior, los cuales no forman parte de un trabajo de hermoseamiento, los que en todo caso no existen); 0374, corresponde a parte del terreno aledaño al destacamento, a las caballerizas, se observan ductos eléctricos y de canalización de aguas no están instalados; 0390, cocina del destacamento, totalidad del

mobiliario incompleto (cubiertas de granito, instalación de gas, lavaplatos, grifería, puertas, etc.); 0405, baño del calabozo del cuartel sin terminar; 0407, foto del interior del calabozo en que se aprecia un pileta recolectora de agua para limpieza, pintura del calabozo, pavimento bruto, entre otros); 0410, obras exteriores de mejoramiento del terreno (relleno granular, compactación); ductos eléctricos); 0433, exterior de la casa anexa en la que se ve que aún se estaban efectuando trabajos de ensamblaje, mejoramiento del terreno, relleno granular, entre otros). Señaló el acusado que estas fotos las tomó después de la recepción sin observaciones, pagada la totalidad de la obra y devuelta la boleta de garantía. En todas éstas actuaciones participó permanentemente Bustos Morgado, y todo ello después que él fue a Villa Ortega y lo vio con sus propios ojos, lo mismo que Flores, quien fue en dos oportunidades a supervisar obras; Gutiérrez Martínez no estuvo en terreno sus dos últimas: Rojas Gaete estaba en conocimiento porque él facilitó el camión y porque solicitó una retroexcavadora y envió materiales que faltaban para el término de la obra, además del pago del empalme eléctrico. Los diez días de la comisión no eran suficientes para terminar la obra. Añadió que de la obra Lago Castor se retiró materiales, tales como ductos, fragües, cinta, tuberías, los que se encontraban dentro de un contenedor en la obra de Lagos Castor. Otros medios de prueba, N° 11, fotos “estado final : 0751, retén Isla Huar; 0755, caballerizas Isla Huar; 0756 (bodega y oficina de la empresa y a un costado parte de la casa anexa; 0763 interior de la casa anexa, living comedor, sin cielo, si revestimiento muros, etc.); 0767, isla Huar, calabozo con albañilería en bruto, y cercas a la vista, entre otras; 1034, destacamento Villa Ortega, casa anexa; 1079, Coyhaique Alto, tenencia; 1083, Coyhaique Alto, tenencia; 1085, sobre cimimiento, puntos de instalación eléctrica de las caballerizas, sólo están los sobre cimimiento; 1089 y 1099, cocina, baño utilizados por CGM en Coyhaique Alto, las cuales Bustos Morgado se les facilitó; 1090, 1103 obras inconclusas de Coyhaique Alto; 1105, interior de edificación en bruto; 1121, tenencia de CA, bodega en que se guardaban los materiales; 1131, al parecer caballerizas del mismo destacamento; 1135, interior del destacamento de Lago Castor en bruto; 1139, interior del destacamento de Lago Castor, zona de cocina; 1140, 1149 y 1154, corresponden a Lago Castor, destacamento y caballerizas, interior del destacamento; 2061, casa anexas institucionales que existían en el lugar, dos de las cuales les fueron facilitadas por Bustos a la empresa; 2115, caballerizas; 2131, destacamento de Lago Castor con techumbre incorporada. En resumen, este era el estado de las obras, mismo estado en que las recibió la empresa Grossman, pero de las cuales Lago Castor no fue terminada.

En cuanto al hecho 2

Exhibe imágenes contenidas en pendrive, otros medios de prueba, N° 28 (cadena de custodia N° 2098491; fecha entrega, 17 de octubre de 2018, aparece su nombre, firma y RUT; señala que la cadena de custodia contiene en su interior un pendrive, y que corresponde al que él le entregó a la fiscal (Constanza Encina): *carpeta investigación*. Solicita y se le autoriza a la fiscal **exhibir documento N° 27**, de sus medios de prueba (copia de escritura de terminación de la Sociedad Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara EIRL y Constitución de sociedad de por acciones): *escritura pública de 29 de febrero de 2012. Juan Soto Jara vende en \$3.000.000 su 87% de participación en la empresa, a Osvaldo Tobar Fernández, con lo que la sociedad queda constituida con Juan Soto Jara, con un 5%, y Tobar con un 95%; por lo que la sociedad se transforma y constituye en una sociedad por acciones, de nombre FEALFRA, cuyo giro será la construcción y todo lo relacionado con esa actividad Osvaldo Tobar, José Vargas Silva y Juan Alejandro Soto Jara*. Consultado si conoce a José Vargas Silva, respondió que no. **Se le exhibió el documento N° 34**, (repertorio 3783; notaría Gabriela Gervasio, reducción a escritura pública, 23 de julio de 2012); consultado el acusado dice que lo reconoce porque está dentro del mencionado pendrive: *reducción y acta de sesión directorio FEALFRA, 23 de julio de 2012, comparece Osvaldo Tobar y expone que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el acta de directorio de la sociedad FEALFRA: se ratifica a Osvaldo Tobar como presidente del directorio*. Tres firmas ilegibles, Miguel Torrejón, Osvaldo Tobar, Francisco Fuentes Vílchez. **Se le exhibe a continuación el documento N° 33** (*copia de compraventa de acciones, 1° de mayo de 2012, Juan Soto Jara y Miguel Enrique Torrejón Mendoza., Viña del Mar: Soto vende, cede y transfiere a Torrejón 1.300 acciones de la sociedad por acciones FEALFRA, el precio es 3.000, Firman Rojas y Torrejón. 4 de junio de 2012*). Señaló que no supo de estas vinculaciones sino hasta que conoció el sumario, sin perjuicio de las licitaciones que se adjudicaban. Esta información la obtuvo cuando se trasladó al Departamento de ejecución, encontrando este CD en una de sus cajas, suponiendo que alguien la puso allí.

Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado, se le exhibió el **documento 903** de las pruebas de la fiscalía, señala que se trata de una *copia simple de constancia de anverso factura N° 34, rece de 31 de enero de 2013*,

estado de pago N° 2, proyecto reposición Retén Villa Ortega, tramitado el 1° de febrero de 2013, firman él, otros y Christian Bustos Morgado como jefe Departamento de cuarteles subrogante. Se le exhibe también el documento N° 954, el cual reconoce y señala que corresponde a una constancia semejante a la anterior, pero esta vez respecto de la factura N° 44, de fecha 27 de marzo de 2013, de la constructora CGM, obra Coyhaique Alto, 28 de marzo de 2013, firman Andrea Campusano, Francisco Pizarro, Christian Bustos Morgado, jefe área de coordinación y ejecución, Félix Flores Santis, jefe de Departamento de Cuarteles. Se le exhibe el documento N° 1004: lo reconoce y señala que corresponde constancia factura semejante CGM por 53839430, factura N° 54, sexto estado de pago, 70% de avance, proyecto Lago Castor, julio de 2013, firma él, Christian Bustos, jefe área Coordinación y Ejecución, y Félix Flores Santis, jefe de Departamento de Cuarteles. Consultado respecto de la participación de Bustos en las licitaciones, señaló que éste trabajaba desde el inicio del proyecto, Departamento de Arquitectura, hasta el final del proceso de licitación. En cuanto a los informes técnicos se le exhibió el documento N° 875: a) informes de Lago Castor: los reconoce y refiere que corresponde al primer estado de avance para el primer estado de pago, de 27 de diciembre de 2012, \$45.527.806. Consecuentemente, el suscrito aprueba el estado de pago el cual se encuentra conforme al estado de avance de la obra, firma Francisco Pizarro Dasso; N° 106, de 1° de febrero de 2013, segundo estado de avance para el segundo estado de pago, factura ídem, aprueba estado de pago el cual se encuentra conforme al estado de avance de las obras, \$22.863.994, firma él; N° 200, 1° de marzo de 2013, misma conclusión, \$38.332.575, firma Francisco Pizarro Dasso; N° 309, de 1° de abril de 2012, objetivo recepción cuarto estado de avance para cuarto estado de pago, aprueba estado de pago, se encuentra acorde con el estado de avance de las obras, \$35.395.931, firma Francisco Pizarro Dasso. Consultado acerca de los porcentajes de avance que aparecen en los informes, respondió: 12%, 12%, 10% y 36%, respectivamente; N° 360, de 18 de abril de 2012, mismo objetivo; quinto estado de pago, 50% de avance, \$53.278.216; N° 494, de 3 de junio de 2012, objetivo recepción sexto estado de pago factura N° 54, avance 70%, aprueba estado de pago, \$53.839.490 millones de pesos; N° 650, de 28 de junio de 2012, recepción séptimo estado de avance para aprobación de séptimo estado de pago, factura N° 58, 85% estado de avance, aprueba pago \$36.825.402, firma Francisco Pizarro Dasso; N° 757, octavo estado de pago, 93% de avance, \$35.032.021, aprueba por estar conforme con el estado de avance; b) informes técnicos Coyhaique Alto (1 al 7), primeramente reconoció los

documentos, señalando a continuación que en cada uno se encuentra su firma, cuyo tenor es el siguiente: N° 1.323, 27 de diciembre de 2012, factura N° 30, mismo objetivo anterior informe, primer estado de avance para primer estado de pago, 12% de avance, aprueba pago de \$46.747.334, factura N° 107, de 1° de febrero de 2013, segundo estado avance para segundo estado de pago, avance 17%, factura N° 35, por \$19.301.001 millones de pesos y fracción, misma conclusión; N° 201, de 1° de marzo de 2013, objetivo recepción tercer estado de avance para tercer estado de pago, factura N° 38, de 28 de febrero de 2013, 10% estado de avance, aprueba pago de \$34.699.207; N° 308, de 1° de abril de 2012, objetivo: recepción cuarto estado de avance para cuarto estado de pago, factura N° 41, de 27 de marzo de 2013, por \$31.948.648, 34% estado de avance, misma conclusión, aprueba pago; N° 363, de 18 de abril de 2012, quinto estado de avance para quinto estado de pago, factura N° 46, de 17 de abril de 2013, por \$54.847.886, avance 48%, misma conclusión; N° 463, de 23 de mayo de 2013, sexto estado de avance para sexto estado de pago, factura N° 52, de 20 de mayo de 2013, por \$54.140.184, avance 67%, misma conclusión y firma, aprueba estado de pago; N° 651, 28 de junio de 2013, séptimo estado de avance para séptimo estado de pago, factura N° 57, de 28 de junio de 2013, por \$34.244.168, avance 61%, misma conclusión y firma, aprueba pago; N° 755, 2 de agosto de 2013, octavo estado de avance para octavo estado de pago, factura N° 66, de 8 de agosto de 2013, por \$32.026.396, avance 92%, misma conclusión y firma, aprueba pago; **c) proyecto Villa Ortega**, reconoce los documentos y da lectura resumida de cada uno de los informes que se le exhiben: N° 1.322 de 17 de diciembre de 2012, 1er estado de avance para aprobación del primer estado de pago, factura N° 29, de 13 de diciembre de 2012, \$81.032.184, avance 23%, misma conclusión anterior y su firma; N°105, de 1° de febrero de 2013, recepción segundo estado avance para aprobación segundo estado de pago, factura N° 34, de 31 de enero de 2013, por \$33.348.195 avance 32%, misma conclusión y firma; N°199, de 28 de febrero de 2013, recepción tercer estado de avance para aprobación de tercer estado de pago, factura, N° 40 de 1° de marzo de 2013, \$12.354.741, avance 35%, misma conclusión y firma; N° 310, de 1° de abril de 2013, cuarto estado de avance para recepción cuarto estado de pago, factura N° 43, de 27 de marzo de 2013, por \$40.261.562, avance 54%, misma conclusión; N° 361, de 18 de abril de 2012, factura N° 48, de 17 de abril de 2013, por \$79.430.225, avance 70%, misma conclusión y firma; N° 458, de 17 de abril de 2013, sexto estado de avance para aprobación del sexto estado de pago, factura N° 49, de 14 de mayo 2013 por \$55.159.101, avance 90%, misma conclusión y firma; N° 535, de 12 de junio de

2013, séptimo estado de avance para aprobación del séptimo estado de pago, factura N° 55, de 10 de junio de 2013, por \$56.735.820, avance 100%, misma conclusión y firma; N° 810, de 2 de septiembre de 2012 (3), octavo estado de avance para aprobación de octavo estado de pago, factura N° 68, de 16 de agosto de 2013, por \$2.999.526, avance 100%, misma conclusión y firma; **d) proyecto Isla Huar**, reconoce los documentos y da lectura resumida de cada uno de los informes: N° 202, de 1° de marzo de 2013), primer estado de avance para aprobación de primer estado de pago, factura N° 37, de 28 de febrero de 2013, \$58.031.299, avance 16%, misma conclusión y firma; N° 307 de 1° de abril de 2013, segundo estado de avance para aprobación de segundo estado de pago, factura N° 42, de 27 de marzo de 2013, \$25.855.235, avance 24%, misma conclusión y firma; N° 362, tercer estado de avance para aprobación de tercer estado de pago, factura N° 47, de 17 de abril de 2013, \$27.806.411, avance 31%, misma conclusión y firma; N° 495, de 1° de abril de 2013, cuarto estado de avance para aprobación de cuarto estado de pago, factura N° 53, de 27 de mayo de 2013, por \$62.758.872, estado de avance 54%, misma conclusión y firma; N° 539 de 1° de abril de 2013, quinto estado de avance para aprobación de quinto estado de pago, factura N° 56, de 12 de junio de 2013, \$70.554.210, avance 64%, misma conclusión y firma; N° 649, 28 de junio de 2013, sexto estado de avance para aprobación de sexto estado de pago, factura N° 59, de 28 de junio de 2013, \$32.817.666, avance 76%, misma conclusión y firma; N° 746, de 1° de agosto de 2013, séptimo estado de avance para aprobación de séptimo estado de pago, factura N° 67, de 1° de agosto de 2013, por \$42.618.942, avance 76%, misma conclusión y firma; N° 884, de 3 de septiembre 2013, octavo estado de avance para aprobación de octavo estado de pago, factura N° 69 de 3 de septiembre de 2013 por \$44.622.227, avance 100%, misma conclusión y firma. Consultado si la información contenida en los informes, concerniente al estado de avance de las obras se correspondía con la realidad, respondió que no, pero que había sido Christian Bustos Morgado quien le ordenó consignar esos estados de avance en los informes técnicos. Consultado si lo anterior había sido puesto en conocimiento de la Contraloría, o de la Dirección General de Carabineros o del ministerio público, respondió que no, que sólo lo había informado a Bustos Morgado y a Flores Santis, y que en cierta oportunidad en que el Director Nacional de Logística pasó revista al Departamento, trató de entrevistarse con él, pero tanto Bustos como Flores se lo negaron, diciéndole que de los problemas internos se ocupaban ellos.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos Morgado, respondió: tengo entendido que las licitaciones de cuarteles se publicaban en el portal mercado público, tanto las bases Generales como especiales, especiales en la página de Mercado Público; tengo entendido que las cuatro licitaciones se publicaron en dicho portal; la apertura de sobres se realizaban en el Departamento de reuniones, en el segundo nivel; nunca participó en la apertura de sobres; ingreso a trabajar el año 2008 y estuvo hasta después del sumario institucional; su separación del servicio no fue producto de la Contraloría sino una decisión del servicio; asumió como ITO cuando así lo dispuso Bustos Morgado, el año 2010, siendo destinado al retén Loica; sus funciones están reguladas en el DZS 294, en el cual se establece que su obligación es velar por el cumplimiento del contrato, revisar los estados de pago, o sea, contrastar el avance físico que declara el contratista y con las obras en terreno; el libro de obras lo provee el contratista y debe permanecer en la obra permanentemente; allí se consignan hechos relevantes de las obras; no es necesario registrar la asistencia del ITO a la obra toda vez que no es un libro de asistencia; a veces los libros no estaban en terreno; su deber era observar al contratista que el libro en cuestión debía permanecer en la obra; no sabe si las instrucciones que le impartía al contratista debía éste cumplirlas; el DS 294 lo conoció en el transcurso de la investigación. Se le exhibe la prueba documental N° 386, de sus medios de prueba, Decreto Supremo 294, del Ministerio de Defensa Nacional, subsecretaría de Carabineros, aprueba reglamento de ejecución de obras de carácter policial de Carabineros del cual hace lectura del artículo 63, en el que se señala que *el contratista debe cumplir las instrucciones que le impartía el ITO, dejándose constancia escrita de ellas en el libro respectivo, y aplicar multas en caso de incumplimiento*. El cheque de pago de las obras lo hacía el Departamento L8, no el de Cuarteles; la primera orden de pago respecto de Villa Ortega fue instruida por Bustos Morgado en diciembre de 2012, a él y demás ITOS, en una reunión que participaron todos; los montos a veces se los entregaba verbalmente, los que él traSPAsaba a un cuaderno, pero otras veces Bustos se los entregaba por escrito; de las demás obras no recuerda si las primeras órdenes de pago le fueron impartidas verbalmente; no recuerda los montos que le señaló Bustos; cree que el cuaderno en que registraba los montos de los pagos que le instruía Bustos quedó en el Departamento de Cuarteles, no se lo llevó con él; consultado por los demás pagos dijo, en General, no recordar si las instrucciones fueron verbales o escritas, tampoco si habían testigos al momento de recibir las instrucciones; registraba los montos en el citado cuaderno, pero a veces también en una hoja u otro papel; en

el cuarto estado de pago de Isla Huar estuvo presente Carla Salinas cuando Bustos le instruyó el monto de pago, el cual Bustos anotó en una pizarra y a su vez él por escrito. Consultado por la fecha de la denuncia respondió no saberlo, y consultado si en el mes de mayo de 2014 tuvo lugar su primera declaración en fiscalía, respondió no recordar, para cuyo recuerdo se le exhibió su declaración, después de lo cual recordó que la declaración fue en mayo de 2014. En esa oportunidad no entregó el cuaderno de sus anotaciones porque desaparecieron, pero sí algunas fotos de las obras y otros antecedentes escritos. Nunca representó por escrito la situación, ni a Bustos ni a Flores, y tampoco por correo electrónico al Director Nacional de Logística ya que su correo no tenía bandeja de salida para las jefaturas. **Se le exhibe la prueba documental N° 13, de la prueba del acusado Gutiérrez:** documento no lo firma Bustos, sí la del Teniente Parra, quien consigna que la devuelve a ..., cosa que él no hizo en la tramitación de los estados de pago en el año 2013; consultado si había comentado estas órdenes verbales de Bustos a otras personas, tales como hijos de sendos Generales de la institución que trabajaban en ella, tampoco a otros profesionales. **Se le exhibe documental 317, de sus medios de prueba,** consistente en un acta de aprobación de estado de pago N° 117 de 16 de agosto de 2013, de Villa Ortega, en que aparece su firma y la de Juan Gutiérrez, a quien dijo no conocer, precisando el acusado que corresponde a la devolución de retenciones; cuando Bustos salía por feriado o licencia médica le reemplazaba una persona de su confianza, motivo por el cual no pudo representar las órdenes verbales de Bustos; consultado si en el sumario seguido ante la Contraloría, ésta aprobó el sumario y propuso sanciones, lo que dijo no saber, **exhibiéndosele la prueba documental N° 321 de la defensa de Bustos:** sumario administrativo, última página, N° 40, Verónica Orrego Ahumada, secretaria General de la Contraloría General de la República, por orden de Jorge Bermúdez, contralor; página 32, párrafo tercero: las alegaciones del inculpado no han podido ser atendidas por falta de prueba que corroboré que las instrucciones que recibió fueron verbales; **da lectura parcial al documento 321, de fecha 19 noviembre de 2018,** página 1; página 11, página 14.4, página 16, página 17, página 22.13, 29 N° 16, formulación de cargos a Nadal y Campusano, quienes defensa señalaron la responsabilidad que le cabía al ITO en el control de la ejecución de la obra, firmaron el acta de recepción provisoria de la obra sin concurrir al lugar por la confianza que se tenía en el ITO Pizarro; página 22.13, en el caso de Bustos por la falta de control jerárquico de las funciones del ITO y de otros funcionarios durante el año 2013; página 29 N° 16, se formularon dos cargos a Francisco Pizarro, en su condición de ITO: a) haber

aprobado estados de pago sin haber acreditado el real avance de las obras en las cuatro obras, infringiendo con ello gravemente el principio de probidad; y b) haber solicitado la devolución de la boleta de garantía de correcta ejecución de la obra mediante oficio N° 53, del mes de julio de 2013, fecha a la cual la obra no estaba concluida, conducta que trasgrede el artículo 62 del D.S. N° 294, y también los principios de eficiencia y eficacia y de esa forma el principio de probidad de la Ley 18.575. Se concluye que ha sido acreditada la responsabilidad administrativa, y resuelve aprobar el sumario y la vista fiscal, proponer las siguientes medidas disciplinarias: Salamanca, Nadal, Campusano, Parra arresto 10 días, Pizarro y Flores Santis, separación del servicio conforme; y 3) absolución de Bustos Morgado, sin perjuicio de la remisión de los antecedentes al ministerio público y al Consejo de Defensa del Estado para conocimiento y fines pertinentes. A solicitud de la fiscalía hizo lectura al puntos 14 y 15, página 24 y siguientes, en la que constó que Bustos Morgado no reconoció la competencia de la Contraloría General de la República, alegación que fue desestimada por no ajustarse a Derecho, al desconocer la potestad sancionatoria de la Contraloría que le reconoce la Constitución y la Ley 10.336, entre otras, conforme a la cual todos los órganos de la administración del estado y sus integrantes, incluido Carabineros, se encuentran sometidos a dicha potestad. Lo anterior, sin perjuicio del levantamiento de cargos atendida su desvinculación de la institución policial, por lo que se le absolverá. La tramitación de los estados de pago N° 1, de Isla Huar, en diciembre de 2012, sin visita a terreno, se los ordenó Bustos Morgado a fin de cumplir con la asignación presupuestaria. Señaló no saber si las asignaciones presupuestarias vencen el día 31 de diciembre de cada año. Consultado si en noviembre de 2012 había viajado a Villa Ortega, dijo no recordar, por lo que **se dio lectura, nuevamente, al documento N° 11, de la prueba de la defensa**, en el que consta NCU 8380999, de 14 de noviembre de 2012, solicitud de autorización de comisión de servicio, y a continuación la **documental N° 875, de la fiscalía**, en que consta que el informe técnico es de fecha de 17 de diciembre. Respecto de Castor y Coyhaique, se le consultó si el informe técnico era de 27 de diciembre de 2012, a lo que respondió no recordarlo, dándose lectura a la citada **documental 875**, conforme a la cual la fecha indicada corresponde a la data de los informes. Consultado si del 12 al 14 de diciembre de 2012, había viajado a Coyhaique Alto y a Lago Castor, respondió no recordarlo.

Consultado por la defensa respecto de si las fotografías que antes se le mostraron habían sido peritadas, respondió que no, pero que las había entregado

en el sumario y también a la fiscalía. Respecto de la recepción provisoria de Villa Ortega, negó haber dicho que Bustos hubiera presionado a la Comisión, pero sí que ordenó e instruyó proceder a la recepción provisoria. Confirmó (tengo entendido que sí) la efectividad de haberse aplicado multas a CGM por los atrasos. La lista de materiales que se sacaron mediante acta de bodega no fue firmada por Bustos porque éste no quiso, siendo Flores quien sí la firmó. Respondió que no tuvo interés en ayudar a CGM ni a Cristián Gutiérrez. CGM *factorizaba* las facturas, pero él no ayudaba en la tramitación, era el *factoring* quien llamaba al Departamento de Cuarteles consultando por el pago de la factura. **Exhibe y da lectura a los documentos signados N° 574 y N° 575, de sus medios de prueba** (correos electrónicos). Exhibidos al acusado señaló que dichos documentos eran correos del *factoring* a su correo personal consultando por las facturas, Consultado cómo supo su correo personal, respondió que tal vez la empresa se lo dio o él mismo. Consultado si la consulta del *factoring* la derivaba a L8, respondió que no. En cuanto al documento 575, dijo reconocerlo, siendo de la misma naturaleza, en la cual él le informa que la factura había sido tramitada, reconociendo no haberla derivado a L8 ni a contabilidad. Los correos salían de su casilla personal y no de la institución por no tenerla habilitada. **Se le exhibe documento N°573** (correo de 21 de diciembre de 2012), el cual reconoce y responde que es un correo que está en su correo, dirigido por Cristián Gutiérrez Mancilla, en el cual le envía los datos de la cuenta corriente de la empresa “al parecer para el *factoring*”; 21 de diciembre 2012, de CGM a Francisco Pizarro: *estimado Francisco envío número de cuenta para depósito de estado de pago; indico numero telefónicos de contacto*. Explicó que ese correo obedece a un problema que surgió con el *factoring*, explicación que no aparece en el documento por estar incompleto el correo. Negó ser él el encargado de depositar los cheques a Christian Gutiérrez. Consultado si compro un Departamento *en verde* a mediados de 2012, respondió que sí, conjuntamente con su señora, por lo cual tuvo que dar un pie de 13 millones, el cual se pagó en parte con un cheque en julio 2012, por 7 millones y fracción, dinero que mantenía en su cuenta de ahorro para la vivienda, y el saldo, 6 millones y fracción, en mayo de 2013. En septiembre de 2012 se compró un auto, con un cheque de su cta. **Se le exhibe documento N° 4**, de sus medios de prueba, cartola de cuenta corriente Banco de Chile, 29 de junio al 31 de julio de 2012, reconoce un depósito de \$11.274524, fecha 25 de julio de 2012, dinero que sacó de su libreta de ahorro, no recordando cuánto dinero quedó en dicha libreta; cheque cobrado por \$7.150.000 millones y fracción con fecha 1 de agosto de 2012, correspondiente a la primera parte del pie del Departamento,

quedando un saldo de \$7.394.478; le exhibe una segunda cartola, de 28 de septiembre al 28 de octubre de 2012, en la que aparece que con fecha 1° de octubre se cobra un cheque por \$8.672.695, correspondiente al pago del vehículo. **Le exhibe documento N° 576**, certificado de inscripción de vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados, PPU FBCB.29-5, Chevrolet cruze II, AT, año 2013, inscrito a nombre de Francisco Pizarro, fecha adquisición 28 de septiembre de 2012, por lo que el pago del cheque anterior fue por el pago de este vehículo. Luego de ese pago el saldo en cuenta corriente fue de \$455.000, y al final del período \$3.000; le exhibe cartola de noviembre de 2012, el saldo no supera \$800.000 durante todo el mes; la de diciembre de 2012, el día de mayor saldo fue de \$1.400.000 y fracción; enero 2013 el mayor saldo fue de \$1.400.000 mil, febrero 2013 el mayor fue de \$1.464.947; abril 2013, mayor saldo fue de 4 de abril la constructora le cobra el cheque por 6 millones de pesos, correspondiente al saldo del pie del Departamento, pero dos (2) días antes recibe dos (2) transferencias de \$2 millones de pesos cada una, en la que sólo se señala “otro banco”, explicando que eso obedece a que no podía hacerse transferencias por más de ese momento, negando que ese dinero le hubiera sido transferido por Cristian Gutiérrez; el saldo anterior a esos depósitos era de \$992.933; le exhibe cartola del mes de julio 2013, días 2 y 5 de julio, en las que reconoce, en la primera, entre el 1 y 2 cuatro transferencias seguidas de \$100.000 cada, y el día 5 cinco transferencias por \$100.000 cada una, en las que se indica “transferencia de terceros”, negando que hayan sido hecha por Cristián Gutiérrez; el 8 de julio transferencia por \$1.800.000, “transferencia de terceros”, negando haya sido hecho por Cristián Gutiérrez, explicando que esos dineros obedecían a honorarios por obras de terceros por las cuales emitió boletas; 7 de octubre de 2013, transferencia por \$500.000, “traspaso de tercero”, no proviene de Cristian Gutiérrez Martínez; diciembre 2013, abono de \$1.000.000, 9 de diciembre, “traspaso de tercero”, no proviniendo de Cristian Gutiérrez Martínez u otra persona cercana a él. Consultado por la fecha de su primera declaración dijo no recordarla, pero al serle exhibida refirió que había sido el 26 de mayo de 2014. No recordó si dos meses después vendió su vehículo, pero al serle **exhibido el documento N° 576**, aparece que lo vende a Miguel Ángel Fuentes Castro, 12 de junio de 2014. Explicó que lo vendió porque necesitaba un auto más grande y más seguro, *y que lo puso* a nombre de su señora. **Le exhibe imágenes y archivo contenido en el N° 9 de “otros medios de prueba” de la fiscalía**, consistente en un correo de 10 de mayo de 2013, dirigido por él a Cristián Gutiérrez, en el cuál le pide una reunión urgente por un trabajo particular, en el cuál sólo pedía un presupuesto para la

obra, lo cual ocurrió también con otra empresa. Exhibe informe técnico de Coyhaique Alto, 20 de mayo, por \$54.321.134, IVA incluido, no recordando si hubo otro estado de pago más alto que ese, pero al examen de los otros efectivamente no aparece otro presupuesto más alto. Consultado si es efectivo que de los 32 informes técnicos que aprobaron los estados de pago más abultados corresponden al mes de mayo de 2013, respondió no recordarlo.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, respondió que en ningún momento recibió dinero de él, tampoco de la empresa CGM; Bustos era amigo personal de César Rojas porque él se lo señaló; señaló que posterior al sumario tomó conocimiento de este juicio, específicamente cuando se le citó a declarar, pero supo de investigación cuando aún trabajaba en Carabineros; Bustos Morgado lo amenazó que iba a perder el trabajo, el objetivo era que no recopilara y no vinculara a Rojas Gaete; este le dijo que era socio capitalista de CGM porque así se lo hizo saber él en una reunión en la que participó Rojas, Bustos Morgado y él, en un local de comida en Mall Florida Center; no le exhibió documentos en tal sentido; dijo saber que Gutiérrez interpuso una querella contra Rojas Gaete, “al parecer por un tema de patrimonio”; cuando CGM dejó las obras de Villa Ortega existían partidas no ejecutadas, alrededor de un 12%; hasta ese porcentaje alcanzó trabajar dos meses más del planificado; respecto de Coyhaique Alto y Lago Castor dijo no recordar el porcentaje pendiente; en el caso de Isla Huar el avance alcanzó 70%; el inicio obras en **Villa Ortega** fue en diciembre de 2012, y al mes de julio 2013 aún continuaban; refirió que el clima influyó en el retraso de las obras; no recuerda el momento de cese de las obras, tampoco quien dio la orden, pero sí que al dejar la obra quedaron bienes de CGM; dijo no saber si quienes continuaron las obras utilizaron los bienes que dejó CGM; señaló que Gutiérrez no era parte de CGM, pero si era el encargado de *la parte de terreno*; conoció a Rojas el 2008-2009, cuando trabajaba en la sub dirección de compras, compartiendo oficina con Bustos Morgado; supo que CGM mantenía en las obras dos (2) camionetas, una roja y otra gris, más una retroexcavadora JVC, las cuáles no se mantuvieron durante toda la obra ya que en la segunda visita a terreno no estaban, se las habían llevado a Santiago, así se lo dijo Gutiérrez, la ausencia de la retroexcavadora tuvo que influir en el atraso. En cuanto a los estados de pago, señaló que las solicitudes de recepción mostraban su nombre en un logo pero no siempre aparecía su firma; consultado si participó en la entrega de terreno de Isla Huar **exhibe documento N° 14**, de las pruebas de la defensa de Gutiérrez: acta de 6 de diciembre de 2013, firman Ignacio Labra por Carlos Grossman, por la

empresa, y él (Pizarro) por Carabineros; exhibe documentos: **N° 885** resumen estado de pago Villa Ortega, N° 1, suscribe por CGM, timbre, p.p. Cristian Gutiérrez firma Ignacio Labra; **N° 894**, resumen estado pago Lago Castor, timbre p.p. y firma diferente de Ignacio Labra, aclarando que éste y el anterior se fueron a pago al parecer sin firma del jefe de Departamento; precisó que en ningún de los tres documentos exhibidos hasta ahora aparece la firma de Cristián Gutiérrez; **N° 956**, de 28 de marzo de 2013, carta solicitud dirigida a él por obra Coyhaique Alto, firma CGM, pero no de él, la hacía Rojas Gaete, lo que le consta porque la hizo en su presencia, agregando que también hacía otra firma por otra persona; **N° 947**, carta solicitud estado de pago N° 4, Villa Ortega, pie de firma Cristián Gutiérrez Martínez, pero es otra firma, *la de Rojas Gaete*, aclarando que ese estado de pago corresponde a Lago Castor; **N° 948**, refiere que se trata de una carta solicitud estado de pago N° 4, Villa Ortega, firma suya, Cristián Gutiérrez Martínez, *pero es otra firma distinta de las dos anteriores, se acerca pero no es*, precisando que también está la de Bustos Morgado pero no la del Jefe del Departamento, Flores Santis. Consultado respecto de si concurrió a alguna reunión en que hubiere estado, respondió que sí, una en dependencia del Departamento de Cuarteles, gestionada por Bustos Morgado, en coordinación con asesoría jurídica, asistiendo Bustos Morgado, Rojas Gaete, Gutiérrez, él y un arquitecto; en ella conversaron acerca de los retrasos de las obras y de los antecedentes asociados, añadiendo el acusado que *había discordia entre Gutiérrez y Rojas con motivo de la administración de recursos*; Rojas Gaete le dijo Gutiérrez “ya lo sabes, la solución es que traSPAses la empresa a mi nombre”. Supo del nombre de Carlos Bustos Prat por una demanda que se notificó a Carabineros interpuesta contra por él en contra de CGM relacionada con los trabajadores; refirió que Bustos Prat trabajaba para CGM.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas señaló que no sabía que estaba sujeto al deber de confidencialidad debido a que no leyó la documentación relacionada con su contratación. Se le **exhibe el documento N° 1.348**, prueba de fiscalía: anexo directiva, artículo 13: *previo asumir suscribirá acta ante jefe de alta repartición en que se consignarán las condiciones en que el contratado desempeñara el cargo*. Consultado acerca de si en su declaración en fiscalía, de 8 de junio de 2016, señaló que existía un compromiso entre Rojas y Flores, de lo cual no existe documentación, pero que se podía confirmar, por ejemplo, por la rápida inscripción de Grossman en el Registro de Contratistas de Carabineros. Dijo conocer a Romina Parraguez y a Andrea Campusano, con quienes mantuvo

una sociedad comercial, la cual terminó con motivo del sumario institucional, la empresa se dedicaba a materializar proyectos de viviendas unifamiliares; se **le exhibe documento N° 875**, prueba de la fiscalía, informe técnico Lago Castor N°106, de 1° de febrero de 2013, recepción segundo avance para segundo estado de pago, inicio obra 13 diciembre 2012, avance de la obra 12%; informe 1° de marzo de 2013, tercer avance para tercer estado de pago, inicio obra 13 diciembre 2012, avance 10%; se **le exhibe documento N° 1, prueba del querellante** (sumario administrativo, foja 2.156), el cual da lectura: *CGM representada Cristián Gutiérrez Martínez, autoriza a Francisco Gutiérrez Gutiérrez, para que retire desde la Dirección Nacional de Logística las boletas de garantía que se encuentran en su poder para ser devueltas a la empresa. Lampa, 27 de agosto de 2013.*

A la pregunta de la defensa respondió que al año 2010 el jefe del Departamento de Cuarteles era un Coronel , familiar suyo, a quien sí representó las irregularidades, quien dispuso que Bustos materializara su firma en todas las órdenes de pago. **Exhibe el documento 1** de la prueba del querellante (sumario administrativo, foja 2.152), **no reconoce el documento** pero de la lectura desprende que se trata de un acta de entrega. Refirió que todos los profesionales del área de fiscalización recibían órdenes verbales de parte de Bustos, entre ellos los funcionarios Cisternas, Campusano, Nadal, Romina Parraguez, Salazar y Socías Vargas. Dos veces Gutiérrez le ayudó a conseguir alojamiento en el hotel Dreams, en el cual Gutiérrez tenía descuentos, pero que el dinero correspondiente a la tarifa se la pagó a Gutiérrez en dinero efectivo que sacó de un cajero. **Se le exhibe el documento N° 1 de la prueba del querellante** (sumario administrativo, foja 2.924), el cual no reconoce. Las veces que se alojó en el hotel también lo hizo Gutiérrez. Dijo no saber bajo que rótulo Gutiérrez lo anotaba en el registro CGM. No recuerda haberse alojado en hotel Dreams 11 veces. Dijo no recordar haber estado jugando junto a Gutiérrez en el casino del hotel. Se le exhibe declaración de fecha 8 de junio de 2016, la cual reconoce, y leído para sí lo solicitado por la defensa, respondió a la pregunta anterior diciendo que “puede ser” *que haya estado jugando junto a Gutiérrez en la sala de juegos del hotel*, precisando que con esta respuesta no estaba afirmando el hecho sino sólo que lo dicho es lo que aparece en la declaración que se le exhibió. De los alojamientos mencionados no dio cuenta a Bustos. Señaló que no le preocupaba el hecho de alojarse a través de Gutiérrez, toda vez que su preocupación era obtener alojamiento. Era vox populi en el Departamento que Rojas pertenecía a la empresa Grossman, lo que además aparecía reflejado en los contratos de Isla Huar y Coyhaique Alto. Se **le**

exhibe documento 1.120, prueba de la fiscalía: lo reconoce y señala contrato de terminación obra Coyhaique Alto, 27 de noviembre de 2013, entre Carabineros de Chile, representado por el director de Logística, Jorge Rojas Languer, y por otra, la empresa Grossman representada por Carlos Grossman Badrián; cláusula N° 18, reducción a escritura pública de sesión de directorio en que se designa a Grossman como representante de la empresa homónima. Consultado por el nombre de César Rojas responde que su firma no aparece. Se **le exhibe documento 1.155**, prueba del ministerio público (contrato de obra Isla Huar), el cual reconoce y señala que es un contrato tipo de fecha 27 de noviembre de 2013, entre Carabineros, representado por Jorge Rojas Languer, y por otra la empresa Grossman S.A., representada por Carlos Grossman Badrián; “firma por poder Carlos Grossman Badrián, y Jorge Rojas Languer”. Consultado por la firma de César Rojas respondió que no constaba en el documento exhibido. A solicitud del querellante se da lectura a la cláusula quinta del documento (contrato): obligaciones del contrato, letra i): “...”. Consultado nuevamente el acusado, *señaló haber visto el nombre de César Rojas en el Registro de Contratistas de Carabineros. A fin de evidenciar una contradicción* se le exhibe la declaración anterior del acusado, de fecha 8 de junio, reconoce su firma, y da lectura: *yo me entero que Rojas está vinculado con cuando me indican que Labra estaba vinculado, y como lo conozco, supuse que Rojas estaba vinculado nuevamente.* **Se le exhibe el documento N° 814**, prueba de la fiscalía (Oficio N° 1.436, de 29 de agosto de 2018, de la Dirección de Logística de Carabineros), el cual responde que no lo reconoce. La defensa del acusado Rojas da lectura al documento en el siguiente tenor: *Cheque N° 118817 factura N° 29 constructora CGM Ltda., Banco Estado, cuenta N° 00009021141, cheque 7069781032134, 26 de diciembre de 2012, beneficiario constructora CGM Ltda., fecha de retiro 28 de diciembre de 2012, firma ilegible, nombre persona que retira Vanesa Valdés; hoja siguiente, imagen histórica del cheque, cruzado, de la Dirección de Logística, por el monto mismo, nominativo a CGM y dos firmas ilegibles pp.* Respondió que Rojas firmaba con tres firmas distintas, una de ellas la original. Consultado si tal situación se le representó a Rojas al momento de firmar, respondió que sí, pero que le dijo que esa era “su mosca”. No recuerda que alguien haya visto, además de él, firmar a Rojas. Señaló que otro tanto ocurrió con Labra. **Se le exhibe documento N° 4**, prueba del acusado Bustos: lo reconoce, son cartolas de su cuenta corriente, y a la solicitud de que indicara dónde aparecían registrados los giros de cajero automático, con los cuales señaló que pagaba a Gutiérrez la estadía en el hotel Dreams, *respondió que no los veía.* Consultado si en definitiva hizo giros en la

ciudad de Coyhaique, respondió, *no, aparecen asociados a la oficina central*. En Villa Ortega habían varios libros de obra, eso porque diagramas. No recuerda cuántas veces viajó a Isla Huar, pero en cuanto a los estados de pago convino con la defensa que fueron al menos seis (6), y por tanto sería efectivo que habría viajado al menos esa misma cantidad de veces. Consultado respecto de si Rojas efectuó gestiones para reponer las boletas de garantía que habían sido devueltas, dijo “lo desconozco”. A fin de **evidenciar una contradicción**, se le exhibió su declaración de 8 de junio, ya antes mencionada, la que, previo reconocimiento, dio lectura: *en relación al tema de las boletas de garantía el Comandante Bustos dio orden a Parra Ávila devolver por mano a CGM de las cuatro (4) obras, las cuales después no devolvió, por lo que se habló con Rojas para obtener su devolución, lo que finalmente se logró, salvo la de Villa Ortega*. Señaló no ser amigo de Gutiérrez. Refirió que cuando Gutiérrez estaba en las obras se relacionaba directamente con él, como también con el resto de quienes allí se encontraban. Recuerda el nombre de Pamela Beltrán como profesional residente en una de las cuatro obras. Gutiérrez no estuvo como profesional residente, eran otras personas. A solicitud de Bustos él solicitó a Gutiérrez que le enviara un cordero a Santiago, lo que se materializó vía área, ignorando si venía a su nombre. Fue trasladado al Departamento y allí participaron Bustos, Rojas Languer y otros mandos. La intermediación la realizó porque Bustos se lo ordenó verbalmente. La intermediación que efectuaba con el *factoring* no formaba parte de sus funciones conforme al D.S. 294, pero lo que hacía era responder a las consultas del *factoring*. No lo hizo para ayudar a Gutiérrez. Lo mismo hizo con otros contratistas, no recordando nombres. Entregas de Lago Castor y Alto Coyhaique no recuerda cuándo tuvieron lugar, ni real ni simbólicamente. Consultado por la irregularidad que habría en la entrega de terreno, el 13 de diciembre de 2012, y el estado de pago fue el 27 de diciembre del mismo año. Es habitual que los subcontratistas hagan reclamos al ITO, ello porque Carabineros es solidariamente responsable. Cuando Grossman hizo retiro de materiales en Santiago concurrió con un camión blanco, Hyundai, modelo Frontier, el cual no manejaba pero sí estaba acompañado de dos personas; le dijo que el mando había coordinado con César Rojas la entrega de los materiales, y que por eso él concurría, dándole su nombre y mostrándole además su cédula de identidad, siendo esa la oportunidad en que conoció a Grossman. No confeccionó *itemizados* que le ordenó Bustos a efectos de llevar adelante la contratación directa, en el sentido de que hacer calzar el *itemizado* con los dineros con los que se efectuaría la contratación directa. Tales *itemizados* no los terminó él sino que otra persona. Declaró en fiscalía el 26 de

mayo de 2014, dijo no saber si estuvo presente personal de carabineros, pero sí de la Policía de Investigaciones. Se le exhibe, la reconoce y lee, respondiendo que en esa oportunidad no estuvo presente Carabineros, y que en sus respuestas, cuando dice “sí mi Coronel”, se debe a que el fiscal ocupó su declaración prestada en el sumario administrativo, descartando que la razón haya sido que él hubiere sido quien llevó tal declaración.

SEPTIMO: Declaración del acusado Cristian Gutiérrez Martínez. Que, el **acusado Gutiérrez** declaró que se encontraba en el juicio por haber denunciado a César Rojas, quien le destruyó su empresa de más de diez años y dejarlo arruinado. El 31 de diciembre de 2013 presentó una denuncia ante el 7° u 8° Juzgado de Garantía, en contra de César Rojas, Carlos Bustos Prat y otros, por apropiación indebida y extorsión siendo esa la primera denuncia que abrió la puerta de estos hechos, de la corrupción en Carabineros, de la cual no supo cuando postuló. Luego de la denuncia quedó a la espera, hasta que luego de dos meses llega una denuncia de Carabineros, el 18 de febrero, diciendo que había abandonado las obras y que se estaba coludiendo con el Inspector de Obras. Asimismo el 26 de febrero Rojas interpone una querrela por estafa fundada en mentiras que serían fáciles de demostrar. Con posterioridad amplió la querrela a muchas personas que ayudaron a Rojas a cometer los apremios que él y su empresa sufrieron. La investigación fue sesgada. Refirió que el fiscal Villalobos, quien inició la investigación, se asoció con los actuales abogados de César Rojas. CGM nunca abandonó las obras. Terminó con sus manos una de las obras. Las otras dos se las vendieron a Grossman. Reconoce atrasos pero no el abandono de las obras. En obras complejas siempre existen detalles, pero no hubo abandono. Empresa la formó el 2003, inscrita en el MOP, postuló en ese año a diversas ocasiones, colegios, salas cunas. El año 2011 se adjudicó la ampliación de un colegio, la ejecutó enero a julio 2012. Durante la ejecución de las obras apareció Labra Ignacio, recomendado por Marchant, quien comenzó a trabajar con él en dicha obra. En abril de ese año lo contacta Renato Méndez por un proyecto de construcción de cuarteles en la zona central, eran dos proyectos de alrededor de 300 millones de pesos. Conversaron y le dijo que le interesaba pero que el problema era el financiamiento, a lo que Méndez le contesta que no se preocupe porque su primo Rodrigo Carrasco, ayudaría con quien tiene una reunión en oficinas de calle Amunátegui, a la cual asistió Bustos Prat. Se incorporó un tal “chino”, que resultó ser César Rojas, el cual ingresó con Fernando Delgado. Quiso hacer preguntas pero Carrasco le hizo señas para que no hablara. Salió Rojas de

la sala con otra persona. Después de un rato Méndez le informa que están listos. Después de esa reunión le dice a Méndez que estudien la propuesta. Méndez fue a buscar trabajo con él en la obra de San Bernardo, pero no pudo contratarlo, sin perjuicio de lo cual lo ayudó a financiar obras menores. Durante ese tiempo se dedicó a estudiar diez (10) propuestas en una semana y media. Méndez se preocupaba de las cotizaciones de materiales. DE las diez propuestas que estudiaron, Renato apareció con 4 boletas de garantía, Carrasco y Delgado se encargaron de toda la parte administrativa. Cuando llegaron las boletas se cuestionó el por qué entonces lo habían hecho estudiar las diez propuestas mencionadas. Esas cuatro propuestas de Carabineros no se ganaron, no participó de la apertura de sobres, se quedó dormido. En Julio Méndez le dice que el chino lo estaba ubicando para una reunión, le dice que le envió una carta por una licitación que quedó desierta, “la mina”, eso porque “a esas alturas” todos entendían que Méndez era el dueño de CGM. Rojas le dijo a Méndez que enviara la carta a cierta persona, con quien ya estaba coordinado. Acompañó a Méndez a la reunión a un patio de comida en el Mall Florida Center, a la cual llegó César Rojas y se incorpora. Rojas le plantea a Méndez que le puede llevar el negocio directamente y no a Carrasco, con lo cual se ofrece como financista de CGM pidiendo un 2% de rentabilidad. Contó Rojas que había sido Carabinero pero que se había salido para iniciar una empresa. Esa reunión quedó en nada porque no podía dejar a las dos personas que estaban con ellos, Carrasco y Delgado. De Carlos Bustos Prats no tenía mayores antecedentes. En eso apareció la obra de Villa Ortega, la cual había quedado desierta, por la cual se interesó. Luego de la mencionada reunión le dice a Méndez que las próximas propuestas las debía estudiar él y saber él respecto del financiamiento. Le dijo a Méndez que su amigo le enviara 500 mil pesos para viajar a Coyhaique a verificar el terreno, lo cual no se hizo (el primo), pero sí apareció César Rojas, quien le envió un correo en el cual aparecía que había sido él quien había financiado las boletas de garantía de las licitaciones que se perdieron. En julio Rojas le pasó dos millones y medio para ir a terreno, ver pormenores, el cuartel, verificó que era complejo por el tema de los traslados, pero igualmente se interesó, comenzando a estudiar la propuesta de Villa Ortega, y estando en su oficina, contacto a Ignacio Labra diciéndole que iba a necesitar alguien que le ayudara ya que Méndez no estaba trabajando con él. Le dice a Rojas que llegó el momento de financiar la boleta de garantía, que debían ser 19 millones y tantos, pasándole sólo dos millones porque no tenía más dinero, pero que no se preocupara porque la boleta de garantía la tenía lista. Cuando llegó el último día Ignacio Labra fue a hablar con el agente del Banco Security,

Cristian Leay, quien tomó la boleta con los dineros que se giraron de las boletas de garantía anteriores. Concurrió a la apertura de sobres, también se presentó otra empresa la cual se equivocó al tomar la boleta de garantía pagadera a 30 días y no a la vista, como decían las bases. Pasaron los días y se le adjudicó la obra, comenzando desde ahí Ignacio Labra a preocuparse de todo lo administrativo, quedándose él a cargo de la realización y ejecución de la obra. Alrededor del 24 de octubre comenzó la ejecución, y el 26 de octubre en la mañana tenía un llamado de Delgado, increpándolo y amenazándolo con meterlo preso y también a su señora. Al cabo de 30 minutos lo llama Carrasco y lo amenaza de muerte, diciéndole que sabía dónde ubicarlo porque su primo Renato se lo había dicho, le exige 20 millones o de lo contrario iba a matar a su señora. La conversación de Delgado la grabó. Llamó a Rojas y le contó lo sucedido quien le dijo que no se preocupara, que él lo iba a arreglar. Por Mercado Público se enteró de la licitación de las obras de Lago Castor y Coyhaique Alto, las que también estaba en Coyhaique al igual que Villa Ortega, lo que le permitía reducir los costos de producción. Fue a la visita de terrenos de éstas dos obras, llegó dos horas antes, no llegó ningún otro oferente. Hicieron los estudios en Lampa, apareciendo entre medio Isla Huar, la cual ya no era tan atractivo porque estaba más lejos, ofreciéndose Rojas a ayudarlo con el trabajo. Comenzaron a trabajar en Lampa, se incorporaron varias personas, le pide a su hermana que se incorpore y le ayude porque él se iba al sur. Rojas le propuso que trasladara la oficina a la de él, en Santiago. En la misma oficina había otras personas trabajando en relación con otras obras que tenía Rojas. A contar de enero Rojas llamó a Carlos Bustos, a quien no conocía. Por casualidad le llegó un correo de Prat dirigido a Gutiérrez Vásquez, procesos CGM; al abrirlo vio un organigrama de su empresa: César Rojas, gerente General y gerente comercial; gerente operacional Cristián Gutiérrez, su hermana Carolina en otra gerencia; Carlos Bustos Prat jefe de Departamento logística; Miguel Gutiérrez Vásquez, a cargo de control y planificación; en asesoría externa una contadora que después supo era la contadora de César Rojas; Pedro Vargas jefe personal, entre otros. Llamó a Rojas y le pidió disculpas diciéndole que se trataba de un error. En medio de eso apareció Marcelo Latorre como jefe de obra al cual le entregó una camioneta de su esposa, Nissan Terrano, además de herramientas para que se trasladara a Villa Ortega. Comienza a solicitarle a Rojas el aporte en dinero que había comprometido para financiar los trabajos, quien le empieza a proveer dinero a partir de las boletas de garantía. En el mes de diciembre lo llama y le dice que revise su cuenta porque había 80 millones. Antes de viajar a Coyhaique Rojas le

pidió un mandato para seguir trabajando él en Santiago, a lo que accedió por la confianza que le tenía. Se adquirió una retroexcavadora por ser necesaria para la ejecución de las obras. Añadió que antes de irse le dejó a su madre cinco cheques en blanco. A su hermano le pidió que lo ayudara con la compra de la maquinaria, enterándose posteriormente que el hermano le había pedido los cheques a la madre y entregado a Rojas, pero este no los ocupó para comprar sino que lo hizo con letras de cambio, los cheques los cambió una secretaria, Claudia Segura, por 19 millones, otro por 6 millones, otra secretaria cobró por Rojas un cheque de 3 millones 200 mil pesos, también otro por Ximena Valdés. Señaló que todo lo anterior sucedió en el mes de enero, o sea, después del estado de pago de diciembre. El cobro de los cheques generó dos meses de retraso en la obra, y en paralelo Rojas le comenzó a exigir que se fuera al sur a trabajar en las obras y que él se haría cargo del resto en Santiago. Dedujo que en su empresa se había formado una asociación ilícita. Esas personas comenzaron a comprar bienes, vehículos, sin consultarle pagos de sueldos de las obras y proveedores por 45 millones de pesos mensuales. Se percató que estaban comprando ventanas por 80 millones de pesos por instrucciones de César Rojas, dejando él sin efecto esa orden de compra. Calculó que más de 300 millones de pesos fueron a parar a los bolsillos de César Rojas. Se hablaba de A y B. En el mes de julio se sincera diciendo que para ingresar los fondos ofrecidos necesitaba ingresar a la sociedad, que así se lo estaban exigiendo. Estando en las faenas le llamó un abogado para ayudarlo en un problema laboral de un trabajador, diciéndole Rojas que no le convenía, que él le tenía un abogado, Rodrigo Morales, al cual se le incorporó a la empresa como asesor de ésta, enterándose posteriormente que esa persona era abogado de Carlos Bustos Prats. Labra y Rojas comenzaron a tener contacto directo por la gestión de las obras licitadas. Señaló que estando él en las obras sucedió un evento, le llamó su hermana para darle cuenta que Rojas le pedía dinero constantemente, incluso se perdió dinero de la caja fuerte, que no la incorporaban en las reuniones que hacían a puerta cerrada. Sebastián escobar, encargado de adquisiciones, no obedecía sus órdenes y que su jefe era César Rojas. Situación semejante con Labra y Vargas, enterándose en marzo que el primero estaba estudiando propuestas para Rojas. De esto y otras cosas se enteró mucho después, y que de haberlo sabido habría incluido a Labra en la querella. Llega un momento en que Rojas le pide el 20% de la empresa, a lo que él no se allanó, diciéndole que lo acordado era otra cosa, que sería el 20% de lo que pusiera Rojas. En los siete (7) meses que estuvo Rojas sacó 300 millones, ese era su objetivo. Ocurrieron situaciones con los estados de pago y con “los famosos

factoring”, en los cuales debió concurrir a firmar papeles y poderes a Rojas y Labra. Intentó desvincular a una tal Pamela Labra por incompetente ya que la obra de Villa Ortega se demoraba mucho, a lo que Rojas se opuso. El 2 de julio, aproximadamente a las siete de la tarde lo llama y le dice que le acababa de sacar 60 millones de la cuenta corriente y que si no le dejaba la retroexcavadora en garantía, firmaba letras y transfería el auto él no devolvería el dinero y que por tanto no habría con que pagar los sueldos por 45 millones. Al día siguiente Rojas habló con él y le dijo que la única solución era que le traspasara la empresa a su nombre. Estuvo dispuesto a dejar la retroexcavadora en garantía; fueron a una notaría donde firmaron pagarés por 25 millones de pesos. Luego fueron al banco Santander, ubicado en Irarrázabal, a retirar los 60 millones, había una patrulla de carabineros y la hija mayor de César, Rojas giró un cheque por 30 millones. Luego fueron al banco Bci, depositando ese dinero en la cuenta de CGM, pero no le entregó el resto para cambiar las boletas de garantía y pagar sueldos. Le ofreció venderle una parte de la empresa en 100 millones de pesos, a lo que Rojas le dijo que “no, porque su capital son contactos”, contándole en ese momento que el A que hacían mención era Flores Santis y que el B era Bustos Morgado, momento a partir del cual se separó totalmente de Rojas. Isla Huar le obligó pagar 10 millones de pesos a trabajadores que contrató Rojas pero que no hicieron nada. Villa Ortega pudo terminarla, con dificultad, pero la terminó. Isla Huar podía terminarse con 20 millones de pesos, pero sucedió que Eduardo *Curiquéo* lo abandonó. Concurrió a un sala de reuniones en el Departamento de Cuarteles, estaba Rojas, el ITO Pizarro, otra persona que no recuerda, y presidiendo el Comandante Bustos a quien había visto anteriormente una vez pero con el cual no mantenía ni mantuvo contacto; Bustos le llamó la atención por bienes que habría adquirido en circunstancias que las obras no estaban terminadas las obras, interviniendo Rojas en ese momento diciendo “yo ya le dije a Gutiérrez lo que tenía que hacer, traspasar la empresa a mi nombre”, a lo cual le respondió que no lo haría, procediendo Rojas a retirarse de la reunión diciendo que hasta ahí llegaba él. Lo anterior ocurrió en el mes de octubre. Refirió que solicitó varios créditos bancarios para financiar las obras, endeudándose personal y familiarmente. Se le prohibió ingresar a las obras ni retirar nada de lo que allí estuviera. En ese momento le quitaron las obras, no lo dejaron terminirlas. Curiquéo renunció a la empresa, enterándose posteriormente que se había incorporado a Grossman, la cual hizo un trato directo entregándosele las obras de Lago Castor e Isla Huar. Añadió que en mayo o junio Labra había renunciado a CGM, enterándose en la investigación que lo hizo para asociarse con Grossman, llevándose de paso al personal de CGM, sin

el cual no podía terminar las obras. Isla Huar estaba a punto, las otras dos reconoció que estaban atrasadas. Refirió que hubo familiares que le ayudaron a trabajar, en AC, su madre con la compra de pasajes para él y trabajadores, también pidió prestamos que depositó a la cuenta de CGM para que tuviera flujos; su hermano también le ayudó con la compra de pasajes, los cuales se le devolvía el dinero porque era lo que correspondía; de su sueldo gastaba una parte y lo demás lo gastaba en las obras. Rojas llamó a Rafael Mena, jefe de obras de Lago Castor, y le dice que le entregue la retroexcavadora, lo que Mena le representó preguntándole porqué, a lo que Rojas le dijo que él era el dueño y que si no se la entregaba lo denunciaría por apropiación indebida, ante lo cual Mena accedió, provocándose con ello un atraso en la obra, y todo ello en circunstancias que Rojas estaba en ese momento tratando de que la obra fuere entregada a su empresa. Señaló que los materiales estaban disponibles en contenedores y que sólo faltaba la mano de obra. Labra y Curiqueo se llevaron los materiales para la empresa Grossman, pero cuando interpuso la querella, el 31 de diciembre de 2013, y se inicia la investigación en Carabineros comienzan los famosos informes técnicos y levantamientos, sin embargo 4 a 5 meses después que le habían cesado las obras. Refirió que a Flores lo vio tal vez un par de veces, al ITO lo veía en las obras. En cuanto a los estados de pago refirió que para tales efectos los estados de avance de las obras debían enviarse a Ignacio Labra para que canalizara los estados de pago, los cuales muchas veces fueron llevados por César Rojas a Carabineros, siendo éste quien retiraba los cheques. Respecto de los vehículos de alta gama y los terrenos y parcelas que se dijo había comprado, señaló que era mentira y que la prueba del juicio lo demostraría. Señaló que cuando había agotado su capacidad crediticia se presentó Carlos Bustos diciéndole que tenía un amigo que lo podía ayudar económicamente, que le podía conseguir 6 millones y que a cambio debía dejar un cheque por ese monto, enterándose posteriormente Carolina que no existía el prestamista y que ese dinero era para liberar retenciones del *factoring* para entregarlos a Carlos Bustos. De éste refirió que había estado tras la tramitación de un crédito hipotecario por parte de su madre y de otro crédito que estaba solicitando su hermana, ambos para que CGM tuviera con que terminar las obras.

Pizarro mantuvo dos (2) reuniones con Rojas, la primera en abril, en el café Tavelli, a la cual asistieron Carlos Bustos Méndez, Delgado, reunión de la cual sale la idea de postular a los cuarteles, siendo él posteriormente contactado por Méndez el 20 de abril por correo electrónico, en el cual se indicaban los cuárteles

a los cuales postular, apareciendo en la cadena de reenvíos el nombre de Rodrigo Carrasco Quiroga. Carrasco, Delgado y Bustos Prats realizaron toda la tramitación administrativa, entre ellos la obtención de las cuatro (4) boletas de garantía las tomó Rojas y otras dos Carrasco y Delgado, situación de la cual dijo el acusado no haber tenido conocimiento. Méndez lo invitó a una reunión en el Mall Florida Center con Rojas, a la cual antes hizo referencia, oportunidad en la que Rojas les dijo que habían sido afortunados de no haberse involucrado con Carrasco, Delgado y Bustos Prats porque ellos estaba involucrados en un caso de corrupción, sin embargo, en enero de 2013 Rojas contrató al ex capitán Bustos Prats, ingresándoselo a trabajar a su empresa, sin su autorización. Señaló que hubo una panificación para que CGM no pudiera terminar las obras, por ejemplo llevándose Rojas la retroexcavadora, sin la cual era imposible avanzar en las obras. Concluyó diciendo que CGM nunca efectuó pagos a funcionario público alguno.

Interrogado por su defensa, le exhibió los siguientes documentos de sus medios de prueba: **N°1**, certificado de título que señala que el 16 de agosto de 2004, el acusado recibió el título de constructor civil con especialidad en edificación; documento **N° 3, 5, 7 y 6**, los reconoce e indica que corresponde a contrato ampliación área Pre básico en colegio escuela 370 Polonia, suscrito por él y la municipalidad de Lampa,, de fecha 1° de dic de 2016; 2 de febrero de 2007, se le informa que debe pasar a firmar el contrato respectivo de adjudicación; obra suministro de agua potable sector Manuel Plaza, calle Ercilla Bajo, Lampa”, se le informa la adjudicación de la obra, por lo que debe concurrir a la municipalidad para la firma del contrato; Ord. 4/27, de 28 de febrero de 2007, firma contrato de mejoramiento, en el cual se le informa adjudicación del proyecto y que debe concurrir a firmar el respectivo contrato. Consultado refirió que esos contratos fueron algunos celebrados antes de la formación de la empresa CGM. **Se le exhibe a continuación los documentos N° 9, 4, 8 y 2** , los cuales reconoce y refiere de ellos que: el primero corresponde a la copia de la escritura de constitución de la empresa CGM, de fecha 15 de marzo de 2007, concurre él y una mujer de nombre Evelyn, radicándose la administración delegado en el primero; el segundo, Ord 04/184, materia, firma de contrato de suministro agua potable antes mencionado; el tercero, acta de recepción definitiva de fecha 24 de junio de 2008, del contrato de suministro de agua potable sector Manuel Plaza; el cuarto, lo reconoce y señala que corresponde al contrato de 12 de mayo de 2008, celebrado entre él y la municipalidad de Lampa, para la ejecución del proyecto

Ampliación Área Pre Básico Escuela 369 Polonia, más acta de recepción provisoria sin observaciones; certificado que da cuenta que CGM se encuentra inscrita en el Registro de Contratistas de dicha institución, documento emitido el 15 de mayo de 2012, suscrito por Félix Flores Santis, Coronel de Carabineros. De los **otros medios de prueba reproduce dos (2) DVD que se individualizan en los N° 1 y 2** de dicho acápite, los cuales resultaron inaudibles. Consultado el acusado al respecto refirió que reconoce la primera grabación, que en ella intervienen Rodrigo Carrasco Quiroga quien lo llama por teléfono, él estaba en Coyhaique, era 26 de octubre de 2012, alrededor de las 7,30 a 8,00 horas; en ella Carrasco le pregunta si va o no a cumplir ya que se le había adjudicado la obra de Villa Ortega, que se había enterado de la adjudicación por César Rojas, que los había puesto mal, “César me lo dijo, César me lo dijo”, que ellos habían hecho todo, que le habían conseguido el financista, que si no va el lunes a las oficinas de Fernando con 20 millones de pesos lo va a matar, que el dinero lo tenía que repartir entre Carlos Bustos Prats, el abogado Fernando Delgado y él mismo; señaló el acusado que no pagó el dinero que Carrasco le estaba pidiendo y que ese mismo día informó a Rojas lo ocurrido por medio de correo electrónico, respondiéndole que él iba a ver el tema y que él lo solucionaría. En cuanto a la segunda grabación refirió que en ella consta que lo llama el abogado Fernando Delgado y que lo amenaza con golpearlo “donde te pille” y hacerle daño a su familia; ese llamado lo hizo estando junto a Rodrigo Carrasco; de la segunda reproducción, también inaudible, señala el acusado que reconoce la conversación, se escucha la voz del abogado Delgado y la suya; en ella le dice que le presentó un financista, César Rojas, lo que no ocurrió sino que sólo éste estuvo presente en una reunión en la oficina del propio Delgado; una segunda reunión en el Tavelli y otra más en las oficinas del mismo Delgado. Se **le exhibe documentos números 16 y 17** de sus medios de prueba (transcripción de los registro de audio). Fueron leídos por el abogado de la defensa: conversación entre Delgado y Gutiérrez, el primero le dice al segundo que si no soluciona el tema entonces va a ir a Cuarteles a hablar con el Coronel Félix Flores y le van a contar lo de sus licitaciones; vas a caer preso tú y tu señora por el fraude que hizo contra ellos, Fernando Delgado lo amenaza reiteradamente con golpearlo donde lo pille; segunda conversación entre Rodrigo Carrasco y Gutiérrez, semejante tenor al anterior, le dice que sabe dónde tiene el galpón, “yo sé todo”, “te voy a hacer cagar a ti y a tu familia”, que tiene que ir el lunes a su oficina y pagarle 20 millones que corresponde a la comisión de él, de Méndez, de Delgado y de Carlos, “te voy a sacar la *conchesumadre*”. Consultado al tenor de la lectura si el acusado estuvo

o no en la reunión del Tavelli, respondió que no, pero que sí sabe que estuvo Renato Méndez, Carlos Bustos, César Rojas, Fernando Delgado, Rodrigo Carrasco Quiroga. Respondió que con Carrasco no tuvo una relación directa sino por medio de Renato Méndez. En cuanto a Carlos Bustos y Carrasco señaló que los vio relacionarse en la reunión antes mencionada. Negó haber pagado algún tipo de beneficio a Carabineros para obtener la adjudicación de las licitaciones. Se **le exhibe el documento N° 10, de la prueba documental**, el que el acusado reconoce, diciendo que se trata de un mandato General otorgado por él, en representación de la empresa constructora CGM, a César Orlando Rojas Gaete, comuna de Lampa, 24 de diciembre de 2012, segunda notaría de Colina, Gloria Ortiz Carmona, notario, *aparece mi firma*. A continuación la **defensa dio lectura** íntegra al mencionado documento, en especial las facultades otorgadas al mandatario. Consultado el acusado, este respondió que al día siguiente del otorgamiento del mandato viajó a Coyhaique, antes de irse acordaron con Rojas que sería éste el encargado de comprarla; se compró en la empresa SALFA; **exhibe el documento N° 42 de la prueba documental del ministerio público**: lo reconoce, señala que se trata de una factura electrónica de la empresa Salinas y Fabres S.A., de 28 de diciembre de 2012, a CGM Ltda., César Rojas, vendedor Claudio Maltés F., máquina retroexcavadora cargadora, precio con IVA incluido \$48.695.157. Consultado respecto del pago respondió que la máquina se pagó con (cheque por) \$20 millones y se firmaron letras a 30 y 60 días, aunque dijo no recordar exactamente el plazo por no haber él formado parte de la negociación. Se **le exhibe documento N° 73, de sus medios de prueba**, correo electrónico de 8 de enero de 2013, de César Rojas a Cristián Gutiérrez; el acusado lo reconoce, refiere que se trata del organigrama a que hizo mención durante su declaración; cuenta de correo de carlosbustosprat@gcorreo.com, 8 de enero de 2013; asunto: procesos; dirigido a miguel.gutiérrez@gfrabakar.cl, con copia a constructora CGM Ltda.; archivo adjunto: levantamiento basado en modelo EFQN. Se **le exhiben los documentos 39 y 40, de los medios de prueba de la defensa**, los cuales el acusado reconoce y señala que se trata de dos correos electrónicos, ambos de 10 de enero de 2013, de Carlos Bustos Prat a CGM Ltda., 9,37 horas; asunto: procesos; aclaración: hace unos días envíe este correo tentativo el cual no se encuentra validado para lo cual debe ser previamente aprobado por César Rojas y tú; fue enviado por error a tú hermano; el segundo correo, a las 16,07 horas; asunto: procesos; documento adjunto, ficha procesos; “Carlos, el gerente General soy yo”, firma Cristián Gutiérrez; con copia a César Rojas. A continuación se **le exhiben los documentos N° 75, 77 y 78, de sus medios de prueba**, los que el

acusado reconoce: tres (3) solicitudes de servicios, N° de serie 14436372, 14201105 y 11201106, dirigidas a Telefónica Móviles Chile S.A., por CGM Ltda., dirigida por César Rojas Gaete como gerente General de la empresa, con su firma, sin fecha de emisión pero con fecha de contacto 23 de enero de 2013. **Se le exhibe también el documento N° 65**, el cual reconoce el acusado, señalando que se trata de una copia de contrato de obra civil menor entre CGM y Carlos Aros Pacheco, suscrito por César Rojas Gaete en representación de CGM. Ltda., de fecha 10 de enero de 2013; objeto regularización mejora en calle Petrarca, comuna de Las Condes. Consultado si conocía a Carlos Aros Pacheco, respondió que no, y que tampoco participó en esa obra, pero que sí supo de dicha obra.

Se le exhibe el documento N° 785, prueba del ministerio público, el cual reconoce, señala que se trata de un *correo con datos adjuntos; procesos de cuarteles de 2012, enviado desde la cuenta mendez.renato@gcorreo.com, fecha 20 de abril 2012, 22,44 horas, dirigido a ccutiérrez Constructora CGM; asunto: calendario de licitaciones cuarteles; enviado desde iphone; cadena: rcarrasco (20-4-2012; 7,47 horas) a Méndez Renato, con copia a F. Delgado*. En la documentación adjunta, números 1 al 11, fecha de publicación, nombre licitación, fecha de cierre, visita a terreno, fecha de entrega, presupuesto asignado, quién lo ejecuta, región, comuna y responsable; N° 1) fecha de publicación 17 de mayo de 2012, retén Las Lomas; N° 2) fecha de publicación 27 de mayo de 2012, retén Lircay; N° 3) 17 de mayo de 2012, retén La Mina; N° 4) fecha de publicación 17 de mayo de 2012; N° 5) fecha de publicación 17 de mayo de 2012, retén Isla Santa María; N° 6) fecha de publicación retén 17 de mayo; N° 7) fecha de publicación 17 de mayo, retén Alto Jahuel; N° 8) fecha de publicación 17 de mayo de 2012, retén Linderos; N° 9) fecha de publicación 17 de mayo de 2012, retén Camarico; N° 10) fecha de publicación 18 de mayo de 2012, retén Paso Nevado; N° 11) fecha 18 de mayo, retén Mariposas. Consultado por la ejecución de los mencionados proyectos respondió que *no se ejecutaron*, que el cuadro le fue enviado por Renato Méndez para ofrecerle esos trabajos. **Se le exhibe documento N° 18, prueba de la defensa**, lo reconoce, señala que se trata de una cartola, la N° 9, movimientos cuenta corriente N°000066550257, Banco Santander, constructora CGM, período 28 de junio a 31 de julio 2013, aparecen 12 transferencias efectuadas el 3 de julio, por \$5.000.000 cada una, transferidos a la cuenta de César Rojas; un día antes, el 2 de julio de 2013, aparece que se recibe un abono de \$62.000.000 (lectura del abogado defensor: saldo inicial \$183 mil pesos y fracción; cheques por 134 millones, abonos 137 millones, saldo final 0; 2 de julio,

abono \$62.563.577, saldo \$62.546.686, fecha 2 de julio, pago cuenta crédito N° 4202700068, saldo \$60.016.618; 2 de julio intereses línea de crédito, \$59 millones y fracción; 3 de julio traspaso a depósitos y abonos por \$54.000.000; 3 de julio, cargo de \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000; 3 de julio, cargo \$5.000.000, saldo 0; 3 de julio, cuota crédito \$2.818.882; 4 de julio, transferencia Rojas César \$4.500.000, entre otros movimientos, todos los cuales fueron leídos en su totalidad a petición de la defensa de los acusados Bustos Morgado, y cuyo tenor consta en el registro de audio respectivo. Preguntado el acusado por los 12 giros que suman \$60 millones de pesos, respondió que eso fue porque el 28 de junio se hizo una facturación por estado de pago de Carabineros, refiriendo que el día martes siguiente Carolina le informó que los fondos estarían disponibles al día siguiente: Sin embargo, el mismo 2 de julio, Rojas le llamó informando los giros y solicitud de entrega de la retroexcavadora y el auto a fin de garantizarle que se le devolvería su dinero. Al día siguiente fue a la oficina de Rojas, allí éste le reiteró la exigencia del día anterior, estando presente además Carlos Bustos Prat. Señaló que posteriormente concurrió con Rojas a una notaría para que le transfiriera la retroexcavadora. Se **le exhibe correo electrónico contenido en el N° 9, de otros medios de prueba de la fiscalía**, el cual reconoce y señala que se trata de un *correo electrónico enviado por Patricio Lillo Ojeda, Banco Santander, 24 de octubre de 2013, asunto: transferencias desde el 3 al 30 de julio de 2013, a las que se dio lectura: \$5.000.000 a Rojas Gaete, César, fecha 2 de julio 2013, 7,13 horas pm; y otras 9, mismo destinatario, fecha y monto; otras 23, por diversos montos, efectuadas entre el 4 de julio 2013 y 29 de julio del mismo año, depósitos realizados a la cuenta corriente de la empresa constructora CGM.* Consultado por las transferencias respondió el acusado que correspondían a transferencias que hizo Rojas, pero que no sabe cómo las hizo porque al consultar al Banco *me dijeron que era yo quien aparecía haciendo las transacciones.* Señala que le habrían suplantado su identidad. A raíz de lo anterior concurrió a notaría a revocar el mandato que había otorgado a Rojas. En cuanto a la transferencia de la retroexcavadora, ésta tuvo lugar el 4 de julio de 2013. Al efecto se **le exhibe documento N° 45, prueba documental de la fiscalía**, el cual reconoce y refiere que se trata de una copia de escritura pública, de fecha 4 de julio (no obstante señalar que la fecha fue el 3 de julio), entre CGM y César Rojas Gaete, recaída en una máquina retroexcavadora, precio 20 millones de pesos que el comprador paga

al contado, lo que negó ser efectivo porque dicho pago no tuvo lugar. **Se le exhibió documento N° 63, de las pruebas del ministerio público**, el cual reconoció, y señalóa su respecto que se trataba de copias de dos pagarés por \$25.000.000 cada uno, suscritos el 3 de julio de 2013 por el acusado Gutiérrez en representación de constructora CGM, a favor de César Rojas Gaete, vencimientos 10 de agosto de 2013 y 10 de octubre del mismo año. **Se le exhibe documento N° 11, de sus medios de prueba**, el cual reconoce el acusado, refiriendo que se trata de la escritura pública ante notario Gloria Ortiz Carmona, revocación de mandato General, antes mencionada, cuya fecha es el 4 de julio de 2013, añadiendo que la revocación tuvo lugar dos (2) días después de que César Rojas sacó los dineros de CGM sin autorización, documento del cual la defensa hizo lectura. Consultado por el destino de la máquina, contestó que Rojas se la quedó, la retiró de las obras que estaba realizando, lo cual perjudicó gravemente el trabajo, además de las consecuencias económicas. **Se le exhibe el documento N° 40, de sus medios de prueba**, el que reconoce y señala que se trata de un correo electrónico enviado por César Rojas el 26 de julio 2013, a las 17,40 horas, dirigido a constructora CGM, Cristián Gutiérrez, asunto retro: me resulta imperiosos trasladar la máquina a Santiago para su venta, y que informes que te la llevarás con motivo de otras obras. Consultado por los detalles, explicó que Rojas requirió apoyo de Carabineros quienes se trasladaron hasta donde estaba el jefe de obras, Rafael Mena, ordenándole telefónicamente Rojas que debía hacer entrega de la maquina o de lo contrario lo denunciaría por apropiación indebida. Finalmente la retroexcavadora se la quedó Rojas para él. **Se le exhibe la documental N° 84, de la prueba del ministerio público**, la cual reconoce el acusado, refiriendo que se trata de las imágenes de tres de los cinco cheques que entregó en blanco a su madre antes de irse a trabajar al sur, conforme al siguiente detalle: cuenta corriente N° 45948747, BCI, todos Serie B12 N° 3457514, 3457517 y 3457518, de 3, 4 y 8 de enero de 2013, por por \$19.000.000, \$6.000.0006 y \$3.300.000, cobrados por Ximena Valdés y Claudia Segura L., a quienes dijo no conocer pero sí no conoce pero sabe que trabajaron en Carabineros y para Rojas. Consultado por qué medio César Rojas le solicitaba dineros, respondió que lo hacía por correo electrónico. Al efecto se **le exhiben los documentos N° 35 y 51, de sus medios de prueba**, los cuales el acusado reconoce, señalando: el primero es un correo de César Rojas Gaete, de fecha 26 de septiembre 2012, a las 9,24 horas am, dirigido a constructora CGM; motivo: consulta, *de acuerdo con lo conversado ayer me consultan por retorno de la inversión, para ello consideramos dos cuotas cada, lo que se podría con los dos primeros estados de avance el*

financiamiento, podría hacerse en dos cuotas, cada una por 30 millones. Consultado acerca de a qué inversionistas se refiere el correo, respondió que los inversionistas eran Félix Flores Santis, Christian Bustos Morgado y la esposa de Flores; y del segundo documento, refirió que se trata de un correo electrónico enviado desde la cuenta de César Rojas: leído dice: *24 de mayo de 2013, 12,44 horas, dirigido por César Rojas a Cristián Gutiérrez: asunto: paso de materiales a Isla Huar: ok Christian, de acuerdo con lo conversado Carlos empezara el lunes un proceso de revisión de cuánto están costando las obras y así hacer un comparativo entre los proyectos, ingresando la variable tiempo de ejecución, con ello podríamos proyectar utilidad para cada una de las obras; estoy en una situación de emergencia y requiero una transferencia de \$2.500.000 lo antes posible, ojalá hoy.* Consultado acerca de la frecuencia de este tipo de solicitudes. Respondió que a fines de junio de 2012 comenzó a relacionarse comercialmente con Rojas. En relación a la frecuencia de las solicitudes de dinero, la defensa **le exhibe el documento N° 98, prueba del ministerio público**; se trata de un certificado de Bci a solicitud suya con las transferencias recibidas por César Rojas y transferencias realizadas por y para César Rojas: Juan José Álvarez Astete, ejecutivo bancario, RUT origen 7.615.890-1: a) transferencias a César Rojas: 21 de agosto, beneficiario César Rojas, monto 5 millones; 31 de agosto \$4.200.000, agosto 31, año 2012; devolución boleta o IVA; \$4.200.000, septiembre 29 del año 2012; devolución boleta 5 millones oferta Villa Ortega; Octubre 21, año 2012; 5 millones ídem noviembre; diciembre mismo monto; \$800.000 enero 2013; \$4.000.000 millones; febrero 7, año 2013; 3.500.000, febrero 9 del año 2013; 5 millones marzo 2013; \$1.500.000 marzo 5 del año 2013; \$febrero 2.000.000; \$5.000.000, marzo 15, año 2013; \$5.000.000 marzo 14 2013; \$1.953.355, marzo 26, año 2013; \$5.000.000, marzo del año 2013; \$5.000.000 marzo 29, año 2013; \$2.000.000, marzo del año 2013, \$1.452.647, abril 5 de 2013; \$2.000.000 abril 2013; 2.000.000 mayo 15, año 2013; \$3.000.000 mayo 2013; \$2.500.000 mayo 25 del año 2013; \$2.000.000 mayo de 2013; \$200.000 junio 2013: \$953.680, junio 5, 2013; \$5.000.000 junio 14 del año 2013; \$5.000.000, junio 14 de 2013; \$5.000.000, junio 14 del año 2013; \$350.000, julio 11 del año 2013; \$400.000, junio 29, año 2013; \$2.000.000 agosto del año 2013; \$2.000.000 septiembre de 2013, b) transferencias recibidas: \$5, \$16, \$10 millones, año 2012, César Rojas, destino CGM; \$5, \$5, \$4 y \$4 millones y medio de pesos, diciembre 2012; \$2 millones, 15 diciembre del año 2012; \$2.500.000 diciembre de 2012; 5 millones, enero de 2013.

Respecto de la boleta de fiel cumplimiento Villa Ortega, señaló que *estaba Labra retirando el dinero, además de él, y dos carabineros que se les acercaron*, quienes le preguntaron si ellos eran quienes estaban retirando dineros a nombre de “mi mayor Puri”, esto es, Purísima Toledo, cónyuge de César Rojas. Refirió el acusado que esa persona depositó \$14.900.000 para obtener la boleta de garantía mencionada. Dicho depósito fue entre septiembre y octubre de 2013, y ella lo hizo a nombre de Rojas. **Se le exhiben, de las pruebas de la fiscalía, los documentos N° 46 y 98** (dos cartolas, N° 11 y 13, y cartola N° 8, respectivamente), las cuales reconoce y señala en cuanto a su contenido: cartola N° 11, de Constructora CGM Ltda., Banco Bci, período 28 septiembre de 2012 a 31 de octubre del mismo año; en ella aparece el depósito o transferencia de Purísima Toledo; la cartola N° 8 del banco Bci, Constructora CGM, período 29 junio a 31 de julio 2012, en la que aparecen los depósitos que se hicieron por boletas de garantía, dos por Fernando Delgado y Carrasco y otras dos por César Rojas Gaete, devolución de dinero mediante cheques y transferencias; aparece un cheque de 30 de julio de 2012, por \$23.000.000 millones de pesos, cobrado por otro banco, cheque girado por CGM para CGM. A continuación se hizo lectura de las cartolas: **i) N° 11**, movimientos: 17 de octubre 2012, abono otro banco por transferencia en línea, por \$5.000.000 millones de pesos; misma fecha, abono por otro banco en línea \$5.000.000 millones; misma fecha abono por \$5.000.000 millones; misma fecha y motivo, por \$2.900.000; misma fecha, cheque cobrado por caja \$1.000.000; misma fecha abono por boleta de garantía en efectivo por \$14.450.000; misma fecha cheque por caja \$18.500.00; 19 de octubre abono por boleta de garantía efectivo \$11.300.000; 29 de octubre 2012, abono transferencia otro banco por \$5.000.000; 31 de octubre cheque depósito otro banco por \$35.000.000 millones; **ii) cartola N° 13**, movimientos: fecha 3 de diciembre de 2012, transferencia de P. Toledo, depósito y abono por \$5.000.000; 17 de dic 2012, transferencia de P. Toledo, \$1.000.000; mismo fecha otra transferencia de P. Toledo por el mismo monto; 21 de diciembre de 2012, transferencia de C. Rojas por \$1.500.000; 21 de diciembre de 2012, transferencia de constructora por \$1.00.000; 27 de diciembre de 2012, abono de crédito N° 12699938967, \$20.006.026; **iii) cartola N° 8**, movimientos: 24 de julio 2012, abono por boleta garantía efectivo \$11.700.000; 24 de julio 2012, abono por boleta de garantía efectivo \$10.680.000; 24 de julio mismo año, ídem, \$11.700.000; 24 de julio abono por \$11.300.000; 24 de julio, depósito cheque otro banco por \$1.5000.00; 24 de julio trasferencia a otra cuenta cargo por transferencia \$9.00.000; misma fecha 24 de julio cheque cobrado por caja \$13.380.000, Lampa; 26 de julio, Lampa,

depósito cheque por \$4.692.420; 27 de julio cheque depositado *Detenta* por \$4.492.420; 27 de julio transferencia de fondos por otro banco en línea por \$200.000; misma fecha \$1.092.420, cheque cobrado por caja; misma fecha y motivo, cheque por \$3.613.480; 30 de julio cheque cobrado por otro banco por \$23.000.000; 30 de julio cheque cobrado por otro banco por \$235.489; 30 de julio transferencia de fondos autoservicio \$4.692.420; 31 de julio abono por transferencia de otro banco en línea por \$2.000.000).

Consultado por el financiamiento de las otras boletas de garantía refirió que César Rojas hacía efectiva una boleta y sacaba otra boleta de garantía, se trataba de una recirculación de dinero. En total depositó \$52.900.000, de los cuales \$14.900.000 fueron depositados por Purísima Toledo y el resto por César Rojas. Refirió que este último pidió una ganancia del 20% de lo que él invirtiera. Tal inversión, incluida la de Purísima, le fue devuelta a Rojas mediante varias transferencias directas, en fechas que no recordó pero sí que terminaron de hacer antes del mes de marzo de 2013, época a la cual Rojas ya había recuperado los dineros invertidos. Añadió que después de esa fecha Rojas siguió sacando dineros diciendo que era para los *inversionistas*. Consultado por qué no hizo nada respondió que se debió a que él no llevaba el control efectivo de la administración sino que César Rojas. Señaló que de la cuenta de CGM ingresaron a la de Rojas más de \$300.000.000, dinero que salía de los estados de pago de los retenes. Añadió que hubo pagos en efectivo y cheques cobrados por Rojas, v.gr., como los que reconoció en la audiencia del día anterior. Consultado acerca del financiamiento para el término de las obras, en circunstancias que Rojas había retirado los dineros de la empresa el 3 de julio de 2013, respondió que lo hizo con préstamos propios, de la familia y de la empresa. **Se le exhibieron los documentos 21, 22 y 23, de sus medios de prueba**, los cuales reconoció: el primero, da cuenta de un crédito de consumo tomado por el por \$20.950.00; el segundo, corresponde a un estado de cuenta de crédito trimestral del banco Santander de CGM por \$60.000.000, año 2013; el tercero, otro estado de cuenta crédito comercial CGM, año 2013, “nuevo crédito”, por 56 millones y fracción. A continuación se hizo lectura completa de los citados documentos. Consultado por las expresiones “A” y “B”, respondió que así se refería Rojas a sus contactos e inversionistas, enterándose posteriormente que correspondían a Félix Flores y a Christian Bustos Morgado, respectivamente. Señaló que Rojas decía que se refería a ellos de esa forma *por razones de orden*, hablaba de “sus cooperativas”, entendiendo el acusado que *se trataba de negocios propios* y que por tanto él no

debía saber más a ese respecto pues lo que a él le interesaba era que Rojas cumpliera con el financiamiento a que se había comprometido. Señaló también que supo quiénes eran “A” y “B” cuando Rojas le dijo que le traspasara la empresa, agregando que ese mismo planteamiento le hizo el abogado Rodrigo Morales, quien le dijo, en octubre de 2013, que mejor era que se quedara trabajando para Rojas por un sueldo de \$1.500.000. Se **le exhiben los documentos N° 33, 35 y 36** de sus medios de prueba, los cuales reconoce y refiere: a) el primero corresponde a un correo de César Rojas enviado desde su cuenta, cesarRojas@vtr.net, fecha 11 de enero de 2013, a las 18,06 horas, dirigido a constructora CGM; *asunto: construcción casa Cristian Lay (cliente de CGM): asunto: hablé con B, el ITO está tranquilo*; factura adjunta; b) en cuanto al segundo dijo reconocerlo y que correspondía a enviado por Rojas desde su cuenta cesarRojas@vtr.net de fecha 7 de septiembre 2012, a las 9,24 horas am, dirigido a CGM Ltda.; *asunto: consulta*; y c) en cuanto al tercero señala que corresponde a otro correo enviado por César Rojas desde su cuenta cesarRojas@vtr.net, domingo 23 de septiembre 2012, 10,55 horas, a constructora CGM Ltda.; *asunto: transferencia*. Acto seguido se hizo lectura completa a los tres documentos.

Continuó su declaración diciendo que César Rojas le había dicho en una oportunidad que sus *inversionistas tenían mucho conocimiento acerca de licitaciones*. Consultado respecto a porqué B se comunicaba con el ITO, respondió “ahora sé”, correspondía a Francisco Pizarro, con el cual Rojas se comunicaba para darle instrucciones. Nunca supo que en la “cooperativa” había Carabineros.

Consultado por Renato Méndez, señaló que lo conoció mientras estudiaba en Inacap, y que era su amigo. Supo que se contactaba con Rojas para efectos de planificación de las obras. Méndez le presentó a Delgado y a Carrasco, con quienes se reunió en abril de 2013, concurriendo a dicha reunión “el chino”, a quien conoció en ese momento. Se **le exhibe el documento N° 786**, prueba de la fiscalía; lo reconoce el acusado, señala que se trata de un correo de la cuenta de mendez.renato@gcorreo.com, de fecha jueves de 5 de julio de 2012, 8,36 horas; *asunto: consulta (reenvío de una consulta) con datos adjuntos: aclaratoria, dirigido a CGM; de cesarRojas@vtr.net, consulta a mendez.renato@gcorreo.com: Renato, solicito revises la carta adjunta y me hagas tus comentarios, esto está coordinado y puede que nos beneficie, comentarte que vienen 12 más en la 7ª Región, El Olivar (313), Puyehue (390), Hualleco (300), Villa Ortega (390), Lontué (303),*

*Itahue (234), Santa Ana (303), Coronel de Maule (234), Estación (236), Puente Negro (338), La Mina (390). En el adjunto: A General Carrasco H.: me dirijo a Ud. a fin de que de acuerdo con Resolución N° 601, de 19 de junio de 2012, de esa Dirección de Logística de Carabineros, se estableció un acto administrativo que perjudica a nuestra empresa ya que declara desierta nuestra licitación, ejecutado por Departamento de Cuarteles. Consultado por la fecha de la reunión en Mall Florida Center, respondió que tuvo lugar aproximadamente una semana después del correo, añadiendo que después de este correo se enteró que Méndez tenía relación con Rojas desde el año 2001, agregando que en la reunión a la que llegó "el chino", Méndez no le fue presentado como su amigo. Consultado si en el mes de enero de 2013 sabía quiénes eran A y B, respondió que no. Se **le exhibe el documento N° 776**, prueba del ministerio público, lo que reconoce y señala que se trata de un correo enviado a constructora CGM desde la cuenta de cesarRojas@vtr.net, de fecha 24 de enero de 2013; 00,04 horas; asunto: reordenamiento de créditos personales Cristián Gutiérrez y CGM; le dice César que *vio el tema de los pagos con Carolina y que faltaba incluir sus créditos, los de César, de sus inversionistas, de Asesorías AID y posiblemente "I"*. Explicó que este correo nació de una conversación con su hermana Carolina. Hizo referencia a un correo dirigido a ella, de fecha 23 de enero de 2013, 12,32 horas: cgutierrez@constructoracgm.cl: *Carolina, necesito que me envíes un programa con las fechas de crédito comprometidos, míos y de la constructora..., envíamelos antes. César, ayuda a Carolina*. Consultado por las funciones de Carolina, respondió que la llevó a trabajar a CGM para que *le cuidara la billetera*, pero fue excluida por Rojas ya que se reunía a puerta cerrada con Bustos Prats y otros, diciendo que *a mí no había que molestarme porque lo mío era la construcción*. Añadió que se enteró en junio de 2013, por medio de su hermana, que había problemas con la administración y con ella. Se **le exhibe el documento N° 49, de sus medios de prueba**, el cual reconoce y refiere que se trata de un correo de César Rojas, fecha 5 de junio de 2013, 21,26 horas, para CGM Ltda., asunto: *solución*; firmado por César Rojas Gaete. Se dio lectura íntegra. Consultado porqué en él Rojas se molesta, responde que se debió a que Rojas no quiere que lo controlen, particularmente que no le pidieran comprobantes para transferencias. En relación a la entrega de la retroexcavadora y firma de dos pagarés que le exigió Rojas, se **le exhibe el documento N° 63, prueba del ministerio público**, el cual reconoce, señala que se trata de dos (2) pagarés, los que al tenor de los mismos, conforme lectura que de ellos hizo la defensa, aparece que fueron firmados por \$25.000.000, fecha 3 de julio de 2013, librado a César Rojas Gaete,*

*deudor constructora CGM Ltda., firma como avalista Cristián Gutiérrez Martínez; Santiago, Lampa; autorizados ante notario Elías Jarufe, fecha pago de impuesto 4 de julio de 2013; ambos documentos del mismo tenor y data, con fecha de vencimiento 10 de agosto y 10 de octubre de 2013, respectivamente. Consultado por el pago de los pagarés refirió que Rojas lo demandó ante el Juzgado de Colina. Consultado nuevamente por el destino que habría tenido la retroexcavadora, reiteró no saberlo, **exhibiéndosele el documento N° 77, pruebas del ministerio público**, el cual reconoce ya que se trata de una publicación que hicieron César Rojas y Miguel Gutiérrez para vender una *grúa horquilla de 7 toneladas, año 2012, precio \$6.000.000, comunicarse con Miguel Gutiérrez D., teléfono, Brabacar; “Comercializadora César Rojas Gaete IRL”*. Consultado por la persona de *Miguel Gutiérrez*, respondió que fue llevado a CGM por César Rojas a partir de enero de 2013, siendo contratado por CGM, firmando César Rojas el contrato, a nombre de la empresa, pero sin su autorización ni visado, aunque posteriormente a su contratación el jefe de personal le pidió el visado del contrato pero estando este ya firmado. Respecto de Carlos Bustos Prat señaló no haberlo conocido sino a partir de la reunión en la oficina de Delgado. Éste trabajaba para Rojas en labores de *factoring* y compra y arriendo de maquinarias. Posteriormente Bustos demandó a CGM por despido injustificado, en circunstancias que no supo que hubiera estado contratado por CGM, sin perjuicio de pagos que se le hacían con cargo a la empresa. Supo que Carlos Bustos había sido capitán de Carabineros y que lo echaron por un fraude. Respecto de la boleta de garantía que no pudo renovar luego que Rojas sacó los \$62.000.000 de la cuenta de CGM, **le fueron exhibidos los documentos N° 38 y 39, prueba de la defensa**, los que reconoció, señalando respecto de ellos que se trataba de dos (2) correos electrónicos enviados el 19 de agosto 2013, a las 14,12 horas, a cgutierrez@constructoracgm.cl: asunto: boleta Isla Huar: *Cristián, el viernes envíe documentos relacionados con la boleta que hay que cambiar, en todo caso es necesario que nos reunamos*; y el segundo, de 16 de agosto 2013, asunto: *cambio de boleta: Cristián, me llamaron de Carabineros para regularizar la boleta de Isla Huar, la que debe ser entregada a cambio de otra, por el mismo monto, además de incorporar unos costos en Isla Huar y Castor*.*

En relación a la persona de apellido Curiquéo, explicó que se trataba de una persona que trabajaba con él, y que le informaba lo que iba sucediendo en las obras, lo cual cumplía vía telefónica, correos electrónicos y fotos del estado de avance de las obras. Se **le exhiben** (proyectan) **las fotografías del N°11, otros**

medios de prueba de la fiscalía: N° 038, corresponde al retén Villa Ortega, no recuerda quien la tomó, alguien de la empresa, fue tomada aproximadamente a finales de agosto a principios de octubre; N°0387, tomada a finales de agosto, seguramente por Fernando Albistur, batería de calefón (3), adquiridos por CGM; N°0389, un radiador del cuartel, se hizo mediante un *addeundum*; N°0390, es una foto antigua, corresponde al retén de Villa Ortega, sector de cocina, *es de mucho antes del mes de agosto*; son los muebles de cocina pero sin puertas ni cubiertas; N°0392, corresponde a un servicio higiénico con artefactos y sistema eléctrico funcionando, corresponde a Villa Ortega, es de antes de octubre; N°0393, misma anterior pero desde otro ángulo, se observa que se encuentra en uso; N°0395, escalera; N°0396, tablero eléctrico obra Villa Ortega, *es de mucho antes de octubre, ello porque falta pintura en el muro de apoyo*; N°0397, otra vista del tablero; N°0398, caja escala, *antes de octubre*; N°0399, no la reconoce; N°0400, otra vista de la caja escala, *anterior a agosto*; N°0401, Pamela Beltrán, administradora de Villa Ortega, tomada *antes de octubre*, “agosto fácilmente”; N°0405, descarga de baño; N°0406, artefacto sanitario al costado de un calabozo; N°0407, rejilla captadora de agua sector baño calabozo, *tomada mucho antes de agosto*; N°0408, no la reconoce; N°0409, vista ventana retén; N°0410, Villa Ortega, mostrando el estado de la obra en ese momento, *tomada en julio o agosto, o tal vez antes, corresponde a un avance cercano a 98% de las obras*; N°0411, dependencia del cuartel *con ventanas, radiador, puertas, faltando desmanches*; N°0412, dependencia sanitaria terminada (radiador y lavamanos instalados), *en proceso de desmanche; tomada antes de agosto de 2013*; N°0415, Villa Ortega, artefactos de protección contra incendios; N°0416, pasillo cuartel Villa Ortega, puerta del fondo con vidrio mitad de la puerta, piso cubierto para protección; N°0417, habitación con radiador y ventana terminada; N°0418, ídem, pero con dos ventanas y un radiador; N°0427, otra vista del tablero eléctrico; N°0428, habitación en proceso de retoque (presencia de maestro); N°0431, llaves a nivel de suelo para manejo de calefacción central; N°0432, *foto bastante antigua, tal vez mayo, abril de 2013, Villa Ortega, en proceso de tizado*; N°0433, casa anexa Villa Ortega, estado de la fundación, tomada aproximadamente en mayo; N°0434, misma anterior pero tomada desde más lejos; N°0435, ingreso retén; N°0436, artefacto calefactor a leña y un radiador mural; N°0438, habitación cocina embalada; N°0441, segunda zona de cocina con artefactos (cocina y lavaplatos) en proceso de instalación; N°0448, *sala de baño completo, con radiador, no sabe si corresponde al retén o a la casa anexa.*

Se le exhiben fotos del cuartel Coyhaique: Foto N° 0751, Isla Huar, estructura obra gruesa, panel sip, corresponde aprox a julio de 2013, herramientas (betonera), materiales tapados, acopio materiales-serchas (carabinero); foto no corresponde a la finalización de la obra; foto 0752, casa anexa retén Villa Ortega, revestimiento y cubierta al 100%, faltan terminaciones de los aleros, material protegido por nylon para continuar el trabajo, 2013, julio aproximadamente; foto 0753, acercamiento de la anterior con ventanas (apertura horizontal) instaladas, julio 2013, estado avance 98% aproximadamente; foto 0754, misma que las dos anteriores, otra vista, tomada en julio 2013; foto 0755, estructura de caballerizas Isla Huar, tomada aprox julio, más acopio material cubierta con nylon; en septiembre quedó terminada al 99%; foto 0756, bodega que construyó con materiales de desecho, la empresa para guardar materiales y elementos de oficina, Isla Huar; foto 0757, otra vista de la casa anexa con la caballeriza de fondo; tomada en junio; foto 0758, otra vista Isla Huar, materiales al fondo, tomada en junio 2013, calculó que faltaba un mes y medio para el término de la obra; foto 0768, Isla Huar, vista interior de habitación con volanita a la vista y encielado pendiente, julio 2013; foto 0769, exterior Isla Huar, muros (bloques) a la vista y serchas; foto 0770, otra vista de la obra gruesa, junio aproximadamente; 0771, faena de terminación de radier fresco, con caja eléctrica piso al descubierto; foto 0775, zona de calabozo, pasillo obra gruesa, junio; 0783, casa anexa isla Huar, terminada faltando dos planchas de aleros, andamios y materiales a la vista cubiertos con nylon; foto 0792, caballerizas isla Huar terminada y pintada; foto 0999, Villa Ortega, camión destinado a transporte de materiales, al costado estructura estacionamiento (90% mayor valor del cotizado), incompleta, color verde, tomada en septiembre aproximadamente, 100% terminada, faltan 2 puertas, sin pestillos; foto 1000, Villa Ortega caballeriza, terminada en mayo; cerca de rollizos; antena satelital (la contrata CGM para mantener comunicaciones); foto 1001, Villa Ortega, cerco de rollizos perimetral, agosto aproximadamente; foto 1002, vista de costado retén con cerca de rollizos y obra sanitaria entre medio terminada, septiembre 2013 aproximadamente; foto 1003, labores de drenaje y ductos de agua en bruto, a la vista; canalización de las aguas; foto 1008, Villa Ortega, 100% terminada la obra, obras exteriores, movimientos de tierras (calle o sendero); foto 1015, otra vista, terminada, esclera en altura, septiembre 2013; foto de la cocina terminada y con artefactos; foto 1032, retén Villa Ortega 100% terminada; foto 1037, sala de bombas de Villa Ortega, ejecutado en junio 2013; foto de la sala de caldera, julio de 2013, Villa Ortega; foto 1072, roperillos, 99,9%, de avance, septiembre inicios; foto 1073 baños del personal 100% terminados,

foto 1079, Retén Coyhaique Alto, obra gruesa terminada, junio 2013; foto 1081, otra vista; foto 1085, caballerizas, fundaciones; foto 1101, obra gruesa casa anexa Coyhaique Aalto, mayo 2013, sólo faltan artefactos; foto 1103, otra vista del cuartel Coyhaique Alto; foto 1140, Lago Castor, mayo 2013, 100% estructura de muros, total de materiales acopiados para la cubierta, casa anexa con cubierta, 100% terminada dicha partida; foto 1145, otra vista cuartel Lago Castor, mayo 2013, muros 100%, sin serchas ni cubiertas, acopiadas en el suelo; foto 1181, retén Villa Ortega, mástiles de bandera, 100% terminada, suelo con graVilla, septiembre 2013; foto 2.192, Lago Castor, mayo 2013, 100%, cubierta casa anexa, muros exterior se ven terminados, recubiertos y con 100% ventanas instaladas.

Confirmó que fue expulsado de las obras y que quedaron materiales en las obras. Al efecto se **le exhibe el documento N° 3, prueba de la fiscalía**, el cual reconoce y señala que se trata de una copia del listado de materiales del retén Lago Castor, retiradas por la empresa Grossman SA. Se dio lectura íntegra: a) fecha 14 de noviembre de 2013, retira Francisco Pizarro: dos cintas *aluban*, 8 fragües arena, 1 bolsa con 10 aldabas de closet, un soplete, serrucho, yana, hervidor eléctrico, dos bidones plásticos; destino: Villa Ortega; b) fecha 18 diciembre de 2013, retira Ignacio Labra Moscoso (por Grossman): 2 monomandos tinas, 25 kilos de clavos, 2 galones anticorrosivos, sifones y vanitorios, picota, arnés, 5 siliconas; destino: tenencia Coyhaique Alto; c) 19 de diciembre de 2013, retira Ignacio Labra Mosco (por Grossman), destino Coyhaique Alto; d) 19 de diciembre de 2013, retira Eduardo Curiqueo: bolsas de estuco, destino Coyhaique Alto; e) 5 de enero 2014, retira Eduardo Curiqueo, 10 andamios, bandejas y tirantes; f) 12 de enero 2014, retira Ignacio Labra (Grossman), 60 tablas, 8 centros de puerta, destino Coyhaique Alto; g) 15 de enero 2014, retira Eduardo Curiqueo: 10 planchas vulcanita, 5 listones cepillados con destino Coyhaique Alto; h) 16 de enero 2014, retira Eduardo Curiqueo: 4 semipedestales lavamos, caja de tornillos 100 unidades, destino Coyhaique Alto; i) 21 de enero 2014, retira Eduardo Curiqueo: tablero eléctrico del retén y de la casa anexa, 60 cajas derivación, 4 llaves de paso de media campana, 2.000 tornillos, un lavamanos semipedestal y un pedestal; destino tenencia Coyhaique Alto; j) 21 de enero 2014, retira Eduardo Curiqueo: 500 tornillos, 100 metros de cable de 1,5 color blanco, 200 metros cable azul, verde, rojo y negro, 240 metros de 2,5 color rojo, 50 metros cable color verde, 150 metros de cable color azul, 150 de color negro, 230 metros cable blanco, 50 tinetas, 4 sifones lavamanos cromados, 6 jaboneras, 4 duchas antivandálicas, 2

desagües y un sifón lavaplatos; destino: tenencia Coyhaique Alto; k) 8 de febrero 2014, retira Eduardo Curiqueo: 1 wc antivandálico, 1 barra de baño para discapacitados, 20 enchufes, 4 WC con descarga a muro, halógenos, 10 esquineros, destino tenencia Coyhaique Alto; l) 8 de febrero 2014, retira Eduardo Curiqueo: 1 WC discapacitados, 4 lavamanos, 4 semipedestales, 5 estanques WC; destino Coyhaique Alto; m) 10 de febrero de 2014, retira Eduardo Curiqueo: 20 cajas de porcelanato color gris; destino Coyhaique Alto.

Consultado al tenor del documento reconoció que esas cosas corresponden “100%” a CGM por haberlas comprado. De los nombres que aparecieron en la lectura dijo reconocerlos a todos. Los dos primeros trabajaban para CGM, Labra era jefe de proyectos, encargado de recabar el estado de los avances de los estados de pago; “se coludió con Rojas, armaron un cuento” para que CGM no pudiera continuar con las obras y lo echaran. Esta persona se incorporó a la empresa de César Rojas, empresa Grossman, como jefe de obras. En cuanto a Curiqueo, este era el jefe de obras de Isla Huar, se puso a trabajar con Rojas en su empresa Grossman, junto con Carlos Bustos. El nombre de Francisco Pizarro también lo reconoce, corresponde al “ITO anterior”. Los materiales los ocupó Grossman para que terminar las obras que le fueron adjudicadas por trato directo. Esos materiales no fueron ocupados en Lago Castor porque esa obra no se le adjudicó a Grossman, por lo que los materiales quedaron disponibles en ese lugar. Los materiales del listado los avalúa “sobre \$200.000.000”. Tales materiales fueron comprados en Santiago y trasladados hasta el lugar de las obras a costo de CGM, por tanto Grossman no pago la logística ni los materiales. Dijo conocer a algunos de los socios de Grossman, por ejemplo César Rojas (“está presente en la sala”).

Se le exhibe documento N° 36, prueba de la fiscalía, consultado si los reconocía respondió “por supuesto”, explicando que se trata de varios cheques girados a nombre de CGM, “factorizaciones” y “sesiones de factoring”.

Consultado el acusado respecto a las personas que se mencionan en los documentos indicó conocer el nombre de las mujeres, Claudia Segura y Ximena Valdés. Ésta última era secretaria Rojas, retiró los cheques del primer estado de pago, por \$81.000.000. En el caso de Claudia Segura, señaló que era una ex funcionaria de Carabineros, la cual se fue a trabajar a la empresa de César Rojas;

aparece cobrando cheques de CGM Ltda., dos cheques. Consultado por el nombre de Abelardo señaló que era un colaborador de Rojas, no lo conoce de vista, tampoco a las mujeres, sólo los escuchó nombrar.

Interrogado por el ministerio público acerca de las imágenes de los cuarteles señaló que algunas de ellas eran suyas. Al efecto se **le exhibe las imágenes contenidas en el N° 11 del acápite “otros medios de prueba”**, siendo a continuación consultado respecto la fotografías N° 0983, señaló que la foto era de agosto de 2013 y que en septiembre se terminó; consultado por la foto 0992, de la cual declaró tratarse de las caballerizas de Isla Huar y que estaban terminadas, pero al consultársele si efectivamente la había tomado él, respondió que ahora no lo recordaba, y consultado acerca de si estaba en conocimiento de que esa foto era de Isla Santa María y que había sido tomada por Pizarro, y que dicha obra había sido fiscalizada por él, dijo no saberlo, y que todas las fotos las tomó Pizarro, respondiendo “podría ser”.

Se **le exhibe correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2013**, lo reconoce, al igual que el documento: De Carlos Bustos Prat a constructora CGM, enviado el 22 de febrero de 2013 a las 12,42 horas; para cgutierrez@constructoracgm.cl: Marcos Valente, Ignacio Labra, adquisicones, Pamela Beltrán, Jorge Uribe, Miguel Gutierrez;, con copia a csarRojas@vtr.net: *Asunto: organigrama de la empresa, adjunto: Estimados:les envío el organigrama de la empresa. Firma Carlos Bustos Prat.* Consultado si el organigrama es distinto porque él aparece como gerente General, lo envió Bustos Prat luego de que él reclamó, eso porque todos sabían que él era el gerente General. Bustos aparece como jefe de logística, pero eso lo hizo Bustos y Rojas. Declaró no haberle representado la situación de que Bustos Prats apareciera en la empresa, pero eso fue así porque él no se preocupaba del papeleo. Representado acerca de lo declarado anteriormente en cuanto a que habiendo estado enterado de la corrupción en que se había visto envuelto Carlos Bustos y de que por ello estaba muy enojado, respondió esta vez que se había enterado de la situación de corrupción cuando fue llamado a declarar en la investigación. Respecto del manejo de las cuentas corrientes por parte de César Rojas señaló que él tenía el control a virtud del mandato amplio que le había otorgado. Es posible que efectivamente hubiere realizado 33 transferencias entre Agosto de 2012 a octubre de 2013 efectuó, también a Evelyn Negrete, su mujer, María Isabel Martínez Miranda también, ella es su madre. También 17 a Mauricio

Gutiérrez, su hermano, no trabajaba para CGM pero estaba al servicio, por ejemplo, cuando llevaba al mecánico. Tales transferencias no las hizo Rojas, “debe haber sido alguien a quien yo le pedí que lo hiciera”, pero no las hizo Labra. Cuando se cambió a la ciudad empresarial, la oficina la buscó su hermana y su madre por una situación de emergencia por un monto mayor del que costaba el arriendo de Rojas. La decisión de salir de esa oficina fue suya pero por emergencia, a mediados de 2013, cuando la empresa estaba en serios problemas económicos. Antes de estas obras estaba inscrita la empresa, en mayo. La inscripción la tramitó Fernando Delgado Aros con Rodrigo Carrasco Quiroga. Consultado si sólo cuando trabajó directamente con César Rojas se adjudicó las obras, respondió que la obra se la adjudicó por sus méritos. La boleta de garantía de la correcta ejecución de las obras la tomó Rojas en representación de CGM, pero ello sólo técnicamente pues fue él (acusado) quien en realidad la tomó. Rojas fue muchas veces a Cuarteles a realizar gestiones por él. Dijo no saber que el listado de obras del correo de 5 de junio de 2012, enviado por Renato Méndez, decía relación con obras que aún no habían sido llamadas a licitación, empero reconociendo que no había forma de saber de la existencia de obras en licitación sino hasta que son publicadas. Señaló que cuando postuló y se adjudicó las obras no sabía que Rojas había sido mayor de Carabineros. Esto lo supo mucho después del correo que le envió Méndez, precisamente en la reunión, en que dijo que era ex carabinero y que se había retirado para emprender un negocio propio. A instancia de la fiscalía precisó supo de su condición de ex funcionario antes de la adjudicación de las obras. Consultado si Rojas le dijo en algún momento que Félix Flores era su otro contacto, respondió que no se lo había dicho. A fin de **evidenciar contradicción se le exhibe su declaración ante la fiscalía de fecha 27 de enero de 2016:** *“cuando yo le pregunté a César quiénes eran las personas que él conocía, él me dijo claramente que conocía al Comandante Christian Bustos Morgado y también se jactaba tener como contacto directo y para sus movidas al Coronel Félix Flores, y en una oportunidad me dijo que le decían “el chacha”.* Cuando recibió el correo de Méndez supo que se trataba de retenes de Carabineros. Consultado si César Rojas le informaba cuándo se harían las visitas de fiscalización a las obras fiscalizaciones, respondió “yo creo que no”. Se **le exhibe el documento N° 781, prueba de la fiscalía** (correo de 7 de marzo de 2013, dirigido desde la cuenta cesarRojas@vtr.net), dijo reconocerlo, se trata de un correo enviado por César Rojas a su correo; *asunto: contingencia: bueno, primero que todo, salió en la radio salió que Isla Huar se declaró desierto, no andaría mal darse una vuelta por la muni, para mejorar la operación del sur;*

Ignacio debe avocarse solo a los proyectos, debe ser él quien vele por los avances semanales y se acerque lo más posible a la programación.

Los jefes de obra eran Pamela Beltrán en Villa Ortega, Gonzalo Rodríguez en Lago Castor, Jorge Uribe en Isla Huar, Rafael Mena y Carlos Albistur en Coyhaique Alto. Se enteraba del avance de las obras directamente porque estaba ahí. Tomaba contacto con Pizarro, “en ocasiones sí”, su relación con él era *laboral, de respeto y de jóvenes*. La obra de Chicureo no supo si se concretó. Negó haberle ofrecido a Pizarro alojarse en el hotel Dreams, pero *sí le dio la facilidad producto de su problema*. Personalmente no le pagó la estadía, podría haber sido CGM, como muchas otras veces. Consultado si el pago en definitiva se hizo con su consentimiento, respondió que “no”, explicando que *no era consciente en ese momento del tema del pago, porque tenía un convenio con el hotel Dreams*. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibe su declaración de 29 de enero de 2016. Consultado si desde junio en adelante, cuando se cambió de oficina, había sido él quien había tramitado los estados de pago directamente, respondió que sí, *eran los últimos estados de pago, cuando ya había vencido el plazo de los contratos*. Se le exhibe correo contenido en el **N° 9 de otros medios de prueba**, el cual reconoce, *le pide a Ignacio y Jorge que le envíen los estados de pago*, enviado el 25 de enero, y otro el 25 de enero de 2013: correo de 25 de enero de 2013, de Pamela Beltrán, asunto: estados de pago; De cguutiérrez, CGM, 10,37 hrs, para ilabra@constructoracgm.cl Jorge Uribe, Pbeltrán CGM, con copia a César Rojas y cguutiérrezCGM: asunto: estados de pago: Ignacio, Pamela Jorge, necesito los estados de pago en mi correo hoy Atte. Otro de Pamela Beltrán, viernes 25 de enero de 2013, a las 15,59 para Cristian Gutiérrez Martínez, ilabra@constructora.cgm, Jorge Uribe; con copia a César Rojas y cguutiérrez; asunto: RE: estados de pago; *Estimado Igancio, cómo realizo estado de pago N°2, si en el primero se incluye lo siguiente?..*

Los pagos se hacían a la pinta de César Rojas. Consultado si sería correcto decir que los estados de pago y los montos a solicitar en ellos eran coordinados y acordados a la pinta de Rojas, Ignacio Labra y él, respondió que sí, que eso era correcto. Se le exhibe el documento N° 778, prueba del ministerio público. Señala que lo reconoce, es un correo que lo envía César Rojas a Constructora CGM, es de fecha 28 de enero de 2013. Lectura: de César Rojas a C: asunto: consulta: *me preguntan, cuándo es requerido la visita para la mejor opción del estado de pago,*

pero no debería ser más allá de la próxima semana, de lo contrario se nos complica el pago, y que crees tú que sería necesario incluir en el estado de avance. Consultado si lo anterior formaba parte de los privilegios de trabajar con Rojas. Al efecto, señala que no necesariamente él veía todos los correos que le enviaba Rojas, y que muchas veces iba a las reuniones sin saber de su contenido. **Se le exhibe el documento N° 738, prueba del ministerio público**, el cual reconoce y señala que se trata de un correo electrónico que le envía Rojas a CGM, el 10 de abril de 2013: de CesarRojas@vtr.net, enviado el 10 de abril de 2013, a las 17,30 horas, a Constructora CGM; *asunto: dato: Cristian, si estás con el ITO, te cuento que los porcentajes de pago por obra no están tan altos, de hecho en Villa Ortega es sólo de un 43%, por lo que se podría ver con él para llegar a un 65%, considerando que estamos en fecha de término, quedando 12 días, pensemos en un estado de pago el día 22, quedando aun en poder de Carabineros el 45%.* Acto seguido se **le exhibe el documento N° 782, prueba del ministerio público**, lo reconoce, señala que se trata de un correo electrónico que le dirige César Rojas a Constructora CGM, el 22 de mayo de 2013: de CesarRojas@vtr.net, enviado el 22 de mayo de 2013, a las 17,56 horas, para Constructora CGM; *asunto: urgente; datos adjuntos carta 22 de mayo: revisa esta carta adjunta: Cristian: de acuerdo a los últimos registros hasta el 20 de junio, me preocupa el estado de pago Creo que es difícil que el ITO aperre con esto, pero es posible un nuevo crédito con Bci. La visita se atrasó para la semana del 3 de junio.* Consultado el acusado respecto del aviso de las visitas, respondió que *en ese tiempo no tenía comunicaciones, no recibía los correos hasta una semana después, César Rojas “me bombardeaba” con correos, para él no tenían sentido, por tanto no sabía todo lo que pasaba.* En cuanto a Ignacio Labra, refirió que éste “no me bombardeaba” con tanta información como lo hacía Rojas, y que al principio la comunicación con él era muy fluida, muy profesional, pero después se dio cuenta que trabajaba para Rojas y no para CGM, por lo que contrató a Bernardo León para que le ayudara en Coyhaique ya que Labra *me estaba “atornillando” al revés.* **Se le exhibe el documento N° 759, prueba de la fiscalía**, correo de Ignacio Labra, de 8 de junio de 2013, lo reconoce y señala que se trata de un correo electrónico enviado por Ignacio Labra a Bernardo León, con copia a Cristian Gutiérrez. Lectura: *para Bernardo López, con copia a Cristian Gutiérrez, asunto: informes ITO: Bernardo, de acuerdo con lo conversado y en relación a la reunión con Francisco hoy se requiere la entrega de 19 planos para la devolución de las retenciones, para esta semana, de acuerdo con los informes los revisara Francisco y en caso de no coincidir deberán modificarse las fechas, lo mismo*

deberá hacerse para que calcen con los estados de pago, firma Ignacio Labra Moscoso, jefe de proyectos CGM Ltda.

Interrogado respecto de si éste correo había sido anterior o posterior al quiebre con César Rojas, respondió que fue después de irse él de la oficina, pero que Rojas siguió trabajando con La Constructora, seguía a cargo del financiamiento de las obras, precisando que tanto Rojas como Labra seguían trabajando para la constructora. Se **le exhibe documento N° 9, otros medios de prueba** del ministerio público; asunto aclaración, Pamela Beltrán. Consultado, señaló que lo reconocía, lo escribe Pamela Beltrán, fecha 15 de febrero, dirigido a Cristián Gutiérrez. Lectura: *de Pamela Beltrán, 15 de febrero de 2013, para cgutierrez@constructoracgm.cl, asunto: aclaración: estimado Cristian, solicito aclaración del sistema de turnos de Villa Ortega, la gente está muy alborotada por la llegada del ITO, especialmente por la presencia de sus dos palos blancos; hoy envió a Escobar para que compre víveres.* Consultado por los “palos blancos”, respondió que se refería a Escobar y a otro persona que venía de Santiago, el cual iba de incognito, añadiendo que ese correo *se refiere a una situación de Pamela, pero que “en todo caso yo quería sacar a esa niña”*. Agregó que él no creía que se tratara de personas que viajaban con el ITO. En cuanto a la reunión del 15 de octubre, en ella estaba Bustos, Rojas, el ITO, Andrea Campusano y una persona más del Departamento de Cuarteles. Allí se discutió del atraso de las obras, siendo efectivo que Bustos empezó a ver una a una las obras y señaló el plazo de término, siendo también efectivo que Rojas dijo que debía traspasarle la empresa a él, y que Bustos Morgado le dijo que debía dejar de comprarse parcelas y otras cosas. También era efectivo que después vio a Rojas y Bustos conversando ambos en una oficina. Dijo que no recordaba que el 24 de junio se hubiera recibido Villa Ortega sin observaciones, pero sí que fue recibida. Se **le exhibe nuevamente el documento N° 838, pruebas de la fiscalía**, el cual reconoce el acusado, respondiendo que reconoce su firma y que la fecha es 24 de junio de 2013. En cuanto a que hubiere sido él quien envió la carta solicitud, respondió “podía haber sido así”, que él la hubiera enviado, pero que *era Labra quien se ocupaba de eso*. La carta fue enviada el 23 de junio, fecha a la cual la obra no estaba terminada ya que le faltaban terminaciones, “claro que le faltaban”. Se **le exhibe documento N° 9, otros medios de prueba del ministerio público**, consistente en un correo de Bernardo León a Constructora CGM, de 27 de mayo de 2013, asunto “fotos VO”. Al efecto se le exhiben numerosas fotos: adjunto fotos de avance fin de semana; hoy envió fotos actualizadas, firma Bernardo León: N°

0379, dice que ve un retén completamente construido faltando terminaciones; N° 0719, casa anexa ídem, poniendo revestimiento exterior; 0728, se dice que se ve una retroexcavadora en un patio, es antigua, de un patio, “no sé si es un patio”; foto N° 0737, “ahí está el retén”, *y adelante un movimiento de tierras, pero ahí no debiera haber nada, al lado se ven las caballerizas, no se aprecia si el revestimiento está puesto, pero sí, le faltan terminaciones*; foto N° 0725, señala que se refiere al estacionamiento que pidió Carabineros pero que no venía incluido y para el cual se mandó a hacer un cálculo con fondos de CGM, el cual finalmente Carabineros no pagó, pero que efectivamente el estacionamiento no está terminado. Consultado si es de rápido despacho la terminación de ésta obra, respondió que *no, porque se trata de una estructura de metal*; N° 0742, explica que no puede decir si corresponde al interior de Villa Ortega, podría ser de cualquier retén ; foto N° 0748, lo mismo, no podría decir si es de Villa Ortega, pero si ve que se trata de una estructura 100 terminada, pero que le están haciendo un arreglo o repaso al vano; foto N° 0756, dice que es una foto de Villa Ortega, dice ser *anterior a la que me mostró antes*, en que se vio que estaba completamente revestida. Consultado si por ser Bernardo León una persona de su confianza, respondió afirmativamente a la pregunta respecto de si las fotos que le envió no podían ser falsas, y que por tanto fueron enviadas 8 días antes de que viajara la comisión para la recepción de la obra. Reconoció que *al 27 de mayo la obra debía estar terminada, “si es que así lo dice el contrato”*. Se **le exhibe** correo de 8 de mayo de 2013, **contenido en el N° 9, de los otros medios de prueba de la fiscalía**, el cual reconoce, lo envía Bernardo León a él, Constructora CGM, 30 de mayo de 2013. Lectura: *De Bernardo León, enviado el jueves 30 de mayo de a las 00,35 horas, para CGM Ltda.; asunto: informe de avance; datos adjuntos: avance Villa Ortega: Cristian, adjunto informe de avances al 29 de mayo, se desprende que faltan varias partidas para completar las obras observando más atrasados el retén, 47% de atraso respecto de pro, las cuales faltan las siguientes partidas: instalación sanitarios, ventanas, mobiliario, seading, puertas; se incluirá equipo de pintores, se deberá alargar la jornada para instalaciones, etc. En cuanto al estacionamiento y cierre perimetral se procederá a informar separadamente sobre los avances*. Se **le exhibe a continuación un documento** intitulado “*informe avances obra reposición retén Villa Ortega*”, elaborado por Bernardo León, fecha 29 de mayo de 2013. Se **le exhiben las siguientes fotos**: instalación artefactos terminados 100%; casa anexa “se ve terminada”, deben quedar algunos detalles porque se ven unos andamios”; imagen “vista General del retén”, “se ve que le falta una cara de seading, estado en el cual se encontraba la obra cuando fue la

comisión a la recepción de la misma. Consultado por el hecho de haber enviado una carta de solicitud de fecha 12 de julio de 2013, en que le solicita a Francisco Pizarro Dasso la devolución de las retenciones de Villa Ortega, responde que sí, *probablemente la envié yo.* Se **le exhibe documento N° 1036, de sus medios de prueba**, carta solicitud de 12 de julio de 2013, la cual reconoce el acusado, señala que es su firma y que corresponde a una carta de solicitud para Francisco Pizarro, solicitando devolución de retenciones de Villa Ortega. Lectura: *Logo CGM, 12 de julio de 2013, carta solicitud, señor Francisco Pizarro Dasso; obra: reposición del retén Carabineros Villa Ortega; pte.: solicitud de entrega de retención de obra: firma Cristian Gutiérrez Martínez y al lado Francisco Pizarro Dasso.* No estuvo de acuerdo con la aseveración de la fiscal en cuanto a que, para enviar la carta, la obra debía estar terminada, señalando el acusado que “no necesariamente debe ser así”, añadiendo que él solicitó la devolución *porque necesitaba dinero para terminar las obras, necesitaba flujo.* Se **le exhibe del mismo N° 9** un correo de 30 de julio de 2013, *asunto: materiales Villa Ortega.* Lo reconoce, lo envía Marcos Valiente del 30 de julio de 2013, encargado de adquisiciones de CGM, oficina central, a Cristian Gutiérrez: *asunto: solicitud de materiales: Cristian, Pamela está solicitando estos materiales, puedes revisar y avisar si lo debemos comprar; firma Marcos Valiente., jefe de adquisiciones: v.gr., cerco, pilares, cerraduras, guardapolvos, cerrojo carcelero, planchas.* A la consulta a si había respondió afirmativamente a la solicitud respondió que no recordaba si lo autorizó o no. Se **le exhibe del mismo N° 9** un correo de 5 de agosto de 2013, *asunto: soldadora.* Lo reconoce y dice que se trata de un correo electrónico, de Pamela Beltrán a Carlos albisturconstructoracgm@gcorreo.com y a él. Leído consta: *Carlos podemos coordinar la subida del soldador a Villa Ortega ya que tengo la soldadora, favor confirmar, lo ideal es que fuera mañana, igual que el mueblista, habría que presionar, van dos meses y nada. Atentamente, Pamela Beltrán.* Consultado por quién era Carlos Albistur, respondió que esa persona la contrató para Coyhaique Alto y después lo tomó como asistente personal, estuvo hasta el final con él. Reiteró que Pamela Beltrán comenzó a atornillar al revés. Se **le exhibe del mismo N° 9** dos correos; *asunto: RE: asistencia Villa Ortega, de 17 y 19 de octubre de 2013, dirigido por alejandromorales11@gcorreo.com a Carolina Gutiérrez, Carlos Albistur y cgutierrez@constructoracgm.cl.* El primero: de Carolina Gutiérrez: *estimado Alejandro, se han comunicado con retén Villa Ortega e informaron que solo dos personas se presentaron en obra y no han hecho nada, coméntame. (“arriba”) De Alejandro Morales, enviado el 19 de octubre de 2013, 00,00 horas, para Carolina Gutiérrez, Carlos Albistur, asunto: Re: asistencia Villa*

Ortega: Carolina, efectivamente el día de ayer estuve con dos personas en Villa Ortega, acordándonos que se les depositó medio sueldo pero a otro nada, llegando a las 15 horas a trabajar; es lamentable que se dé esta situación, especialmente con Carabineros, que las personas estén sin sueldo, estuvimos trabajando desde las 8 hasta las 18,00 horas, nos las ingeniamos para diamantar, se puso porcelanato en casa anexa, tengo sólo 3 personas y no tengo un peso, Carolina, la situación es muy difícil acá, prácticamente me he quedado sólo, no sé qué más poder pedir si ya no nos queda gente ni recursos. Se le pregunta si a esa fecha la recepción ya se había efectuado, al igual que la devolución de las boletas de garantía, y si le había dado poder a Francisco Gutiérrez Gutiérrez para retirar boletas de garantía de Villa Ortega. Se **le exhibe el documento N°1.205, de sus medios de prueba**, reconoce el documento y su firma, explica que corresponde a un poder para retirar boleta de garantía en la Dirección de Logística de Carabineros. Lectura: *Poder, empresa constructora CGM Ltda., RUT, domiciliada en Ruta G 150, sitio 12, Lampa, representada por Cristian Gutiérrez Martínez, mismo domicilio, autorizo a Francisco Gutiérrez Gutiérrez, para que retire la boleta de garantía que se encuentra en poder de Carabineros para ser devuelta a constructora CGM Ltda.; Lampa, 27 de agosto de 2013; firma, Cristian Gutiérrez Martínez.* Al efecto contestó a la pregunta inicial que “técnicamente” la boleta de garantía debe devolverse una vez cumplido el plazo de la obra, y no en función de si la obra está o no terminada. Reconoció que a esa fecha ya se había producido el quiebre con Rojas. Se **le exhibe correo de 19 de octubre de 2013** (flujo término de obra). Sí, “lo reconozco muy bien”, al igual que el dato adjunto, de 19 de octubre, de César Rojas a constructora CGM, y *abajo hay una parte en que él envía un flujo.* Lectura: de cgutierrez@construvctoracgm.cl: *envío lo acordado, atte. Cristian A. Gutiérrez M., gerente General constructora CGM; de CesarRojas@vtr.net* enviado el 19 de octubre a las 22,47 horas, para CGM Ltda.; asunto: *Re: Flujo término de obra; datos, escala de tiempo de proyectos excell y final proyectos; contenido: “esto es lo que se fue”. Actividad: Inicio de proyecto y fin de proyecto 22 de octubre de 2013 al 21 de diciembre de 2013, viaje a zona, 23 de octubre de 2013, etc.* Negó que al 23 de octubre hubiere continuado trabajando con César Rojas. En cuanto al retorno que aparece en el documento del 3 al 9 de noviembre, dijo *no soy yo la persona indicada para responder si correspondía a la fecha que debía viajar la comisión para la recepción de la obra.* Reconoció haber firmado los estados de pago de las obras de Isla Huar, Cástor y Alto Coyhaique, y que ocurrió en noviembre y diciembre de 2013, agregando “no voy a desconocer mis firmas”. Se le exhibe el documento. Se **le exhibe el documento N° 669, de**

sus medios de prueba, consistente en archivadores con documentos, se le exhiben sólo tres, los cuales reconoce, señala que corresponden a los estados de pago N° 8, en todos aparece su firma. Lectura: *estado de pago N° 8; proyecto Coyhaique Alto: contrato de 11 de diciembre de 2012, entrega de terreno 13 de diciembre de 2012, recepción provisoria 21 de julio de 2013 (incluye addendum), monto aprobado estado de pago actual \$32.026.396, 5 de agosto de 2013, firma de Cristian Andrés Gutiérrez Martínez, Félix Flores Santis y Francisco Pizarro Dasso; proyecto Retén de Carabineros Lago Cástor, contrato de 12 de diciembre de 2012, entrega de terreno 13 de diciembre 2012, recepción 1° de julio 2013 (incluye addendum), monto aprobado estado actual \$35.032.021, Santiago, 31 de julio de 2013, firman Cristian Gutiérrez Martínez, Christian Bustos Morgado y Francisco Pizarro Dasso; proyecto Isla Huar, contrato de 5 de enero de 2013, entrega de terreno 18 de enero de 2013, recepción provisoria 27 de junio de 2013 (incluye addendum), monto aprobado estado actual \$44.622.227, Santiago, 3 de septiembre 2013, Cristian Gutiérrez Martínez, Félix Flores Santis, Francisco Pizarro Dasso.* Por lo tanto, sostuvo la señora fiscal, las fechas que le envió Rojas estaban muy por fuera de los plazos acordados en los contratos, se le preguntó qué había sucedido con las multas atendido los 4 a 5 meses de atraso, explicó que en Villa Ortega se cobró una multa de \$5.000.000 y algo más, los que se pagaron para poder regularizar. En cuanto a Isla Huar, dijo que “a esas alturas no, “Lago Castor debieron aplicarse multas”, “Lago Castor habría terminado con multa”. Añadió que *por Isla Huar no me cobraron multas porque me echaron antes, el 25 de octubre.* Se le exhibe correo electrónico de 12 de julio de 2013, incluido en el **N° 9, otros medios de prueba del ministerio público**, el cual reconoce, señala que lo envía Alejandro Jiménez, encargado eléctrico de CGM; enviado a él, el 12 de julio de 2013. Leído: alejandro.a1970@gcorreo.com, 23,24 horas, para CGM Ltda.: *Don Claudio ya no puede estar en estas condiciones, hasta esta hora no tiene qué comer, me acaba de llamar, no sé dónde está para conseguir comida, le digo, por última vez, solucione el problema, lo mínimo es la comida.* Consultado si a esta fecha continuaba le continuaba transfiriendo dinero a sus familiares, respondió que sí, pero no sólo a ellos sino también a muchas personas, explicando que *éste correo “se dio” diez (10) días después que César sacó los \$60.000.000 millones.* Reconoció que la SEREMI de Salud paralizó las obras por las malas condiciones en que se encontraban los trabajadores, y que estos después lo demandaron por no pago de sueldos. Consultado por “A” y “B”, negó que Rojas le hubiera dado instrucciones en orden a que cuando se refiriera a Félix Flores lo hiciera como “A” y a Christian Bustos Morgado como “B”. A fin de

evidenciar contradicción se le exhibe para lectura su declaración de 27 de enero de 2016, la que reconoció, señalando que se trata de su declaración ante el fiscal: *“César me dijo que cuando se refiriera a ellos los llamaría A y B (A, Coronel Félix Flores, y B, Christian Bustos). Tengo información al respecto, consistente en correos electrónicos enviados de César Rojas a mi persona con estos códigos”*. Declaró que en una oportunidad se refirió a ellos a efectos de hacer una consulta. Se **le exhibe documento N° 768, prueba del ministerio público**, correo electrónico, lo reconoce, dice que se trata de dos correos, uno lo envía él y responde a César Rojas, y el segundo, respuesta de César Rojas a él. Antes hay otro correo de César Rojas a Cristian Gutiérrez, *asunto: revisa*. Se procede a la lectura (explica previamente la fiscal que lo hará *de abajo hacia arriba*): de cesarRojas@vtr.net, 16 de agosto de 2012, 22,44 horas, para Constructora CGM Ltda., *asunto: revisa; From: Constructora CGM, cgutierrez@construvctoracgm.cl; date: 16 de agosto de 2012, 22,52 horas; para CesarRojas@vtr.net; Subject: revisa: ¿es posible que B nos dé un panorama de la calidad de las empresas?, recuerda que vamos a Villa Ortega, Coyhaique Alto, El Olivar, Puente Negro, saludos*. Más arriba, de cesarRojas@vtr.net, enviado el 17 de agosto de 2012, 00,00 horas, para constructora CGM Ltda. cgutierrez@construvctoracgm.cl; *asunto: re: revisa: “lo veo”*. Del mismo numeral **se le exhibe un correo de 16 de agosto de 2012**, de cesarRojas@vtr.net a constructora CGM Ltda., de cgutierrez@construvctoracgm.cl, *asunto: revisa*. Lo reconoce, además del documento adjunto, lo envía César Rojas “a mí”, Cristian Gutiérrez, 16 de agosto de 2012, 22,44 horas, también el adjunto: *datos adjuntos, modelación xlxs: archivo adjunto planilla excell*. Lectura resumida: *precio 40%, plazo entrega 30%, comportamiento proveedor +4 -8, calidad empresa, calidad técnica; propuesta empresa A, propuesta empresa B, propuesta empresa CGM*. Consultado si *precio, plazo, etc.*, correspondían a criterios de evaluación, respondió que *“esa planilla no es nada”, “y si me hubiera preguntado antes, cuando declaré, le habría explicado de lo que se trataba”*. Requerido nuevamente para que respondiera la pregunta, contestó que *lo que allí aparece no son criterios de evaluación de la licitación de Villa Ortega*. Y en la cadena es él quien le pregunta a B que le dé el panorama de las empresas que competían con él. Agregó que las demás empresas también podían tener acceso a la información precedente, pero que en su caso *pidió la información porque él estaba recién empezando en este tipo de licitaciones*. Se **le exhibe documento N° 775 (anteriormente exhibido por la defensa), prueba del ministerio público**, fecha viernes 11 de enero de 2013, lo reconoce, lo envía César Rojas a Cristian Gutiérrez, *asunto: casa Cristian Leay. Hoy me junte con B,*

*me comentó que el ITO está tranquilo, dice que falta, pero que vamos bien, está preocupado por Isla Huar, que faltan las calicatas, te estuve llamando pero parece que estás en Villa Ortega. Consultado si, ya que en el correo anterior, de agosto de 2012, no sabía quién era B, entonces del correo precedente se desprende que a ese entonces ya sabía quién era B, respondió: "ya se empezaba a sospechar algo". Se hace **lectura del documento N° 777, prueba del ministerio público**, de fecha 24 de enero de 2013, antes incorporado por la defensa del acusado, se hace lectura nuevamente, luego de lo cual se le pregunta si entendía que las personas que trabajaban en el Departamento de Cuarteles eran funcionarios públicos, respondió *sí, lo sé*. Se **le exhiben los documentos N° 773 y 779, prueba del ministerio público**, correspondiente a dos correos electrónicos, los reconoce al igual que el documento adjunto del primer correo, señala que se trata de dos correos enviados por César Rojas el 4 de febrero a constructora CGM, y el segundo 23 de septiembre 2012, a constructora CGM Ltda.. Lectura: N° 773, de cesarRojas@vtr.net enviado el domingo 23 de septiembre de 2012 a las 10,55 horas, para Constructora CGM Ltda. de cgutierrez@constructoracgm.cl; asunto: transferencia: *Cristian, primero que todo te pido disculpas por el atraso, pero aún tengo problemas con el vale vista que me depositó la institución, te transferí dos millones a tu cuenta para ayudar algo pero debes acelerar la boleta de seriedad de la oferta de la VI región para así agilizar lo que viene*; de cesarRojas@vtr.net enviado el lunes 4 de febrero de 2013, a las 23,11 horas, para constructora CGM Ltda., de cgutierrez@constructoracgm.cl, asunto: revisar; datos adjuntos: Cristian, creo que vamos bien pero te pido que revises las 4 hojas de la excell y demás que te envío. *Cristian, espero que no haya sido tan agotador el día pero los traslados van cansando, hay varios temas importantes que tratar: a) estado de pago, hoy trate de materializar el pago de 2 facturas pero sólo autorizaron un máximo de 40 millones, por lo que sólo llevaré el de Villa Ortega, y por la otra factura, de 33 millones, me darán 31 millones; b) de este primer monto se debe sacar la inversión de lo que yo te había solicitado; c) del crédito de Sodimac el máximo autorizado son 2 millones; d) conforme se ha presentado el escenario y aprovechando que estás unos días por allá creo que resulta conveniente el dejar hoy que es lo que se requiere como estado de pago N° 3 para que a fines de febrero tengamos estados de pago superiores a 100; e) respecto del hipotecario, el lunes llega el ejecutivo que se hará cargo de la cuenta, me dicen que requerirás una renta de 6 millones y que el dividendo será de aproximadamente de \$1.400.000, pero con lo que hay hasta ahora es insuficiente atendido a la renta de los años anteriores, pero que igual se podría hacer algo; f) en cuanto al leasing del**

camión, si crees que a fines de febrero llegamos sobre los 300, puede haber posibilidad, de lo contrario habría que postergar la compra algunos meses. Cristian, creo que estamos en la etapa más crítica del proceso, pero veo la luz al final. Se le pregunta al acusado: reconozco que allí se habla de retornar la inversión de B y de un crédito hipotecario que Rojas me estaba ayudando a obtener. Consultado si a esa fecha las obras no se habían iniciado, respondió que se estaban iniciando. En cuanto a la organización de lo que viene y que habló con A, dijo no saber exactamente a que se refería Rojas con ello.

En su interrogatorio el Consejo de Defensa del Estado **exhibió al acusado parte de los documentos del N° 875, prueba del ministerio público**, los cuales reconoce, se trata de cheques girados desde cuenta corriente de Constructora CGM, en los que reconoce su firma. Se dio lectura resumida a los siguientes cheques de la cuenta corriente 45948747, del banco Bci, a nombre de Constructora CGM Ltda.: 2 de agosto de 2013, cheque girado por \$800.000, a nombre de Carlos Bustos Prat; 2 de agosto, cheque girado por \$250.500, mismo beneficiario; 2 de septiembre de 2013, cheque girado por 260.000, mismo beneficiario; 28 de junio 2013, cheque girado por \$385.454, a nombre de Carolina Gutiérrez Martínez; 11 de julio 2013, cheque girado por \$960.503, misma beneficiaria; 22 de agosto de 2013, cheque girado por \$ 2.700.000, a nombre de la misma persona; 11 de octubre 2012, cheque girado por \$18.500.000 a nombre de Cristian Gutiérrez Martínez; 5 de noviembre de 2013, por \$1.000.00, mismo beneficiario anterior; 16 de nov 2012, cheque girado por \$3.200.00, a nombre de la misma persona; 12 de junio de 2013, cheque girado por \$3.00.000, mismo beneficiario; 24 de mayo de 2013, cheque girado por \$1.00.000, mismo beneficiario; 2 de agosto 2013, cheque girado por \$1.000.000, a nombre de la misma persona; 29 de agosto de 2012, cheque girado por \$200.000, mismo beneficiario; 22 de octubre de 2012, cheque girado por \$6.700.000, a nombre de César Rojas G.; 19 de abril de 2013, cheque girado por \$813.674, a nombre de esta misma persona. Respecto de la situación financiera crítica que mantenía la empresa CGM en agosto de 2013, se le consulta porqué entonces se giraron cheques a nombre de su hermana Carolina, explicando que *se giraron muchos cheques, por ejemplo a la empresa SALFA y otros proveedores, también a Carolina a quien se le debía mucho dinero por concepto de gastos de la obra*, explicando que *tales gastos fueron rendidos*. Consultado a qué correspondían los cheques girados en octubre y noviembre de 2012, por montos superiores a \$3.000.000 o más, respondió que correspondían a boletas de garantía de Villa

Ortega, dineros que depositó en Security, al igual que ocurrió con el cheque de \$13.100.000, y en cuanto al de \$3.200.000 dijo no recordar exactamente que hizo con él dinero. El cheque por \$6.700.000, agosto de 2012, explicó que se trataba de devoluciones de dinero que se *le debían a César Rojas producto de lo que él iba poniendo*. Contestó que nunca le preguntó a César Rojas de dónde provenían los dineros para la inversión que requería CGM. Fundó la empresa el año 2007, y como era un emprendimiento, él se preocupaba de la administración, aunque después llegó su hermana Carolina a trabajar en eso, precisando que *en concreto no tenía una persona que se hiciera cargo de la administración*. Respecto de los sobrepagos que se pagaba por las cosas que se compraban le decían que no se podía de otra forma, que era lo más conveniente, y por eso aceptaba tales gastos, sin perjuicio que, por su experiencia de cinco años en el trabajo con su empresa, sabía cuánto costaban las cosas. **Exhibido nuevamente el documento N° 33**, prueba de la defensa (del acusado Gutiérrez), se le consulta por la frase en que se dice que *“el ITO está intranquilo”*, respondió no saber a qué se refería con esa expresión ya que *el correo lo redactó César Rojas*. Se **le consulta, en relación al documento N° 36 de sus medios de prueba** (antes exhibido), correo 23 de septiembre de 2012 (*aún tengo problemas con el vale vista de la institución, hay un número mal escrito, igual te deposité \$2.000.000 mientras tanto, debes acelerar el cobro de la boleta de garantía, “hay que organizar lo que viene, hablé esta semana con “A”*). Declaró que el correo cgutierrez@construvctoracgm.cl no lo utilizaba César Rojas sino él. Desconfiaba de Pamela Beltrán porque se dio cuenta que *estaba atornillando para el revés y una vez la encontré conversando con Rojas a puerta cerrada, en circunstancias que ella tenía que estar en las obras”*.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, ante la pregunta de si en las obras de Lampa le pagaban conforme a los estados de avance, para lo cual existía un ITO, el cual le iba dando directrices, asintió a tal afirmación. Confirmó que el año 2004 se inició en el mundo de las propuestas públicas. Estaba inscrito en el Registro de Contratistas. No es efectivo que no haya tenido experiencia en el tipo de obras materia del juicio, como se dijo en la acusación. Dijo que no vio a Bustos Morgado en las aperturas de sobres, éste “no tenía intervención”. En cuanto a César Rojas, confirmó que éste financió dos boletas de garantía por las obras del año 2012, que finalmente no se adjudicaron, por lo que le hizo devolución del dinero de tales boletas. Consultado por el motivo de que hubiere perdido la postulación a las obras de Bajos de Lircay, La Mina y Reina Luisa,

explicó que se debió, entre otros motivos, al hecho de que la empresa estaba bajo la categoría exigida en las bases. Villa Ortega fue declarada desierta varias veces, por eso se interesó. Se **le exhibe documento N° 256, prueba de la defensa de los acusados Bustos**, consistente en acta de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública realizada a través de Mercado Público, proyecto reposición retén Villa Ortega, expedida por el Departamento de Logística el 24 de agosto de 2012, el cual reconoce el acusado, y se hace lectura: *11,30 horas, se procede a la apertura de sobres, se constituye una comisión para verificar el contenido de los sobres, siendo dos los oferentes, CGM Ltda. e Inversiones Santa Rosalía 5 SA; observaciones: boleta de garantía, emitida el 22 de agosto 2012, por \$11.700.00, vencimiento al 25 de octubre 2012; boleta pagadera con 30 días de aviso, mismo monto; dado que la boleta de la empresa Santa Rosalía no viene a la vista sino que pagadera a plazo, contraviniendo por tanto las bases de la licitación, y constituyendo esto causal casual de eliminación, se la elimina del proceso y se le devuelve el sobre sin abrir, adjudicándose la obra a Constructora CGM Ltda.; individualización de varias personas, al final un visto bueno, firma subteniente Parra.* Explicó el acusado que *una vez que se pasa esta primera etapa se procede al examen de los documentos y evaluación jurídica.* Se **le exhibió documento 257, prueba de la misma defensa, evaluación jurídica 115, proyecto reposición Retén Villa Ortega, de 7 de septiembre de 2012, firma Isabel Ojeda Palma, asesoría jurídica de Carabineros”, lectura: sólo CGM cumplió con las exigencias necesarias para la apertura de sobre y examen de antecedentes para la evaluación técnica, por lo que procede pasar a la evaluación de los antecedentes técnicos.** Confirmó que sólo él fue a la visita de terreno de las obras de Lago Castor y Coyhaique Alto, obras a las que no hubo otros oferentes que él.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, respondió que había sabido del ITO Pizarro después que las obras fueron adjudicadas, y que la primera vez que lo vio fue en las obras. Su relación con él era profesional. El ITO tomaba fotos cuando visitaba las obras. Respecto del primer estado de pago de Villa Ortega explicó que las obras partieron inmediatamente, los trazados, pero luego era necesario inyectar dinero. Antes del primer estado de pago no había dinero con que comenzar las obras. El retraso en el primer estado pago se prolongó durante toda la obra, sin dinero no se podía iniciar. En una oportunidad Pizarro no tuvo dónde alojar por lo que él le ayudó a hacerlo en el hotel Dreams, pero que Pizarro le devolvió el dinero, alrededor de 40 ó 50 mil pesos.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas respecto del porcentaje de utilidad que calculó para las obras indicó que fue alrededor de un 15%, esto es, \$50.000.000 millones de pesos por cada una, en total \$200.000.000 por las cuatro. Las obras de la zona central se perdieron por temas administrativos por causa de Carrasco. *En mayo la empresa ya estaba inscrita en el Registro, trámite que estuvo a cargo de Rodrigo Carrasco y Fernando Delgado, junto con Mendez, indicando que a esa época él no conocía a César Rojas.* Añadió que este último no le ayudó en el proceso de Registro en Carabineros. A la apertura de sobres en la licitación de Villa Ortega dijo haber concurrido solo y que César Rojas no estuvo. La Constructora se ganó la licitación de Villa Ortega por sus méritos, al igual que las demás obras. Negó haber pagado dinero a nadie para ganárselas, *no había necesidad para ello, “tal vez le pedí ayuda técnica a Pizarro para ponerme al día en el avance de las obras” ya que hasta ese momento los estados de pago los llevaba Ignacio Labra.* La empresa Grossman es la que creó Rojas y a la cual invitó a trabajar a Labra. Declaró que no tuvo tratos con la mujer de Rojas, aunque ésta le transfirió \$14.900.000, dinero que le devolvió mediante transferencias a César Rojas. Respecto a su hermana Carolina declaró que ésta “manejaba” sus claves bancarias pero la clave para transferencias sólo él. Señaló que *Rojas hacía transferencias desde la cuenta de CGM a su propia cuenta, ignorando él cómo fue que pudo hacerlo ya que sólo a él le llegaba la segunda clave para hacer transferencias.* En cuanto a los \$60.000.000, dijo que Rojas los sacó de la cuenta corriente mediante *sistema de voz*, sin perjuicio *del gran poder que éste tenía* y del mandato que él le había otorgado. El 2 de julio a las 7 de la tarde, aproximadamente, Rojas sacó el dinero de la cuenta, aunque contablemente aparece registrado al día siguiente, 3 de julio. Dijo que Rojas le devolvió \$30.000.000 y con el saldo, pero contra su voluntad, pagó impuestos por \$24.700.000, quedando en su poder un saldo aproximado a los \$6.000.000. Reconoció que el 4 de julio Rojas le depósito \$4.500.000 y \$288.232, restando por lo tanto, para completar los otros 30 millones, \$500.000, dinero que negó le hubiere sido entregado personalmente. En cuanto a los pagarés dijo haberlos firmado ante notario pero que en lo concerniente a la retroexcavadora *fuimos a otro lugar.* Interrogado en relación a los créditos que dan cuenta **los documentos N° 21, 22 y 23** (avisos de pago), en el primero de los cuales, por \$30.950.000, informado en septiembre de 2013, se señala que corresponde a la cuota número diez, y en el segundo, crédito del banco Santander, se señala que al mes de septiembre de 2013 corresponde a la cuota 7. Consultado por el pago de los créditos, respondió que no fueron pagados porque **“me echaron de**

Carabineros". Interrogado acerca de porqué en las solicitudes de crédito había informado que su domicilio era el Exequiel Fernández, respondió que no le dio importancia. Por otro lado, toda vez que el 4 de julio le había revocado a Rojas el mandato antes mencionado, comenzó a partir de ese momento a tener el control total de la empresa, y que desde ese momento el manejo de las cuentas corrientes le correspondió sólo a él. Se le exhibe su **declaración de 29 de enero de 2016**, a raíz de que dijo no saber si le constaba personalmente que el ITO Pizarro había alterado el estado de avance de las obras, explicando que **"el ITO aprobó los estados de avances sin que estuvieran correctos; el primero salió cuando yo me encontraba en Coyhaique, estaba abultado en más de un 60% el estado de avance"**, añadiendo que ese dinero le fue depositado a su cuenta corriente con un cheque nominativo y cruzado, y al consultar a Rojas éste le dijo *"se cuenta el milagro pero no el santo"*. Consultado si los cheques "salían" a nombre de CGM o de César Rojas, respondió que *algunos* se giraban a nombre de CGM, no todos. Dijo haber estado consciente que el primer estado de pago no cuadraba con el estado de avance de la obra, al igual que en el segundo estado de pago *"pero costaba llegar"* porque *se trata de cuadrar, y además los materiales estaban comprados, o sea, los dineros estaban invertidos*. Se le consulta por los pagos a partir de julio de 2013, cuando a Rojas ya le había sido revocado el mandato. Se le citan facturas emitidas por CGM, cuando Rojas ya no estaba a cargo de la administración, las cuales suman \$305.145.290 que recibió e ingresaron a la cuenta de CGM, pero a esa época no tenía control total de la empresa ya que el factoring lo seguía teniendo Rojas y Carlos Bustos. A la afirmación del defensor, en el sentido que hubiera tomado depósitos a plazo cuando Rojas ya no tenía el control de la empresa y ésta se encontraba pasando por una situación económica apremiante, algunos de ellos incluso a 18 meses plazo, respondió que eso era falso y que *esa es "otra de las tantas mentiras de Rojas"*. Los vehículos que tenía se los transfirió a su madre y hermana para evitar que César Rojas se quedara con ellos. El año 2011 firmó promesa de compraventa con Rosa Quiñones, tía de su señora para la adquisición de una parcela, solicitándole al abogado Morales en el 2013 que lo ayudara con eso. Consultado si en diciembre de 2012 concurrió junto a su hermano Juan Gutiérrez Martínez a cotizar una máquina retroexcavadora, respondió que él no pudo haber ido porque a esa fecha se encontraba en Coyhaique, y que en cuanto a su hermano no sabe si fue o no fue a dicha diligencia, pero que *tal vez fue César Rojas quien lo hizo con el poder que le había otorgado, apropiándose así del negocio, tal como lo hizo con los cheques en blanco que le dejó a su madre antes*

de viajar a Coyhaique. Se le exhibió un correo electrónico contenido en el numeral 9, de otros medios de prueba de la fiscalía, NUE 5566984, el cual reconoce y señala que su fecha es 27 de diciembre de 2012, de Juan Gutiérrez Martínez, juanmaugm@gcorreo.com, para Claudio Maltés, con copia a Constructora CGM Ltda., CesarRojas@vtr.net, asunto: Re: Cotización retroexcavadora, texto: Gracias Claudio, tal como conversamos y probamos la máquina hoy en la mañana, y en cuanto a los temas planteados, respondo lo siguiente: El balde requerido es de 30 cm, el traslado es a la ciudad de Coyhaique, específicamente a Villa Ortega, en lo concerniente al pago, le comento que hoy en la tarde se contactaran con Ud. para ver la mejor alternativa de pago, de todas maneras agradeceré me ayude con las ofertas de financiamiento que ofrece Salfa; Juan Gutiérrez. Consultado acerca de las fechas en que habían terminado las obras, declaró que Villa Ortega quedó terminada en octubre, y las de Lago Cástor, Coyhaique Alto e Isla Huar el 26 de octubre, fecha en la que no lo dejaron continuar con los trabajos. Explicó que el avance de las obras era del orden del 90%, y que en el caso de Isla Huar, al mes de septiembre el avance era de un 98%. Confrontado esto último con sus dichos respecto a la fecha de la reunión con Bustos Morgado, en la que éste le llamó la atención por el atraso de las obras, confirmó que tuvo lugar en octubre. Consultado respecto de la decisión de compras, señaló que Rojas era quien tomaba las grandes decisiones. Se le exhiben correos electrónico contenido en el numeral 9, otros medios de prueba de la fiscalía, NUE 5566984, los cuales reconoce y señala: el primero, fecha 14 de mayo de 2013, de Francisco Pizarro Dasso, franciscopizarrodasso@gmail.com, para Constructora CGM Ltda., asunto, estado de pago N° 6 retén Villa Ortega, adjunto estado de pago N° 6 retén Villa Ortega; envió lo solicitado para confección de estado de pago, previo envió de respaldo fotográfico a la fecha, según lo conversado hoy; firma Francisco Pizarro Dasso; el segundo, es de Francisco Pizarro Dasso, franciscopizarrodasso@gmail.com, asunto: información solicitada; texto: informo que son adjuntados estado de pago N° 9 por concepto de término de obra los cuales son tramitados contra acta de recepción sin observaciones respecto Lago Cástor y Coyhaique Alto, los valores descritos debe ser sumados a las correspondientes retiros y addendum de obras extraordinarias que se detallan, total a cancelar cumplidos los ítems \$150.961.400; tercer correo, fecha 27 de mayo 2013, de Francisco Pizarro Dasso, franciscopizarrodasso@gmail.com, para Constructora CGM, Ignacio Labra, Andrea Campusano; asunto: estado de pago N° 4 Isla Huar y N° 6 Lago Cástor, sin contenido; firma Francisco Pizarro Dasso.

Consultado si en diciembre 2012 fue a una fiesta en el hotel Dreams y que pagó \$150.000 por concepto de entradas, respondió, *llevé a mi familia a pasar las fiestas de fin de año en el hotel Dreams.*

OCTAVO: Declaración el acusado César Rojas Gaete. Consultado por el tribunal acerca de si prefería guardar silencio o declarar, respondió que quería hacer esto último, luego de lo cual comenzó su declaración diciendo que era ex funcionario de Carabineros, cuáles eran sus antecedentes profesionales, formación académica y trayectoria laboral en la institución policial. En cuanto a los hechos de la acusación explicó que él no tenía dominio de los procesos que se desarrollaban en L1, porque se desempeñó en la dirección de Logística. En el año 2011 se acogió a retiro voluntario. Comenzó a desarrollar actividades empresariales, además de continuar con labores académicas en física, química y metodología de la investigación. En el año 2012, el ex capitán Carlos Bustos, le dijo que necesitaba asesoría en unos procesos de compra pública. Tuvieron una reunión en el café Tavelli, asistieron Renato Méndez, Fernando Delgado, Carlos Bustos y él. Solo se tocaron Generalidades de los procesos de compra. Posteriormente se hizo una segunda reunión en la oficina de Fernando Delgado, la que al parecer habían iniciado mucho tiempo antes de la hora que él fue citado. Estaban presentes Renato Méndez, el abogado Delgado y el primo hermano de Renato Méndez, Rodrigo Carrasco, más Cristian Gutiérrez, a quien sólo saludó y con quien no tuvo intercambio de palabras. Ahí se percató que se trataba de licitación de cuarteles de Carabineros. Se retiró sin hacer intervenciones. Pasado el tiempo, se enteró que este grupo participó en procesos de licitación en los meses de abril y mayo, pero no se adjudicaron las obras a las que habían postulado. Después que se dieron los resultados de estas licitaciones recuperó el dinero de las boletas de garantía que Carlos Bustos le había solicitado financiar a cambio de obtener alguna rentabilidad. Añadió que Renato Méndez lo citó a una reunión, en la cual le informó que otra persona le entregaría el dinero de las boletas puesto que éstas no podían ser endosadas y que el dinero se depositaba en la cuenta de la constructora. Explicó que *este proceso* ocurrió en el mes de julio. Agregó que Renato Méndez le planteó la posibilidad de ir en otros proyectos que le habían gustado y que habían quedado desiertos, y la posibilidad de conversar con Cristian Martínez, momento en el que se dio cuenta la empresa Constructora era propiedad de Cristian Gutiérrez, el cual le manifestó su intención de participar en esas licitaciones, invitándolo a él a invertir y ofreciéndolo una determinada rentabilidad para los fondos que se involucraran en estos procesos.

Refirió el acusado que la propuesta le pareció atractiva por los niveles de rentabilidad, y además por sus conocimientos de las técnicas constructivas y porque Gutiérrez le dijo que sabía dónde comprar. Añadió que en ese momento se requería una inyección inicial para visitar los cuarteles que se estaban licitando, por lo que hizo un plan para realizar las visitas, aclarando que no sabía que Gutiérrez tenía tratativas en paralelo con su antiguo grupo, lo que le trajo consecuencias posteriores pero cuyos detalles dijo no conocer. Refirió que le facilitó el dinero y él hizo el viaje pasando por varios cuarteles, después de lo cual concluyó que le convenía ir a Villa Ortega, para lo cual preparó el itemizado y las especificaciones correspondientes, precisando que esta tarea iba más allá que poner un precio, toda vez que hay que justificar el costo de cada una de las partidas, lo cual sólo es entendible por alguien dedicado al rubro de la construcción. Consideró que Villa Ortega era un proyecto interesante. Posteriormente concurrió personalmente a la apertura de sobres.

Declaró que después de la reunión del mes de julio se percató que ese tipo de materias no eran su fuerte, pero cuando Renato Méndez y Carlos Bustos le plantearon lo interesante que podía ser buscó mayor información complementaria para tener una visión más real, motivo por el cual concurrió al Departamento L1, donde se encontró con el Coronel Christian Bustos, quien lo atendió en un gesto de camaradería. Aclaró el acusado que con Bustos Morgado habían trabajado en un mismo Departamento pero en dos secciones diferentes. Aquel día le planteó su inquietud por conocer más de esos procesos, recibiendo toda la información que requería, le entregó los datos de la normativa y los antecedentes que se requerían para inscribir una empresa, precisando que la empresa CGM ya estaba inscrita desde el mes de mayo de ese año. Refirió que le llamó la atención que estos procesos eran en formato papel o físico, atendida la apertura de sobres y al hecho que los antecedentes debían ser entregados físicamente, lo cual, sin embargo, presentaba la ventaja de los controles cruzados. Explicó que revisó la normativa que regula estos procesos, a saber, la Ley de Construcción de Obras de Exclusivo Carácter Policial y su reglamento, D.S. 294 del Ministerio de Defensa., no obstante lo cual, en la formalización se basaron en el DS 294 del Ministerio de Obras Públicas. Relató que en los anexos que venían adjuntos a las bases Generales y administrativas, el primero de ellos señalaba que no era obligación de publicarlo en el portal de Obras Públicas, pero para efectos de traSPArencia se decidió que debía publicarse. Indicó que al recopilar la información de diferentes bases de datos, de varios proyectos, unido a la información que le proporciona la empresa,

se puede obtener información útil, como por ejemplo, a quiénes se les aceptaba la participación, a quiénes se les había negado, los errores que cometían las empresas al participar, etc. Fue así como concluyeron que había que participar donde hubiere menos oferentes. La norma indicaba que las visitas a terreno eran obligatorias. Se decide técnicamente participar en algunos proyectos y dentro de ellos, Villa Ortega. A efectos de la postulación se debe presentar una boleta de seriedad de la oferta, señalando que esa boleta él la retiró. La otra es la boleta del cumplimiento del contrato, explicando que cuando la empresa no se adjudica la obra se devuelve la boleta endosada o puede esperarse hasta la fecha de vencimiento. En definitiva, la boleta que retiró fue un mero trámite, la cual se devolvió, aclarado que él jamás retiró ese tipo de boletas, y que el único que sí lo hizo fue un señor de apellido Gutiérrez. En estos procesos se presentaron todos los antecedentes requeridos en las bases administrativas y en la ley, conforme al listado entregado; y en la apertura de sobres se verifica si presentan todos los antecedentes y si se encuadran dentro de los montos establecidos sigue hacia el siguiente paso de la evaluación. Señaló que si las obras se adjudicaron se debió a que cumplieron con todos los requisitos. Afirmó que respecto de la parte técnica, la responsabilidad le corresponde a la empresa CGM, añadiendo que él no firmó ningún contrato con carabineros. Explicó que las bases exigían que un arquitecto formase parte del directorio, siendo este el motivo por el cual se incorporó a Ignacio Labra, el cual estaba cesante desde hacía cuatro o cinco meses. Explicó que su principal preocupación, incluso antes de solicitar la devolución de sus dineros, era que se debía cumplir con los plazos y evitar el cobro de multas. Negó haber estado a cargo de las finanzas, en circunstancias que se le ha mostrado como alguien que manejaba los bancos y los factoring, lo que no es efectivo. Señaló que ante la elocuencia de Cristian Gutiérrez no exigió ningún pagaré como respaldo, y que antes de viajar Gutiérrez le pasó un mandato que hizo por su cuenta en Lampa, el cual sin embargo no utilizó. Respecto del factoring, explicó que se requiere que el representante legal de la empresa firme el respectivo contrato. En cuanto al hecho que dos de sus colaboradoras, una de ellas Claudia Lezana, habrían retirado cheques de CGM, explicó que el mismo día del retiro de los documentos éstos fueron depositados en la cuenta corriente de Constructora CGM. Los dineros que aportó provinieron de su jubilación, la cual perdió, y de personas que confiaron en él y le facilitaron el dinero, los cuales no querían ser conocidos, motivo por el cual los denominó “A” y “B”, aclarando que se trataba de Salomón Bulckman y Eduardo Martin, a quienes les pagó el préstamo íntegramente, además de los impuestos. Negó que Gutiérrez hubiere pagado tales

dineros y tampoco que le hubiere dado nombres. En cuanto a la información privilegiada que se dice que tenía, dijo que ello no era efectivo porque la información es de acceso público, sin perjuicio que por su trabajo anterior tenía conocimiento de las características de este *software*, podía manejarlo sin dificultad y aplicar el conocimiento que había adquirido durante esos años. Refirió que nunca le dijo a Gutiérrez que había sido carabinero. Explicó que en la dinámica de la licitación de cuarteles, entre los años 2010 y 2013, era fácil determinar las variables que iban a ser consideradas ya que todas tenían los mismos formatos, además de que algunas habían sido declarado desiertas y otras que se encontraban definidas con anterioridad. Refirió que en el mes de diciembre se participó en la licitación de los cuarteles de Coyhaique Alto, Lago Castor y después Isla Huar. Hasta el mes de diciembre de 2013, siempre estuvo buscando financiamiento para entregar a la constructora, como ocurrió con el pago de su desahucio, además de préstamos, pero por la dinámica de trabajo de la constructora “se diluía el efectivo” y en consecuencia faltaba el capital de trabajo. En esta lógica Gutiérrez lo acompañó a buscar financiamiento. Afirmó que su preocupación era conseguir los pagos para que Gutiérrez lograra terminar la construcción de los cuarteles. Le dijo que estaría con todo terminado en el mes de septiembre. Al llegar el mes de octubre, cuando firma los dos pagarés más la retroexcavadora, la deuda que tenía con él se le acorta bastante, las utilidades ya estaban desvanecidas. Los pagarés fueron ejecutados y no hubo pago. De todos los actores que han sido mencionados, dijo ser él uno de los pocos que ha tenido pérdidas ya que luego de la primera entrevista con el fiscal que llevaba la causa, los bancos le liquidaron los créditos que tenía, viéndose obligado a vender una propiedad. Dijo que jamás se apoderó de un peso, y que desde el inicio de las obras sus actuaciones fueron a petición de Gutiérrez. Hizo presente la dificultad que tuvieron para comunicarse con él, tanto así que Curiquéo señaló en un correo que había tenido que comunicarse con su madre pues Gutiérrez no respondía. Respecto del ingreso de Gutiérrez a su oficina indicó que eso lo permitió porque las oficinas de éste estaban ubicadas en Lampa y porque tenía deudas de las que se hizo cargo personalmente. Al ir a desarrollándose las obras, en el segundo semestre del año 2012, la situación aparecía como coherente de acuerdo a lo que se le había ofrecido, pero a partir de los primeros estados de pago, se vio que no era así. No existía planificación en CGM, y cuando comenzó a darse cuenta de ello encendió las alertas, trató de recuperar sólo lo que había invertido, esto en relación a que había hecho pagos directos a su madre, al hermano y a proveedores. No había una intención de destruir a nadie, sólo le interesaba la

construcción de los cuarteles, agregando que no escuchó a nadie plantear siquiera la intención de adjudicarse una licitación para quedarse con los dineros y huir con ellos, lo que por lo demás no era factible atendido los controles que existen en la Institución. En relación con la participación en una transferencia de una cuenta bi-personal con su señora, a la cuenta del General Félix Flores, a finales del año 2013, explicó que correspondió a la venta de un inmueble, ya que su esposa había trabajado en la división de educación en la Escuela de Suboficiales junto con Félix Flores Santis, época en la cual le asignaron una casa fiscal, por lo que fueron vecinos, pero él, personalmente, no lo trató ya que en ese período integró la Comisión de Paz de Naciones Unidas en Herzegovina. Fue así entonces que para “implementar” un Departamento que tenían en la V Región, le compraron un mueble a Flores al enterarse que éste lo vendía a raíz de un cambio de domicilio.

En cuanto a la inscripción de constructora Grossman, existe una diferencia con CGM, aunque en ambas se le responsabiliza a él en circunstancias que él no firmó nada, pero se diferencian en que en la primera no existe, sólo un estado de liquidación de pago, el que emite la institución de lo que estima es el costo de la obra, sin dineros adicionales bajo ningún concepto. Se le cobraron boletas de garantía y multas relacionadas con plazos que fueron de responsabilidad exclusiva de la institución lo cual dio origen a un reclamo formal y administrativo. Explico que Grossman llegó al proceso porque se le presentaron los proyectos, pareciéndole comercialmente interesante, además de que tenía experiencia en la zona, a raíz de lo cual se efectuó el proceso de inscripción. Las obras tuvieron un retardo en su ejecución, y por la publicidad que le dio la prensa, la institución decidió ponerle término anticipadamente a los contratos. Nunca consintió, ofreció ni participó en nada. La transferencia de 1 millón a Flores no se condice con la época en que se inició el proceso de licitaciones, esto es, en agosto de 2012, en tanto que la transferencia se hizo en el mes de octubre de 2013, siendo esta la única transferencia.

Interrogado por el ministerio público respondió que fue Carlos Bustos lo llamó a la reunión en que puso sus dineros para las boletas de garantía a cambio de una retribución. Estuvo en la Dirección de Compras Públicas, en la cual, aunque con distinto nombre en esa época, coincidió con Christian Bustos, participando ambos en reuniones de trabajo y casino. Negó haber concurrido al Departamento de Cuarteles a conversar con Bustos Morgado, sino que en busca de información que

se le pudo haber entregado a cualquier persona en relación a los procesos de licitación. Durante el desarrollo del proceso de licitación no visitó ni tuvo contacto con Christian Bustos, ello porque las normas lo prohíben expresamente. Negó haber mantenido contacto telefónico con Christian Bustos durante el proceso de licitación. A fin de evidenciar contradicción se le exhibe la declaración de 7 de marzo de 2016, prestada en la fiscalía calidad de imputado: “respecto de los llamados con Flores y Bustos tengo llamados en mi celular pero pocos”. Negó que hubieren sido hechos durante el proceso de licitación ni adjudicación, sino que fueron anteriores. Negó haber tenido reunión alguna con Bustos en ningún Mall, sin perjuicio que coincidieron en Florida Center cuando iban a tomar café.

Negó haber sido presentado a Pizarro como amigo de confianza de Bustos, y que lo que ocurrió fue un encuentro casual, no se habló de las licitaciones, y además fue posterior al inicio de Villa Ortega, junto con pedirle información respecto del desarrollo del trabajo que allí se estaba efectuando. Negó haber tenido trato preferencial en el Departamento de Cuarteles. **Se le exhibe prueba documental N° 765, prueba de la fiscalía**, señala que se trata de un correo electrónico pero que “*no, no puedo reconocerlo*”. **Se le exhibe del N° 9, otros medios de prueba**, un correo electrónico (Outlook) de 24 de julio de 2012, el cual *tampoco reconoce*, explicando “*no es el formato de mi correo*”. Dijo que era efectivo que no se registraba en el libro de visitas, aunque técnicamente no era ese el nombre, ya que eso corresponde un trato deferente para los ex funcionarios. Negó haber sabido por persona alguna las fechas de visitas de fiscalización a las obras, explicando que eso corresponde un proceso interno de la institución. **Se le exhibe del N° 9, otros medios de prueba**, un correo electrónico, que señala “asunto: consulta”, el cual dice que *no lo reconoce porque no corresponde a su formato*. Negó haber recibido alguna comunicación relacionada con las fechas de fiscalización de las obras. **Se le exhibe del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico con el “asunto: dato”, de fecha 10 de abril de 2013, el cual *no reconoce* diciendo que no es el formato aunque su casillo sí corresponde, parece que corresponde al grupo de archivos editados por la defensa de Gutiérrez, adicionando que el formato exhibido es Outlook en tanto que su correo, vtr, no trabaja con ese formato. Dijo no recordar que durante sus declaraciones le hubieran exhibido correos electrónicos. A fin de **refrescar memoria se le exhibe declaración**, respondiendo que *allí no se dice lo anterior*, le exhibe correo de 11 de enero de 2013: “*yo lo envié, es mi casilla, tengo que verificarlo, respecto de B tengo que verificarlo, puede que mi correo se haya quedado pegado*”. Consultado

por un correo de 19 de noviembre, enviado por él, dice no recordar: respecto del correo de 19 de noviembre *corresponde a mi dirección de correo, por la fecha tendría que ser cuando él me comenta que habría sido...*". Respecto del atraso de Villa Ortega respondió no haberlo sabido, esto porque *Gutiérrez siempre le informaba que estaba todo bien, aunque en una oportunidad fue a Isla Huar, pero no visitó las obras.* **Confrontado con su declaración espontánea**, en que señaló no haber ido a Isla Huar, insistió que fue una vez pero no a las obras. Se **le consulta por el documento N° 782** (ya incorporado), "asunto urgente", dice no recordarlo atendido el tiempo transcurrido: "la visita se trasladó para el 3 de junio", negó haber obtenido esa información del personal del Departamento de Cuarteles. Se **le exhibe el documento N° 827, otros medios de prueba fiscalía**, a saber Resolución que aprueba los montos de Villa Ortega (Oficio 1684 de Chile-compra, de 28 de septiembre de 2018), lo reconoce el acusado, se hace lectura resumida: *Carabineros de Chile, Dirección Nacional, se aprueba contrato de obra entre Fisco, Carabineros de Chile, y la empresa Constructora CGM Ltda., proyecto de reposición Villa Ortega, 25 de octubre de 2012, Resolución Exenta N°1200: Vistos, artículo 9° de la Ley 18.575, artículo 52 letra f) de la Ley 18.961, Ley orgánica de Carabineros, artículos 2° y 3° de la ley N° 18.785, sobre Normas para Construcción de Obras exclusivas de Carabineros, y 1° inciso cuarto, SUBSECAR, la Resolución Exenta de la Dirección Nacional de Logística, de 12 de julio de 2012, el certificado N° 52, de 18 de junio de 2012,...: Considerando que a) Carabineros., b) que por medio de la Resolución Exenta N° 989, de 14 de septiembre de 2012 se adjudicaron obras a Constructora CGM; c) que mediante el certificado de refrendación N° 52, de 18 de junio 2012, se asigna la suma de \$390.000.000 al proyecto antes referido, los cuales se imputan a la partida 5, etc.; Presupuesto Nacional 2012. Publíquese, Jorge Rojas Langer, Director del Departamento Nacional de Logística.* Explicó que el certificado de refrendación no es reservado, y que el monto de la obra es el que se publica en las bases de licitación y no el mencionado certificado. La resolución que antecede dice que *existen montos disponibles por ese monto pero no quiere decir que sea ese el monto licitado.* Reconoció haber sido él quien retiró la boleta de garantía de seriedad, explicando que ello fue así porque no había nadie más que la retirará, agregando que *eso no era más que un papel.* Negó haber hecho transferencia de CGM a su cuenta personal, sino que fueron hechas por Gutiérrez con sus claves. Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico, 10 de julio de 2013, asunto: depósito IVA, de CesarRojas@vtr.net a cgutierrez@constructoracgm.cl, señala que **no** reconoce el archivo del correo

electrónico, y que corresponde al grupo de correos editado por Gutiérrez. Consultado por la fiscalía si era entonces efectivo que nunca había estado a cargo de las finanzas, del *factoring* ni de la administración, confirmó tal afirmación. Al efecto, se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico de fecha 4 de febrero de 2013, *asunto: revisar*. Consultado si reconocía el contenido del correo, respondió que *es el mismo formato que los anteriores, por lo que no puedo reconocerlo*. Se le exhibe y consulta por el documento adjunto, refiere que *“se trata de un documento genérico, pero no puedo decir si corresponde exactamente a un documento elaborado por mí”*. Consultado por una planilla excell adjunta, responde que *no recuerda la temporalidad ni el contenido ni conceptos del documento*. Negar haber intentado efectuar el factorig de dos facturas, ello porque el factoring es un contrato que se celebra con la empresa, el cual sólo puede celebrarlo el representante legal de la misma, negando haber intervenido a virtud del mandato que se le había otorgado. Confirmó nunca haber preguntado por el avance de las obras de Villa Ortega. Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba, correo electrónico** 8 de enero 2013, avance de obra Villa Ortega (anteriormente aportado), de Ignacio Labra, ilabra@constructoracgm.cl, para Pamela Beltrán; con copia juribe@constrcutoracgm.cl; CesarRojas@vtr.net Consultado, responde que **no lo recuerda y que no es él** quien lo envía. En el mismo sentido, se le exhibe **otro correo**, de 22 de enero de 2013, mismo remitente anterior, destinatarios, juribe@constrcutoracgm.cl y Pamela Beltrán; con copia Constructora CGM Ltda., CesarRojas@vtr.net, documento que dijo **no recordar** haberlo recibido. Reconoció haber recibido correos de Ignacio Labra, pero no puede asegurar que el que se le acababa de exhibir sea uno de ellos. Se le exhibe **otro correo**, mismo remitente, fecha 11 de abril de 2009, *asunto: datos*; **no** lo reconoce porque ese no es su correo. Consultado si en alguna oportunidad solicitó a Jorge Uribe fotos e informe semanal del estado de avance de las obras, respondió que *probablemente, porque puede ser que Cristian Gutiérrez así se lo hubiere instruido*, no pudiendo sin embargo aseverar si ello ocurrió el 9 de abril de 2013. Se le exhibe **correo electrónico de esa fecha**, responde que lo reconoce, pero niega imágenes e informe semanal a que se alude en él. Dijo no saber que en octubre de 2013 no estaba terminada la obra de Villa Ortega. Al efecto **se le exhibe correo de 19 de octubre de 2013**; *asunto: flujo término de obras*, enviado por CesarRojas@vtr.net, para ilabra@constructoracgm.cl, juribe@constrcutoracgm.cl, con copia Constructora CGM; *asunto: envió lo acordado; contenido: “esto es lo que se fue”*. Consultado por el documento adjunto, *escala de tiempo*, respondió *recuerdo haber*

*enviado un correo de ese estilo, pero no haberlo elaborado, sino que Gutiérrez. Dijo no saber si se cobraron las multas por las otras obras distintas de Villa Ortega. Negó haber trabajado “nunca en CGM”. En la reunión de junio sólo recuerda que se habló en General del estado de avance de las obras, pero no recuerda que se haya hablado de la recepción provisoria, con o sin observaciones, de Villa Ortega, recordando que estuvieron presentes Andrea Campusano, el ITO Francisco Pizarro, Christian Bustos y Cristian Gutiérrez. Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico de 26 de junio de 2013; *asunto: consulta; de CesarRojas@vtr.net para cgutierrez@constructoracgm.cl; adjunto: paralelo.pptx*. Preguntado si reconoce el correo respondió que **no** lo recordaba, por la misma razón ya antes señalada. Se le exhibe el documento adjunto (de CesarRojas@vtr.net para cgutierrez@constructoracgm.cl). Los contactos con Gutiérrez después del quiebre estuvieron enfocados al cobro de los pagarés y recuperar sus dineros, sin perjuicio que continuó preocupado por el término de las obras y dar cumplimiento al contrato con Carabineros. Dijo no recordar haber solicitado a Ignacio Labra que viajara a verificar las obras de CGM antes de postular, agregando que *de ser así “no tendría nada malo si así hubiere sido”*. Dijo no saber, ni haber tenido que saber, que los estados de pago estaban adulterados en relación al estado de avance de las obras, explicando que “no soy técnico” y *porque el estado de pago no son cuatro hojas sino que muchas más con bastante información*. Respecto de sus inversionistas, Salomón y Martín, reconoció dos pagarés, los cuales fueron del siguiente tenor: N° 54, *“Pagaré; debo y pagaré a Sociedad Comercial Millenium Ltda., RUT 77.261.030-0 representada por Salomón Goldman Molina, domiciliado en Bulnes N° 193, la suma de \$32.000.000, la que será cancelada a la vista; el no pago de cualquiera de las cuotas hará exigible el la deuda total, suscriptor César Orlando Rojas Gaete; N° 55, Pagaré a plazo; Santiago a 3 de diciembre de 2012, yo Orlado César Rojas Gaete, domiciliado en Los Olmos 2209, Macul, debo y pagaré a la orden de Eduardo Martín Aranda, domiciliado en La Florida, la cantidad de \$15.000.000 de pesos, la que me obligo a pagar el 3 de marzo de 2013; firma suscriptor y RUT*. A la pregunta de la fiscalía respondió que los empresarios no participaban en las licitaciones de las obras del Departamento de Cuarteles. **Consultado por el documento 858, ya incorporado**, respecto de aquella parte en que se dice que “el ITO está tranquilo”, se estaba refiriendo a Eduardo Martín, respondió que no, que Martín no trabajaba de fiscalizador, y que la identificación del “ITO” con Francisco Pizarro era algo que Gutiérrez había dicho, no él. Se lee resumidamente **el documento N° 777**, ya incorporado, “...sólo falta incorporar los créditos tuyos y*

los míos...”, consultándosele por la referencia que se hace a “I” en el documento, respondiendo que eso se refiere a un inversionista posible. Respondió que efectivamente no existió inversionista C ni D, pero sí “I”, porque es una denominación General con la cual se alude a un potencial o posible inversionista. Refirió que lo dicho por Gutiérrez no era correcto cuando dijo que “A” era Flores, “B” era Bustos e “I” era Francisco Pizarro. Agregó que “A” y “B” *eran concretos, no así I ya que podía ser cualquier persona que pudiera invertir*. Negó que “A” y “B” fueran asesores, además de inversionistas. No recuerda haberse referido a “A” y “B” como tales. Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico de 7 de enero de 2013; *asunto: revisar; adjunto: temas a revisar y ejecutar.doc (word); Flujo Villa Ortega (excell); de CesarRojas@vtr.net para Constructora CGM Ltda.: contenido: “Cristian dale una revisión a los antecedentes que te envió, me cuentas cuando tengas tiempo. Best Regards, César Rojas Gaete*. Consultado si lo recordaba, respondió que sí. Se da lectura al adjunto 1: *pago facturas pendientes Lampa, pago facturas arriendo de contenedores, entrega de contenedores arrendados, compra de contenedor, revisión procesos, envío contrato Isla Huar; Otros: gestión de contratación de personal (administrativo en obra, definir quién y cuándo se requiere, sueldos, plazos para la programación; Gestión de la compra (definición de lo requerido, ya que está disperso y no concuerdan con las etapas del proyecto); Gestión de Procesos (levantamiento de los actuales procesos para verificar los protocolos de los escenarios; certificar si software es un aporte o no)*. Consultado al respecto señaló que todo lo contenido en el documento eran *Generalidades para el mejoramiento de los procesos*, y que él no estaba desvinculado completamente de la empresa. Se le exhibe planilla Excell: Planilla de pagos: *ejecutado/pagado; pendientes/comprometidos; programado: pago Llanquihue, sueldo diciembre, pie retroexcavadora, etc*. Consultado si había tenido control financiero u operacional de CGM, respondió “no”

Consultado por la expresiones “intereses A e intereses B”, se refiere al costo del dinero. Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico de 14 de marzo de 2013; de CesarRojas@vtr.net a cgutierrez@constructoracgm.cl; *asunto: favor leer*. Consultado responde conocer el contenido y archivo adjunto. Lectura: *Sigo preocupado del avance estamos hablando de 56 días, lo que definitivamente es imposible, debemos esforzarnos para que esto salga... la obra de Cristian Leay ha sido un dolor de cabeza por ejemplo Ignacio estuvo por esos lados, para solucionar problemas de materiales, y en la tarde Carlos con el*

traslado de revestimientos. Tenemos que regularizar la proyección del gasto. Consultado por la alusión que se hace en el documento a “el hombre”, respondió que correspondía a Eduardo Martin y al inversionista mencionado con la letra “B”. Consultado si coordinó la compra de una escopeta, respondió “no”. A fin de evidenciar contradicción se procede a exhibir al acusado su declaración, de cuya lectura consta que declaró que *Bustos le había comentado que se quería comprar un rifle al ITO Pizarro.* Se le exhibe **del N° 9, otros medios de prueba**, correo electrónico de 19 de enero de 2013, de CesarRojas@vtr.net a Constructora CGM: *Asunto: datos: Te envío los datos del hombre de Isla huar, transportista (lanchón) y posible mano de obra en la Isla, no habría que pagar alojamiento, se llama Alexis Proschle Villegas, teléfono., correo aproschlevillegas@gcorreo.com, el está navegando por lo que habría que llamarlo para coordinar entrevista en la semana, vía Huelmo. Características del rifle a postones del ITO.* Consultado por **el documento 774 – Cristian**, *de acuerdo a lo conversado ayer, me preguntan por el retorno de la inversión, debieran ser \$30.000.000 millones a cada uno, podría hacerse con los dos primeros estados de pago –*, si en él se estaba haciendo referencia a los inversionistas “A” y “B”, respondió que sí, pero que él también estaba incluido ya que había aportado su desahucio, además de otros pagos. Negó haber sido el gerente comercial de CGM. El organigrama que envió Carlos Bustos, en el que él aparecía él como gerente General, dijo que nunca se aplicó ni implementó, no obstante que haber sido comunicado a todo el personal. Reconoció que el 9 de enero de 2013 retiró él la boleta de garantía de seriedad por la empresa CGM (se **le exhibe documento 1.065, antes incorporado**), *“acta de entrega, firma Luis Parra Ávila, se deja constancia que la devolución se hace conforme a lo dispuesto por el Teniente coronel Christian Bustos Morgado”.* Consultado por la constancia dejada en el acta dijo no recordar si dicha constancia se había debido a que él fue sin el RUT de la empresa, sin el cual no podía hacerse devolución de la boleta, precisando que no era obligación presentar el RUT para obtener la devolución de la boleta. Reconoció que la boleta de garantía era falsificada, negando sin embargo que esa haya sido la causa por la cual fue él personalmente a retirarla. En cuanto a Carlos Grossman, dijo que lo conocía *de antes*, señalando que efectivamente esa persona era el representante legal de la empresa, aunque negó haber sido él quien lo contacto para las obras de término que estaban pendientes. Reconoció que Grossman lo designó como director ejecutivo de la empresa, al igual que a Ignacio Labra, habiendo sido él quien contacto a este último para *formar parte del proyecto* ya que en ese entonces el mencionado Labra estaba sin trabajo. Negó que Ignacio Labra hubiere trabajado

“para él”, sino para Constructora CGM. A Nelson Curiqueo no lo llevó él sino que fue Ignacio Labra quien *lo invitó a participar en el proyecto*. Reconoció haber sido él quien entregó *los papeles* en el Departamento de Cuarteles para el Registro de la empresa Grossman S.A., pero que no había sido él quien tramitó la solicitud. Reconoció haber participado en un proyecto anterior de una obra, al cual postuló la empresa Grossman, pero que no se la adjudicó. Negó que hubiere llevado los documentos antes de la postulación. **Se le exhibe el documento 1.056, prueba de la fiscalía**, Resolución Exenta 847, de 28 de octubre de 2013. Se le exhibe y lo reconoce. Dijo estar al tanto de su contenido. Se hace lectura: *Carabineros de Chile, Dirección General de Log, aprueba inscripción Registro General de Contratistas de la empresa Constructora Grossman S.A.; Santiago, 28 de octubre de 2013: Leído consta: Vistos los artículos 5° y siguientes del D.S. 294, que aprueba el Reglamento de Obras, los artículos 12, 13 y 14 del mismo, lo señalado en Resolución Exenta Dicar N° 96, de 11 de mayo de 2011, por medio de la cual el Director General de Carabineros delega en el Director Nacional de Logística las atribuciones de los artículos 12 y 13 del mismo; resolución 1600, del año 2008, de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario oficial de 6 de noviembre de 2008, sobre Normas de Exención de Toma de Tazón; carta de 16 de septiembre de 2013, de Constructora Grossman S.A.; Oficio N° 277, de 8 de noviembre de 2013, del asesor jurídico Nicolás López Reyes; y Oficio N° 101, de 8 de noviembre de 2013, del asesor de control de riesgo, Pedro Jofré Montero, respecto de la solicitud de la contratista señalada, resuelvo: La evaluación de la empresa del Oficio N° 277, Oficio N° 101 del asesor de control de riesgos de Carabineros, se concluye que califica en obras mayores de segunda categoría, resuelvo: se aprueba la inscripción en el registro de contratistas de la empresa Grossman SA; se aprueba la solicitud de inscripción en el registro de contratista de la empresa ya mencionada, de la manera que se indica; notifique y publíquese. Jorge Rojas Lander.* Haciendo presente la señora fiscal que los antecedentes que se citan son de fecha posterior a la resolución que autorizó la inscripción, el acusado respondió afirmativamente a la pregunta acerca de haber sido él quien recopiló los antecedentes, precisando que *fueron entregados el 16 de septiembre*. **Se le exhibe el documento N° 1.250, prueba del ministerio público**, consistente en Oficio N° 273, de 7 de noviembre de 2013, el cual reconoce el acusado, señalando que se trata de un oficio interno entre L1 y el Departamento de Asesoría Jurídica, el cual negó haberlo visto con anterioridad. **Se le exhibe el documento N° 66, de la prueba del ministerio público**, 4 tomos del sumario administrativo de Carabineros, las fojas 1.852, 2.853, 2.854 y 2855, los cuales

reconoce como aquellos que recopiló. Lectura: 1) fs. 2.852, Santiago, 18 de noviembre de 2013, Jefe Departamento L1, Coronel Félix Flores Santis, presente; referencia: remite comprobante de capital comprobado para ser incorporado en carpeta: Nuestra empresa, Grossman S.A., mediante el presente documento hace entrega de capital comprobado que se encontraba pendiente para su inscripción en el registro de contratistas, firma por poder, contactos.grossman@vtr.net. Consultado el acusado si él había creado el correo, negó ser así; 2) fs. 2.853, certificado: Banco de Chile, certifico que el cliente Grossman S.A., mantiene cuenta corriente N° 1420320206, desde marzo de 1995, de acuerdo a los antecedentes entregados al 31 de diciembre de 2012, mantiene un patrimonio de \$339.865.000, patrimonio neto; certificado que se otorga a petición del interesado; firma ejecutiva grandes empresas, Santiago 15 de noviembre de 2013; 3) fs. 2.855, Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, certificado de vigencia, el Conservador que suscribe certifica que a fs. 604 vta., N° 513, del registro de Comercio del año 1992, correspondiente a la sociedad Grossman, no existe constancia que haya sido disuelta a la fecha, Viña del Mar, 29 de octubre de 2013; y 4) fs. 2.854, 14 de nov de 2013, Sr. Jefe Departamento L1, Félix Flores; referencia, remite antecedentes para ser incorporado en carpeta del registro de Contratistas, 2da categoría: Nuestra empresa, Grossman S.A., mediante el presente documento hace entrega de antecedentes que se encuentran pendientes para completar la inscripción: certificado de vigencia, Conservador del Registro Comercio, Valparaíso; escritura pública del directorio; certificado antecedentes del director, anteriormente entregado; certificado del boletín comercial de la empresa; formulario de inscripción; balance y estado de resultado del período auditado debidamente. Firma Carlos Grossman, representante legal, p.p. firma contactos.grossman@vtr.net.

Contestó que era efectivo que el 22 de octubre de 2013 se reunió con Grossman y Flores a almorzar en restaurant Chilenazo, negando sin embargo haberle propuesto a Grossman el negocio de terminar las obras, proponiéndole que las financiara y él se preocuparía de todo lo demás. Negó haber tenido conocimiento que en esa fecha se había puesto término al contrato de CGM. Grossman pagó la cuenta. En esa reunión nadie le propuso a Grossman un trato directo para el término de las obras sino sólo a participar en el proyecto Río Tranquilo. Dijo no recordar haberle dicho a Grossman que las obras de Coyhaique habían quedado abandonadas. Juan Pablo Cáceres era una persona que contrató Grossman para controlar las obras, a quien él no estaba obligado a rendirle cuenta pero sí que le

informaba de los avances. Se **le exhibe documento 1.313, prueba del ministerio público**, cadena de correos de fecha 26 de febrero de 2014, *asunto, rendiciones pendientes*, de fecha 4 de febrero de 2014 y documento adjunto, y de fecha 7 al 10 de marzo de 2014, *asunto “término de contrato obras Grossman SA*. Consultado si los reconoce, respondió “sí”. Se hace lectura de ellos: **1)** correo electrónico de 26 de febrero de 2014, *asunto: rendiciones pendientes: de Pablo Cáceres*, pcaceres@interservice.cl, para César Rojas, CesarRojas@vtr.net, con copia a Carlos Grossman, contactos.grossman@vtr.net, Orestes Palma (correo): “César, recuerda que aún quedan por rendir una gran parte de los gastos efectuados en Coyhaique Alto e Isla Huar, cuando tengas el resultado te agradeceré me informes”; Respuesta de César Rojas: *Estoy en eso, lo tengo súper claro, en cuanto los tenga te los hago llegar*; **2)** correo de 4 de febrero, *asunto: observación rendiciones: de CesarRojas@vtr.net*, para Pablo Cáceres, pcaceres@interservice.cl, con copia a Orestes Palma y Carlos Grossman: “Estimado Pablo, te adjunto documentos e informe por diferencias, nos vemos mañana”; 2 datos adjuntos: a) *Gastos Coyhaique Alto - anexo facturas pendientes.pdf*; y, b) documento adjunto: *logo edificio, “Grossman”; anexo pendiente del primer informe Coyhaique Alto, enero de 2014*; más abajo, “*elaborado y diseñado por Fabracar para construcciones Grossman*” (se adjuntan facturas). Consultado por el logo que exhibe el documento, en orden a si había sido él y no Grossman quien lo había confeccionado, respondió sí, reconociendo además que la empresa Fabracar es de su propiedad; **3)** cadena de correos desde el 7 de marzo de 2014 hasta el 10 de marzo de 2014, *asunto: término de contrato con empresa Grossman SA*; de Ignacio Labra para pcaceres@interservice.cl, con copia a CesarRojas@vtr.net: *Estimado Pablo, me contacto porque como sabes ayer, jueves 6, terminé mi contrato con Grossman y tengo un par de puntos pendientes que me dicen que debo verlos con Uds.: el primero, días trabajados que se compensarían, pero que César dice los viera con Uds.; y el segundo, la caja chica para los viajes, tengo un saldo de alrededor de 200.000, tengo los comprobantes de gastos, hago presente que \$356.478, corresponden a dineros pagados por mí para gastos y materiales de la construcción, por lo que solicito se incluya todo en el finiquito para no dejar temas pendientes, firma Ignacio Labra Moscoso, arquitecto*. Responde: Pablo Cáceres, con copia Orestes Palma y Carlos Grossman: *¿qué hacemos con esto?, creo que hay decir que no nos involucraremos con esto hasta que... si se va César nunca los respaldará, saludos*. El 7 de marzo Orestes Palma responde a Pablo Cáceres, con copia a Carlos Grossman: *Pablo, en nuestra opinión, nuestro interlocutor es César, no*

podemos involucrarnos con cada trabajador. El 7 de marzo responde Carlos Grossman: OK, así es. El 14 de marzo, Pablo Cáceres, con copia a Orestes Palma, responde: Estimado Ignacio, te comento que como ha sido el procedimiento habitual, es César quien está a cargo de todos los temas operativos contractuales de los trabajadores por lo que todos los dineros que deban ser restituidos deben verse con él: firma Pablo Cáceres. 10 de marzo de 2014, responde: Gracias Pablo por la respuesta, pero esto sólo me enreda porque fue él quien me dijo que me pusiera en contacto con Uds. para solucionarlos; firma Ignacio Labra.

Consultado a continuación el acusado respecto de si él estaba a cargo de todas las obras, respondió “no de todas”. Consultado si sólo se había enterado del término anticipado de las obras de CGM, Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Cástor cuando vio el acta publicada en mercado-público, respondió que *no recordaba la frase exacta* ya que pudo haber sido por esa vía u otra. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibe declaración de 7 de marzo de 2016: *yo me enteré que sacaron a la empresa CGM cuando se publicó en el portal la resolución de revocación de contrato, sólo en ese momento lo supe.* Confirmó que era efectivo que con fecha 4 de noviembre se enviaron cartas de invitación a tres empresas, Olga Garfias, FEALFRA y Construcciones Grossman y que previo a esas cartas de invitación la empresa ya estaba inscrita, precisando que los antecedentes habían sido entregados en el mes de septiembre, por lo cual la fecha 7 de noviembre de 2013, que consignan los informes de los asesores jurídico y control de riesgo, corresponderían a un error administrativo, como lo demostraba el hecho que la resolución que autorizó el registro de la empresa era de fecha 30 de octubre de 2013, o sea, anterior a la fecha que se había indicado en tales informes.

En relación a las transferencias efectuadas desde la cuenta de Purísima Toledo a Constructora CGM, indicó que todas ellas las había hecho él, en tanto que la que se hizo a Félix Flores la había realizado ella y no él. Se **le exhibe el documento 103**, de sus medios de prueba (oficio de Banco Santander 1381/16 de fecha 28 de abril de 2016), el cual reconoce haberlo visto antes “la verdad es que hay un error fundamental porque esa cuenta nunca ha sido suya, es *bipersonal*”, pero finalmente responde “sí, lo reconozco”. Lectura: Banco Santander, fiscalía, Oficio 734-16, de 5 de febrero de 2015, a señor José Antonio Villalobos Gómez, fiscalía

*local de Ñuñoa, de Eugenio Labarca, fiscalía del Banco de Chile: Adjunto copia con detalle de transferencias electrónicas efectuadas desde la cuenta 2003676-1, cuyo titular es César Rojas desde el 11 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013; firma, Eugenio Labarca. Detalle de transferencia realizada el 30 de octubre de 2013, a las 11:59 horas, \$1.000.000, RUT cargo N° 10.966.672-6, cuenta de cargo N° 2367651, RUT destino N° 9.148.787-k; nombre destinatario Félix Flores Santis, banco de abono Banco de Chile, cuenta de abono N° 19702063-01. A solicitud de la defensa del acusado Rojas se complementa la lectura con otra transferencia: 14 de diciembre de 2013, efectuada a las 20:47:03 horas, \$1.000.000; estado, realizada; RUT cargo N° 10966672-6, cuenta de cargo N° 2367651, RUT destinatario N° 13.326.349-7; nombre destinatario, Carlos A. Bustos Prats; cuenta de abono N° 1641760; banco de abono, Banco Santander. Consultado si la transferencia de 30 de octubre tuvo lugar con motivo de la compra que le hizo a Félix Flores de un comedor y 2 sitios, respondió afirmativamente, negando sin embargo haberla efectuada él, sino que su cónyuge. A fin de **evidenciar contradicción**, se hizo lectura de una declaración anterior: “yo compre un comedor en esa época”,... hay un llamado telefónico que hizo mi señora,... “creo que el trato fue verbal y anterior”, no recuerdo si hubo correos electrónicos. Se le exhibe el documento N° 6, otros medios de prueba del ministerio público (set de 5 imágenes adjuntas al Informe Policial N° 110, de 10 de enero de 2017, de la Brigada de Delitos Económicos), el cual reconoce, señala que son fotos de su domicilio, de los sitios, del comedor y de las sillas que compró. Negó que en el almuerzo de fecha 22 de octubre hubiere hablado con Flores acerca del comedor, agregando que “la temática fue otra”.*

En cuanto al retiro de los materiales desde Lago Cástor, explicó que se hizo desde ese lugar porque estaba dispuesto como centro de acopio de materiales para todas las obras. Contestó que era efectivo que en enero de 2014 hizo un pago por \$523.000 por concepto del empalme eléctrico en Villa Ortega, señalando que eso lo hizo *porque había un cuartel de Carabineros que requería de conectividad para poder funcionar*.

Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado, confirmó que fue el mayor a cargo de la Segunda Comisaría de Carabineros, negando haber sido removido el 2010 por irregularidades, como pérdida de material incautado. Negó haber llevado a Carlos Bustos a CGM, sino que lo llevó Gutiérrez, por lo que dicho por

éste en sentido contrario “es falso”. Consultado si le propuso a Cristian Gutiérrez que le traspasara su empresa, dijo no recordarlo. A fin de **refrescar su memoria** se le exhibe al acusado su declaración de fecha 4 de noviembre de 2015, luego de lo cual respondió a la citada pregunta, *sí*, agregando que Gutiérrez le respondió que tenía las obras casi terminadas, o sea, con “una negativa”. Los \$60.000.000 que se transfirió desde la cuenta de CGM a su cuenta propia fueron íntegramente destinados a pagar las deudas, en tanto que la máquina retroexcavadora fue entregada para pagar las deudas, sin perjuicio que Gutiérrez le pidió mantenerla por 20 días más, a lo que él accedió. Declaró que lo dicho por Gutiérrez era falso en cuanto a que su capital eran sus contactos, precisando que su aporte fue dinero.

Interrogado por su abogado defensor respondió que dejó de ser Carabinero en el año 2011. Se **le exhibe** documento N° 2, prueba de la defensa del acusado Rojas (acta de notificación). Consultado al respecto refiere que lo reconoce, se trata de una resolución de retiro de Carabineros de Chile: *En Santiago, a 23 de enero de 2012, se procede a notificar al Teniente coronel César Orlando Rojas Gaete el retiro de la institución, Decreto N° 1035, octubre de 2011: concédese el retiro temporal desde el 1° de agosto de 2011.*

Consultado si cuando conoció a Gutiérrez la empresa CGM estaba inscrita en el Registro de Carabineros, respondió que efectivamente, CGM estaba inscrita. Respondió que había declarado en el sumario administrativo porque fue invitado a hacerlo, a lo que accedió. **Se le exhibe documento N° 4, de sus medios de prueba** (informe final de investigación especial, N° 283/2015, de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de diciembre de 2015, páginas 13, 14 y 15) – también ofrecidos en el N° 115, de la prueba documental del ministerio público –. Consultado si los reconocía, respondió que *sí*, haciendo a continuación lectura de ellos: (....). A solicitud de la fiscalía hizo lectura de la página 2 del documento: “análisis:...se determinaron los hechos que se exponen a continuación...”. A solicitud de la defensa de los acusados Bustos se hizo lectura de las conclusiones contenidas en las páginas 13 y siguientes. Consultado el acusado si estaba o no en conocimiento de que la empresa Grossman hubiere obtenido utilidades, respondió que la empresa *no obtuvo utilidades, agregando que el resultado fue negativo y que se ejecutaron las boletas de garantía y se cobraron multas, no*

hubo siquiera un estado de pago en favor de Grossman, perdiendo de esa forma la empresa alrededor de \$284.000.000.

Consultado por el hecho de no haber reconocido los correos electrónicos en su declaración de día anterior, explicó que sus correos no funcionan con Outlook por lo que toda la información que en ellos aparece no fue enviada desde su correo, añadiendo que los correos que se le mostraron fueron editados por alguien, “*por lo que debo presumir que no son mis correos*”. Sin embargo, en cuanto a los otros correos que sí reconoció en la jornada del día anterior, explicó que el reconocimiento dijo relación con el contenido del correo, en la medida que se trataba de temas que él había abordado en algunos correos. Contestó que *retiré la boleta de garantía de seriedad a petición de Gutiérrez, sin mayores instrucciones como no fuera que, habiéndole preguntado si se los depositaban, respondió que no lo hicieran*. Reiteró que no trabajó en CGM, ya que para ello debió haber existido un contrato de trabajo o un vínculo laboral, no obstante lo cual le prestó asesoría y cooperación para que la empresa pudiera culminar los proyectos y así él recuperar los dineros invertidos.

Consultado si estaba en conocimiento que en los antecedentes de la investigación existía un informe patrimonial de cada uno de los acusados, él incluido, respondió afirmativamente, y que en cuanto a él no se señalaba ninguna anomalía. Negó que fuere cierto lo dicho por Gutiérrez, en orden a que él se dedicaba sólo a los trabajos y que la administración la tenía él, ello toda vez que Gutiérrez siempre mantuvo la gerencia General de la empresa y nunca abandonó la administración. Reconoció haber retirado de la cuenta de CGM la cantidad de \$60.00.000, agregando que él no tenía el manejo de la cuenta ni de las claves para hacer las transferencias, por lo que el retiro de ese dinero lo hicieron de común acuerdo él y Gutiérrez a través de un sistema de traspasos. Preciso que al día siguiente pagó 24 millones de pesos por concepto de impuestos que adeudaba la empresa. Añadió que Gutiérrez le pidió otras transferencias, a las que él accedió. **Se le exhiben los documentos N° 18 de la defensa de Gutiérrez y N° 93 del ministerio público, ambos anteriormente exhibidos.** Del primero hizo lectura de lo siguiente: *4 de julio Agustinas, transferencia de Rojas Gaete por \$ 4.500.000, 4 de julio, agustinas, transferencia de César Rojas \$ 288.832.* En cuanto al segundo documento, N° 93, *Cheque pagado, 3 de julio, oficina gerencia, pago en línea Servicio de Impuestos Internos, \$24.711.788; 4 de julio, sucursal*

*Agustinas, transferencia \$4.500.000; y transferencia \$288.832. En cuanto a los cheques que Gutiérrez dejó a su madre, respondió que fueron retirados por sus colaboradoras desde L8. Añadió que L8 paga mediante cheques nominativos y cruzados. En cuanto a sus colaboradoras refirió que se llamaban Ximena Valdés y Claudia Segura. En cuanto al destino de los cheques refirió que el mismo día que los retiraron los depositaron “automáticamente” a las cuentas de CGM, en la sucursal más cercana al lugar en que habían sido retirados los documentos. **Se le exhiben los documentos N° 669 y N° 98, de las pruebas del ministerio público** (anteriormente exhibidos durante la declaración del acusado Gutiérrez), los cuales reconoce el acusado, señalando respecto de ellos lo siguiente: **a)** en cuanto al primero (N° 669): se trata de tres documentos referentes a actas de retiro de cheques de tesorería de L8, en los que aparece: 1) *beneficiario Constructora CGM Ltda., monto \$46.747.304, emisión fecha 4 de enero de 2013, firma recepción cheque 10 de enero 2013, retira Claudia Segura Lezan; 2)* *beneficiario CGM Ltda., \$81.032.184, emitido el 26 de diciembre de 2012, fecha retiro 28 de diciembre de 2012, retirado por Ximena Valdés; y 3)* *beneficiario CGM Ltda., \$34.699.207, emitido el 12 de marzo de 2013, retiro el 14 de marzo de 2013, por Claudia Segura Lezan; y, b)* el segundo (N° 98): *cartola cuenta corriente de Constructora CGM Ltda., banco Bci, cuenta N° 4594874, ubicando los siguientes depósitos: 1)* *\$46.747.304, el 10 de enero de 2013, sucursal Plaza Bulnes; 2)* *depósito de 28 de diciembre de 2012, Plaza Bulnes, depósito cheque por \$81.032.184; y 3)* *depósito de \$34.699.207, el 14 de enero 2013, cheque depósito otros bancos por \$34.699.207. Negó que le hubiere ofrecido a Gutiérrez el financiamiento de todas las obras, como dijo éste en su declaración. El manejo de las finanzas lo hacía autónomamente Gutiérrez y no le rendía cuenta a nadie. Negó haber mantenido en sus manos algún dispositivo electrónico o coordenadas para realizar transferencias desde la cuenta corriente de CGM, esas sólo las mantenía Gutiérrez en su poder.**

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, respondió afirmativamente a las preguntas sugestivas que se le formularon, primeramente respecto a si era efectivo que el día 15 de noviembre de 2014 había declarado ante la Policía de Investigaciones (en adelante, PDI) en relación a las obras; si había dicho que a mediados de diciembre de 2012 se iniciaron; que por esas obras hubo un primer estado de pagos en enero de 2013, el que ascendió a más de \$100.000.000 millones, de los cuales no había recibido ningún dinero; si posteriormente le solicitó a Cristian Gutiérrez que diera cuenta de esos montos de

estados de pago, pero que no obtuvo respuesta y que se lo reiteró en varias oportunidades en el sentido que le mostrara una planificación de gastos en que se incluyeran los montos adeudados; reconoció que conocía con anterioridad a Bustos Morgado, pero que no había recurrido a él por cuanto no correspondía darle cuenta de problemas que le eran ajenos, en tanto que el hecho de haber sido vecino con Félix Flores fue una situación casual y no por razones comerciales, habiendo sido vecinos por más de 10 años.

Ratificó las afirmaciones de la defensa letrada en cuanto a que en el mes de octubre de 2014 declaró nuevamente ante la PDI, oportunidad en la que señaló que estaba en conocimiento de la existencia de un sumario en Carabineros, y que ahí había declaró, y que había dicho que existía una concomitancia entre Gutiérrez y el ITO Pizarro, que éstos se alojaban en el mismo hotel, Dreams, el cual pagaba la constructora CGM, y que jugaban juntos en el casino, haciendo presente en el sumario que el mencionado alojamiento en el hotel Dreams ocurrió en a lo menos 11 oportunidades, lo cual había verificado Carabineros mediante una visita que hizo a dicho lugar con motivo del sumario. Agregó que *Gutiérrez y el ITO salían juntos de excursiones por la región de Aysén, de cacería*. Señaló que en sumario, en la vista fiscal final, no se concluyó que Bustos le hubiera dado instrucciones de los montos de los estados de pago que debían efectuarse.

Confirmó también que el 4 de noviembre de 2015, en su declaración en fiscalía, dijo que Gutiérrez tuvo un cambio de vida cuando comenzó a trabajar en estos proyectos, por ejemplo, cambiándose de casa, comprándose un vehículo del año al contado y por la intención de compra de una casa por \$500.000.000 millones.

En cuanto a la empresa Grossman refirió que se presentaron a las tres licitaciones, pero que en la de Lago Cástor fueron rechazados.

Respecto de los itemizados de Coyhaique Alto e Isla Huar estos no se correspondían a la realidad, por ejemplo, *se informaba que había corregir las protecciones de las escaleras pero las protecciones no estaban, que había que corregir las bajadas de agua pero las bajadas de agua no estaban, tampoco las canaletas*. Consultado respecto a quién había hechos los itemmizados, respondió *“creo que el ITO Pizarro”*.

En cuanto a su relación con Christian Bustos Morgado, reconoció que coincidieron trabajando en el área de Logística, Bustos en ejecución y control y él en adquisiciones, añadiendo que Bustos era el jefe de esa sección, en tanto que, en su caso, su jefe era el Coronel Garrido, precisando que *ni siquiera trabajaron en el mismo piso, y menos en la misma oficina*. Refirió no conocer la casa de Bustos ni a su cónyuge, salvo cuando estuvo privado de libertad.

En cuanto a las órdenes verbales, respondió que firmó la constancia del retiro de la boleta de garantía, haciendo presente que la boleta de cumplimiento la había entregado un mes antes de la firma del contrato, por lo que la boleta de seriedad tenía que haber sido devuelta por Carabineros.

En cuanto a los atrasos de las obras por un tiempo aproximado a los 4 o 5 meses, dijo que el plazo de construcción se establecía en las bases administrativas y luego en las condiciones contractuales estipuladas, siendo los plazos de días corridos conforme a las bases, agregando que el plazo se cuenta desde la entrega del terreno, y que se puede aumentar en caso de trabajos adicionales, con lo cual el plazo original podía verse ser aumentado por el addendum, señalando que estos deben ser solicitados por el contratista acompañado de un informe técnico y contar con la aprobación del ITO. Así, en el caso de Coyhaique Alto, se **le exhibe prueba documental N° 118, prueba de la defensa**, al cual da lectura: *Resolución Exenta N° 1546, de 19 de diciembre de 2012, de la Subdirección General, Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que aprueba contrato de obra entre Fisco - Carabineros de Chile y Constructora CGM Ltda., proyecto Coyhaique Alto, contrato de 11 de diciembre de 2012, plazo de 220 días corridos para la ejecución de la obra, los estados de pago serán mensuales conforme al estado de avance que informara el ITO, si el constructor requiriere mayor plazo deberá proceder conforme al artículo 121 inciso tercero, del D.S. 293; multas para el caso de no entregar las obras dentro de plazo, 10 UTM por día, hasta los 10 primeros, y del día 11 en adelante, 15 UTM, sin perjuicio de causas de fuerza mayor comunicadas y aceptadas; recepción provisoria: 15 días antes el contratista deberá comunicar al mandante en la oficina de partes del Departamento de Cuarteles, el ITO deberá verificar y comunicar la conformidad del término, designándose una comisión para la recepción provisoria, la que deberá constituirse en no más de 35 días contados desde su designación, debiendo concurrir en ella el contratista o quien le represente; garantía de cumplimiento:*

deberá entregarse boleta bancaria a la vista por la cantidad de \$19.499.866, correspondiente al 5% del monto total de las obras, con vigencia hasta los 30 días siguientes de la recepción definitiva de las obras; firman Cristian Andrés Gutiérrez Martínez y Enrique Rojas Langer, Director Nacional de Logística.

Añadió a lo anterior que con cada firma de addendum puede adicionarse el plazo, el monto, la boleta de garantía, pudiendo en este último caso disponerse un cambio de la misma.

Se le exhiben los documentos N°131, 342, 343, 344, 348 de sus medios de prueba, los cuales reconoce el acusado señalando que corresponden a acta de entrega de terreno de fecha 13 de diciembre de 2012, firma Cristian Andrés Gutiérrez Martínez, representante legal de CGM, y Francisco Pizarro Dasso, Inspector Técnico de Obras. De su lectura constó: N° 343, *carta solicitud addendum, 12 de julio de 2013; Sr. Francisco Pizarro Dasso, reposición tenencia Coyhaique Alto; materia: solicitud aumento de obras por normalización de obras existentes; plazo solicitado, 72 días corridos; fecha de recepción 12 de junio de 2013; firma representante de empresa CGM; N° 344, informe técnico de evaluación de mejoras tenencia Coyhaique Alto, firma Francisco Pizarro Dasso, ingeniero inspección de obras; fecha, 17 de julio de 2013; antecedentes del proyecto, descripción: conexión de empalme de matriz de agua en destacamento y casa anexa; en visita a terreno efectuada para fiscalizar lo anterior y dar curso al estado de pago N° 3, se constató la inexistencia de conexión, haciéndose presente la dificultad de extracción del recurso hídrico, y la necesidad de disipadores de nieve, concluyendo que lo más acorde es considerar la construcción verificándose la imposibilidad de construcción de un pozos profundo y demás especificaciones de lo solicitado; conclusión: se solicita incrementar el monto mediante addendum por \$11.554.523, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 65 días corridos, firma Fco Pizarro; 342, Resolución: se autoriza el aumento de la obra, 492 de 19 de julio de 2013; “resuelvo: I) auméntese el contrato en \$11.554.523, y en 65 días corridos adicionales al plazo de ejecución asociado al contrato; II) se dispone la entrega de una boleta de garantía adicional equivalente al 5%, esto es, \$ 5.777.26, con una vigencia equivalente a lo acordado en el contrato principal, y hasta 30 días siguientes al vencimiento del plazo acordado; firma Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística; N°348, Resolución Exenta N° 728, Dirección Nacional de Logística, 13 de septiembre de 2013, que*

aumenta plazo sobre el proyecto Coyhaique Alto: considerando la solicitud del contratista y el informe técnico favorable del ITO, resuelvo: I) aumentar el plazo del contrato en 18 días corridos como plazo de ejecución; II) renovación de boleta de garantía por el 5% del monto total de las obras; firma, Jorge Enrique Rojas Langer, Director Nacional de Logística.

Confirmó lo afirmado por la defensa de los acusados Bustos: *los plazos suman 303 días, o sea, 10 meses y días, de manera que los 10 meses se cumplían el 13 de octubre, por lo que cuando se dice que el atraso era de 4 meses, ello no es correcto atendidos los aumentos en los addendum.* Consultado si el contratista podía seguir trabajando después de enviada la solicitud de recepción y hasta la llegada de la Comisión, respondió que no existía prohibición para no hacerlo.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro respecto de las 11 veces que se habría alojado en el Hotel Dreams, reconoció no haber visto los *voucher* ni acompañados a la investigación, aunque sí en el sumario, sin que él tampoco los haya visto. Consultado respecto de cuando conoció a Pizarro, refirió que sólo se enteró de su persona con motivo de las obras. Señaló que Pizarro *nunca me pidió ni yo le ofrecí dinero, nunca le compré un rifle de postones.* En cuanto a las reuniones, más bien un encuentro casual en el Mall Florida Center, coincidiendo allí con Bustos y Pizarro, siguiendo el primero hacia donde se dirigía, quedándose él conversando con el ITO. Dijo conocer de nombre a Ana Prats Osorio, a Miguel Gutiérrez Vásquez quien prestó servicios con el en su oficina y después en CGM, como administrativo y con contrato, no recordando quién lo firmó. **Se le exhibe documento y anexo contenido en el N°9, otros medios de prueba de la fiscalía** (contrato de trabajo y correo electrónico anexo (de Pedro Barra a Cristian Gutiérrez), de fecha 28 de enero de 2013), y consultado si los reconocía respondió que el correo no lo reconocía por no haber sido enviado por él y no corresponder a su casilla, pero que el documento anexo sí lo reconocía. Lectura de este último: *Constructora CGM Ltda; trabajador Miguel Ángel Gutiérrez Vásquez; 1° de enero de 2013, se celebra contrato de trabajo, sus funciones serán: 1) control de gestión y procesos del empleador; 2) servir el cargo en el domicilio señalado u otros que el empleador le indique; 3) sueldo \$860.000; se firma en dos (2) ejemplares, declarando el trabajador recibir uno de ellos, siendo ambos iguales; firma constructora CGM Ltda.* Consultado si reconocía la firma, respondió que sí. Negó que Vásquez hubiere sido carabinero

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respondió, primeramente, que el 5 de agosto de 2013 había formado una sociedad con su cónyuge, Purísima Toledo, pero que no recordaba a que se dedicaba esa empresa. Confirmó que el 4 de julio de 2013 se firmó contrato entre CGM y él para que le fuere transferida una retroexcavadora. Consultado si su colaboradora, Claudia Segura, había trabajado anteriormente en Carabineros, respondió que eso era efectivo. Consultado por el nombre de Ana Castro Osorio, respondió que correspondía a la madre de Carlos Bustos Prats, negando haber formado parte de la sociedad Cencapel S.A. Consultado si en el año 2011 había sabido que Carlos Bustos había tenido problemas con la justicia, respondió que no lo supo y que a esa fecha no tenía contacto con él, precisando que había tomado contacto con él en la reunión del Tavelli, en la cual también estuvo Renato Méndez, Fernando Delgado, Carlos Bustos y él. En la segunda reunión, en la oficina de Fernando Delgado, estuvo Carlos Bustos, Renato Méndez, Rodrigo Carrasco, Cristian Gutiérrez y él. Respondió que no recordaba haber contratado al abogado Rodrigo Morales, pero sí habérselo recomendado a Cristian Gutiérrez porque éste le pidió que le recomendara algún abogado para un asunto personal. Refirió desconocer el hecho que Rodrigo Morales hubiere sido abogado de Carlos Bustos Prat. **Se le exhibió un documento contenido en el N°9, otros medios de prueba de la fiscalía** (correo electrónico de fecha 11 de junio de 2013), señalando a su respecto que no lo reconocía por no ser su correo. En cuanto al mandato tantas veces mencionado negó haberlo utilizado, pero de haber sido así habría tenido que ser para cosas de Constructora CGM, pero nada relacionado con Carabineros, bancos o factoring. Reconoció haber ayudado en la compra de la retroexcavadora. Consultado por su casilla de correo indicó que era CesarRojas@vtr.net.

En cuanto a los dos cheques mencionados anteriormente, los que fueron retirados por Claudia Segura y Ximena de Valdés, **se le exhiben**, dijo que los reconocía pero negó que hubieren sido cobrados por instrucciones suyas. Ambas personas trabajaban para él en su empresa FRABACAR, al igual que Miguel Gutiérrez. Con el dinero del primer cheque se tomó de inmediato la boleta de garantía de fiel cumplimiento relacionada con una obra cuyo nombre no recordó, pudiendo haber sido Isla Huar, por la cual se firmó contrato el 4 de enero de 2013. **Se le exhibe el documento N° 30, de sus medios de prueba**, correo *ficha procesos*, el cual dijo **no reconocer**. Acto seguido **se le exhibe el documento N° 65**, de sus medios de prueba (anteriormente incorporado), acerca del cual

responde que lo reconoce al igual que la firma que en ella aparece. Confirmó que se trataba de un contrato de obra civil menor. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibe su declaración de fecha 4 de noviembre de 2015: *a la pregunta cobró usted alguna factura mencionada en los estados de pago, responde no, aun teniendo un mandato, y tampoco me encargué de operaciones de factoring*. En cuanto al contrato celebrado entre CGM e Inter Factor, negó haber recibido correspondencia de ésta última. Consultado acerca de si él aparecía en el organigrama en calidad de gerente General y también como gerente comercial, respondió *parece que sí*, precisando que *en todo caso el organigrama nunca se aplicó*. Consultado respecto de Carlos Bustos, señaló que había sido Gutiérrez quien lo llevó a CGM, y que él no lo había contratado. Conforme al organigrama, Miguel Gutiérrez Vargas, por instrucciones de Cristian Gutiérrez, fue contratado por CGM y *“yo” firmé el contrato*. Consultado por el nombre de Mirta Pizarro dijo no conocerla. Consultado respecto de Ignacio Labra refirió que había sido contratado por Grossman, precisando que ello ocurrió después de 4 meses después de haber renunciado a CGM. Se solicitó, y el tribunal autorizó, que se **le exhibiera al acusado, como prueba nueva, un documento** (individualizado como *prenda sin desplazamiento entre CGM y la Sociedad Salinas y Fabres*), el cual, después de examinarlo, respondió que **no** lo reconocía ni tampoco su firma, esto último *por estar contenida en el documento que dijo no reconocer*.

Consultado por los giros que efectuó por un total de \$60.000.000, reconoció que los depositó en su cuenta, precisando que ese dinero *lo había retirado con la cooperación de Cristian Gutiérrez*. Se **le exhibió un documento** (correo electrónico de 23 de diciembre de 2012) **contenido en el N°9, del acápite otros medios de prueba de la fiscalía**, respondiendo que no lo reconocía *“por el formato” y porque dice Constructora CGM*.

Consultado por el destino que tuvieron los cheques que cobraron las colaboradoras, respondió que uno de ellos se destinó *a tomar una boleta de garantía, otro, el de \$3.200.000, a laboratorio, pasajes y otros gastos operacionales de CGM*, y el de \$6.000.000 fue destinado al *pago de deudas de CGM con distintos arrendadores del predio de Lampa* (por ejemplo, arriendo de contenedores). Respondió que el cheque de \$19.000.000 fue girado el 3 de enero y el de \$6.000.000 el 4 de enero, ambos en favor de Claudia Segura, y el de \$3.000.000, girado el día 8 de enero en favor de Ximena Valdés. Se **le exhibe la**

cartola de su cuenta corriente, documento N° 93, prueba documental del ministerio público, anteriormente exhibida, y se le solicita leer en voz alta los movimientos de los días 4 y 8 de enero de 2013: *depósitos en efectivo por \$6.000.000 y \$2.506.000*, respectivamente. **Se le exhibe nuevamente la mencionada cartola**, y se le solicita hacer lectura de diversos movimientos.

El 24 de octubre recibió un depósito por \$12.000.000, de Gustavo Galleguillos Alvarado por la venta de la retroexcavadora.

Se le exhibieron los documentos signados en el N° 622, prueba del ministerio público (cartolas cuenta corriente acusado Rojas). Consultado porque en la cartola aparecían transferencias a Bustos Prats en el año 2012, si antes había dicho no haberlo visto en la reunión en la oficina de Méndez, después de años, respondió que ello se debía a que Bustos Prats le prestaba asesoría para una escuela de conductores que pensaba instalar, lo cual ocurrió en el segundo semestre del año 2012, antes de la reunión en la oficina de Méndez.

Consultado respecto de cuánto tiempo faltaba, al mes de diciembre 2013, para el término de las obras de Coyhaique Alto e Isla Huar, respondió un mes y dos meses, respectivamente.

Consultado por Miguel Gutiérrez respondió que lo conocía y que sí le había realizado transferencias de dinero.

Se le exhiben los documentos referidos en el N° 77, prueba del ministerio público, anteriormente incorporados por la fiscalía con el N° 104, de su prueba documental, y una vez examinados responde que el documento dice relación con una propaganda, de 15 de abril de 2013, en la que aparecen clínicas de ortodoncia, servicios profesionales y una oferta comercial de una grúa horquilla de 7 toneladas, la cual se le vendió a una empresa de nombre Fortaleza, del rubro de la minería.

Consultado acerca de la escuela de conductores respondió que no había prosperado, se cerró y se le hizo término de giro en el año 2013.

Interrogado por el tribunal a fin de que aclarara cuál había sido el destino de los dineros que obtuvo para el financiamiento, respondió que este iba desde la toma de boletas de garantía de seriedad y de garantía de cumplimiento, financiar viajes previos a la zona, gastos asociados de cualquier cosa que llevara a la operatividad, pago de deudas, dineros que Gutiérrez le devolvería junto con la rentabilidad pactada, los cuales eran depositados en su cuenta bipersonal pero posteriormente salían de la cuenta para seguir financiando otras cosas, todo esto a la espera de que Gutiérrez aportara lo que le correspondía, ya que no es posible hacer funcionar una empresa en base sólo a deudas, o “apalancamiento”.

NOVENO: Pruebas. Ministerio Público. Que, concluidas las declaraciones de los acusados se dio paso a la recepción de la prueba, comenzando primero con la de cargo y dentro de esta primeramente con la prueba de la fiscalía.

Las pruebas que rindió el ministerio público consistieron en declaraciones de testigos y peritos, documentos y fotografías. Siguiendo el mismo orden en el que se aportaron los medios de prueba, el tenor y contenido de estas fue el siguiente:

Prueba documental:

1) N° 1.075 (lectura íntegra): Informe contratos adjudicados en 2013 empresa CGM; 29 de enero de 2014; De Hugo Araneda; Dirección Nacional de Logística; 1) Informe cursos de acción; Antecedentes: Departamento de Cuarteles, informe: Francisco Pizarro Dasso se refirió en los proyectos en que se desempeñó como ITO en las 4 obras de CGM: a) Villa Ortega, 100% terminado, y entregado para funcionamiento; b) Isla Huar, trato directo, noviembre de 2013, por \$19 millones de pesos y fracción, 50 días para su ejecución, con acta de entrega de terreno; anteriormente se rechazó la entrega de la obra y se dispuso el término anticipado del contrato con la empresa CGM, manteniéndose la retención por ese mismo monto , ejecutándose la boleta de garantía por 18 millones y fracción; c) Coyhaique Alto, trato directo a Grossman, 15 de noviembre de 2013, plazo de ejecución 70 días, acta entrega de terreno efectuada el 12 de diciembre 2013, a causa del abandono de la empresa, no siendo posible comunicarse con Constructora CGM, poniéndole término al contrato con fecha 30 de octubre de 2013, manteniéndose la retención de 19 millones de pesos y fracción, más 62 millones de pesos y fracción correspondiente al último estado de pago por 11

millones y fracción, más el addendum, equivalente todo al 23% de la obra no ejecutada; d) Lago Cástor, abandonado, en custodia retenciones de \$19 millones y fracción, 5% de la obra, y el último estado de pago, 47 millones, más addendum de mejoramiento por 5 millones y fracción, ejecutándose la boleta de fiel cumplimiento de ambas obras. Pizarro señaló diversas reuniones con Rojas y Gutiérrez, y en todas participó Bustos Morgado y/o Luis Parra, y otros funcionarios de L1. Agregó Pizarro que la boleta fue retirada, Isla Huar, sin cumplir requisitos de L1 y sin poder o mandato del dueño de la empresa u otra persona autorizada, siendo retirada con el solo RUT de César Rojas. Hizo presente verbalmente que fue Rojas quien firmó los retiros por haberlo visto personalmente hacerlo. Señaló además que Rojas era director en la empresa Grossman. El 7 de Junio 2013 se hizo la recepción; acta N° 46 de Villa Ortega con observaciones, dándoles 10 días para corregirlas, informando que el 19 de junio fueron subsanadas, o sea, un atraso de 12 días, por lo que se le cobraron multas; posteriormente, en acta de 24 de junio de 2013, se hizo la recepción sin observaciones. El 30 de octubre de 2013 se puso término anticipado al contrato por incumplimiento. La funcionaria Claudia Zenteno, revisando las carpetas de las obras encontró las siguientes irregularidades: certificado de capital no indica nombre del empleado bancario que lo suscribe, escritura no tiene vigencia, inscripción de la empresa Grossman es de 28 de oct 2013, el arquitecto residente Ignacio Labra está registrado como director tanto en CGM como en Grossman, el 18 de noviembre de 2013 se envió el certificado de capital comprobado, el 14 envió de copia legalizada de la empresa Grossman, ilegible; informe del asesor de riesgo es de fecha 3 de noviembre, posterior a la inscripción; Christian Bustos Morgado instruyó que le dieran facilidades a CGM para la toma de la nueva boleta de garantía ya que había pedido que se la devolvieran sin entregar la de reemplazo correspondiente, "LO QUE NUNCA SE HIZO". L1 emitió el 8 de enero de 2014 informe técnico con observaciones, siendo efectivo los cuestionamientos, ejemplo mobiliario sala de cuarteles fue instalado con personal propio, roperillos instalados fueron 17 y no 33 como decía el contrato, etc. Concordante con lo anterior se dijo que Alfredo Lagos Gana, informó que visitó las obras. Al 12 de diciembre de 2013 subsistían las anomalías, que debían haber sido subsanadas antes de la recepción que ya había sido efectuada. Cursos de acción: ordenar instrucción de sumario administrativo, sin perjuicio de denunciar los hechos que revistan caracteres de delito y lo propio con el Consejo de Defensa del Estado en el caso Coyhaique Alto. L1 controles de rigor sugiriendo la intervención del área de gestión y control del proyecto.

2) N° 1.157 (lectura íntegra). Revisión de antecedentes que sustentaron la comisión de recepción de la obra de Villa Ortega, Andrea Campusano entrega archivador con antecedentes de respaldo: 23 de abril de 2013, carta CGM solicitando Comisión para recepción de la obra; 23 de mayo se nombra la comisión de recepción provisoria, a cargo de Christian Bustos Morgado, además de varios CPR, quienes el 7 de junio de 2013 recepcionaron la obra con las siguientes observaciones: limpieza guardapolvos, mejorar marcos de ventanas, mano extra de pintura, topes de goma en celdas, mejorar terminaciones de celdas, percha dañada en baño, reemplazar sifón lavadero. Observaciones fueron refrendadas por los miembros de la comisión mediante firma del acta. Se dieron 10 días para subsanarlas. 19 de junio carta solicitud de CGM, misma fecha de ingreso, para nueva recepción, se solicitó Comisión, concurre sólo Guillermo Nadal, quien informa que observaciones continúan pendientes. Acta de 24 de junio de 2013 consta recepción sin observaciones, efectuada sin Comisión ni verificación de la subsanación. Andrea Campusano refiere que Bustos Morgado dispuso que fuera firmada por toda la Comisión. Posteriormente, el 9 de noviembre se envió una Comisión a cargo de Pizarro para reparar lo que faltaba; en diciembre se recibe y se da cuenta de los problemas que presentaba la obra; 14 de enero 2014, se desligó al ITO Pizarro de las obras de CGM.

3) N° 765 (correo electrónico de fecha 24 de julio 2012, a las 11,12 horas, de CesarRojas@vtr.net a cgtuierrez@constructoracgm.cl; asunto: cuarteles)

4) N°1, N° 6 y N° 12 (informes técnicos 125, 126 y 127):

N° 1: Lago Castor, 17 de febrero 2014; objetivo informar estado de la obra, verificar estado actual; visita lunes 10 de febrero, desde las 15,30 a las 21,40, horas; inicio obra 13 de diciembre 2012); análisis técnico: a) retén: radie mal estado y ejecutado; estructura segundo piso, loza; estructura techumbre, serchas muy distanciadas entre sí, sobrepuestas en muros divisorios, tirantes colapsados, haz de luces al interior lo que llevará filtración de agua y humedad; cubiertas. Conclusiones: desarme total panel y muros soportantes y entepisos, retiro radier existente y construcción de otro conforme a reglas técnicas; b) casa anexa: radier, techumbre desprendida por los vientos que arrancaron las fijaciones dejando las placas expuestas. Conclusión, se puede continuar en la medida que se repare lo observado; c) caballadas: cimient y radier mal ejecutados. Conclusión: Escaso

avance de la obra y lo que existe no es recuperable. Obras complementarias: debe considerarse la construcción de un pozo profundo y clausurar las fosas sépticas por estar saturadas y construir al menos una. Análisis financiero del proyecto original: existen diferencias entre lo pagado y lo que se debía pagar, y la valorización de lo que se encuentra pendiente. Tabla. Estados de Pago, diferencia ITO y Comisión del mes de febrero de 2014: N°1: \$779.361; N° 2: -\$3.192.053; N° 3 -\$9.923.486; N° 4: \$ \$27.103.969; N° 5: -\$50.854.314; N° 6: -\$35.702.385; N° 7: -\$34.563.644. Subtotal aprobado por el ITO \$320.814.560 millones, Comisión \$166.605.221. Total pagado \$320.814.560. Conclusión: se pagaron \$166.605.221 demás en relación al estado construcción pendiente. Inventario de materiales acopiados en la obra adquiridos por CGM: eran retirados por terceros para otras obras de la empresa Grossman.

N° 6: Informe técnico N° 926, febrero 2014, visita 9 de febrero 2014, reposición retén Coyhaique Alto, 387 millones y fracción, terminación por empresa Grossman, inicio obra 13 de diciembre de 2013. Cuartel: Marcada diferencia entre itemizado verificado de manera directa y los estados de avances informados por el ITO, por ejemplo, reparación espejos en circunstancias que no existen. Inventario de materiales puede suceder que una vez valorizado sea poco atractivo por lo que se sugiere redestinación dentro de la misma zona. Casa anexa: Trato directo no consideró el estado en que fue encontrada la casa anexa, sin perjuicio de lo cual la empresa asignada por trato directo estaba avocada a ellos. Caballadas: modificada en nuevo y mejor lugar (olores aduana) y redestinar lo construido, por ejemplo, como leñera. Obras complementarias: se sugiere captación de agua por pozo, y por tanto perforación de al menos un pozo, clausura fosas sépticas y construir otra.

5) Documento 1.243 (NCU 19123658, de Claudia Zenteno Quiroz, de 16 de enero de 2014).

Revisadas carpetas de proyectos y otras, se informa: archivo actas de entrega se encontró N° 69, de fecha 9 de enero de 2013, boleta de garantía de seriedad de la oferta Isla Huar, recibida por Rojas Gaete, sin que aparezca registrado su RUT ni poder para retirarla; figura como socio directo de Grossman SA; los antecedentes presentados para inscripción en el Registro de Carabineros se encontraron las siguientes: certificado antecedentes laborales con vigencia hasta septiembre de

2013, resolución de inscripción es de 28 de octubre de 2013, pero el abogado Nicolás López revisó carpeta y emitió oficio en que informa la solicitud de antecedentes faltantes a la empresa mediante correos electrónicos; Ignacio Labra figura como arquitecto en la empresa CGM Ltda. y también en la empresa Grossman; 15 de nov 2013 acompaña certificado de capital aprobado con timbre y firma del banco, carta de 13 de noviembre empresa presentó copia legalizada de fotocopia ilegible de la constitución de la empresa; 8 de nov de 2013 se emitió informe de evaluación de riesgos, habiendo sido la inscripción fue en octubre de 2013.

6) Documento N° 117:

Félix Flores, felo2465@gcorreo.com; asunto análisis registro contratistas-Grossman S.A (explicado); correo de 23 de octubre de 2013, 10,54 horas; de López Reyes Nicolás Israel, nicolas.lopezr@carabineros.cl, para felo2465@gcorreo.com: según lo solicitado le señalo que los documentos que debe acompañar la empresa Grossman son los siguientes: 1) copia inscripción de constitución de la sociedad con notas al margen, emitido por el Registro de Comercio de Viña del Mar; 2) certificado de poderes vigente de la sociedad extendido con certificado del registro de comercio en que aparezca quiénes componen el directorio, 3) cédulas identidad de todos los directores; 4) certificados de antecedentes de todos los directores; 5) certificado de capital comprobado firmado por el jefe de sucursal o agente de la sucursal, pero en el documento sólo aparece p. Banco de Chile, sin timbre ni firma;

7) Documento N° 1.052

Documento electrónico NCU 16371124, de Dpto. Cuarteles L1, para Dpto. Gestión administrativa; Informativo Gestión Financiera. Teniente coronel Christian Bustos Morgado, Andrea Campusano arquitecto, Parraguez, Francisco Pizarro, Juana Campos, Karen Bascuñán. Asunto: comisión de servicio. 9 de octubre de 2013: Se solicita autorizar pasajes aéreos para realizar comisión de servicio al Teniente coronel Christian Bustos Morgado, CPR Romina Parraguez Robles, CPR ingeniero eléctrico Héctor Salamanca Riquelme, CPR arquitecto Andrea Campusano Muñoz y CPR ingeniero en construcción Francisco Pizarro Dasso; Motivo: con el objeto de verificar la finalización de las obras de construcción del proyecto Isla Huar

8) Documento N° 1.053

Acta de recepción provisoria. N° 64, en Calbuco a 10 de noviembre de 2013 CGM hace entrega de los trabajos de Isla Huar al Teniente coronel Christian Bustos Morgado. Antecedente: resolución Exenta que autoriza la licitación, contrato de obra entre Carabineros y CGM, resolución que autoriza obra anexa, Res Exenta de 8 de octubre 2013 que nombra comisión provisoria para recepción obras CGM en Isla Huar. Monto, plazo, addendum monto y nuevo plazo. Observaciones: sanitarios desinstalados, cierre perimetral no ejecutado, desniveles de terreno, polines acopiados, artefactos de cocina no instalados, reemplazo de tablero eléctrico, entre otras. Conclusiones: La Comisión receptora se limita a revisar las terminaciones y lo que visualmente se aprecia de la obra; resultado “rechazada”, firman, miembros de la Comisión.

9) Documento N° 1.160.

Resumen ejecutivo, año 2012, elaborado por el área de gestión y controles Proyectos de Dirección Nacional

10) Documento N° 66 (NCU de 27 de enero de 2014, parte del sumario administrativo, foja 1.395): Para Jorge Muñoz, informativo Luis Parra, informa Comisión de servicio, lunes 27 de enero 2014; Ref: NCU 19387405 del 27 de enero de 2014, de CPR Romina Parraguez Robles; 21, 22 y 23 de enero visita Coyhaique, se adjunta informe técnico N° 46, de la suscrita, en que hace presente el estado actual de Villa Ortega y Lago Castor, existiendo en el primero observaciones pendientes y en el segundo se dispuso el término del contrato de obras. Anexo (documento N° 1.073): informe técnico N° 46, de 24 de enero de 2014; de Romina Parraguez Robles a Departamento L1 de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, retenes Villa Ortega y Lago Cástor.

TESTIGOS:

1°.- Jorge Joaquín Muñoz Soto (49, c, Coronel , director del Hospital de Carabineros)(informe 125)

A las preguntas del ministerio público respondió: que concurría a declarar porque formó parte de una Comisión de servicio en Coyhaique, para determinar las diferencias o discrepancias que había entre obras de cuarteles versus lo pagado; le correspondió comandarla junto con tres (3) expertos del área, constructor, ingeniero constructor y un arquitecto; recién llegado al Departamento de Cuarteles, al área de desarrollo y ejecución de proyectos; antes estuvo en ese cargo el Coronel Bustos Morgado, pero no tuvo la transmisión del mando porque este último ya no estaba; no recibió acta formal sólo oficina y archivadores; cuando concurrió a la Comisión llevaba 15 días al mando; el Jefe del Departamento era Galdámez; el origen se debió a que el General Osses tenía informes de ciertas irregularidades; tales informes habían sido emitidos, uno, por Romina Parraguez y Héctor Saldaña, siendo este informe el más decidor, y el otro de era un informe de gestión y control de DILOCAR; Parraguez y Saldaña habían ido a Villa Ortega y Lago Cástor; en sus conclusiones daban cuenta de *diferencias notables* entre lo construido y lo pagado; los otros miembros fueron Francisco Socías, arquitecto (planimetría e ítemizados), Jorge Santis ingeniero en construcción (Obras civiles ejecutadas), y Marco Pomar, ingeniero civil constructor (daban cuenta de los cálculos ejecutados); *la metodología* consistió en contrastar lo verificado en terreno con lo informado en los avances para estados de pago; se constató que entre los tres cuarteles, Lago Castor, Coyhaique Alto e Isla Huar, *existía una diferencia que bordeaba los \$500.000.000*; las dificultades estuvieron dadas por la pérdida de confianza en el ITO, quien era el indicado para explicar *in situ* y técnicamente las obras; el primer cuartel que visitaron fue Lago Cástor, ocurrió la primera quincena de febrero de 2014; concurrieron todos los miembros de la Comisión; panorama era desolador, no había movimiento en las obras, estaba en total estado de abandono; había materiales eSPArcidos en el terreno lo que impresionaba que era difícil de retomar la construcción, estaban a la intemperie y por tanto con deterioro; los Carabineros del lugar manifestaron malestar porque a ellos se les exigía explicaciones por la comunidad ante el abandono de la construcción; en cuanto al estado de las obras resaltaba la situación de las caballadas, fue lo que impactó ya que estaba cursado el 100% del pago versus una enfierradura para los cimientos; el retén estaba muy deteriorado, el hormigón en bruto; la casa anexa era lo que estaba más avanzado, eso debido a que ahí se cobijaban los trabajadores, según informó el jefe del cuartel; había bastante material, paneles, baldosas, todo eSPArcido por el recinto, sin protección, y algo de materiales en un *container marítimo*; algunos materiales estaban tapados con nylon y algunas tapas que había colocado por el personal de

carabineros del cuartel; se trató de retomar los trabajos con un proyecto de normalización pero hasta la fecha ello no ha ocurrido; conversó con el jefe de retén y algunos funcionarios que estaban allí destinados; estaban en condiciones precarias, las construcciones databan de largo tiempo; señaló que el jefe del retén le preguntaba al ITO de la obra por qué estaban sacando materiales y llevándoselos a otra construcción, en parte a Villa Ortega y en parte a Isla Huar; el jefe del retén le señaló que había dejado registro y constancia en el libro de cuartel; le preguntaba al ITO por el retiro de materiales y le dijo que estaba todo normal; se **le exhibe el documento N° 1, prueba del ministerio público**, informe N° 125, el cual reconoce su firma y los anexos de registros fotográficos de la visita a Lago Cástor, del levantamiento de materiales que encontró la Comisión, el registro del retiro de materiales, estado de pago N° 1 “que cursa el ITO de obras”; Se **le exhibe del N° 1, de otros medios de prueba, set de 29 fotografías, proyecto Lago Cástor**, contenido en informe técnico N° 125, de 17 de febrero de 2014; la imagen muestra un cuartel en construcción, con nylon en los muros a modo de protección, el segundo piso con paneles exterior y techumbre. Señaló el testigo que se comprometió con los funcionarios de Carabineros del lugar la compra de materiales para mejoramiento de lo que existía a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, lo que en definitiva se concretó.

Al día siguiente se dirigieron a Coyhaique Alto, les llamó la atención que habían personas trabajando, no estaba el jefe de la obra, las condiciones en que estaban los carabineros eran muy precarias ya que el proyecto consideraba echar abajo lo existente por lo que estaban concentrados en la casa anexa; eran trabajadores de la empresa Grossman, recordando que al parecer el contrato de obra estaba vigente; no estaba el libro de obras, se tomó entonces la decisión junto con el Jefe del Departamento de Cuarteles y con asesoría jurídica, que los trabajadores abandonaran el lugar ya que se le pondría término al contrato; el cuartel y la casa anexa estaban bastante avanzados, las caballadas estaban atrasadas pero presentaba más avance que en Lago Castor; tenía *panelería*, cimientos; la Comisión descubrió que los estados de pago estaban por sobre lo que se había construido, discrepancia que se incorporó en el informe; se **le exhibe el documento N° 1, prueba del ministerio público**, informe N° 126, el cual reconoce, al igual que su firma, anexo fotográfico de las obras, anexo relacionado con los materiales que se encontraban en el lugar: a) anexo con imágenes: se observan edificaciones avanzadas del cuartel y casa anexa, y detrás de ellas la casa en que estaban viviendo carabineros con sus familias, materiales a la

intemperie y bodega; caballada situada en la parte alta del terreno (radier y paneles, sin techumbre ni cerchas); la decisión de término de contrato por las discrepancias con los estados de pago, la ausencia del libro de obras y del jefe de obras en terreno, antecedentes que al ser puestos en conocimiento de la superioridad se tomó la decisión, además de que el plazo de vigencia del contrato había expirado; se tomaron medidas paliativas, fue un compromiso que se tomó con el capitán Caballero, pero sólo en cuanto a la compra de materiales y trabajo de terminación con mano de obra propia;

Hicieron abandono de la región de Coyhaique y se dirigieron a Puerto Montt, y al día siguiente dirigirse al retén de Isla Huar; tenía bastante avance, faltaban partidas en la casa anexa cuartel y el cuartel, y las caballadas era lo más avanzado; las diferencias que encontraron fueron mayoritariamente en la casa anexa y cuartel; habían trabajadores de la empresa Grossman, no estaba la persona encargada, le dijeron que había viajado, tampoco estaba el libro de obras; se tomó la misma decisión que en Lago Cástor; el plazo del contrato había expirado; se conversó con los funcionarios del lugar, el jefe de retén lo llevó a la iglesia para mostrarle las condiciones que estaban viviendo y trabajando en parte de la parroquia; este retén por su grado de avance se pudo llamar a licitación para la regularización de la obra, se la adjudicó una empresa de Temuco, se logró recuperar por Carabineros, se inauguró la obra en el año 2016, aproximadamente; no se hizo trato directo porque estaba muy cuestionada esa forma de contratación, optándose por un proceso tranSPArente como es la licitación pública. **Se le exhibe documento N° 127, prueba documental de ministerio público**, informe técnico 127, lo reconoce, señala que están su firma y la de los miembros de la Comisión, existe anexo fotos, itemizado

El Teniente Luis Parra era su segundo de a bordo y también lo había sido de Bustos, quien, en gran parte, lo habría formado. Consultado por la estructura del Departamento de Cuartes dijo que cuando llegó a trabajar a ese lugar le llamó la atención la directiva, Jefe de Departamento y a continuación la sección cuarteles, no había más orgánica; era un esquema que había creado Bustos; señaló que el área de ejecución estaba a bajo su supervisión, y también lo estuvo de Bustos; en el área de ejecución estaba la fiscalización y los ITO; cuando asumió funciones se cambió la modalidad constructiva por lo que el ITO perdió la relevancia que tenía hasta ese momento; como jefe le correspondía autorizar visitas a la obra; él

tramitaba la comisión de servicio con el Jefe del Departamento de Cuarteles; cuando regresaba le mostraba el expediente; en cuanto a los estados de pago que se hacían a la constructora dijo que él no los firmaba directamente pero sí que los tramitaba vía electrónica, y que el ITO y el jefe de la sección finanzas sí que lo firmaban; si detectaba irregularidades en el trabajo del ITO se le pedía informe escrito, y en su caso poner los antecedentes en el jefe de sección para que se diera inicio a un acto administrativo; podía remover al ITO de una obra; formaba parte de sus funciones visitar y fiscalizar las obras adjudicadas; luego que se detectaron las irregularidades se percataron que al parecer los ITO no estaban en condiciones de realizar la función de fiscalización y evaluación de las obras, apreciación en la que coincidió el Jefe de Departamento, quien, como él, acababa de llegar en calidad de jefe; se decidió trasladar los proyectos a la dirección de arquitectura del MOP; conocía a Bustos desde el año 2007, estuvo un año, y luego llegó Bustos como superior y jefe suyo; también compartía con nosotros el mayor César Rojas, trabajaba en la subdirección de adquisiciones, éste realizaba los actos preparatorios de las licitaciones hasta la adjudicación de las obras; tenían comunicación entre ambas áreas; Rojas era cercano con Bustos, compartían con motivo del trabajo, se adoptaban decisiones en conjunto, se conversaba, almorzaban.

El Consejo de Defensa del Estado no interrogó al testigo.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos señaló el testigo haber sido el sucesor inmediato de Bustos, este había sido destinado a la Escuela de Formación, en Cerrillos; respondió afirmativamente a la pregunta si las funciones eran gestión, coordinación y ejecución; gestión significa que los proyectos se materialicen; los diseños de comisarías se empezó recién a trabajar con el MOP; los proyectos debían pasar por distintas etapas, entre ellas **evaluar la rentabilidad social** por el Ministerio de Bienes Nacionales; el jefe de área sólo daba el visto bueno de que se había constituido la Comisión; la apertura de sobres se lleva a cabo en el Departamento L1, en una sala de reuniones, allí concurren las empresas postulantes; no recordó si la apertura se hacía a puerta abierta; una vez adjudicada la obra el responsable es la empresa constructora, bajo la supervisión del ITO asignado el proyecto; el ITO era casi un ministro de fe, sin perjuicio que él, como jefe de servicio podía y debía, según su experiencia en una obra anterior, realizar funciones de control y fiscalización, y en ese sentido

constituirse en la obra respectiva, como también enviar a verificar el trabajo del ITO para el caso que le hubiere surgido alguna duda; precisó que el ITO *no se mandaba sólo*, y para eso estaba él como jefe de sección ya que de lo contrario no se justificaría su existencia; el año 2007 la Subdirección de Gestión y Control de adquisiciones funcionaba en Quilín; cuando llegó Bustos asumió este la jefatura, pasando él a ser el segundo en la jerarquía; posteriormente se trasladaron al edificio de calle Bustamante; Christian Bustos y César Rojas tenían cada uno su oficina; en cuanto a la Comisión Revisora del año 2014 refirió que concurrió como jefe en su calidad de Jefe de la Sección, no por su conocimiento en la materia, la cual dispuso el mando de Carabineros, no por instrucciones ni con una metodología de parte de la fiscalía; declaró que el 23 de octubre de 2018 prestó declaración en la fiscalía y que no había declarado en la Policía de Investigaciones (PDI); refirió que no conoce el detalle de cómo se analizaron los *itemizados* y los estados de pago conforme a los cuales se estableció la diferencia entre los avances y los pagos; se le exhibe el informe técnico 126 y anexos: anexo 3 “listado de pago Isla Huar”, “terminación de Coyhaique Alto”, anexo 4 estado de pago 1, reevaluación tenencia Coyhaique Alto; señaló que no sabe si ese estado de pago corresponde a CGM o Grossman;

Dijo no recordar haberse entrevistado con el ITO Pizarro ni haberle impedido el ingreso, pero en todo caso no corresponde que un ITO ingrese fuera del horario de trabajo; tampoco haberlo amenazado ni impedido digitalizar documentación;

Para la evaluación de la corrección de los informes del ITO se apoyaba en su segundo de a bordo, Teniente Luis Parra, quien le daba cierta tranquilidad en lo que se estaba haciendo antes de enviar los antecedentes a la superioridad para la tramitación de los estados de pago.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, respondió que la confección de los informes tomó alrededor de una semana, lo que duró la visita de la Comisión; el constructor civil se ocupó de la revisión de la parte eléctrica; dijo no recordar la fecha exacta en que se construyeron las partidas como tampoco si correspondían a la constructora CGM o a la empresa Grossman; cuando llegó a trabajar al Departamento de Cuarteles la carga de trabajo de los ITO era baja; los ITO se designaban de acuerdo con la disponibilidad que tenían, ello a partir de un pool de inspectores técnicos de obras; recordó que cuando llegó al Departamento

de Cuarteles participó en un asado de un cordero, en el cual estuvo Bustos y otras personas que no recordó, en específico Pizarro y Flores.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, respondió que concurría a declarar con motivo de la Comisión a que hizo referencia en su declaración;

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, señaló que existían deferencias hacia funcionarios en retiro, más aun si se les ha conocido durante la carrera profesional, sin perjuicio que este tratamiento deferente se encuentra establecido en el manual de ética de Carabineros de Chile y en circulares. Indicó que algunas deferencias pueden consistir en ayudarlo, por ejemplo, en la obtención de horas médicas en el hospital institucional o en una atención de urgencia. En lo concerniente a los hechos de la acusación refirió que desde que firmaba un informe de estado de pago él se hacía responsable, sin perjuicio que para ello contaba con asesores. Agregó que la responsabilidad en cuestión le quedó clara con motivo del sumario interno relacionado con los hechos de esta causa, en el cual existía un párrafo relacionado con la responsabilidad jerárquica del mando, esto a propósito de la actuación de Christian Bustos y Félix Flores en los proyectos de reparación y reposición de los cuarteles y retenes Villa Ortega, Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Cástor. **Se le exhibió el documento N° 5, de su prueba documental** (correspondiente al **N° 134 de la prueba documental de la fiscalía**), intitulado “gestión y desarrollo de licitaciones Departamento de cuarteles L1, página 1 a 72”. A su exhibición dice reconocerlo, haciendo a continuación lectura parcial a petición del abogado de la defensa del acusado Rojas.

PRUEBA DOCUMENTAL:

11) N° 66, Oficio N°4, de 24 de diciembre de 2014, vista fiscal ordena abrir sumario por las irregularidades en las obras de proyectos Villa Ortega, Isla Huar, Coyhaique Alto y Lago Cástor. Se hizo lectura de las siguientes piezas: Fs 2.949: perito verifica inconsistencia entre los estados de pago y lo informado por el ITO respecto de los estados de avances de las obras, basado en los antecedentes entregados por los distintos organismo involucrados; F 2960: funcionario de apellido Pomar manifestó que el ITO de las obras fue Francisco Pizarro, y que él no tuvo participación en dicha función sino hasta que fue designado en reemplazo de Pizarro; señaló que Romina Parraguez fue designada ITO de Coyhaique Alto;

que del 10 al 14 de febrero de 2014 concurrió junto con otros profesionales, como por ejemplo, el funcionario Socías y el dibujante técnico Vargas Rebolledo. Funcionario Nadal, declaró que el ITO responsable de los 4 proyectos había sido Francisco Pizarro, y que él no tuvo ninguna participación directa en ellos salvo Villa Ortega, en tanto cuanto concurrió como miembro de la Comisión a la recepción provisoria de dicha obra, en la cual Bustos Morgado les dijo que la obra se tenía que *receptionar* con observaciones y otorgarle plazo para corregirlas, no obstante saber que la obra no estaba terminada y que habían ítem sin ejecutar; señaló además que la decisión de firmar el acta se debió a que Bustos Morgado los convenció de que la empresa corregiría las observaciones, y que para el caso que así no fuese se iniciaría el proceso de cobro de multas; señaló también que a mediados de junio de 2013 había concurrido en comisión de servicio a constatar que las observaciones de Villa Ortega hubieren sido solucionadas, pudiendo verificar que no lo estaban, lo cual a su regreso le representó verbalmente a Bustos Morgado, retirándose del lugar sin recibir instrucciones; señaló asimismo que en una reunión junto con los demás ITO, Bustos Morgado les había señalado los montos aproximados que debían aprobarse para adecuarse al presupuesto final, representándoles de paso las metas comprometidas desde enero de ese año por el Departamento de Cuarteles; . **92)** declaración de Romina Parraguez Robles: señaló que durante el año 2010 le entregaron la información del sistema de paneles para su estudio; que luego de regresar de su post natal, en marzo de 2011, pasó a formar parte de la Oficina de Revisión del Departamento, cuyas funciones consistían en hacerse cargo de todo el proceso licitatorio; que en varias ocasiones se le hizo presente a Bustos Morgado situaciones irregulares, no obstante lo cual finalmente terminaban haciendo lo que este les indicaba; que Bustos Morgado no aceptaba que los procesos fueran declarados desiertos salvo por razones legales o de incumplimiento; los hacía contactar a las empresas para subsanar las observaciones y así poder *receptionar* las obras; dijo haber participado en dos (2) comisiones de servicio para Isla Huar, en la primera de las cuales observó que las obras mostraban un claro retraso, y en la segunda oportunidad verificó que habían partidas sin ejecutar, la obra estaba abandonada y no había nadie trabajando; señaló que Bustos Morgado dispuso el término anticipado de los contratos con CGM para las obras Isla Huar, Coyhaique Alto y Lago Cástor, no así Villa Ortega ya que esta última había sido *receptionada*, agregando que Bustos dispuso que se realizaran los trámites administrativos para ponerles término instruyendo al ITO Pizarro que determinara los ítems pendientes, quedando sin ejecutar Lago Cástor ya que no habían montos con que terminar las

obras, añadiendo que Grossman no aceptó la obra; que para la terminación de estas obras el ITO Pizarro fue designado para dicha tarea; que en enero de 2014 fue designado ITO de las obras en reemplazo de Pizarro, por lo que le correspondió trasladarse a Coyhaique Alto a fin de verificar el estado de avance de las obra, llamándole la atención que el *itemizado* no correspondía con el estado de las obras, y que además se estaban realizando obras que no formaban parte del contrato, situación que a su regreso se la señaló a Pizarro y este le dijo que lo había hecho así por instrucciones de Bustos Morgado; que Río Tranquilo no siguiera con licitación porque había que asignársela a Grossman.....; **93:** que de la declaración de Andrea Loreto Campusano Muñoz, CPR, arquitecto, dotación L1, señaló que con respecto a los cuatro (4) proyectos el ITO responsable era Francisco Pizarro Dasso, sin haber tenido ella participación directa en las obras durante su ejecución; que en una oportunidad concurrió a verificar si CGM había subsanado las observaciones de la recepción provisoria verificando que no había ocurrido; que dentro de sus responsabilidades debía consignar en el informe técnico el estado de avance para efectos de los estados de pago; que alguna vez firmó una factura para efectos del avance de las obras y estado de pago; que cuando formó parte de la Comisión, junto con otros profesionales y Bustos Morgado recorrieron las obras detectando que habían partidas incompletas las cuales sólo quedaron registradas en el libro de obras, advirtiéndole que los cimientos se habían reventado por razones climáticas, por lo que Campusano hizo presente que esto no se había observado en el acta de recepción provisoria anterior, situación que habría dado lugar al rechazo de la recepción provisoria, pero que no obstante ello los demás miembros de la Comisión, al igual que ella, tuvieron que *repcionar* las obras por instrucciones de Bustos Morgado quien los convenció que las observaciones serían subsanadas; señaló que luego de haber sido *repcionada* la carta solicitud de recepción enviada por CGM se designó a Guillermo Nadal para verificar que las observaciones habían sido corregidas, constatando éste que ello no había ocurrido, informando a su regreso a Bustos Morgado de manera verbal; enviada posteriormente a constatar la corrección de las observaciones verificó que no habían sido subsanadas lo cual también le fue informado a Bustos pero sin registrar esta información documentalmente ya que éste le indicó que no lo hiciera; reconoció abiertamente que en atención a lo instruido por Bustos Morgado, el 24 de junio de 2013 firmó el acta de recepción sin observaciones respecto del retén Villa Ortega, pero sin haber él constatado en terreno la subsanación de las observaciones ya que no se verificó la comisión de servicio necesaria, misma situación que le ocurrió a los otros miembros de la

misma, Guillermo Nadal, Héctor Salamanca y Luis Parra; que en la última Comisión concurrió a Lago Cástor y Coyhaique Alto, a fin de verificar la situación laboral de la empresa toda vez que CGM había sido multada por las condiciones laborales en que se encontraban los trabajadores, situación que le fue informada a Bustos, mas sin que de ello se hubiere dejado registro escrito; que participó en una reunión a la cual fue llamado Gutiérrez y César Rojas, estando además presente Isidro Martínez y Nicolás Lopez, observando en esa reunión Bustos Morgado el estado de las obras, oportunidad en que la CPR se enteró de las dificultades monetarias que existían entre Rojas y Gutiérrez; **.94:** Héctor Salamanca Riquelme declaró haber participado en las cuatro (4) obras pero que esa participación era en relación a las necesidades que manifestara el ITO respecto de la parte eléctrica; en cuanto a Villa Ortega dijo que le llamó la atención que las obras no avanzaban conforme a la planificación; concurrió al menos cuatro veces a las obras, anotando las observaciones en su bitácora; dijo haber viajado a mediados del año 2013 en Comisión junto con Bustos Morgado y otros profesionales del área, verificando que la obra no estaba terminada, sin perjuicio de lo cual Bustos los convenció de firmar la recepción provisoria con observaciones; de los otros proyectos el más avanzado en la parte eléctrica era el de Isla Huar, no así los otros 2; que cuando Grossman asumió la terminación de las obras Pizarro fue reemplazado, verificándose posteriormente que los avances informados no correspondían con el estado de avance; negó haber participado en la Comisión que dio lugar al acta recepción N° 56, negando haberla firmado, reconociendo sin embargo que su firma en el acta pero no el momento en que lo había hecho; Isidro Martinez Bacigalupi declaró que su función era revisar y visar los documentos legales, ya fuera para que la empresa se registrara en el registro de contratistas o para que participara en una licitación; dijo que autorizó los antecedentes que tuvo a la vista a efectos de un trato directo con Grossman, lo que visó por estar los antecedentes correctos en la forma y en el fondo; dijo haber participado en la Comisión de recepción junto con Bustos Morgado, tomado fotos con su teléfono celular, verificando que las obras no estaban terminadas, haciendo posteriormente entrega de las imágenes en la investigación; Leandro Donoso Vilches, pintor, manifestó que concurrió a la comisión de servicio a efectos de realizar arreglos en Villa Ortega, recibiendo al efecto materiales y que había sido Pizarro quien le había sacado la firma a Félix Flores, a fin de que fueran retirados desde la bodega de Cuarteles en un vehículo de color blanco; **.96** Jaime Caliqueo, Ricardo Parra, Walter Ávila y Juan Jeldres señalaron que en noviembre de 2013 concurrieron a una Comisión de servicio a Coyhaique respecto a una obra en la

cual Pizarro era el ITO, esto con el objeto de realizar trabajos en la obra Villa Ortega, permaneciendo todos allí durante aproximadamente 12 días, manifestando haber ocupado materiales que estaban en la obra y otros que llegaron posteriormente a bordo de un camión, los cuales fueron *receptionados* por Pizarro; los trabajos fueron pintura de cuartel interior, calabozos, instalación de cerámicos, construcción de closet, instalación lavaplatos y calefont, construcción de un nicho para el gas licuado, nivelación de terreno con graVilla y una máquina retroexcavadora; .98 mediante documento electrónico N° 21826056, de 22 de abril de 2014, de esta fisalía instructora, se solicitó el nombramiento de un fiscal ad hoc con motivo de las observaciones de la Seremi de Salud y también por el retiro de materiales efectuado desde la bodega de la institución por parte de Pizarro; .99 Félix Flores, mediante los siguientes documentos “salidos de L1” remitió al Departamento de contabilidad los estados de pago conforme al siguiente detalle: Oficios 2212, 2257, 2213, 334, 331, 332, 666, 549, 662, 599, 547, 665, 1201, 664, 883, 7753, 1047, 757, 816, 803, 1182, 1392; las tramitaciones se efectuaban sin presentar planillas de cotizaciones previsionales, además de otras situaciones como certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales; mientras Bustos Morgado estaba de subrogante firmó para estado de pago los Oficios 1947, 1945, 1049, 1946, 200, 199, 205; las tramitaciones se hacían sin que la empresa presentara planilla de cotizaciones previsionales y sin fecha de la inspección de visita y en algunos casos se remitían los mismos antecedentes anteriores. Que el ITO Pizarro aprobó los siguientes estados de avances porcentuales sin que correspondieran a la realidad: Oficios N° 38, 49, 39, 41, 40, 50, 51, 52, 53, 68, 89, 90, 91, 7, 10, 9, 16, 18, 17, 33, 28, 26, 27, 32, 34, firmando los antecedentes que se acompañaban a los oficios.

12) Documento N° 636, acta de entrega N° 766, de 6 de noviembre de 2013, materiales de construcción que serán utilizados en casa anexa y retén Villa Ortega para mejora y reparación, por orden superior (entre otros, 3 sifones lavaplatos, 10 espejos para lavamanos, 1 caja de enchufe, 10 cañerías de cobre, 1 saco de yeso, 20 galones de pintura, 2 galones óleo brillante blanco, 2 galones óleo color negro, tinetas de pintura (esmalte al agua y otros colores); Leandro Donoso, cabo 1°, encargado de bodega, Félix Flores Santis, timbre y firma.

13) Documento N° 66 (sumario administrativo, fs. 3047; Oficio de fiscal Omar Gutiérrez Gámbaro, fiscal instructor, a Dirección de Justicia; solicita diligencias:

proporcionar antecedentes solicitados por asesoría jurídica para incorporarlos a la pieza sumarial y posteriormente ampliar la vista fiscal: causas laborales que se individualizan, seguidas en distintos tribunales del trabajo).

2) Testigo JUAN FRANCISCO SOCÍAS VARGAS (arquitecto).

Interrogado por la fiscalía refirió que trabaja en el Departamento de Cuarteles desde el mes de enero de 2008, actualmente en el área de diseño de proyectos, pero que durante un tiempo estuvo trabajando en el área de revisión de proyectos. Consultado por el motivo de su comparecencia explicó que lo hacía a raíz de las irregularidades en la construcción de cuarteles detectada en la zona de Coyhaique. Indicó que él era parte del equipo a cargo de reunir los antecedentes para llamar a licitación y que posteriormente fue designado dentro de la Comisión que le correspondió ir a terreno para verificar las irregularidades informadas en relación a los avances de las obras que habían sido informados. El objetivo era detectar pagos indebidos por trabajos no ejecutados. Refirió que el Coronel Águila fue quien designó la Comisión. Estuvo constituida por un oficial de Carabineros, quien iba como ministro de fe, y el resto de los integrantes iban como técnicos. Señaló no saber quién dio a conocer los acontecimientos. Señaló que se pudo establecer por la Comisión que efectivamente la hipótesis por la cual se viajó se sustentaba, o sea, haberse efectuado pagos que no se correspondían con los trabajos efectuados. Respecto de la metodología empleada, señaló que se basó en la documentación existente. Las obras fueron visitadas e inspeccionadas en el siguiente orden: Lago Cástor, Coyhaique Alto y finalmente Isla Huar. Respecto del primero, la visita fue en febrero de 2014, concurrieron todos los miembros designados en la Comisión. Encontraron que las obras no tenían el avance informado, estaba abandonada, sin personal, se veían restos de materiales en el patio, obras desprotegidas y, especialmente, la caballeriza se encontraba en estado de excavaciones. El cuartel y casa anexa tenían mayores avances, paneles soportantes y cubiertas instaladas, pero sin terminaciones. Señaló que *hasta este momento* el retén Lago Cástor no ha recibido más trabajos desde esa fecha, sigue igual que a ese entonces, y no existe financiamiento para terminación o para una nueva construcción. Indicó que las condiciones de habitabilidad no eran las mejores para cumplir la función policial y de vida. Los funcionarios que allí trabajaban fueron entrevistados. Había materiales al interior de un *container*, otros a la intemperie protegidos con plásticos, algunos materiales habían sido retirados

del lugar de las obras sin dejar constancia en el libro de obra sino sólo en el libro de guardia. Los materiales pertenecían a CGM. Una vez Francisco Pizarro retiró materiales y también otras personas que trabajaban en el proyecto de Coyhaique Alto a cargo de la empresa Grossman. Se **le exhiben fotografías señaladas en el N° 1 del informe técnico N° 125**: a la luz de las mismas refiere que lo que se le exhibe corresponde a las obras que visitaron y al estado en que se encontraban: foto 1: describe desgaste en los paneles sip del segundo piso, sin protección, sin ventanas, a diferencia del primer piso; la foto permite dar cuenta que la obra presentaba un avance aproximado a un 70%; señaló que en una *situación normal* ese avance tomaría alrededor de 60 días en lograrse, pero dependiendo de la empresa y del número de trabajadores que se encuentren en la obra trabajando; foto 6: interior con techumbre y cerchas, faltan las terminaciones, estado de avance corresponde a un 50% o 60%; foto 7: otra vista del segundo piso, se ven paneles al descubierto sin protección; foto 13: otra vista del cuartel (mismas observaciones); foto 21, corresponde a la vivienda anexa, avance bastante mayor que el cuartel, cuenta con seading; la obra no estaba en condiciones de ser usada porque faltaban las instalaciones de artefactos; foto 23: vista de la techumbre levantada parcialmente, no está instalada la puerta; foto 24: otra vista de la vivienda con la techumbre desprendiéndose; foto 27, muestra las caballerizas; dijo que *le llamó la atención* porque habiéndose pagado en un 100% esta parte de la obra sólo presentaba excavaciones o movimientos de tierras, lo cual correspondería a un primer o segundo estado de pago.

Declaró el testigo que a continuación visitaron Coyhaique Alto, todos los miembros de la Comisión, las obras de este lugar estaban más avanzadas que Lago Cástor. En ese momento la obra estaba a cargo de la empresa Grossman, pero el avance no se correspondía con lo planificado. Se habló con el personal policial del lugar; se verificó que el avance no correspondía con los estados de pago; no habiendo gente trabajando ni libro de obras, se comunicaron con la jefatura en Santiago, disponiéndose por ésta dar término anticipado al contrato; las condiciones en que se encontraba el personal de Carabineros eran bastante precarias. Indicó que hasta la fecha no se ha iniciado un proceso de terminación de estas obras. Se **le exhiben fotografías del informe técnico 127**; foto 9: *estructura del cuartel policial, claramente tiene un mayor estado de avance pero igualmente no está finalizada, por ejemplo falta puerta de la cocina*; foto 10: *vista angular de la casa anexa y del cuartel, al fondo se observa la construcción precaria existente en la cual vivía el personal policial*; foto 11, acercamiento de la

casa anexa; foto 12, *caballerizas, cimientos, paneles de muros sin protección, sin techo*. Refirió que en este lugar también había material acopiado en el terreno, a la intemperie; foto 18, vista de la caballeriza sin techumbre.

El último lugar que visitaron fue Isla Huar, las obras no estaban terminadas ni tampoco en condiciones de ser utilizadas; el personal estaba alojado en la parroquia de la iglesia; las obras estaban más avanzadas que las otras; los trabajadores estaban ejecutando trabajos que no formaban parte del contrato; el estado de avance tampoco se condecía con los avances informados para los estados de pago; conversaron con los trabajadores y estos les dijeron que los trabajos que estaban realizando obedecía a que así se lo habían ordenado. Refirió que para este cuartel, atendido el mayor grado de avance, se obtuvo autorización para un nuevo contrato de terminación, lo cual se hizo mediante llamado de licitación pública, adjudicándose la terminación de las obras a una empresa contratista registrada en Carabineros. Aclaró que en todo caso las obras no estaban en condiciones de ser utilizadas ya que faltaba, por ejemplo, la instalación de los artefactos sanitarios.

Consultado por la metodología que se había seguido para determinar el perjuicio explicó que se había trabajado sobre una planilla excell en la que se registraban los avances informados para cada estado de pago, verificándose que no correspondían con lo que aparecía informado. Se trabajó con documentos relacionados tanto con la constructora CGM como con la empresa Grossman. Se le exhiben los informes técnicos y sus anexos (“Análisis Financiero”) refirió que los reconocía como aquellos que elaboró la Comisión en la visita a terreno; señaló que allí aparecen columnas de estados de pago, del tipo de construcción, aprobado ITO, Comisión de servicio febrero 2014 y diferencia comisión/ITO; al final total aprobado ITO \$356.238.11, total Comisión febrero 2014 173.948.082, total diferencia Comisión / ITO -182.290.033). A los totales informados se dedujo la retención de 19 millones y fracción, por lo que el perjuicio se valorizó en alrededor de 16 millones de pesos. Se **le exhibe el informe técnico N° 125** (estados de pago 1 al 8), lo reconoce como parte de aquellos elaboró la Comisión; constan las siguientes glosas: retenciones \$19.738.743; total \$320.814.560; total perjuicio \$166.605.221. Se **le exhibe itemizado N° 7, correspondiente a Lago Cástor, contenido en el Documento N° 669, de la prueba documental del ministerio público**; lo reconoce; dijo haberlo visto cuando se constituyó en el

terreno, corresponde al estado de pago N° 7 de Lago Cástor; da cuenta que en la obra correspondiente al cuartel, en los numerales 3.11 y 3.13, correspondientes a topes de puerta y espejos, aparecen informados como terminados en un 100%, no obstante que en la visita se detectó que no estaba instalados. Añade que respecto a la caballeriza se efectuaron pagos por obras no ejecutadas. Se **le exhibe a continuación la planilla de análisis financiero de Coyhaique Alto**: total autorizado \$327.495.690; perjuicio \$126.296.000; retenciones \$19.499.866, total \$307.995.824. Se **le exhibe itemizado N° 6, del estado de pago N° 6 de Coyhaique Alto**. Respecto del **informe N° 126, Isla Huar**, se **le exhibe una tabla** que analiza la situación de las obras en relación a lo verificado en terreno por la Comisión: perjuicio \$159.633.793; retención \$19.213.940; total \$365.064.864.

A continuación se **le exhibe el itemizado del estado de pago N° 7 de Isla Huar**, reconoce el documento, hace presente que en el punto 3.16, se señala 100% instalados los artefactos sanitarios, sin embargo la Comisión verificó que no lo estaban. Señaló que el total del perjuicio que constató la Comisión respecto del total de las obras alcanzaba aproximadamente a \$450.000.000.

Interrogado en relación a la estructura y funcionamiento del Departamento de Cuarteles, refirió que su jefe directo era el Coronel Christian Bustos Morgado y que el jefe del Departamento era el Coronel Félix Flores. Las áreas de diseño, ejecución y fiscalización estaban a cargo del Coronel Bustos.

Por otro lado, declaró que les llamó la atención que la empresa se presentara simultáneamente a las cuatro obras con un mismo capital financiero comprobado, en circunstancias que si se adjudicaba una obra el capital ya no seguía siendo el mismo sino que menos. Indicó que se lo manifestaron a Bustos y a los asesores, pero la respuesta de éste fue que no había ninguna anormalidad y que había que seguir con el proceso licitatorio. Señaló que otro tanto ocurrió con los criterios de evaluación que tenía dispuesto Bustos Morgado, conforme a los cuales lo único que finalmente se consideraba era el monto propuesto y el plazo de ejecución, lo que redundaba en el hecho de que siempre se presentaban las mismas empresas. Advirtió que a raíz de la investigación de estos hechos se percató que funcionarios de la institución tenían relación personas ajenas a ésta, como fue el caso de Christian Bustos con César Rojas. Refirió que Bustos daba instrucciones a la comisión evaluadora para que pidieran aclaratorias a los oponentes **como ocurrió**

con la tenencia Hualañé. Se le exhibe el documento N° 827, prueba del ministerio público (oficio 1684 de Chilecompra, de 28 de septiembre de 2018); lo reconoce, se le da lectura: *Informe técnico de matriz de cumplimiento de las ofertas presentadas para la reposición de la tenencia Hualañé, N° 750, Santiago 3 de octubre de 2011; antecedentes Generales ID 3172-143-LP 11, motivo del proceso contratación de la reposición de la tenencia Hualañé, fecha de publicación 18 de agosto 2011; criterios de evaluación: administrativa (verificación cumplimiento antecedentes solicitados) y técnica (criterios técnicos se consignan en anexo: oferta económica 70%, plazo de entrega 25%, comportamiento proveedor 5%, total 100%). Comisión decide declarar desierta, toda vez que los oferentes no consideraron la totalidad de las partidas, y no pedir aclaratorias, por lo que se representa la orden verbal impartida en ese sentido por el Coronel Christian Bustos Morgado, en cuanto a que la totalidad de las empresas que pasaron a la evaluación técnica no reunían los requisitos por la razón ya indicada. Se reevalúan las oposiciones y se adjudican las obras a la empresa FEALFRA con un porcentaje de 99% de cumplimiento de las exigencias conforme a los criterios de evaluación existentes. Firma Juan Francisco Socías Vargas y otros. Se le pregunta al testigo acerca de quién fue la persona que decidió dejar la constancia precedente, respondiendo que había sido él, Constanza Cabello y otros profesionales del área. Lo anterior dio lugar a una reunión en la cual Bustos le preguntó su opinión acerca de lo sucedido, respondiendo él que no estaba de acuerdo porque le parecía ilegal e inmoral, pregunta que se le reiteró dos veces más entregando él la misma respuesta, luego de lo cual Bustos dispuso su salida de la Comisión Evaluadora de Ofertas.*

En cuanto a los procesos de licitación señaló que participó acopiando antecedentes, absolviendo preguntas en la visita a terreno. En esa etapa no advirtió ninguna irregularidad. Señaló que a Rojas lo conoció en Carabineros cuando éste trabajaba en la institución. Refirió que Francisco Pizarro cumplió instrucciones dadas por Bustos en cuanto a preparar los antecedentes para el trato directo de las obras con Grossman. Indicó el testigo que Francisco Pizarro les informó, a él y otros que allí trabajaban, que la mencionada instrucción le había sido dada verbalmente. Declaró que a César Rojas lo vio en el Departamento de Cuarteles en la oficina de Christian Bustos y en la sala de reuniones.

En cuanto al proyecto Villa Ortega, dijo que había participado el proceso de licitación. Consultado su parecer respecto de Bustos Morgado respondió que era un buen jefe, procuraba mantener un buen ambiente laboral, le parecía que era una persona competente en cuanto a sabía lo que se estaba haciendo y porque estaba al tanto de los procesos. Respecto de los ITO señaló que éstos se presentaban a la oficina de Bustos al regreso de sus comisiones a fin de darles cuenta personalmente. Bustos también se reunía con los demás funcionarios vinculados al proceso. Dijo que les llamó la atención la incongruencia entre el monto ofrecido y las obras a realizar por trato directo.

Concluyó su declaración diciendo que al regreso de la Comisión de febrero de 2014, se le aisló durante un año.

Interrogado por el Consejo de Defensa del Estado respecto de la empresa FEALFRA, señaló que ésta participó en muchas licitaciones.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos Morgado refirió que la Comisión la dispuso el Coronel Águila; que había declaró en la PDI; que allí le pidieron explicar cómo había llegado a los montos que se indicaban en el informe evacuado por la Comisión. Indicó que posteriormente declaró en el ministerio público, ratificando en esa oportunidad el informe que había realizado la Comisión.

Respecto del informe N° 126, correspondiente a Coyhaique Alto, se le consultó por el concepto de las “aclaratorias”, a lo que el testigo respondió que se piden cuando existen inconsistencias menores, pero en el caso de Hualañé la aclaratoria se estaba pidiendo respecto de partidas que no habían sido incluidas en la oferta. Dijo no recordar si en las bases de la licitación estaban incluidas las aclaratorias. **Se le exhibe el documento 268**, de las pruebas ofrecidas por la defensa de los acusados Bustos; lo reconoció e hizo lectura, en lo pertinente consta que las aclaratorios no podían significar, entre otras cosas, *“una alteración de la oferta”*. Refirió que las aclaratorias fueron solicitadas verbalmente a las empresas oferentes. Dijo no recordar si había formado parte de la Comisión evaluadora de las licitaciones de Villa Ortega, Lago Castor, Coyhaique Alto e Isla Huar. **Se le exhibe prueba documental N° 192, de sus medios de prueba:** Resolución N° 1.217, de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección de Logística del Departamento de Cuarteles, correspondiente al informe técnico de propuestas

“Reposición Isla Huar”; lo reconoce y responde que sí aparece su nombre como integrante de la Comisión evaluadora y del informe técnico en el cual se sugiere a la empresa CGM Ltda. Se **le exhibe prueba documental N° 194, de sus medios de prueba**: Resolución N° 1.273, de 7 de noviembre de 2012, que nombra Comisión evaluadora para la evaluación de licitaciones de diez cuarteles; se le da lectura resumida: retenes Isla Huar, Coyhaique Alto, Lago Castor, entre otros, se nombra comisión para la evaluación a Juan Francisco Vargas, entre otros, y Teniente coronel Christian Bustos Morgado. En cuanto a la entrega de terrenos de Villa Ortega recordó haberse comunicado con Gutiérrez para coordinar la visita, señalando que al parecer no habían concurrido otras personas que Gutiérrez. *Plazo, precio y comportamiento* eran los criterios de evaluación. Dijo no saber si antes del año 2010, *además de los criterios plazo y precio, estaba también incluido el criterio comportamiento*. El año 2012 se había incluido el criterio *calidad de la empresa*.

Interrogatorio defensa de acusado Pizarro: señaló que trabajaban en el mismo módulo con Pizarro; escuchó tratar a Pizarro con sobrenombres, tal como lo hacía con todos.

Interrogatorio defensa de acusado Gutiérrez: se le exhibe, del N° 9, otros medios de prueba de la fiscalía, una fotografía; el testigo identifica que en ella se muestra “la zona de caballeriza”; dijo no saber a qué lugar u obra en específico correspondería ya que muestra un mayor grado de avance que el exhibido en la fotografía de la fiscalía del día de ayer. Consultado por el origen de los criterios de evaluación utilizados en la licitación de las obras, refirió el testigo que ya se encontraban establecidos. A fin **de superar “contradicción”** se le exhibe su declaración: *“respecto de la bases de licitación, en particular la de las especiales que requieren características técnicas, las hacíamos con Parraguez y Fabián Gutiérrez...”*. Reiteró lo dicho anteriormente en cuanto a que el trato directo con Grossman fue para salvaguardar la irregularidad de los estados de pago, esto porque esa empresa no estaba registrada en Carabineros ni tampoco había realizado obras en la zona.

Interrogatorio defensa de acusado Rojas respecto de si había hablado con él con motivo de los proyectos de obras vinculados con este juicio, nunca le solicitó algo en relación con las mismas; las veces que lo vio en el Departamento de

Cuarteles no supo el motivo de su presencia; señaló que no le constaba que la empresa Grossman hubiere concurrido a la visita previa a la entrega de terreno. Se **le exhibe documento N°1**, de sus medios de prueba (sumario administrativo, fs. 1.757, 1.758, 1.759 y 1.760); testigo los reconoció y señaló que se trataba de cartas de invitación dirigidas a cuatro (4) empresas, entre ellas Grossman, para la terminación de las obras del proyecto de reposición retén Isla Huar. Lectura: *Santiago, 4 de noviembre 2013, Jefe del Departamento de Cuarteles: Me es grato informarles que se ha resuelto la terminación de las obras de Isla Huar; se le invita a cotizar el proyecto el cual será adjudicado por trato directo a la mejor oferta; dirigidas a Olga Garfias Fuentes, Osvaldo Tobar (empresa FEALFRA); Ramón Río (empresa Cerco Ltda.) y Carlos Grossman (constructora Grossman S.A.).* Hizo presente el testigo que la empresa Grossman no había tenido obras con Carabineros, a diferencia de las otras tres, con quienes sí se había trabajado. Hizo presente también que aun cuando no existía impedimento en llamar a empresas que anteriormente no hubieran trabajado con la institución, pero lo que correspondía era ir a buscar empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la institución a fin de invitarlas a participar, en el cual la empresa Grossman no estaba inscrita. Se **le exhibe el documento N° 721, prueba del ministerio público.** Lectura: *Informe evaluación de propuesta; Santiago, 3 de noviembre de 2013, concurso terminación proyecto Isla Huar, trato directo; antecedentes Generales; concurso: trato directo; objetivo: evaluar las propuestas recibidas para la contratación de las obras civiles. Evaluación técnica de las empresas FEALFRA SPA y Grossman S.A.; asesoría: no presentan observaciones técnicas; oferta económica: FEALFRA, 22 millones y fracción, Grossman, 19 millones y fracción; conclusión: se sugiere la contratación de la empresa FEALFRA SPA, mejor oferta económica, 100% de cumplimiento criterios de evaluación.* Se **le exhibe documento N° 670, prueba del ministerio público** (copia minuta reunión e informe proyecto “terminación de retén de Carabineros Isla Huar”, N° 009, de 22 de enero de 2014, de asesoría jurídica L1 a Jefe Subrogante Departamento Cuarteles L1). Lo reconoce, se trata de una minuta elaborada en el Departamento de Cuarteles, informa antecedentes de asesoría jurídica al Jefe subrogante del Departamento Cuarteles): “Siendo las 8,45 horas del 22 de enero de 2014, en dependencias del Departamento de Cuarteles L1; Edgardo Osses, Jefe del Departamento, recibe a Ignacio Labra en representación de Grossman S.A. (director de la empresa); participan Marco Pomar, Héctor Barría y Nicolás López (abogado); Ignacio Labra informa: que la empresa no está en condiciones de cumplir con la fecha de entrega, 25 de enero de 2014; que se efectuaron obras no

*consideradas en el contrato; que de acuerdo con el itemizado deben realizarse obras en un inmueble que no se encuentra construido....". Se le exhibe documento contenido en el N° 815, prueba del ministerio público: el testigo señala que *reconoce el tipo de documento, es una Resolución Exenta*: "se dispone término anticipado del contrato de terminación del proyecto Coyhaique Alto por incumplimiento del contratista, 10 de febrero de 2014". Confirma lo afirmado por la defensa en orden a que el día 11 de febrero de 2014, cuando llegaron a la obra de Coyhaique Alto, la Resolución Exenta ya existía, siéndole notificada a la empresa.*

Se hace lectura completa del documento precedente (**N° 815, prueba del ministerio público**):

3) Testigo JORGE SANTIS REBOLLEDO (constructor civil).

Interrogado por el ministerio público respondió que se desempeña en el Departamento de Cuarteles, sección reparación y mantención; ingresó el año 2009, como dibujante técnico, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2014, en que fue cambiando de área como constructor civil. Participó en una Comisión de evaluación de cuarteles en la zona sur, cuyo objetivo era conocer el estado en que se encontraban las obras en dicha zona, ello debido a que se había recibido información de que las obras no estaban terminadas y habían sido contratadas por otra empresa para su terminación. En la Comisión participaron Marcos Pomar, ingeniero constructor, Juan Francisco Socías, arquitecto, y el Coronel Jorge Muñoz, como ministro de fe. Se concluyó que las obras no estaban terminadas y que había partidas pagadas pero no ejecutadas. Asimismo se detectaron defectos de construcción. Las obras que visitaron fueron Lago Cástor, Coyhaique Alto e Isla Huar, en el mismo orden.

La visita a Lago Castor fue en febrero de 2014, participaron todos los miembros de la Comisión. Observaron las obras en construcción (retén, casa anexa y caballerizas). El cuartel estaba a medio construir, sector caballerizas parte de las fundaciones, casa anexa utilizada por los trabajadores y un par de container en el exterior. No había trabajadores en el lugar. La obra no mantenía cierre perimetral. El retén sólo contaba con paneles sip, tipo muro. No hubo posteriormente obras complementarias para el término de estas obras, ignorando el porqué. Observaron que había materiales en el lugar, conversaron con el jefe del retén, quien los

acompañó en la visita, explicándoles que el ITO, Francisco Pizarro, y la empresa Grossman, habían retirado materiales desde el lugar de la obra. Explicó algunos de los problemas constructivos que observaron, a saber, radier mal compactado, no existía amarre perimetral ni sistema de anclaje, situación esta última que podía hacer colapsar la obra con cualquier movimiento. Se detectaron haces luces hacia el exterior, esto porque los paneles usados en la techumbre les faltaba cubierta y revestimiento. **Se le exhibieron fotografías anexas al informe técnico N° 125, reseñadas en el documento N° 1 (prueba documental de la fiscalía):** fotos 1, 4, 6, 27 (*caballerizas, sólo con enfierradura para los cimientos, estaban informadas como terminadas en un 100%*).

Declaró el testigo que él había participado en el diseño de los cuarteles por lo que los conocía perfectamente y por lo mismo sabía qué partidas correspondían en cada etapa de ejecución de las obras. Tal conocimiento ayudó a ilustrar y aclarar a los demás miembros de la Comisión.

En cuanto a Coyhaique Alto, la Comisión se constituyó al día siguiente, era martes. Las obras estaban más avanzadas, salvo las caballerizas las cuales presentaban sólo sus cimientos y paneles (muro) había trabajadores en el lugar, no recordó a qué empresa pertenecían; se detectó que habían partidas de terminaciones pagas pero no ejecutadas. El Coronel Muñoz dispuso que los trabajadores que allí estaban hicieran abandono de la faena. Se dispuso el término de contrato de obra el mismo día. Los carabineros estaban trabajando en una casa anexa la cual estaba en condiciones muy precarias ya que eran casas pequeñas de alrededor de 50 metros cuadrados. Eran 5 casas anexas, una de ellas se utilizaba como retén. **Se le exhibe fotografías anexas al informe técnico N° 127, reseñadas en el documento N° 1 (prueba documental de la fiscalía):** fotografías corresponden a distintas vistas de las obras. Señaló que se encontraron materiales en cuatro mini bodegas.

Respecto Isla Huar, señaló que había personal trabajando en la casa anexa en circunstancias que el contrato era para terminar el retén y no la casa anexa. Se procedió de la misma forma que en Coyhaique Alto. Se detectó que había partidas informadas como terminadas pero en realidad no lo estaban. El personal policial estaba viviendo en la iglesia del lugar. El año 2016 las obras fueron terminadas por la empresa Pizarro, con asiento en otra zona. En la visita encontraron material

de construcción disperso, en tanto que otros estaban en la casa anexa y algunos más en una bodega.

Los informes fueron confeccionados al término del horario laboral, esto con el objeto que fueran entregados al llegar a Santiago. En Lago Castor una parte de las obras fue cambiada del lugar que topográficamente se le había destinado en el proyecto. Respecto de las fotografías indicó que todos los miembros de la Comisión las tomaron.

Interrogado acerca de la estructura y funcionamiento del Departamento de Cuarteles, refirió que su jefe directo era “mi Coronel ” pero todas las órdenes las recibía de “mi Comandante Bustos”, el cual también daba instrucciones a la oficina de diseños; los ITO estaban bajo las órdenes de “mi Comandante Bustos”. Explicó que las licitaciones se hacen públicas cuando se suben al portal Mercado Público. El monto total de la obra de construcción la define el proyectista, no quedando incluidos el mobiliario y la tecnológica. Esta información es propia del Departamento de Cuarteles, la manejaba el jefe del proyecto y “mi Comandante Bustos”. Señaló que es *la jefatura* la que decide cuando se sube la licitación al portal. Respondió que Bustos era competente y con conocimiento, tanto respecto de la materia como respecto de lo que se estaba haciendo. Declaró el testigo que ingresó a trabajar al mismo tiempo con Pizarro, con quien compartían los fines de semana, jugaban una especie de juegos de combate. Dijo no saber de malos tratos de parte de Bustos a Pizarro. Las órdenes de Bustos eran verbales y electrónicas, *mitad y mitad*. Bustos mantenía una política de puertas abiertas. No conoció a César Rojas. No participó en las obras de CGM y tampoco conoció a quienes trabajaban en esa empresa. Refirió finalmente que las obras no son recuperables al día de hoy ya que ninguna persona tomaría la terminación de las obras, atendida la cantidad de años transcurridos.

Interrogado por el querellante acerca de malos tratos señaló que nunca vio ni supo de ellos, sin perjuicio de las bromas que se hacían entre ellos. Señaló que fue a Villa Ortega cuando se hizo el levantamiento topográfico, después de lo cual no volvió a ir. Supo de una comisión que se trasladó durante una semana a realizar unos trabajos de terminación por maestros del Departamento de Cuarteles.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos señaló que el año 2009 se comenzó a trabajar con el sistema constructivo de paneles; sabía que Francisco era sobrino de un General de la Institución. Su función era velar porque la construcción se realizara conforme a los mandatos de la institución, siendo además responsable por los pagos y por los avances; “él es la fiscalización de la obra”. Respondió que en el libro de obras se anotan diariamente los avances de las obra; en el sólo escriben el jefe de obra y el ITO, en el cual se deja constancia de las observaciones que se le hagan a la obra. Señaló el testigo que en las tres obras no había libro de obras. El responsable de éste es el jefe de obra. El libro debe permanecer en la obra. El ITO fiscaliza que el libro de obra esté en las obras. El libro debe llenarse con cada visita que concurra. El el ITO puede impartir instrucciones al constructor y de ello debe dejarse constancia en el libro de obras.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro refirió que Bustos supervisaba el trabajo de los ITO.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez se le exhiben fotos del informe N° 125, correspondiente a Lago Cástor (caballerizas con enfierradura). **Se le exhibe foto del N° 9, otros medios de prueba de la fiscalía**; refirió que corresponde lo que se mostraba en la foto era la enfierradura de los cimientos de una caballeriza, también algunos tubos para la electricidad y algo de nieve. Aclaró el testigo que estas últimas fotos no correspondían a las que tomó la comisión en febrero de 2014, puesto que en esa época “no hay nieve”. Cuando la Comisión viajó en febrero de 2014 las caballerizas se encontraban igual a como se mostraron en la foto exhibida.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas respondió que los informes técnicos 125, 126 y 127, fueron firmados por él, además de otros profesionales. El primero corresponde a la visita de Lago Castor, el segundo a Coyhaique Alto y el tercero a Isla Huar. El objetivo era analizar en terreno los antecedentes del proyecto de terminación de las obras adjudicadas originalmente a la empresa constructora CGM. Cuando llegaron a la zona no estaban las resoluciones que ponían término al contrato.

Nuevo interrogatorio de la fiscalía (artículo 329 del Código Procesal Penal): las fotos que se le exhibieron fueron tomadas en terreno por la Comisión.

Nuevo interrogatorio de la defensa del acusado Gutiérrez (artículo 329 del Código Procesal Penal): a la pregunta respondió que no sabía que se le iba a poner término al contrato, se enteró cuando el Coronel Muñoz les comunicó que había recibido un llamado telefónico indicándosele que se le pondría término a los contratos.

PRUEBA DOCUMENTAL

14) Documento N°115 (Informe Final de Investigación Especial N° 283/2015, División de Infraestructura y Regulación, Subdivisión, Contraloría General de la República, 16 de diciembre de 2015; sumario administrativo).

15) Documento N° 839 *Informe jurídico de proyectos Coyhaique Alto, Lago Castor e Isla Huar, N°202, de fecha 18 de febrero de 2014, emanado del departamento de Cuarteles*

16) Documento N° 1.068 *Informe técnico de fecha 03.01.2014 del Área de Gestión y Control de Proyectos del Gabinete Nacional de la Dirección de Logística, suscrito por Lautaro Silva Estay.*

17) Documento N° 1.076 *Oficio N°01 de fecha 3 de febrero de 2014 del Jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Logística de carabineros de Chile a la Dirección Nacional de Logística, el cual remite informe respecto de visita efectuada el 03.01.2014 a los retenes Villa Ortega, Lago Castor y Tenencia Coyhaique Alto.*

4° (39) Testigo ISIDRO MARTÍNEZ BACIGALUPPI (abogado).

Interrogado por el ministerio público respondió que trabaja en asesoría jurídica del Departamento de Cuarteles desde el 2 de enero de 2013; la estructura del Departamento a la fecha de los hechos estaba diseñada en dos grandes áreas que estaban a cargo de un Jefe de Departamento, una de las cuales correspondía a la sección de ejecución y coordinación de proyectos, a cargo de Bustos

Morgado, y la otra a reparación y mantención a cargo de otra persona; en ese tiempo su jefe directo era Bustos Morgado, él lo evaluaba; en esa sección trabajaban arquitectos, constructores, ingenieros constructores, ingenieros eléctricos, abogados; los ITO también dependían del mismo jefe; su función, conforme al reglamento de obras, consistía en fiscalizar y representar a nombre del Fisco en una obra de carácter policial, encargado de velar por la correcta ejecución de las obras; respecto de los ITO indicó que cuentan con autonomía técnica, disponen de un libro de obra en el cual sólo puede intervenir el ITO; en la parte administrativa depende un jefe, de un oficial, al cual debe rendir cuenta de los pormenores técnicos y administrativos; rinden cuenta formal a través de un informe técnico en el cual se señalan los estados de avance de las obras, pero también dan cuenta en forma verbal en las reuniones; después de cada comisión de servicio tienen que dar cuenta de los hechos relacionados con su visita; muchas veces viajaba sólo a las obras; la función del jefe de sección era y es coordinar y controlar las funciones de los subalternos; independiente de si es lego en materia constructiva tienen ciertos deberes de control conforme ha señalado la Contraloría General de la República; el jefe de sección cuenta con la asesoría de otros arquitectos para así saber si lo que se está informando por el ITO corresponde o no a la realidad; los funcionarios que en ese tiempo trabajaban en la sección llevaban tiempo trabajando, tres años o más, por lo que sabían su trabajo; el Comandante Bustos es una persona inteligente, más que confiada, sabía los pormenores de las obras y no se iba a dejar engañar por lo que le dijera un funcionario; dentro de sus funciones confecciona un calendario del proyectos a ejecutar dentro del año y priorizar cuáles se levantarán en licitación, y en ese tiempo habían prioridad en los cuarteles del sur a raíz del terremoto; las facultades del jefe de sección respecto de los ITOS es una facultad de control, no técnica, el jefe tiene un control respecto de cómo va realizando su trabajo el ITO, por ejemplo puede nombrar o cambiar un ITO, evaluarlo, pedir que no se renueve el contrato por trabajo deficiente; tiene siempre conocimiento de las visitas de fiscalización en comisión de servicio, esto porque es necesario un proceso formal que permita autorizar al Departamento de Logística la Comisión; en cada obra la designación de ITO la realiza el Director de Logística, esto desde el punto de vista formal, pero en la realidad es la sección respectiva quien los designa, sin que el jefe de sección tenga intervención. Bustos no podía remover o cambiar a los ITO durante la realización del contrato, sólo puede hacerlo el Director de Logística, lo que hará a instancia de los profesionales y técnicos de la sección, pero siempre con el visto bueno del Jefe del Departamento. Explicó que cuando él llegó al Departamento

Bustos ya estaba, llevaba trabajando dos años en dicho lugar. Bustos conocía del tema porque venía de la Subdivisión de Adquisiciones. Explicó que no obstante que los Jefes del Departamento son personas legas, sucede que con el tiempo van entendiendo y comprendiendo la parte constructiva, en especial si se trata del jefe de una sección que se dedica a la construcción. El ITO es la herramienta principal para enterarse del estado de las obras, pero también existen otras herramientas, como por ejemplo preguntar a otro profesional técnico que compare lo informado, designar una comisión que visite las obras; en cuanto al conocimiento de Bustos Morgado respecto de los avances de las obras “no sé si tenía o no tenía injerencia”; en cuanto a las obras de CGM, ésta ya estaba trabajando cuando él llegó al Departamento; a él le tocó intervenir en relación a la ampliación de algunas obras; las obras eran Villa Ortega, Coyhaique Alto, isla Huar y Lago Castor; viajó con la Comisión a la recepción de Villa Ortega, después visitaron Lago Castor, Isla Huar y Coyhaique Alto; explicó que la recepción es *un acto administrativo* en el cual la comisión revisa lo que el ITO ha informado respecto de la terminación de las obras; para ser *recepcionada* una obra esta debe estar ejecutada en todas sus partidas; pueden faltar algunas cosas, lo cual si bien no afecta la utilización de un cuartel, deben ser solucionadas dentro de un plazo; son observaciones relacionadas con reparaciones pero no con la ejecución de las partidas; en la Comisión viajaron Nadal, Andrea Campusano, un arquitecto constructor, un ingeniero eléctrico, Héctor Salamanca, el Comandante Bustos, el ITO Francisco Pizarro, además de él; la Comisión viajó entre abril o mayo; le correspondió viajar porque Bustos quería que entendieran la dinámica de la construcción de cuarteles y para que conocieran la realidad en que viven los carabineros en las zonas extremas, más que nada sensibilizarlos; cuando viajó con la Comisión llevaba tres meses trabajando en el Departamento de Cuarteles; su función fue más que nada observar y conocer lo que se hace en el acto administrativo de recepción; fueron a las tres obras, salvo Isla Huar, además una obra ubicada más hacia el norte de Coyhaique; el primer cuartel que visitaron fue Villa Ortega; allí estuvo toda la Comisión; no era habitual que Bustos fuera o formara parte de la Comisión, no recordando que este hubiere ido en otra Comisión durante los años siguientes; el estado en que se encontraban las obras no permitía que fueren recepcionadas; estuvo “un minuto” en la obra en construcción y después se fue al retén existente; tomó un par de fotografías de la obra; sacó las fotografías pensando que le podían pedir algún informe; las fotos las guardó, nadie se las pidió, no se volvió a tocar el tema de Villa Ortega ni Lago Castor; en el sumario administrativo dijo que tenía estas fotografías, las cuales se

las pidieron para acompañarlas a la investigación. Se le exhibe el documento N° 1.228, de la prueba del ministerio público, lo reconoce, señala que se trata de un Oficio de fecha 18 de junio de 2014, confeccionado por él a fin de dar cuenta que por propia iniciativa había tomado fotos de la parte trasera del cuartel para tenerlas como recuerdo del lugar. Se le exhiben tres (3) fotos: 1era, corresponde a la parte posterior de la obra, *es la que tomé y entregué en la investigación* (muros externos con revestimiento hasta la mitad); Bustos andaba recorriendo las obras con la Comisión; no sabe si efectivamente Bustos vio la parte trasera del cuartel, pero como tenía que revisar las caballerizas y las partidas correspondientes a éstas tuvo que haberla visto; posteriormente vio molesto a Bustos, pero fue sólo en ese momento; después fueron a revisar las obras de los otros cuarteles; el concepto *observación menor* es algo subjetivo que va a depender de la Comisión pero que no dificulta ocupar el retén, v.gr., una ventana que no cierra por falta de picaporte, una puerta que esté englobada a causa de la humedad, porcelanato trizado, etc. En ese tiempo no sabía qué significaba la frase *observaciones menores*, ni tampoco sabía bien qué debía hacer la Comisión, cuál era su rol; 2da, interior de una habitación, señala que no reconoce a las personas que aparecen en la foto; 3era, también la reconoce, señala que la tomó él, lo hizo con el teléfono que tenía en ese entonces. Señaló que Bustos también fue a Coyhaique Alto y Lago Castor, sólo se separaron cuando fueron a otra obra que estaba fuera de la Comisión, no formaba parte del acto que debía realizar la Comisión; no sabe si Bustos fue posteriormente a visitar la obra pero sí que tenía facultad para hacerlo; al ITO no lo removiό; posteriormente a la visita no recuerda que se hubieran hecho un addendum, sí por Lago Castor y Coyhaique Alto; dijo no saber si luego de la visita de la Comisión hubo más estados de pago, sólo se enteró que hubo ocho estados de pago a propósito del sumario; no es común que un jefe de Departamento vaya a visitar las obras; participa a las reuniones, por ejemplo con el MOP; correspondía rechazar la obra de Villa Ortega por el estado en que estas se encontraban; las multas se cobran una vez que se informa por la Comisión el resultado; también se cobran multas; el acta de Villa Ortega *Generalmente* debe firmarse en el lugar.

En cuanto a la empresa Grossman, explicó que le correspondió hacer la Resolución de adjudicación del trato directo de los proyectos de Isla Huar y Coyhaique Alto, también intervino en la Resolución de terminación anticipada de unos de esos dos proyectos; un atraso considerable de las obras da lugar a la terminación anticipada de las obras; también, como ocurrió en este caso, por

numerosas demandas laborales. Se puso término anticipado al contrato de CGM por retraso en la ejecución de las obras; siempre se requiere de un informe técnico del ITO o de la Comisión, quienes dan su apreciación de si la obra puede o no terminarse a tiempo; no sabe si el ITO Pizarro fue quien pidió el trato directo; el trato directo con Grossman se adjudicó previa invitación a participar en una obra, es un proceso bastante personal, se ofrece a una empresa hacerse cargo de una obra; se piden los mismos antecedentes que en una licitación, por ejemplo, documentos legales, financieros y técnicos para saber si tiene o no experiencia; se forma una comisión de evaluación, semejante a la de licitación pública, la cual evalúa si la empresa está o no en condiciones de ejecutar la obra; a él le correspondió revisar los antecedentes legales; concluido el análisis jurídico de la empresa los antecedentes pasan a evaluación de riesgo financiero, ambos informes van a un arquitecto quien revisa si la empresa cumple o no técnicamente las condiciones para realizar la obra; se emite un informe final que es firmado por ellos, el cual es posteriormente evaluado conforme a parámetros ya definidos. Se **le exhibe el documento N° 721, de la prueba del ministerio público** (antes incorporado por la defensa del acusado Rojas), lo reconoce, es el Informe de Evaluación de ofertas, firmado por él. Indicó que se invitó a cuatro (4) empresas pero sólo ofertaron FEALFRA y Grossman, y que ambas cumplían jurídicamente con las exigencias requeridas, por lo cual se enviaron los antecedentes para un análisis financiero y técnico. Refirió que se propuso adjudicar las obras a la empresa Grossman. En el documento en comento firman, además de él, el Comandante Bustos Morgado y tres profesionales más. Señaló que no era raro que Bustos participara en estas comisiones técnicas, precisando que su participación era *más bien para darle una solemnidad al acto* en el sentido que el proceso había sido llevado de manera correcta. Explicó que Bustos no podía dar instrucciones en la parte legal, sólo podía hacerlo en el área administrativa. Indicó que en su caso nunca le dio instrucciones en orden a que aprobara o no a una empresa. Consultado por el tratamiento de eventuales conflictos de interés señaló que los oponentes deben presentar una declaración jurada en la que se diga que no tienen conflictos de intereses, y que en el caso que el conflicto dijera relación con un funcionario de la institución éste debe apartarse del proceso. Señaló no saber cómo había sido terminada la obra de Villa Ortega, pero sí supo, por el fiscal de la Contraloría, que los trabajos habían concluido por medio de un grupo de maestros de la institución que fueron llevados a la zona para terminar el retén. Explicó que antes del trato directo la empresa Grossman no había participado anteriormente en otros proyectos ya que no estaba inscrita en el Registro. Indicó

que aunque la empresa Grossman había participado en el proyecto Río Tranquilo, no se lo había adjudicado, agregando que *supe que el Comandante Bustos estaba bastante molesto por no habérselo adjudicado*. Consultado por César Rojas, señaló que no lo conocía entonces ni tampoco ahora.

Explicó que el proceso de Registro en Carabineros requiere que las empresas cuenten con un conjunto de documentos, laborales, financieros, técnicos, experiencia, sin perjuicio de poder exigírseles algunos otros ya que la ley habla de “a lo menos”. A fin de estandarizar los mayores antecedentes que pudieran eventualmente solicitarse se creó un formulario en el cual se pedía “el máximo” y no *el mínimo* de antecedentes que señala la ley.

Señaló que formalmente la adjudicación la realiza la sección, el profesional técnico, plazo y monto, y que la DILOCAR válida lo que se le está informando, no hace reparos. Bustos llevaba las carpetas al DILOCAR para que firmara la resolución de adjudicación. Entre Bustos y la DILOCAR había una relación bastante buena. Bustos era una persona que se alejaba del perfil clásico de un uniformado, tenía vocabulario y buen trato, era receptivo, se podía recurrir a él para hacerle preguntas.

En cuanto al proceso de inscripción indicó que era lento porque la inscripción en el registro es “lo menos importante” dentro de las tareas del Departamento. El proceso en cuestión consta de varias evaluaciones, se analiza desde distintos aspectos, financieros, jurídicos y técnicos, y dentro de cada uno existen varias etapas o pasos. El Director de Logística confía en lo que informan los asesores. En el caso de Grossman él no participó pero recuerda que su inscripción en el registro fue un proceso rápido, lo que no es habitual, más aun si existen empresas inscritas con las cuales ya se ha trabajado anteriormente. Respondió que no es normal que se invite a una empresa que no esté inscrita ya que el trato directo se debe a una emergencia, es una anomalía esta forma de contratación y que lo normal es que exista un proceso de licitación.

En cuanto al proyecto Lago Cástor dijo no saber porque la empresa Grossman no se lo había adjudicado.

Declaró que Bustos y Flores son (eran) quienes envían la carta de invitación a las empresas a participar, ellos son quienes deciden (decidían) a cuál empresa invitar, se trata de “una decisión de mando”.

Respecto del estado en que se encontraban los cuarteles en el sur se enteró de una manera confusa. Explicó que primero llegó información verbal, Bustos fue trasladado, llegó otro jefe de Departamento y otro jefe de sección. El nuevo jefe de Departamento fue el Coronel Osses, este asumió el cargo, trabajaba en el Departamento pero en otra sección. La empresa Grossman pidió ampliación de plazo y de dinero para así cumplir con el itemizado, pero sucedió que no se correspondía con la realidad, por lo que a todo se le dijo que no. La empresa no pudo cumplir y por tanto se le puso término al contrato. El Coronel Osses tomó conocimiento formal de lo que estaba sucediendo en el sur a raíz de que ordenó una Comisión que fuese a verificar si era real o no lo que se estaba diciendo respecto de la situación de incumplimiento. En cuanto al término anticipado del contrato con Grossman señaló que no tenía claro si eso fue el resultado de un informe técnico del ITO o de lo que informó la Comisión.

Definió a Bustos Morgado como una persona “muy gerente”, le interesaba que el trabajo se hiciera; no era fácil engañar a Bustos, él sabía, no se podía ir donde el con cuentos, no se le podía “cuentear”.

Interrogado por el querellante, respondió que el personal que trabajaba en la sección de proyectos y ejecución era el mismo que trabajaba en la sección de reparación y mantenimiento, pero esta última estaba a cargo de una Teniente, en tanto que la primera estaba a cargo de Bustos; éste tenía, como todo jefe, un deber de control y conforme a ello tomar decisiones, sin inmiscuirse en la parte técnica, a fin de “evitar un eventual perjuicio al Fisco”, por ejemplo dar cuenta, cambiar al ITO, pedirle informe, sancionarlo administrativamente. Señaló que la empresa FEALFRA era una empresa que participaba habitualmente en las licitaciones en la región metropolitana y hasta la región de Coyhaique, pero que en la zona norte casi no tenían proyecto. Por el sumario supo que FEALFRA tenía antes otro nombre y que tenía alguna relación con Bustos. Los informes financiero, contable-financiero y técnico a que hizo mención deben ser siempre anteriores a la Resolución que autoriza el registro de la empresa.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos Morgado respondió: el ambiente de trabajo era grato, no había dificultades de trato entre el personal ni con Bustos, no era autoritario, no imponía la jefatura; en el Departamento trabajaban más civiles que militares; Bustos no tenía relación con los maestros, eran subalternos pero no subordinados, estaban a cargo de un suboficial y no de Bustos; *Bustos iba con la carpeta donde el Director de Logística, General Rojas Langer, quien le preguntaba qué le traía y él le respondía que se trataba de una adjudicación o de un contrato, luego de lo cual Rojas firmaba, confiaba en Bustos.* Refirió que las “aclaratorias” se piden cuando la empresa cumple con el antecedente o requisito que exigen las bases pero es necesario que aclare algo, por ejemplo la copia de un documento que resulta ilegible; explicó que no constituye aclaratoria pedir que se completen algunos *ítemizados* que no fueron incluidos en la propuesta del oferente, en cuyo caso lo que corresponde es rechazar la propuesta y declarar desierta la licitación. Las otras obras que visitaron junto a Villa Ortega estaban en las mismas condiciones que ésta, pero menos avanzadas que esta última. El sumario de Carabineros lo terminó la Contraloría General de la República, la vista fiscal la hizo ésta y no Carabineros. Dijo no haber visto a Bustos gestionando la inscripción de la empresa Grossman en el Registro de Carabineros. Señaló que no podría decir si Bustos participaba o no en el informe final en el cual se sugiere la adjudicación a una determinada empresa, ello porque no existía una instancia en la cual se reunieran los tres asesores informantes (jurídico, contable-financiero y técnico) con Bustos Morgado, no pudiendo tampoco decir si ese informe final lo realizaba el asesor técnico a solas o lo hacía conjuntamente con Bustos;

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro respondió: no se puede sancionar administrativamente por no atenerse al conducto regular; lo normal es recurrir al jefe de la sección, luego al jefe de Departamento y finalmente al Director de Logística; las boletas de garantía las custodia(ba) la sección L8; supo, y quedó establecido en el sumario, que la boleta fue devuelta por el subteniente Luis Parra; supo que Parra la devolvió porque la empresa le pidió la boleta para poder renovarla, la cual posteriormente no fue devuelta;

Interrogado por la defensa del acusado Rojas respondió: por la ubicación su oficina y la de Bustos estaban muy cerca, casi frente a frente, podía ver si él estaba en su oficina; Bustos trabajaba con la puerta abierta y sólo la veía cerrada

cuando Bustos no estaba. Reiteró no conocer a César Rojas ni a Carlos Grossman. La boleta de garantía de seriedad de la oferta se devuelve cuando se adjudica el proyecto y, además, se entrega la boleta de garantía de fiel cumplimiento. La elección de las empresas a quienes se ofrece trato directo lo decide él. La única diferencia entre licitación pública y trato directo está en que en la segunda el número de oferentes está limitado al número de empresas a quienes se invita a participar en la licitación, siendo ambas exactamente iguales en lo demás. Él sólo participó en la licitación de Isla Huar y Coyhaique Alto, estando ya inscrita la empresa Grossman en el Registro, sin haber él intervenido en el proceso de Registro de la empresa. La intervención de Bustos en la adjudicación de licitaciones privadas, trato directo, correspondía a una suerte de validación formal, por lo que a veces aparecía firmando el acta respectiva. **Se le exhibe el documento N° 1, prueba documental del ministerio público** (sumario administrativo): no lo reconoce, pero señala que lo que se le exhibió fueron las invitaciones formales que se hacen a las empresas para participar en una licitación. Afirmó que la licitación para el término de las obras estuvo bien llevada jurídicamente, y que en ese momento la licitación privada fue la mejor alternativa para ese objetivo. No siempre se hace visita a terreno, sin perjuicio que no es un tema jurídico sino administrativo, esto dependiendo de lo que haya que reparar o completar, por ejemplo cambiar un piso flotante, en cuyo caso no resulta necesaria la visita, en especial considerando los costos asociados al traslado. **Se le exhibe el documento N° 1, prueba documental de la parte querellante y N° 66 del ministerio público** (sumario administrativo DILOCAR): Informe N° 1, páginas 6 (4) a 21; no lo reconoció, dijo no saber lo que contiene. Señala que en el Departamento se comentó que en las obras que se adjudicó Grossman faltaban partidas por ejecutar y que por tanto tuvo que asumirlas para así poder ejecutar las obras de terminación que se había adjudicado.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respondió: el año 2013, cuando llegó al Departamento de Cuarteles, era Félix Flores era el jefe de L1, en tanto que Rojas Langer era el Director Nacional de Logística, a quien no asesoró. **Se le exhibe el documento N° 1056, prueba del ministerio público**: contestó que no lo reconoce. Señaló que no asesoraba al Departamento de Cuarteles, él formaba parte de los abogados que trabajaban en ese Departamento. Contestó haber asesorado al Óscar Águila. Al efecto se **le exhibe para su reconocimiento el documento N° 877, prueba del ministerio público** (Oficio N°160, de 14 de febrero de 2014, suscrito por Óscar Águila Galdames, dirigido a DILOCAR):

responde que no lo reconoce. A continuación se **le exhibe para su reconocimiento el documento N° 839, prueba del ministerio público** (informe jurídico N° 22, de fecha 18 de febrero de 2014, proyectos Coyhaique Alto, Lago Cástor e Isla Huar, del Departamento de Cuarteles de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile): responde que lo reconoce, en el sugiere enviar los antecedentes al Departamento de Justicia de la Institución y también al ministerio público por eventuales delitos de fraude al Fisco y/o cohecho. El citado informe lo firmó él y el abogado Nicolás López. No recuerda quién encargó la elaboración de dicho informe. Se fundó en lo que observó la Comisión que viajó a verificar el estado de las obras, a cargo de una oficial de Carabineros que reemplazó a Bustos Morgado. A continuación se **le exhiben para su reconocimiento los documentos N°1 y 6, de la prueba del ministerio público** (informes N° 125 y 126, anteriormente incorporados): respondió que no los reconocía.

El tribunal solicitó aclarar respecto de los contratos a suma alzada y los contratos por trato directo, respondiendo el testigo que “todos los contratos que celebra Carabineros son a suma alzada”

El ministerio público solicitó un nuevo interrogatorio (artículo 329 del Código procesal Penal), en el que reiteró preguntas ya antes formuladas por los intervinientes, además de interrogarlo puntualmente respecto de algunos documentos que se piden para la evaluación jurídica de la empresas oponentes en una licitación, certificado de vigencia de la sociedad, certificados de antecedentes penales de todos los socios, certificado de capital propio.

La defensa de los acusados Bustos solicitó un nuevo interrogatorio (artículo 329 del Código procesal Penal), en el cual reiteró preguntas cuyas respuestas ya habían sido formuladas.

La defensa del acusado Pizarro solicitó un nuevo interrogatorio (artículo 329 del Código procesal Penal) mediante el cual se le pidieron mayores precisiones respecto del concepto “suma alzada”.

La defensa del acusado Gutiérrez solicitó un nuevo interrogatorio (artículo 329 del Código Procesal Penal), en el cual reiteró preguntas cuyas respuestas ya habían sido formuladas y entregadas, respectivamente. Consultado

acerca de su participación o intervención cuando existían demandas laborales, respondió que sólo recababan los antecedentes que les eran solicitados, ya fuese por el área de defensa judicial de la Institución o por el Consejo de Defensa del Estado.

La defensa del acusado Rojas solicitó un nuevo interrogatorio (artículo 329 del Código procesal Penal), mediante el cual se le preguntó respecto de la forma o procedimiento que se sigue cuando se le pone término anticipado a un contrato. Se le preguntó además respecto de los motivos del addendum. Explicó que las complicaciones climáticas que puedan surgir durante la ejecución de la obra no dan lugar a addendum, agregando que así lo ha dictaminado la Contraloría General de la República, y que cuando existe un caso fortuito éste debe ser debidamente acreditado.

PRUEBA DOCUMENTAL

18) Documento N° 429: Resolución Exenta N° 860, de 30 de octubre de 2013, firmada por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, pone término al contrato de construcción reposición Retén Lago Cástor, por incumplimiento del contratista, Constructora CGM Ltda.: *teniendo presente lo dispuesto en el artículo 10.9 de las Bases de Licitación, lo que señala el Oficio N° 1.063, de 25 de octubre de 2013, lo informado por el ITO del Departamento de Cuarteles L1, Francisco Pizarro Dasso.*

19) Documento N° 198: Resolución Exenta N° 851, de 30 de octubre de 2013, firmada por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, pone término al contrato de construcción reposición Retén Isla Huar, por incumplimiento del contratista, Constructora CGM Ltda.: *teniendo presente lo dispuesto en el artículo 10.9 de las Bases de Licitación, lo que señala el Oficio N° 1.063, de 25 de octubre de 2013, lo informado por el ITO del Departamento de Cuarteles L1, Francisco Pizarro Dasso.*

20) Documento N° 169: Resolución Exenta N° 859, de 30 de octubre de 2013, firmada por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, pone término al contrato de construcción reposición Tenencia Coyhaique Alto, por incumplimiento del contratista, Constructora CGM Ltda.: *teniendo presente lo dispuesto en el*

artículo 10.9 de las Bases de Licitación, lo que señala el Oficio N° 1.063, de 25 de octubre de 2013, lo informado por el ITO del Departamento de Cuarteles L1, Francisco Pizarro Dasso.

21) Documento N° 1.057: Resolución Exenta N° 940, de 15 de noviembre de 2013, firmada por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, que exime del trámite de llamado a propuesta pública y/o privada y determina en consecuencia un trato directo para el proyecto de Terminación de la Tenencia Coyhaique Alto.

22) Documento N° 1.058: Resolución Exenta N° 941, de 15 de noviembre de 2013, firmada por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, que exime del trámite de llamado a propuesta pública y/o privada y determina en consecuencia un trato directo para el proyecto de Terminación del Retén Isla Huar

Documento N° 1.059: a) Resolución Exenta N° 1027, de 10 de diciembre de 2013, aprueba contrato de obra de 27 de noviembre de 2013, proyecto de Terminación de la Tenencia Coyhaique Alto, suscrito entre Fisco-Carabineros de Chile, por un lado, y Constructora Grossman S.A., por otro, representados por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, y por Carlos Grossman Badrián, respectivamente; y, b) Contrato de Obra Proyecto de Terminación de la Tenencia Coyhaique Alto, de fecha 27 de noviembre de 2013, entre Fisco-Carabineros de Chile y Constructora Grossman S.A., representados por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, el primero, y por Carlos Grossman Badrián, el segundo.

Documento N°1.069 (Informe Técnico N° 3, de 8 de enero de 2014, “Observaciones al Retén de Carabineros de Villa Ortega”, emitido por Francisco Pizarro Dasso, ingeniero constructor, Oficina de Fiscalización de Proyectos del Departamento de Cuarteles L1).

5) (51) Testigo LAUTARO SILVA ESTAY (arquitecto).

A las preguntas del ministerio público respondió: que trabaja en forma independiente y anteriormente en Carabineros, primero desde el año 1998 hasta el año 2008, y posteriormente desde el año 2012 hasta el año 2014; le

correspondió visitar Villa Ortega; trabajaba en el área de Control y Gestión de Proyectos; cuando llegó a trabajar a ese lugar esa área llevaba un año y medio funcionando; la oficina de Control y Gestión a un ente coordinador entre los distintos estamentos de carabineros a fin de que los cuarteles estuvieran operativos; dependía de la Dirección de Logística; le correspondía revisar de lo que hacía el Departamento de Cuarteles; fue enviado a la Comisión de Villa Ortega, su jefe era Óscar Águila; fue el 12 de diciembre de 2013; viajó con el Coronel Águila; el objetivo de la visita fue realizar una inspección técnica, verificar que el cuartel estuviera 100% terminado, que no tuviere defectos, que no faltaren partidas por ejecutar, que no existieren defectos; una vez que se regresaba a Santiago se emitía un informe y se acompañaban fotografías, luego se enviaba al General Director de Logística, en ese tiempo era Jorge Rojas Langer; los documentos en los cuales se basaron para la inspección eran los mismos que habían sido subidos en la publicación del llamado a licitación en Mercado Libre, además de los antecedentes que tuviere el Departamento de Cuarteles. Si habían observaciones tenía que hacerse referencia a la documentación, basarse en ésta y enviarse al Departamento de Cuarteles para su respuesta, específicamente debía informar el ITO a cargo de la obra, en este caso era Francisco Pizarro. Hubo dos tipos de observaciones, menores y otras de mayor envergadura; se comparaba el trabajo con los documentos que llevaba para la fiscalización. Las observaciones eran en el Retén y casa anexa, por ejemplo, los calefones estaban en el exterior dentro de una caseta metálica, pero no estaba hecha la instalación; los cilindros de gas estaban vacíos; faltaban roperillos; el desarrollo del mueble no era la que correspondía; en la casa anexa la conexión de gas no era la adecuada. **Se le exhibe la prueba documental N° 1.069**, reconoce su firma y sus fotografías, pero aclara que *no es el documento original ya que a continuación de mis observaciones venían respuestas a éstas*. Consultado por la observación al grupo electrógeno, señaló que este no se encontraba instalado, precisando que ese grupo estaba en el Retén antiguo pero no había sido traslado, lo cual debía hacer una empresa y formaba parte del trabajo que debía realizar la contratista adjudicataria de la obra. **Se le exhibe anexo fotográfico**, reconoció las fotos, señaló que correspondían a las que había tomado, **8, 9 y 10**, correspondían a los roperillos a que antes hizo referencia; en cuanto al empalme de electricidad explica que en las fotos 1 y 2 aparecen dos empalmes, uno de la casa anexa y otro del Retén. En cuanto al primero, estaba funcionando con una extensión, ese trabajo formaba parte del *itemizado* en relación a la tramitación que debía efectuar para que se hiciera el empalme. **Fotos 3 y 4**, se ven los calefones pero no

estaban las conexiones eléctricas, precisando que esto no es una observación ya que para ser tal debe tratarse de una partida ejecutada pero no terminada, y en este caso la partida no estaba ejecutada; **fotos 5 y 6**, estanque acumuladores de agua, cuando se trató de probar no se pudo porque el estanque no tenía agua, y sin ésta no se puede probar, además no funcionaba, el enchufe no estaba. **Foto 7**, corresponde a la sala de armas, explicó que la situación era extraña ya que el personal del retén antiguo señaló al General Águila que eso no lo había instalado la empresa sino personal de logística con materiales que se compraron ahí. **Fotos 11 y 12**, zona de calabozos; refiere que existía un desnivel en el tránsito hacia el sector de atención de público, precisando que esta observación obedeció a la peligrosidad que revestía el desnivel, sin que estuviere definido ese desnivel en la respectiva partida. **Foto 13**, lavamanos, sifón con tubo pvc en circunstancias que el tubo debía ser de acero. **Foto 15 y 16**, piso *porcelanato*, palmetas sin fragüe, el cual es importante porque protege de la humedad. Reiteró que el empalme corresponde efectuarlo físicamente la empresa de electricidad, pero los pagos debía hacerlos la empresa constructora. Supo que la empresa tuvo dificultad técnica con el empalme trifásico pero no con el monofásico; en cuanto al calefont le respondieron que el ITO había observado que la instalación debía hacerse afuera, lo cual se había hecho; en cuanto a la sala de armas le dijeron que el personal que viajó desde Santiago lo retiró, lo desarmó para aplicar una pintura en los muros que no había sido aplicada, así se lo explicó el ITO Pizarro; en cuanto a los roperillos se le dijo que se habían ampliado en cantidad, pero sin que el ITO hubiere presentado el caso diciendo que faltaba plata para construir la ampliación, y que por eso se había disminuido el número, requiriéndose una resolución administrativa que lo sautorice o rechace; en cuanto al desnivel el ITO explicó que se había hecho de esa forma para evitar que el agua inundare el sector; en cuanto al sifón refirió el ITO que cuando fue el personal vieron que estaba quebrado, destruido y que por eso ellos mismos habían decidido cambiarlo por uno de pvc. En cuanto al pavimento de acceso (falta de fragüe) se le dijo que cuando se inspeccionó inicialmente esa parte estaba cubierta de nieve y que por eso no se advirtió el defecto, sin embargo aclaró que dicha recepción no se hizo físicamente sino que desde Santiago. En cuanto a las observaciones administrativas señaló el testigo que hubo dos recepciones pero que no se recordaba las fechas de éstas, pero que había sido mucho antes que fuera él con la Comisión, habría sido a mediados del año 2013.

Desde su experiencia era imposible *recepcionar* la obra sin observaciones, por ejemplo los roperillos, los cilindros de gas sin contenido; respondió que no era ni es habitual que el personal de mantención y reparación concorra a efectuar este tipo de reparaciones; señaló que la empresa cesa su responsabilidad cuando la recepción se hace sin observaciones, de ahí en adelante se hace cargo Carabineros, independientemente de la inauguración toda vez que esta es meramente simbólica. Indicó que cuando viajó en la Comisión el retén no estaba en condiciones de funcionar. La devolución de la boleta de garantía debe efectuarse cuando han transcurrido 270 días, más otros 30, contados desde la recepción sin observaciones, precisando que ese plazo estaba señalado en las bases de la licitación. Respondió que supo que la boleta de garantía había sido devuelta. Consultado respecto de la frase contenida en su informe, en orden a que la calidad de construcción *era de buena calidad y que el cuartel estaba en condiciones de ser usado*, respondió que eso le llamó la atención cuando vio el documento años después, llamándole la atención que estuviera esa frase atendidas las observaciones que él había efectuado, agregando que en este documento no estaba su firma.

Interrogado por el querellante acerca del documento precedente reiteró su respuesta en cuanto a su firma. Se **le exhibe el documento N° 1.068**, antes aludido, refiere que corresponde a su informe técnico de la visita a Villa Ortega, pero que en este no aparece su firma, en circunstancias que el que entregó llevaba su firma. Reiteró que el cuartel no podía ser utilizado, la casa anexa sí podía ser habitada aunque le faltaban algunas cosas, por ejemplo el *sello verde*. Señaló que en el documento recién exhibido las respuestas que aparecen consignadas eran más cortas que las que señalaba su informe. Señaló que no había declarado en fiscalía y que tampoco los abogados defensores le habían pedido que lo hiciera. Explicó que el sello verde es un requisito para la recepción. Dijo no saber si el cuartel había sido inaugurado.

Interrogado por el abogado defensor de los acusados Bustos refirió que no había declarado en el sumario administrativo; su informe lo dirigió a la Dirección Nacional de Logística, “no correspondía” dirimirlo a L1; en cuanto a otros cuarteles que le correspondió revisar hubo algunos que no tuvieron observaciones y que en muchos, muchos cuarteles estaban con observaciones grandes y con partidas sin ejecutar”; lo informaba a su jefe y éste al Director Nacional de Logística; en

algunos casos hubo respuesta del Director, ignorando el testigo cuáles habrían sido los cursos de acción que se habrían seguido. El Director podía ordenar a L1 que se hiciera cargo de las observaciones; dijo no saber si fue iniciativa del jefe de zona efectuar las reparaciones o de otro General.

Interrogado por el abogado defensor del acusado Pizarro refirió que el documento que se le exhibió en segundo lugar no estaba la firma de Pizarro, su fecha es de 3 de enero de 2014; el informe que le mostró la fiscal no sabe y no está seguro si aparece la firma de Pizarro; señaló que en esa época su jefe directo era Óscar Águila.

Interrogado por el abogado defensor del acusado Gutiérrez, declaró que cuando él viajó a Villa Ortega el retén y la casa anexa tenían electricidad, pero el primero se surtía con la electricidad del generador del retén antiguo, en tanto que el de la casa anexa contaba con el empalme de electricidad monofásico. **Se le exhiben fotografías contenidas dentro del N° 11, otros medios de prueba de la fiscalía:** foto 836, refiere que todos los retenes son iguales y por tanto no puede afirmar si lo exhibido corresponde o no a Villa Ortega; foto 0434, declara que es la casa anexa de Villa Ortega; otras fotos relacionadas con las observaciones que plasmó en su informe, a saber, empalme eléctrico, tablero de electricidad, calefones, entre otras obras, confirmando a la luz de ellas sus respuestas anteriores respecto de las observaciones que efectuó en su oportunidad.

Interrogado por el abogado defensor del acusado Rojas, declaró que las respuestas a las observaciones debieran ser del ITO, y por tanto llevar su firma. Preciso que él sólo visitó el proyecto Villa Ortega. Participó en la investigación interna que realizó la institución. El apuro por inaugurar Villa Ortega dijo relación con “un tema de programación”, era institucional el apuro por inaugurar.

Aclaró al tribunal lo concerniente a los dos documentos que se le exhibieron, señalando que se trataba de uno mismo pero se diferenciaban en que el exhibido era más extenso en las respuestas del ITO en tanto que el exhibido por el querellante contenía respuestas más breves, precisando que en ambos documentos no está su firma, sólo su nombre o pie de firma.

DOCUMENTOS

Documento N° 1.132: NCU 17299821; de mayor German Sáez Vallejos, suboficial de Carabineros a jefe de Retén para: mayor César Bobadilla; Edgardo Fernández, jefe de tenencia; 8 de noviembre de 2013: Hoy se presentó Ignacio Labra Moscoso, manifestó ser de la “empresa constructora Grossman”, de la ciudad de Santiago, solicitando inspeccionar las obras con la finalidad de retomar la construcción del Retén Lago Castor, señalando haber tomado contacto con Francisco Pizarro, L1, por lo que se contactó a este último, quien sobre el particular indicó que se le permitiera ingresar a verificar visualmente el estado de las obras.

Documento N° 1.060: Resolución Exenta N° 1025, de fecha 10 de diciembre de 2013, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, la que “aprueba contrato de obra, de 27 de noviembre de 2013, suscrito entre Fisco-Carabineros de Chile y Constructora Grossman S.A., sobre el Proyecto de Terminación Retén Isla Huar, representados por el General Jorge Rojas Langer y Carlos Grossman Badiar, respectivamente. Da lectura al contrato individualizado.

Documento N° 593: documento electrónico, NCU 17675159, 22 de noviembre de 2013, del Departamento Cuarteles L1, para el Teniente coronel Héctor Nail; asunto, visita obras Retén Villa Ortega.

6°) (29) Testigo ROMINA PARRAGUEZ ROBLES (ingeniero civil).

A las preguntas del ministerio público respondió que trabajó diez (10) en Carabineros, en el Departamento de Cuarteles, en el área de revisión de proyectos. Señaló que concurría a declarar por los hechos de Coyhaique, en el sur, se pagaron los trabajos y no se ejecutaron. Su jefe en ese entonces era el Comandante Christian Bustos. Él estaba a cargo de la sección de proyectos, en las áreas de diseño, revisión e inspección técnica. En ésta última área se desempeñaban los técnicos de obras, los encargados de fiscalizar las obras que se estaban ejecutando. A los ITO los nombraba él y después se formalizaba. La oficina de Bustos se encontraba en el primer piso y la suya en el segundo. **Se le exhibe el documento N° 786** (correo electrónico mendez.renato@gcorreo.com y CesarRojas@vtr.net, asunto, consulta y dato adjunto; solicitud aclaratoria): lo reconoce y señala que lo vio cuando la fiscalía la citó a declarar, es de 5 de julio de 2012, en él se dice que se van a licitar doce (12) cuarteles en la 7ª región, en

diez (10) días más. Responde a la pregunta de la fiscalía, “*pueden corresponder a un grupo de cuarteles*”. Los montos de las obras que se licitan no son públicos sino hasta que se publica en el portal Mercado Público. La fecha de publicación la indicaba Bustos. Los encargados eran Fabián y Juan Francisco. El acto de apertura de sobres se realiza cuando se cumple el plazo para postular, se lleva a efecto en una sala de reuniones con los participantes, es un acto público para las empresas que postulan. Concorre un oficial de Carabineros como ministro de fe, también un asesor jurídico, un asesor técnico y un asesor financiero. Declaró que Bustos a veces participaba en las aperturas de sobre, lo hacía sólo como ministro de fe, y cada documento se iba a las manos de los asesores presentes. Los criterios de evaluación era la oferta, montos y comportamiento, este último se incorporó después que ella llegó a trabajar al Departamento. Los profesionales no estaban de acuerdo con que se diera más importancia a la oferta económica ya que para ellos el criterio técnico era el más relevante, lo cual se le hizo presente a Bustos en varias oportunidades. Cuando él llegó se incorporó el criterio de evaluación “comportamiento”, el cual tampoco fue una solución ya que con ello se perjudicaba a las empresas nuevas ya que no tenían “comportamiento”. Se le adjudicaban normalmente a las mismas empresas. El paso siguiente eran las evaluaciones técnica, financiera y jurídica. Dijo no constarle que Bustos no participara en el proceso de evaluación, pero que en tres ocasiones le escuchó decir “tenemos que resolver esta situación”. La primera de ella fue en relación al Retén Hualañé, en que tanto ella como los demás profesionales que estaban participando en el proceso de evaluación dijeron que debía declararse desierta la licitación porque los oferentes se habían incluido algunas partidas, pero Bustos dijo que no podían perderse las platas del proyecto, indicándoles que debían pedir aclaratorias a las empresas, situación que le representó la Comandante Albornoz, la cual formaba parte del grupo de trabajo. **Se le exhibe el documento N° 827** (informe técnico 750, de 3 de octubre de 2011): lo reconoce, señala que consta su firma, también una constancia de la orden que les dio Bustos, se la consignó en la parte de la evaluación: *la comisión evaluadora opinó que la licitación debía declararse desierta por no cumplir las empresas con las condiciones dispuestas, lo que se le representó verbalmente al Comandante Bustos, quien ordenó pedir aclaratorias a las empresas*. Respondió que a esas alturas las ofertas económicas ya se conocían porque había tenido lugar la apertura de sobres. Bustos podía impartir órdenes a la comisión evaluadora ya que “él era el jefe”. No recuerda a instancias de quién o quién redactó la constancia pero *deben haber sido todos porque todos los miembros de la comisión firmamos el acta*. En cuanto a las otras

oportunidades en que Bustos les dijo cómo tenían que proceder, citó el caso de los cuarteles del sur, Coyhaique, en el cual participó sólo una empresa, CGM. En su propuesta habían partidas ofertadas con distintas cantidades que las indicadas en las bases de la licitación, por ejemplo, la base decía 5 puertas y la oferta ponía 3 puertas, situación que se lo hizo presente a Bustos, pero él les dijo que no se dejara desierta la licitación y que se le pidiera aclaratoria, lo cual se hizo, adjudicándose finalmente las obras la empresa mencionada. La tercera oportunidad fue cuando se licitó Río Tranquilo, se presentaron tres (3) empresas, una quedó fuera en la apertura por el informe legal, fue la empresa Grossman, ante lo cual se acercó el Comandante Bustos a hablar con ella, le manifestó que no podía pasar eso, que había que parar la evaluación porque la empresa había quedado de traer antecedentes y que tenía que adjudicársela porque el Coronel Flores tenía trabajos con ellos, a lo cual le respondió que no, ante lo cual él le dijo que iría a hablar con el abogado, quien a su vez también le respondió en los mismo términos. La evaluación se hizo en los términos mencionados, firmando los tres asesores, declarándose finalmente desierta la licitación de Río Tranquilo. A fin de refrescar la memoria de la testigo se **le exhibe su declaración de 28 de agosto de 2017**, la cual reconoce, y luego de leída en silencio, respondió que *la licitación de Río Tranquilo “se hizo en el mes de octubre de 2013”*. En la evaluación técnica participó Fabián Gutiérrez y el abogado Nicolás López. Señaló que era habitual que Bustos les preguntara cómo iban las evaluaciones que ellos estaban realizando. El abogado López se le acercó y le dijo que había dejado fuera a Grossman porque no había llevado todos los antecedentes requeridos y que ella siguiera con su parte de la evaluación. Nuevamente y para los mismos efectos **se le exhibe la declaración anterior**, respondiendo a continuación que lo que le dijo López fue *que el Comandante Bustos lo había tratado de convencer para que cambiara el informe jurídico*. El informe lo enviaron por vía electrónica, con lo cual no podía modificarse lo informado. Supo que el Comandante Bustos fue a hablar con López, estaba molesto y que le había preguntado por qué habían hecho eso, que si acaso lo querían perjudicar. Pizarro la llamó para preguntarle cuáles empresas se habían presentado a Río Tranquilo, el llamado fue fuera de horario, ella le respondió que no le podía entregar esa información, que no correspondía y que no se metiera en más problemas. Al día siguiente le preguntó a Pizarro a qué se debía el llamado, a lo que le respondió que había sido porque el Comandante Bustos se lo había pedido para entregársela a César Rojas, “creo”. **Se repite el ejercicio:** lee para sí su declaración y a continuación respondió: Que le había prometido a César Rojas la licitación de Río Tranquilo porque ese era

compromiso que tenía para que terminar lo cuartos de Coyhaique. En cuanto al caso de la constructora CGM, refirió la testigo que participó como ITO en Coyhaique Alto y que concurrió a la recepción provisoria de Isla Huar. Explicó que fueron a Puerto Montt junto con Francisco Pizarro, Andrea Campusano y el Coronel Flores, fueron a visitar obras de Isla Huar. Señaló que eso habría ocurrido en el mes de septiembre; las obras se encontraban atrasadas de acuerdo con los tiempos que le quedaban para terminar; de éste plazo tomó conocimiento porque así se lo informó Francisco Pizarro; ella y Campusano le comentaron a éste que las obras estaban bastante atrasadas y que se veía difícil que las terminará, respondiéndoles Pizarro que la empresa sí iba a terminar las obras dentro de plazo. En la otra comisión tuvo lugar la recepción provisoria de las obras pero estaban sin terminar, abandonadas, no estaba el encargado de las obras; participaron Campusano, Pizarro, el Comandante Bustos. Correspondía rechazar la recepción. Cuando Bustos vio el estado de las obras mostró decepción y buscó rápidamente para su término el trato directo ya que habían quedado materiales con que terminarlas. **Se le exhiben dos actas signadas ambas con el N° 64, de fecha 10 octubre de 2013, contenidas en los documentos N°1.053 y N° 66** (sumario administrativo, fs. 1.263): reconoció los documentos, señaló que ambos correspondían al acta de 10 de octubre de 2013; señaló que existen diferencias entre ambas actas, a saber, en el punto 2 de la conclusión, ya que hay una parte que se saca del acta, *informando cuatro (4) personas que se encontraban en el lugar que las faenas estaban paralizadas desde fines de septiembre*. Añadió que ambas actas aparecen firmadas, una, sólo por los profesionales de la Comisión, la otra, por los mismos profesionales y además por el Comandante Bustos, precisando que es esta última acta la que no tiene el párrafo ya mencionado. Reconoció su firma en ambas actas. Refirió no saber porque firmaron dos veces el acta. Declaró que el Comandante sí podía decirles que sacaran algo del acta ya que el formaba parte de la comisión y revisaba las actas antes de su firma. Cuando viajó la Comisión la obra estaba 100% pagada, sólo faltaba por pagar el 5% de las retenciones, además de la devolución de la boleta de garantía, respecto de la cual explicó que su devolución procedía que se hiciera 30 días después de la recepción definitiva. Declaró no saber qué había sucedido con la boleta de garantía de Villa Ortega. Respondió que no era habitual que en una obra hubiera partidas no ejecutadas. Explicó que “observación menor” puede ser manchas de pintura, manilla suelta, tope de puerta suelo, gotera pequeña en una llave de paso, precisando que partidas no ejecutadas son, por ejemplo, que el WC no esté físicamente, o no haberse efectuado la pintura exterior. Consultado por el Retén

Lindero señaló que allí hubo observaciones *muy menores* y que había sido recepcionado sin observaciones, aclarando que la empresa tenía que hacerse cargo de ellas durante la marcha blanca. La adjudicataria de ésta obra fue la empresa Torrejón. Una vez rechazada la recepción de Isla Huar se cobró la boleta de garantía, se dio término anticipado al contrato y se procedió a su terminación mediante trato directo, misma situación que ocurrió con las obras de Coyhaique Alto y Lago Castor. Añadió que Bustos les dijo que tenía la empresa Grossman para terminar las obras; esto se los dijo antes de enviar las cartas de invitación a las empresas; en el caso de Lago Castor no se hizo trato directo porque los montos no alcanzaban para terminar las obras. Explicó que para estos tratos directos se designó para su fiscalización al ITO Pizarro. La entrega de las obras se hizo en la oficina de Francisco, en Santiago, pero correspondía hacerlo en Coyhaique; no estuvo presente el representante de la empresa Grossman; dijo no recordar cuando se hizo esta entrega de terreno; añadió que Bustos tenía facultad para cambiar al técnico de obra, podía elegir cualquier profesional técnico; no recuerda cuándo se fue Bustos del Departamento. Posteriormente llegó como jefe suplente el Coronel Osses, lo primero que hizo fue sacar a Pizarro como ITO de las obras contratadas por trato directo. En enero de 2014 Osses la designó a ella, junto a Héctor Salamanca, para visitar las obras. **Se le exhibe el documento N° 1.073** (antes incorporado) – Informe Técnico N° 46 de fecha 24 de enero de 2014, del Departamento de Cuarteles L1 de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile; visita a terreno obras Retén Villa Ortega y Lago Castor”, anexos fotográficos, suscrito por Romina Parraguez Robles –: lo reconoce, señala que corresponde a la visita a terreno de las obras del Retén Villa Ortega y Lago Castor; corresponde a la visita que mencionó y en la cual le correspondió participar; en el acta se dejó constancia que el empalme eléctrico no estaba conectado, que habían deficiencias en la instalación del gas, que no estaba el sello de verde, que las llaves de paso no estaban instaladas. Tales constataciones no se condicen con la recepción que finalmente se hizo. En Lago Castor el avance era de un 40%; hicieron además otro informe respecto de la revisión de Coyhaique Alto; en esta última los trabajadores estaban trabajando no sólo con aquello que se contrató sino que estaban haciéndolo en la casa anexa; le llamó mucho la atención esta situación porque esos trabajos no formaban parte del contrato; además, cuando revisó las obras éstas no coincidían con el itemizado que había hecho Pizarro, por ejemplo, decía “ajuste de puertas”, pero no había puertas; cuando regresó inquirió a Pizarro al respecto y éste le respondió que *Bustos le había dado la orden y que así tenía que hacerse*. Se le exhibe su declaración

anterior, la reconoce, luego de leída para sí responde: Pizarro me señaló que los trabajos extras eran un acuerdo que Bustos tenían con César Rojas. Dijo no saber quién representaba a la empresa Grossman, y tampoco conocer a César Rojas.

En cuanto a la jefatura y funciones que le correspondían a Bustos explicó que como jefe de sección él llevaba el control de todas las obras con que se estaba trabajando. Lo calificó como el mejor jefe durante su permanencia en Carabineros, hacía ameno el ambiente, tenía conocimiento, era inteligente, se manejaba en el tema de ejecución de licitaciones, estaba al tanto cuando los ITO se iban en comisión; siempre preguntaba cómo iban las obras cuando regresaban las Comisiones. Dijo no haber visto a Pizarro darle cuenta a Bustos. Si Bustos tenía dudas o sospechas de las obras podía pedir asesoría a cualquiera de los asesores. Tenía una buena relación él, nunca tuvo un problema. El Coronel Flores se involucra *súper poco*, Bustos le informaba a éste lo que iba pasando. Luis Parra era el brazo derecho de Bustos. Con Pizarro tenía una buena relación, el ambiente era ameno, siempre se podía conversar con él para preguntarle cualquier duda, con Pizarro fueron súper amigos, tuvieron una sociedad, pero por cosas personales dejaron de ser amigos. Declaró en el sumario administrativo y en la fiscalía. Las tres situaciones que antes refirió no fueron las mismas; tuvo un careo con Bustos y ahí no hizo mención a lo anterior, no hizo mención a lo que ahora estaba diciendo, pero posteriormente sí lo hizo en fiscalía. Cuando fue al careo era muy amigo de Pizarro.

Interrogado por el querellante respecto de qué significaba o traducía el criterio de evaluación “comportamiento”, respondió ejemplificando con el cumplimiento de plazos de término de la obra. En ese tiempo eran las mismas empresas las que se adjudicaban las licitaciones, Torrejón, FEALFRA, Garfias. Éstas empresas se adjudicaron obras en la Región Metropolitana, en la 7ª y en la 5ª regiones. Supo que fueron maestros de Cuarteles a terminar la obra de Villa Ortega. Bustos integraba Comisiones para las recepciones, también Félix Flores, siempre iba un oficial en la Comisión de recepción. Bustos participó en la recepción de Isla Huar (al igual que la testigo), también en el Retén Lindero, no recordando en cuáles más.

Interrogada por la defensa de los acusados Bustos respecto al acceso que tenía el personal del Departamento Cuarteles para hablar con los oficiales, como

por ejemplo, el General Walter Sprein, quien además era tío de Pizarro, explicó que sí tenían acceso y que bastaba con tocar la puerta para hablar con ellos. Confirmó que el careo lo tuvo con Bustos. En ese momento él no era su jefe. Después del careo fue citada a declarar a la Contraloría. No recuerda ante quién declaró pero sí que se trataba de un funcionario de la Contraloría. Respondió que *mantuvo* la declaración del careo y no la de investigación, y que lo hizo porque no quería que la siguieran llamando. Después la llamaron a declarar en la fiscalía. El personal que fue a Villa Ortega, los maestros, no estaban bajo la jefatura de Bustos. Señaló que le correspondía redactar bases administrativas especiales. Se le preguntó por el concepto de “cubos realizables”, explicando que decía relación con movimientos de tierra, excavaciones, que no estaban definidas pues quedaban sujetos al estudio de mecánica del suelo. La calidad técnica decía relación con la calidad normativa de los materiales. Bustos decidía que ITO iba a estar en cada obra. Relató que su marido era amigo de Pizarro, éste era padrino de su hijo. La relación se terminó porque Pizarro les mintió.

Interrogado por la defensa de Pizarro respecto de aquello que le dijo Pizarro en orden a que había un acuerdo con César Rojas, explicó que ese acuerdo era entre Bustos y Rojas; cuando Pizarro le contó esto se le veía nervioso, asustado, suponiendo la deponente que *se debía a que veía en riesgo su trabajo, al hecho de que las obras no estaban terminadas*. El Coronel Flores no fue a la obra cuando ella, Andrea y Francisco fueron a visitar la obra.

Interrogado por la defensa de Gutiérrez respecto de lo que le dijo Pizarro en cuanto a que *Bustos tenía decidida la empresa que terminaría los trabajos*, señaló no saber si estaba o no “todo conversado” como había dicho momentos antes. Se le exhibe declaración anterior, luego de lo cual respondió: “*sí, estaba todo conversado*” *acerca del trato directo con Grossman*. Respondió haber visto al acusado Cristián Gutiérrez Martínez en las oficinas de Cuarteles. Lo vio en la apertura de sobres, fue la primera vez que lo vio.

Interrogado por la defensa de Rojas respecto de la sociedad que tuvo con Pizarro indicó que Andrea Campusano también formaba parte de ella, realizaron algunas obras menores, por ejemplo en la municipalidad de Pinto; la sociedad terminó a propósito del problema de los cuarteles; dejaron de ser amigos a principios de 2015; cuando declaró en 2014 aún mantenía amistad con Pizarro; tal

vez pudo haber sido su marido, y no ella, quien le consiguió un trabajo en el sur; recordó que por razones laborales Pizarro estuvo viviendo algún tiempo en la casa de la madre de su marido, que estando ahí surgió un problema de trabajo con un contratista, sin saber exactamente cuál había sido ese problema; Pizarro no le comentó el grado de amistad que tenía con Gutiérrez; nada de lo que le dijo Pizarro respecto de Rojas le consta; deben existir al menos tres empresas para invitar a participar en el trato directo; los itemizados que recibió Grossman no correspondían a la realidad y por tanto lo perjudicaban porque tendría que hacer más de lo contratado.

El tribunal le solicitó aclarar lo concerniente al careo.

El querellante solicitó a la testigo que precisara el concepto y alcance de la expresión suma alzada.

La defensa de Pizarro consultó acerca del origen de la expresión “cubo realizable”, respondiendo la testigo que se trataba de un concepto que estaba incorporado y formaba parte del reglamento, precisando que “no es que alguien lo haya inventado”.

7°) (11) Testigo FABIAN ANTONIO GUTIÉRREZ SALAZAR (arquitecto).

A las preguntas del ministerio público respondió que actualmente trabaja en forma independiente pero con anterioridad trabajó en Carabineros; allí fue asignado al Departamento de Cuarteles, dependiente de la Dirección de Logística, estuvo alrededor de 9 años, desde el 2005 hasta el 2014; estuvo en la oficina de revisión de proyectos, dependiente del área de proyectos; refirió saber el motivo de su concurrencia, a saber, por “irregularidades que sucedieron en el Departamento” en el período en que él estuvo trabajando. Explicó que la estructura del Departamento se componía de dos áreas, una de revisión, a cargo del Comandante Bustos, y sobre él el Coronel Félix Flores; Bustos tenía a cargo un área, la de proyectos; estaba a cargo Bustos, dividida en tres oficinas: diseño, revisión y fiscalización; a los ITO se les designaba previa sugerencia de los profesionales del área, en este caso; Andrea Campusano lo sugería en diversas reuniones o directamente mediante correo; el Coronel comunicaba a la Dirección la sugerencia; la decisión de designación era del jefe de área; lo que él proponía

se firmaba sin objeciones; oficial y formalmente es el Director de Logística quien designa a los ITO, pero no tienen relación con ellos; el Director tiene conocimiento de los proyectos que están ejecutándose, se le comunica a través del mando correspondiente. El proceso de licitación se regía por dos (2) canales legales, el DS 294, y la Ley de Compras, mercado público. Ambos canales se complementaban “al unísono”. La oficina de diseño proyectaba los cuarteles, estándar o especiales, generaba la especificación técnica. De allí pasaba a su oficina a revisión, se revisaba la planimetría, los costos a través de *itemizados*, documentación escrita, después de lo cual se generaba un informe el cual se dirigía a la jefatura para que se solicitaran los fondos para reponer o construir el cuartel en estudio. De ahí salía al Departamento de Planificación, desde donde se solicitaban los dineros a la Dipres (Dirección de Presupuesto), allí se aprobaban los montos, demoraba esto de un año para otro. El visto bueno llegaba a través de la oficina de planificación. La información que recogía su oficina se actualizaba, se generaban los informes correspondientes; él fue designado usuario del portal mercado público a través del cual se subían los antecedentes del proyecto. Cada cuartel requería una licitación, pero a raíz de la estandarización, a propósito del terremoto 2010, fue posible licitar paquetes de proyectos ya que eran todos muy similares y se encontraban en zonas aledañas, ello sin perjuicio de licitaciones independientes. Además con el sistema de paquetes se podía cumplir con la parte presupuestaria. Estas licitaciones *proforma*, al cabo de meses y años, generó inconveniente con la el requisito de “capital comprobado” ya que conforme a la ley era necesario que las empresas presentara un certificado de capital comprobado por cada proyecto a fin de asegurar que “no se quedará cojo”, pero con el nuevo sistema la empresa podía postular a varios proyectos simultáneamente con el mismo “capital comprobado”. Esta situación se podía mejorar por medio de los estados de pago ya que con ellos “podía ir haciendo caja” y de esa forma ir cumpliendo. Las bases administrativas Generales de las licitaciones, fuera éstas públicas, privadas o por trato directo, pedían antecedentes, dentro de los cuales estaba la boleta de garantía y el capital comprobado, conforme con lo que señalaban el D.S. 294 y la citada Ley. Explicó que la licitación por grupo la decidió el Comandante Bustos y el jefe de Departamento, “*nosotros no teníamos voz de mando*”, *sólo sugeríamos*. Así fue como en un principio sugirieron licitar uno o dos proyectos, pero después se fue ampliando por instrucciones de la jefatura. Los cuarteles a licitar los decidía el jefe de área, por oficio o por vía electrónica. Si una licitación se declaraba desierta no se podía saber cuándo se publicaría nuevamente, esto porque pasaban muchas semanas, incluso meses antes de

volver a licitarla, además había que realizar un estudio acerca para saber el motivo por el cual se había declarado desierta. Explicó que los montos a licitar son inicialmente reservados, pero cuando se publica la licitación, “se aprieta *enter*” y se va a mercado público, pasa a conocerse públicamente el monto referencial del proyecto a licitar. En cuanto al proceso de apertura de sobre, explicó que esa es la etapa en que se encuentran físicamente oferentes y el mandante; el acto lo preside un oficial del Departamento, y asisten los asesores jurídico y técnico; el acto en sí se inicia con una presentación a los oferentes y demás personas presentes, se chequea que estén los documentos mínimos solicitados (determinados antecedentes legales, por ejemplo). Luego de ello se pasaba a un análisis a puerta cerrada en cada oficina de las carpetas con los antecedentes de los oferentes. Cuando el jefe de área participaba lo hacía más que nada para velar por el proceso; se presentaba, daba la bienvenida, pero luego era el asesor jurídico quien tomaba el proceso. Se evaluaba la competencia técnica de la empresa (esto es que cumpliera lo que se estaba pudiendo en las bases), el plazo de ejecución y el monto de la obra, criterios a los cuales se sumó “comportamiento”, el que resultó gatillante ya que hasta ese momento las empresas estaban en niveles muy similares, todas llegaban con propuestas muy parecidas, por lo que el comportamiento era lo que terminaba decidiendo la adjudicación. Esto generó que en el transcurso del tiempo llegaran cada vez más oferentes haciendo de esa manera que la evaluación fuese muy frágil ya que el monto y la competencia pasaron a segundo plano. Se representó la situación pero no más que eso ya que “éramos sólo asesores”. La consecuencia de lo anterior fue que se terminó por adjudicar los proyectos a las mismas empresas; quedaban las mismas 5 o 6 empresas, eran las más grandes y las que iban permanentemente ganando proyectos, por lo que sacaban más puntos en el ítem competencia. Entre dichas empresas estaban CGM, Grossman, Ricardo Fernández, Alerco Ltda., en la zona metropolitana, FEALFRA en el sur, Torrejón en la 5ª región. La evaluación consideraba tres cosas: documentos legales, antecedentes financieros (la oficina de presupuesto evaluaba ese aspecto) y el expediente técnico, esto último estaba “a cargo de nosotros”. Se llevaban las carpetas y se hacía una análisis comparativo para determinar que se estaba cumpliendo con todo lo solicitado, v.gr., que el *ítemizado* estuviere completo. Cada oficina hacía este análisis a puerta cerrada. Bustos no participaba directamente en el proceso de análisis, sólo apoyaba con lo que se necesitasen durante el proceso, en ningún momento se presentó, salvo un par de veces en que intervino de manera directa. Una de ellas fue en el proyecto de reposición de la tenencia

Hualañé, en que Bustos hizo algunas modificaciones o quiso requerir algunas cosas de asesoría jurídica. Sucedió que en el acto de apertura, en el cual participó María Constanza Cabello, de asesoría jurídica, y la capitán Patricia Albornoz, quien presidió el acto, ocurrió que todas las empresas que ofertaron no cumplían con lo solicitado en las bases, de suerte que lo que correspondía era declarar desierta la licitación, ante lo cual intervino Bustos solicitándole a ella, y por ende a todos quienes componían la comisión evaluadora, que se pidiera una “aclaratoria” a todos los oferentes a fin de que no se cayera el proyecto y no se perdieran las platas destinadas a ello, petición a la cual se opuso la asesora jurídica, ante lo cual Bustos hizo un requerimiento directo al respecto, situación que quedó registrada en un acta posterior a la apertura de sobres. Al efecto, se **le exhibió el documento N° 827** (la parte correspondiente al informe técnico N° 750, 3 de octubre de 2011), el cual reconoció, señalando que en el documento constaba su firma, precisando que recordaba el informe y la firma de todos los demás que participaron. Dio lectura al documento: *1.2, empresas rechazadas técnicamente, se indican los motivos, en el antepenúltimo se señala que se le representó a Bustos la situación en comento.* Añadió que Bustos le dio una orden verbal a la oficial a cargo, y en cuanto a ellos, por ser civiles no podían recibir órdenes. Explicó que por razones de salud Bustos se encontraba trabajando de manera remota, motivo por el cual la orden la dio verbalmente. Cuando recibieron la solicitud o instrucción en cuestión ya se había hecho la apertura de sobres y por tanto se conocían las ofertas económicas de cada empresa. Hubo molestia en los demás miembros de la Comisión ya que no correspondía lo que estaba pidiendo puesto que las cosas estaban claras. Juan Francisco Socías se molestó, estuvo muy ofuscado, la misma abogado Cabello estaba súper molesta y complicada con el tema. Continuó el testigo diciendo que Bustos se acercaba a ellos para consultar en términos Generales cómo iba la evaluación, en especial cuando quedaba poco plazo para entregar del informe. Relató que en un principio no supo de conflictos de interés, eran poco las empresas, estaban muy identificadas, pero a lo largo de los años, cuando llegaron más oferentes y empresas, se fue enterando que había relaciones entre funcionarios y las empresas, recordando el caso de la empresa FEALFRA, la cual, durante algún tiempo, llegó a la apertura de sobres una persona que a él le llamó la atención por el parecido que tenía con el Comandante Bustos, y que cuando lo vio en un segundo acto de apertura de sobres le preguntó a un colega, pero ya en la tercera apertura le comentaron que esa persona era hermano con el Comandante Bustos, “de ahí el parecido físico” que había notado. Después esa persona desapareció con el tiempo. Volviendo a

la tenencia Hualañé relató que se las obras se las adjudicó FEALFRA. Consultado por el segundo caso a que había hecho mención indicó que fue posterior y que se trató de la reposición de Río Tranquilo. Al efecto, sucedió que estando como asesor jurídico el abogado Nicolás López Reyes (María Constanza ya no estaba), Romina Parraguez, él y otra persona, aconteció que una de las empresas oferentes no cumplía con los requisitos de la evaluación que estaba analizando Romina Parraguez. El Comandante Bustos le preguntó a Romina cómo iba la evaluación, a lo cual ella le respondió que ninguna empresa estaba pasando porque no cumplían con los ítems que se requerían, ante lo cual Bustos les llamó la atención porque una de las empresas estaba cumpliendo con los antecedentes pero no estaba entre los oferentes. Bustos se molestó mucho, les dijo que esto se había conversado con el jefe del Departamento. Recordó el deponente que Romina llegó muy afectada ya que Bustos le había llamado la atención, misma situación que aconteció con Nicolás López. Bustos les dijo que había que parar el proceso y esperar a que llegaran los antecedentes de la empresa en cuestión. Señaló que esta licitación, al parecer, habría tenido lugar en octubre de 2013, en el segundo semestre de ese año. No recordó cuáles empresas participaron en esa oportunidad, pero que la empresa por la que Bustos le consultó a Romina era la empresa Grossman. Refirió el testigo que Bustos primero les preguntó a todos en General, luego llamó a Romina y después a Nicolás, pero todo ello ocurrió en el mismo día. Relató que se reunieron los tres para saber qué había sucedido, qué era lo que Bustos les había dicho a cada uno. Decidieron generar rápidamente un informe y enviarlo vía electrónica con lo que la fecha y hora del envío del documento quedaba registrada de manera tal que ya no se podía modificar, “quedaba amarrado a una cadena”. Lo que en definitiva hicieron fue cerrar el proceso, señalando que todas las empresas quedaban fuera y que eventualmente una se la pudo haber adjudicado pero que el monto ofertado superaba con mucho el de la presupuesta, precisando el deponente que se podía tener una holgura del orden del 10%, pero esta oferta era mucho más que ese porcentaje. Refirió que en esa reunión Nicolás contó que le había sucedido algo muy similar a lo de Romina: que no se declarara desierta la licitación, que había un compromiso con esa empresa porque el Coronel Flores había llegado a un acuerdo con ella para que la obra se terminara y se repusiera la obra. Una vez que se envió el documento vía electrónica Bustos mandó llamar a Nicolás, a Romina y a él, llamándole la atención a cada uno por lo ocurrido. Romina volvió muy afectada después de esa reunión con Bustos, el cual estaba muy molesto; con Nicolás ocurrió otro tanto. No

hubo violencia verbal, pero les recriminó que lo estuvieran incriminando, diciéndoles que lo que él quería era únicamente que se repusiera el cuartel.

En cuanto al término de los procesos de Coyhaique Alto e Isla Huar, Bustos participó en consideración a su cargo institucional. Indicó que no es habitual que se busquen empresas que no estén en el Registro de Contratistas, pero que a veces puede tratarse de una situación que requiere pronta respuesta, por lo cual se llama a empresas del lugar o empresas que cuentan con la tecnología requerida, aclarando que eso era lo menos habitual, y que siempre se les dijo que había que evitar los tratos directos, que si era necesario llamaran dos veces a licitación. Explicó que en estos tratos directos le llamó la atención que en un momento del proceso, el que por lo demás fue muy rápido, cuando hubo que entregar la documentación llegó la empresa Grossman a retirar los documentos, por lo que le avisaron por teléfono para que hiciera entrega, por lo que preparó la carpeta y demás antecedentes, y que cuando llegó a la sala de reuniones había una persona de nombre César Rojas, vestía de civil y había sido funcionario de Carabineros en el Departamento Gestión de Compras. Señaló el testigo que lo recordaba ya que había estado con él en su oficina. Al verlo le preguntó qué necesitaba, a lo cual Rojas le respondió que iba a retirar los antecedentes para la empresa Grossman, lo cual le llamó la atención porque su nombre no estaba entre los antecedentes que había revisado. Señaló que le hizo entrega de los documentos, llegando en ese momento Bustos, siendo éste quien se hizo cargo de la entrega de la carpeta. Refirió el testigo que se retiró del lugar y que posteriormente le llegó el acta de entrega firmada. Indicó que César Rojas había trabajado en la Dirección de Compras Públicas, lugar en el cual también trabajó Bustos, por lo que, antes de llegar Cuarteles él ya conocía a ambos. La relación entre Rojas y Bustos ellos era cordial, de camaradería. Agregó que a ellos los conoció cuando las oficinas estaban en la calle Bustamante, allí los conoció, conversaba con ambos. Añadió que Rojas y Bustos trabajaban en la misma oficina; en uno de los pisos del edificio se habilitaron puestos de trabajo, escritorios abiertos, uno al lado o enfrente del otro. En cuanto a los *itemizados* de las obras en comentario, indicó que originalmente los elaboró la oficina de diseño; ésta emitió y confeccionó los *itemizados*, pero después de que la licitación fue declarada desierta varias veces, se procedió a realizar una evaluación en terreno, correspondiéndole a Francisco Pizarro determinar lo que faltaba para terminar la obra. La información que recabó Pizarro se la entregó a él, y que Bustos le indicó que le diera forma para poder entregarla. Por tanto, aseveró que su participación

fue meramente formal, pues se trataba de darle el orden correspondiente y el formato habitual con que se trabajaba. Añadió que Pizarro estaba colapsado en esos días. Declaró el testigo que nunca conoció ni vio las obras.

En cuanto a la jefatura de Bustos, se le preguntó cómo era su carácter, respondiendo que era un buen jefe, afable, con mucho conocimiento, muy respetuoso del trabajo que ellos hacían; consiguió mejoras de instalación, tenía muy buena memoria, se acordaba de todo, de los detalles, gracias a su gestión el Departamento creció mucho, explicando que el Departamento anteriormente se dedicaba a reparaciones menores, pero con la llegada de Bustos cambió la situación, él *gerenció*.

Consultado respecto del Coronel Félix Flores, relató que rara vez él entró a su oficina, era una persona muy distante, usualmente no se involucran los jefes de Departamento, pero que Flores era especialmente distante.

Señaló que Bustos sabía cuándo los ITO se iban en comisión de servicio; ellos se lo sugerían verbalmente y luego se reSPAldaba electrónicamente. Bustos les solicitó que siempre lo tuvieran con toda la información al día; los ITO podían llegar a comentarle informalmente, en conversación de pasillo, el resultado de la comisión, y que era Andrea Campusano quien traSPAsaba esa información documentalmente y luego se la hacía llegar a Bustos ya que a continuación venían los estados de pago, los cuales debían estar reSPAldados. Había conversaciones informales por la cercanía que existía, por el carácter gerencial de la relación que Bustos tenía con ellos. No era un circuito cerrado. En cuanto al cuartel de Villa Ortega, supo que se terminó con personal del área de reparaciones y mantención; varias personas fueron a solucionar algunos problemas, por ejemplo maestros gasfíter, maestros en fierros. Esto lo supo porque se sabía y se comentaba en el Departamento. La relación con Pizarro era muy cercana al principio pero con el tiempo las bromas subieron de tono, fueron más directas, *con ánimo de mayor confianza unilateral de parte de Bustos hacia Francisco*. Pizarro nunca fue irrespetuoso. Respecto de estas bromas de Bustos hacia Francisco, indicó que le llamó la atención una vez que vio a Francisco muy compungido, estaba solo en su oficina, con la cabeza tomada en el escritorio, al borde de las lágrimas, estaba muy saturado de trabajo y por las bromas que le hacía. Refirió que en un principio

él y los demás se sumaron a las bromas pero que con el tiempo dejaron de hacerlas por el tono que habían alcanzado.

Relató el deponente que los contratistas que no se adjudicaban las obras le comentaron (comentaban) en conversación de pasillo, al momento de encontrarse con ellos y saludarlos, en que él les preguntó por qué no estaban postulando, le respondieron que se debía a estaban participando en obras menores ya que estas otras nunca se las adjudicaban, que era costoso participar y que siempre se las adjudicaban las mismas empresas.

Interrogado por el querellante si había declarado en el ministerio público durante la investigación, respondió no haberlo hecho; le explicó las diferencias que existen entre la licitación pública, privada y trato directo: a la primera concurre cualquiera que cumpla con las bases, a la segunda sólo quienes reúnen requisitos específicos para una determinada obra, y a la tercera una empresa a quien directamente se le invita a participar, debiendo sí cumplir con los requisitos que señale la base;

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos respecto del concepto de *órdenes verbales*, de la forma de relacionarse que tenían con las jefaturas, si Walter Sprain era el jefe de Cuarteles el año 2010, si éste era familiar de Francisco Pizarro. Consultado acerca de las bases administrativas respondió que las habían Generales y especiales, las primeras a cargo de asesoría jurídica y las segundas a cargo suyo y de los demás profesionales del área, pero que en todo caso se trabajaban en conjunto. Bustos no tenía intervención en su confección. Los oferentes no estaban obligados a subir su propuesta al Portal, pero sí lo estaban una vez que la obra era adjudicaba. Las ofertas económicas no se conocían antes de que tuviera lugar la apertura de sobres; **Se le exhibe los documentos N° 47 (Resolución 114), 192 N° (Resolución 1.217) y N°120 (Resolución 1.213), de sus medios de prueba:** los reconoce, señala que corresponden a la evaluación de los proyectos proyecto Lago Cástor, Isla Huar y Coyhaique Alto, reconoce su firma y la de Christian Bustos junto con las letras “VB”, o sea, *visto bueno*; en tales documentos se expresan los criterios de evaluación técnica y porcentajes, siendo en los tres casos los mismos: oferta económica 40%, plazo de entrega 30%, calidad de la empresa 2%, calidad técnica 28%, total 100%.

Se le consultó y explicó el significado de “partida unitaria”, refiriendo que con esa expresión se quiere decir que lo que se paga es lo que haya sido instalado y verificado en el momento de fiscalizar la obra, y cuando lo instalado no corresponde al total, el pago que se hace de esa parcialidad se denomina “avance de obra”, por ejemplo, “una mano de dos manos de pintura”. Respondió que varios de los nombres de las empresas que se le mencionaron los recordaba por sus nombres solamente. En el año 2010 no hubo muchas licitaciones, tal vez 2 o 5; el 2011 alrededor de 12 a 15 cuarteles; 2011 al 2013 fue cuando más cuarteles se licitaron. En cuanto a las “aclaratorias”, estas estaban consideradas y establecidas dentro de las bases de licitación como también en la Ley. En cuanto a los *itemizados* de Isla Huar y Coyhaique Alto refirió que fue Pizarro quien le entregó la información. Los maestros que viajaron a Villa Ortega no estaban bajo el mando de Bustos. Los procesos administrativos deben ser autorizados por el jefe del Departamento y posteriormente por el Director de Nacional de Logística, sin las cuales no se podían efectuar los procesos, como por ejemplo, trasladar al personal de reparación y mantención que viajó a Villa Ortega.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, explicó los conceptos “cuartel tipo” y “cubo realizable”; la carga de trabajo de Pizarro también la tenían los otros ITO; las bromas inicialmente se enfocaban “más que nada” a la parte intelectual y física, pero con el tiempo *las bromas del Comandante* fueron “pesadas e insistentes” *ya que nadie más estaba haciendo bromas*; en una oportunidad escuchó que Bustos llamó a Pizarro “chico Down”.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez señaló que entre el 2005 y 2014 “le tocó ver” alrededor de 50 o 60 cuarteles, no recordando cuántos se adjudicó CGM, pero que tuvieron que haber sido ser más de cinco; el *itemizado* y su valor se realizan considerando la obra y el lugar en que se emplazará la obra; respondió no saber si Grossman concurrió a la visita a terreno antes del trato directo, pero pudo haber ido para el caso que se hubiere presentado a la licitación pública que precedió el trato directo; señaló no saber el monto asignado para la terminación de la obra de Isla Huar y tampoco qué porcentaje de la obra se encontraba pendiente de ejecutar;

Interrogado por la defensa del acusado Rojas señaló que declaró en el sumario de Carabineros; que con Pizarro fueron buenos compañeros de

trabajo durante un tiempo, pero cuando dejaron de trabajar en el mismo lugar no continuó la amistad; algunas veces compartieron almorzando; el carácter reservado de los montos a licitar tiene que ver con la transparencia y objetividad del proceso de licitación; dijo no recordar por qué se declararon desiertas las licitaciones de Isla Huar y Coyhaique Alto; tampoco recordó si en la licitación privada de Lago Castor hubo o no interesados, a diferencia de los otros dos cuarteles; el trato directo lo revestían de la formalidad de licitación privada, sin perjuicio que la resolución decía que se autorizaba trato directo; entre los años 2012 y 2014 las empresas Fer y Fer, Alto Sur, Vallejos, Garfías, se adjudicaron 6 obras, Recel 5, Coserco 4, Probas 4, Nogal 5; la empresa Grossman se presentaba permanentemente a los procesos de licitación, alrededor de 6 o 7, y CGM algo similar, siempre iban a la par, en las mismas licitaciones; era habitual que las empresas concurrieran a L1, ya fuera a dejar carpetas o presentar estados de pago; nunca vio el nombre de César Rojas en la documentación que le correspondió revisar y analizar.

Interrogado por el tribunal para que aclarara si *el trato directo* incluía todo lo pendiente o sólo una parte, respondió que *incluye todo lo contratado originalmente* y que “debe incluir todo el *itemizado* pendiente”.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N° 1.310 (estados de pago 1 al 8, proyecto Reposición Retén Villa Ortega)

8) (56) Testigo NICOLÁS ISRAEL LÓPEZ REYES (abogado): declaró haber trabajado en L1 desde principios 2013 hasta finales de 2016; que concurría a declarar por supuestas irregularidades ocurridas en el Departamento de obras, a propósito de la reposición de unos cuarteles en el sur; explicó que el Departamento se dividía en dos (2) grandes áreas, reparación y mantención, por un lado, y proyectos de inversión, por el otro; Carla Salinas era la jefa de la primera área, y Bustos Morgado el jefe de la otra área; en los años 2013 y 2014 el jefe del Departamento fue el Coronel Flores; éste no les hacía solicitudes ni les daba instrucciones, éstas les llegaban a través del Comandante Bustos, quien estaba a cargo del área de arquitectura, de los ITO y, en General, a cargo, *de manera extraoficial*, de acompañar a la jefatura del Departamento para sacar las

firmas al DILOCAR; refirió que Isidro Martínez era el abogado de la otra área; señaló que Bustos nunca dio una instrucción propiamente tal, la forma que empleaba era a modo de sugerencia, aunque en el fondo se trataba de instrucciones que él les daba; en cuanto a la fiscalización de los ITO, indicó que Bustos tenía facultades de supervisión, estaban bajo su dirección, a él le rendían cuenta; la correcta ejecución de las obras estaba a cargo del ITO conforme señala el DS 294; explicó que los ITO deben ejecutar lo que está en el proyecto correspondiente, o sea, lo que indican los planos y el itemizado; si existían discrepancia el ITO debía, en teoría, consultar y obtener aprobación de la jefatura, lo cual en la práctica no ocurría ya que el ITO resolvía por sí solo y posteriormente dejaba constancia en el libro de obras; el Comandante Bustos sabía cuando salían los ITO en Comisión, y a su regreso era a él a quien le daban cuenta; la decisión concerniente a qué ITO se designaba para cada obra era tomada por Bustos; éste era un hombre bastante organizado por lo que cada nombramiento obedecía a criterios técnicos; Bustos no confiaba en nadie, pedía cuenta de todo, sabía todo; Bustos no podía dirigirse directamente al Director de Logística, tenía que seguir el conducto regular, esto es, por medio del jefe de Departamento, Félix Flores; la tramitación administrativa, firmas por ejemplo, estaba a cargo de Parra, él era un gestor, *tomaba la posta* de lo que le pedía su jefe, Bustos, tomaba el proceso y lo llevaba a su fin, por ejemplo si se requería una designación él llevaba la solicitud para la dictación de la resolución; cuando se trataba de temas más complejos era Bustos quien se hacía cargo de la tramitación, él llevaba personalmente la tramitación a DILOCAR; los jefes de DILOCAR poco y nada sabían en relación a las obras y en cuanto a la adjudicación de las obras sólo firmaban; sólo en una oportunidad ocurrió que un General que pidió aclaración; Bustos a veces formaba parte de las comisiones de evaluación; participaba en la apertura de sobres; en el acta de apertura Bustos participaba coordinando la apertura y aclarando dudas que se plantearan en ese momento; una vez el Comandante Bustos trató de intervenir en el proceso, pero sin éxito, refiriendo el testigo que ello ocurrió en la licitación de Río Tranquilo; ese proceso fue a finales de 2013. Para refrescar memoria acerca de la fecha exacta se le exhibe su declaración, la reconoce, señala que en ella consta su declaración y que está su firma, luego de lo cual, previa lectura para sí, responde que *el proceso de licitación fue en noviembre de 2013*; en ese proceso participaron las empresa Crispi y Grossman, no recordándose de otras empresas participantes; la intervención de Bustos dijo relación con algunos documentos que debían estar en la evaluación jurídica, aduciendo que los documentos estaban en la carpeta del Registro de Contratistas,

pero ahí no estaban; señaló que eso se hizo para detener el proceso de evaluación; refirió haber conversado con Romina Parraguez decidiéndose informar que la empresa debía quedar fuera del proceso licitatorio, ante lo cual Bustos lo llamó a su oficina para convencerlo de que modificara su informe, aduciendo que *se había comprometido el jefe de Departamento, el ITO*; la reunión duró alrededor de veinte (20) minutos, durante los cuales se negó a modificar su informe; después que salió de esa oficina Bustos no le dirigió la palabra durante dos (2) semanas, al cabo de las cuales Bustos se fue de vacaciones; aclaró que cuando Bustos dijo “él se comprometió”, no dijo *a qué* se habían comprometido, sólo mencionó a Flores y Pizarro, pero no dijo que él (Bustos) también se hubiere comprometido. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibe al testigo su declaración, la que previo reconocerla, dio lectura en voz alta: “pero el Comandante Bustos me llamó a su oficina y me dijo algo así como que estaba comprometido, tanto él como el Coronel Félix Flores, creo que también mencionó al ITO Francisco Pizarro, para adjudicaciones de contratos con Grossman”. En cuanto a los documentos faltantes señaló que eran de tipo *societario*, como por ejemplo la escritura de constitución; refirió el deponente que lo que específicamente Bustos le pidió fue que *modificara el tenor de informe* para así *dejar que pasara la empresa*.

Declaró el testigo que en una reunión con Bustos, estando además presente Alejandra Munizaga y Francisco Pizarro, dijeron que la empresa CGM había incumplido con el contrato, que se había atrasado en más de un 30% en las obras de Isla Huar, información que se entregó con el objeto de poder dar término a las obras inconclusas y evitar que se perdieran los proyectos; Bustos les habló de Lago Castor diciendo que esta obra estaba en un 90% ejecutada; declaró que ese porcentaje se reSPaldaba sólo con la palabra de Bustos y la del ITO ya que en ese momento no tuvieron a la vista el informe de rigor, precisando que este último es necesario para dar término anticipado, no obstante que posteriormente el informe llegó. Consultado por la fecha del informe en comento señaló no recordarla. Para refrescar la memoria del testigo se le exhibió su declaración, la cual reconoció, indicando que efectivamente se trataba de su declaración, reconociendo además su firma, luego de lo cual, previa lectura para sí, respondió que la fecha del informe era 25 de octubre de 2013, añadiendo que el informe era posterior a la mencionada reunión; consultado por los motivos por los cuales procedía dar término anticipado a un contrato respondió que habían varios, citando, por vía de ejemplo, no entrega del libro de obras, atraso en las obras,

incumplimiento de las obligaciones laborales, entre otras. A fin de refrescar la memoria del testigo acerca de las causales de término se le exhibió la declaración precedente, que luego de leerla respondió: *abandono de las obras y no pago de los servicios básicos*, además de las causales antes mencionadas. Dijo el testigo no recordar si hubo o no una boleta de garantía por la obra de Lago Castor; Bustos señaló que dado el estado en que estaban, en referencia a Isla Huar y Coyhaique Alto, se iba a hacer trato directo y que había una sola empresa dispuesta a tomarlas por “tan poco dinero”.

En cuanto al proceso de inscripción de las empresas señaló que eso no era prioridad para asesoría jurídica, pero en el caso de la empresa Grossman se le pidió que acelerara el proceso, indicando que normalmente dura de uno a dos meses, señalándole Bustos que el apuro obedecía a que esa empresa iba a ser contratada para las obras mediante trato directo; indicó el deponente que la empresa en ese momento no estaba inscrita en el Registro de Contratistas; refirió que además de Bustos también Félix Flores le hizo mención respecto de dicha empresa, le dijo más o menos lo mismo que le había dicho Bustos, y que le pidió que le enviara un listado de los documentos pendientes para así pedirlos a la empresa y completar el proceso. Se **le exhibió el documento N° 117**, lo reconoce, señala que se trata de un correo electrónico que le envió al Coronel Flores con fecha 23 de octubre de 2013, en el cual le señala los documentos que tenía que acompañar Grossman, además una explicación acerca de tales documentos; explicó que los aludidos documentos no eran los que señala escuetamente el DS 294, sino que eran más, por ejemplo: copia de inscripción de constitución de la sociedad con sus correspondientes anotaciones al margen, certificado poderes vigentes, cédulas de identidad y certificados de antecedentes de todos los directores, certificado de capital comprobado, entre otros; precisó que el correo en comento lo envió a Flores desde su correo privado.

Declaró que Bustos estaba bastante apurado con el proceso y para que se emitiera el correspondiente informe, pero que faltaban algunos documentos por lo que le envió la resolución proforma para su dictación una vez que se cumpliera con la documentación requerida. **Se le exhibieron los documento N°1.250 y N° 1.254**, los cuales reconoce y refiere: del primero, que se trata del Oficio N°1273, de 7 de noviembre de 2013, en el cual consta el estudio que se hizo de los antecedentes de Grossman para la inscripción de la empresa en el registro de

Carabineros, donde consta que la documentación se le solicitó por Félix Flores, dejándose constancia que la documentación no había llegado, señalándose en el punto 3 que se entrega hacia entrega de la inscripción proforma pero sujeta a la condición de que llegase la documentación faltante; del segundo documento, señala que corresponde al Oficio N° 1277 de 7 de noviembre 2013 mediante el cual fundamenta la inscripción final, en el cual se indica que la empresa cumple con los requisitos necesarios para su inscripción en el Registro de Carabineros. De este segundo documento se hizo lectura: *de Asesoría Jurídica L1, a Departamento de Cuarteles L1: N° 1, solicitud de inscripción de Grossman en Registro de Contratistas, se informa que la empresa está legalmente constituida y que ésta conforme y cumple con el espíritu de los requisitos; que ante la premura de los proyectos en el sur de Chile, se ha redactado un proyecto de Resolución Exenta para incorporar a la empresa en el Registro de Contratistas.* Refirió el testigo que, en consecuencia, al día 7 de noviembre recién se estaban solicitando los documentos para la inscripción y que por tanto la empresa no podía estar inscrita. Continuó su declaración diciendo que posteriormente revisó la documentación enviada, constatando que no todos los documentos habían llegado por lo que los requirió directamente al Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y al Registro de Comercio del mismo Conservador; precisó que los documentos se entregaban a través de la oficina de partes. **Se le exhibe el documento N° 1.252**, carta de Carlos Grossman en representación de la empresa Grossman, de fecha 14 de noviembre de 2013, dirigida al jefe de Departamento de Cuarteles L1, Dirección Nacional de Logística, en la cual se adjuntan documentos pendientes para inscripción en el Registro de Contratistas: refiere el deponente que este documento lo vio cuando prestó declaración. Se dio lectura: *Noviembre 14 de 2013, a Coronel Félix Flores: de nuestra consideración, nuestra empresa, Grossman S.A., mediante este documento viene en hacer entrega de los documentos pendientes para la inscripción en el Registro de Carabineros, 2da categoría: certificado de vigencia de la sociedad, otorgado por el Registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces competente, copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, certificado de antecedentes de 21 de octubre 2013, certificado de capital comprobado con sello de agua para autenticidad, certificado de boletín comercial de la empresa, formulario de inscripción, balance.* Explicó el testigo que estos documentos son los que se piden a todos los contratistas. Refirió no recordar cuándo habían sido enviadas las cartas de invitación, pero sí que se enviaron a cuatro (4) empresas, entre ellas Grossman y FEALFRA. Se le exhibe nuevamente su declaración a efectos de

refrescar la memoria del deponente, luego de lo cual responde: las cartas de invitación se enviaron el día 4 de noviembre de 2013. Señaló que finalmente la empresa Grossman se inscribió el 28 de octubre, información de la cual se enteró con motivo de su primera declaración en la investigación, oportunidad en la cual se le exhibió la documentación. Se **le exhibió el documento N° 1.253**, refiere que lo reconoce, e indica que corresponde a la Resolución que aprueba la inscripción de la empresa, N° 487, de 28 de octubre de 2013, y que en ella se hace mención a los informes evacuados por él y por los demás asesores, precisando que sin esos informes es *imposible* obtener la resolución toda vez que tales informes son los que motivan la Resolución. Consultado cómo puede explicarse que la fecha de la Resolución sea anterior a la fecha de su informe, respondió que lo más probable es que le hayan guardado número en la oficina de partes, y que eso lo hacen Bustos y Salinas, y también Parra en alguna ocasión.

Declaró el testigo que en el mes de enero o febrero de 2014 acudió Ignacio Labra solicitando hablar con el jefe subrogante, el Coronel Osses, quien les pidió a él y a otros recibirlo en una reunión, en la que Labra expuso diciendo que existían diferencias en el itemizado, que estaban atrasados a causa de ello y que requerían más dinero para la terminación de las obras, solicitando en definitiva más plazo y dinero. Explicó el testigo que dicha persona era el profesional residente de la empresa Grossman, el cual se presentó como representante de Grossman. Señaló que dicha persona expuso situaciones bastante extrañas tales como que se habían dedicado a ejecutar una obra que supuestamente estaba ejecutada, al parecer una casa anexa, lo cual no eran parte del trato y que por ese motivo las obras contratadas estaban atrasadas, a lo que se le respondió que en la suma alzada estaban incluidas las obras no ejecutadas que estuvieren vinculadas al trato directo. Añadió el testigo que en el itemizado no se contenían las obras en que estuvo trabajando Grossman. Labra dijo que todo esto era un *acuerdo al que habían llegado con el ITO de la obra y con Carabineros, en General*. Señaló el testigo que los itemizados los había hecho Francisco Pizarro. El citado Labra les dijo que estaban llanos a pagar las multas que fuese necesario. Solicitó una *obra extraordinaria*, las cuales alteran el precio a suma alzada y que son factibles bajo ciertos requisitos, entre ellos, en el caso en cuestión, *la imprevisibilidad de la obra*, situación que en la especie no ocurría porque no se trataba de una obra imprevisible. Osses le pidió hacer una minuta de lo ocurrido en la reunión. Al efecto se **le exhibió el documento N° 670** (copia de minuta de reunión): el testigo lo reconoce, señala que corresponde a la minuta que redactó:

fecha 22 de enero de 2014, misma fecha de la reunión; hora de reunión 8,45. Lo acordado, según Labra, les dio a entender que la empresa debía terminar obras que no estaban terminadas y que no estaban incluidas en el itemizado del trato directo. Consultado si cuando se inició el trato directo Bustos estaba como jefe, respondió que sí, pero que al momento de la reunión no estuvo presente; la misma respuesta afirmativa entregó respecto de Flores, esto es, que estaba como jefe cuando se inició el trato directo, pero que no había estado en la reunión. Dijo no recordar si al momento de la reunión Pizarro seguía siendo el ITO de las obras, pero sí recordaba que no había estado en la reunión.

Interrogado por la querellante respecto de Flores, refirió que era una persona que descansaba en Bustos y en el (la) jefe de la otra área. Respondió que a César Rojas no lo conoció y que sólo supo de su existencia a raíz de rumores que escuchó en enero de 2014, y que posteriormente había visto su foto en los diarios. Se le exhibe su declaración a efectos de **refrescar memoria**: señala que la reconoce y que en ella está su firma; luego de haberla leído reservadamente respondió lo mismo que acaba de decir: el nombre de Rojas lo supo sólo como rumor de pasillo.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, refirió que los ITO no viajaban más de una vez al mes a revisar las obras, atendida la falta de personal y volumen de trabajo, pero que cuando viajaban lo hacían acompañados de otras personas, en Comisión, entre ellos Bustos, a veces iba el subteniente Luis Parra y otros profesionales. Se **le exhibe documento N° 340**, prueba de la defensa: Resolución Exenta N° 1302, de 9 de noviembre de 2012, nombra inspector técnico para las obras que se indica a Francisco Pizarro y otros, proyectos de reposición retenes Lontué, Itahue, Peyuhe, Santa Ana, Estación, El Olivar, Puente Negro, Villa Ortega, entre otros.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro respecto de la cantidad de viajes que realizaban los ITO respondió que viajaban mucho, la mayor parte del mes, eran pocos profesionales para la carga de trabajo.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respecto del documento de fs. 1253, del sumario administrativo, prueba N° 1, de la parte querellante, **se le exhibe**, pero el testigo no lo reconoce. Se **le exhibe el documento N° 839**, el cual

reconoce al igual que su firma, sin que posteriormente la defensa le hubiere formulado alguna pregunta acerca del mentado documento.

1. **Interrogado por la defensa del acusado Rojas** respecto de las Comisiones de servicio refirió que durante el tiempo que trabajó en Carabineros sólo participó en una Comisión, que había declarado en el sumario administrativo, que allí respondió que no era óbice ser ex funcionario para participar como socio en una empresa que solicita inscribirse en el Registro de Contratistas, precisando que dicha circunstancia no formaba parte de los impedimentos legales o inhabilidades que establece la ley. **Se le exhibe el documento N° 1.253, de la prueba del ministerio público** (Informe Financiero N° 101, de fecha 8 de noviembre de 2013, asesor de control de riesgo, Pedro Jofré Montero, dirigido al Departamento de Cuarteles L1, Dirección Nacional de Logística de Carabineros), y consultado señala que es un informe financiero relacionado con la inscripción de la empresa Grossman, agregando que es un “informe tipo”, explicando además que estos informes sirven o cumplen distintas funciones, por ejemplo, servir de antecedente para la pre evaluación de un proceso de licitación. **Se le exhibe el documento N° 1.056, prueba del ministerio público** (Resolución Exenta N° 847, de 28 de octubre de 2013, de la Dirección nacional de Logística de Carabineros, aprueba inscripción en el registro General de Contratistas de Carabineros a la empresa Grossman S.A.): responde que efectivamente Grossman envió una carta solicitando su inscripción en el mes de septiembre, con lo que, en palabras de la defensa, “se puede decir” que con esa presentación se habría iniciado el proceso de inscripción. **Se le exhibe el documento N° 878, prueba del ministerio público**, Oficio N° 1, de 13 de febrero de 2014, informe ejecutivo sobre los proyectos Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Castor, suscrito por Nicolás López Reyes, José Luis Reveco y Luis Parra Ávila; responde el testigo que lo reconoce al igual que su firma, pero que *el contenido está difuso*. De su lectura se hizo constar las dos siguientes afirmaciones: primera, *“lo que hubo en la especie fue una licitación privada”*. Explicó que la visita a terreno era obligada sólo en caso de licitación pública y que en la licitación privada el contratista se hacía cargo no sólo del itemizado sino además de todo lo que la obra requería por la naturaleza de ésta, y que por lo mismo lo que correspondía al contratista era examinar los planos, entre otros antecedentes; y segunda, *“no se exige visita a terreno y en el adjunto se envía el detalle de la obra”*. Consultado respecto del momento en que se asignaba el número a la Resolución que autoriza la inscripción que ello ocurría al momento de ingresar la solicitud de inscripción a la oficina de partes. Señaló

que al momento de la firma del contrato de obra la empresa debe estar inscrita en el Registro de Carabineros. Al efecto **se le exhiben los documentos N° 1.120 y N° 1.155**, pruebas del ministerio público: contratos de obras “terminación de las tenencias Coyhaique Alto e Isla Huar”, ambos de fecha 27 de noviembre de 2013, celebrados entre Fisco-Carabineros de Chile y Constructora Grossman.

El ministerio público efectuó un nuevo interrogatorio: la expresión “no aplica” significa que es un requisito no exigible al contratista en el contrato de que se trate; el contratista puede desistir del contrato después de la visita a terreno.

Las defensas de Gutiérrez y de Rojas solicitaron un nuevo interrogatorio, los cuales no aportaron más información que la que ya había entregado el testigo.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N° 670: Minuta de reunión de 22 de enero de 2014, entre Departamento de Cuarteles L1 e Ignacio Labra, en representación de empresa Grossman; PUNTO 13: siendo las 8,45 horas del día 22 de enero 2014, el jefe subrogante del Departamento de Cuarteles, Edgardo Osses, recibió en audiencia a Ignacio Labra, en representación de la empresa Constructora Grossman S.A., en la que tiene participación como director, siendo a la vez el arquitecto residente de la obra terminación de proyecto de reposición retén Isla Huar; participó también Marcos Pomar, constructor civil de Carabineros, Héctor Barría, abogado y Nicolás López Reyes, abogado de Carabineros; PUNTO 4: Ignacio Labra expuso: 1°) la empresa Grossman S.A. no está en condiciones de tener terminada la obra el día fijado para su vencimiento, 25 de enero de 2014; 2°) la empresa constructora Grossman ejecutó partidas no establecidas en el itemizado, casa anexa y caballerizas; 3°) el contratista por no ejecutar las obras del itemizado demoró éstas, por lo que no alcanzará a cumplir en el plazo estipulado; 4°) contratista expone que varias partidas son accesorias que requieren un inmueble o mueble por adherencia que deben estar contruidos pero que en la realidad no lo están; 5°) sostiene que si no le otorgan un plazo adicional entonces cumplirá en lo posible sólo con el itemizado que alcance, hace hincapié que el itemizado lo interpretará desde un punto de vista literal; 6) Labra expone que en caso que no se le prorrogue el plazo de término entonces la empresa se hará cargo de la multas correspondientes; 7°) consulta la posibilidad que se realice una obra

extraordinaria para extender el plazo por los 30 días extras que requiere para terminar la obra: PUNTO 5: en relación a lo expuesto y solicitado, el jefe subrogante, Coronel Edgardo Osses, asistido por asesoría técnica y abogados ya individualizados, contestó: Carabineros respetará la fecha de término del contrato, no pudiendo modificarla por ningún motivo ya que la obra fue contratada a suma alzada, lo que fue conocido por el contratista; si la empresa Grossman ejecutó partidas no establecidas no hay constancia que ello haya sido solicitado por Carabineros, si la empresa por ejecutar partidas no establecidas en el itemizado por trato directo, descuida las contratadas, eso no es imputable a la institución ya que debe ceñirse al contrato; la falta de inmuebles por adherencia el contratista tuvo la oportunidad de representar la situación en la visita a terreno, especialmente siendo un técnico especialista quien concurre, por lo que en tales circunstancias pudo decidir no haber continuado participando, en ese momento o hasta la firma del contrato; la Comisión se constituirá al día siguiente al vencimiento del contrato para verificar el estado de avance correspondiente y que el contratista no sólo está obligado a lo literal del itemizado sino a todo lo que incluye el contrato por su naturaleza; se le explicó a Labra que de incumplir se cobrarán las multas, sin perjuicio de otras sanciones dispuestas en la ley y en el contrato; respecto a la posibilidad de una obra extraordinaria se le explicó que esta situación no cumple con los requisitos copulativos necesarios (que la obra extraordinaria sea indispensable e imprevisible, lo que no ocurre en este caso porque un experto pudo en la visita a terreno percibir por sus sentidos, y también técnicamente, la situación, cualquiera de las situaciones planteadas y por tanto haberse previsto); pie de firma: Isidro Martínez Bacigaluppi, abogado, Nicolás Lopez Reyes, abogado, asesoría jurídica del Departamento de Cuarteles L1.

Documento N° 1.240: documento electrónico ordinario NCU 17408844, de pref. Aysén, para Décimo primera Zona Aysén; asunto: obras nuevo retén, informa sobre el particular; martes 12 de noviembre de 2013; en referencia a su documento electrónico de 12 de noviembre de 2013, en relación a la visita de Ignacio Labra, de la empresa Grossman, al Reten de Lago Castor, se informa que el profesional señalado también se presentó el día 11 de noviembre de 2013 en la tenencia Coyhaique Alto realizando una inspección ocular de las obras, específicamente su estado de avance; se informa que a la fecha no se presentó personal al Retén Villa Ortega. Firma Daniel Zaninovic Berríos, Coronel de Carabineros, prefectura de Aysén.

9°) (32) Testigo CARLOS SAÚL GROSSMAN BADRIÁN (ingeniero comercial):

Interrogado por el ministerio público respondió que su profesión era la de ingeniero comercial, que desarrolla distintas actividades comerciales, por ejemplo, hotelería, asesoría de empresas y temas financieros; *alguna vez, durante los años 90, 2000* y en adelante, estuvo vinculado a la empresa Constructora Grossman; viene a declarar por un fraude en una licitación en la que se vio involucrada; se dedicaba habitualmente a construcción de viviendas en la quinta región, pequeños proyectos en Santiago y otras licitaciones universitarias y de otra índole, *hasta que se llega a la última licitación en la que nos vemos envueltos*; tomó conocimiento de ésta a raíz de que una de sus empresas tenía relaciones con elementos de defensa que podían ser de interés para Carabineros, y que un amigo vinculado con la institución, Salomón Goldman, le propuso que ingresara a estas obras, a lo cual le contestó que no había podido ya que aunque postulaba no le iba bien, a lo que él le sugiere el nombre de una persona que le podía ayudar en el aspecto técnico; le consulta si mantiene activa la empresa constructora a lo cual le responde que no, pero *que siempre hay algunas cosas en actividad*, “aquí comienza la historia”; el año 2011, 2012 tomó contacto con César Rojas, *pero esto comienza* el último trimestre de 2013; Salomón le mencionó que esa persona había pertenecido a Carabineros y que mantenía contactos con la institución; en las licitaciones de armamentos *no saqué nada*; Rojas le dijo que había algo en el rubro de construcciones, preguntándole si tenía vigente la empresa; Rojas le dijo que había una oportunidad porque Carabineros había tenido problemas con dos obras que habían sido abandonadas por lo que se requería una empresa que las terminara; eran dos lugares que no conocía, Isla Huar y Coyhaique; a la propuesta le contestó que podía ser interesante desde el punto de vista de activar su empresa pero que él no iba a estar encima de todo, por lo que asignaría una persona y que por su parte él, César Rojas, tendría que preocuparse de todo; dijo no recordar que hubiere existido o comentado respecto de una tercera obra; Rojas nunca le mencionó qué empresa era la que había dejado botada las obras; Rojas le mencionó que alguien en Carabineros lo conocía, se trataba de Félix Flores, y que sería bueno conversar con él; refirió el testigo que se recordó en ese momento vagamente de dicha persona, lo había visto en Viña, de donde dijo el testigo era oriundo, y que después lo vio en Santiago; la primera vez la recordaba porque Flores había estado asignado en la prefectura de Carabineros de Viña del Mar, y posteriormente lo ubicó porque formaba parte de la guardia presidencial; Rojas le dijo que Flores estaba a cargo del Departamento, y que sería bueno que

se reunieran; Rojas le planteó que podían reunirse en Macul, a almorzar, que el lugar estaba cerca de donde trabajaba Flores; se juntaron a almorzar, duró una hora, Flores le habló de un *trato directo* para el término de las obras; participaron Rojas y ellos dos; Flores vestía de civil; nunca se tocó el tema respecto a quién había estado antes a cargo de las obras, sólo que las habían dejado botadas; se habló de lo que significaba *trato directo*; después de la reunión se fue él con Rojas a Providencia, y le dijo que si esto seguía adelante él no quería preocupaciones ni tener relación, que designaría a Pablo Cáceres y que por su parte Rojas debía armar las carpetas necesarias; la fecha del encuentro fue en octubre, 13 o 14, pagó con tarjeta de crédito y que ésta le fue *solicitada por el tribunal en su momento*. Se le **exhibió el documento N° 832** (copia estado de cuenta tarjeta de crédito terminada en 7318, titular Carlos Grossman Badrián, 22 de octubre de 2013). Dijo reconocer el documento, haberlo visto antes, corresponde al pago de almuerzo en el restaurant “Chilenazo”, en la comuna de Macul, por \$48.849. Continuó su declaración diciendo que había que presentar documentación para estar inscrito en el Registro de Contratistas, completar y buscar los antecedentes requeridos, por lo que le dijo a Rojas que debía contactarse con su secretaria, y que a partir de allí Rojas siguió con la tramitación, y que siempre fue él quien estuvo en contacto con el tema solicitando lo que se requería para la inscripción. Refirió que fue al Departamento de Cuarteles en dos oportunidades, una, a firmar el contrato y llevar la boleta de garantía respectiva, y la segunda, cuando fue con el abogado de su empresa, ya que había solicitado reunión con Rojas porque la cosa no estaba caminando y no les estaban pagando los estados de pago, por lo que llegó al Departamento de Cuarteles donde se reunió con cinco (5) personas que no había visto anteriormente. Aclaró que en la primera oportunidad estaba presente César Rojas, cuya presencia no se cuestionó nunca, tal vez porque estaba como asesor consultor de la empresa. Indicó que Rojas al parecer conocía el lugar ya que *se sabía mover de una oficina a otra*. Respecto de las personas que ejecutarían la obra, Rojas le mencionó que tenía un arquitecto de apellido Labra, quien posteriormente le fue presentado en una oportunidad, y que sería este quien estaría a cargo de las obras y de su inspección técnica. Señaló que no sospechó nada en este negocio. Él proporcionó el capital y Pablo Cáceres estuvo al frente a su nombre, pero que nunca este último se movió de la oficina a visitar las obras ya que era Rojas quien estaba a cargo. Añadió que Rojas rendía cuenta de los gastos realizados, contra los cuales él le devolvía los dineros; pensaba ganar 30 a 40%, no era una gran ganancia pero sí le permitía poner en movimiento la empresa y reinsertarse en el rubro de construcción, sin embargo

tuvo una pérdida de 80 a 90 millones de pesos; no le estaban pagando los estados de pago, Pablo Cáceres se lo empezó a avisar permanentemente por lo que encararon a Rojas acerca de qué era lo que estaba pasando, a lo cual les respondió que Carabineros tenía problemas con Labra porque unos decían que las obras avanzaban y otros no, por lo que los informes de avances no coincidían, lo cual finalmente derivó en la reunión a que antes hizo mención. Dijo que cuando encaró a Rojas éste mostró tranquilidad, siempre demostrando que eran un mal manejo de Carabineros, y que los ITO no habían ido pero después decía que sí habían ido, situación anómala que presentó como de responsabilidad de los ITO. Indicó que a la segunda reunión fue con el abogado, recibiendo un portazo, le dijeron que las obras no habían avanzado casi nada y qué era lo que iban a cobrar; en una parte de la conversación les dicen que me iban a pagar una suma irrisoria, alrededor de 3 millones de pesos, se produjo una discusión, los abogados de Carabineros se molestaron, ante lo cual él y su abogado se retiraron, quedándose allí César Rojas. Después de esto se decidió hacer una carta a Carabineros pero finalmente no la presentó por no salir perjudicado en otros negocios con Carabineros, comunicándole a Rojas a que ya no seguiría adelante, que perdería el dinero que había pagado y que ya no quería saber más del asunto. Señaló que Rojas se movía de manera independiente, le informaba sólo de algunas cosas. Posteriormente recibió un reclamo, pero no prosperó, enterándose dos años después, por una noticia, que Rojas estaba envuelto en un problema con Carabineros. En cuanto a la remuneración de Rojas, se le dijo a éste que si habían utilidades él recibiría un porcentaje de ellas, fue un acuerdo de palabra, se materializaría a través de una cuenta en participación mediante una anotación contable; se pactó un 25 a 30%; no le dio representación a Rojas; se incluyó a éste en el directorio de la empresa; era la mejor forma de justificar en el futuro cualquier pago que se le llegara a hacer. Se **le exhibe los documentos N° 842 y N° 843**, de sus medios de prueba (copia de escritura de acta de Junta extraordinaria de accionistas de 29 de julio de 2013, de la sociedad Construcciones Grossman S.A. y copia de poder especial de 18 de diciembre de 2013, de Constructora Grossman S.A. a Juan Pablo Cáceres, César Rojas Gaete y Lorenzo Gálvez Agurto). Los reconoce, señala que *están correctos*, reconoce su firma; en esa junta se nombró a Rojas y a otros como directores; el poder se otorgó a Rojas y a Pablo Cáceres. Se hizo lectura de los documentos: consta que se designó como directores a Rojas e Ignacio Labra, entre otros; en el segundo, consta que se trata de un poder especial otorgado por Carlos Grossman, en representación de Grossman S.A., a César Rojas Gaete, Juan Pablo Cáceres y

otro. Consultado el testigo si sabía que Ignacio Labra hubiere estado vinculado a la empresa anterior a cargo de las obras, respondió no saberlo. Se le cobraron las boletas de garantía. No vio los *itemizados* de las obras, eso debía hacerlo Pablo Cáceres. **Se le exhibió el documento N° 1.152** (copia de *itemizados* terminación de obras Isla Huar, firmado por Carlos Grossman en representación de la empresa Constructora Grossman S.A). Consultado dice que no lo había visto y que la firma que allí aparece no es suya, aunque en el pie de firma aparece su nombre, “no siendo mi firma”. **Se le exhibió el documento N° 1.155** (contrato de terminación de obras Retén Carabineros Isla Huar, de 27 de noviembre de 2013, entre Fisco-Carabineros y empresa Constructora Grossman): señaló que su firma corresponde pero que el documento no lo recuerda. Consultado, respondió que ese contrato corresponde a la primera visita que hizo al Departamento de Cuarteles, cuando entregó las boletas de garantía. Dijo no recordar si le habían mencionado de otras obras de terminación. Rojas se encargó de todo el proceso de inscripción y para ello les requería todo lo que según él le estaban pidiendo en Carabineros. El primero, que no lo había visto anteriormente, está dirigido a él y la firma que allí aparece no le corresponde, no conoce su contenido; el segundo, no recuerda haberlo visto nunca antes, figura en pie de firma su nombre pero la firma que allí aparece no le pertenece, aparece un correo que no pertenece a la empresa, aparece un logo pero no corresponde al de su empresa. Consultado si a la fecha del primer documento ya había sido inscrita la empresa en el Registro de Carabineros, respondió que no. Indicó que la documentación que a dichos efectos se adjuntó a Carabineros para el proceso de inscripción “debe haber sido César Rojas quien adjuntó la documentación”. Cuando fue a firmar el contrato no recuerda haber firmado otros documentos. **Se le exhiben documentos N° 1.150 y 1.151** (copia anexo contrato “términos de referencia terminación proyecto reten Isla Huar, formulario especial de oferta económica, de 12 de noviembre de 2013, suscrito por Construcciones Grossman, declaración jurada de intereses, suscrito por constructora Grossman, en el cual la firma que aparece no le pertenece. Dijo no haber visitado las obras y que creía que Rojas las habría visitado; señaló que no tuvo contacto con Labra sino a través de Rojas. Consultado respecto de cuál habría sido entonces el sentido de la adjudicación, en circunstancias que tendría que realizar obras pendientes, además de las contratadas, respondió que: *en mi opinión lo que se hizo fue tratar de “tapar un hoyo” mediante la contratación de su empresa, lo ocurrido habría constituido un sistema de “poncio” constructivo, o sea, ir con una obra tras otra para los mismos efectos.*

Interrogado por el querellante respecto de la reunión de 22 de octubre, con Rojas y Flores, acerca del trato directo, señaló que lo que a él se le dijo fue que la situación que había ocurrido les permitía esa forma de contratación, ante lo cual él entendió que no habría licitación. Los 80 millones que perdió fueron por concepto de avances de dinero que efectuó para la realización de las obras. Su amigo Salomón Goldbaum fue quien le recomendó a Rojas. Salomón era proveedor de armamento a Carabineros, él le dijo que esa persona que le estaba mencionando, César Rojas, estaba retirado de Carabineros, pero que lo *podía ayudar en estos tecnicismos*. Respondió no haber revisado los itemizados, añadiendo que quien pudo haberlo hecho fue Pablo Cáceres. A fin de **evidenciar contradicción** se le exhibe su declaración de fecha 27 de septiembre de 2018, aparece su firma, prestada en la fiscalía: *“revisó los itemizados de las obras cuando fue a firmar, sólo fui a firmar y llevar los vale vista, quien tendría que haber revisado era César Rojas”*. Se le preguntó si Rojas le prometió o dijo que haría algún aporte monetario a las obras, a lo cual respondió que no. Se le exhibió su declaración para que recordara si había participado en otro proyecto, Río Tranquilo, una vez leída para sí, respondió que sí había sido llamado al proyecto Río Tranquilo, pero que no se lo adjudicó. Declaró que los contratos que fue a firmar los leyó en términos genéricos, además entregó las boletas de garantía y verificó que los datos estuvieran correctos.

Interrogado por la defensa de Bustos confirmó sus dichos anteriores, agregando que no conocía a Christian Bustos Morgado. Preciso que la expresión *“extraño”*, que había empleado momentos antes, decía relación con *el hecho de que no coincidían los itemizados que su empresa decía haber realizado pero que Carabineros contradecía diciendo que no correspondía al estado de avance y que lo realizado era menos*. El dinero que le ofreció Carabineros no lo aceptó ni lo recibió por medio electrónico u otros.

Interrogado por la defensa de Pizarro, declaró que no conocía a Francisco Pizarro y que tampoco se había reunido con él; dijo que al parecer Rojas utilizaba un correo electrónico con VTR; los 80 millones corresponden a la pérdida que tuvo la empresa, tanto por los estados de pago de los gastos que se hacían para las obras, como por las boletas de garantía que entregó. Señaló que a Rojas le entregó dineros por concepto de reembolsos de gastos.

Interrogado por la defensa de Gutiérrez refirió que se le entregaban boletas en la rendición de gastos; precisó que él no fue inversionista sino que lo que hubo fue una obra de construcción y que ésta se pagaría con los estados de pago.

Interrogado por la defensa de Rojas, respondió no conocer la firma de César Rojas, por lo que no podía decir que los documentos que se le exhibieron contenían o no la firma de Rojas, pero lo que sí sabía era que los pagos se hicieron a César Rojas. Respondió que primero declaró como imputado y posteriormente *pasé a tener la calidad de testigo, no fui formalizado ni acusado*; negó conocer a Pizarro, tampoco haber ido con un camión de color blanco a retirar materiales a L1, *nunca he tenido camiones*, y que no le *pasó* dineros a Rojas para adjudicarse las obras ni para sobornar a alguien.

Interrogado nuevamente por la querellante (artículo 329 del Código procesal Penal) acerca de su conocimiento respecto de si los dineros que él había entregado se los habría quedado César Rojas, respondió no saberlo, pero sí *que los dineros fueron a parar a alguna parte que no correspondía*.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N° 1.150 (copia de anexo de contrato, “Términos de Referencia-Terminación Proyecto Retén Isla Huar”, formulario especial de oferta económica, suscrito por Construcciones Grossman S.A., de fecha 12 de noviembre de 2013): *12 de noviembre 2013, obra terminación Isla Huar, neto 16 millones y fracción, 3 millones y fracción IVA, valor total \$19.130.505; plazo ejecución 50 días, firma, nombre Construcciones S.A.*

Documento N° 1.151 (Copia de anexo de contrato “Términos de Referencia-Terminación Proyecto Retén Isla Huar”, declaración jurada de sobre conflicto de intereses, suscrito por constructora Grossman S.A., de fecha 12 de noviembre de 2013): *a DILOCAR, Jorge Rojas Lander, 12 de noviembre de 2013, comparece Carlos Grossman, chileno, ingeniero comercial, expone bajo juramento: declaro conocer que no pueden participar funcionarios directivos de carabineros como tampoco el cónyuge, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, ni las sociedades en que ellos sean parte, sean anónimas ni en comandita, o que tengan acciones o sean dueños de más del 10% del capital, como tampoco ser*

director de tales sociedades; declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades señaladas.

Documento N° 1.111 (carta de fecha 4 de noviembre de 2013, del Departamento de Cuarteles L1 a empresa Constructora Grossman S.A.): *para el jefe Departamento de Cuarteles, le informan que la institución, a través de la DILOCAR, ha resuelto la materialización del proyecto reposición Isla Huar, a ejecutarse en su actual instalación, comuna de Calbuco, región de Los Lagos, por lo que se le invita a cotizar el proyecto; los antecedentes serán entregados el 6 de noviembre de 2013; en el evento que resuelva participar se otorgan 6 días corridos desde la fecha de entrega de antecedentes en la oficina de partes el 12 de nov de 2013, en sobre sellado, direccionado al Departamento de Cuarteles; firma Félix Flores Santis, jefe del Departamento de Cuarteles; firma manuscrita. Santiago, 3 de noviembre de 2013.*

Documento N° 1.252 (Carta de Carlos Grossman en representación de empresa Grossman S.A., de fecha 14.11.2013, dirigida al jefe del Departamento de Cuarteles L1, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile., la cual adjunta documentos pendientes para inscripción en el Registro de Contratistas de Carabineros de Chile, Segunda Categoría): *14 de noviembre de 2013, a Coronel Félix Flores: nuestra empresa, Grossman S.A., viene a hacer entrega de los antecedentes que se encuentran pendiente para su inscripción en el registro: firma Carlos Grossman, empresa contratista Grossman S.A.*

Documento N° 1.154 (Informe de evaluación de propuestas N° 13, de fecha 13.11.2013, del Departamento de Cuarteles L1, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile) *14 de noviembre de 2013, a Coronel Félix Flores: informe de evaluación de propuestas; Santiago 12 de noviembre de 2013; terminación proyecto reposición Isla Huar, trato directo, objetivo: evaluar las propuestas recibidas para la contratación de las obras civiles que se indican; carta de invitación de fecha 4 de noviembre 2013 a Constructora Grossman, empresa Olga Garfías, empresa FEALFRA y Cocerco Ltda.; evaluación jurídica: las empresas cumplen con la documentación jurídica acompañada y corresponde evaluación financiera; evaluación financiera: los antecedentes habidos no presentan observaciones que impidan continuar con el proceso administrativo: evaluación técnica: FEALFRA 22 millones y fracción oferta, 84,39%; Grossman 19*

millones y fracción, plazo 50 días, 100%. Se sugiere a la empresa Grossman por cumplir con todos los requisitos. Firmas: Christian Bustos Morgado y otras;

Documento N° 1.152 (Copia de dos páginas de itemizado correspondiente a la obra Proyecto de Terminación Retén Isla Huar, con firma de Carlos Grossman, en representación de la empresa Constructora Grossman S.A.): *Itemizado proyecto terminación Retén Isla Huar, monto neto \$12.658.311, costo total \$19.130.505; empresa contratista Constructora Grossman S.A.; firma Carlos Grossman en representación de Constructora Grossman S.A.*

Documento N° 66: (copia de demanda procedimiento ordinario, fs. 2.699, sumario administrativo): demandante: Cristian Pastén Leiva; demandado: constructora CGM Ltda.; demandado solidario: Fisco-Carabineros de Chile; materia: nulidad de despido e indemnización de perjuicios; fecha: 17 de diciembre de 2013; *inicio relación laboral: 1° de julio contratación, separación de funciones 3 de octubre, mediante carta enviada a su domicilio, artículo 159 N° 5 del Código del Trabajo (conclusión del trabajo o servicio que da origen al contrato); fundamento de la demanda: duración del contrato sería por alrededor de un año, detalle prestaciones impagas no se especifican, cotizaciones pendientes.*

10°) (63) Testigo CLAUDIA VERÓNICA ZENTENO QUIROZ (jubilada de Carabineros).

Interrogada por el ministerio público, respondió a sus preguntas: trabajo en el Departamento de Cuarteles, dejó de trabajar allí el año 2016, estuvo durante 10 años trabajando en ese lugar, específicamente en la oficina de kardex; la función de esta oficina consistía en reunir los antecedentes de las empresas que solicitaban su inscripción en Carabineros; se guardaba la documentación de los proyectos de construcción, mantención y reparación (eran dos áreas); su rol en esa oficina era administrativo; dijo que sabía que el motivo de su citación obedecía al tema de la inscripción de la empresa Grossman, en el cual se dieron algunas irregularidades que no se habían dado antes; el Departamento de Cuarteles se organizaba en dos secciones, una de ellas llevaba las obras menores (mantención y reparación) y la otra las obras mayores (construcción de cuarteles); el jefe del Departamento era el Coronel Félix Flores, y el jefe de la sección cuarteles era el Comandante Bustos, éste era el jefe de las obras mayores y había, además, un

subteniente estaba a cargo de las obras menores; Bustos era su jefe; ella era funcionaria de planta, administrativa; debía acatar las órdenes de Bustos; en Carabineros se acatan las ordenes; dentro del área de Bustos estaban los ITO, a quienes también Bustos les daba órdenes; siempre estaba con ellos, manejaba todos los trabajos que debían realizar; Bustos sabía de las Comisiones de Servicio, él conformaba cada Comisión; los profesionales le rendían cuenta a él; estos tenían un equipo de trabajo, Bustos se reunía con ellos, se reunían en el segundo piso, él trabajaba allí; Bustos podía dirigirse al Director de Logística; él o Parra podían ser quienes le llevaban la documentación para firmar; Parra era quien, dentro de esta sección, le seguía en el mando a Bustos; del Director de Logística señaló no saber cuánto se involucraba en los procesos, sólo sabe que le llevaban la documentación y él firmaba; Félix Flores tenía reuniones con Bustos, pero quien sabía todo era éste último, tenía planillas, pizarras con todos los trabajos que se estaban haciendo, los que se iban a hacer, las Comisiones, él llevaba todo, era muy bueno en eso, era un excelente profesional, él sabía cada proyecto, en qué estaba, cuánto le faltaba; la relación entre Bustos y Pizarro era más cercana, conversaba con él, le llevaba documentación para firmar, *“mi Comandante era cercano, y a veces tenían sus peleas”*, tenían una buena relación; la inscripción en comentario era respecto de la empresa Constructora Grossman; el proceso de inscripción consistía en que las empresas solicitaban su inscripción en el Registro, se les entregaba un formulario con la documentación requerida, varios de dichos documentos debían ser originales o autorizados ante notario, v.gr, certificados de antecedentes, certificados de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, certificado de capital comprobable, el cual debía venir con la firma del jefe de la sucursal y un timbre de agua; la documentación no podía tener vigencia anterior a 90 días; recibidos los documentos los analizaba un equipo de profesionales, primero un abogado, posteriormente había una parte financiera; los documentos que se requerían constaban en un formulario por el cual *“nosotros nos regíamos”*, *“ese formulario estaba ahí desde que yo llegué”*, el formulario pertenecía al Departamento de Cuarteles; *ese día le dijeron que el formulario no tenía validez*; este formulario se los entregó el jefe del área de proyectos; habitualmente, cuando faltaban los documentos, la empresa no se la inscribía en el Registro; esos documentos eran revisados, motivo por el cual los documentos iban pasando por cada oficina; si faltaban documentos se le avisaba a la empresa para que llevaran lo que faltaba; no supo que alguna vez se inscribiera una empresa que no cumplía con la documentación, no habían excepciones al respecto. Ante la pregunta, *cómo había*

tomado conocimiento de la solicitud de inscripción de la empresa Grossman, y su respuesta “no recordarlo”, se le exhibió su declaración de 5 de octubre de 2017, a fin de refrescar memoria, luego de lo cual respondió que reconocía su firma en el documento; señaló que correspondía a su declaración en fiscalía, y una vez leída para sí, respondió: fue por los trabajos de la empresa CGM que había dejado y se requería seguir con la construcción; ahí se enteró que “esa empresa iba a ser”, “no sé por qué por trato directo”; Bustos estuvo a cargo; hubo una presión mayor para que se inscribiera esa empresa; trabajaba al lado de los abogados y del Comandante Bustos; el proceso de inscripción duraba alrededor de dos a tres meses, pero esta salió demasiado rápido; le llamó la atención que varios de los documentos que se pedían no estaban de la manera o forma en que se solicitaban, por lo que había que solicitar que se enviara la documentación de la manera que en que debía estar, pero en este caso no llegó “en el tiempo en que se inscribió”; esto se lo dijo al abogado; “yo revisé la documentación”, pero se le dijo que el formulario no valía y que era ilegal; habló con Nicolás López, específicamente le dijo que él era el abogado, que él debía revisar la parte legal y que ella debía ver los archivos. Señaló la deponente que “mis palabras no valieron”, aun cuando ella sabía de la documentación que se requería porque su trabajo no era sólo archivar los documentos sino también revisar la documentación que se acompañaba a las solicitudes de inscripción. Preciso que había trabajado durante cinco (5) años en esa tarea y que le tocó participar en muchas inscripciones, y que hubo varias empresas que no se inscribieron por faltar la documentación. Señaló que esto lo conversó con “mi Coronel Jofré”, y que mediante documento electrónico le informó lo sucedido, pero ya en ese momento la empresa estaba inscrita; lo hizo porque pensaba que no se iba a poder inscribir; en ese documento puso todo lo que ella había visto. Se le exhibió el documento N° 1.243 (NCU 19123658 de Claudia Zenteno Quiroz, de fecha 16.01.2014; que remite NCU 18972043 y 19049535): lo reconoció y señaló que es el documento en que informe todo lo que le pareció irregular, por ejemplo: la entrega de la boleta de garantía, se hace presente que no se registra RUT de la empresa ni poder del Sr. Rojas; explicó que la persona tiene que ir con el RUT de la empresa o ser parte de la empresa, en este caso CGM; el trámite en cuestión fue “la entrega de la boleta de garantía”. Añadió que en dicho documento también se señaló que César Rojas figuraba como socio director de la empresa Constructora Grossman, y que le llamó la atención que Rojas concurren como parte de CGM, no siéndolo, y porque aparecía como director de la empresa Grossman; además Rojas tenía reuniones con Bustos, lo que era irregular porque ninguna persona debía tener contacto con

los funcionarios a cargo del proceso de licitación. Refirió que la escritura de constitución no tenía certificado de vigencia, el certificado de capital comprobado que había presentado la empresa Grossman no tenía la firma del jefe de la sucursal bancaria, lo cual era importante, se exigía en el formulario, se le exigía a todas las empresas. En cuanto al certificado de antecedentes laborales, éste se encontraba vencido, era de fecha 20 de septiembre de 2013, en circunstancias que se pedía con vigencia de 90 días, por lo que el que se acompañó no era válido. Preciso que la inscripción de la empresa fue el 28 de octubre de 2013, pero que la documentación conforme llegó después de esa fecha. Indicó que de esta situación también tomó conocimiento su compañera Cecilia, toda vez que trabajaba con ella. Se **le exhibieron los documentos N° 1.244, 1.245, 1.246, 1.247 y 1.248**: una vez examinados señaló que los reconocía, refiriendo de cada uno: el primero, corresponde a la firma de una escritura pública, indicó que de éste le llamó la atención que en el directorio aparecía *mi mayor Rojas*; el segundo documento, refiere que se trata de la entrega (devolución) de la boleta de garantía de Isla Huar, llamándole la atención en su momento que *no se le exigió nada*, añadiendo que *esta fue otra excepción que se hizo con él, por ser conocido*, “no se le exigía ninguna documentación”, en circunstancias que tenía que llevar el RUT de la empresa o la escritura; el tercer documento, dijo no recordarlo; el cuarto documento, no lo recordó; el quinto, “éste es el que estaba vencido”, *este certificado de antecedentes estaba vencido, era de Grossman*. Se **le exhibieron los documentos N° 1.249, antes exhibido con el N° 1.056** (Resolución Exenta N° 847, de 28 de noviembre de 2013), **y N° 1.250** (Oficio N° 273 de fecha 7 de noviembre de 2013, de Asesoría Jurídica L1 a Departamento de Cuarteles L1, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.): una vez examinados señaló que los reconocía y que el primero de ellos correspondía a *la resolución que aprobó la inscripción de Grossman, de 28 de octubre de 2013*, precisando que la Resolución tiene lugar cuando ya está toda la documentación exigida y aprobada, llamándole la atención que la documentación en cuestión llegó posterior a esa fecha, señala que en esta Resolución se hace mención a dos oficios: N° 277, de 8 de noviembre de 2013, del asesor jurídico Nicolás López, y N° 101, de 8 de noviembre de 2013, del asesor de control riesgos Pedro Jofré Montero. En cuanto al segundo, señaló que se trataba del Oficio con el cual el abogado remitió la documentación, de fecha 7 de noviembre, y su contenido dice relación con lo que tenía que arreglar la empresa, esto es, presentar la documentación como correspondía. Se **le exhibió a continuación el documento N° 1.111** (Carta de fecha 4 de noviembre de 2013, del Departamento de Cuarteles L1 a la empresa

Constructora Grossman S.A.): una vez examinado dijo no reconocerlo. Se **le exhibió a continuación el documento N° 1.252** (Carta de Carlos Grossman en representación de empresa Grossman S.A., de fecha 14.11.2013, dirigida al jefe del Departamento de Cuarteles L1, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile., la cual adjunta documentos pendientes para inscripción en el Registro de Contratistas de Carabineros de Chile, Segunda Categoría): lo reconoció y dijo que *correspondía a la carta que envía la empresa en la que se adjuntó la documentación solicitada anteriormente, es de fecha 14 de noviembre de 2013; la documentación que aparece enviada adjunta corresponde a la requerida en el formulario a que antes hizo mención.* Consultada si conocía a Rojas, respondió que *sí, ya que trabajó en Carabineros; lo vio en Cuarteles varias veces, “lo vi con mi Comandante Bustos”; Rojas iba a visitar al Comandante Bustos, se reunían en su oficina, percibía entre ellos una buena relación y que después se enteró que habían trabajado juntos anteriormente; estas reuniones tuvieron lugar durante los hechos respecto de los cuales se encontraba declarando.* Después que supo que *se hizo una investigación en Carabineros, un sumario, supo de su existencia porque se le llamó a declarar a raíz del documento antes aludido.* Señaló que *la documentación permanecía en kárdex, y que si salía de ese lugar era porque Bustos o Parra la sacaban.*

Interrogada por la parte querellante, respondió que conocía a CGM porque era parte del registro de contratistas de Carabineros; a Ignacio Labra no lo conoció personalmente, pero pertenecía a las dos empresas; las reuniones entre Bustos y Rojas eran extensas, algunas, y cortitas, otras, de entrada y salida, a veces ellos dos se quedaban en reunión después terminaba su horario de trabajo; a la época de esas reuniones Rojas estaba vinculado a CGM; a la empresa FEALFRA la conoció de la misma forma; no sabe si ésta tenía relación con Bustos, pero sí por rumores, se decía que era una empresa formada por dos hermanos suyos, que era una empresa familiar.

Interrogada por la defensa de los acusados Bustos, respondió haber tenido varias licencias médicas por causa de una enfermedad crónica, se ausentaba por ello en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, se jubiló anticipadamente por la misma enfermedad; cree que Flores fue jefe en los años 2012 y 2013. El sucesor de Bustos, Jorge Muñoz Soto, trabajaba de la misma forma que aquél (tramitaba Comisiones, llevaba documentación para firma, se reunía con los profesionales en

el segundo piso); DILOCAR no funcionaba en el lugar que lo hacía Cuarteles; Bustos y Flores iban frecuentemente a DILOCAR a sacar firmas; la fecha y N° de las inscripciones salen de la Dirección de Logística, pero en algunas ocasiones se llamaba para solicitar N° de la inscripción, pero eso lo veía no lo veía un General, un Comandante podía dar órdenes para ello a un CPR, no era un tema tan importante para que lo viera un General. La presión que vio de parte de Bustos sólo la vio con el abogado, Nicolás López; en lo correspondiente a ella Bustos no le pidió nada; López y Jofré siguieron trabajando en la institución después del sumario; no recuerda en que año llegó Bustos a trabajar al Departamento, tampoco cuántos años estuvo allí, pero “creo que” pueden calculando que fueron 2 o 3 años; a Rojas y Bustos los vio reunidos “muchas veces”, no pudiendo dar un número; hablaban a puerta cerrada, por lo que no sabe de qué hablaban;

Interrogada por la defensa del acusado Pizarro, respondió a sus preguntas: Bustos y Flores le bajaban el perfil a las irregularidades; un funcionario no podía ir a la DILOCAR a dar cuenta de las irregularidades; lo regular era que la información fuera entregada por la oficina de partes, y cuando no tenía timbre de esta oficina era porque la documentación no había ingresado por allí; las boletas de garantía se guardaban en una caja fuerte que tenía la oficina de partes; en su opinión el DILOCAR confiaba mucho en los oficiales que trabajaban con él, eran muchas resoluciones que tenía que firmar, las carpetas salían y regresaban un mismo día, a veces al día siguiente;

Interrogada por la defensa del acusado Gutiérrez, respondió a sus preguntas: Parra entregó a Rojas la boleta de garantía de Isla Huar por orden de Bustos; el Coronel Muñoz y el General Águila le pidieron informar por escrito las irregularidades que ella había dado noticia en el documento electrónico;

Interrogada por la defensa del acusado Rojas respondió: en el archivo se encuentra toda la documentación y en el kardex sólo los proyectos de construcción, reparación y mantención; a Rojas lo había visto en reuniones vistiendo de uniforme, cree haber sido en Cuarteles o en la Dirección de Asesoría de Logística, esto porque ella trabajaba en ese lugar, en asesoría jurídica; cree que en ese entonces Rojas trabajaba en compras;

11°) (50) testigo CECILIA CORDERO ARAYA (funcionaria administrativa de Carabineros).

Interrogada por la fiscalía declaró que trabaja en el Departamento de Cuarteles desde hacen trece (13) años, aproximadamente, en la oficina de kardex, en recursos humanos. Indicó que concurría a declarar *por los cuarteles del sur y por una irregularidad en una inscripción*; explicó las secciones en que se dividía el Departamento de Cuarteles, Félix Flores era el jefe del Departamento y Bustos era el jefe de la sección de proyectos; ella recibía órdenes de Flores; explicó que Bustos daba órdenes a los ITO y a los profesionales que trabajaban con él; tenía conocimiento de los proyectos, estaba al tanto, también de las Comisiones de Servicio, finalizadas le daban cuenta de lo realizado, también sabía de los estados de pago y de avance de las obras; Bustos tenía relación con el jefe de Logística cuando le iba a sacar firmas o cuando tenían reuniones junto con Félix Flores; Bustos tenía buena relación con los demás, pero con “nosotros” era reservado. Consultada respecto de la relación entre Bustos y Francisco Pizarro, respondió que a Pizarro a veces lo veía molesto después de las reuniones, que habitualmente pasaba en reuniones con Bustos, y que este último también se reunía con los profesionales que trabajaban con él. Pizarro le llevaba documentación a Bustos, por ejemplo los estados de avance, también le sacaba la firma de los estados de pago, precisando que esto último no era función del ITO, *aunque también lo vio con otro*, como por ejemplo, Marcos Pomar. Se le consultó por el proceso de inscripción de las empresas en el Registro de Contratistas, a lo cual respondió explicando el mismo procedimiento informado por la testigo Claudia Zenteno. La inscripción irregular tuvo lugar con Grossman, supo de ello por Félix Flores, toda vez que la citó a su oficina y le entregó los antecedentes diciéndole que *la inscripción se hiciera lo más rápido posible*; señaló no recordar la fecha o época en que ello ocurrió; la inscripción fue rápida; la documentación recibida la chequeó con el formulario y después se la envió a los asesores jurídicos y financiero; estos revisaban y emitían un informe, de allí pasaba a un técnico; en este proceso le llamo la atención que hubiera sido *tan apresurado y que los antecedentes le hubieran llegado de manos de Félix Flores para su check in*. Declaró que cuando ella los revisó se percató que no estaban todos los antecedentes requeridos, por ejemplo, al certificado de capital comprobado le faltaba la firma del jefe de la sucursal y el sello de agua; esta situación de la documentación faltante la habló con Claudia, ella decidió hablar con el Comandante Osses, quien en ese momento estaba subrogando, le pidió le

escaneara los antecedentes y se los enviara por vía electrónica las irregularidades detectadas.

Se le exhibieron los documentos N° 1.243 (NCU 19123658 de Claudia Zenteno Quiroz, de fecha 16.01.2014; que remite NCU 18972043 y 19049535), **1.244** (escritura pública de sesión de directorio de la empresa Construcciones Grossman, de fecha 02-10-2013, ante el notario público Raúl Undurraga Laso, titular de la 29° Notaría de Santiago, Repertorio N° 5795-13), **1.245** (Acta de entrega de Boleta Bancaria de Garantía por seriedad de la oferta, N° 69, de fecha 09-01-2013), **1.246** (Copia de inscripción ante Registro de Comercio de Viña del Mar, carátula 492749, de fecha 22-05-2013), **1.247** (Certificado de Banco de Chile, de fecha octubre de 2013, respecto de la empresa Constructora Grossman S.A, que informa cuenta corriente N°1420320206 y patrimonio que registra) y **1.248** (Certificado de antecedentes laborales y previsionales N° 1312/2013/29617, de fecha 20.09.2013, emitido por la Dirección del Trabajo, respecto de la empresa Constructora Grossman S.A.). Examinados los documentos por la testigo se refirió a ellos diciendo: del primero, *e es el documento que da cuenta de lo que verificaron y que Osses le ordenó confeccionar*; en él aparecen las irregularidades detectadas; del segundo, corresponde al extracto de la empresa Grossman, este documento se le pide a toda empresa que solicite su inscripción en el Registro, pero que el documento debía *ser con firma de notaría*, este documento tenía fecha posterior a la fecha en que se había requerido; del tercero, corresponde a un acta de entrega de la boleta de garantía, las cuales deben hacerse a través de acta para respaldo de ambas partes, se pide el RUT, el “carnet” de la empresa; del cuarto, corresponde a la copia de la inscripción de la empresa Grossman, o sea, *es un documento que viene del Conservador de Bienes Raíces*; del quinto, corresponde a un certificado emitido por el banco respecto del capital comprobado de la empresa Grossman, señalando *que este documento no venía con el nombre ni firma del jefe de la sucursal y tampoco con el timbre de agua*; y, del último documento, corresponde a un certificado de antecedentes laborales de la empresa Grossman; señala que *al parecer estaba fuera de la fecha que se exigía para efectos del registro*. Respondió a la fiscalía que el proceso terminaba con la inscripción. También se le exhibieron los documentos N° 1.249 (mismo documento correspondiente al N° 1056), **1.250 y 1.253**. Señaló que corresponden a la Resolución de inscripción de la empresa Grossman, de fecha 28 de octubre de 2013, la irregularidad proviene del hecho que esta inscripción es anterior a la fecha en que la empresa remitió los antecedentes; en la misma resolución se hace

referencia al oficio N° 1.277, de 7 de noviembre, del abogado Nicolás López. Refirió que el proceso de inscripción demora 2 a 3 meses, por lo que *eso ya era irregular*, además de la discordancia en las fechas; el asesor jurídico informó los antecedentes faltantes a la empresa Grossman, corresponden a antecedentes requeridos en el formulario. El último documento, Oficio N° 101, de 8 de noviembre, del asesor de riesgo, Pedro Jofré, en dicho documento se *habla del capital comprobado de la empresa*. A continuación se **le exhibieron los documentos N° 1.111 y 1.252**; el primero: lo reconoce, se trata de una carta de invitación a una licitación privada, se invita a la empresa Grossman a participar, es de fecha 4 de noviembre, se dice en ella que debe entregar los antecedentes para participar el 12 de noviembre de 2013, en la oficina de partes; el segundo documento, lo reconoció, señaló que corresponde a la carta dirigida al jefe Departamento de Cuarteles, de fecha 14 de noviembre de 2013, mediante la cual remite los antecedentes necesarios para la inscripción conforme a los requisitos que señala el formulario y que se piden a todos los contratistas; señaló que no es frecuente que las empresas que aún no están inscritas presenten antecedentes a un proceso de licitación. Respondió que la empresa no debía haberse inscrito porque le faltaban antecedentes. Dijo conocer a César Rojas porque en su momento tuvo reuniones con Bustos en el Departamento de Cuarteles, lo iba a visitar directamente, lo que le consta porque tenía su oficina al lado de la de Bustos, y por tanto lo veía cuando tenía reuniones a puerta cerrada; dijo que imaginaba que las reuniones serían de trabajo, que Rojas iba por la empresa, por los proyectos que se estaban haciendo; cree iba por la empresa porque él estaba involucrado ya que formaba parte de la empresa Grossman; esas reuniones tuvieron lugar durante los procesos de los cuarteles del sur. Respecto de la irregularidad mencionada, se hizo una investigación cuando Claudia le dio información al Comandante Osses; le enviaron los antecedentes que manejaban en kardex, pero no siempre estuvieron allí porque hubo un momento en que desaparecieron, lo que le consta porque constantemente les pedían enviar los antecedentes escaneados; esto lo hablaron con quienes iban habitualmente a su oficina, y un día aparecieron los antecedentes faltantes dentro de la carpeta que ellas tenían en la oficina; no tenía buena ni a mala relación con Bustos, no había una relación cercana con él, era una relación de jefe a trabajadora; con Francisco Pizarro eran compañeros de trabajo.

Interrogada por el querellante señaló que las reuniones eran largas, extensas; César Rojas estaba vinculado con la empresa Grossman porque era socio o

trabajaba para ella, lo que era de conocimiento de todo el Departamento de Cuarteles, “era rumor”; en la oficina de partes se puede guardar N° a la resolución, pero eso debía solicitarlo un jefe, en este caso Bustos y Flores, aclarando que esta no era una situación normal, era excepcional, “en este caso, ya hablada con el General de Logística”; la oficina de partes de ésta última quienes ponían el N° a la resolución.

Interrogada por la defensa de Bustos respecto de la fecha de ingreso a Carabineros, respondió que ello ocurrió el año 2009, y en 2011 o 2012 ingresó a trabajar al Departamento de Cuarteles; estuvo con pre y post natal durante ese período; su hijo nació el 23 de mayo de 2013; tuvo casi dos meses de prenatal y seis de post. Su jefe era Flores, quien la evaluaba era el Comandante Bustos. Señaló que Félix Flores, cuando le pasó la carpeta con los antecedentes de Grossman, le dijo que *quería que estuviera inscrita lo antes posible*.

Interrogada por la defensa de Pizarro señaló haber escuchado discusiones entre Bustos y Pizarro en la oficina del primero, lo que dijo constarle consta porque su oficina estaba al lado de la oficina de Bustos; veía a Pizarro que quedaba muy molesto después de esas reuniones. Se le exhibe declaración de 23 de octubre 2016: sí, se escuchaban gritos de Bustos a Pizarro, provenían de la oficina de Bustos; Pizarro se ponía bastante nervioso; no recordó si Bustos le decía sobrenombres; Pizarro no podía ir a hablar directamente con el DILOCAR; las resoluciones que llevaban a DILOCAR para firmar eran “muchas”, regresaban en el día o al día siguiente; documentación de L1 no siempre transitaba por oficina de partes, y si no tenía timbre significaba que no había ingresado por fuera; contratistas entregaban a veces documentación por mano a los ITO o profesionales; lo hacían muchas empresas, pero no recordó cuáles; explicó el conductor regular que seguía la documentación ingresada a oficina de partes, entre ellas las solicitudes de estado de pago. **Se le exhibe el documento N° 24, de sus medios de prueba** (anteriormente incorporado): lo reconoce y hace lectura parcial, siendo su tenor, en lo pertinente, el mismo que antes constó en su primera lectura;

Interrogada por la defensa de Gutiérrez confirmó sus dichos precedentes:

Interrogada por la defensa del acusado Rojas, respondió: supo del documento exhibido por la defensa de Pizarro porque después llegó a la oficina de Kardex; el Coronel Osses supo de la desaparición de documentos y ordenó que debían buscarse y encontrarse, apareciendo estos a los pocos días; los requisitos de inscripción se encuentran en la ley, el formulario no formaba parte de esa normativa. Se **le exhibió, del documento N°1, de la prueba de la querellante, la foja 2.853** del sumario administrativo: lo reconoce, es un certificado de fecha 15 de noviembre de 2013, capital comprobado, emitido por el Banco de Chile, declara que el cliente, empresa Constructora Grossman, RUT, mantiene con nuestro banco una cuenta corriente desde marzo de 1995, y de acuerdo al balance de 31 de diciembre de 2012, mantiene una capital de *equis* cantidad de dinero. Explicó que la irregularidad que notó en el proceso de inscripción consistió en que la Resolución que la autorizó fue de fecha anterior a la presentación de los antecedentes faltantes para emitir los informes de evaluación de los asesores. A fin de **evidenciar contradicción** con su declaración de 23 de octubre de 2018 en fiscalía de Carabineros, en la que declaró que en los antecedentes del proceso de inscripción de la empresa Grossman no había ninguna carta de invitación, en circunstancias que su declaración inicial de este juicio señaló que sí hubo carta de invitación: reconoce la declaración y su firma; leída para sí, respondió que las cartas de invitación no estaban dentro de los antecedentes en ese momento pero que después aparecieron, “tuvieron que haberlas encontrado”. Los comentarios de pasillo eran que *había un trato entre Bustos y Rojas* para la terminación de las obras del sur que habían quedado inconclusas.

Interrogada nuevamente por el querellante respecto de si era habitual o normal que se invitara a participar a empresas no inscritas, respondió que eso no era habitual.

Interrogada por la defensa de Gutiérrez respondió que no conoció a Carlos Bustos Prats, y que en enero y febrero de 2014 ella aun trabajaba en Carabineros;

12°) (55) testigo RICARDO ALEX PARRA JORQUERA (soldador).

Interrogado por el ministerio público, respondió el testigo: trabaja hace 14 años en el Departamento de Cuarteles, en la sección de mantenimiento y reparación de cuarteles, viene a declarar por una Comisión de servicio en el año

2013, su jefe era el Sr. Flores y después de él venía el Sr. Bustos; la Comisión fue en el segundo semestre, la comisión se la informo el Sr Francisco Pizarro, le dijo que iban a hacer unos trabajos en Coyhaique, “llegamos a Villa Ortega”; las Comisiones se las dan por documento, él sólo les informó, no vio documento alguno pero cree que sí existió; en la Comisión fueron el Sr. Donoso, el Sr. Walter Ávila, Jaime Meliqueo, el Sr. Juan Jeldres, David Acevedo, y él; todos ellos son trabajadores; iba dirigiendo el Sr. Francisco Pizarro; era una construcción nueva, se estaba armando, era como un retén; cuando llegaron estaba más o menos un 90% construido; soldó “todo lo que era pasamanos”, hizo un portón para las caballerizas, unos techos para unos cilindros de gas que había que cerrar; los materiales que ocupó estaban ahí; duró 15 días la Comisión; le pagaron un viático, también los pasajes de avión; alojaron en la misma construcción, habían camas; los horarios de era de 8,30 a 6,30 horas, pero había que trabajar sobretiempo porque “era mucho trabajo, era mucho trabajo”; todos tuvieron que trabajar sobretiempo, David en albañilería, había un carpintero, un eléctrico, un pintor y un gásfiter; el pintor pintó un calabozo; habían materiales pero no habían más cosas que las que él ocupó y unas pocas latas de pintura; no se les dijo qué empresa estaba a cargo de la obra; no es habitual ir a terminar obras, lo que les corresponde es trabajar en obras que ya están hechas, el lugar no estaba en condiciones de ser ocupado o inaugurado;

Interrogado por el querellante, respondió que el material que había era fierro, las herramientas “las llevé de aquí, son fiscales”, las llevé en avión; el carpintero tuvo que hacer unos muebles, pero sin saber qué tipo de muebles eran; el domingo trabajaron medio día; los demás días trabajaban hasta las 9 de la noche; hizo las puertas y los techos de los calefont, entre otras cosas;

Interrogado por la defensa de Bustos, señaló que no tuvo contacto con Bustos Morgado; Carla Salinas era la encargada de la sección reparaciones y mantenciones; 13 personas, todos trabajadores, trabajaban en esta sección; la Comisión fue por 15 días; previo a una inauguración van a hacer las mantenciones que correspondan, a ver que todo esté funcionando, si algo no estaba hecho había que hacerlo; cuando iban a trabajar en las inauguraciones no les pagaban viáticos.

Interrogado por la defensa de Pizarro, respondió que las herramientas las llevó dentro de un bolso y este en el avión; cuando estaban trabajando llegó un camión,

no supo que había dentro de este; no recordó marca ni color; Pizarro ayudó en los trabajos; las herramientas regresaron en avión; no sabe si Pizarro tuvo que comprar materiales; había que terminar el retén, “no creo” que la mantención sea lo mismo que reparación.

Interrogado por la defensa de Gutiérrez, respondió que usó fierros redondos, cuadrados, ángulos; cree que sus colegas utilizaron materiales que estaban allí;

Interrogado por la defensa de Rojas, respondió que con los trabajos realizados el retén quedó en situación de ser inaugurado; respondió no conocer a César Rojas;

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N°66, foja 2.688: *demanda de despido injustificado y prestaciones, demandante Carlos Bustos Prat, demandado constructora CGM Ltda., representante Christian Gutiérrez Martínez, demandado subsidiario Fisco-Carabineros de Chile, representado por Jorge Rojas Langer; hechos ingresó a prestar servicios el 2 de enero de 2013, hasta el 11 de octubre de 2013, en que el representante legal puso término a mi contrato vía telefónica, sin expresión de causa; fue contratado como jefe de logística, no estaba sujeto a jornada laboral, y dado que trabajaba en otra empresa vinculada a CGM; no se le escrituró contrato ni extendió liquidaciones de sueldo; tenía a su cargo las adquisiciones, gestión de stock, entre otras, tenía dos personas a su cargo, en un principio su jefe era César Rojas, lugar de desempeño fue en Exequiel Fernández N° 858, en los primeros 5 meses, y después El Valle N° 662, Huechuraba, remuneración era \$1.200.000, líquido; posteriormente comenzaron los problemas, Cristian Gutiérrez empezó a desviar sus bienes hacia otras empresas por lo que se le venía encima, quedándose igualmente por las promesas de mejoramiento de su jefe y la remuneración; revisó las cotizaciones y se dio cuenta que nunca habían sido pagadas; el despido fue ilegal e injustificado, no se invocó causal ni citado a firmar finiquito; quedó adeudando remuneraciones por 12 millones, indemnización por despido sin aviso previo, feriado legal, cotizaciones previsionales más los incrementos legales (80% o lo que el tribunal determine); timbre y fecha recepción Juzgado de Letras de Colina, 16 de diciembre de 2013; más abajo timbre 7 de enero de 2014, N° 27368, más otro timbre con fecha 6 de enero 2014.*

Documento N°1.235 (documento electrónico NCU 16947174, de César Bobadilla, de fecha 25 de octubre de 2013; asunto: instrucciones L1, informa): *sub oficial Israel Cuevas, 25 de octubre de 2013, asunto: instrucciones L1; informa: que las 9,15 horas de hoy llamó telefónicamente a Coyhaique Alto el subteniente Parra Ávila, de L1, quien comunicó que por instrucciones del Coronel Félix Flores Santis “no puede ingresar personal de la empresa CGM o ex trabajadores a la construcción nueva, tenencia Coyhaique Alto y a la Tenencia Lago Castor ni tampoco pueden retirar materiales ni especies de construcción, en atención a que esa empresa no dio cumplimiento al contrato, por lo que se encuentra en trámite la terminación del contrato y la licitación de una nueva empresa que termine las obras”; adición: disponga inventarios y custodia de los materiales existentes y despedir al personal que se encuentre en la obra pertenecientes a la empresa; firma Bobadilla, Comisario 1era Comisaría de Coyhaique.*

Documento N°1.236: NCU 15719072, prefectura Aysén, 9 de septiembre de 2013, asunto: *fiscalización obras de construcción tenencia Coyhaique Alto y suspensión de faenas: se informa a esa superioridad que hoy a las 10 se constituyó en la obra en construcción la señorita Daniela Paz Gallardo Vargas, cédula de identidad id 13740259-9, profesional fiscalizador y funcionaria de la secretaria ministerial de salud de la región de Aysén, quien se entrevistó con el encargado de la obra, Luis Alejandro Alvarado Cárcamo, procedido a la fiscalización, y a las 11,30 la funcionaria señalada se presente en el servicio de guardia a fin de efectuar entrega copia 7536, respecto de la fiscalización de la obra tenencia CA, e informó que a contar “de esta fecha” se suspenden las faenas de construcción y dar inicio a un sumario sanitario a la espera que la empresa subsane las deficiencias encontradas; se adjunta copia del acta; Adición: Francisco Díaz, pónese en conocimiento de esa superioridad la suspensión de obras y el inicio del sumario sanitario.*

Documento N° 1.237: NCU 16647380, prefectura de Aysén, 15 de octubre, 2013; asunto: *constructora CGM, 18,21 horas; mediante el presente documento se informa a ese Departamento que el día de hoy siendo las 11,10 horas aproximadamente, el ayudante de la prefectura Aysén, Carlos Quijada Salazar, recepcionó el llamado de una persona de sexo masculino que se identificó como Eduardo, diciendo que era trabajador de una cuadrilla de la empresa CGM, que está realizando trabajos en Coyhaique Alto, Lago Castor y Villa Ortega, indicando*

que no le han efectuado la cancelación de haberes y mantiene a su cuadrilla y demás que laboran en las faenas sin alimento y completo desamparo, por lo que solicita que la institución interceda ante los ejecutivos de CGM para la solución y especialmente el pago de las remuneraciones; solicita que esta información sea entregada a Francisco Pizarro Dasso, quien ha inspeccionado varias veces las obras; firma Daniel Zaninovic Berríos.

Documento N° 1.241: NCU 18281527, prefectura de Aysén, de fecha 13 de diciembre de 2013; asunto: construcción cuartel fronterizo de prefectura de Aysén; para: Departamento de Cuarteles L1; *se informa que con esta fecha, siendo las 9,00 horas se presentó en la tenencia Coyhaique Alto el señor Ignacio Labra Moscoso cédula de identidad N° 10.479.958-2, domiciliado en la comuna de La Reina, profesional de la empresa Constructora Grossman S.A., encargado de continuar con la construcción de la obra, lo hace acompañado de una cuadrilla, señala que ocupará la casa anexa para pernoctar en ese lugar, se hace presente que el personal de esa tenencia tomó contacto con Francisco Pizarro, a fin de darle a conocer la situación; firma Daniel Zaninovic Berríos.*

13°) (54) Testigo Jaime Lorenzo Meliqueo

Interrogado por el ministerio público respondió que trabaja en Carabineros, en el Departamento de Cuarteles, desde hace diez (10) años, en el área de mantención y reparación, siempre en el mismo lugar se ha desempeñado; sabe que viene por lo que pasó en Coyhaique; sus jefes eran a esa época el Coronel Flores y el Comandante Bustos; lo que ocurrió fue que tuvieron que ir a terminar un cuartel, unas terminaciones, fuer una Comisión de servicio; fue el año 2013, casi a fines de año; fueron a Villa Ortega, el Sr. Pizarro le dijo que tenía una Comisión de Servicio a Coyhaique, no le mostró algún papel al respecto, el (testigo) no lo habló con sus jefes, fueron varios compañeros: Parra, Ávila, Jeldres, Donoso, Acevedo, y él; todos eran trabajadores; a cargo de ellos estuvo el Sr. Pizarro; llegaron en avión y luego un móvil que los trasladó hasta el retén; la construcción “la vi en un 70 a 80%”; le correspondió instalar unas puertas de closet, unos roperillos, “como les dicen”; eran como 30 puertas, la Comisión estuvo alrededor de 12 días; la instalación de las puertas *era harto trabajo* porque *había que hacer las puertas, cortar maderas, dimensionar*; aparte de esto no hizo otras obras; *trabajó apurado por el plazo que tenían de la Comisión*; los

compañeros hicieron pintura, pegar cerámico, por ejemplo; *el material de los closet provenía de un camión que trajo la plancha, no supo de dónde venía*; le pagaron la comisión, el viático; el pasaje lo pagó Carabineros; durmieron en el mismo cuartel, “en la misma construcción nueva”; *las reparaciones y mantenciones que habitualmente realizan es poner piso flotante, repisas, tabiques; en algún momento le tocó ir a terminar obras*; trabajaban todo el día, “ocho de la noche”; las Comisiones no tienen horario; las condiciones de trabajo eran regulares, ellos mismos compraban sus alimentos; los Carabineros del lugar iban de visita, ellos no lo ayudaron en su trabajo; no supo qué empresa estuvo a cargo de las obras.

Interrogado por el querellante señaló que el material utilizado fue melanina; algunas herramientas eran suyas y otras de Carabineros; las llevó en un bolso (sierra y taladro), las demás llegaron en un camión; no había agua caliente; el cuartel no estaba en condiciones de ser inaugurado, *había montones de tierra*;

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos señaló que la sección en que trabaja presta servicios “donde se requiera”; calificó el trabajo que realizó como *obra mayor atendida la cantidad y el tiempo que se le dio para hacerlo*;

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro respondió que en la sección trabajaban alrededor de 15 personas y que alrededor de 6 personas fueron a la Comisión en Aysén; se le pagó viático y pasajes de avión; sus herramientas las llevó en un bolso, arriba del avión, no sabe si se pagó sobrepeso; no recuerda el color del camión, tampoco si tenía un logo de la institución, Pizarro también trabajó en las obras, *ayudaba; las otras obras a que antes se refirió consistían en “reparaciones de retenes ya construidos”*;

Interrogado por la defensa de Gutiérrez señaló que había materiales en la obra, “quedaban materiales, habían cosas”; no supo quién era el dueño de esos materiales;

Interrogado por la defensa del acusado Rojas respondió que esos trabajos no eran los “habituales” que se hacían para una inauguración de los cuarteles, ya que los trabajos que él hizo *no fueron detalles*.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N°1.251 (carta de Carlos Grossman en representación de empresa Grossman S.A., de fecha 18 de noviembre de 2013, dirigida al jefe del Departamento de Cuarteles L1, Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile): carta de 18 de noviembre de 2013, a Félix Flores Santis: empresa Grossman S.A. remite certificado de capital comprobado; firma Carlos Grossman Badrián;

Documento N° 1.119: Informe de evaluación de propuestas N° 14, de fecha 13 de noviembre de 2013, Departamento de Cuarteles L1, Dirección Nacional de Logística de Carabineros, suscrito por Fabián Gutiérrez, Isidro Martínez, Pedro Jofré, Luis Parra y Christian Bustos Morgado: informe evaluación de propuesta N° 14; terminación proyecto reposición tenencia carabineros Coyhaique Alto, trato directo; Santiago, 13 de noviembre de 2013; objetivo: evaluar las ofertas recibidas para la contratación de las obras civiles, monto \$83.475.464, plazo 75 días corridos; invitaciones: cartas de invitación de fecha 4 de noviembre de 2013 a las empresas FEALFRA SPA, Grossman S.A., Olga Garfias Fuentes, Cocerco Ltda.; presentación de oferta: oferentes que concursan: FEALFRA SPA, Grossman S.A.; evaluación jurídica: *las empresas indicadas cumplen con la documentación jurídica habida en esta repartición*; evaluación financiera: *los antecedentes habidos en esta repartición no presentan observaciones y pueden continuar con el proceso administrativo*; criterios y metodología de evaluación: oferta económica 70%; plazo 30%, total 100%; a) FEALFRA SPA: evaluados los antecedentes técnicos (itemizados casa, cuartel y módulo, análisis precio unitario, marcas y modelos), no existen observaciones al respecto; b) empresa Grossman S.A.: evaluados los antecedentes técnicos (itemizados casa, cuartel y módulo, análisis precio unitario, marcas y modelos), no existen observaciones al respecto; conclusiones y recomendaciones: *se sugiere a la empresa constructora Grossman S.A., con un puntaje de 100%*, por cumplir con todos los antecedentes y requerimientos; firman Fabián Gutiérrez, arquitecto; Isidro Martínez Bacigaluppi, abogado; Pedro Jofré Montero, oficina de presupuesto, subteniente oficina control de proyectos; y Christian Bustos Morgado, jefe área de Gestión y Coordinación de Proyectos L1.

Documento N° 943: NCU 10784052, de fecha 5 de marzo de 2013, de Francisco Pizarro Dasso a subteniente Luis Parra, solicita Comisión de Servicio para inspección de obras en la Región de Aysén: *de Francisco Pizarro Dasso para subteniente Luis Parra, CPR Andrea Campusano, arquitecto, Coronel Félix Flores; asunto: comisión inspección de obras Aysén, 5 de marzo de 2013, 9,34 horas; a efectos de la fiscalización mensual de las obras retén Villa Ortega, Lago Castor y tenencia Coyhaique Alto, se solicita autorizar Comisión de Servicio al infrascrito y al jefe de la sección, desde el 11 de marzo de 2013 al 15 del mismo mes, con la finalidad de fiscalizar y recepcionar partidas ejecutadas para su posterior confección de estados de pago; se solicita para Félix Flores Santis; Francisco Pizarro Dasso; firma CPR Francisco Pizarro Dasso.*

Documento N° 1.040 (NCU 15482747 del Departamento de Cuarteles L1, con fecha 30 de agosto de 2013, con el asunto: “Comisión de Servicio, visita a terreno proyectos en licitación; para 10ª Zona de Carabineros Los Lagos; informativo prefectura Llanquihue, Coronel Félix Flores, CPR Francisco Pizarro Dasso; asunto: comisión de Servicio, visita a terreno proyectos, agosto de 2013: *atendida la necesidad de fiscalizar las obras de los proyectos de reposición y verificar el estado de avance, y visitar los destacamentos en su comportamiento post venta, ya inaugurados, se solicita autorizar a este mando a realizar una Comisión de Servicio a fin de dar cumplimiento de los actos administrativos, a partir del 2 de septiembre de 2013, hasta el 4 del mismo mes; unidades: Isla Huar, Isla Coluqui, Pargua, Correntoso y Nueva Granada, ambos post venta; personal, Félix Flores Santis, CPR Romina Parraguez, ingeniero civil, CPR Andrea Campusano, CPR arquitecto Francisco Pizarro. Consecuente con lo anterior, de acceder, se solicita autorizar para requerir pasajes aéreos con el siguiente itinerario (salida, 2 de septiembre en la tarde, y regreso, 4 de septiembre en la tarde). Firma Félix Flores Santis, jefe Departamento de Cuarteles L1.*

Documento N° 66, sumario administrativo, fs. 2.630: 23 de junio de 2014, 14,05 horas: adjuntos OC 5240-516 SE2013 y 154-2013; solicita remitir información de bienes y servicios que hayan sido contratados, bajo cualquiera modalidad, por la institución con Juan Alejandro Soto Jara, también conocida como FEALFRA, conocida actualmente como FEALFRA SPA; empresa Bustos Morgado S.A.; empresa Miguel Torrejón; empresa Osvaldo Tobar Fernández; empresa Bustos y Tejías Construcciones Ltda.; fs. 2633 (tabla): 1) Empresa Juan Soto Jara E.I.R.L

FEALFRA: trato directo, cierre perimetral Fundación Las Rosas; trato directo, reparación retén Teniente Carlos Valdovinos; trato directo, Resolución Exenta N° 1328, de 23 de noviembre de 2010, reparación subcomisaría Conchalí Norte; trato directo, reparación 27ª comisaría aeropuerto; trato directo, reparación 33ª comisaría de Ñuñoa; trato directo, reparación tenencia de Melipilla; trato directo, Resol. Exenta N° 1315, 23 de noviembre de 2010, reparación 23ª comisaría de Talagante; licitación, Resolución Exenta N° 3172143 LP 11, reposición tenencia Hualañé; licitación, Resol. Exenta N° 3172-144-LP11, reposición retén de carabineros Melozal; licitación, Resolución Exenta N° 31172-14-LP11, reposición retén Loica; trato directo, Resolución Exenta N° 1596, 29 de diciembre de 2010, ajuste cierre perimetral que limita con Fundación Las Rosas; licitación, Resolución Exenta N° 3172-92-LP12, reposición retén Carabineros Lontué; licitación, Resolución Exenta N° 317293-LP12, reposición retén Carabineros Itahue; licitación, Resol. Exenta N° 3172-95-LP12, reposición retén de Carabineros del Maule; licitación, Resolución Exenta N° 3172-31-LP13, reposición retén Carabineros La Islita; licitación, Resol. Exenta N° 3172183-LP13, reparación baños personal solteros y baños casino, 1ª Comisaría, Viña del Mar; licitación, Resol. Exenta N° 317279-LP13, proyecto reposición subcomisaría San Francisco de Mostazal; y, 2) Empresa Construcción e Ingeniera Torrejón Ltda.: licitación, Resolución N° 3172-1367-LP10, reposición retén Las Cañas; trato directo, Resolución, reparación tenencia Batuco; trato directo, Resol. Exenta, reparación tenencia de carretera Lampa; trato directo, Resol. Exenta, reparación 8ª comisaría Colina; licitación, Resol. Exenta N° 3172-137-LP11, reposición retén Ovejería; licitación, Resol. Exenta N° 3172-46-LP11, reposición retén Valle Hermoso; licitación, Resol. Exenta N° 3172-10-LP11, reposición retén Corinto; licitación, Resol. N° 3172-12-LP11, reposición retén Botacura, licitación, Resol. Exenta, construcción retén Reñaca Alto, licitación, Resolución N° 3172-27-LP12, reposición retén de Carabineros Camarico; licitación, Resol. Exenta N° 3172-26-LP12, reposición retén de Carabineros Linderos; licitación, Resolución. Exenta N° 3172-25-LP12, reposición retén Alto Jahuel; licitación, Resolución Exenta N° 3172-36-LP12, reposición retén Mariposas; licitación, Resolución N° 3172-35-LP12, reposición retén Las Lomas; licitación, Resolución N° 3172-28-LP12, reposición tenencia Reina Luisa; licitación, Resolución Exenta N° 3172-103-LP12, reposición planta de tratamiento y anexos retén Loica; licitación, Resolución Exenta N° 3172-31-LP12, reposición retén Isla Santa María; licitación, Resolución N° 3172-189-LP12, reposición ventanas y puertas en ex-Focar; licitación, Resolución N° 3172-41-LP13, reposición tenencia Carabineros Liquine; licitación, Resolución N° 3172-

141-LD13, reposición retén Llallauquén; licitación, Resolución N° 3172-77-LP13, reposición retén Neltume;

Documento N° 1.310: estados de pago remitidos al ministerio público mediante Oficio del Departamento de Análisis de Inteligencia de Carabineros, N.U.E. N° 2097826, ofrecido también como documento N° 699:

1°.- Estados de pago:

1) proyecto Isla Huar: N° 1: Oficio 933, 8 de marzo de 2013 (remite factura para fines que indica, contrato entre Carabineros y constructora CGM; de Departamento de Cuarteles a Departamento de Contabilidad y Finanzas L8); Oficio N° 19, de 1° de marzo de 2013; Contrato de Obra Isla Huar; N° 2: Oficio N° 560, Santiago 18 de abril de 2013, de Departamento Cuarteles a Departamento Contabilidad y Finanzas L8; N° 3 Isla Huar: Oficio N° 666, 7 de mayo de 2013, de Departamento de Cuarteles a Departamento de Contabilidad y Finanzas L8; Oficio N° 3 de 18 de abril de 2013, timbre oficina de partes 19 de abril de 2013; N° 4, 5, 6, 7 y 8;

2) proyecto Lago Castor: N° 1, 2, 3, 4; N° 5 (remite factura por \$53.278.216; Oficio Departamento de Fiscalización; detalle estado de pago aprobado monto final ídem factura menos retenciones 5% por 19 millones y fracción; itemizado de obras (retén, casa anexa y caballerizas); certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales período marzo 2013, no registra deudas ni multas por no pago, comprobante pago de cotizaciones marzo 2013, fecha pago 13 de abril mismo año, certificado AFP Habitat, Modelo, Provida, IPS, certificado Mutual de Seguridad, póliza de seguro HDI obras, accidentes, 14 de diciembre 2012); N° 6, Lago Castor (mismo detalle: factura por \$ 54.839.490, Oficio enviado por Oficina de Fiscalización de Obras a Departamento de Cuarteles L1 con documentos adjuntos (v.gr., certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, carta solicitud contratista a ITO, para pago estado de pago N° 6, liquidación total ídem anterior menos 1 millón y retención 5% por \$19.457.868, firmas contratista, ITO y jefe Cuarteles Félix Flores Santis, Coronel Carabineros, V°B° y rúbrica, fecha 27 de mayo de 2013); N° 7, Lago Castor (mismo detalle: factura por \$ 36.825.402, Oficios Cuarteles y Oficina de Fiscalización de Obras a Departamento de Cuarteles L1, solicitud de tramitación administrativa para pago 7° estado; N° 8,

Lago Castor (mismo detalle: remite factura por \$ 35.032.021, Oficio Cuarteles a Oficina de Contabilidad; Oficio oficina de Fiscalización de Obras L1 a Departamento de Cuarteles L1, solicitud de tramitación administrativa para pago 8° estado de pago);

3) proyecto Coyhaique Alto: N° 1 (factura por \$ 46.747.334 de 27 de diciembre 2012, carta de solicitud de 27 de diciembre de 2012), N° 2 (factura de 1° de febrero de 2013, por \$ 21.1451.112, liquidación y retención 5%, \$19.303.001, carta de solicitud de 28 de enero de 2013, itemizados); N° 3 (factura por \$34.699.207, de 28 de febrero 2013; certificados de pago y deudas previsionales, certificado con detalle remuneraciones extendido por la Dirección del Trabajo; certificados AFP varias; carta solicitud de pago 28 de febrero de 2013; N° 4 (factura por \$31.984.648); N° 5 (L1 a L8, adjunta factura N° 46, estado de pago N°5, de 17 de abril de 2013, empresa CGM Ltda., total a pagar \$54.847.886, certificados antecedentes laborales y previsionales DT, itemizados retén, casa anexa y caballerizas; certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, marzo de 2013, certificados AFP varias y de Isapres); N°6 (factura N° 52, de 20 de mayo de 2013, de CGM, por \$54.140.184; N° 7 (factura N° 57, de 28 de junio de 2013, de CGM Ltda., por \$34.244.168; carta de solicitud misma fecha; planilla estado de pago; informe técnico de 28 de junio 2013; acta de aprobación estado de pago ITO Pizarro, 28 de junio de 2013, por \$34.244.168; itemizado retén, casa anexa y caballerizas "Lago Castor"; certificados antecedentes laborales y previsionales, AFP e Isapres, certificado vigencia DT hasta el 17 de julio de 2013); N° 8 (factura N° 66, de 5 de agosto 2013, de CGM Ltda., por \$32.026.396; carta de solicitud misma fecha; planilla estado de pago; informe técnico de 2 de agosto 2013; acta de aprobación estado de pago ITO Pizarro, 5 de agosto 2013, por \$32.026.396; itemizado retén, casa anexa y caballerizas; certificados antecedentes laborales y previsionales, AFP e Isapres, certificado vigencia DT;

2°.- Oficio del Departamento de Análisis de Inteligencia de Carabineros, (N.U.E. N° 2097826), incluido como prueba documental N° 699: *Documento Electrónico Ordinario N.C.U N° 74131010 de fecha 9 de febrero de 2018, de la Dirección de Logística de Carabineros, por el cual remite documentación relacionada con los pagos efectuados por la construcción de los Retenes Lago Castor, Villa Ortega, Isla Huar y Tenencia Coyhaique Alto, y 8 Oficios por cada uno de los proyectos, con el detalle de la información;*

14°) (41) Testigo JORGE ENRIQUE ROJAS LANGER (ex oficial de Carabineros).

Interrogado por el ministerio público respondió: se desempeñó durante 36 años en Carabineros, sabe que viene por una situación que ocurrió en el Departamento de Cuarteles cuando él era Director de Logística; las funciones de esta Dirección es proveer todo lo material y tecnológico para lograr los cometidos de la institución; consta de Departamentos y Secciones, entre ellos el Departamentos de cuarteles, desde L1 a L8; sus funciones en relación a esos Departamentos era *recibir el desempeño* de cada uno de ellos; éstos le presentan al Director para firma formal todo lo que se va a comprar o reparar; cuando llegó el jefe de Cuarteles era el Coronel Félix Flores y su ejecución a cargo del Comandante Bustos; el personal que trabaja en los Departamentos es personal de confianza; de L1 le informaban Flores y Bustos, y en ocasiones el Teniente Parra; mayormente iban Flores y Bustos; tenía un jefe técnico01, de gabinete y de asesores jurídicos, pero para otros ámbitos de la Dirección o de algún Departamento cuando éstos así lo requieren; lo que firma el Director vienen estudiado, analizado, firmado por las jefaturas; de Bustos sabía por su desempeño institucional, su calidad profesional, que lo hacían ser una persona de absoluta confianza; Bustos llegó a Cuarteles al parecer por su capacidad, lo que lo hacía valioso para el Departamento; a Flores lo conocía de antes pero en el ámbito sólo institucional; Bustos era quien se involucraba mayormente en la ejecución de construcción o reparación de cuarteles; toda la documentación de Cuarteles pasaba a su firma, no sólo lo más relevante; las más habituales que requerían su firma eran los contratos, licitaciones, suspensión de algún contrato, resoluciones adoptando medidas, aumento, disminución; una vez año los jefes de alta dirección deben pasar revista económica una vez el año; dentro de la documentación que le tocaba firmar estaban las designaciones de los ITO. **Se le exhibe el documento N° 1.266** (Resolución Exenta 1472 de 7 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Logística de Carabineros): señala que está su firma, es la designación de inspector técnico de obras, viene visado por Departamento de Cuarteles y asesoría jurídica. Se da lectura: *nombra ITO para las obras que indica, 7 de diciembre de 2012, Resolución Exenta N° 1.472, desígnase como inspector a Francisco Pizarro Dasso, ingeniero en construcción, Marcos Pomar y Andrea Campusano, retenes Llollinco, La Mina, Isla Huar, Esperanza, Coyhaique Alto, Lago Castor; firma Jorge Rojas Langer, Director General de Logística, timbre.* Consultado acerca de si había tenido relación con los ITO, respondió que no.

Señaló que los ITO rinden cuenta al jefe de sección, Christian Bustos. Dijo no recordar haber visto a Francisco Pizarro Dasso, pero *debo haberlo visto*. Se le llevaba documentación para su firma todas las semanas; su contenido venía estudiado, decidido y visado por las jefaturas encargadas; quien le llevaba la documentación le iba explicando cada carpeta, de qué se trataba, él firmaba, le devolvía la carpeta y se las llevaba de vuelta; excepcionalmente podían estar presentes asesores técnicos de la Dirección, pero no era algo habitual. Indicó que firmaba la adjudicación de las licitaciones, pero que ésta venía decidida, propuesta por el Departamento y los asesores. Nunca rechazó lo que venía propuesto porque sabía que venía estudiado. Consultado respecto de la empresa CGM declaró que supo de ella con motivo de “estas declaraciones”; supo que hubo un incumplimiento del contrato; no recuerda haber firmado la documentación de la licitación de adjudicación de esa empresa, pero que si su firma estaba en el contrato era porque sí había firmado. A César Rojas lo conoce porque era el marido de una funcionaria que trabajó con él, se llamaba Purísima Toledo, era capitán en ese entonces; no supo que el marido hubiera participada en las licitaciones del Departamento de Cuarteles. Bustos y Flores tuvieron que haberle mencionado los problemas que hubo en la construcción de los cuarteles, en la medida que firmó la cesación de esos contratos. **Se le exhibieron los documentos N°198, 169 y 429 (todos ya incorporados anteriormente): el primero:** lo reconoce, se trata de una Resolución, N° 851, de octubre de 2013; se dictó por el incumplimiento del contrato, por haber cesado injustificadamente las obras y por abandonarlas; se lo pidió el Departamento de Cuarteles pero no qué persona exactamente; la Resolución viene visada al margen por asesoría de Cuarteles; **el segundo:** Resol. N° 859, octubre 2013, firmada por él, causal de término contrato Coyhaique Alto, por incumplimiento del contratista, causales fueron no cumplir con las bases de licitación, no cumplir con el plazo original, no coordinar las obras; y, **el tercero:** Resolución N° 860, Lago Castor, término del contrato por las mismas de los otros contratos; consta su firma en el documento. Explicó que el término anticipado ocurría, pero que no era lo habitual, y que no le mereció sospecha, no tuvo ninguna duda de lo que se había decidido. Cuando se “cae” un contrato es legal pasar de una licitación pública a una privada o trato directo; en este caso debe haber sido trato directo; no le explicaron porque era mejor un trato que una licitación, pero la razón de siempre es el tiempo o plazo para terminar las obras; para la firma de estas Resoluciones de término de contrato no recibió una asesoría distinta de la que venía desde el Departamento de Cuarteles. Declaró que le llevaban para su firma las resoluciones para la

inscripción de empresas en el registro de contratistas. **Se le exhibió el documento N° 1.056** (Resolución N° 847): señaló que lo reconocía, *es la aprobación de inscripción de empresa Grossman SA en el registro de contratistas; la resolución es de 28 de octubre de 2013; no recuerda quién le llevó esta documentación, pero tienen que haber sido Flores, Bustos o Parra; no coinciden las fechas*, hay un informe de 8 de noviembre de 2013, de Pedro Jofré Montero, pero el documento que tiene a la vista es de fecha 28 de octubre, situación cuya explicación admite dos posibilidades, una, que no él se haya fijado en la fecha, y la otra, que la resolución, como muchas veces ocurría, no traía la fecha al momento de firmar. Explicó que la primera situación no es (era) habitual; el documento en comento, como todos los emanados de Cuarteles, viene de este y regresa allí mismo; no hay intermediarios; la fecha *tienen que haberla puesto ellos*. La segunda situación, esto es, la entrega de documentación sin fecha ni número de la resolución, ocurría porque cuando le iban a sacar la firma él no estaba; quien andaba con la documentación iba a la oficina de partes a sacar número, fecha y timbre. Declaró que la reserva del número del oficio no se puede hacer porque “son correlativos”, “no se puede”. Señaló que la resolución que autoriza la inscripción en el registro de contratistas no es de gran relevancia, pero sí lo es el hecho de antedatar el documento, esto “no es regular, no está bien”, la gravedad de tal situación es adulterar un documento, “no más que eso”. Consultado por el trato directo explicó que se invita a empresas que se encuentran ya registradas en el registro, no recordando alguna situación en que no haya sido así. Dentro de las resoluciones que firmaba estaban las Comisiones de Servicio, no recordando alguna en particular; no sólo iba la Comisión a recibir la obra sino también iban otras comisiones a revisar si estaba todo en condiciones para que la obra fuera inaugurada, por ejemplo si faltaba algún letrero o el logo de la institución. **Se le exhibe documento N° 637**, lo reconoce, señala que *es el requerimiento del Departamento de cuarteles para una Comisión de Servicio, de 5 de noviembre de 2013, lo envía el asesor de Bustos, Comandante Parra, a nombre de Bustos, está firmada electrónicamente por Flores*. Explicó que él se fue de la Dirección de Logística el año 2013, en los primeros días del mes de diciembre. Señaló haber sabido del sumario administrativo. Desde las prefecturas de Aysén no lo contactaron para informarle lo que estaba sucediendo con las obras, eso tiene que haber ocurrido con los mandos zonales, esto es, con el Departamento de Cuarteles. Ni Bustos ni Flores le dijeron que esa Comisión era para terminar las obras. No tuvo razón para dudar. No supo (sabe) de pagos por obras no realizadas. La supervisión del estado de la obra le corresponde, además del ITO,

al jefe, Coronel Flores, y al encargado de la sección, Comandante Bustos. Explicó que la *relación de confianza la veo en el desarrollo de las funciones de ellos diferencia de la relación de confianza entre estos y el ITO, que se basa en la fiscalización*; la diferencia está en el tipo de información que reciben unos y otros, el Director de Logística, por un lado, y las jefaturas del Departamento y Sección Cuarteles, de otro. **Se le exhibe el documento N° 1.010** (Resolución Exenta N° 381): dijo que en él está su firma, que corresponde al nombramiento de una Comisión para la recepción provisoria de las obras de Villa Ortega, está fechada el 23 de mayo de 2013, y los integrantes de la Comisión fueron Christian Bustos, Andrea Campusano, Guillermo Nadal, Héctor Salamanca, todos dependientes del Departamento de Cuarteles.

Interrogado por el querellante, respondió que: lo normal era que el documento le fuera presentado con fecha pero otras no porque no se sabía cuánto tiempo podía pasar antes de que fuera firmada; podía suceder que los documentos regresaran sin firma ni número y que posteriormente se solicitaran, por ejemplo vía telefónica. La fiscalización de los ITO correspondía a Bustos y Flores. Supo de la situación de los cuarteles sin terminar estando él en su nuevo destino, en la Inspectoría General, concretamente a raíz de la cuenta del nuevo Director de Logística, Sr. Tello. Nunca Bustos ni Flores le informaron acerca de estos hechos. Una Comisión para recepción de obras supone que la obra debe estar terminada. Con Bustos se comunicaba regularmente. Tuvo que haber habido perjuicio fiscal desde que hubo pagos.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, respondió que: fue Director de Logística los años 2012 y 2013. El Director de Logística es el encargado de fiscalizar el trabajo de Cuarteles, pero a través de los jefes de cada uno de esos Departamentos.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, indicó que el staff del jefe de sección del Departamento era quien proponía al ITO para su designación. Cada jefe de área decide cuándo y quiénes van a una Comisión de servicio, él sólo autorizaba. Como Director General de Logística contaba con asesoría jurídica y administrativa, pero no con asesoría técnica. **Se le exhibió el documento N° 25, de sus medios de prueba** (N.C.U. 14179281 10.07.2013 de Félix Flores Santis, Jefe Departamento Cuarteles L1) a personal de su repartición, en que entrega

instrucciones a jefe Departamento DILOCAR). Refirió el testigo que lo reconocía. Se incorpora el documento mediante lectura.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez acerca del documento N° 36, de la prueba del ministerio público, respondió “*no sé de qué se trata*”.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, señaló que como Director mantuvo una “política de puertas abiertas”; dijo que ningún CPR le solicitó entrevistarse con él. La cantidad de cuarteles que se construyeron en los años 2012 y 2013 fue totalmente *inusual*; Flores y Bustos tenían *un tremendo prestigio en la institución*. Si el tiempo y el financiamiento lo permitía se hacía licitación pública, y en caso contrario se podía hacer trato directo, siempre que la norma (ley) lo permitiera. En cuanto al documento de 28 de octubre, reiteró lo dicho anteriormente en cuanto a la explicación de la discordancia. Refirió que a César Rojas lo conoció personalmente. Con la mujer de Rojas tuvo una relación únicamente profesional. Rojas no le pidió nunca una entrevista. Bustos y Flores.

El querellante y las defensas de Bustos y Gutiérrez efectuaron nuevas interrogaciones (artículo 329 del Código Procesal Penal), siendo todas ellas reiterativas de lo declarado por el testigo.

15) (8) Testigo IGNACIO LABRA MOSCOSO (arquitecto)

Al interrogatorio de la fiscalía respondió que venía a declarar por las irregularidades en los retenes del sur; trabajaba para la empresa constructora a cargo de las obras; primero llegó a CGM, lo conoció en la Corporación de Lampa en el año 2010; lo invitó a formar parte de la empresa CGM, pero antes trabajó con el en algunos proyectos en Santiago; le habló a finales del 2012 respecto de estos retenes; sus funciones era jefe de proyecto; físicamente trabajaban en Lampa y después en Ñuñoa; estas oficinas eran de César Rojas; Rojas era socio; allí trabajaba la hermana de Cristian, Marco Valiente, Carlos Bustos, y también otras personas pero que trabajaban con Rojas; Rojas era el socio de Cristian y después empezó a ser jefe de oficina cuando Gutiérrez empezaba a estar más en terreno, quedó a cargo de la oficina, supervisión de las obras, les preguntaba a ellos cómo iban las obras, pero no se ocupaba de las compras; Carlos Bustos cumplía un rol que nunca tuvimos muy claro, iba a hacer cómo logística primero,

después se ocupó del factoring; no sabe quién lo llevó a trabajar, supone que habría sido César Rojas por la cercanía que tenía con éste; la información de estado de las obras la hacían verbalmente a Rojas, pero también hubo correos electrónicos, supo que Rojas había sido funcionario de Carabineros, se lo dijo Cristian Gutiérrez, se sabía que era Carabinero; en los procesos de postulación a las obras no tuvo participación estrictamente, aunque ayudó en algunos itemizados; le ayudó a obtener la primera boleta de garantía ya que en el Banco que la estaba requiriendo, se demoraría más allá del plazo de presentación; acompañó a Gutiérrez a tomar la boleta, primero sacaron dinero del Bci y después se fueron al banco en una patrulla de Carabineros a tomar la boleta, lo hicieron porque Gutiérrez no quería andar con el dinero en efectivo, la patrulla la pidió Gutiérrez a Rojas; en cuanto a la ejecución de las obras respondió que los profesionales y Gutiérrez viajaban a las obras, el trámite de los estados de pago lo hacía él, llevaba las carpetas al Departamento de Cuarteles, se llevaba el itemizado, se hablaba con el ITO, se le mostraba el itemizado; Gutiérrez y Rojas sabían que era él quien llevaba las carpetas, ellos se lo solicitaron; Cristian era quien determinaba los montos de avances, no sé quien exactamente determinaba el monto, Cristian o César; fue por cada estado de pago, también fue a una reunión en que presentó a una nueva profesional, y a otra reunión más que se hizo para aclarar algunas dudas relacionadas con la construcción de las obras. En Santiago se enteraba del avance por vía telefónica, era Gutiérrez quien determinaba el avance de las obras; de estos avances se enteraba Rojas “cuando estábamos en la oficina”, antes no sabía; le consta porque Rojas estaba en la oficina; la comunicación entre Rojas y Gutiérrez *era pelambre cuando no estaba Gutiérrez y cuando estaban juntos se quedaban conversando largamente*, era una relación de amor y odio; las obras eran Lago Castor, Villa Ortega, Isla Huar y Lago Castor “estuvieron atrasadas”; de esto sabía Cristian, al principio, y después también César Rojas, toda la estructura sabía; los estados de pago no estaban atrasados, estaban al día, mediante ellos tenía liquidez para construir; a pesar de los atrasos los estados se efectuaban; había un desfase, *se solicitaba más de lo que se había construido*, de lo cual estaban en conocimiento Gutiérrez y Rojas, no daban explicación, este era el sistema con el cual se estaba trabajando, ellos le dijeron que ese era el sistema; la situación no le parecía rara, pensaba que era el sistema para poder financiar las obras; cuando le llevaba las carpetas al ITO éste le manifestaba preocupación por el atraso, decía que tenían que avanzar; “entendiendo” que el ITO iba a las obras y así se enteraba del estado de atraso; si el estado de pago se hacía era porque estaba correcto; habían partidas que se

necesitaba comprar por lo cual se adelantaban las partidas para comprar materiales, por ejemplo, paneles sip se ponían como terminados sin estarlo; había que tener las cotizaciones al día, las boletas vigentes se requerían para presentar los estados de pago; puede que en los últimos de pago haya ido menos documentación en las carpetas que la que se requería para la tramitación; cuando iba con menos documentación no recuerda que pasaba; no recuerda que le hubieran dicho alto que faltaba documentación, por ejemplo certificados de cotizaciones previsionales. Se **le exhibió documental N° 9, otros medios de prueba (antes exhibido); correo electrónico** de Pamela Beltrán a él, a Gutiérrez, Rojas y otros; “¿Cómo realizo estado de pago N° 2, si en el 1 se incluye los siguiente...”, se le estaba pidiendo que prepara solicitud de estado de pago por obras que no estaban hechas, se refiere a la obra de Villa Ortega; esta fue la metodología que se utilizó desde un principio; “estimado Ignacio”, no quiere decir que fuera él quien se encargaba de solicitar los estados de pago; responde Gutiérrez: *necesito los estados de pago hoy en mi correo (a Ignacio, Pamela Beltrán)*; supone que se cumplió lo dispuesto porque se continuaron presentando estados de pago. **Correo electrónico de 8 de julio de 2013, asunto informes ITO (ya incorporado)**. Lo reconoce, es suyo, se lo envía a Bernardo León, es de 8 de julio de 2013. Explicó que en este correo se está refiriendo a Francisco Pizarro como ITO; cuando se refiere a que *quede todo cuadrado* para así poder la devolución de las boletas de garantía, significa que el ITO pedía que los estados de pago *estuvieran cuadrados*, era eso lo que él (testigo) le estaba pidiendo en su correo. Señaló que él se fue de la empresa en julio de 2013 porque *estaba “la embarrada”, había reclamos de los trabajadores, de los proveedores, se veía que la empresa iba a la quiebra, la cosa no le cuadraba ya que había arrendado oficinas en Huechuraba, era una oficina súper grande, en un lugar que era caro, “no cuadraba”; la embarrada la tenía Cristian, esto porque dejó de estar en las oficinas, se compraba autos nuevos en circunstancias que no había plata; había un problema financiero, la hermana de Cristian no se manejaba; todo se pateaba, pero los estados de pago de Carabineros seguían llegando; Rojas decía “pucha este gallo no sabe llevar la empresa”, pero cuando se juntaban no sabe si hablaban de esto; estuvo en las oficinas de Huechuraba dos o tres semanas, allí tenía noticias de la situación de los trabajadores por medio de los jefes de obra; no sabe si Gutiérrez tenía otros ingresos que por CGM; *dio para suspicacia* que se cambiara de casa, comprara auto para la señora, *era mi percepción y la de la oficina*; nunca fue a Coyhaique, sí un par de veces a Isla Huar. Cuando se retiró de CGM supo que Villa Ortega estaba terminada, “yo entendía que sí”, pero*

después se enteró que no era así. Después trabajó en la empresa Constructora Grossman, llegó a ésta cuando terminó en CGM, cuando renunció, pero siguió en contacto con César Rojas ya que este quería trabajar en la fabricación de unos módulos, le propuso ser parte del directorio de Grossman para poder postular a obras en Carabineros; necesitaban un técnico; después de lo ocurrido con CGM *siguió en contacto con Rojas porque con él no tenía problemas, era Gutiérrez el del problema*; la idea era licitar obras nuevas en Carabineros; una vez habló con el representante legal de la empresa Grossman, ocurrió cuando lo presentaron en su oficina en Providencia a efectos que supiera que él iba a ser el encargado de las obras; llegó a Coyhaique Alto y otra porque Rojas le pidió hiciera una visita de diagnóstico para terminarlas; no le pareció buena idea porque es un cacho continuar obras ya iniciadas; esto se lo dijo a Rojas, pero este le dijo que era una posibilidad de empezar a trabajar con Carabineros, para adquirir experiencia, formar equipos; desde el punto de vista económico los montos eran bajos, no alcanzaban los dinero para terminarlas, de acuerdo con la visita los itemizados no cuadraban con lo que había que hacer; visitó Isla Huar, Coyhaique Alto y lago Castor; cuando llegó observó que Isla Huar estaba avanzada y las otras dos estaba con parte de la obra gruesa no terminada y Lago Castor estaba atrasada, *atrasado entero*, y los montos para terminarlas eran “chiquititos”, “no daba”; Rojas fue quien le dijo que fuera a todas esas obras; no sabe si cuando fue a visitar las obras estaban en licitación *ya que fue solo, sin una contraparte, como Carabineros*; Rojas le dijo que iban a postular por trato directo, o sea, la contratación directa para la ejecución de las obras, el concepto lo conoce desde que trabajó en las municipalidades; no realizó itemizado para las obras en cuestión, los itemizados existentes no cuadraban con el estado de las obras, v.gr., itemizado decía pintura marcos puertas pero faltaban los marcos de las puertas; esto se lo dijo a *Rojas, y él decía que había que terminarlas, como un acto de buena fe para así ganar puntos para nuevas obras*; no participó en la inscripción de la empresa Grossman en el registro de contratista de Carabineros, no recuerda si alguien más sabía de la inconsistencia de los itemizados, Carabineros sí, no sabe si Carlos Grossman sabía; la consecuencia de esto era que no se podría cumplir con el contrato; supuso que de estas dificultades Grossman estaba al tanto; Rojas le dijo que Grossman era un inversor y que no le importaba perder plata en la medida que podría participar en otras obras; Lago Castor no sabe porque no se lo adjudicó Grossman, “al parecer lo iban a licitar después”; la ejecución de las obras comenzó con la ubicación de trabajadores que las realizaran; él estuvo como jefe de ambas obras; en esta oportunidad se trabajó

bien, Carabineros así se lo reconoció, se avanzó bien en las obras; no hubo estados de pago, no se presentó ningún estado de pago, no sabe por qué, “entiendo que se avanzó en las obras con los dineros de Carlos Grossman”; fue a una reunión en Cuarteles por la empresa Grossman, fueron también Carlos Grossman, César Rojas y alguien más de Grossman; también fue a otra reunión, en febrero de 2014, aproximadamente, para hablar con el ITO para pedir aumento de plazo para terminar Isla Huar y ampliación de obra; a esta segunda reunión fue solo, por instrucciones de César Rojas; cuando fue a la reunión con Carabineros les hizo presente la situación de los itemizados, estos le dijeron que los itemizados estaban atrasados, a lo cual él respondió que entonces continuarían sólo con los itemizados contratados; esta situación “me sorprendió” porque Carabineros tenía que saber el real estado de las obras; “era otra la postura” en relación a que les pedían cumplir con un itemizado propuesto por ellos pero que no correspondía con la realidad, ellos sabían que éstas no correspondían con el estado real; finalmente en esa reunión les negaron el aumento de plazo y tampoco habría aumento de obras; lo ocurrido se le contó a Rojas, no recordando que le dijo éste, no recordó cuál fue la reacción de Rojas. Cuando terminó de trabajar con Grossman le quedaron adeudando días trabajados y montos que él había pagado; al poco tiempo fueron a cerrar las obras de Isla Huar, ahí terminaron los contratos; renunció al directorio cuando el caso salió en las noticias y él aparecía como “palo blanco”.

Interrogado por el querellante, respondió que César Rojas era su jefe, le daba instrucciones, también al resto del personal, no sabe si esto lo sabía Gutiérrez; no sabe si Gutiérrez liquidó bienes para cumplir con los pagos de la empresa; señaló haber armado las carpetas de estados de pago; las carpetas se la entregaba a Francisco Pizarro; Gutiérrez viajaba “harto” a los obras; el enviaba documentación, como Gutiérrez no estaba entonces él firmaba “pp”; faltaban materiales para las obras de Coyhaique Alto, les dijeron que podía sacar materiales de Lago Castor, entendió que se trataba de materiales de Carabineros que estaban pasando de una obra a otra; estuvo presente en el primer retiro de materiales; la autorización vino del ITO Pizarro, así se lo informó César Rojas.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, respondió haber declarado tres veces antes, en Carabineros, Policía de Investigaciones, en el año 2014; también en un comparendo de un juicio civil; los correos electrónicos de hoy

no se los exhibieron en aquellas declaraciones; no le preguntaron por Grossman como se ha hecho en esta audiencia; “informes cuadrados” significa que las fechas de los informes cuadraran con los estados de pago, esto debía revisarlo Pizarro, *y también Gutiérrez por la empresa*; “en CGM no tuvo posibilidad de ir a terreno a ver las obras”.

Interrogado por la defensa de Pizarro, respondió que la documentación de los estados de pago se la entregaba físicamente a Pizarro, pensaba que las visitas que hacía Pizarro estaban al día; *para el primer estado de pago César Rojas era el capitalista, y posteriormente, con los nuevos estados de pago se compraban los materiales*; la jefatura le comunicaba cuánto comprar, por ejemplo, “le decían cobra cuatro (4) palos”; en alguna reunión tengo que haber estado con Bustos Morgado y Pizarro, no recordando si también estuvo César Rojas; se habló acerca del estado de las obras; cuando hizo la visita de diagnóstico realizó un inventario de los materiales existentes; la decisión de retirar los materiales fue de César Rojas o de Carabineros; los materiales fueron trasladados en una camioneta de la empresa Grossman; Pizarro no le hizo ofrecimiento económicos.

Interrogado por la defensa de Gutiérrez, respondió que a este lo conoció en Lampa, era arquitecto de la municipalidad y él participó en una obra de sala cuna; después le pidió dos proyectos de arquitectura en un colegio de Colina, pero no resultó, después lo invitó a trabajar con él en otra obra, a esas alturas ya no estaba trabajando en la municipalidad y había abierto una oficina; supo de la preparación de un organigrama cuando llegó César Rojas a la empresa. **Se le exhibió el documento N° 73** (organigrama antes incorporado con la declaración del acusado Gutiérrez), sabe que Bustos Prats y Rojas habían sido Carabineros, Miguel Gutiérrez Vásquez era de la otra empresa que tenía César Rojas y que funcionaba en la misma oficina; no recuerda haber conocido al abogado Rodrigo Morales; ocasionalmente firmaba la documentación de los estados de pago. **Se le exhibió el documento N° 917 y la foja 442 del sumario administrativo, medios de prueba de la fiscalía**; reconoce el primero: carta de solicitud de cancelación estado de pago, estado de pago y boleta-factura. La carta se le solicitó que la firmara él por poder, “pp”, pero nunca se le dio un poder; siempre que firmaba era porque Gutiérrez se lo pedía; si firmaba era porque se lo pedían para presentar los estados de pago; **Se le exhibió el documento N° 28, de sus medios de prueba** (correo electrónico de fecha 7 de mayo de 2013; asunto: Trabajadores Isla Huar;

enviado por Carlos Bustos Prat desde la cuenta carlosbustosprat@gcorreo.com dirigido a los correos electrónicos cesarRojas@vrt.net, cesario5@hotmail.com lo reconoce, señala que son correos electrónicos de Carlos Bustos para Pedro Barra, copiado a él, a Gutiérrez, a César Rojas y otro, es de fecha 7 de mayo de 2013. **Se le exhibieron los documentos N° 71, de sus medios de prueba** (correo electrónico de fecha 29 de mayo de 2013, hora 22:11, enviado desde cuenta CesarRojas@vtr.net a la cuenta ilabra@constructoracgm.cl, cbustos@constructoracgm.cl, pbarra@constructoracgm.cl, ilabra@constructoracgm.cl, mvaliente@constructoracgm.cl; adquisiciones@constructoracgm.cl): consultado, dijo no reconocerlo, “aparezco copiado”, *pero no lo reconozco*. Los problemas de la empresa comenzaron desde un principio, pero fundamentalmente cuando se cambiaron de oficina y cuando Gutiérrez empezó a trabajar más en terreno; al principio estaba en Santiago pero después Gutiérrez estuvo en terreno; “Cristian me presentó a César Rojas como el inversionista”. **Se le exhibió documento N° 764, prueba de la fiscalía** (correo electrónico de la cuenta de ilabra.arg@gcorreo.com, de 9 de julio de 2013, asunto: desvinculación de constructora CGM): lo reconoce, es un correo dirigido por él a César Rojas, Carlos Bustos Prats, Cristian Gutiérrez, Francisco Pizarro, entre varios otros; enviado el 9 de julio de 2013, en el que se dice: “a partir de hoy finalizo mis labores en constructora CGM” y no continuaré utilizando este correo. **Se le exhibió documento N° 761, prueba de la fiscalía** (correo electrónico de la cuenta de ilabra.arg@gcorreo.com, de 18 de junio de 2013, asunto: Re: visita a terreno): lo reconoce, es un correo suyo, de fecha 18 de junio 2013, para Miguel Gutiérrez y Carlos Bustos Prats; Miguel Gutiérrez trabajaba para César Rojas en su empresa FRABACAR, de licitaciones de insumos a Carabineros, misma situación respecto de Carlos Bustos.

Consultado respecto de la presentación de los estados de pago de CGM a Carabineros, respondió que él era el encargado de llevarlos. **Se le exhibieron los documentos N° 963, 966 y 965 (prueba del ministerio público): el primero (963)**, lo reconoce, corresponde a la carta de solocitud del 5° estado de pago proyecto de reposición de Villa Ortega, dirigida al ITO Francisco Pizarro; firma Cristian Gutiérrez “pero aparezco yo firmando por “pp”; **el segundo (966)**, reconoce el documento, *es igual al anterior, dice estado de pago N° 5; cantidad \$79.734.091*, “aparece mi firma sobre el nombre de Cristian”; **el tercero (965)**: 17 de abril de 2013, reconozco mi letra, factura N° 48, de 17 de abril de por la misma cantidad anterior; estado de pago N° 5. **Se le exhibieron los documentos N°**

908, 977 y 934 (prueba del ministerio público): el primero, lo reconoce, fecha 28 de enero de 2013, carta de solicitud retén Villa Ortega, cancelación de estado de pago N° 2, mismo contenido, firmado por mi, por pp, pero con el nombre de Cristian Gutiérrez; **el segundo**, fecha 13 de marzo de 2013, cantidad \$37.361.490, firmado y recibido; **el tercero**, lo reconoce, es de fecha 28 de febrero, solicitud estado de pago N° 3, retén Coyhaique Alto, reconoce su firma. Respondió que él presentaba las solicitudes porque se le decía “fírmalo tú”, pero no había un poder escrito; la factorización la realizaba Carlos Bustos; César Rojas estaba al tanto de la factorización pero no sabe si participó en la tramitación. Para ser director de Grossman lo propuso César Rojas. **Entró a trabajar en Grossman un mes después de cesar en CGM.** No supo del financiamiento de Grossman para la realización de las obras. Formó parte del directorio porque lo que se le dijo que se requería de una persona con conocimientos técnicos. Nunca participó en reuniones de directorio. Efectivamente sostuvo una reunión con el Coronel Osses Cotroneo para que se les aumentara el plazo de entrega de las obras, pero éste le respondió que *no había ninguna posibilidad* de ampliación. Respecto de Bustos Prats indicó que a él se le designó en una función de logística, pero nunca supo exactamente qué hacía, no se relacionaba con él, supo que en un momento trabajó en los factoring y buscando nuevos proyectos de trabajo. No se veía con él porque trabajaban en oficinas distintas. Las solicitudes de pago las revisaba con Cristian Gutiérrez, era éste y César Rojas quienes decidían el monto a solicitar. Miguel Gutiérrez trabajaba con César Rojas. Dentro de las oficinas funcionaba la empresa CGM y otras empresas de César Rojas. Los contratos fueron a suma alzada, salvo los ítems “cubos revisables”. Retiró materiales de Lago Castor para realizar los trabajos de Coyhaique Alto ya que faltaban para la ejecución de la obra. Fue César Rojas quien le dijo que lo hiciera, y que una vez que estuvo (físicamente) en el lugar la autorización la dio Francisco Pizarro. Fue dos veces a retirar materiales, otras dos lo hizo otra persona. Respondió a la defensa que “debe ser así”, *que concurrí cuatro (4) veces a retirar materiales*, pero “yo recordaba que habían sido dos veces”. Algunos materiales los retiró en compañía de Eduardo Curiqueo y en otras lo hizo éste sólo.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, el testigo respondió: mi puesto en CGM era jefe de proyectos pero lo que le correspondió fue trabajar en la realización de los proyectos; la tramitación de las solicitudes de pago las hacía por instrucciones de Gutiérrez y en otras por órdenes de César Rojas. Las instrucciones de Gutiérrez eran mayoritariamente verbales. La actitud de Gutiérrez

era “altanera”, una vez, siendo navidad o año nuevo, “nos dejó trabajando hasta las 10 de noche”. Hubo cambios en su personalidad, se cambió de casa, de oficina (la primera era de de madera y después se cambió a un container), de la forma de vestirse, en circunstancias que faltaban materiales, dinero para el pago de sueldos y de comida. No supo que la madre de Gutiérrez trabajara para CGM. Un hermano de este iba esporádicamente. Su contrato y finiquito los firmó Gutiérrez. Antes de conocer a Rojas supo que él era inversionista, así se lo dijo Gutiérrez. Conoció posterior y azarosamente a Rojas en un banco. Gutiérrez se lo presentó en ese momento por el nombre de este, “sin otro título”. Gutiérrez le instruyó, un par de meses antes de que saliera de la empresa, en abril o mayo, que no pidiera más informes acerca del estado de las obras ya que éstas se encontraban atrasadas y lo que había que hacer eran trabajar. *Se podría decir que en CGM se cobraba para poder seguir construyendo*, en tanto que en Grossman no hubo pagos. Sin embargo, “creo que la idea siempre fui construir y terminar, pero no desfaltar”.

Interrogado por el tribunal para que aclarara quién hacía los itemizados, no se acuerda si se los enviaban hechos y en otros se le decía que tenía que poner, *en el fondo los digitalizaba*; las indicaciones se las daban Gutiérrez y Rojas.

Interrogado nuevamente por la defensa de Gutiérrez (artículo 329 del Código Procesal Penal) señaló que cuando él se fue de CGM nadie más se fue con él, pero posteriormente, cuando se empezó con los trabajos de Grossman contactó a Curiqueo para trabajar, además de un par de hermanos de Puerto Montt.

Interrogado nuevamente por la defensa de Gutiérrez (artículo 329 del Código Procesal Penal) César Rojas, ellos en conjunto, eran los que determinaban lo que había que cobrar, era un acuerdo entre ellos, lo cual le consta porque decían, Rojas, lo voy a hablar con Gutiérrez, y Gutiérrez, lo voy a hablar con Rojas. No era frecuente que se reuniera con el ITO Pizarro para cuadrar los estados de pago, el correo en que se dice eso *tiene que haber sido a propósito del retiro de la boleta de garantía*;

16°) (35) Testigo SALOMÓN GOLDBAUM MOLINA (ingeniero comercial).

Interrogado primeramente por la fiscalía, a sus preguntas respondió: el año 2012 prestó dinero a César Rojas, lo conoció cuando empezó a trabajar, en la década del 2000; César se desempeñaba en el Departamento de Adquisiciones, Subdirección de Compras; sabía que era Carabinero; lo conoció en el ámbito de su trabajo, proveedor de insumos a Carabineros y a Gendarmería; César Rojas le solicitó específicamente, cuando ya estaba fuera de Carabineros, que tenía la posibilidad de un negocio consistente en la compra de una maquinaria para arrendarla a una empresa minera ya que el dueño de la máquina traspasaría el arriendo que le estaba haciendo a ésta; el préstamo se hizo a través de la empresa y se materializó en un pagaré y un cheque a nombre de César por la cantidad de 32 millones de pesos, los cuales fueron depositados en la cuenta corriente de César; el monto total del préstamo fueron de \$54.000.000. **Se le exhibieron los documentos N° 54 (ya incorporado) y N° 829** (pagaré y estado de cuentas auxiliares, respectivamente): el primer documento lo reconoció y señaló que *“se trata de una fotocopia del pagaré, firmado por César Rojas, a nombre de Sociedad Comercial Milenium Ltda., fecha 21 de agosto de 2012”*; el segundo documento también lo reconoce, *se trata de un informe de cuenta corriente de la administración de su empresa, de fecha 21 de septiembre de 2018, por el cual se informa el estado del pagaré; la suma que aparece es algo superior a 8 millones, pero lo que Rojas me adeuda al día de hoy son algo más de 5 millones*. Rojas no le dijo que el dinero era para la construcción de cuarteles, no le rindió cuenta de la máquina que había comprado ni del arrendamiento que dijo se haría con la empresa minera; no conoce el Departamento de Cuarteles (Quilín), no se *maneja* en construcción de cuarteles, no tiene conocidos en ese Departamento, no ha participado en licitaciones de construcciones de Carabineros, no conoce las obras materia de juicio, no conoce a Francisco Pizarro y tampoco ha hablado con él; sí conoce a Carlos Grossman, era amigo de juventud con su padre, era de su confianza, hicieron transacciones comerciales; a Grossman se le presentó la posibilidad de representar a una empresa en el rubro de la venta de armas, por lo cual le presentó a César Rojas a fin de que lo asesora atendido el conocimiento que éste tenía por haber trabajado en el Departamento de Adquisiciones, Subdirección de Compras; ese negocio no llegó a concretarse; actualmente no mantiene contacto con César Rojas, salvo por algunos correos electrónicos que cada cierto le envía informándole los abonos efectuados para el pago del préstamo.

Interrogado por el querellante, respondió: la frecuencia de pago del pagaré no era mensual, sino en la medida de la disponibilidad de recursos que tuviere Rojas para ir abonando a la deuda; el pagaré no señala pacto de intereses; el día de hoy en la mañana le efectuó un abono por \$1.000.000; negó ser inversionista sino que empresario, y tampoco prestamista, sólo una vez prestó dinero, y fue a César Rojas;

La defensa de Bustos no interrogó al testigo;

La defensa de Pizarro no interrogó al testigo;

La defensa de Gutiérrez le preguntó acerca de la diferencia entre prestamista e inversionista; señaló el testigo que trabaja en su actual empresa desde el año 2000 y que actualmente es dueño de ella en un 99%;

La defensa de Rojas interrogó al testigo, preguntándole si eran amigos y si se visitaban en sus casas, a lo cual respondió que su relación con Rojas era sólo comercial y que nunca se visitaron; negó haber recibido alguna dádiva de parte de Rojas; confirmó la aseveración de la defensa de Rojas en cuanto a que éste no tenía por qué rendirle cuenta de la compra de la maquinaria ni de su arriendo, precisando sí que igualmente esperaba que él le hubiere comunicado que el negocio sí se había concretado, que le hubiere mostrado la factura, la cual no le pidió que se la exhibiera; el préstamo que le hizo fue para una operación comercial.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N° 641: Oficio N° 19, de 6 de enero de 2014; Carabineros, Departamento de Cuarteles, Sección Finanzas; “remite resoluciones, planilla de viáticos y la totalidad de los antecedentes de la comisión de servicio conforme al siguiente detalle: viáticos, región de Aysén, motivo: realizar trabajos de normalización de obras exteriores en el retén Villa Ortega; firma Edgardo Osses Cotroneo, Coronel de Carabineros, jefe suplente del Departamento de Cuarteles;

Documento N° 642: Resolución Exenta N° 1, de fecha 6 de enero de 2014; Vistos: Comisión de Servicio región de Aysén a fin de realizar trabajos de

normalización de obras exteriores en el retén Villa Ortega: **a)** Oficio anterior de Cuarteles, documento electrónico NCU N° 17211922, de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección de Logística de Carabineros, SE RESUELVE: reconócese y concédese: 1) civil CPR, grado 9, Francisco Pizarro Dasso; 2) civil CPR, Walter Ávila Sáez; 3) civil CPR, grado 12, Jaime Meliqueo Neico; 4) civil CPR, grado 13, David Acevedo Jara; 5) civil CPR, grado 13, Ricardo Parra Ortega; 6) cabo primero Leandro Donoso Vilches; 7) cabo segundo Juan Manuel Jeldres Aguirre; el derecho a impetrar 10 días de viático al 100%, un día de viático al 50% y un día de viático al 40%, por haber cumplido comisión de servicio a la región de Aysén con la finalidad de realizar trabajos de normalización de obras exteriores en el retén Villa Ortega; período: inicio comisión, 11 de noviembre de 2013, 8:30 horas; término comisión, 22 de noviembre 2013, 20:00 horas; **b)** confecciónese la planilla de viáticos por la oficina de partes, remítase toda la documentación *respaldatoria* para su control en el libro respectivo, y remítase los antecedentes al Departamento de Contabilidad L8, para su cancelación; firma, Edgardo Osses Cotroneo, jefe suplente del Departamento de Cuarteles;

Documento N° 643, planilla correspondiente al personal del Departamento de Cuarteles; *personal que concurrió en comisión de servicio a realizar trabajos de normalización de obras exteriores en el retén Villa Ortega, año 2013: David Acevedo Jara, \$402.003; Leandro Donoso Vilches, \$298.987; Juan Jeldres Aguirre, \$298.987; Ricardo Parra Ortega, \$402.003; Jaime Meliqueo Neico, \$402.003; Walter Ávila Sáez, \$402.003; Francisco Pizarro Dasso, \$402.003. Total: \$2.607.989.*

Documento N° 645, planilla de viáticos, Departamento de Contabilidad y Finanzas, Dirección Nacional de Logística de Carabineros: *devengados por el personal del Departamento de Cuarteles L1; antecedente: Resolución Exenta N° 1, de 6 de enero de 2014; objetivo: comisión de servicio a región de Aysén con la finalidad de realizar trabajos de normalización de obras exteriores en el retén Villa Ortega: tabla (con el nombre de las mismas personas mencionadas en el documento precedente): al costado del nombre y monto de cada uno, una firma; José Valenzuela López, Jefe de Contabilidad y Finanzas, y Walter Calixto Merselles, contador jefe; 31 de diciembre de 2013;*

17) (36) Testigo EDUARDO MARTÍN ARANDA (jubilado, ex empresario).

Interrogado primeramente por la fiscalía, a las preguntas respondió: antes de jubilar tenía una empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de lockers y estanterías, trabajó en eso durante 30 años; concurre a declarar porque en cierta oportunidad le facilitó dinero a César Rojas, ocurrió el año 2012, firmó un pagaré, el pagaré se cumplió como correspondía; a Rojas lo conoció porque era proveedor de Carabineros, tenía su planta en Quilín, muy cerca del Centro de Compras de Carabineros; estos le hicieron una compra voluminosa de bloques (6.000, para todo el país), luego tomó contacto con un General que lo mandó hablar con Rojas, en ese tiempo Carabinero, trabajaba en la Sección de Compras; el contacto con Rojas pudo haber durado un año; le prestó el dinero porque Rojas había iniciado actividades propias, se acercó a su oficina, como lo conocía y venía de Carabineros, le prestó el dinero para usarlo como capital de trabajo. **Se le exhibió el documento N° 55:** lo reconoce, es el *pagaré por \$15.000.000*; debía devolver el dinero el 13 de marzo de 2013; cumplió cabalmente; el préstamo lo hizo desde su cuenta personal; Rojas le dijo que estaba en un emprendimiento, pero “sin ninguna profundidad o detalle”; no ha sido Carabinero, ha participado en muchas licitaciones en Carabineros, pero no en el rubro de la construcción; no conoce a nadie del Departamento de Cuarteles; no tiene como saber de las empresas que postulan a licitaciones de obras; no sabe de las obras que son materia de este juicio; no conoce a inspector de obras Francisco Pizarro;

Interrogado por el querellante, a sus preguntas respondió: *por ningún lado estoy relacionado con el rubro de construcción, no he prestado dinero para construcción de cuarteles de Carabineros; no tengo o uso seudónimo ni letras que me identifiquen; cuando he postulado a licitaciones nunca he ocultado mi nombre;*

Las defensas de los acusados Bustos y Pizarro no interrogaron al testigo;

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respondió que trabajó durante tres años con Carabineros, fue el 2009, 2010 y 2011:

Interrogado por la defensa del acusado Rojas respondió no haber recibido dádivas.

El tribunal solicitó al testigo aclarar la expresión “cabalmente”, respondiendo que con esa expresión se estaba refiriendo a que *el pago del préstamo se hizo dentro de plazo y en el plazo acordado*.

18°) (54) Testigo RODRIGO PÉREZ MUJICA (funcionario de Carabineros, comisario de Carabineros).

Interrogado primeramente por la fiscalía, respondió dando cuenta de todas sus destinaciones institucionales, siendo la primera de ellas en Coyhaique, fue desde enero 2012 hasta enero 2016, tenía grado capitán y subcomisario de los servicios de Coyhaique; un subcomisario de los servicios realiza, fundamentalmente, la subrogancia del comisario cuando éste no se encuentra, y por ello debe concurrir a las unidades policiales del territorio a fin de verificar los servicios, el desarrollo de la administración y de todo lo necesario para el buen funcionamiento del servicio; sabe que viene por el caso de los cuarteles de Villa Ortega, Coyhaique Alto y Lago Castor; estas construcciones se iniciaron el año 2012 y desarrollaron el 2013; antes de iniciarse las construcciones, los destacamentos de la región estaban en muy precarias condiciones estructurales, con una antigüedad promedio de 40 años, por lo que las condiciones climáticas habían deteriorado las construcciones; algunos estaban situados en pasos fronterizos, como Lago Castor y Coyhaique Alto; el desarrollo de las obras en un principio no había nada distinto de cualquier obra de construcción, pero luego comenzó a notarse una demora que era distinta de lo habitual a una construcción; no se hizo ni dijo nada porque se pensó que podía deberse a las condiciones climáticas, y porque además no conocían los plazos y etapas de construcción; los jefes de esos cuarteles eran el suboficial mayor Sáez, en el caso de Villa Ortega, el suboficial González Mancilla, en Lago Castor, y el suboficial Mancilla, en Coyhaique Alto; supo que hubo arriendo de andamios, alojamiento, baños químicos, pero que estaban siendo pagados; llegaban muchas denuncias a la Inspección del Trabajo, de lo cual estaban enterados por los requerimientos que llegaban a la unidad de asuntos judiciales; esto último ocurrió cuando *dejó de verse movimientos* en las construcciones; posteriormente hubo otra empresa que se hizo cargo de las obras; en el intertanto entre unas y otras, pudo ver los tres destacamentos, vio materiales y estructuras que habían quedado en el lugar expuestas al deterioro por causas climáticas; el personal de Carabineros no tomó a cargo el resguardo de los materiales por no ser de su competencia; Villa Ortega tuvo el mayor avance;

cuando faltaban pocas semanas para su inauguración concurrió personal de Carabineros a trabajar en la terminación de la obra ya que la construcción no estaba lista; el General Marco Tello fue quien concurrió como subrogante a la inauguración del cuartel; las obras estaban en condiciones de utilizarse, salvo las caballerizas; no recordaba haber visto materiales en Lago Castor; cuando dejó la región, en el año 2016, los demás cuarteles quedaron en las mismas condiciones, iniciados pero no más que eso; no conoce ni sabe quién es Christian Bustos Morgado, sí a Félix Flores, pero no recordó que lo hubiere visto por la zona;

Interrogado por el querellante, respondió el testigo que por parte de la empresa se trasladaron materiales desde un destacamento a otro; la situación descrita permanecería al día de hoy en el mismo estado que cuando él se fue de la zona; supo de los viajes que realizaba el ITO Pizarro a la zona;

Interrogado por la defensa de Bustos respondió que no había declarado en la investigación penal, pero sí en el sumario administrativo; no sabe qué trabajos concretamente se hicieron cuando el personal concurrió a terminar las obras;

Interrogado por la defensa de Pizarro respondió no saber si habría sido el ITO Pizarro quien autorizó o dispuso el traslado de materiales;

Interrogado por la defensa de Gutiérrez respondió: participó en una Comisión de salud, le tocó acompañarlos;

Interrogado por la defensa de Rojas, respondió que la única declaración formal fue la del sumario, e informalmente cuando se reunió con la fiscalía 5 meses atrás, con motivo de este juicio; de lo que estaba ocurriendo se dejaba constancia en el libro de inspección de Carabineros;

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N°685 (Documento Electrónico N.C.U. N° 67824704, de fecha 20.09.2017, del Departamento de Gestión Administración y Des.Profes.P3).

Asunto: solicita información que indica; 20 de septiembre de 2017; remitir la siguiente información respecto los costos individuales de ida y regreso y a qué ítem fueron cargados estos costos; salida 11 de noviembre de 2013, regreso 22 de noviembre de 2013, Santiago-Balmaceda y Balmaceda-Santiago; mismo funcionarios referidos en los documentos precedentes; costo individual 225.000; costo total: \$1.579.137; ítem 22.08.007 (pasajes, fletes y bodegaje por comisiones de servicio); se adjuntan 2 NCU y una orden de compra;

Documento N°686 (Orden de Compra N° 3794-18409-CM13, de fecha 06.11.2013 Sres. Sky Airline S.A): orden de compra 3794-18409-CM13; Dirección General de Carabineros, 6 de noviembre de 2013; nombre de funcionarios y cantidad de pasajes (ídem funcionarios anteriores, 2 pasajes cada uno, costo total pasajes \$1.579.137

Documento N°687 (Documento Electrónico N.C.U. N°17210650, de fecha 6 de noviembre de 2013, del Departamento de Cuarteles L1): solicitud de pasajes aéreos de Departamento de Cuarteles a Departamento de Gestión, 6 de noviembre de 2013; subteniente Luis Parra, adición Christian Bustos Morgado, adición Departamento de Cuarteles L1; *con el objeto de fiscalizar las obras de Villa Ortega para la pronta inauguración, solicita a esa repartición gestionar las comisiones de servicio; pasaje aéreo 11 de noviembre, regreso martes 22 de noviembre; listado de trabajadores (ídem); unidades a verificar: retén Villa Ortega; firma Félix Flores S., jefe del Departamento Cuarteles*

Documento N°689 (1) cotización Materiales SODIMAC, solicita Mareclo Medel Soto, 10 de octubre 2017, \$2.388.197; y cotización Sodimac, pinturas \$1.858.650

Documento N°689 (cotización materiales Easy, 12 de octubre de 2017, \$ 2.674.985)

Documento N°653: Oficio N° 26, de 30 de junio de 2017, de DILOCAR a Brigada de Investigación de Delitos Económicos; remite adjunto los siguientes antecedentes solicitados: reposición tenencias Maule, Itahue, Lontué, La Islita, subcomisaría San Francisco de Mostazal, cancha de pasto sintético comisaría de San Joaquín; *finalmente, en cuanto al rol que tuvieron César Orlando Rojas Gaete, Carlos Bustos Prats, Rodrigo Carrasco Quiroga, Cristian Gutiérrez*

Martínez y ..., se aprecia sólo la participación de Cristian Bustos Morgado, a ese entonces jefe del área de gestión y coordinación de proyectos, con participación directa en su calidad de jefe en 5 de los 6 proyectos de evaluación; firma Eduardo Osses Cotroneo.

Documentos retén Coronel del Maule:

1) Documento N° 654: Resolución Exenta N° 666, 11 de julio de 2011, llama a licitación proyecto de reposición retén Coronel del Maule; resuelve llámese a licitación; Carlos Carrasco, General de Carabineros, Dirección Nacional de Logística;

2) Documento N° 655: Resolución Exenta N° 980, 14 de septiembre de 2012, adjudica licitación pública; *conforme al informe técnico se acordó proponer a la empresa contratista FEALFRA por haber obtenido el mejor puntaje, tanto por cantidad, calidad y presupuesto para la obra, ofertando, \$214.999.954, IVA incluido, con 100 días de plazo para su ejecución; Resuelvo: adjudíquese la licitación del proyecto de reposición Coronel del Maule, a la empresa FEALFRA Ltda., representada por Osvaldo Tobar Fernández, por la suma de \$214.999.954, IVA incluido; firma Director Nacional de Logística, Jorge Rojas Rojas Languer.*

3) Documento N° 656 (Informe Técnico de evaluación de propuesta N° 848, 10 de septiembre de 2012, de Departamento Cuarteles L1 respecto del proyecto de Reposición de Retén Coronel del Maule): *informe técnico de evaluación, conclusión: sugiere empresa FEALFRA Ltda., por haber obtenido el mejor puntaje, Juan Francisco Socías Vargas, arquitecto de Carabineros; Fabián Gutiérrez Salazar, arquitecto; Romina Parraguez Robles, ingeniero civil; Isabel Ojeda Vargas, abogado, Cristian Bustos Morgado, jefe Área de Coordinación y Ejecución de proyectos.*

Documentos reposición retén Itahue:

1) Documento N° 657: Resolución Exenta N° 668, de 11 de julio 2012, Dirección Nacional de Logística llama a propuesta pública y aprueba bases reposición retén Carabineros Itahue; firma Óscar Carrasco, Director Nacional de Logística;

2) Documentos N° 658: Resolución Exenta N° 981 de 14 de septiembre de 2012; adjudica licitación pública para proyecto de reposición retén Carabineros Itahue; habiéndose presentado la empresa Olga Garfias Fuentes, constructora Cepa Ltda., y constructora FEALFRA SA; las dos primeras no acompañaron la totalidad los documentos requeridos en las bases por lo cual no se abrieron sus sobres, pasando a evaluación sólo la empresa FEALFRA SPA, sin observaciones jurídicas ni técnicas; evaluada técnicamente, se propone a la empresa FEALFRA, \$212.792.021, 100 días corridos para la ejecución; se adjudica la licitación retén Itahue a dicha empresa, representada por Osvaldo Tobar Fernández, monto \$212.792.021, IVA incluido, 100 días corridos para la ejecución;

3) Documento N° 659 Informe evaluación 846, de 6 de septiembre de 2012, reposición retén Itahue; empresas oferentes: Olga Garfias Fuentes, constructora Cepa Ltda., y constructora FEALFRA SA; se evalúa técnicamente a la empresa Constructora FEALFRA S.A., sugerencia y recomendaciones: empresa Constructora FEALFRA SPA; firman Francisco Socias, Fabián Gutiérrez, Romina Parraguez Robles, Isabel Ojeda y Christian Bustos Morgado; en el pie de firma las letras “v” y “b”;

Documento N° 660: Resolución Exenta de adjudicación N° 669, de 11 de julio de 2012; llama a propuesta pública y aprueba bases administrativas Generales y especiales proyecto reposición retén de Carabineros Lontué; firma Carlos Carrasco, Director suplente de la Dirección Nacional de Logística,

Documento N° 661, Resolución Exenta N° 982, de 14 de septiembre de 2012, adjudica licitación pública: se presentaron las empresas Vallejos y Garfias Ltda. y Felfra SPA; consta en el acta que la primera no acompañó la totalidad de los antecedentes requeridos en las bases del proyecto, por lo que no se abrió el sobre de oferta, pasando a evaluación de la empresa FEALFRA, sin objeciones jurídicas ni técnicas; Resuelvo: adjudicase la licitación pública obra reposición retén de Carabineros Lontué, a la empresa FEALFRA SPA, representada legalmente por Osvaldo Tobar Fernández, \$291.002.153, plazo de ejecución 140 días; firma, Jorge Rojas Languer, Director Nacional de Logística;

Documento N° 662, Informe técnico de evaluación de propuesta, N° 847, proyecto reposición retén Lontué, 6 de septiembre de 2012: *oferentes, empresa*

Vallejos y Garfías Ltda. y FEALFRA SPA; la primera empresa queda eliminada por las razones expresadas en el acta de apertura de sobre, evaluación técnica empresa FEALFRA ; conclusiones y recomendaciones: se sugiere a la empresa FEALFRA por ser la que cumple con todos los antecedentes requeridos en las bases; firman Juan Francisco Socías, Isabel Ojeda Vargas y Christian Bustos Morgado, letras “v” y “b”

Documento N° 663, Resolución Exenta N°134, de 18 de febrero, llama a propuesta y aprueba bases administrativas, reposición retén La Islita

Documento N° 664, adjudica licitación pública, Resolución Exenta N° 394, de 24 de mayo de 2013, de la Dirección Nacional de Logística; empresas rechazadas administrativamente, la oferente restante ha presentado la documentación requerida, pasa a evaluación jurídica y luego a evaluación técnica; Resuelvo: adjudíquese la licitación de la obra a la empresa Constructora FEALFRA SPA, por un monto de \$661.900.587, plazo de ejecución 140 días corridos; firma Jorge Rojas Languer, Director Nacional de Logística;

Documento N° 665, informe técnico N° 339, 10 de abril de 2013, evaluación propuesta reposición retén de Carabineros La Islita,; presentación de oferentes Ricardo Fernández, Cocerco Ltda., Alerco y Proas Ltda., rechazados por no cumplir con las bases; se sugiere a empresa FEALFRA SPA, por cumplir con todos los requisitos jurídicos y técnicos; firman Romina Parraguez Robles, Fabián Gutiérrez Salazar, Isidro Martínez Bacigaluppi, Pedro Jofré Montero, Luis Parra Ávila y Christian Bustos Morgado, letras “v” y “b”

Documento N° 666, Resolución Exenta N° 201, 13 de junio de 2013: llama a propuesta pública y aprueba bases administrativas, anexos, y planimetrías, proyecto reposición de la subcomisaría San Francisco de Mostazal, llama a propuesta pública para la ejecución de la obra mencionada;

Documento N° 667, Resolución Exenta N° 653, 19 de agosto de 2012, de la Dirección Nacional de Logística; adjudica licitación pública proyecto de reposición subcomisaría San Francisco de Mostazal, por \$385.829.542, plazo de ejecución 260 días corridos; firma Jorge Rojas Languer, Director nacional de Logística, timbre;

Documento N° 668, Informe evaluación de propuestas N° 5, de fecha 14 de agosto de 2013, del Departamento de Cuarteles L1; *proyecto de reposición subcomisaría de Carabineros San Francisco de Mostazal; se sugiere adjudicación de la licitación a la empresa FEALFRA SPA por reunir la totalidad de las condiciones establecidas en las bases administrativas*; firman Romina Parraguez Robles, Fabián Gutiérrez Salazar, Isidro Martínez Bacigaluppi, Héctor Nail Bravo, Luis Parra Ávila, Christian Bustos Morgado, mayor de carabineros, oficina de control presupuestario Coronel de Carabineros;

Documento N° 36 (NUE 2098584)

Estados de pago Coyhaique Alto

Estados de pago Isla Huar

Estados de pago Lago Castor

Documento N° 875 (NUE 2098490)

Estados de pago Villa Ortega

Estados de pago Isla Huar:

Documentos N° 485, 486, 487 y 488 (solicitud estado de pago, factura estado de pago, cheque y documento de Tesorería, 4° estado de pago, retén Isla Huar)

Documento 1.257 (ampliación a la vista fiscal, 21 de octubre de 2014); establecer y aclarar lo siguiente: **a) a.1.** perjuicio fiscal (monto pagado por obras no ejecutadas por CGM, considerando el avalúo de los materiales entregados a la empresa Grossman): comisión ejecutiva y lo informado ITO Pizarro, conforme cuadro demostrativo, se determinó que en Lago Castor, Isla Huar y Coyhaique Alto, \$994.156123, versus los trabajos efectivamente realizados \$ 5.999.983, por tanto el perjuicio fiscal comprobado asciende a \$394.363.340 (fs. 3030 a 3032, tomo 8, del sumario; **a.2.** los materiales entregados bajo acta 776, para: a.2.1. terminación trabajos Villa Ortega: inventario de materiales: 19 millones de pesos y

fracción; a.2.2. Lago Castor \$18.052.810; a.2.3 acta entrega Villa Ortega 766: 2.545.240; **a.3.** multas que se debieron cobrar, Departamento L1 informa que no encontró documentación del ITO Pizarro relacionada con atrasos de las obras de Lago Castor, Isla Huar y Coyhaique Alto, por lo que no es posible calcular el monto de las multas; en cuanto a Villa Ortega, se cursaron multas por \$5.111.050, equivalente a 12 días corridos (conforme anexo 7 que se adjuntó); **b)** informar cantidad de juicios laborales en que haya sido demandado el Fisco-Carabineros de Chile en forma subsidiaria (se adjuntó cuadro con un total de 16 causas, no se da lectura a las tablas); **c)** careo entre Teniente coronel Christian Bustos Morgado y el Inspector Técnico de Obras, Francisco Pizarro Dasso (se procedió el 7 de octubre de 2014, desde 10:25 horas, sin que se logaran aclarar las contradicciones entre ellos, manteniéndose cada uno en sus dichos); **d)** solicitar antecedentes de la investigación que se sigue en el ministerio público: no fue posible cumplir con este cometido por no tener facultades para solicitar dicha información.

A raíz de lo anterior, y conforme a la información consignada en estos anexos, esta Fiscalía procedió a confeccionar un cuadro resumen ilustrativo, determinándose que el monto pagado a la Empresa C.G.M. en los proyectos de Reposición del Retén Lago Castór, Retén Isla Huar y Tenencia Coyhaique Alto, ascenderían a un total de \$ 994.156.123.-, mientras que el monto real total de lo ejecutado en estas obras, ascendería a un total de \$ 599.792.783. Por lo tanto, de acuerdo a las diferencias existentes entre ambos montos, se puede establecer que el perjuicio fiscal comprometido ascendería a un total de \$ 394.363.340.- (Antecedentes de fs. 3.030 a 3.032, Tomo VIII del Sumario)

B) Que, de acuerdo a los antecedentes obran en el Sumario Administrativoa cada uno de los involucrados identificados este proceso investigativo, le cabe la responsabilidad administrativa consignada 3 parte estimativa de la Vista Fiscal, manteniéndose en los mismos términos cada de las medidas disciplinarias impuestas para el CORONEL Sr. FÉLIX FLORES SANTIS, Director de la Escuela de Carabineros, el TENIENTE CORONEL CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO, de dotación de la

prefectura Santiago Costa, dependiente de la Jefatura de Zona Metropolitana Oeste, TENIENTE LUIS ALBERTO PARRA ÁVILA, C.P.R. Ingeniero en Construcción FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO, el C.P.R. Constructor Civil GUILLERMO ANTONIO NADAL AGOST, la C.P.R. Arquitecto ANDREA LORETO CAMPUSANO MUÑOZ, la C.P.R. y el C.P.R. Ingeniero Eléctrico, HECTOR ALEXIS SALAMANCA RIQUELME, estos últimos de la dotación del Departamento leles L.1.

19) (2) Perito MANUEL LARA CERDA (perito contable PDI).

El 29 de diciembre de 2017 se evacuó a petición del ministerio público el informe pericial contable N° 343, destinado a establecer los abonos superiores a \$300.000, efectuados en la cuenta corriente del Banco de Chile de Félix Flores, asimismo el perjuicio sufrido por Carabineros respecto de las obras de los retenes de Villa Ortega, Isla Huar, tenencia Coyhaique Alto y retén Lago Castor. En cuanto a lo primero, se informó que no era de su *expertiz* evaluar las obras sino sólo montos; la cuantificación y análisis de las cartolas de Félix Flores, se informó que, excluidos los depósitos por concepto de pago de remuneraciones, el resultado fueron 40 operaciones en la cuenta corriente por aproximadamente \$42.000.000, entre los cuales se encuentran traspasos a líneas de crédito, cheques protestados, pago a proveedores, entre otros; asimismo, se identificaron 18 depósitos en efectivo, los cuales sumaron aproximadamente \$21.000.000; se informó además que estas operaciones se sub-clasificaron en 8 operaciones por un total de \$13.000.000 millones de los cuales no se dispuso de ningún antecedente, detectando que una de ellas alcanzaba a \$10.300.000; las restantes siete (7) eran en promedio de \$500.000; entre los depósitos en efectivo se encontraron cuatro (4) boletas de depósito por aproximadamente \$2.100.000, cuyo depositante es J. Jeldres, otros dos (2) por \$2.300.000, depositante Gloria Acevedo, otras tres (3) boletas por aproximadamente \$2.500.000, depositante Félix Flores, y una (1) boleta por \$600.000, cuyo depositante resultó ilegible. Se identificaron cuatro (4) operaciones de transferencia a otros bancos, Banco de Chile, por aproximadamente \$3.500.000, de los cuales no se dispuso documentación respecto de su origen, sumando alrededor de \$1.000.000; otra por \$21.500.000, depositante Fernando Pérez, 7; y la última por un (1) millón de pesos consigna a

César Rojas como depositante. Lo anterior ocurrió entre 2012 y 2013. En cuanto al último punto, obras cuestionadas, validar y cuantificar los montos compra y autorizados por dichas obras; primero se analizó retén Villa Ortega: se constató que se autorizaron siete (7) estados de pago más un (1) contrato addendum, las retenciones y una diferencia, arrojando finalmente como resultado la cantidad de \$405.000.000 aproximadamente el total pagado, mismo valor que fue facturado por la empresa CGM Ltda.; los montos se pagaron incluyendo las retenciones; b) retén Isla Hugar, se verificó aprobación de 8 estados de pago por \$365.00.000 aproximadamente, descontadas las retenciones, monto que fue el facturado por la empresa CGM; la terminación por parte de Grossman no se tuvo antecedentes tales como estados de pago; c) tenencia Coyhaique Alto, constan ocho (8) estados de pago por aproximadamente \$308.000.000 millones de pesos, autorizados y facturados por CGM Ltda.; el término anticipado dio lugar a trato directo con empresa Grossman de la cual no se tuvieron antecedentes de estados de pago ni facturación; d) Lago Castor, se aprobaron ocho (8) estados de pago, \$321.000.000, aproximadamente fueron facturados y autorizados a la empresa CGM Ltda.. Conclusión de la pericia fue que se comprobaron y validaron los montos en cuestión. Hubo una solicitud de ampliación (N° 75), evacuado en marzo de 2018, para el cual se aportaron más antecedentes; se pedía establecer montos y funcionarios participantes para la terminación del retén Villa Ortega: se estableció que se utilizaron una suma total de la ter \$7.663.573, de fondos fiscales, los cuales están distribuidos, primero en la solicitud de pasajes vía Sky, por aproximadamente \$1.600.000, solicitados por el Coronel Félix Flores para 7 funcionarios para la terminación de la obra retén Villa Ortega; asimismo se solicitó el pago de viáticos para ellos, ascendieron \$2.000.000; finalmente, en acta de entre N° 766, sin valorar montos los materiales para la terminación cotizados en Easy y Sodimac, siendo esta última la que contiene la totalidad de los materiales, por \$3.4000.000. Señaló que *con todo esto* los gastos sumaron finalmente \$7.600.000. Posteriormente, en agosto de 2018 se confeccionó el informe pericial N° 218, ampliación del informe inicial N° 343, adjuntándose nuevos antecedentes de las obras cuestionadas, solicitándose los pagos de las obras autorizadas y facturadas. Señaló que se estableció la casi totalidad de los pagos, quedando 3 sin acreditar el pago de las facturas (dos (2) correspondientes a Villa Ortega y uno (1) de Isla Huar). Posteriormente se efectuó una nueva ampliación, informe N° 245, del mes de septiembre de 2018, para el cual se adjuntaron los antecedentes faltantes para acreditar esos pagos, determinándose de esa forma el 100% de los pagos de las obras. En este informe se consolidaron la totalidad de los pagos: a)

Villa Ortega, se facturaron y pagaron aproximadamente \$405.000,0000 a la empresa CGM Ltda.; b) Isla Huar, \$365.000.000 aproximadamente, se acreditó su pago directamente a la empresa CGM Ltda., sin perjuicio de los pagos efectuados a los factoring por concepto de cesión de créditos; c) Coyhaique Alto, \$308.000.000 aproximadamente, se acreditó su pago a empresa CGM y a las empresas de factoring a quienes se cedieron los créditos; d) Lago Castor \$321.000.000, aprobados y autorizados en el 100%. Los comprobantes de cheques de tesorería registran las operaciones contables, además de las cédulas de identidad de la empresa CGM Ltda. y las empresas factoring, en los que consta el retiro de los documentos de pago. Consultado por el perjuicio estuvo dado porque la ejecución de las obras fueron terminadas anticipadamente versus los informes técnicos del inspector de obras. Las boletas de garantía no fueron consideradas por no corresponder a la pericia sino sólo los estados de pago y la facturación de parte de la empresa. Se exhiben **otros medios de prueba, N° 8**, correspondiente a 7 tablas excell: la primera, constan las 40 operaciones contables antes mencionadas, por un total de \$42.385.583; la segunda, aparecen los 6 estados de pago del retén Villa Ortega, en los que consta lo solicitado por el contratista y lo aprobado por el ITO, descontadas las retenciones; sexto estado de pago, facturación por 19 millones, lo que arroja finalmente el total facturado de \$405.281.5; la tercera, corresponde a la exhibición de antecedentes de la obra Isla Huar, se pagaron 8 estados aprobados por el ITO por \$384 millones de pesos aproximadamente, de los cuales se descontaron las retenciones, siendo finalmente \$365.064.863 el monto total facturado y pagado; la cuarta, corresponde a tenencia Coyhaique Alto, 8 estados de pago aprobados por el ITO, de los cuales se facturó el total aprobado menos las retenciones, siendo el total facturado y pago ascendente a \$307.995.824; la quinta, corresponde a las obras del retén Lago Castor, se aprobaron por el ITO \$340 millones y fracción, menos las retenciones, quedando un saldo de \$321.095.435, correspondientes al monto facturado; cuadro correspondiente al informe pericial contable N° 75, corresponde a la ampliación del informe pericial N° 343, en el cual se estableció y acreditó los fondos de Carabineros utilizados para la terminación de las obras del retén Villa Ortega, ascendentes a \$7.663.573, el total de los gastos incurridos. Las cotizaciones mencionadas anteriormente fueron solicitadas a Easy y Sodimac. Se **le exhibieron los documentos N° 689 y 690**: el primero, corresponde a cotización en Sodimac, y el segundo, cotización en Easy, con V°B° de aprobación; los materiales utilizados constan en su totalidad en la cotización de Sodimac, no así en Easy. Se **le exhibe el documento N° 591, incorporado anteriormente**

con el N° 636: acta de entrega N° 766, contiene el visado del acta de entrega de los materiales requeridos para la terminación de Villa Ortega, mismos materiales que fueron solicitados cotizara a Sodimac, pero sin valorización. Se **le exhibió el documento N° 1.310:** **a)** Cadena de Custodia: lo reconoció, señaló que correspondía a un disco compacto, la cadena de custodia es la N° 2097826 (informe de análisis de inteligencia de Carabineros de Chile); **b)** en cuanto al CD refiere que no recuerda los documentos que allí se contienen; señala que tuvo a la vista los documentos de pago digitalizados considerados en la pericia (facturas). Se **le exhibió el documento N° 797:** NUE 2098317, corresponde a los 4 tomos de las obras cuestionada: a) primer tomo, analizado contienen documentación administrativa y comercial, retén Isla Huar, remisión de factura, Oficio remite factura, certificado de antecedentes laborales, carta de solicitud de estado de pago, estado de pago firmado por el ITO y los responsables y la planilla del estado de avance de las obras, copia del contrato. Consultado acerca de si había tenido a la vista la carpeta de investigación, respondió que sí. Acto seguido se **le exhibieron los documentos N° 485, 486, 487, 488 y 494;** el primero, corresponde al estado de pago N° 4, Isla Huar; el segundo, corresponde al registro administrativo del mismo documento anterior (V°B° para el pago y retiro del documento; el tercero, CGM factoriza cheque de estado de pago; el cuarto, corresponde a la factura N° 53, estado de pago N° 4, pago al cliente; y el último, copia cedible por el cual se retiró el documento de pago anterior, en el que se da por cancelada la operación. Refirió que estos documentos los tuvo a la vista respecto de todas las obras. Se **le exhibe su informe pericial, N° 218**, a efecto que se refiera a los estados de pago de: **a) Villa Ortega:** N° 1, se efectuó a CGM Ltda., de fecha 25 de diciembre de 2012, por \$81.032.184; N° 2, de fecha 21 de febrero 2013, por \$33.348.195; N° 3, fecha 12 de marzo 2013, por \$12.354.741, pagado a CGM; N° 4, se canceló a Interfactoring, el 19 de abril 2013, por \$40 millones y fracción; N° 5, se pagó a Interfactoring, con fecha 9 de mayo 2013, la cantidad de \$79 millones y fracción, N° 6, Interfactoring, fecha 14 de junio 2013, por \$55 millones y fracción; N° 7, cancela a Interfactor, con fecha 2 de julio de 2013, la cantidad de \$56.735.820; **b) Isla Huar:** N° 1, pagado a CGM el 12 de marzo de 2013, la suma de \$58.031.299; N° 2, pagado a Interfactor, con fecha 19 de abril de 2013, la suma de \$25.855.235; N° 3, se paga a Interfac Security, el 9 de mayo de 2013, la cantidad de \$27.806.411; N° 4, se paga a Interfactor, el 19 de junio de 2013, la suma de \$62 millones y fracción; N° 5, a Interfactor, el 2 de julio 2013, se paga \$70.554.210; N° 6, se paga a Bice Factoring, el 26 de mayo de 2013, la suma de \$32.817.666; N° 7, se paga a Bice Interfactoring, el 26 de

septiembre de 2013, la cantidad de 42 millones y fracción; N° 8, se paga a Factor Security, el 17 de octubre 2013. La suma de \$ 44 millones y fracción; **c) Coyhaique Alto**, estados de pago: N°1, se pagó a CGM, el 4 de enero de 2013, la cantidad de \$46.747.354; N° 2, se paga a Interfactor el 21 de febrero 2013, la suma de \$19.306.001; N° 3, se paga a CGM, el 12 de marzo de 2013, la suma de \$34.699.207, N° 4, se paga a Factoring Security, el 24 de abril de 2013, la cantidad de \$31.984.548; N° 5; se paga a Interfactor S.A., el 9 de mayo 2013, la cantidad de \$54.847.886; N° 6, pagado a Interfactor S.A., el 2 de agosto de 2013, la cantidad de \$ (inaudible). 140.184; N° 7, se paga a Bice Factoring S.A., el 4 de septiembre de 2013, la suma de \$34.244.168; N° 8, se paga a Interfactor S.A., el 4 de septiembre de 2013, la suma de \$32.026.396; **d) Lago Castor**: estados de pago: N°1, pagado a CGM el 4 de enero de 2013, \$45.527.806; N° 2 pagado a CGM el 22 de febrero de 2013, por \$22.863.994; N° 3, pagado a CGM el 12 de marzo 2013, por \$ 38.332.575; N° 4, a Interfactor S.A., el 19 de abril de 2013, por \$35.395.931; N° 5, no se dispuso de información; N° 6, pagado a Bice Factoring S.A., 19 de junio de 2013, la suma de \$53.839.490; N° 7, pagado a Bice Factoring S.A., el 25 de julio de 2013, por la suma de \$36.825.402; N° 8, pagado a Interfactor S.A., el 20 de agosto de 2013, la suma de \$35.032.021. Consultado por el estado de pago N° 5, sin información, se gestionó una ampliación que quedó plasmada en el informe pericial N° 245. En cuanto al citado informe de ampliación, respecto del estado de pago N° 5, refirió no recordar la suma total pagada por Lago Castor, exhibiéndosele al efecto su informe N° 245, a efectos de recordar la información solicitada: exhibido y reconocido dio lectura: se pagó a Interfactor S.A. la suma de \$53 millones y fracción, con fecha 9 de mayo de 2013;

Interrogado por el querellante, se le reiteraron las preguntas del ministerio público

Interrogado por la defensa de Bustos, se le reiteraron varias de las preguntas anterior, pidiéndole además su juicio u opinión respecto del modus operandi en los delitos de fraude y semejantes. Asimismo algunas precisiones respecto de la documentación analizada.

Fue interrogado por la defensa del acusado Pizarro.

Fue interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, se le reiteraron las

Interrogado por la defensa de Rojas, señaló que se configura perjuicio fiscal cuando se destinan los montos a otro destino o cuando se abultan los montos. No vio los cheques pagados a las empresas CGM ni Grossman. En su informe N° 343, sólo se consignó los montos aprobados por el ITO y facturados por la empresa, pero en ello no se da cuenta de un perjuicio. No hay detrimento patrimonial en la circunstancia de utilizar materiales de Carabineros que fueron trasladados a Villa Ortega para la terminación de las obras en dicho lugar, aclarando que el perjuicio verificado en su informe decía relación en el hecho de que se dio por aprobada la terminación de las obras de Villa Ortega sin que efectivamente lo estuvieren, procediéndose a virtud de ello a la aprobación y pago de los estados de pago.

Interrogado nuevamente por el querellante (artículo 329 del Código Procesal Penal) respecto del perjuicio fiscal explicó que se produciría en el caso propuesto, esto es, pagar nuevamente por obras que ya fueron pagadas.

Interrogado nuevamente por la defensa de Rojas (artículo 329 del Código Procesal Penal), se le consultó acerca de si era o no posible cobrar por caja un cheque nominativo y cruzado, respondió que eventualmente podría ser pero que desde un punto de vista estrictamente formal ello no era posible.

PRUEBA DOCUMENTAL

Documento N° 98: 1) Boleta depósito por \$81.032.184 a cuenta corriente de CGM, deposito efectuado por César Rojas; 2) Idem, en cuenta corriente BCI, depositante César Rojas, por \$45.527.806; cheque de la DILOCAR de 4 de enero de 2013 en cuenta del Banco Estado, páguese a CGM \$45.527.106; 3) Boleta de depósito Bci 10 de enero 2013, CGM, César Rojas depositante, \$46.747.334; cheque DILOCAR de 4 de enero de 2013, páguese a CGM \$46.747.334; 4) Boleta depósito de 22 de febrero de 2013, cuenta de CGM, depositante DILOCAR, monto \$22.863.994; copia del cheque de DILOCAR, fecha 21 de febrero de 2013, a nombre de CGM por la misma suma, al dorso "CGM cta corriente timbre de Carabineros de Chile; 5) Boleta de depósito de 14 de marzo de 2013, a cuenta de CGM, depositante César Rojas, por \$34.699.207; copia del cheque del Banco Estado DILOCAR, de fecha 12 de marzo 2013, páguese a CGM; 6) boleto de deposito de 14 de marzo 2013, titular cuenta CGM Ltda., depositante César Rojas,

\$12.354.741; copia de cheque de la DILOCAR, a cuenta Banco estado, de 12 de marzo de 2013, páguese a CGM, \$12.354.741; cheque; 7) boleta de depósito de 30 de septiembre de 2013, titular cuenta CGM Ltda., depositante DILOCAR L8, \$2.999.526; cheque de DILOCAR, de 26 de septiembre de 2013, por \$2.999.526;

HECHO N° 2

Documento N° 616 (lectura parcial): NUE 4360043; 1) cheque FEALFRA SPA, de Corpbanca, páguese a Ingeniera y Construcción Torrejón Ltda., \$1.036.548, 23 de enero de 2013; cheque cuenta FEALFRA SPA, Corpbanca, de 15 de enero de 2012, páguese a Constructora e Ingeniería Torreón Ltda \$2.995.329; 3) Factura Ripley a FEALFRA, 1 impresora y 3 multifuncionales, 16 de octubre de 2012, \$ 149.960; comprobante de venta y pago) Factura Easy, a nombre de Rodrigo Bustos, comprobante de venta y pago “Yiyo”; 4) Factura Dartel Valparaíso Ltda., fecha???, emitida a FEALFRA SPA, 5) Factura de Abastible S.A. de 26 de octubre de 2012, a FEALFRA SPA, a nombre de Rodrigo B. 10.285.”773-9”; 6) Factura de Easy a FEALFRA SPA, recibe Rodrigo Bustos, RUT N° 10.285.773-9; 7) Factura 15698, de Soc Inversiones Los Maitenes Ltda, 25 de octubre de 2012, dirigida a FEALFRA SPA, recibida por Rodrigo Bustos, RUT 10.285 y el resto ilegible; Factura de Molino San Jorge, con domicilio en Hualañé, a la empresa FEALFRA SPA, recibe Rodrigo Bustos, RUT N°10.285.772-9, 25 de octubre de 2012; 8) factura, misma empresa anterior, sucursal Hualañé, a FEALFRA SPA, 25 de octubre de 2012, materiales de construcción (tubos pvc, cadena, entre otros9), recibe la factura Rodrigo Bustos, mismo RUT anterior; 9) factura Flavio Ricardo Sobarzo Fritz, comercial Multicentro, a FEALFRA, 26 de octubre de 2012, un alojamiento, recibe factura Rodrigoo Bustos, mismo RUT; 10) Factura de Aridos Hacibuebo Ltda., 29 de octubre de 2012, a FEALFRA, recibe Rodrigo Morgado; 11) Factura de Dimase, Materiales de Construcción, emitida FEALFRA SPA, de 30 de octubre de 2012, la recibe Rodrigo Bustos, mismo RUT anteriores; timbre “entregado” 30 de octubre de 2012; 12) Guía de Despacho de Europlas Ltda., emitida FEALFRA SPA, de 14 de noviembre de 2012, *materiales*; dirigidos a Lontué y en otra a Itahue; 13) Factura de Soc de Inversiones tfdda, sociedadde iujversiones, Hualañé (aparece en la parte superior escrito a mano), a FEALFRA, el 17 de niviwembre de 2012, recibe factura Rodrigo Morgado, RUT N°10.2 y lo demás ilegible; Factura de Soc. de Inversiones Ltda, superior a mano escrito Hualañé, 15 de noviembre de 2012, dirigida FEALFRA SPA, recibe Rodrigo

Morgado; Factura Sociedad Alimentos San Martín Ltda., a FEALFRA SPA, parte superior derecha comprobante de venta que dice escrito a mano “yiyo”; abajo, recibe Rodrigo Bustos M., RUT 10.285.773-9, 20 de noviembre de 2012 ; Factura de 22 de noviembre de 2012, de la empresa Easy a FEALFRA SPA (pulverizador y multisol), recibe Rodrigo B. RUT 10.285.773-9, Factura emitida por Soc Facava Electricidad, Talca, emitida a FEALFRA SPA, (conmutador cable superflex), recibe factura Rodrigo Morgado, sin firma pero con RUT 10.285.773-9; Factura de Ferreteria Covadonga Ltda, a FEALFRA SPA, de 5 de (mes ilegibles) 2013 (grasa consistente), recibe Rodrigo Morgado, RUR ilegible; Factura de proyectos de Ingenieria y Diseños Ltda, a FEALFRA SPA., 5 de marzo de 2013, recibe Nelson Bustos M., RUT 10.286.188-4, el 5 de marzo de 2013; Factura emitida por Chile Maderas Ltda., a FEALFRA SPA 15 de enero 2014, recibe Rodrigo Morgado, RUT 10.285..(ilegible)-9; Factura de 6 de marzo de 2014, Sociedad Cartel S.A., distribuidora de artículos Eléctricos, a FEALFRA SPA, Kit de poste, panel solar LED, recibe factura Rodrigo Bustos, San Francisco de Mostazal; Nota de Crédito de empresa Atika, 19 de febrero 2014, a FEALFRA SPA (Lavamanos apoyoblanco), firma Rodrigo Bustos, RUT 10.285.773-9; Factura de 19 de febrero de 2014, de Atika a FEALFRA (lavamanos apoyo blanco), recibe factura Rodrigo Biustos, mismo RUT anterior; Guía despacho 6091, Dartel a Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda., con domicilio en Quillota, mensaje escrito a mano: “Osvaldo, adjunto esta factura, según se me indica corresponde a FEALFRA, pero facturado a nombre de Torrejon porque no tenía RUT”, al final de la factura, en letra manuscrita “devolver Torrejón”;

Documento N° 790:

Oficio S/N del Banco Santander, de fecha 20 de junio de 2018; (documentación remitida, consistente en información bancaria relacionada a Juan Alejandro Soto Jara, y Sociedad Juan Alejandro Soto Jara EIRL (FEALFRA LTDA.), documentación contenida en un CD (NUE 2098245).

20°) (18) Testigo OMAR GUTIÉRREZ GÁMBARO (General de Carabineros).

Interrogado por el ministerio público, respondió: Fue el fiscal del sumario administrativo, cuando era Coronel de Carabineros, se dio inicio porque el Coronel Águila dio cuenta formal de que había cuatro (4) cuarteles que habían sido

licitados pero no guardaba relación lo pagado por la institución con lo edificado. El objetivo era determinar las responsabilidades administrativas. Se responsabilizó al Coronel Félix Flores, al jefe de la oficina de desarrollo de proyectos, Christian Bustos Morgado, al CPR ITO, ingeniero en construcción, Francisco Pizarro Dasso, y a determinados oficiales y personal CPR que se desempeñaban en el Departamento Cuarteles los años 2012 y 2013. Se apoyó en el DS 294, con arreglo al cual fue detectando muchas irregularidades. Se reunió con el abogado de asesoría jurídica. Desde un principio se le advirtió que *por ningún motivo utilizara medidas intrusivas*, lo que le dificultó enormemente la realización del sumario. Designó como secretario a Cristian Montre, y dos Cabos y un personal de OS7 para el apoyo logístico. Terminó el sumario en agosto de 2014, los cuarteles seguían igual, lo que le hizo desconfiar de la información que le llegaban, por lo que solicitó dos pericias a cargo de Labocar, consistieron en inspección personal para verificar el real estado de las obras. Pizarro le declaró que había cometido irregularidades en los informes administrativos. En los cuatro (4) retenes detectó irregularidades, v.gr., en Coyhaique Alto, hubo una fiscalización por la SEREMI de Salud ante graves irregularidades con los trabajadores. En el sumario apareció *un tal César Rojas, a quien conocía por haber sido parte de la institución*; se dio cuenta que Rojas mantenía relación de amistad con César Bustos, detectó varias irregularidades de su parte lo cual le llevó a establecer que Christian Bustos había incurrido graves irregularidades. Solicitó un informe técnico a un oficial, Ronald Saldías, quien en ese entonces se desempeñaba en la Inspectoría General de Carabineros, alta repartición a cargo de fiscalizar el buen servicio que presta Carabineros. Ese peritaje determinó una diferencia de dinero entre lo construido y lo pagado. El perito revisó los procesos licitatorios, lo que no merece mayores observaciones, no así las diferencias detectadas entre lo pagado y lo edificado. Supo por declaraciones de testigos que había cotizaciones impagas. Saldías también detectó irregularidades en esa misma línea. Constató deuda previsional de los trabajadores de CGM, existían demandas contra Carabineros por ser solidariamente responsables. La fiscalización de Coyhaique Alto fue porque no existían medidas de seguridad, ordenó la paralización de las obras, el Departamento de Cuarteles no hizo nada para corregir esa situación. Pizarro tenía una foto suya en Facebook en la que aparecía con ropa militar en la zona de Coyhaique en faena de caza. Habían estado de pago con la visación de Pizarro, verificándose un. Le comprobó amistad con Cristian Gutiérrez, ello a partir del libro de visitas en el hotel Dreams de Coyhaique, en el cual se alojó varias veces. Pizarro reconoció que en horas libres

desarrollaba labores de caza. Señaló que Christian Bustos le daba órdenes directas de Christian Bustos para “hacer las irregularidades”, las que “reconoció”. Esas órdenes consistían en que las actas de entrega se realizaron en dependencias del Departamento Cuarteles, ello amparado por Pizarro, Christian Bustos y Félix Flores, lo que es contrario al DS 294. Concretamente las irregularidades se manifestaban en los informes técnicos, “el ITO era quien determinaba” cuánto se pagaba según el avance de las obras. En Villa Ortega se dispuso una comisión del Departamento de Cuarteles para finalizar las obras. Allí fue un abogado Isidro Martínez, quien fotografió las obras, le señaló que la había tomado porque no conocía la zona; en la foto se veía que al retén le faltaba bastante pero que ya había sido pagado. Las órdenes que refirió Pizarro se pudieron acreditar por testigos. Agregó que le llamó la atención que el proceso calificadorio del año 2013 Bustos lo calificó con el máximo puntaje, con conceptuosas palabras de profesionalismo y dedicación al empleo, esto en circunstancias que recíprocamente se imputaban responsabilidad. Se le **Fojas 2.446, sumario administrativo, documento N° 66 (anteriormente aportado)**. Lo reconoció, dijo “obra en el sumario administrativo”, es la evaluación de desempeño que tuvo a la vista de Francisco Pizarro Dassa, ingeniero en construcción: *con merecimientos para aumento de grado*. La evaluación se hace en septiembre de cada año. Bustos era el encargado de hacerlo, se dio cuenta que él era el encargado de casi todo el Departamento de Cuarteles, se dio cuenta que él era el jefe y no Félix Flores, quien en sus declaraciones decía que concurría continuamente al Departamento de Logística. Señaló que la cabo Zenteno le informó que habían irregularidades tales como boletas de garantía que habían sido retiradas, empresas que habían sido irregularmente inscritas, como en el caso de Grossman, todo ello a vista y paciencia de la jefatura del Departamento de Cuarteles. A Pizarro se le sancionó por haber reconocido expresamente haber alterado los informes, por instrucciones de Bustos, situación de la que debió haber dado cuenta, lo que sí hizo el Coronel Águila cuando asumió la jefatura en los meses de enero o marzo. Cuando Pizarro iba a fiscalizar era ordenado por Bustos. Bustos tenía control sobre Pizarro, por ejemplo, porque se hizo una reunión en el Departamento de Cuarteles en que se adjudicó la licitación en el propio Departamento. Los CPR tienen las mismas obligaciones que los funcionarios de la institución. La responsabilidad de Bustos la determinó en función de las irregularidades constatadas, que de haber él “accionado” nada habría ocurrido, esto es, haber dado cuenta como lo hizo Águila. Tuvo que dar cuenta cuando, “creo yo”, ocupaba un cargo y concurrió dos veces en Comisión de Servicio a las

obras, en las que se constató el estado de las obras, de lo cual no dio cuenta. Hizo presente que en esas comisiones participaron personas designadas por el propio Bustos. Se **le exhibió del documento N° 66, fs. 1049 y 1051**: NCU por la cual solicita pasajes a Villa Ortega y Resolución Exenta N° 381 que designa a los integrantes de la Comisión a Villa Ortega: *Comisión: designa comisión para recepción provisoria de las obras Villa Ortega*, v.gr., jefe de la Comisión Christian Bustos. Las obras debían estar “100% de ejecución”. En esa Comisión no había sido considerado Isidro Martínez, pero por razones que se ignoran fue posteriormente incorporado. El objetivo de la Comisión era concurrir a todas las obras. Se **le exhibió la foja 1.062 del sumario administrativo, del documento 66** (acta de recepción de obra): lo reconoce, lo tuvo a la vista durante el sumario, se trata de un acta de recepción provisoria de Villa Ortega a Bustos Morgado. El documento aparece firmado por Cristian Gutiérrez Martínez, Andrea Campusano Muñoz, Héctor Salamanca Riquelme, Guillermo Nadal y V°B° Christian Bustos Morgado. Preciso que “desde el momento que esas personas firman, se están haciendo responsables de que en el retén no había obras terminadas”. En el sumario Andrea Campusano le declaró que en el viaje de la Comisión Bustos había dispuesto que firmara el acta de recepción de las obras. El acta da cuenta que lo pagado no está realizado, lo que desde ese momento debió haber dado cuenta. Se **le exhibieron, del documento N° 66, las fojas 2.610, 2.611 y 2.612** (antes incorporadas con la declaración de Martínez): lo reconoce, corresponde a un oficio suscrito por el abogado Isidro Martínez Bacigaluppi, en el cual le hace entrega formal de la fotografía al Departamento de Cuarteles; dice que “*por iniciativa propia, sin que nadie me lo ordenara, tomé tres fotografías del retén, una de la parte trasera y dos de su interior*”. Agregó el testigo: “en las que está en evidencia el notable estado de abandono de las obras”. Se **le exhiben las fotografías** en mención: refiere que “la foto es evidente”, desde el sólo *punto de vista formal una obra no puede ser recibida en ese estado, además, atendidas las condiciones climáticas no puede funcionar, esas obras no están en condiciones de que el personal de Carabineros “pueda cumplir adecuadamente sus funciones”*. En una oportunidad “Bustos me señaló que tampoco tenía experiencia en construcción”. “Hubo maniobras en el Departamento de Cuarteles para defraudar al Fisco”. Conforme al estado de las obras que acaban de exhibírsele, señaló que a Pizarro “Bustos debió haberlo destituido”. Consultado respecto de la significación del “V°B°”, que de Christian Bustos Morgado, *significa en carabineros que la persona que está dando fe que el acto administrativo se desarrolló de la manera que estaba escrita*, “es una certificación reglamentaria mediante la cual el jefe da

aprobación al acto administrativo de que se trate”. Lo anterior es aplicable a todo acto de Carabineros. El acta de recepción requiere de V°B°. Bustos fue en dos oportunidades a Villa Ortega, en ninguna de las cuales hizo absolutamente nada. En agosto de 2014 entregó el sumario al director de Logística de Carabineros, fecha a la cual todos los retenes y cuarteles estaban igual que al principio e incluso peor, ello en julio de 2013. Después de esa fecha concurren a las obras Carabineros de Coyhaique y Puerto Montt. Respecto de Villa Ortega tomo declaración a todos los intervinientes en ella, varios dieron cuenta que hubo irregularidad en los pagos previsionales del personal de CGM, ante lo cual solicitó las querellas de los trabajadores interpuestas en tribunales. La responsabilidad de Félix Flores era el jefe del Dpto de Cuarteles por permitir estas irregularidades, ya que si firmó un papel debió haberlo revisado, además porque designó una Comisión para terminar los trabajos de Villa Ortega. **Se le exhibió la foja 1265d del sumario administrativo (documental N° 66), antes incorporado:** solicitud de pasajes para Villa Ortega: lo reconoce y obra en el sumario administrativo, lo remite L1 a la DILOCAR y solicita pasaje aéreos, informativo para Francisco Pizarroi, Christian Bustos Morgado Bustos (hefe) subteniente Luis Parra, lo anterior para gestionar pasajes destinados a preparar la inauguración de Villa Ortega; firma oficio el jefe del Departamento L1, Félix Flores. Esta Comisión es a la cual antes me referí, *concerniente a los trabajadores que fueron a terminar las obras del retén Villa Ortega; a ese entonces ya se habían efectuado los estados de pago y ya se había realizado la recepción de las obras por la Comisión a cargo.* **Se le exhibió el documento N° 1.057** (acta de recepción, observaciones); 24 de julio de 2013, CGM hace entrega a Christian Bustos Morgado, jefe del área de coordinación y ejecución de proyectos del Departamento de Cuarteles L1; dice “sin observaciones”; por declaraciones de testigos se determinó que ellos no estaban en Villa Ortega sino que en el Departamento de Cuarteles; consta que firmaron Cristian Gutiérrez Martínez, representante legal de la empresa CGM, Andrea Campusano, Héctor Salamanca, Guillermo Nadal, aprobada con el V°B° de Christian Bustos Morgado, jefe de área de coordinación y ejecución de proyectos del Departamento de Cuarteles. Señaló que antes de esa acta, el ingeniero en construcción fue a revisar las obras. **Se le exhibió documento N° 1.056, antes exhibido:** lo reconoce, está en el sumario administrativo, se refiere a un documento electrónico ordinario, de Pizarro para subteniente Luis Parra, con informativo a Christian Bustos Morgado, Andrea Campusano Campusano, Guillermo Nadal; asunto: constatación de subsanación de observaciones menores de recepción provisoria; solicita comisión de servicio para Nadal a fin de constatar

la subsanación de las observaciones menores de la recepción provisoria, para concurrir el 18 de junio de 2013; lo firma Pizarro Dasso. Consultado si Nadal había viajado, respondió que sí lo hizo, el cual le declaró en el sumario que *había un evidente retraso de la obra pero que lo hizo por instrucciones del Coronel Christian Bustos Morgado*. Se **le exhibió la foja 1.262, del sumario administrativo (documento N°66)**, lo reconoce, consta en el sumario; es de fecha 31 de marzo de 2014, firmado por Galdames, acta N° 766, de 6 de noviembre de 2013, se entregan materiales para reparación y mejora del cuartel de Villa Ortega; lo anterior fue autorizado por la superioridad; acta fue entregada por Leandro Donoso, con V°B° Félix Flores Santis, jefe del Departamento L1. En cuanto a la inscripción de la empresa Grossman, una funcionaria le declaró señaló que la empresa estaba mal inscrita porque adolecía de certificado de capital, el cual llegó posterior a la inscripción, además aparecía como socio César Rojas, socio también de CGM; lo mismo ocurrió con el arquitecto Ignacio Labra, aparecía como tal en ambas empresas. Se **le exhibieron las fojas 2.849 y 2854, del sumario administrativo** (Resolución Exenta N° 847, del sumario, que autoriza la inscripción, y carta que remite antecedentes a la empresa Grossman). En cuanto al primero, lo reconoce, se trata de la Resolución que aprueba la inscripción de la empresa constructora Grossman en el Registro de Contratistas de Carabineros, de fecha 28 de octubre de 2013; precisa que aparecen citados dos “oficios futuros”, como los denominó en atención a sus fechas, N° 277, de 8 de noviembre de 2013, asesor jurídico, Nicolás López Reyes, y N° 101, de 8 de noviembre de 2013, asesor de control de riesgos, Pedro Jofré Montero. Respecto del segundo (foja 2.854), es una carta de fecha 14 de noviembre de 2013, dirigida a Félix Flores, suscrita por Carlos Grossman, mediante la cual se remiten antecedentes para ser incorporados en la carpeta de la empresa Grossman: *por el presente se remite la totalidad de los antecedentes pendientes para la inscripción de la empresa Grossman*. Se **le exhibieron las fojas 1.662 y 1679 (antes incorporados)**. Dijo reconocerlos, el primero, carta dirigida a Carlos Grossman, de fecha 4 de noviembre de 2013, en la cual Félix Flores Santis, jefe del Departamento de Cuarteles, invita a la empresa Grossman a cotizar el proyecto de Coyhaique Alto, mediante trato directo; y el segundo, también lo reconoce, se trata de un formulario especial de oferta económica, oferente Grossman S.A., de fecha 12 de noviembre de 2013, obra Coyhaique Alto, valor neto \$70.034.183, IVA \$13.306.533, total, \$83.340.915, plazo de ejecución 70 días corridos; firma empresa Grossman. En cuanto a las boletas de garantía, estas fueron retiradas, y su entrega ordenada por Christian Bustos Morgado. Se **le exhibió la foja 1.324**

del sumario, acta de entrega de boleta de garantía, de 9 de enero de 2013, Bustos Morgado autoriza su entrega; consta que subteniente Parra procedió a hacer *entrega de la boleta N°1689517, de 12 de noviembre de 2012, proyecto seriedad de la oferta del retén Isla Huar, recibe César Orlando Rojas Gaete, entrega conforme Luis Parra Ávila*. Refirió que Luis Parra dijo en el sumario que había entregado la boleta de garantía “porque el Coronel Christian Bustos se lo había ordenado”, entrega a Luis Rojas Gaete. Se **le exhibieron las fs. 2.887 y siguientes (vista fiscal)**: señaló que lo reconoce, dijo tratarse de la vista fiscal del sumario administrativo, explicando que la vista fiscal consiste en una *resolución del fiscal, en la cual las sanciones propuestas deben estar justificadas*.

Interrogado por el querellante respecto del vínculo que existía entre César Rojas y Christian Bustos, señaló que habían sido compañeros de curso en la escuela de Carabineros. Pizarro Dasso le declaró que ellos se reunían muchas veces a tomar café en un Mall. Explicó latamente lo que implicaba ser oficial de Carabineros, refiriendo que el mando es consustancial a ser oficial. Señaló que como oficiales se les remunera más, y por ello es que la labor de control es esencial al mando, toda vez que a su cargo se encuentra el resguardo del patrimonio fiscal.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, el testigo respondió a las preguntas diciendo: el avance y corrección de las obras está a cargo del inspector técnico de obras, y de esa forma del cumplimiento del contrato; el ITO estaba bajo las órdenes del Departamento de Cuárteles ya que cuando ingresó a la institución en calidad de CPR se obligó a cumplir la normativa legal y reglamentaria; conforme al DS 294, el ITO está sujeto a las instrucciones del Director del Departamento Nacional de Logística; en la denuncia penal del Coronel Águila no se incluyó Villa Ortega, pero comenzó a aparecer durante la tramitación del sumario. Se **le exhibió el documento N° 580, de la prueba documental de la defensa, fs. 34, 35, 36, 37 y 388, del sumario administrativo**: señala que lo reconoce, se trata de un *informe sobre antecedentes a denunciar* al ministerio público por parte del Departamento de Cuarteles L1, de fecha 18 de febrero de 2014, suscrito por Óscar Águila Galdames, en él *no se incluye Villa Ortega*; se hizo lectura resumida, *de los cuatro cuarteles adjudicados sólo se terminó el retén de Villa Ortega; por los proyectos de Isla Huar, Coyhaique Alto y Lago Castor se pagó demás a partir de los informes técnicos del ITO*. A los testigos del sumario se

les advirtió de todos sus derechos, entre ellos el de guardar silencio. Hubo testigos que le pidieron declarar, hubo algunos inclusive que declararon varias veces en el sumario; los derechos reglamentarios fueron debidamente resguardados; se dejó constancia escrita de ello en cada declaración; tomó declaraciones a Andrea Campusano, Guillermo Nadal y a Marcos Pomar Cisternas; antes de que declararan los testigos se les dio lectura de sus derechos y firmaron el acta respectiva. Se **le exhibió del documento N° 580, sumario administrativo, la foja 1913**, acta de notificación de Guillermo Nadal Agosto (“la que se encuentra antes de su declaración”): lo reconoció, *consiste en un acta de notificación de derechos a Guillermo Nadal Agust, contenidos en numerosas disposiciones legales administrativas*. Refirió haber declarado en fiscalía en tres (3) oportunidades, una presencial, con la fiscal Sra. Encina, y dos virtuales, con la misma fiscal, además de una cuarta entrevista que mantuvo con el Sr. Gajardo, de la fiscalía de alta complejidad de Las Condes; la primera vez fue a principios del año 2020, y la última hace 4 días atrás, duraron alrededor de dos horas y media, no firmó acta de ninguna de ellas: refirió no recordar si había prestado declaración escrita en fiscalía. Se **le exhibe declaración a fin de refrescar la memoria** al testigo, la que una vez examinada respondió que sí, que se trataba de una declaración suya, de 20 de marzo de 2018, suscrita por, ante el fiscal Gustavo Zhar Martínez y la fiscal Encina; no recuerda si le exhibieron la foto que tomó Isidro Martínez en Villa Ortega, tampoco el acta de recepción provisoria, tampoco el acta de la Comisión de servicio. Se **le exhibieron las fs. 2.047 a 2055, 2080 y 2081, contenidas en el sumario administrativo, de la documental N° 580, de sus medios de prueba**: los reconoce, es un documento electrónico, de la Subdirección de Drogas Zona Centro Sur para Décimo Primera de Aysén, en que se solicita información de los lugares en que se alojaron los miembros de la Comisión, entre ellos Pizarro Dasso y Cristian Gutiérrez, tanto en la casa de huéspedes de Carabineros como en el Hotel Dreams; en este último se informó dentro de un listado que Cristian Gutiérrez y Francisco Pizarro Dasso, en el año 2013, se alojaron en el citado Hotel, el segundo se alojó 10 veces (fs. 2055): **1)** del 23 de mayo de 2012 al 27 del mismo mes. Habitación 207, cargo empresa dURING; **2)** del 25 de diciembre 2012 al 15 de enero de 2013, habitación 312, cuenta se cargó a la empresa constructora CGM; **3)** 25 de diciembre 2012 al 8 de enero de 2013, habitación 311, con cargo a CGM Ltda.; **4)** desde el 25 de enero de 2013 al 5 de febrero de 2013, habitación 212, pago con cargo a constructora CGM; **5)** del 11 de febrero 2013 al 19 de febrero de 2013, habitación 202, con cargo a CGM; **6)** 25 de febrero al 3 de marzo de 2013, habitación 403, cargado a

la empresa constructora CGM Ltda; **7)** del 9 al 10 de abril de 2013, habitación 403, con cargo a CGM Ltda.. Señal el testigo que *a continuación luego vienen tres veces más*: 10 de abril al 11 de abril de 2013, habitación 102; del 6 de mayo al 9 de mayo de 2013. Se **le exhibió el documento 2.080**: lo reconoció, dijo que se trataba de un documento electrónico de la 11ª Zona Aysén a Subdirección de Drogas Centro Sur, de fecha 21 de abril de 2014; informa que al constituirse en la casa de huéspedes se verificó que Pizarro se había alojado dos veces, la primera, el 6 de agosto 2012, y la segunda, desde el 20 de agosto de 2012; se informa también que Pizarro se alojó en el hotel Dreams 4 veces. En cuanto a los testigos que habrían referido que Bustos daba instrucciones a Pizarro, no recordó sus nombres. Confirmó que todos los ITO fueron calificados con el máximo, nota 4. El *V°B° es una formalidad que involucra el fondo, esto es, la veracidad del acto administrativo sometido a su aprobación*. El mando es inherente a la oficialidad y ello implica el cumplimiento de las normas reglamentarias y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, respondió: “aquí son todos responsables”; por las infracciones a la Ley 18.575 y el DS 294, en que señala tácitamente que debe tener el ITO; el ITO, para los cuatro (4) retenes, fue dispuesto por Comandante Bustos; la foto de Pizarro con ropa de caza la vio en facebook a través de una pantalla, se la mostró el secretario del sumario, es irregular que haya vestido ropa militar, *en todo caso esa fotografía no fue considerada en la vista fiscal*. Respecto de las estadías de Pizarro se le consultó acerca de ciertas discordancias entre las fechas de estadía en el hotel y las autorizaciones de viaje solicitadas por el ITO para viajar a la zona. El D.S. 294 no regula la labor de los ITO, lo que hace es normar la ejecución de las obras policiales de Carabineros de Carabineros.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, respondió a sus preguntas: confirmó que CGM dejó botadas las obras. Se **le exhibió el documento N° 1134, prueba documental del ministerio público** (NCU 16920643, de 25 de octubre de 2013, suscrito por Edgardo Fernández Fernández, jefe de tenencia Coyhaique Alto, asunto: instrucciones L1 informa): se le exhibe y no lo recordó, pero por su fecha “me consta que obra en el sumario”. Se **le exhibió la foja 1, del tomo I, del sumario administrativo**: consultado si lo reconocía, respondió que sólo la carátula del sumario. Se **le exhibieron las fs. 178 y 186 a 205, del sumario**

administrativo: el primero lo reconoce, diligencia de 217 de marzo de 2014, 13,20, deja constancia de haber recibido declaración de Cristian Gutiérrez Martínez, recepción de documentos aportados por el, querella de este contra César Rojas, Carlos Bustos Prats y y Rodrigo Quiroga, impresión de correos electrónicos enviados por Renato Méndez. **Se le exhibió el documento de fs 186 a 205, del sumario administrativo (documento N° 66, prueba documental de la fiscalía):** El testigo señaló que lo reconocía y que se trataba de una querella que le aportó el acusado dentro de los antecedentes antes mencionados. **Se le exhibieron las fs. 1.354 y 1.355 del sumario administrativo (prueba documental N° 66 de la fiscalía):** señaló que los reconocía, corresponde a dos documentos electrónicos, NCU, fs. 1.354 y fs. 1355; del primero indicó que es un documento electrónico, N° 18740653, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, dirigido al Departamento de Cuarteles, *Informe Técnico obras de Villa Ortega*, de 2 de enero de 2014; del segundo, documento electrónico N° 185929, Departamento de Cuarteles a CPR Francisco Pizarro Dasso; *asunto: informe*, fechado el 3 de enero de 2014, fecha plazo de entrega del informe 8 de enero 2014; **se le exhibieron las fs. 1.380 y fs. 1.379, del citado sumario:** respondió que los reconocía, el segundo es un oficio del Departamento de Cuarteles a la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, informe técnico del retén Villa Ortega, se remite archivador color blanco con documentos; el primero, comunicación electrónica del Coronel Osses Cotroneo dirigido a Francisco Pizarro Dasso solicitando información respecto de vínculos familiares o societarios entre los implicados. **Se le exhibe la foja 1.387 del mismo sumario:** lo reconoce, se trata del oficio N° 80, de 23 de enero de 2014, del Departamento de Cuarteles L1 dirigido al Departamento de Logística, suscrito por Osses Cotroneo, jefe subrogante del Departamento de Cuarteles.

Se le exhibió al testigo la foja 1.704, del sumario administrativo: El subteniente Parra declaró que el Comandante Bustos le ordenó hacer entrega de la boleta de garantía a CGM. **Se le exhibe el documento N° 1.076, de la prueba documental del ministerio público:** lo reconoce, refiere que se trata de un oficio del sumario en fs 1.411, suscrito por Gustavo Aravena Vergara, Coronel de Carabineros, jefe de gabinete, en el que informa las visitas efectuadas a los retenes Villa Ortega, Coyhaique Alto, Lago Castor, 3 de febrero de 2014, dirigido a la Dirección Nacional de Logística.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, respondió que no reconocía el documento N° 862, prueba de la fiscalía, que le fuera exhibido para tales efectos. Señaló no haber citado a declarar al General Rojas Langer; asimismo refirió que no existían normas legales o reglamentarias que impidieran a un ex funcionario de Carabineros participar en procesos licitatorios.

El tribunal pidió aclarar dónde se realizaban las adjudicaciones de las licitaciones, precisó que se hacían en el Departamento de Cuarteles, añadiendo que en lo formal el proceso de licitación no tuvo observaciones.

Los intervinientes solicitaron un nuevo interrogatorio al testigo: a) la fiscalía, Bustos y Rojas se desempeñaron juntos en la Subdirección de Adquisición y Compras, se conocía con Flores Santis pero no trabajaron juntos; el V°B°, “claro que significa responsabilidad”; b) el querellante hizo preguntas acerca de hechos y circunstancias antes declaradas por el testigo; el hecho de que las jefaturas del Departamentos de Cuarteles no estén expresamente considerados en el D.S. 294, no significa que estén exentos del marco jurídico institucional ya que se encuentran insertos en él; el principal responsable fue el ITO; de la dinámica reglamentaria, especialmente el Reglamento N° 11, artículo 22, en el que se señalan las faltas en que puede incurrir los funcionarios de Carabineros; c) la defensa de los acusados Bustos consultó si Bustos y Rojas se visitaban en sus domicilios, respondió que eso no lo pudo corroborar; se le consultó además respecto de porqué había sancionado más severamente al ITO que al acusado Bustos, respondió que “existían razones técnicas difíciles de explicar”; d) la defensa de Rojas, interrogó acerca de porqué Félix Flores había ascendido a General en circunstancias que él le había propuesto en el sumario una sanción disciplinaria, respondió que él *no estaba en condiciones de responder eso*; e) interrogado por la defensa de Gutiérrez respecto de la intervención de Labra en lo concerniente a los estados de pago, respondió que le había declarado que se reunía permanentemente con Pizarro.

21°) (34) Testigo OSVALDO TOBAR FERNÁNDEZ (contador auditor).

Interrogado por el ministerio público, en relación al hecho N° 2, respondió: soy contador auditor de profesión pero trabajo como empresario innovador, en distintos rubros, entre construcción, en la empresa FEALFRA; participé en

licitaciones de Carabineros explicó que en los años 2010 y 2011 tenía un restaurant en Concepción, y en el último año quebró, en ese tiempo se contactaba con Rodrigo Bustos ya que fueron compañeros de enseñanza media; se juntaban dos o tres veces al mes le contó que conocía una persona que tenía una empresa de construcción con varios problemas comerciales, por lo que indicó que podía ser inversionista; la persona era Juan Soto, le compró la empresa mayoritariamente; amistad con bustos se mantuvo hasta el 2016, conocía a su hermano Nelson y a su madre, no conoció a otros hermanos; el rubro de Juan era obras de Carabineros, principalmente, antes había tenido otras cosas; desde que compró la empresa sólo participó con Carabineros en distintos estamentos, Cuarteles, Bienestar, el Museo Histórico; la compra de FEALFRA fue \$10.000.000 más un pasivo con el que cargaba la empresa, cercano a los \$20.000.000; modificó la empresa a Sociedad por Acciones, quedando FEALFRA SPA (ante era una sociedad de Responsabilidad Limitada); sabe que Bustos y Soto habían hechos cosas juntos, tal vez lo asesoró o trabajó como empleado; Bustos no formó parte de la sociedad porque imaginó que iba a ser parte, que fuera socio, pero una vez que ya tenía un acuerdo con Juan Soto, le dijo a Rodrigo que fuera socio pero le dijo que no podía porque tenía un hermano Carabinero; le manifestó que era necesario contar con él como persona de confianza, le pidió que lo ayudara, que le asesora, lo cual aceptó; no le hizo contrato formal porque tenía un hermano Carabineros; supo que este se llamaba Christian, después se enteró del cargo que tenía éste, lo cual supo porque tuvo que ir varias veces al Departamento de Cuarteles a realizar trámites, fue a mediados de 2012; un día lo vio en un pasillo y lo encontró muy parecido, lo que confirmó posteriormente conversando con Rodrigo, cuando lo supo se sintió *muy incómodo* y pensó que podría *traerle problemas* a futuro, pero igualmente siguió adelante con el negocio, esa incomodidad la arrastró hasta el último día, tanto así que tuvo que tomar algunas medidas; le pagaba a Rodrigo y Nelson a través de su cuenta corriente. Se **le exhibió el documento N° 1.115 (anexo declaración jurada de conflicto de intereses)**; lo reconoció, al igual que su firma en él, señaló que se trataba de una declaración que se adjuntaba a las licitaciones; lectura: *A, General Rojas Languer, 12 de noviembre de 2013 comparece Osvaldo Tobar, expone: declaró conocer que no pueden participar directivos ni tampoco cónyuges, hijos, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni las sociedad de personas en que ellos formen parte, ni sociedades en comandita por acciones o sociedades anónimas cerradas en que sean accionistas, ni sociedades anónimas abiertas en que tengan más del 10% de las acciones, como tampoco ser*

directores o gerentes en ellas; declaro que no me encuentro afecto a ninguna inhabilidad. A la pregunta de si lo anterior era lo que le impidió incorporarlos de manera formal a la empresa, respondió “supongo que sí”. En cuanto a Rodrigo, su trabajo era servir de ITO, y Nelson estaba encargado de las compras y atender a proveedores; ambos le ayudaban en las licitaciones, en materia de costos principalmente; les pagaba alrededor de \$1.800.000 a \$2.000.000. Se le exhibe declaración de 23 de octubre de 2018, a fin de **evidenciar contradicción**: luego de reconocerla la leyó en su página dos (2): *debo hacer presente que parte de la remuneración de Rodrigo y Nelson era una suma variable por comisión de resultado y desarrollo, pero este monto era mayor que el que yo hubiera pagado por los mismos servicios, lo cual hacía sin embargo porque Rodrigo le había ayudado*. Explicó que esta suma variable la pagaba como bono una vez concluida la obra; esa bonificación también la daba a los ingenieros pero menor que la de Rodrigo y Nelson, esto por la confianza que les tenía, los pago los realizaba, *por la incomodidad antes mencionada y “para mi sanidad mental”*; lo hacía tomando esos dineros y los pasaba a mi cuenta corriente como retiros de utilidades y desde ahí les transfería directamente a las cuentas de ellos; los pagos en efectivo se hacían girando cheque, cobrándolo y luego depositándoles a sus cuentas; esta forma de pago fue a iniciativa suya a efectos de poder pagar a proveedores. **A los mismos efectos precedentes** se le exhibió nuevamente su declaración: leyó “los pagos ellos me pedían que los hiciera en efectivo y otros por transferencia a efectos de evitar que los vincularan con la empresa”; los cheques a terceros los hacía a Natalia y Hugo Migani, trabajaban en la empresa; estos pagos los hacía conforme al flujo de caja, lo cual ocurría con los pagos que recibía de Carabineros, cada 30 a 45 días, con cargo a los cuales les pagaba a Nelson y Rodrigo; trabajaban en forma remota, no tenían oficina en la empresa. Dijo haber entregado al ministerio público alrededor de 20 archivadores con toda la contabilidad FEALFRA, además de la apertura de sus cuentas corrientes. Se le exhibió parte de la documentación contenida en el número 616: reconoció: a) una primera factura, aparece recepcionada por Rodrigo Morgado, arriba dice “Yiyo”, supone que se refiere a Rodrigo, *así lo conocen en su ámbito familiar*; siguiente factura, fecha 5 de marzo de 2013, recibe a nombre de FEALFRA, Nelson Bustos. La segunda factura está vinculada a las obras del Departamento de Cuarteles; **b) segunda factura N° 6091**, empresa Dartel, la reconoce, es de 25 de marzo de 2013, emitida a nombre de Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda.: “*Osvaldo adjunto esta factura de materiales según me indican corresponde a FEALFRA pero está facturada a Torrejón porque no tiene RUT*”. Consultado por Miguel

Torrejón, dijo conocerlo de la universidad, después se lo encontró en el Departamento de Cuarteles, participaba en las licitaciones, algunas veces se topó con él: Rodrigo conocía a Torrejón, ellos tenían vínculos de amistad y vínculos comerciales porque “hacían cosas” juntos; el vínculo de amistad no sabe de cuándo databa; la familia Bustos son de la V Región, Nelson y Rodrigo vivían allí; dijo no saber si esas cosas que hacían eran obras de Carabineros; reiteró que Rodrigo tenía algún vínculo con Torrejón, ignorando qué era lo que hacían juntos.

Se le exhibieron los documentos 27 y 34. El primero corresponde al documento mediante el cual se hizo la transformación de la empresa, de fecha 29 de febrero de 2012, se nombran como directores provisorios a Osvaldo Tobar, José Vargas Silva y Juan Soto Jara; el segundo documento que también lo reconoció, dijo que correspondía a reducción a escritura pública de la sesión de directorio de FEALFRA, de 23 de julio de 2012 comparecen por FEALFRA los directores Miguel Torrejón, Francisco Fuentes Vilches y Osvaldo Tobar Fernández. Señaló que a José Vargas Silva lo conocía del colegio y porque después se juntaban a jugar fútbol con Rodrigo y Nelson; dijo que sabía que Vargas Silva tenía relación comercial con Rodrigo y Nelson. Dijo haber entregado su cuenta de correo electrónico al ministerio público. **Se le exhibe, de otros medios de prueba, el N° 14**, correo electrónico de 4 de septiembre de 2012, asunto: sociedad de transportes: de otobar@altazar.cl a chbustos, rbustos, busto.morgado (*supongo es Nelson*), jovarsi (*supongo que es José Vargas silva*); el objeto es: sociedad de transporte. Lectura: *Estimados, adjunto borrador de la sociedad de transporte, falta acordar bien el tema del capital y la forma de aportarlo porque depende los camiones que se aporten y la forma en que se aporten, puse \$80.000.000 en efectivo pero debemos ver bien si todo se aporta en un solo acto (no todos tienen como justificar esa plata de una vez) y el monto de los traspasos de los camiones existentes hoy. Saludos OT*”. Consultado respecto de la sociedad mencionada, respondió que se trató de *una sociedad en que le ayudó a Nelson, en la que los ayudó a constituir porque era algo que en ese entonces sabía hacer*, constitución de sociedades; septiembre de 2012; dijo no recordar si formaba parte de la sociedad a José Vargas Silva; lo copio porque era parte del tema de los camiones. Respecto del origen de los \$80.000.000 en efectivo no recordó porqué esa cifra, la puse como General, pero recordó que habían camiones que existían y que se iban a traspasar, algunos eran de IBM, era una empresa que utilizaba Rodrigo para la construcción, los socios de estas eran Christian, Rodrigo y Nelson; estos mismos serían los socios de la empresa que se estaba formando; a la época del correo sabía que Christian formaba parte del Departamento de cuarteles; creo que

FEALFRA había participado en licitaciones de construcción en Cuarteles a ese entonces; correo electrónico de 4 de diciembre de 2013; de OTobar@altazar.cl a nelson.bustos@logisticabm.cl; asunto, *publicación*; documento adjunto corresponde a la publicación de la constitución de sociedad en el Diario Oficial, corresponde a la Sociedad Logística IBM, publicación es de fecha 5 de enero de 2013 (razón social Asesorías, Servicios Logísticos y de Transportes BM Limitada); aportes: capital \$10 millones de pesos; 33% Rodrigo, enterado en el acto, \$20 millones, Christian, 34% en efectivo y al contado, 33% Nelson, \$20.000.000 en efectivo; en esta sociedad actué como contador externo de esta empresa, IBM y a Logística BM. Podía acceder a SII a través de la clave, eso como contador externo. Lo anterior mientras FEALFRA participaba en los procesos de licitación de Cuarteles; las declaraciones las realizó respecto de Rodrigo, no recordó si también a Nelson, pero a Christian no lo hizo ninguna declaración; Rodrigo percibía dineros por su sociedad y además por los pagos que les hacía FEALFRA por las asesorías que le hacía; Nelson no tenía otros ingresos que estos; Nelson es ingeniero, trabajó en una ferretería; Rodrigo siempre trabajo en construcción; BM es una transformación de otra empresa con otras personas. Se **le exhiben los documentos 19 y 20**; el primero, señaló que lo reconocía, *protocolización extractos Bustos y Mejías Ltda., hoy Inversiones Bustos Ltda.; 22 de marzo de 2010, procede a protocolizar extracto de modificación de modificación Bustos y Mejías Ltda. Hoy Bustos Ltda., publicada el diario oficial el 18 de marzo de 2010; certifica que por escritura pública de fecha 21 de enero de 2010, Nelson, Rodrigo y Christian Bustos Morgado y Hugo Mejías Llanos, hacen cesión de derecho y modifican sociedad de la siguiente forma: socio Hugo Mejías Llanos, propietario del 50% de derechos sociales, vende cede y transfiere el 25% a Christian Bustos Morgado, 25% a Nelson Bustos Morgado, y Rodrigo Bustos Morgado, dueño del 50%, vende el 8,4% a Christian Bustos Morgado y 8,33% a Nelson Bustos Morgado extracto es de la escritura de cesión de derechos y modificación, Bustos y Mejías Ltda., se modificó a Inversiones Bustos Morgado Ltda., formaban parte de la anterior Hugo Andrés mejías Llano, y de la nueva los tres hermanos Bustos; quedan como socios Nelson 33,33 %, Christian con un 33,34% y Nelson Bustos Morgado con 33,3%; nombre fantasía Inversiones BM Ltda.; capital social: \$3.000.000; cada uno aporta \$1.000.000 en efectivo y al contado. Dijo reconocer los documentos porque desde esa fecha comenzó a ayudar a Rodrigo con la contabilidad. Señaló no haber mantenido contacto con Christian Bustos Morgado, salvo una vez en la fiscalía, a propósito de un correo electrónico; de otros medios de prueba N° 14, se le exhiben: **a)** correo electrónico de **24 de abril de 2012**; de:*

oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net; materia: adjudicaciones; “Christian, revisé el portal y sólo pude obtener las bases administrativas de las nuevas licitaciones y la resolución de adjudicación de Loica, las resoluciones de Hualañé y Melosas no las pude encontrar. Por favor, mándame los PDF con esas resoluciones. Gracias. Ot”; **b)** segundo correo electrónico: **3 de julio de 2012**, asunto: firma; de oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net con copia rbustos@inversiones.cl; “Christian, la dirección de la sucursal es San Joaquín Av. Vicuña Mackenna 4860, 6875300, ahí debes hablar con Sergio Ramírez, está cerca de metro san Joaquín”. Corresponde a la firma de un documento bancario ya que Rodrigo, la sociedad, estaba solicitando un crédito bancario y para otorgarlo le pidieron avales y que firmaran los socios; dijo no saber si Christian Bustos solicitaba créditos para aportar a la sociedad; a esa fecha FEALFRA, mi empresa todavía no tenía ninguna licitación, estaba en ese entonces terminando el proceso de inscripción en el registro de proveedores; **c)** correo de **24 de septiembre de 2012**, asunto: boletas: de oTobar@altazor.cl a pgomez@santander.cl, con copia a medinav@santander.cl; “Pilar, adjunto envío datos finales (fechas) de las boletas, pasare hoy en la tarde para firmar los documentos; 2 archivos adjuntos: 1) corresponde a boleta de garantía retén Coronel del Maule, son los datos que debe llenar la boleta de garantía una vez adjudicada la obra; 2) lo mismo; correo de 20 de marzo de 2012, balance IBM: lo reconoce, es de oTobar@altazor.cl a rbustos@inversionesbm.cl, es de 20 de marzo de 2012, asunto: balance IBM, “compadre estoy haciendo las declaraciones juradas: balance IBM año anterior, que te entregue año anterior; venta camioneta chica; venta camioneta grande; registros gastos con facturas año pasado, este año te puse con boletas de honorarios de una de la empresas que manejo para generarte un poco más de renta \$5,2 millones, cuando llegué la devolución arreglamos. Mándame los datos apenas los tengas, sobre todo el balance para cerrar el año; saludos Ot”. Consultado si se le habían exhibido otros documentos, además de los ya mencionados, respondió que sí, que se le exhibieron archivos que mantenía en su computador. **Se le exhibe de otros medios de prueba, N° 28**, pendrive que contiene archivo (documentos 1316 a 1341), cartolas excel proporcionados por Francisco Pizarro Dasso (NUE 2098491). **a)** se **le exhibe planilla de 626 cheques de obras del Departamento de Cuarteles**, no aparecen otras obras que no sean los de Cuarteles; Rodrigo y Nelson no podían girar cheques; dijo que no recordaba haber hecho algún préstamo a IBM; nunca pagó alguna cabaña para un ITO de Torrejón. Dijo haber sido involucrado en *un plan vil urdido por Pizarro, me robó mis archivos, los manipuló, involucró a otras personas*;

dijo sentirse *muy afectado con toda esta situación; bancariamente me fueron cerradas mis cuentas bancarias personales y societarias, he perdido la representación den varias sociedades.*

Interrogado por la parte querellante, respondió el testigo que la empresa Juan Soto Jara se dedicaba a la construcción de cuarteles, estaba inscrita en el registro de Carabineros, cuando compró y modificó su calidad de Ltda a SPA, mantuvo el RUT pero hubo que inscribirla nuevamente. Señaló que Rodrigo Bustos no tenía participación en la sociedad. A efectos de **evidenciar contradicción** se le exhibió su declaración de fecha 2 de febrero de 2017, ante el ministerio público: *“modificamos la sociedad FEALFRA SPA con la finalidad que ingresara yo como socio y Juan Soto Jara, pero eso en lo formal porque estaba Rodrigo Bustos, con 50%, yo un 37% y un 13% Juan Soto”.*

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos respondió el testigo que en la licitación de Coronel del Maule perdió dinero debido a que se adjudicó tres (3) obras simultáneamente; afirmó que Pizarro le *sustrajo sus archivos porque creo haber encontrado el lugar o la forma en que se le sustrajeron, pero no puede acreditarlo.* Explicó: en una obra de San Francisco de Mostazal la ITO era Andrea Campusano, mantenía comunicación constante con ella, un día le avisó que iría al día siguiente, llegaron y le llamó la atención que llegaron en un vehículo que no le pareció ser de Carabineros; los recibió en la oficina de instalación de faenas; iba Pizarro; Andrea le pidió que salieran a ver las obras; Pizarro le pidió el computador para enviar un correo; estuvo ausente alrededor de 15 minutos y luego llegó Pizarro donde estaban visitando las obra. La cédula de Christian Bustos no estaba en su computador, sin embargo apareció mágicamente en sus archivos, que le fueron exhibidos cuando concurrió a declarar en fiscalía. Juan Soto permaneció con un pequeño porcentaje en FEALFRA, lo cual era importante porque tenía el conocimiento y experiencia en el manejo de la empresa. Dijo haber postulado a 20 licitaciones aproximadamente pero sólo se adjudicó cinco (5) Itahue, Coronel del Maule, Lontué, La Islita y San Francisco de Mostazal. Todas esas obras fueron terminadas, en una sola oportunidad se le multó por no haber corregido dentro de plazo una observación que se le hizo en la recepción provisoria. En las comisiones de recepción iba un funcionario de Carabineros, vestido de verde, su participación no era mucho porque la revisión la hacían los técnicos. Rodrigo era un apoyo externo, por ejemplo cuando tenía dudas con información que le daba un

ingeniero; Nelson tenía acceso a la logística ya que había trabajado en una ferretería, conocía a los proveedores. En los procesos licitatorios no interactuó con Christian Bustos, recuerda que en una oportunidad estuvo en la apertura de sobres, pero no la ganó, en las cinco que se ganó “*creo que no estuvo*”; realizó otras tres (3) obras fuera del Departamento de Cuarteles. Consultado respecto a si de los correos que se le exhibieron hubo respuesta de Christian Bustos, respondió “no lo sé”; dijo no tener relación con la empresa CGM ni con Cristian Gutiérrez Martínez.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, respondió a sus preguntas: no fue designado como ITO de sus obras pero igualmente iba en casi todas las comisiones de estados de pago y de recepción de las obras. Dijo no saber si el vehículo mencionado anteriormente era o no fiscal, pero reiteró que era totalmente distinto de los que solían ir y no iba con chofer. La obra de Mostazal fue entre Diciembre de 2013 y marzo de 2014. Sus archivos pudieron ser intervenidos ya que Pizarro tuvo dos años para hacerlo.

Interrogado por el tribunal a efectos de que aclarara sus dichos en relación a que Pizarro había urdido un plan contra él y terceros, respondió que a lo que se refería era *a involucrar a terceros*; sospechó de Pizarro porque él fue el único que tuvo acceso a su computador.

Interrogado nuevamente por la fiscalía respecto de la frase “mágicamente apareció” en sus archivos la cédula de identidad de Christian Bustos, reiteró que *no necesitaba su cédula* para hacer su trabajo. Señaló que durante el tiempo que realizó las obras la empresa Torrejón también tenía obras.

Interrogado nuevamente por la defensa de los acusados Bustos refirió que la utilidad de cada obra era alrededor de \$30.000.000.

22°) (30) Testigo JOSÉ HENRÍQUEZ ORREGO (Comisario de la Policía de Investigaciones, Unidad Anticorrupción).

Interrogado por la fiscalía respecto de su trayectoria, respondió tener 24 años de servicio, de profesión ingeniero comercial, trabajando desde hace cinco años en la Unidad Anticorrupción, en General delitos económicos; en mayo de 2018 se

les solicitó para analizar la carpeta investigativa; efectuaron un mapa cronológico de los hechos a fin de establecer alertas, o sea, indicios con los cuales investigar los delitos de fraude; asimismo recabaron información faltante, como por ejemplo correos electrónicos, movimientos financieros de las personas; la información se recabó de dos casillas de correo, una, perteneciente a Osvaldo Tobar, quien autorizó la revisión, se hizo con peritos de criminalística ya que puso a disposición los servidores donde se encontraban las cuentas de correo, y la otra, se recabó la información respecto de Cristian Gutiérrez, ya que la información que entregó en un CD estaba incompleta; la extracción la hizo un perito informático de Criminalística; el resultado del análisis cronológico de los antecedentes arrojó dos líneas de tiempo, una con el caso CGM y otra relacionada con la empresa FEALFRA. Se **le exhibe el documento N° 917**, del complemento del auto de apertura (dos documentos de línea del tiempo). 1) *Línea del tiempo Caso Retenes 2012-2013 CGM Ltda.*: señaló el testigo que lo reconocía; la línea se inicia en abril de 2012, en esa fecha se inician las primeras reuniones, en Tavelli y Compañía 1390, oficina de Fernando Delgado, participaron Carlos Bustos Prat, César Rojas Gaete, Fernando Delgado Aros y Renato Méndez Quiroga, Rodrigo Carrasco Quiroga y Cristian Gutiérrez; de la casilla de Rojas se obtuvo una carta a Renato Méndez, diciéndole que en pocos días más se licitarían 12 cuarteles. Se **le exhibió el documento N° 786**: correo de 5 de julio de 2012, a Renato Méndez, de Cristian Gutiérrez CGM; motivo: consulta aclaratoria; *te comento que vienen 12 retenes más*, los que se detallan e indican con el monto de cada uno (en *números cerrados*), entre ellos estaba el retén Villa Ortega, cuya licitación se publicó en el portal en el mes de julio de 2012, por lo que la información de la licitación era anterior a su publicación en el portal; el 16 de agosto, correo de Gutiérrez a Rojas pidiendo información (*¿es posible que B nos dé un panorama de los demás oferentes en las licitaciones de varios retenes, entre ellos Villa Ortega?*), a esa fecha no se había concluido el proceso de cierre. Se **le exhibe el documento N° 768** (correo de 21 de agosto 2012, enviado por César Rojas a Cristian Gutiérrez; le dice: “hablé con A”). De **otros medios de prueba N° 9**, **le exhibió varios correos electrónicos**: de César Rojas a CGM, 31 de agosto 2012; enviado desde la casilla de César Rojas, a Cristian Gutiérrez; dice: *César: me puedes enviar tus datos para realizar transferencia electrónica*; y agrega *¿cómo va Linderos?* Indicó el testigo que se pudo establecer que Salomón Goldman y Eduardo Martín eran A y B, inversionistas. Se **le exhibe los documentos N° 54 y 55**; los reconoce, son antecedentes de la carpeta pero que además le fueron aportados por Goldman y Martín; se trata de un pagaré de 21 de agosto de 2012, por \$32.000.000; el

segundo pagaré es de fecha 3 de diciembre de 2012, de César Rojas a Eduardo Martin, por \$15.000.000. Indicó el testigo que esos pagarés y sus beneficiarios no podían ser los inversionistas A y B porque en correo de César Rojas a Cristian Gutiérrez, le dice que *debe organizarse para lo que viene, y coordinarse con A el fin de semana, le preguntan por el retorno, podrían ser 30 cada uno*; se **le exhibe correo electrónico de 26 de septiembre de 2012**. Asunto: consulta. “Cristian, de acuerdo a lo conversado ayer me preguntan por el retorno der la inversión, para ello consideremos 2 cuotas de 30 cada una, es así que esto se podría con primer y segundo estado de avance”. Consultado por el motivo de los préstamos, Goldman respondió que Rojas le dijo que era para la compra de una maquinaria, y Martin respondió no saber el motivo, y que sólo le había prestado el dinero a Rojas porque lo conocía. **Se le exhibe el correo de 11 de enero de 2013**, de Rojas a Gutiérrez: *hoy me junté con B, me comentó que el ITO está tranquilo, dice que falta, pero que vamos bien, que se veían avances, está preocupado por Isla Huar*. Este correo reafirmó la tesis de Gutiérrez en el sentido que B era Christian Bustos ya que se trata de una persona que conocía desde adentro la situación y que tenía información respecto de las demás empresas. Aludió a un correo de 24 de enero de 2013, en el que Rojas le comenta a Gutiérrez, diciéndole, *hay que programar los pagos a los inversionistas A y B*. Primer estado de pago de Lago Castor pasaron sólo semanas desde la entrega del terreno al estado de pago, concretamente, 11 o 12 días; el pago fue el 27 de diciembre de 2012. Se **le exhibe documentos parcialmente, contenidos en el N°797 de la prueba documental**: a) el primero, acta de entrega N° 046 de fecha 13 de diciembre de 2012, retén Lago Castor. Explicó que lo firman Cristian Gutiérrez y Francisco Pizarro Dasso; b) el segundo documento es un Oficio, N° 2.213, de 19 de diciembre de 2012, enviado por L1 a L8, su objetivo es *pagar factura enviada por CGM*; el oficio indica que debe pagarse la factura para el 28 de diciembre de 2012; c) Oficio N° 2.257, de L1 a L8, solicita pagar primer estado de pago Coyhaique Alto, avance 12%, factura N° 30. Explicó que las fechas eran inconsistentes, factura es de 27 de diciembre pero el oficio es de 24 de diciembre. Se **le exhibe otro documento del numeral 797**, Oficio 2.257, de 24 de diciembre de 2012, pero la factura es de 27 de diciembre de 2012, correspondiente a la factura N° 30; el oficio lo envía L1 a L8, firmado por Félix Flores; la fecha del documento se hizo con un timbre. Se **le exhibieron los informes técnico N° 200**, de 1° de marzo, y **N° 106**, de 1° de febrero de 2013: el segundo documento se confecciona para el segundo estado de pago, elaborado por Pizarro, lo relevante es que el estado de avance señala 12% (lo mismo que el anterior); y el primer oficio, se señala por el

ITO que se dio inició las obras, elaborado para el tercer estado de pago. Se le consultó respecto de cheques de tesorería que aparecen consignados en la línea de tiempo, pero que no coinciden con las fechas de estos, explicando que las fechas de la línea correspondían a la fecha de emisión de los cheques y no de retiro. Hizo referencia al acta N° 46, recepción provisoria de Villa Ortega, comisión integrada por Christian Bustos (12 de junio de 2013). Se **le exhibió parte de la prueba documental N° 66 (sumario administrativo), fojas 2.610 y 2.611**: documento de 18 de junio de 2014, abogado Isidro Martínez, aporta una fotografía tomada en la Comisión que concurrió a efectuar la recepción provisoria. Se **le exhibe de otros medios de prueba el N° 11 (fotografías)**. Se **le exhibió el correo electrónico de Bernardo León**, de 7 u 8 de junio de 2013, que venía incluida en el CD que aportó Gutiérrez. Acto seguido se le exhibió fotografía de 27 de mayo de 2013. Respondió haber tenido a la vista el acta de recepción provisoria, consta la firma de Christian Bustos, 7 de junio de 2013; dos semanas después se encuentra el acta de recepción provisoria sin observaciones, Comisión presidida por Christian Bustos. Con posterioridad al 7 de junio, el 18 de junio, se remite factura de 12 de junio, por L1 a L8, por \$70.554.210, mediante Oficio N° 883, de 17 de junio, firmado por Coronel Félix Flores. Con posterioridad se emitió la factura de 15 de julio, por concepto de addendum calefacción. El 26 de octubre de 2013, conforme informes técnicos N° 1.063 y 1.064, que informan el estado de avance de las obras, se puso término al contrato de los proyectos Retén Lago Castor y Tenencia Coyhaique Alto. A continuación se realizó trato directo con la empresa Grossman, llamándole la atención que por Resolución Exenta N° 847 se autorizó el registro de la empresa en el registro de Contratistas de Carabineros, en circunstancias que se citaban dos informes técnicos de fecha 8 de noviembre, posterior a la Resolución. Se **le exhiben los documentos N° 117 y 832** (antes exhibidos e incorporados), correspondientes, el primero, a un correo electrónico de 23 de octubre de 2013, análisis registro de contratistas Grossman SA, de Nicolás López Reyes, desde su casilla, dirigido a “Felo” (FEALFRA), casilla correspondiente a Félix Flores: *mi Coronel , los documentos que debe acompañar Grossman son los siguientes*: el segundo documento se relaciona con correo de 30 de septiembre, por el cual Grossman hace entrega de los datos de su tarjeta de crédito, verificándose un pago en el restaurant Chilenazo, de fecha 22 de octubre de 2013; dos (2) días después de la inscripción de la empresa Grossman tuvo lugar la transferencia de César Rojas a la cuenta de Félix Flores, por \$1.000.000.

En cuanto a la segunda línea de tiempo, correspondiente a la empresa FEALFRA, se exhibe documento que grafica la cronología (*Línea de tiempo caso Retenes empresa FEALFRA*). Lo relevante es la relación de Tobar con los hermanos Bustos y la licitación que se adjudicó en el Departamento de Cuarteles; los puntos relevantes que detectó fueron: a) 18 de enero de 2012, Inversiones BM, integrada por los 3 acusados, entregan poder amplio a Tobar Fernández para actuar a nombre de la empresa ante el SII, precisando que existe una carta poder al respecto en la carpeta investigación; b) el 24 de abril de 2012, Tobar envía correo a Christian, en que le dice que sólo pudo obtener las bases administrativas de las nuevas licitaciones y también le consulta por resoluciones adjudicación Las Loicas, Huañalé y Melosal. Se **le exhibió de otros medios de prueba el N° 13**; el primero, de 24 de abril de 2012, en el que consta lo consignado por él en la línea del tiempo. El 14 de septiembre de 2012 se hicieron 2 adjudicaciones Coronel del Maule, Resolución Exenta N° 980 de 14 de septiembre de 2012, a FEALFRA, Christian Bustos Morgado participa en la comisión evaluadora; adjudicación Retenes Itahue y Lontué, ídem; 19 de agosto de 2013, ídem retén San Francisco de Mostazal; 30 de agosto de 2013, cancha pasto sintético comisaría San Joaquín adjudicada a FEALFRA SPA; adjudicación de retén La Islita, Res. Ex. 394, de 24 de mayo de 2013. Se **le exhiben correos electrónicos contenidos en el N° 13**, de otros medios de prueba: 1) lo reconoció, señaló que lo tuvo a la vista, es de la cuenta de correo de Osvaldo Tobar; *materia: Revisión de balance de IBM; de Osvaldo Tobar a constructora prin*, con copia a oTobar@ y Christian Bustos, cbustos@, (...); 2) correo electrónico de....septiembre de 2012, de Tobar a Christian Bustos, Rodrigo Bustos, bustos.morgado y jovarsi.com; asunto: sociedad de transportes. Explicó que jovarsi era José Vargas Silva, quien integró en abril de 2012 la empresa FEALFRA. Se **le exhibió el documento N° 869** (ya anteriormente incorporado). Dijo reconocerlo, corresponde al Oficio N° 16.577, de 10 de octubre de 2018, del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, informando placas patentes (ingresadas anteriormente). Figuraban a nombre de ... Bustos Morgado. Resultó relevante para la investigación determinar cómo y cuándo se habían adquirido, y contactar a los anteriores propietarios a fin de conocer los medios de pago utilizados. Todos los vehículos fueron adquiridos por Asesorías Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda. Consultados los propietarios anteriores, respondieron por medio de correo electrónico señalando que los vehículos fueron pagados al contado y otros con cheque al día y también a fecha. Se **le exhibieron los documentos N° 870, 871, 872 y 873**: los reconoció y explicó que correspondían a las respuestas proporcionadas por los vendedores

que fueron consultados; el primero, de Marcela Olmedo, Transportes Olivares: se vendieron 2 tracto a la empresa Asesorías Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., pagados con cheque al día, pagado el 24 de abril 2013, por \$25.000.000; cheque al día, pagado el 25 de abril 2013, y otro a fecha, por \$5.000.000, cobrado el 24 de mayo de 2013; otro a fecha por \$5.000.000, cobrado el 24 de junio de 2013. Lo anterior corresponde a la placa TW-4911, VW4916; el segundo, corresponde a los camiones adquiridos el 2014 y 2016, 4 camiones, a la concesionaria E Kovacs, se informa por Ramón Pardo, adjunta antecedentes requeridos (facturas y forma de pago): 20 de agosto de 2014, camión NKR, cheque al día por \$5.000.000, saldo crédito 48 cuotas de \$705.152; factura de 20 de agosto 2014, venta camión NKR, cheque al día por \$5.639.410, saldo 48 cuotas por \$705.152 cada una, total \$28.197.050; factura de 31 de mayo de 2016, venta NKR, cheque al día por \$6.000.000, saldo cheque al día por \$27.619.560, total \$33.619.560; factura de fecha 31 de mayo de 2016, venta camión NKR, pie con cheque al día por \$6.000.000 millones, saldo con cheque al día por \$28.803.620. Todas las facturas al RUT 76.235.695-3;

Documento N° 872, de Francisco Sepúlveda, de 12 de agosto de 2018, adjunta documentos placa patente DGPT- 55, boleta depósito banco Itau, cheque comercializadora Echau \$36.913.800, emitido el 10 de enero de 2014, a nombre de Transportes Montevideo Ltda; emitida a Asesorías Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., por la venta de tracto mack, DGPT 55-7, \$39.270.000, adjunta factura de Transporte Montevideo, comisión por venta DGPT-55 a Asesoría BM, por \$2.356.200; planilla de Echaurren S.A., comprobantes de traspaso al RUT 76.235.695-3, Asesorías Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda; remite información venta tracto camión marca Mack, DGPT 55, por \$39.270.000, pagado con cheque al día por \$29.270.000, el 17 de diciembre de 2013, saldo no se informa forma de pago;

Documento N° 873, correo de Marcelo Gutiérrez Quintero, de la empresa, Espiza, factura por \$22.000.015, semirremolque, placa no se señala, pero la factura está emitida a Asesorías Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda.

El año 2012 se adquirieron 7 vehículo 2013, otros en el año 2014 y 2 en 2016; los primeros fueron adquiridos con cheque a día o cheques a fecha próxima; los de 2014 con cheque al día y la mayor parte con crédito; en el año 2016 pago al

contado y cheque al día; según las planillas enviadas por el perito de la fiscalía habían muchos depósitos en efectivo en la cuenta corriente de Christian Bustos; la sociedad de transporte se constituyó a fines de 2012, llamando la atención que en corto tiempo aparecía adquiriendo varios camiones. Se **le exhibió el documento N° 868**: reconoció el documento e indicó que corresponde a planillas enviadas por el perito de la fiscalía, correspondientes a la cuenta corriente de Christian Bustos. Señaló que dentro de ellas le pareció relevante la gran cantidad de depósitos en efectivo en su cuenta, efectuados tanto por sus hermanos como por “J Vargas”, este último integrante de FEALFRA, en tanto que los hermanos aparecían trabajando para FEALFRA. La mayoría de los depósitos se concentran en los años 2012 y 2013, en General eran por montos de \$5.000.000 a \$7.000.000. Christian Bustos Morgado no tenía más ingresos que los de Carabineros y de las sociedades que había constituido con sus hermanos.

Interrogado por el querellante, respondió: que el 27 de mayo se envió una foto a Cristian Gutiérrez y la otra en junio o julio de 2013, fecha en que se concurrió a la recepción provisoria; la segunda foto la tomó Isidro Martínez; entre ambas fotos se ve poca diferencia “a simple vista”; a la recepción provisoria fue el ITO, Christian Bustos, como jefe de la Comisión, asesores ingenieros y el abogado Isidro Martínez; después de la recepción provisoria se continuaron efectuando estados de pago.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos Morgado, respondió que el 17 de mayo se dispuso la realización de diligencias que le fueron encomendadas, reuniéndose posteriormente en oficinas de la Fiscalía Nacional en la cual se le hizo entrega de la instrucción impartida por la fiscalía, estando presentes en la reunión la fiscal a cargo de la investigación, un funcionario policial de nombre Nelson Castro, con quien trabajó en la diligencia encomendada. Estuvieron también presentes en la reunión otras personas cuyos nombres dijo que no recordaba. Se **le exhibe nuevamente el documento N° 917, de la ampliación del auto de apertura** (líneas de tiempo): las planillas de contabilidad de la empresa Inversiones BM las entregó el contador de la empresa, Osvaldo Tobar.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro, respondió ratificando sus diligencias y los antecedentes que obran en la investigación.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, respondió que no sabía el tenor de las reuniones aducidas en su declaración;

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, respondió: el trabajo consistió principalmente levantar desde los antecedentes de la investigación una cronología, además de efectuar algunas diligencias; los correos electrónicos exhibidos por la fiscalía, que aparecían siendo enviado por César Rojas, presentaba en su parte superior *Constructora CGM*; los correos entregados por Gutiérrez no fueron peritados, tampoco los contrastó con los de César Rojas, ni tampoco le solicitó a éste las claves para acceder a ellos. Las conclusiones obtenidas presentan la variable de que los correos de Gutiérrez *pudieran no ser verdaderos*. Se le **exhibió el documento N° 786, anteriormente exhibido con el N° 79**. Se le preguntó respecto de cuáles cuarteles se adjudicó CGM, respondiendo que sólo Villa Ortega, por \$389 millones y fracción; correo de César Rojas a CGM. Se **le exhibió también el documento N° 80**, correo electrónico: CGM, de César Rojas a Christian Gutiérrez. Asimismo **el documento N° 95**, correo de CGM, César Rojas para CGM Ltda., extraído de constructora CGM; También **el documento N° 768, de CGM**, casilla César Rojas, para CGM Ltda. Se **le exhibió la foja 2.849, letra e), del sumario administrativo**, del cual hizo la siguiente lectura: “carta 16 de septiembre de 2013, de la empresa contratista Grossman S.A.”. Aclaró que la carta aludida en la letra e) no la vio dentro de la carpeta investigativa. Carabineros eliminó la bitácora de los vehículos policiales correspondientes a la fecha en que Gutiérrez fue trasladado en vehículo policial a la salida del banco, por lo cual no pudo confirmar la existencia de ese hecho.

El tribunal solicitó aclarar lo concerniente a las planillas aludidas en su declaración, a lo cual respondió que sus afirmaciones a dicho respecto estaban fundadas en la información contenida en la planilla preparada y proporcionada por el perito de la fiscalía;

La fiscalía y el querellante interrogaron nuevamente al testigo conforme al artículo 329, no aportando el testigo mayores antecedentes.

La defensa de los acusados Bustos interrogó nuevamente al testigo, preguntándole pormenores respecto de los audios concernientes a los audios de las audiencias de incompetencia, de formalización y *reformatización*.

La defensa de Pizarro interrogó nuevamente al testigo a fin de consultar si había encontrado antecedentes que demostraran que el acusado hubiere recibido pagos extraordinarios de algunos coimputados, a lo cual respondió *no*.

La defensa de Gutiérrez interrogó nuevamente al testigo, siendo sus preguntas del mismo tenor que las anteriores, las cuales ya habían sido respondidas.

La defensa de Rojas interrogó nuevamente al testigo a fin de saber si le constaba que Carabineros le hubiere hecho algún pago a la empresa Grossman, respondió, “sólo hubo uno”.

26°) (64) Testigo JUAN ALEJANDRO SOTO JARA.

Interrogado por la fiscalía refirió que era constructor, señalando que comenzó a los 18 años a trabajar en una empresa independizándose a los 30 años, formando su propia empresa, en los años 2008 o 2009, a la que denominó “Juan Alejandro Soto Jara ERL” y cuyo nombre de fantasía era FEALFRA, que son las iniciales de los nombres de sus hijas, Fernanda, Alejandra y Francisca. Decidió constituir la empresa debido a que cuando trabajaba en Transportes Olivares se le exigió tener facturas. Dijo saber el motivo por el cual fue citado, *por un tema de Cuarteles*, porque participó con su empresa FEALFRA en la construcción de Cuarteles de Carabineros. Explicó que llegó a trabajar para la Institución porque en el año 2010 trabajó con Rodrigo Bustos en Viña del Mar reparando unos edificios: le dio la idea de ingresar a Cuarteles, diciéndole que como tenía la empresa aprovecharan la oportunidad. Explicó que a Rodrigo Bustos lo conoció en transportes Olivares, porque era su Supervisor. Él le explicó a grandes rasgos que se dedicarían a las reparaciones post-terremoto. *Lo primero que hice fue ir a Cuarteles L1, en Avenida Quilín, donde se presentó con el ITO, no recordó el nombre, para adjudicarse obras menores a trato directo. La forma de hacerlo era que desde Cuarteles se contactaba con la empresa y él se presentaba, era Rodrigo Bustos quien le decía que había que presentarse en Cuarteles y se los daban.* Rodrigo Bustos no le mencionó cómo tomaba conocimiento de esos procesos licitatorios. Rodrigo Bustos había estudiado ingeniería y él veía todos los temas administrativos, los papeléos y finanzas de la empresa, él se presentaba en Cuarteles nada más que adjudicarse el trabajo porque era el representante legal de la empresa. Entre ellos

tenían un trato de palabra, porque se ganaba un 20 a 30 % de las utilidades, por cada proyecto. Respondió, *“yo no tenía ningún conocimiento ni idea de las licitaciones”, Rodrigo era una persona muy importante porque sin él no hubiera podido postular a nada.* El primer trabajo que se adjudicó fue en Bulnes 80, fueron tres o cuatro recintos de Carabineros que se arreglaron y después otras obras menores, y cuando se adjudicó más fue a fines del año 2010, fueron como diez o doce obras, a través de trato directo. Hizo la consulta del motivo por el cual se le adjudicaran tantas obras y le dijeron que se debía a que el Gobierno Regional le entregaba cierta cantidad de dinero al año a Carabineros y si no se gastaba al año siguiente se reducía el monto, no recordó quién le dio esa información. En esa época había varias empresas que se adjudicaban trabajos, recordó entre ellas a Ingeniería Torrejón. Desde el punto de vista de las ganancias *eran buenas, obtenía buenas utilidades, era rentable, eran millones de pesos,* no pudo precisar las cantidades. *Rodrigo Bustos también veía la parte financiera, para los pagos, él le firmaba cheques y Rodrigo los endosaba para pagar a los proveedores y a los trabajadores. Explicó después los cheques se los entregaba sólo con su firma.* En el año 2011 comenzó a adjudicarse licitaciones de obras mayores, porque como había trabajado en las otras, a la empresa lo subieron de categoría, *Rodrigo me avisó que me habían subido de categoría.* No tenía ningún contacto, vínculo o relación con Carabineros. La primera obra que se adjudicó fue el Retén de Loica, su participación fue sacar la boleta de garantía, la de fiel cumplimiento de contrato y presentarse a la licitación misma con todas las carpetas que preparaba Rodrigo. Iba él porque era el representante legal. Consultado sobre el motivo por el cual Rodrigo Bustos no tenía contrato de trabajo con él, respondió que Bustos le indicó que daba asesorías para otras empresas también. No sabía que Rodrigo Bustos tenía vínculos con Carabineros de Chile, se enteró de ello cuando se adjudicó una obra en Hualañé y Melozal; agregando que se dio cuenta por el parecido físico que tenía el Comandante Bustos, que una vez fue a visita de terreno y relacionó el apellido con el parecido y consultó, y le dijeron que eran hermanos. En esa oportunidad estaban Marcos Pomar y Francisco Pizarro, quienes eran ITO de Carabineros. Sabía que era el Comandante Bustos porque lo había visto en Cuarteles. También se lo preguntó directamente a Rodrigo y reconoció que eran hermanos y al consultarle porque no se lo había dicho antes, respondió que por eso no podía ser contratado por él y que trabajaba en forma anónima. Después de la licitación del Retén Loica, se adjudicó dos obras grandes al mismo tiempo, esas fueron Hualañé y Melozal. Además de encargarse la parte administrativa, sabía cuándo los ITO iban a efectuar las visitas y se preparaba; contactaban a Rodrigo,

porque por regla General él no contesta el teléfono. Las primeras veces no le llamó la atención, pero después le preguntó por qué sabía con anticipación de estas visitas y le respondió que lo llamaban porque él no contestaba el teléfono. Dijo no recordar en cuál de las licitaciones, si fue para Melozal o Hualañé, que Rodrigo le fue a entregar las carpetas a su casa aproximadamente como a las once de la noche, las bases de la licitación se cerraban a la medianoche, y él debía presentarse a las nueve de la mañana y le advirtió que tomara nota de una modificación que se había puesto a última hora, y que como se había incorporado a última hora nadie lo sabía. En la mañana, ocurrió que nadie la llevaba y él se adjudicó la licitación. Cuando estaban en Hualañé se integró Nelson Bustos, otro hermano de Rodrigo, quien veía las compras de los materiales, se le pagaba con un cheque que él le firmaba a Rodrigo Bustos. **Se le exhibió al testigo parte de la prueba documental N° 790**, reconociendo un cheque firmado por él, reconoció su firma, indicó que está fechado el 26 de diciembre de 2011, está girado por la suma \$6.232.299.- a nombre de Rodrigo Bustos; agregó que la letra no es suya y que aparece que el RUT que cobra el cheque es el N° 9.450.127-2 y además el RUT 10.285.773-9. Ese cheque no lo giró él. Se le exhibe un segundo cheque de la Sociedad Constructora Juan Alejandro Soto Jara, girado por la suma de \$4.000.000.- a nombre de Nelson Bustos. Dando lectura a los documentos consta que los cheques pertenecen a la cuenta corriente del Banco Santander, N° 6375521-4, perteneciente a la Sociedad Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara E.I.R.L, el primero corresponde al cheque N°665141, girado el 26 de diciembre de 2011, girado a nombre de Rodrigo Bustos por el monto de \$6.232.299, al reverso consta una firma y se indica el RUT 10.285.773-9. El segundo documento corresponde al N°750873, de la misma cuenta corriente, de fecha 10 de febrero de 2012, girado a nombre de Nelson Bustos Morgado, por la suma de \$4.000.000; al reverso aparece el Rut de la persona que lo cobró N°10.286.188-4. El vínculo terminó a principios de 2012. Sucedió que tuvo un problema familiar (ex mujer lo acusó de violencia intrafamiliar), por lo que Rodrigo le dijo que no podía ser la cara visible de la empresa, Carabineros no lo permitía; le dio la opción que le cediera la empresa mientras él regularizaba su situación y después se la devolvía; le dijo que tenía un amigo, compañero de universidad, que tenía muchas lucas, que haría de pantalla, y que él continuaría trabajando, el amigo se llamaba Osvaldo Tobar gernández ; cedió la empresa y se quedó con algo insignificante, un 2 o 3%, la mayor parte se la quedó a Tobar y Torrejón. Se le exhibieron los documentos 25 y 27, los reconoce y dice que son los documentos de traspaso de la empresa, de él a Osvaldo Tobar, aparece su firma al final del

documento, cuando firmaron estaban presentes Osvaldo Tobar y Rodrigo Bustos y él. La escritura dice que le pagaron 3 millones de pesos, pero no fue así, le entregaron un vehículo que estaba a nombre de la empresa y 1 millón de pesos. El siguiente documento es una venta de acciones entre él y Miguel Henríquez Torrejón, el precio dice \$3.900.000, pero no le pagaron nada. Posteriormente cedió lo poco y nada que le quedaba. Después se le presionó que no podía seguir existiendo en la empresa, pero se le dijo que igualmente podía seguir trabajando y que posteriormente se le devolvería la empresa. Trabajó 15 días en una obra en Camarico, pero no siguió porque las condiciones no correspondieron a lo que le habían ofrecido, eran 2 millones y le pagaron 600.000; le dijeron que si quería irse que se fuera, que la empresa era de Torrejón (Ingeniería Torrejón). Torrejón conocía Rodrigo por haber sido compañeros de universidad, al igual que Osvaldo Tobar. Este último no tenía experiencia en el rubro, así se lo dijo Tobar cuando le compró la empresa, que dijo que trabajaba en el rubro de restaurante; se adjudicó varias obras, también obras grandes. Rodrigo Bustos le prestaba a Torrejón la misma asesoría que a él. Continuó trabajando después que supo que Christian Bustos era hermano de Rodrigo porque no vio nada ilegal, al contrario, lo consideró beneficioso, porque si tenía información entonces podía obtener otras obras. Señaló que le arrendaron un camión que tenía, por la suma de 800.000; desapareció el camión un año, al cabo del cual le entregaron sólo la carrocería. No le pagaron el arriendo ofrecido. En ese momento terminó todo vínculo con Rodrigo Bustos. Lo llamó ayer “como a las tres”, no habló con él, “no respondo el teléfono”; también lo llamó 4 o 5 meses antes, le dijo que no era necesario que declarara, que dijera que se le habían olvidado las cosas, que habían pasado muchos años; le ofreció trabajo; también llamó “a mi señora”, después que lo llamó a él; una vez fue a su casa a retirar un auto. No tengo ningún tipo de rencor con Rodrigo Bustos.

La parte querellante no interrogó al testigo

La defensa de los acusados Bustos interrogó al testigo, quien respondió que conoció a Rodrigo Bustos con motivo de una obra que se estaba efectuando al dueño de Transportes Olivares. Rodrigo Bustos lo inscribió en Carabineros, “yo no hice nada”. Rodrigo Bustos también trabajaba en paralelo para Torrejón y para la empresa inversiones Bustos Morgado (IBM). Cuando se pagaba a los trabajadores iba él personalmente a cobrar los cheques para el pago. Concurrió como imputado

en el mes de enero de 2017 a la Brigada de Delitos Económicos y posteriormente en el mes de marzo como testigo a la fiscalía.

La defensa del acusado Pizarro preguntó por el camión que dijo haber arrendado a Rodrigo Bustos, negando que hubiera sido de color blanco sino que era azul, marca Isuzu.

La defensa del acusado Gutiérrez preguntó acerca de hechos que ya había sido interrogado y respondido anteriormente por los anteriores intervinientes.

El tribunal pidió aclarar lo concerniente a la entrega y giro de los cheques, explicando que *cada quince días Bustos le decía “tenís que firmar estos cheques” para pagar*. También se le pidió aclarar el momento en que recibía el 70% de las utilidades, respondiendo que ocurría al final de las obras. Se le solicitó aclarar si era él quien concurría a Cuarteles, respondiendo que no, y que no creía que hubiera ido Bustos porque éste nunca fue a Cuarteles.

La defensa de los acusados Bustos interrogó nuevamente al testigo acerca del retiro de los cheques de estados de pago, a lo cual respondió que él retiraba los cheques de las obras de trato directo, y que los de las licitaciones se le depositaban a la cuenta de la empresa.

La defensa del acusado Pizarro interrogó nuevamente al testigo respecto a si era efectivo que en la obra del Retén Loica, Rodrigo Bustos trabajaba en un contenedor, respondió el testigo que eso era efectivo, y que Bustos tenía allí su oficina.

28°) (28) Testigo MATÍAS JOAQUÍN NAVARRETE GUILLÓN (33, s, abogado de la Dirección de Compra y Contratación Pública, nombre comercial “Chile Compra”)

Interrogado por la fiscalía declaró que trabaja en el Observatorio de Chile Compra, Departamento en la Dirección de Compra dedicado a buscar situaciones reñidas con la normativa y posterior informar a la fiscalía o Contraloría, según corresponda. En el año 2018 realizó un informe respecto de una licitación de obra en construcción de Cuarteles. Se trataba de construcciones en el sur de Chile, por

ejemplo, Lontué, Hualañé, Isla Huar, además de otros cuyos nombres dijo no recordar. Las conclusiones que se obtuvieron fueron que la normativa aplicable a esas obras era muy semejante a la ley aplicable al Sistema de Contratación Pública de Chile Compra, resultando relevante de ello que licitación se publicaba online, pero no íntegramente, por ejemplo no se informaba el monto de la ofertas, tampoco lo concerniente a la ejecución de las obras; además se exigía que los contratistas estuvieran inscritos en el registro de Contratistas de Carabineros con anterioridad a la licitación, lo cual no era una exigencia normativa, provocando con ello una reducción del número de oferentes; por último, se constató que los criterios utilizados para evaluar la adjudicación eran objetivos, siendo estos, precio, plazo y experiencia, siendo el primero de ellos, esto es, la oferta más económica. Señaló que conforme dispone el reglamento de la ley deben publicarse las bases, la adjudicación y finalmente el contrato. Indicó que los criterios de evaluación mencionados si bien correspondían con la normativa, permitían que ganara la licitación la oferta más económica. **Se le exhibió el informe 1.684 (documento N° 827 de la prueba documental de la fiscalía, anteriormente acompañado)**, el que reconoció el testigo, y dijo que correspondía al informe mencionado inicialmente, identificando su firma al final del documento. Respondió que la información reservada de las licitaciones se hacía pública desde que se publica la información, tal como lo indica el documento precedente, “publicada”. Indicó que durante su declaración en la fiscalía se le exhibió un correo en el cual se mencionan varios proyectos, antes de que fueren publicadas. **Se le exhibió documento N° 786** (correo electrónico, anteriormente aportado). El artículo 62 de la Ley señala que traspasar o compartir información reservada constituye una falta grave a la probidad. A mayor abundamiento, si el monto de la licitación no es publicado, resulta aún más grave compartir dicha información, lo que constituiría una doble falta. Las ofertas eran presentadas personalmente. Luego eran analizadas in situ por la Comisión Evaluadora correspondiente, sin poder afirmar si hubieren estado presentes terceras personas no señaladas en el documento de respaldo. Los miembros de la Comisión no pueden tener conflicto de intereses con el proceso, para lo cual se pide una declaración firmada *ex ante* señalando que no existen conflicto de intereses. Respecto del caso de marras dijo no recordar si dichas actas habían existido. La adjudicación la efectúa el jefe de servicio, pero no discrecionalmente ya que se trata de una facultad reglada, la que debe basarse en la propuesta que le haya hecho la comisión, pudiendo con mucho estimar que la oferta no es conveniente para los intereses del servicio porque no cumple con el requerimiento del organismo requirente, declarando luego desierta

la licitación. Lo que no puede hacer es adjudicar a otro oferente que el propuesto ya que ello constituye una falta a la probidad. Se **le exhibe su declaración en fiscalía, de 7 de septiembre de 2018**, a fin de refrescar la memoria del testigo, en relación a la pregunta respecto de quien había sido el jefe de servicio que había efectuado las adjudicaciones. Examinado el documento por el testigo, respondió que la persona consultada había sido el Director Nacional de Logística, Jorge Rojas. Consultado a continuación respecto al proceso de licitación Hualañé, respondió que efectivamente era así, pues los evaluadores habían dejado constancia de una representación efectuada a la jefatura, Cristian Bustos Morgado. Se **le exhibe el documento N° 827** (informe técnico de evaluación, anteriormente exhibido). Explicó: *consistió en que la oferta no debía aclararse sino que declararse desierta, como se los estaba ordenando Bustos Morgado, lo que constituye una falta funcionaria el hecho de hacer valer su condición de jefatura*. Agregó que el hecho de que se hubiera ordenado aclaración a todos los oferentes no significaba dejar a los oferentes en igualdad de condiciones ya que la aclaración de aspectos administrativos sólo permite completar la regularidad del proceso, no así la propuesta de adjudicación y adjudicación propiamente tal toda vez que, conforme al criterio de evaluación de oferta más económica, se sabía de antemano cuál era la empresa a quien se adjudicaría la licitación. La Comisión evaluadora estuvo compuesta, conforme al acta de evaluación, por Juan Francisco Socías Vargas, Fabián Gutiérrez, Romina Parraguez Robles, María Constanza Cabello Robles, asesora jurídica, y Patricia Albornoz Venegas, capitán de Carabineros, señalando que la última de ellas firmó visando el informe, lo cual significa que revisó el documento y le dio “el ok”. Respondió que las empresas que se adjudicaban las obras eran FEALFRA y CGM. Respecto de la primera no se descubrieron anomalía detectables a través de Mercado Público, no obstante que, como dijo en su declaración, una persona de apellido Tobar, reconoció que era representante legal de esa empresa y que además trabajaba como contador de uno de los funcionarios públicos que participaban en estas licitaciones, su nombre era Christian Bustos Morgado, quien era miembros de la Comisión evaluadora. Tobar dijo que era contador de una empresa en la que dicho funcionario trabajaba con familiares. Se **le exhibe su declaración en fiscalía** a fin de refrescar la memoria del testigo en cuanto a la información recién entregada a objeto que precise sus dichos. Leída respondió que era representante legal y contador de la empresa Bustos Morgado perteneciente a los hermanos de Christian Bustos Morgado y a éste último, el cual participaba en la Comisión Evaluadora visando el informe de la Comisión. Esta situación configura claramente falta de probidad de

las señaladas en diversos artículos de la Ley de Bases de Administración del Estado, particularmente el artículo 62, tener interés personal en la licitación, siendo el caso de tener parientes consanguíneos hasta el tercer grado de consanguinidad, cuyo era el caso en ambas situaciones. Posteriormente, conforme a la Ley 18.880, se infringió expresamente el deber de abstención en casos que se tiene interés personal, cuyo es el caso de parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. En cuanto a esto último explicó que aplicaba a todos los funcionarios públicos en tanto cuanto principio rector. En cuanto al rol de Bustos en la Comisión dijo que *puede efectivamente ser considerado como participante del proceso, ello porque la visación es la figura que tienen todos los organismos público para garantizar... y además firmaba con sus iniciales dando cuenta con ello que había participado en el proceso*. También constituye *formar parte del proceso* el hecho haber intervenido en las actuaciones consignadas en la ficha anteriormente analizada. Agregó que en el proceso existen intervinientes no sólo en el papel sino también de hecho, esto es, cuando cualquier persona que se relacione de alguna manera con el proceso. Indicó que la supervisión del proceso, como ocurrió con Bustos, configura infracción suficiente del deber de abstención.

El querellante al inicio de su interrogatorio **le exhibió el documento N° 827, antes incorporado**, confirmando con sus respuestas las preguntas que antes le formulara la fiscalía. La persona que autoriza y la persona que publica la licitación constituyen situaciones independientes, dependiendo de cómo esté estructurado el organismo. Las personas que aparecen publicando una licitación tienen el poder de decidir cuándo se va a publicar, siendo este el caso de Christian Bustos Morgado.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos Morgado, respondió el testigo que ninguna de las bases administrativas Generales de licitación tenía observaciones, sin perjuicio que posteriormente las hubo, de acuerdo con la documentación que le exhibió la fiscal durante su declaración. Le formuló además preguntas de tipo especulativo toda vez que se le pidió su opinión en las hipótesis que se le plantearon. Se le consultó si había analizado las licitaciones de diversos retenes de Carabineros, muchas de las cuales no recordó, como tampoco la fecha de publicación de las licitaciones que sí recordó haber analizado. Confirmó sus dichos en orden a que las licitaciones que analizó siempre las ganó la oferta más económica. Se le exhibió nuevamente el informe del proyecto Hualañé, a la luz del

cual reconoció que el proyecto no se lo adjudicó la oferta más barata. Respecto de las aclaratorias indicó que los oferentes no pueden modificar el precio ni plazo de la propuesta, debiendo limitarse a realizar únicamente la aclaración. **Se le exhibió el documento N° 268 de sus medios de prueba** (bases administrativas licitación Hualañé), consultándosele por la extensión y limitaciones concernientes al tema de las aclaratorias, confirmando el testigo lo que aparecía consignado en el documento. Posteriormente respondió que en su informe había analizado y consignado que no hubo reclamos en el proceso licitatorio. Se le exhibió nuevamente su informe, particularmente el historial de la ficha de licitación, concediendo a la defensa que de acuerdo con las fechas y horas que allí aparecen no habrían sido modificadas las bases de licitación que aparece enviando el funcionario Juan Francisco Vargas, de acuerdo con la ficha del proceso, por lo que no puede descartarse que las bases pudieran haberse modificado fuera del portal. Consultado por el representante legal de la empresa de Inversiones Bustos Morgado, respondió no recordarlo.

La defensa del acusado Pizarro no interrogó al testigo.

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez, acerca del RUT de la empresa CGM, respondió haberlo tenido a la vista por medio de la resolución que había adjudicado la licitación, pero que en concreto no recordaba el guarismo. **Exhibió al testigo el documento N° 814, de los medios de prueba de la fiscalía**, a la luz del cual el testigo reconoció que el RUT de la empresa que allí aparecía no era el mismo que él había consignado en su informe.

Interrogado por la defensa del acusado Rojas, respondió el testigo que no recordaba si el proyecto Villa Ortega había salido a licitación dentro de los diez días siguientes a los que se mencionaban en el correo que se le exhibió en su declaración (con pie de firma César Rojas), como tampoco que el citado Retén había salido licitado en alrededor de doscientos noventa millones, por tanto menos de los trescientos noventa millones que se indicaba en el correo. Reconoció, modificando lo declarado a la fiscalía, que a través del Banco Integrado de Proyectos era posible saber el monto específico asignado a los proyectos, como las licitaciones. Consultado por el DS 294, y su artículo 56, que señala que se puede publicar el monto máximo en dinero asignado al proyecto, asintió el testigo.

Interrogado nuevamente por la fiscalía, esta vez respecto de las bases administrativas de la licitación de la reposición de la tenencia Hualañé, 6.11.5, se le solicitó leer la concerniente a las aclaraciones que puede solicitar la Comisión, luego de lo cual respondió que las observaciones que hizo la Comisión en dicha ocasión se debió a que faltaban partidas por ofertar, de manera que no se podían incorporar mediante aclaraciones *sin con ello no alterar el precio*. En cuanto al proyecto Coronel del Maule, el 23 de julio de 2012 se hizo la publicación de las bases Generales de la licitación de dicho proyecto, la cual efectuó Christian Bustos Morgado, misma fecha que el proyecto Villa Ortega, y en cuanto al proyecto Lontué la fecha y persona que hizo la publicación se repitió.

Interrogado nuevamente por la defensa de los acusados Bustos, refirió que el documento que le había exhibido era lo mismo que decía el documento que le había exhibido la fiscalía. Dijo que no recordaba si en el caso de Hualañé se habían modificado los montos ofertados con posterioridad a la aclaración, precisando que como la modificación decía relación con un aspecto técnico, ello alteraba el resultado económico.

Interrogado nuevamente por el querellante, declaró no saber si los oferentes de Hualañé, después de requerirse la aclaratoria, habían sabido el monto licitado.

Interrogado nuevamente por la defensa del acusado Gutiérrez, dio lectura a dos (2) roles únicos tributarios que aparecían consignados en una planilla excell adjunta a los documentos del N° 827, prueba de la fiscalía.

29°) (27) TESTIGO VIVIANA MORA HIGUERAS (gerente comercial)

A las preguntas de la fiscalía respondió: anteriormente trabajó por 14 años, hasta mayo 2021, en la Dirección Chile Compras, en diversas áreas, entre ellas la jefatura del Departamento Observatorio, el cual fiscaliza eventuales irregularidades en los procesos de compra. Explicó que para ello se revisa la información que se encuentra en sus bases de datos y por medio de la Contraloría y del Ministerio Público en que se requiera alguna investigación en profundidad respecto de algún proceso de compras, función esta última en la cual el año 2018, a solicitud de la fiscalía, el Departamento efectuó una investigación, para la cual se hizo revisión de algunos procesos de licitación de Carabineros, recordando,

entre otros los de Villa Ortega y Hualañé. Añadió que en el informe dio cuenta que en estos procesos la información que existía en el portal no era suficiente para responder todas las preguntas o todas las observaciones que requiere efectuar el Observatorio, tales como las bases de la licitación, la evaluación, adjudicación y reclamos posteriores sobre tales procesos, ocurriendo en la especie que toda esta información no había sido íntegramente publicada sino sólo informada, de manera que con la información disponible pudieron detectar las siguientes anomalías: *faltaba información, lo cual impedía realizar un análisis completo del proceso de licitación*. Se explayó respecto a lo que es un proceso de evaluación de las propuestas, indicando que en el acta debe consignarse todo lo ocurrido, por ejemplo, las razones por las cuales una oferta quedó fuera, esto, en atención a que de lo que se trata la apertura es sólo verificar que la oferta cumpla con las exigencias formales de las bases y con la presentación de documentos, ello a fin de que los proponentes sepan el motivo por el cual quedó fuera del proceso, y así poder reclamar en un plazo acotado. En la especie, no se tuvo el acta de evaluación sino sólo la declaración de la Comisión de las ofertas descartadas, pero no el motivo de ello. Explicó que “informar” significa que debían publicar las bases y efectuar el proceso de evaluación por fuera y posteriormente subirlo al sistema con toda la información relacionada con esa etapa y con los documentos correspondientes. Lo anterior, de manera oportuna. Así entonces, señaló, deben subirse al sistema las bases, el acta de evaluación, el decreto de adjudicación, el contrato y las evaluaciones que se hagan de los contratos conforme a lo estipulado en las bases de la licitación. La información de esto no se encontraba adjunta al momento de evacuar el informe. En cuanto a los procesos de Trato Directo, indicó que estos no hacen excepción a la ley y por lo tanto deben informarse igualmente que la licitación pública. A la época de preparación del informe no habían sido informados los procesos de Trato Directo. En cuanto a los criterios de evaluación utilizados, concluyeron que estos eran objetivos (precio, calidad y plazo de entrega, y en algunos casos se agregaba el criterio “comportamiento”). Explicó que “criterio objetivo” significa que los criterios a utilizar sean medibles, objetivos y poder contar con mecanismos de evaluación concretos y evaluables, evitando la discrecionalidad en la aplicación o evaluación del criterio de evaluación, v.gr., mayor puntaje a la “mejor oferta” es un criterio subjetivo si es que las bases de licitación no definen que es “mejor oferta”. Indicó que llamó la atención el hecho de que en todos los procesos el criterio precio era el que tenía mayor importancia o porcentaje más alto, con lo que la mejor oferta económica tenía mayor posibilidad de obtener la adjudicación, sin perjuicio de tener que

cumplirse, además, con las otras exigencias de las bases. Refirió que depende de las necesidades de la institución pública el criterio al que se asigne la mayor importancia. Añadió que desde el punto de vista de la competencia ésta se reduciría sólo al precio y no a la calidad. En cuanto al nombre de la empresa que había sido adjudicada por Trato Directo, respondió que no lo recordaba. **Se le exhibió su declaración de 6 de septiembre de 2018**, a fin de que recordara lo que había declarado sobre el punto en aquella oportunidad. Realizado el ejercicio respondió que el nombre de la empresa era “Grossman”. Continuó su declaración señalando que por falta de información publicada no pudo saber por qué se había utilizado esa forma de contratación. La información que aparecía publicada en el portal fue incorporada en el informe que el Observatorio remitió al ministerio público. **Se le exhibió el documento N° 827, parcialmente (Retén La Islita)**. Una vez examinado refirió que se trataba de un informe de evaluación técnica, de fecha el 10 de abril de 2013, no recordando haberlo visto cuando se preparó el informe del Observatorio. Explicó que en el documento constan 5 oferentes, a saber, las empresas FEALFRA, Ricardo Fernández, Coserco, Alerco y Proas. Coserco y Proas aparecen rechazadas, pero no se indica la razón del rechazo en el informe técnico. Añadió que este informe debe ser lo mismo que el informe de evaluación que analizó el Observatorio. Los rechazos deben fundarse en aspectos únicamente formales, como por ejemplo, faltar documentos requeridos en las bases. Las empresas Alerco y Ricardo Fernández fueron rechazadas *por no cumplir con las exigencias indicadas en el 6.4 de las bases administrativas*. Al efecto, refirió que el sólo hecho de citar un numeral, “6.4”, no basta, ya que debe señalarse específicamente cuál fue la exigencia incumplida. Agregó que el criterio “comportamiento de la empresa” aparece evaluado, esto no obstante no estar considerado en las bases de la licitación como criterio de evaluación, asignándosele, además, un porcentaje mayor al 100%. Lo anterior devino en que las demás empresas distintas que FEALFRA no lo cumplieran. El acta tampoco señaló el puntaje asignado a cada una de las ofertas, ello debido, probablemente, al hecho que esta asignación sólo se hizo con la empresa FEALFRA, desde que sólo esta cumplía con el criterio mencionado. El acta aparece firmada por Romina Parraguez, Isidro Martínez, Jofré, Luis Parra y Christian Bustos Morgado. Todos los que aparecen firmando son quienes forman la Comisión Evaluadora. Conforme a la Ley de Chile Compra debe existir una resolución que designe dicha Comisión, lo cual sin embargo no consta en los antecedentes. Añadió que la firma del Jefe del Área de Gestión y Coordinación de Proyectos, aparece como “VB”, o sea, “visto bueno”, precisando que las firmas son “firmas de responsabilidad”. Se le

exhibe el informe 1.089, Oficio remitido N° 1684, contenido en la documental N° 827, de la prueba de la fiscalía. Examinado por la testigo, esta lo reconoció como su informe y también su informe al final. En el proceso de Villa Ortega consta en la página 2 que intervinieron Socías, Parraguez, Christian Bustos Morgado y “el sistema”. La palabra “Guardado” que allí aparece significa que el proceso está aún en el proceso de la unidad de compra en proceso de evaluación y que, por tanto, no ha sido publicado. En este caso fue Francisco Socías quien envió la solicitud de autorización para publicar. En la misma fecha que el anterior, minutos después, Christian Bustos aparece autorizando la publicación, siendo éste mismo quien *apretó el botón publicar*, quedando por tanto registrada la licitación. El hecho de ingresar al sistema significa que quien lo hace ha mirado y se ha enterado del proceso. En el caso del retén Melosal, intervino Juan Francisco Vargas; envió a autorizar la licitación; Bustos Morgado lo devolvió sin autorizar, en tres oportunidades, autorizando finalmente la publicación, siendo el Coronel Walter Spred quien cerró el proceso. Las veces que Bustos ejecutó las “acciones guardado” obedecerían a que no se autorizó la publicación, por lo que *algo debe haber ocurrido* en el proceso que no permitió autorizar la publicación. Posteriormente, con fecha 17 de agosto, aparece “guardado”, y enviada al día siguiente a Socías, quien la devuelve minutos después a Bustos, quien no autorizó la publicación sino con fecha posterior, de lo cual entiende que Bustos “algo hizo” para que “esto quedara guardado” en el sistema. Quien autoriza tiene una mayor relevancia porque su función es la de supervisor. Quien envía a autorizar es el operador del sistema. En cuanto a la Tenencia Hualañé intervinieron sucesivamente Socías, Bustos, Socías, Bustos y finalmente el Coronel Walter Spren, es quien cierra el sistema. Indicó que *existen aquí 4* solicitudes de Socías para publicar, todas ellas el 16 de agosto 2011; luego el 17 de agosto Bustos envía a autorizar y al día siguiente lo mismo, envía, nuevamente Socías, autorizando finalmente la publicación y, acto seguido, realiza la publicación. Enviar para autorizar significa que envía a publicar el proceso de licitación completo, más sus anexos correspondientes. Consultada acerca por las claves que se utilizan para participar, explicó que no las puede crear sino el administrador del sistema. Esas cuentas y claves son personales e intransferibles, y la responsabilidad del uso de la clave es siempre de su titular, por lo que cualquiera acción que se realice con la clave es de responsabilidad del titular de la clave. Cuando se publica en Chile Compra, la licitación pasa a ser pública. Antes de ello el proveedor no debe tener acceso a la información, por las ventajas que le concede respecto de los demás proveedores por el conocimiento de información “clave”. Se **le exhibió**

el documento N° 786, correo de 5 de julio, anteriormente exhibido, respondiendo a continuación que este correo le había sido exhibido cuando prestó declaración, el 5 de julio 2012, en el cual aparece que lo envía César Rojas a Renato Méndez, en el aparece una carta adjunta (que no recuerda haberla tenido a la vista), llamándole la atención que Rojas dijera que en los próximos diez días venía 12 procesos más en la VII región, con varios números entre paréntesis. En dicho proceso aparece el de Villa Ortega, señalando haber revisado ese proceso junto con el abogado Matías Navarrete. Aclaró que el presupuesto de la licitación será visible si lo señalan las bases y si, además, se publica en el sistema. La infracción de los principios de igualdad de trato de los oferentes y de probidad vulnera la transparencia. La Comisión Evaluadora evalúa y propone, y la autoridad competente, el jefe del servicio, es quien adjudica, en este caso el Director de Logística. El jefe de servicio acepta o rechaza la propuesta, pero si tiene dudas, también puede ser que pida que se revise si la evaluación fue correctamente hecha, pero jamás puede designar a otra persona distinta de la indicada por la Comisión. Dentro de lo que le correspondió informar al Observatorio, recordó un caso en que la Comisión propuso declarar desierta la licitación pero la jefatura ordenó verbalmente a la Comisión que pidiera aclaración a los oferentes, lo que no procedía porque la aclaración en cuestión no era tal ya que lo que había ocurrido era que las propuestas no habían considerado algunas partidas consignadas en las bases de la licitación. La Comisión le representó la situación porque no se trataba de una aclaración sino una modificación de las propuestas efectuadas por los oferentes. Agregó la deponente que lo ordenado por Bustos había sido también improcedente porque él no formaba parte de la Comisión y porque, además, ya había tenido lugar la apertura de sobres, de manera que el plazo de entrega y precio ofertados eran conocidos por todos, con lo que la aclaración ordenada por Bustos, al momento de la posterior evaluación que hiciera la Comisión, tendría incidencia en la evaluación del criterio “calidad”. Indicó que el Coronel Christian Bustos no aparecía formando parte de la Comisión Evaluadora, no aparecía su firma. Refirió que había empleados de FEALFRA, como el caso de un contador, de apellido Tobar, quien trabajaba también para una empresa que tenían los hermanos del mencionado Bustos. Explicó que una situación de afinidad manifiesta como esta puede restar imparcialidad, por lo que Bustos debió abstenerse y no participar de ninguna manera en procesos en los que la empresa de sus hermanos formara parte. El “VB” (visto bueno) que se consigna en un informe de evaluación vincula dicho informe con la posterior adjudicación, por lo que, en el caso de Bustos, éste debió abstenerse de participar.

Señaló la testigo que había conocido a Bustos precisamente a propósito de la Contratación Pública, participando con él en una comisión de trabajo y otras instancias, quien, adicionalmente, se capacitó en la materia, por lo que *sabía mucho* del sistema de contratación pública.

Interrogado por la defensa de los acusados Bustos, respondió que el Departamento Observatorio se creó en el año 2013, pero que anteriormente existía una oficina de control. Respondió de manera afirmativa que al año 2012 existía la práctica de no publicar lo concerniente a la ejecución de las licitaciones. Indicó que a esa fecha debía subirse a la plataforma todo lo relacionado con las bases de licitación, con los términos de referencia, con decretos, contratos y con toda información vinculada con tales contratos. De acuerdo con el informe técnico emitido por el Observatorio, en las bases especiales de la licitación no se incluía el criterio de evaluación “comportamiento de la empresa”, el cual, sin embargo, sí fue incluido en el momento en que se hizo la evaluación, según consta del acta respectiva. A petición de la defensa, por reunirse los requisitos del artículo 336, inciso segundo del Código Procesal Penal, y por las razones que constan en el registro de audio, **se accedió a la incorporación de prueba nueva**, consistente en las bases especiales de la licitación, las cuales fueron exhibidas a la testigo, haciéndose constar que en el punto 7.2.1.1 y 7.2.2, aparece que se distinguió entre contratistas nuevos y antiguos, y que respecto de estos últimos se incluyó el comportamiento de la empresa como criterio de evaluación. Explicó la testigo que el criterio en cuestión no debió ser considerado en la evaluación “porque no es un criterio de evaluación”. Concedió a la defensa que una multiplicidad de razones podrían explicar la devolución de los antecedentes y no autorizar en ese momento la publicación de las bases de la licitación.

La defensa del acusado Pizarro no interrogó a la testigo.

La defensa del acusado Gutiérrez preguntó a la deponente en relación con el documento N° 52, de la prueba de la fiscalía, antes incorporado, señaló la testigo que no lo reconocía.

A **la defensa del acusado Rojas** respondió que el Observatorio, en su oportunidad, no dio cuenta de irregularidades, de acuerdo con la información publicada en el Portal. Convino con la defensa en orden a que la falta de

publicidad no fue informada a la Contraloría por falta de recursos humanos y técnicos. Explicó que al Observatorio no le corresponde, por su competencia, calificar anomalías como irregularidades, sino sólo formular observaciones. **Exhibido nuevamente el correo electrónico** anterior, dio lectura al nombre del remitente, Renato Méndez, y el destinatario, cgutierrez@cgm.cl. Convino con la defensa en cuanto a que los presupuestos publicados en el Banco Integrado de Proyectos no necesariamente coincidirán con el monto exacto del presupuesto que se publique en el Portal de Chile Compra. como consta de la prueba documental de la fiscalía, N° 698.

XXXX: Prueba de cargo de la parte querellante: Que, a efectos de acreditar los hechos de su acusación el querellante aportó los siguientes medios de prueba:

1°.- Prueba testimonial: HENRY HANSTCH SALINAS (abogado, Jefe de la Unidad de Sumarios desde el año 2017, actualmente fiscal subrogante de la Contraloría General de la República).

A la pregunta del querellante respecto a cuáles eran sus funciones en la Contraloría General de la República, respondió que le correspondía intervenir en la vista fiscal de los sumarios administrativos disciplinarios (Reglamento disciplinario de la C.G.R. N° 510, del año 2013)., Viene por un sumario que sustanció entre los años 2016 y 2018 por Carabineros de Chile, respecto de incumplimientos contractuales de cuatro (4) de obras de reposición. **Se le exhibe el documento N° 1, de la prueba propia de la querellante;** declaró que se trata de la Resolución de inicio del sumario administrativo, a partir del cual se inicia el sumario administrativo, en el cual le cupo intervención en calidad de Jefe de la Unidad de Sumarios Administrativos. Lo anterior tuvo origen en un informe final de una Investigación Especial, la cual se instruye a virtud de una denuncia. Dicho informe sería el N° 283, del año 2015. **Se le exhibe el documento N°115** (antes incorporado); el testigo lo reconoce, refiere que es el documento a que hizo referencia. Los hechos fijados en este documento fueron inobservancias contractuales respecto de obras de reposición de cuarteles policiales, lo primero fueron los estados de pago en relación a partidas no ejecutadas, lo segundo, en relación al contrato de reposición de Villa Ortega se constataron más irregularidades identificadas como: a) recepción provisoria de Villa Ortega se hace

sin observaciones en circunstancias que se constata que habían partidas no ejecutadas; b) que la Comisión de Recepción Provisoria recibe conforme sin haberse apersonado en el lugar de la obra, levantándose la respectiva acta en otro lugar que la obra, y c) que la boleta de garantía le fue devuelta al contratista. Lo anterior además de la falta de control jerárquico de la labor del inspector técnico, Francisco Pizarro, cuyo jefe directo era Christian Bustos Morgado y un jefe mayor, Félix Flores Santis. La fiscalización estuvo a cargo de la División de Control de Infraestructura. Dicha unidad dio cuenta de ciertos antecedentes, *examen de cuentas*, se detecta un perjuicio patrimonial, situación que fue enviada para determinación al Tribunal de Cuentas. En el informe de Investigación Especial no se determina responsabilidades funcionarias individuales, sino sólo irregularidades administrativas, lo cual da lugar a un sumario administrativo posterior en orden a establecer eventuales responsabilidades administrativas. El sumario administrativo es independiente y autónomo respecto de la Investigación Especial, por lo cual el sumario fija el objeto del proceso, pudiendo el fiscal establecer otras irregularidades, de lo cual se sigue que no es necesaria una congruencia entre los hechos de la investigación y los del sumario, no obstante que en la práctica suele haber dicha congruencia. A la época de su llegada se exigía la total congruencia, no obstante que ya existían dictámenes en contrario, doctrina que finalmente se modificó cuando él llegó a hacerse cargo de la Unidad de Fiscalización. Le correspondió la revisión de la vista fiscal, con miras a su aprobación o no de dicha vista, la cual en definitiva aprobó. **Se le exhibe de la documental N°1, las fs. 1.753 y 1.754, correspondientes a la vista fiscal, y las fs. 1.713 y siguientes, correspondiente a su informe de aprobación de dicha vista,** y una propuesta de las medidas disciplinarias a aplicar a los funcionarios de Carabineros aludidos en la vista fiscal. Señaló que su examen lo efectuó en relación de los antecedentes y diligencias que alude la propia vista fiscal, los cuales en definitiva constituyen el hilo conductor de la revisión. Los hechos que se constataron fueron *aprobaciones de estados de pago sin acreditarse avance real de las obras, pagándose obras no ejecutadas; la devolución de una boleta de garantía; la falta de control jerárquico de Christian Bustos Morgado y de Félix Flores Santis; también se constató que la recepción provisoria de 24 de junio 2013 (acta), se materializó sin que la Comisión se hubiere instalado o apersonado en la obra de Villa Ortega.* **Se le exhibe el documento N° 838, prueba de la fiscalía, coincidente con la foja N°1057, del sumario administrativo de Carabineros, prueba N° 1, de la querellante:** dijo reconocerlo, señaló que se trata de un acta de recepción provisoria sin observaciones del retén de Villa Ortega, suscrita por la

Comisión que se conformó al efecto, lo cual *no correspondía con la realidad y sin constarle el estado de las obras*. Era obligatorio que se constituyera, y de hecho se había constituido días antes, levantándose una acta de recepción provisoria con observaciones. **Se le exhibe el documento N° 837 (acta de recepción con observaciones)**: el testigo lo reconoce, corresponde a la citada acta, de fecha 7 de junio de 2013, identifica lo que falta y se conmina al contratista a cumplir con el faltante. Supo que en definitiva el retén de Villa Ortega fue terminado en septiembre u octubre de 2014, pero con recursos propios. Respecto del acta del documento ésta fue firmada por Andrea Campusano, Guillermo Nadal, Héctor Salamanca Riquelme, Christian Bustos Morgado y Cristian Gutiérrez Martínez. Para ellos se propuso medidas disciplinarias, salvo para Bustos Morgado quien fue absuelto por una interpretación normativa de la época, pero no porque no hubiere intervenido en los hechos, ello con motivo de que a esa data ya no formaba parte de la institución. El cese de funciones implicaba, a dicha época, la extinción del vínculo con la institución y la extinción de la responsabilidad administrativa. Sin embargo, conforme a la posterior jurisprudencia administrativa, se modificó la interpretación a partir del 17 de octubre de 2017, se estableció que la responsabilidad no cesaba cuando el sumario había sido iniciado con anterioridad al cese. En cuanto a la devolución de la boleta de garantía, se estableció responsabilidad de Francisco Pizarro, por haber autorizado la devolución, responsabilidad de Luis Parra Ávila, a cargo de la custodia de la boleta, y también responsabilidad por falta de control jerárquico de parte de Christian Bustos Morgado. **Se le exhiben los siguientes documentos:** a) **documento N° 498**: al respecto señala el testigo que lo reconoce, se trata de una factura que da cuenta de un estado de pago, N° 5, del contrato de Isla Huar, \$70.554.210; b) **documento N° 977**: también lo reconoce, es una acta de constancia vinculada al estado de pago y a la factura respectiva suscrito por los funcionarios Francisco Pizarro, Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, con cuyas intervenciones se dio curso al pago; c) **documento N° 1043**: lo reconoce, corresponde a un documentos del sumario; es un informe técnico vinculado al proyecto Isla Huar, elaborado por el ITO Francisco Pizarro, da cuenta del estado de avance de la obra, y que corresponde al 8° estado de pago. El informe concluye que la obra ejecutada está conforme. Dijo saber que, “si no me equivoco”, este proyecto fue terminado por la “empresa Pizarro”. Tales documentos fueron elementos que permitieron establecer la irregularidad del hecho y la posterior responsabilidad funcionario. Los hechos irregulares, conforme a la investigación especial, generaron perjuicio económico, pero la determinación

de ello le corresponde al Juzgado de Cuentas. Lo que se hace en el sumario es un examen de cuentas, sobre la base del cual se genera la demanda al juicio de cuenta por medio de la Unidad Judicial, la cual formula un reparo, lo que se traduce en la demanda del juicio de cuentas. Refirió que existe un anexo en el cual se establece las partidas pagas y no ejecutadas, estableciéndose un total aproximado a los \$400.000.000. Se **le exhibe el documento N° 115, de la prueba documental de la fiscalía** (informe final de la investigación especial N° 283/2015, de 16 de diciembre de 2015, de la División de Infraestructura, Regulación, Subdivisión de la Contraloría General de la República): a su exhibición el testigo lo reconoce y explica que corresponde al anexo N° 4, de la Investigación Especial; en él se señalan las partidas pagadas y no ejecutadas; es un análisis muy específico que realiza el equipo de fiscalización; se establecen y detallan los montos de cada partida. Respondió que la empresa Grossman no fue objeto del sumario. Se **le exhibe la prueba documental N° 1.056** (Resolución N° 847, de 28 de octubre de 2013); lo reconoce, se trata de una Resolución relacionada con el Registro de Contratistas de Carabineros.

La fiscalía no interrogó al testigo.

La defensa de los acusados Bustos Morgado interrogó al testigo, primeramente en cuanto al efecto jurídico del sumario de Carabineros, en relación al sumario de la Contraloría, a lo cual respondió que ninguno, que se trató de un antecedente más, no siendo vinculante para la Contraloría General de la República.

La defensa del acusado Pizarro interrogó al testigo en cuanto al control jerárquico, y específicamente respecto de Pizarro y Bustos; de las rendiciones o informes que el primero le entregaba al segundo cada vez que regresaba de las fiscalizaciones, junto con exhibirle fotografías de las obras fiscalizadas. Es efectivo que para la devolución de la boleta de garantía Pizarro emitió un informe de conformidad. Ese documento era relevante ya que por medio de él se podía liberar la boleta, ignorando si además era necesaria una instrucción de Bustos Morgado. La custodia material le correspondía a Luis Parra Ávila, precisando que en los organismos públicos existe un estándar de custodia. *“Entiendo” que hubo una solicitud de devolución de parte de la empresa.*

La defensa del acusado Gutiérrez interrogó al deponente respecto al inicio de la investigación especial, respondiendo que había nacido a partir de una denuncia, no recordando qué persona hizo dicha denuncia. El fiscal instructor fue quien tomó las declaraciones. En el sumario de la Contraloría se tomaron declaraciones, sin perjuicio de la Investigación Especial, y de las declaraciones que se tomaron en el sumario administrativo de Carabineros. La denuncia que dio origen a la Investigación Especial señalaba que la inscripción de la empresa CGM y de Grossman eran irregulares, no obstante lo cual el informe emitido a raíz de la citada Investigación descartó tales irregularidades.

La defensa del acusado Rojas interrogó al testigo en relación a la inscripción de la empresa Grossman. L1 era la Unidad Técnica responsable de la liberación de los fondos, es una cadena, y,

2°.- Prueba documental: La parte querellante aportó los documentos a que pasan a indicarse:

Documento N° 675, prueba documental del ministerio público (dos documentos contenidos en el set que se acompaña en este numeral: a) boleta de depósito en moneda nacional de Osvaldo Tobar a Natalia Lara (cheque banco BCI, cuenta corriente N° 88158110, \$360.000 mil pesos), y b) Cheque girado a nombre de Hugo Migani, 16 de diciembre 2013, de la cuenta de Osvaldo Tobar, banco BCI, misma cuenta corriente anterior.

Documento N° 17, prueba documental del ministerio público; escritura pública de constitución de sociedad “Bustos y Tejías Construcciones Ltda.”, o “B y T Construcciones Ltda.”; fecha 4 de septiembre 2006, Conservador del Registro de Comercio de Valparaíso; concurren Christian Bustos Morgado y Hugo Andrés Tejías Llanos; objeto o giro de la sociedad, prestación de servicios profesionales que se mencionan en las letras a), b), c), d); nombre de fantasía “B y T Ltda.”, Bustos y Tejías Construcciones Ltda.; capital \$3.000.000, aporta cada uno \$1.500.000 en efectivo, dinero ya ingresado en arcas sociales; notario María Ester Lagos.

Documento Nº 20 (extracto reducción de la escritura pública precedente): notario Ricardo San Martín Urrejola; comparecen los dos anteriores más los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado; cesión de derechos sociales.

Documento Nº 23 (planilla flujo inversiones Bustos Morgado Ltda.)

Documento Nº 869 (extracto, notario Gervasio Zamudio, Viña del Mar; por escritura pública de 26 de diciembre de 2012, comparecen Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado; constituyeron sociedad de responsabilidad limitada; objeto social: asesoría logística en transporte de bienes muebles; razón social: Asesoría y Servicios Logísticos; nombre de fantasía “BM Ltda.”.

Documento Nº 817: Oficio secreto Nº 111, del Servicio de Impuestos Internos, Subdivisión jurídica, 12 de septiembre de 2018; ANT: Informa lo solicitado por el ministerio público en las letras a) y b) del oficio citado en el ANT; responde: remite adjunto CD con la información requerida; prevención artículo 35 Código Tributario: información sólo podrá ser utilizada para los fines solicitados por la institución.

Documento Nº 819 (Oficio secreto Nº 124, de fecha 25 de octubre 2018; ANT: Oficio Ordinario de 26 de septiembre 2018, de fiscal Constanza Encina; se ha solicitado información respecto de: 1) a) facturas electrónicas años 2012 a 2015; b) nombre de todas las personas naturales registradas que actúen en representación de esa empresa entre 2011 a 2015; 2) en cumplimiento y complementando oficio 111, adjunta CD con la información requerida; 3) previene conforme al artículo 35 Código Tributario.

Documento Nº 67, certificado de matrimonio César Rojas Gaete y Purísima del Pilar Toledo Valenzuela, 1993; fecha de celebración 5 de noviembre de 1993; separación total de bienes: antecedentes: según escritura de 16 de agosto de 2013, contrayentes pactaron separación total de bienes; sub inscripción 26 de agosto de 2013.

Documento Nº 98, listado de transferencias enviadas por CGM, cuenta Bci (planilla transferencia enviadas a César Rojas, María Isabel Martínez Miranda, Evelyn Arancibia Negrete y Juan Mauricio Gutiérrez Martínez.

Documento N° 817, Oficio Secreto N° 111, planilla adjunta: Servicio Logístico y de Transporte BM Ltda., operaciones desde julio 2013.

Documento N° 105: Oficio del Banco Santander: Mat: RUC 1410006643-3, 19 de abril 2016, timbre 26 de abril, para fiscal Villalobos Gómez, de abogado de la Fiscalía del Banco Santander, Eugenio Labarca: movimientos de las cuentas corrientes N° 2003676-1 y 06700980-0, entre enero 2010 a diciembre 2014.

Documento N° 107, cheque girado de la cuenta de Servicios Logísticos BM, a nombre de Cristian Bustos, Banco Santander, por \$ 4.000.000, el 9 de octubre de 2013, cruzado. Al reverso los siguientes guarismos: 235698-3 y 64682646. Firma, banco Santander, cámara 137;

Documento N° 673: a) depósito de cheques por FEALFRA: 1) Cheque de la cuenta corriente 13703170-10, de la empresa SIP Ltda., por \$50.000.000, de 10 de enero de 2013, cruzado, orden de pago a la empresa FEALFRA SPA, Banco de Chile. Al reverso 76.379869-4, número teléfono terminado en 001703, cuenta corriente 68557983, firma y nombre FEALFRA, por poder; y, 2) Cheque 9002600, Dirección de Logística de Carabineros, \$103.214.759, de fecha 24 de octubre de 2013, orden de pago a Constructora FEALFRA SPA, por poder, Dirección de Logística, Banco de Chile, timbre de caja de 24 de octubre de 2013. Al reverso: cuenta corriente Corpbanca 38557983, firma, constructora FEALFRA SPA; b) transferencias realizadas a FEALFRA, RUT FEALFRA, desde el 1 de enero 2012 al 13 de abril de 2016.

Documento N° 693: Oficio Security, de fecha 22 de enero de 2018. Referencia: en relación a su solicitud del oficio N° 232, causa RUC 141000643-3: En respuesta a su oficio acerca de las boletas de garantía N° 361351 y N° 1689517, respecto de las fechas en que se hicieron efectivas se informa que la primera está abonada a la cuenta corriente del tomador el 9 de septiembre de 2013, y la segunda no corresponde a número de nuestro sistema. Firma Alan Turner Infante, Banco Security.

Documento N° 698 (movimientos migratorios): Oficio Ord. N° 3426, de fecha 29 de marzo 2018, de la Policía de Investigaciones; ANT.: Oficio 032/rslcm /2018/28-3-2018, Fiscalía de Alta Complejidad, RUC presente causa: Informa movimientos

migratorios de Christian Bustos Morgado, Rodrigo Bustos Morgado y Nelson Bustos Morgado, Osvaldo Torrejón, Andrés Tobar Fernández y Miguel Enrique Torrejón Fernández no registran egresos del territorio nacional desde el año 2011:

1) Christian Bustos Morgado: 1.1) Salida 17-8-2013, destino Ecuador - Entrada 25-8-2013, desde Perú; 1.2) Salida 1-12-2014, destino ESPAÑA - Entrada el 16-12-2014, desde ESPAÑA; 1.3) Salida 15 de febrero 2016, hacia Argentina - Entrada 20 de febrero de 2016, desde Argentina;

2) Rodrigo Bustos Morgado: 2.1) Salida 12 de junio de 2012, hacia a Argentina, Entrada 18 de junio de 2012, desde Argentina; 2.2) Salida 17 de agosto de 2013, hacia Ecuador - Entrada 25 de agosto de 2013, desde Ecuador; 2.3) Salida 29 de octubre de 2013, hacia Argentina - Entrada 30 de octubre de 2013, desde Argentina; 2.4) Salida 17 de junio 2014, hacia Brasil - Entrada 24 de junio 2014, desde Brasil; 2.4) Salida el 18 de abril de 2015, hacia Brasil - Entrada el 25 de abril de 2015, desde Brasil; 2.5) Salida 16 de noviembre 2015, hacia Brasil - Entrada el 24 de noviembre de 2015, desde Brasil; 2.6) Salida 31 de mayo 2016, hacia EEUU - Entrada 19 de junio 2016, desde EEUU; 2.7) Salida 28 de mayo 2017, hacia Colombia - Entrada el 31 de mayo 2017, desde Colombia; 2.8) Salida 7 de octubre de 2017, hacia Argentina - Entrada 12 de octubre de 2017, desde Argentina;

3) Nelson Bustos Morgado: 3.1) Salida 28 de noviembre de 2011, hacia Panamá - Entrada 5 de diciembre 2011, desde Cuba; 3.2) Salida 12 de junio 2012, hacia Argentina - Entrada 18 de junio 2012, desde Argentina; 3.3) Salida 17 de agosto 2013, hacia Ecuador - Entrada 25 de agosto 2013, desde Ecuador; 3.4) Salida 14 de junio 2015, hacia ESPAÑA - Entrada 29 de junio de 2015, desde Brasil.

Documento N° 1.186: documento electrónico NCU 19259438; De: suboficial Israel Cuevas Córdova, jefe retén subrogante, PARA: mayor César Tapia, comisario, suboficial Juan Araya, suboficial mayor de órdenes (subrogante); ASUNTO: comisión de servicio personal L1, fecha martes 21 de enero de 2014: documento inicial: Jefe de Retén(S), Rafael Cuevas, Villa Ortega: “mediante el presente documento electrónico se informa a esa superioridad que el día de hoy, 21 del actual, alrededor de las 18:00 horas se presentó don Héctor Salamanca Riquelme, ingeniero eléctrico y la señora Romina Parraguez Robles, ingeniero civil, ambos

de la dotación Departamento de Cuarteles L1, quienes efectuaron observaciones relativas a la construcción del nuevo destacamento, de acuerdo con sus especialidades.

PRUEBAS DE DESCARGO.

DÉCIMO: Que, la defensa de los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado rindió los siguientes medios de prueba:

1º) Prueba documental

Documento Nº 332 (de la prueba de la defensa): Decreto Nº 533, Subsecretaría de Carabineros, nombra, desde el 16 de noviembre de 2016, como subteniente a los siguientes aspirantes de Carabineros; 101 aspirantes, el primero de la lista en ser nombrado es Bustos Morgado, Christian Patricio; al pie, se ordena tomar razón y registrar; firman Augusto Pinochet Ugarte, Presidente de la República, y Rodolfo Stange O., Director General de Carabineros.

A solicitud de la fiscalía se dejó constancia que entre los nombrados no se encuentra César Rojas Gaete.

Documental Nº 333 (prueba de la defensa): Decreto Nº183, de 28 de diciembre de 2009, subsecretaría de Carabineros, dispone ascenso a contar del 2 de enero de 2010, al grado de Teniente coronel, de Bustos Morgado, Christian Patricio.

Documental Nº 330: Resolución Exenta Nº3, de 20 de enero de 2012, Departamento P1, Dirección Nacional de Personal, resuelve que a contar del 2 de enero de 2012, se traslada al coronel Flores Santis, Félix Mauricio, a la plana mayor del Departamento de Cuarteles de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros y a Christian Bustos Morgado a la Sección Cuarteles del mismo Departamento; firma, Director General de Carabineros, González Jure.

Documental Nº 335: Decreto Nº 13, de 5 de enero 2015, firmado por Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior, dispone ascenso, a partir del 2 de enero de 2015, al grado de coronel, de Bustos Morgado, Christian Patricio

EN CUANTO AL HECHO 1:

Documento N° 8: Oficio Departamento L1, firmado por el coronel Jean Camus, remite a la fiscalía antecedentes de los procesos licitatorios en que la empresa Constructora FEALFRA participó y no se adjudicó los proyectos:

a) Licitación proyecto retén Niebla, 16 de noviembre de 2012; informe técnico de evaluación N° 882; II. Oferentes Chilesud y otros; empresas rechazadas: FEALFRA EIRL, por no acompañar las especificaciones técnicas de las bases administrativas; criterios de evaluación técnicos: oferta económica 65%, plazo de entrega 25%, comportamiento 10%, total 100%; matriz de evaluación técnica de las 2 empresas que cumplieron con las bases: Servicon y Chilesud, 97,25 y 90,33 puntos obtenidos, respectivamente; comportamiento fue evaluado de acuerdo con las bases del registro de Carabineros; se adjudica a la empresa constructora Servicon; firman, entre otros, VºBº Patricia Albornoz Venegas, jefe de área de gestión y coordinación, "RPL";

b) Informe técnico N°689, 14 de septiembre de 2011, proyecto Punucapa, recaído en licitación pública 3172-140-LP11, publicada el 10 de agosto de 2011; ofertas presentadas fueron: Chilesud, Chilecon y FEALFRA, rechazada esta última en el acto de apertura por no presentar ciertos documentos requeridos en las bases; conclusión: no se evalúa a ninguna empresa por no cumplir con las exigencias técnicas; firman, entre otros, Patricia Albornoz Venegas, VºBº Christian Bustos Morgado, jefe del área gestión de proyectos;

c) Informe técnico N° 374, de 29 de junio de 2011, licitación Reten Pintué, 3172-87-LP11; criterios de evaluación técnica; presentación de ofertas físicamente en el acto de apertura: empresas constructoras MLM, FEALFRA, Traza, Megambiente, Valleverde y Alerco; rechazadas en la apertura las cuatro últimas; evaluada favorablemente la primera; firma, entre otros, VºBº Christian P. Bustos Morgado; Patricia Albornoz Venegas;

d) Resolución Exenta N° 986, de 14 de septiembre de 2012, que adjudica licitación pública 3172-94-LP12, proyecto reposición Santa Ana de Lobos; Considerando: a) conforme consta en acta de 22 de agosto de 2012, se presentaron cinco oferentes: empresas constructoras Proas Ltda., Ricardo

Fernández Gamboa Ltda., Alto Sur Ltda., Sociedad Vallejos y Garfias Ltda., y FEALFRA SPA; empresas Ricardo Fernández Gamboa y FEALFRA no acompañaron la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases Generales, por lo que no se abrió sus sobres con oferta económica; se resolvió adjudicar la licitación a constructora Alto Sur Ltda.; firma Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, timbre y *mosca* en la resolución;

e) Informe técnico N° 337, de 10 de abril de 2013, Retén la Huerta, licitación pública 3172-32-LP 13; II.- Oferentes: Constructoras FEALFRA SPA, Ricardo Fernández Gamboa Ltda, Sociedad Vallejos y Garfias Ltda y Proas Ltda.; matriz de evaluación técnica sólo de FEALFRA SPA, Proas Ltda. y Sociedad Vallejos y Garfias Ltda.; puntaje y porcentajes; conclusiones: se sugiere a la empresa Sociedad Vallejos y Garfias Ltda.; firman, entre otros, VºBº Christian P. Bustos Morgado, jefe de gestión y coordinación de proyectos;

f) Informes técnicos N° 13 y 14, de 13 de noviembre 2013, proyecto Retén Isla Huar y Coyhaique Alto, trato directo (sólo se mencionan, no se hace lectura por haber sido anteriormente incorporados por la fiscalía);

g) Resolución Exenta N° 185, de 11 de marzo de 2014; proyecto: creación y construcción Retén Chicureo; empresas oferentes: Alerco Ltda., Vallejos y Garfias Ltda., FEALFRA, Ingeniería y Construcción Torrejón Ltda.; rechazadas: Alerco, FEALFRA y Torrejón; Sociedad Vallejos y Garfias presentó toda la documentación y por tanto se analizó su propuesta para el proyecto 3172-3-LP14; adjudicación: empresa Constructora Vallejos y Garfias Ltda.

Documento N° 35 (prueba documental de la defensa). Acta de apertura de sobres licitación proyecto Reposición Retén Lago Castor; fecha, 13 de noviembre de 2012, 11:00 horas; sobre de oferentes; observaciones: a virtud de todo lo expuesto se procedió a abrir el sobre con la propuesta del único oferente, empresa Constructora CGM Ltda.; firman: Isabel Ojeda Palma, Francisco Socías, Pedro Jofré Montero, VºBº Luis Parra Ávila; anexo: asistentes al acto de apertura: Ignacio Labra M., RUT 10.4749.958-2, por la empresa CGM, correo electrónico ilabra@constructoracgm.cl

Documento Nº 181 (acta apertura de sobres proyecto de reposición Retén Isla Huar, 12 de noviembre de 2012, 15:30 horas; idéntica matriz que la anterior; sólo se identifican documentos de CGM Ltda.; observaciones: en virtud de todo lo expuesto se abrió el sobre propuesta del único oferente, constructora CGM Ltda.; valor neto \$313.703.103, valor con I.V.A. \$373.389.992; plazo de ejecución 160 días corridos; suscriben: Isabel Ojeda Palma, abogado, Francisco Socías, arquitecto, Luis Parra Ávila, subteniente, VºBº, Departamento L1; anexo: por el único oferente compareció Ignacio Labra Moscoso; dirección de correo electrónico ilegible, firma ilegible.

Documento Nº 256 (prueba de la defensa; documento anteriormente exhibido para reconocimiento por el acusado Cristian Gutiérrez Martínez, con fecha 4 de noviembre de 2021): Acta de apertura de sobres del proyecto Reposición Retén Villa Ortega, 24 de agosto de 2012, 11:30 horas, se constituye la comisión a fin de verificar el contenido de los sobres: sólo dos (2) oferentes, CGM y empresa Inversiones Santa Rosalía 5 S.A.; observaciones: (párrafo cuatro) dado que la boleta de garantía de seriedad de la oferta no viene a la vista sino que pagadera a 30 días, contrariando con ello las bases de la licitación, y siendo causa de eliminación inmediata del proceso, se le elimina y devuelve sobre sin abrir; se procedió a abrir sobre del único oferente subsistente; valor neto \$300.796.837, valor I.V.A. \$357.948.236, plazo de ejecución 140 días corridos; firman: Isabel Ojeda Palma, Francisco Socías, Medina Muñoz, Luis Parra Ávila, subteniente de Carabineros; anexo: asistieron Víctor Matamala, por la empresa Santa Rosalía 5 S.A. y Cristian Gutiérrez Martínez, por la empresa constructora CGM Ltda.; correo electrónico cgutierrez@constructoracgm.cl;

Documento Nº 178: Acta de aprobación de estado de pago Nº 1 aprueba estado de pago Nº 8, de la empresa constructora CGM, por los trabajos del proyecto Reposición Retén Coyhaique Alto, por \$32.026.396, 5 de agosto 2013, firma Francisco Pizarro Dasso y el profesional residente de CGM, y representante legal, cuyo nombre no aparece en el documento;

Documento 23: Acta de aprobación de 28 de junio de 2013, estado de pago Nº 87, proyecto Reposición Retén Isla Huar, Francisco Pizarro Dasso aprueba estado de pago Nº 6 a la empresa contratista CGM Ltda., por los trabajos de reposición del proyecto Isla Huar, por \$32.817.666, firman, por la empresa constructora CGM

el profesional residente y representante legal sin nombre, y Francisco Pizarro Dasso

Documento N° 245: Acta de aprobación de estado de pago N° 102, de 1° de agosto de 2013, ingeniero en construcción Francisco Pizarro Dasso, aprueba estado de pago N° 7 a la empresa constructora CGM Ltda., por trabajos de reposición retén Isla Huar, \$42.618.942, I.V.A. incluido; suscribe Constructora CGM Ltda., el profesional residente, representante legal, con media firma sobre ese nombre, y Francisco Pizarro Dasso.

Documento N° 253: Acta de aprobación N° 129, de fecha 3 de septiembre de 2013, de Francisco Pizarro Dasso, aprueba estado de pago N° 8, a la empresa contratista CGM Ltda., por trabajos de reposición Retén Isla Huar, \$44.622.227, I.V.A. incluido, firman los mismos mencionados en el documento precedente (por CGM se ignora, y Francisco Pizarro Dasso).

Documento N° 379: Resolución Exenta N° 984, 14 de septiembre de 2012, adjudica licitación pública 3172-91-LP12, proyecto Reposición de la tenencia de Carabineros El Olivar: a.3) por tanto, sólo cuatro (4) oferentes pasaron a la etapa de evaluación técnica: Alerco, Olga Garfias Fuentes, CGM Ltda., y Comercial y Servicios Cocerco Ltda., resultando técnicamente rechazadas las tres (3) primeras por no ofertar la totalidad de las partidas (Alerco, Garfias y CGM); último párrafo: la empresa CGM no cotizó la totalidad de las partidas del ítem que indica, v.gr., graVilla acceso; a.4) debido a lo expuesto, mediante el citado informe técnico se propuso recomendar a la empresa Cocerco Ltda., siendo su oferta económica la cantidad de \$249 millones y fracción; se resuelve adjudicar la licitación reposición Retén El Olivar a la empresa Cocerco Ltda., por la suma de \$249 millones y fracción; firma Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística.

Documento N° 380 (informe técnico de evaluación N° 866, de 13 de septiembre de 2012, proyecto reposición Tenencia El Olivar): II. Oferentes: constructora Alerco Ltda., constructora Olga Garfias Fuentes, constructora CGM Ltda., constructora Cocerco Ltda., y empresa constructora FEALFRA SPA; recomendación y sugerencia: por cumplir todos los requisitos exigidos en las bases de la licitación, firman Francisco Socías, Parraguez Robles, Isabel Ojeda

Palma y VºBº Christian Patricio Bustos Morgado, jefe de área de gestión y coordinación de proyectos; “RPR”

Documento Nº 381: Resolución Exenta Nº 601, de 19 de junio de 2012, proyecto Reposición Retén La Mina, licitación pública 3172-33-LP12; Considerativa: a) de acuerdo con el acta de apertura sobres se presentaron las empresas GMPG Ingeniería y Construcción Ltda., constructora CGM Ltda., constructora Alto Sud Ltda.; en la evaluación jurídica se constató que ninguno de los oferentes acreditaba la categoría mínima requerida en las bases; a.3) se solicitó a todos los oferentes acreditar la categoría exigida, lo que no aconteció; b) se estimó, por tanto, que ninguno cumple con los requisitos de las bases, y se resuelve declarar desierta la licitación reposición Retén La Mina; firma Carlos Carrasco, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Logística (subrogante);

Documento Nº 382: Informe técnico de evaluación Nº 466, proyecto Reposición Retén Bajos de Lircay, 5 de junio de 2012; licitación pública 3172-34-LP12; II.- Oferentes: Construcciones e Ingeniería Torrejón, Alto Sud Ltda., CGM Ltda., Nogal Ltda., Proas Ltda., GMPG Ingeniería y Construcción Ltda.; no hubo empresas rechazadas en la apertura, pero si administrativamente porque las empresas Altosud y CGM no se encuentran inscritas; conclusiones y recomendación: se sugirió la adjudicación a la empresa Proas Ltda.; puntaje obtenido 104; firman: Francisco Socías y Gutiérrez Salazar, arquitectos, Parraguez Robles, ingeniero, Isabel Ojeda Palma, abogado; VºBº y firma de Christian Bustos Morgado, jefe de área de coordinación y gestión de proyectos.

Documento Nº 383: Res Exenta 592, 18 de junio de 2012, adjudica licitación pública 3172-34-LP12, proyecto Retén Bajos de Lircay; considerativa: a) como consta en la apertura sobres las empresas Nogal Ltda., GMPG Ingeniería y Construcción Ltda., Alto Sud Ltda., Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda., Proas Ltda. y CGM Ltda.; a.2) durante la evaluación jurídica se constató que Alto Sud, GMPG Ingeniería y Construcción, CGM y Nogal no acreditaban la categoría exigida en las bases en ninguno de los registros autorizados para ello, lo que determinó su eliminación del proyecto; a.3) pasaron a la fase siguiente la empresa Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda y la sociedad Proas Ltda., y se adjudicó la licitación a la empresa Proas Ltda., firma: Carlos Carrasco, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Logística (suplente).

Documento Nº 384: Informe técnico Nº 465, reposición Tenencia Reina Luisa; licitación pública 3172-28-LP12: II. Oferentes: Constructora e Ingeniería Torrejón, Alto Sud , CGM Ltda., Ricardo Fernández Gamboa Ltda.; rechazadas en la apertura de sobre: no hubo; rechazadas administrativamente: Alto sud y CGM por no encontrarse resueltas las inscripciones conforme artículo 13 del DS Nº 294, no pudiendo acreditarse la categoría del registro y el tipo de obra que podrían adjudicarse; conclusión: se sugirió la adjudicación a la empresa Constructora e Ingeniería Torrejón; puntaje obtenido:102; firman: Francisco Socías Vargas y Fabián Gutiérrez, Parraguez, Isabel Ojeda Palma, VºBº con firma Christian Bustos Morgado, jefe de área de coordinación y gestión de proyectos;

Documento Nº 385: Resolución Exenta Nº 593, de 18 de junio 2012, licitación pública 3172-28-LP12, reposición Tenencia de Carabineros Reina Luisa (Parral); considerando: a) conforme consta del acta apertura hubo cuatro (4) oferentes: CGM Ltda., Alto Sud , Constructora e Ingeniería Torrejón y Ricardo Fernández Gamboa Ltda; a.2) en la evaluación jurídica se constató que las empresas CGM Ltda. y Alto sud Ltda. no acreditaban la categoría requerida en los registros dispuestos para ello; a.4) sólo paso a evaluación técnica la empresa Constructora e Ingeniería Torrejón; resolutivo: se sugirió adjudicar el proyecto reposición tenencia Reina Luisa a la empresa Constructora e Ingeniería Torrejón; firma: Carlos Carrasco, Director Nacional de Logística, subrogante;

Documento Nº 259: cobro de multas proyecto reposición Retén Villa Ortega; Oficio Nº 1.157, fecha ilegible, Departamento de Cuarteles a empresa CGM Ltda.; REF: contrato de 16 de octubre de 2012 entre Fisco-Carabineros de Chile y la empresa constructora CGM Ltda.: conforme a los antecedentes y el informe emitido por el ITO Francisco Pizarro Dasso, se ha verificado que ha incumplido con el plazo de entrega de la obra, fijado para el 16 de octubre de 2012; en consecuencia esa empresa debe pagar la multa al mes de junio del presente, correspondiente a 12 días corridos, \$5.211.050, monto que deberá ser pagado con vale vista bancario a nombre de Carabineros de Chile; firma y pie de firma Cristian Gutiérrez Martínez; en caso de no pago dentro de diez (10) días hábiles, se procederá al pago de acuerdo a las retenciones de cada estado de pago o en su defecto con la boleta de garantía respectiva; firma Christian P. Bustos Morgado, jefe subrogante, Christian Gutiérrez Martínez; anexo: cálculo de multa: fecha recepción provisoria de la obra 7 de junio 2013; fecha de subsanación 17 de junio

2013; fecha de subsanación con observaciones 19 de junio de 2013; 18 de junio sin reparación; 19 de junio de 2013 fecha de subsanación efectiva; firma Francisco Pizarro Dasso e Isidro Martínez Bacigalupo;

Documento N° 260: pago de multas CGM; REF: Resolución Exenta precedente 2 de agosto 2013; Oficio interno de L1 a L8, número N° 1.183: adjunta vale vista por cobro de multa \$5.211.050; firma Félix Mauricio Flores Santis; anexo: copia del vale vista, anverso razón de pago, beneficiario, RUT 76.915.890-1, tomador CGM; reverso: monto y fecha, 6 de agosto de 2013, pagadero a la vista.

Documento 356: Tabla N° 12, correspondiente al juicio de cuentas de la Contraloría General de la República, rol expediente 40-2016.

Documento N° 571: correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2013; De: oficios@vtr.cl, responde Oficio N° 3164, de causa RUC 1610006643-3; Christian Patricio Bustos Morgado y César Orlando Rojas Gaete no registran servicios VTR, por lo tanto no hay correspondencia asociados;

Documento N° 572: Libro Proyecto de Infraestructura de Dirección General de Santiago, Carabineros de Chile, 2 de marzo 2011; pág. 24, 2.3: contratos que inician procesos en enero de 2011; 3.1, sectoriales 2007-2009: página 26, 2.4; página 33, 3.2. A solicitud de la fiscalía se incorporan las siguientes páginas 26, tenencia el Olivar (N°4), pag. 26, retén Pelluhue (N°7), pág. 27, retén Gualleco (N° 11), pág. 33, retén Lontue, pág. 31, retén Itahue, pág. 27, retén Santa Ana de Lobos, pág. 27, retén Coronel del Maule, pág. 27, retén Estación. Se deja constancia que los proyectos reposición retenes Puente Negro y La Mina, no se incluyen en el documento “Libro Proyectos de Infraestructura de Dirección General de Santiago, Carabineros de Chile, de fecha 2 de marzo 2011.

Documento N° 11: copia de contrato de compraventa y mutuo hipotecario, celebrado el 31 de mayo de 2013, entre inmobiliaria BRIMAC y Francisco Pizarro y Patricia Quijada Encalada, precio UF 3.153, se paga: 1) equivalente en pesos UF 2.575, que Banco Estado entrega al vendedor, y 2) equivalente en pesos UF 577,6400 que el comprador paga en dinero efectivo al vendedor.

Documento Nº 13: 1) Boleta de depósito moneda nacional a cuenta corriente, 31 de julio 2012, \$7.150.000, titular inmobiliaria BRIMAC, depositado por Francisco Pizarro; 2) ídem, 3 de abril de 2013, \$6.000.000, depositado por Francisco Pizarro, abono dpto. 904.

Documento Nº 564: certificado de inscripción de dominio vigente del CBR de Santiago, 17 de julio de 2013;

Documento Nº 388: Anexos de informe pericial criminalístico: 1) Certificado de anotaciones vigentes en el Registro de Vehículo Motorizados, PPU FBCB.29-5, Chevrolet cruze II, AT, año 2013, color plateado-plata metálico; actual propietario Miguel Ángel Fuentes Castro, adquirido el 11 de junio de 2014; anterior propietario Francisco Pizarro Dasso, quien lo adquirió el 28 de septiembre de 2012; 2) Informe patrimonial de Patricia Quijada Encalada: adquiere vehículo nuevo el 26 de junio de 2014, PPU GBHS 78, station wagon, marca Suzuki, color blanco perla:

Documento Nº 18: Agrosuper informa y acompaña la totalidad de los contratos vigentes: 1ª línea: RUT 76.126.603-6, Sociedad Comercial Sunpack Ltda., inicio 1º de abril 2007, fecha término contrato, vigente; contrato como vendedor comisionista y transportista independiente; 2ª línea: contrato de transportes con Pedro Vargas Silva; fecha de inicio y de término; vendedor comisionista y transportista independiente; 6ª línea: RUT José Vargas Silva, inicio de contrato 1º de febrero de 2006, fecha de término 1º de julio de 2008. Firma: Rafael Prieto Castillo, pp Agrosuper S.A;

Documento Nº 19: Agrosuper, solicitud de trabajo de Claudio Sandoval, jefe administrativo, sucursal Viña, 2 de mayo 2007; Agrosuper y Suspecta celebran dos contratos; firma aprobación solicitante Mario Sandoval, Claudio Sandoval, Felipe Argos, Fuentes Silva, 10 de mayo de 2007 y 11 de mayo de 2007, respectivamente;

Documento Nº 20: impresión consulta tributaria contribuyente, 8 de mayo de 2007, José Vargas Silva, RUT 76.126.630-6, Sociedad Comercial Sunpack Ltda.; fecha de inicio de actividades 22 de marzo de 2007; otras actividades empresariales “ncp” y de servicios personales “ncp”;

Documento Nº 21: contrato prestación de servicios entre Agrosuper y SuSPAct Ltda.: “contrato de prestación de servicios a comisión como vendedor transportista independiente; Sunpack es una empresa que realiza venta y transporte de mercaderías; Agrosuper encomienda a Sunpack Ltda., quien acepta vender por cuenta de la primera, productos distribuidos por Agrosuper; personería de Vargas Silva consta en escritura pública de 10 de junio de 2004, notario Eduardo Bravo Ubilla; tres (3) anexos de contrato;

Documento Nº 22: carta de 1º de abril 2007, de José Vargas Silva, a Agrosuper: solicita devolución del dinero del fondo de garantía depositado en el Banco Santander, atendido que esa empresa tomó un contrato de seguro colectivo;

Documento Nº 23: contrato de comodato entre Agrosuper y José Vargas Silva por sociedad Sunpack, quien le entrega los siguientes equipos: dos (2) PDA portátil, dos (2) teléfono celular Erickson y una (1) impresora HP, nuevos y sin uso, los que el comodatario recibe en este acto a satisfacción; se extiende en tres ejemplares, uno queda en poder del comodatario;

Documento Nº 24: Memorándum área legal Agrosuper, Rancagua 18 de mayo 2007: remite contratos en copia legalizadas de empresa Sunpack y otras dos empresas:

Documento Nº 25 copia ficha inscripción al rol único tributario y/o declaración de inicio de actividades, RUT 76.126.630-6, fecha ilegible, razón social Sociedad Comercial Sunpack Ltda.; giro, vendedor comisionista, servicio de transporte por carretera, socios José Vargas Silva, 90% capital y utilidades, y Pedro Vargas Silva, 10% capital y utilidades;

Documento Nº 26: constitución sociedad copia escritura 10 de junio 2004, notario público de Valparaíso, comparecen José Mauricio Vargas Silva y Pedro Vargas Silva, exponen: constituyen sociedad responsabilidad limitada, giro venta y transporte por carretera artículos plásticos, razón social Sunpack Ltda., la administración y uso de la razón social corresponderá a José Mauricio Vargas Silva; dos firmas y autoriza notario Ubilla; copia extracto y publicación en Diario oficial de 24 de junio de 2004; María Letelier Feres, CBR y Comercio de Viña del Mar.

Documento Nº 27: contrato prestación de servicios, fecha 1º de abril de 2016, entre Agrosuper y la sociedad comercial Sunpack Ltda., y anexos: ante notario, entre Agrosuper y Sociedad Comercial Sunpack Ltda., se convino contrato comisionista vendedor y transportista independiente, a quien le encomienda vender productos distribuidos por empresas Agrosuper; personerías.

Documento Nº 28: contrato de comodato venta móvil de 1º de diciembre 2015, entre Sunpack y Agrosuper; origen en contrato de prestación de servicios entre las partes, vigente a la fecha: PDA portátil, incluye teléfonos celulares e impresora; personerías.

Documento Nº 29: contrato de requerimientos del sistema de gestión de salud y seguridad para empresas contratistas, 1º de diciembre 2015, entre Agrosuper y Sociedad Comercial Sunpack Ltda., representada por José Mauricio Vargas Silva, se anexa al contrato lo siguiente:

Documento 30: copia de contrato vendedor comisionista y transportista independiente: 1º de agosto de 2009, entre Agrosuper y Pedro Arturo Vargas Silva EIRL, representada por Pedro Vargas Silva: 1) Pedro Arturo Vargas Silva EIRL giro comercial como transportista independiente; 2) Agrosuper encomienda a Pedro Arturo Vargas Silva EIRL, como vendedor comisionista transportista, vender por cuenta de Agrosuper productos de la empresa; Anexo: requerimiento de la misma fecha: contrato sobre responsabilidad del contratista por accidentes del trabajo; Anexo: 1º de agosto de 2009, fijan condiciones especiales de las ventas a comisión; poder especial de Pedro Arturo Vargas Silva EIRL a empresa Agrosuper para contratar con Liberty Seguros garantía de cumplimiento del contrato;

Documento 31: Memorándum de 30 de abril de 2010: A: Cristian Saavedra; De: Eloísa Kuchel; “adjunto para registro dos ejemplares de contrato, “entregar un ejemplar al contratista” y también el reglamento referente al consumo de drogas.

Documento Nº 32: impresión de sistema Agrosuper de solicitud de contrato, 23 de octubre 2009; asignar flujo de ventas a Hijuelas a la empresa Pedro Vargas Silva EIRL.

Documento Nº 33: copia de escritura pública, notario Rafael Guillermo Tejeda, constitución de la empresa de Transportes Pedro Arturo Vargas Silva EIRL y/o Transportes Pedro Vargas Silva, 26 de junio de 2009: comparece Pedro Arturo Vargas Silva, quien declara que constituye empresa individual de responsabilidad limitada, transporte de mercaderías por carretera, vendedor comisionista y cualquier actividad que disponga el constituyente; administración corresponderá a Pedro Vargas Silva. Publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución de la empresa, 6-07-2009; actividad económica: carga con vehículos propios o arrendados.

Documento Nº 365: certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados (en lo sucesivo, RVM): JJ6819-4, semirremolque 2014, marca Rodoteck, propietario Asesorías y Servicios Logísticos y Transportes BM Ltda., RUT 76.235.695-3, fecha de adquisición 30 de octubre de 2013; repertorio Buin; pág. 2: no tiene limitaciones vigentes a la fecha incorporadas al registro;

Documento Nº 367: certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM: JN189-1, semirremolque, año 2013, marca Santander, propietario Asesorías y Servicios Logísticos y Transportes BM Ltda., RUT 76.235.695-3, fecha de adquisición 7 de junio de 2013; repertorio Paine; limitaciones al dominio: a la fecha no tiene anotaciones incorporadas en el registro;

Documento Nº 368: certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM: JN 1893-K, semirremolque 2013, marca Santander, fecha 7 de junio de 2013, repertorio Paine; sin limitaciones al dominio vigentes incorporadas al registro;

Documento Nº 388 (anexo Nº13, 4 páginas): cuadro demostrativo de licitación de cuarteles años 2011, 2012 y 2013, administrados por Christian Bustos Morgado:

a) Hoja 1, año 2011, inaugurados 36, total \$17.372.431.099; detalle:

Retén Domeyko, adjudicataria: empresa Ricardo Fernández Gamboa

Retén Inca de Oro; adjudicataria: empresa Constructora MNM Ltda.

Retén Tongoy; adjudicatario: no se consigna el nombre

Escuela de Fronteras; adjudicatario: no se consigna el nombre

Retén Valle Hermoso; adjudicatario: Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Zapallar; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Las Cañas, adjudicatario: no se señala el nombre

Comisaría Pedro Aguirre Cerda, adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Loica; adjudicatario: empresa FEALFRA EIRL

Retén San Pedro de Alcántara; no se señala el nombre

Retén Empedrado; adjudicatario: empresa GMPG y Construcción Ltda.

Retén Putú; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Cachapoal; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Minquihue; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Portezuelo; adjudicatario: empresa Alto Sur

Retén Río Puelo; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Los Jazmines; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Isla Tejas, adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Rubén Mogollones; adjudicatario: no se señala el nombre

SIPOLCAR Valdivia, adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Puerto Nuevo; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Catamupún; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Chacao; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Chiloé; adjudicatario: no se señala el nombre

Subcomisaría Rahue; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Eleuterio Ramírez; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Cancuta; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Pampa Alegre; adjudicatario: no se señala el nombre

5ª Comisaría de Puerto Montt; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Panitao; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Reloncaví; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén Puerto Chacabuco; adjudicatario: no se señala el nombre

Retén puerto Viejo; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia San Sebastián; adjudicatario: no se señala el nombre;

b) Hoja 2, año 2012, proyectos inaugurados 36, monto total de inversión \$9.963.160.505); detalle:

Tenencia Reñaca Alto, adjudicataria: Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda.

Habitabilidad dormitorios Fuerzas Especiales; adjudicatario: sin nombre

Retén Pintué; adjudicatario: Constructora Alerco Ltda.

Retén Angostura; adjudicatario: Constructora Nogal Ltda.

Retén Hucarhue; adjudicatario: Constructora Alerco Ltda.

Retén Zúñiga; adjudicatario: Constructora Nogal Ltda.

Retén Pocilla; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Sauzal; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Reten Convento, adjudicatario: Ingeniería y Constructora Encomerc Ltda.

Tenencia San Rafael, adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Colín, adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Corinto; adjudicatario: Constructora e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Botalcura; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Tenencia Rauco; adjudicatario: Sociedad Vallejos y Garfias Ltda.

Reposición Agua Fría (F), adjudicatario: Constructora Nogal Ltda.

Retén Buena Paz, adjudicataria: Constructora Nogal Ltda.

Retén Radal (F); adjudicataria: Constructora Nogal Ltda.

Retén Melozal; adjudicataria: Constructora FEALFRA EIRL

Retén Putagán; adjudicataria: Constructora Torre y Compañía Ltda.

Retén Quella, adjudicataria: Constructora Proas Ltda.

Retén Huerta del Maule; adjudicatario: GMPG Ingeniería y Construcción Ltda.

Retén Carampangue; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

2ª Comisaría de Talcahuano; adjudicatario: no se señala el nombre

Tenencia Quillón; adjudicatario: Sociedad Vallejos y Garfias Ltda.

Retén Vegas de Itata; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Quinchamalí; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Santa Fe; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa

Retén El Álamo; adjudicatario: Julio Riquelme Rodríguez

Retén San Carlos de Purén; adjudicatario: Julio Riquelme Rodríguez

Retén Púa; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Vivanco; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Mantihue; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Niebla; adjudicatario: Comercial y Servicios Cocerco Ltda.

Retén Unucapa; adjudicatario: Comercial y Servicios Cocerco Ltda.

c) Hoja 3, año 2013, proyectos inaugurados 35, monto inversión \$12.955.515.911;

Tenencia San Esteban; adjudicatario: sin nombre

Retén Champa; adjudicatario: Constructora Alerco Ltda.

Retén Alto Jahuel; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Ltda.

Retén Linderos; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Ltda.

Construcción Depósito de Armas; adjudicatario: sin nombre

Retén Puente Negro; adjudicatario: Comercial y Servicios Cocerco Ltda.

Tenencia El Olivar; adjudicatario: Comercializadora y Servicios Cocerco Ltda.

Retén Camarico; adjudicatario: Construcciones e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Queri; adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Mariposa; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Bajos Lircay; adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Las Lomas; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Ltda.

Retén Paso Nevado; adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Reina Luisa; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Ltda.

Retén Estación; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Coronel del Maule; adjudicatario: Constructora FEALFRA SPA

Retén Itahue; adjudicatario: Constructora FEALFRA SPA

Retén Lontué; adjudicatario: Constructora FEALFRA SPA

Tenencia Hualañé; adjudicatario: Constructora FEALFRA EIRL

Retén Peyuhe; adjudicatario: Constructora Alto Sur

Retén Santa Ana de Lobos; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Hualleco; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa, FER y FER

Retén Tihua (finalización); adjudicatario: sin nombre

Retén Isla Santa María; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Rucapequén; adjudicatario: Germán Fisher Valdés

Retén Polcura; adjudicatario: Constructora Alto Sur Ltda.

Retén Doñinco; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Esperanza; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Nueva Braunau; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa

Retén Río Pescado; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa,

Tenencia Ensenada; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa,

Retén Ovejería; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Correntoso; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa,

Prefectura Osorno; adjudicatario: Constructora Denco Ltda.

Retén Villa Ortega; adjudicatario: Constructora CGM Ltda.

d) Hoja 4, Cuarteles en ejecución año 2013: 22, monto de inversión \$12.062.893.321

Consultoría Subcomisaría La Portada adjudicatario: Cristian Gijzen Cifuentes,

Asesoría Comisaria Coquimbo; adjudicatario: G y Construcciones Apoquindo Ltda.

Retén Quintay; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa,

Retén La Islita; adjudicatario: Constructora FEALFRA SPA

Subcomisaria Lampa; adjudicatario: Constructora EFC Ltda.

24ª Comisaria Melipilla; adjudicatario: Constructora Vasco FA

Subcomisaría San Francisco Mostazal; adjudicatario: Constructora FEALFRA SPA

Retén Comalle; adjudicatario: Comercial y Servicios Cocerco Ltda.

Retén Morza; adjudicatario: Sociedad Vallejos y Garfias Asociados

Retén La Puerta; adjudicatario: Sociedad Vallejos y Garfias Asociados

Retén Iloca; adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Santa María de Queri; adjudicatario: Constructora Torres y Cía. Ltda.

Retén La Mina; adjudicatario: Sociedad Valejos y Garfias Asociados

Retén Pillanlenbun; adjudicatario: Constructora Proas Ltda.

Retén Curaco; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Retén Mininco; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa

Ampliación Tenencia Licanray; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa

Retén Choshuencho; adjudicatario: Ricardo Fernández Gamboa

Retén Neltume; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Retén Coñaripe; adjudicatario: Juan Pizarro Yévenes

Tenencia Liquiñe; adjudicatario: Construcción e Ingeniería Torrejón Ltda.

Subcomisaría de Quellón; adjudicatario: Constructora Claro Vicuña SA

e) Cuadro resumen: 36 proyectos inaugurados año 2011, inversión \$17.372.431.099, finalizados; año 2012, 34 proyectos inaugurados, inversión \$9.963.160.505, finalizados; año 2013: a) 35 proyectos inaugurados, inversión \$12.955.515.911, finalizados; b) 22 proyectos en ejecución, inversión \$12.062.893.321. Total de inversión años 2011, 2012 y 2013: \$52.354.000.836.

Documento Nº 437, constitución de sociedad asesorías, servicios logísticos y de transportes limitada o servicios logísticos BM Ltda.; Viña del Mar, 26 de diciembre de 2012, comparecen Rodrigo Antonio, Christian Patricio y Nelson Andrés Bustos Morgado, exponen: que han convenido constituir una sociedad de responsabilidad limitada; razón social: Asesorías, Servicios Logísticos y de Transportes Ltda. o Servicios Logísticos BM Ltda.; objeto: asesoría en transportes propios o ajenos, arriendo, etc., y todo lo relacionado con logística y transporte; administración, representación y uso de razón social corresponderá a Nelson Bustos Morgado; tres firmas; 3 de enero de 2013, Eliana Gervasio Zamudio, notario público de Viña del Mar.

Documento Nº 409: certificado de inscripción de inicio de actividades de Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda.; fecha de inicio: 9 de enero 2013; descripción: asesoría y servicios de transporte, alquiler de otros medios de transporte, asesoría empresarial y otro tipo de gestiones.

Documento 410, operaciones de servicios de venta de la empresa Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda. (58 páginas): Página 1, primer renglón: facturación electrónica 31-12-2013, \$2.421.650; último renglón: factura electrónica 8-7-2013, monto \$2.207.118, RUT empresa 86.359.300-k. Total facturado año 2013: \$118.693.184; Páginas 2 y 3: facturación 31-12-2014, año 2014, \$4.771.900; finaliza página 3, última línea, nota de crédito electrónica 22-01-2014, -\$214.200. Total facturado año 2014: \$286.492.213; Páginas 4, 5 y 6, facturación electrónica año 2015; primera línea pág. 4: emisión de factura electrónica 31-12-2015, monto \$3.075.150; página 6, último renglón: factura electrónica emisión 13-1-2015, monto \$2.810.304; Total facturado año 2015: \$418.541.134; Páginas 7, 8, 9 y 10: facturación electrónica año 2016; primera línea: factura electrónica emisión 31-12-2016, monto \$7.080.500; última línea (pág. 10): nota de crédito electrónica 6-1-2016, monto \$-357.000. Total facturado año 2016: \$451.091.165; Páginas 11, 12 y 13: facturación 2017; primer renglón: factura electrónica emisión: 31-12-207, monto \$21.066.570; último renglón (pág. 13): nota de crédito electrónica 3-1-2017, monto \$-220.150. Total facturado año 2017: \$413.300.885; Páginas 14, 15 y 16: facturación electrónica año 2018, primer renglón: factura electrónica emisión 29-12-2018, monto \$2.466.275; último renglón: factura electrónica emisión 5-1-2018, monto \$2.748.900. Total facturado año 2018: \$373.539-072; Página 17 a 58: libros de venta electrónicos de Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda.; página 17: RUT 76.235.695-3, período tributario 2013-07; última página 22: período tributario 2013-12; Páginas 23 a 34, libros de venta Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda.; período tributario 2014-1; tipo de operación: venta; factura electrónica: total documentos 3; nota de crédito electrónica: total documentos 1. Libro termina en la página 34. Libro de venta período tributario 2014-12, tipo de operación: venta; factura electrónica, total documentos 8;

A solicitud de la fiscalía se incorporó la siguiente información: primera factura N° 61, fecha abril de 2014, emitida a nombre de Sociedad Sunpack Ltda., por 2 millones de pesos y fracción.

Documento 412: anexo peritaje contable: contrato de arrendamiento de tracto camión entre Nelson Bustos Morgado y José Mauricio Vargas Silva; 10-12-2012, Nelson Bustos Morgado entrega en arriendo a Jose Mauricio Vargas Silva un tracto camión, color blanco, año 2007, diesel, placa patente WK6414-3; destino: transporte de productos dentro de Santiago y también fuera de éste, previa

autorización del arrendador; inicio 10-12-2012; indefinido; renta \$2.000.000 mensuales; firman y fijan domicilio en Viña del Mar.

Documento Nº 413: anexo peritaje (de Luis Villalobos); 7 páginas de reportes de trabajo; a) pág. 1: alimentos Doñihue, transportes Vargas, placa patente WK6414, destino Viña, producto cecinas, 2.023 kilos, 24-1-2013; fecha contrato 25 de mayo 2011; b) pág. 2: alimentos Doñihue, 25 de mayo 2011, transportes Vargas, placa patente WK6414, destino Viña, fecha 15-2-2013, cecinas, kilos totales 4.497,72 kilos; c) página 3: 25-mayo 2011, Doñihue, destino Viña, placa patente WK6414, 27-03-2013, cecinas, kilos despacho 5.387,6 kilos; *bajo la patente aparece escrita la sigla JN-1505*; d) página 4: alimentos Doñihue, 25 de mayo 2011, transportes Vargas, placa patente WK6414, *bajo ésta la sigla JN1505*, destino Viña 11-04-2013; cecinas, kilos 3.500,215; e) página 5: transporte Vargas, placa patente WK6414, *bajo ésta la sigla JC-1505*, destino Viña, 20-05-2013, cuadro: cecinas, total kilos 2.800,805; f) página 6: transportes Vargas, placa patente WK6414, *bajo ésta la sigla JN – 1505*; destino, Viña, 19-06-2013; cuadro: cecinas, total kilos 4.616,40; g) página 7: transporte Vargas, placa patente WK6414, *bajo esta la sigla JN-1505*; destino Viña, 15-07-2013; cuadro: cecinas, total kilos 4.276,75;

Documento Nº 414: acta de entrega de cheque 2541574, cuenta titular Christian Bustos Morgado 58908-10, Banco de Chile, \$8.000.000; 29-12-2012, Nelson Bustos Morgado hace entrega del cheque que se detalla a José Vargas Silva, con el fin de adquirir un camión de transporte, cuyo detalle del documento bancario es el siguiente: 2541572, titular Christian Busto Morgado, cuenta corriente 58908-10, \$10.000.000;

Documento Nº 415: Informe Dicom de José Vargas Silva: página 1) fecha 24-06-2016, 11.620.329-4, José Vargas Silva, total impago, \$5.478; nivel de riesgo 300;

Documento Nº 416: contrato de arriendo entre Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda. y Sunpack Ltda., notaría Tavolari; enero 2017, entre ambas empresas, representada la primera por Nelson Bustos Morgado, y la segunda por Pedro Arturo Vargas Silva; objeto del contrato: a) camión Chevrolet, placa patente HXRK79; b) camión Chevrolet, placa patente GRTV91; c) camión Chevrolet, placa patente GRTV90; d) camión Chevrolet, placa patente HXRK80; e) camión

Chevrolet, placa patente GSBF84; y f) camión Chevrolet, placa patente GSPF82; renta de arrendamiento: \$7.021.000 mensuales; dos firmas;

Documento N° 417: contrato de arrendamiento entre Servicios Logísticos BM Ltda., representada por Nelson Bustos Morgado, y la empresa José Vargas Silva EIRL, representada por José Mauricio Vargas Silva; firmas; fecha 24 de enero 2019; bienes arrendados: a) camión Chevrolet, placa patente HXRK79; b) camión Chevrolet, placa patente GRTV91; c) camión Chevrolet, placa patente GRV90; d) camión Chevrolet, placa patente HXRK80; e) camión Chevrolet, placa patente GFPF84, f) camión Chevrolet, placa patente GFPF.82; renta de arrendamiento \$7.021.000 mensuales.

Documento N° 423; Santa Etelvina SA., facturas 0180, 0181, a Servicios Logísticos BM Ltda.

Documento N° 124: factura N° 30, estado de pago N° 1, 27 de diciembre de 2012.

Documento N° 447: solicitud de primera inscripción semirremolque.

Documento N° 456: solicitud de primera inscripción, Paine, 10 de junio de 2013, marca Santander, semirremolque, año 2013, color blanco gris; adquirente: Asesorías, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda.

Documento N° 486: Kovacs; factura N° 2127676; Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., 20 de agosto de 2014, marca Chevrolet, año 2014, color blanco, valor total \$ 28.197.050; pago con crédito GMAC, 48 cuotas, 22 millones y fracción, y con 5 millones y fracción al contado.

Documento N° 491: 2127675, Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., 20 de agosto de 2014, camión Chevrolet, 4 x 2, año 2014, color blanco, valor total \$28.197.050; forma de pago, crédito GMAC 48 cuotas, \$22.557.640, y \$5.639.410 al contado.

Documento 495: contrato de arrendamiento con opción de compra: entre Patagonia Leasing y Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM

Ltda., representada legalmente por Nelson Andrés Bustos Morgado; bien arrendado: un camión Chasis, marca Chevrolet, modelo NQR19, dos camiones Chasis, marca Chevrolet; firmas de Rodrigo y Nelson Bustos Morgado por los arrendatarios;

Documento N° 496: facturas Leasing Patagonia correspondientes a 48 cuotas de Leasing con opción de compra; factura electrónica N° 52499, Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., pago arriendo operación 1900, cuota 29 de 49, \$2.292.928, IVA incluido; tres últimas facturas números 47, 48 y 49; factura electrónica; pago arriendo operación 1900, octubre, cuota 47/49, \$2.838.094, IVA incluido, 18 de diciembre de 2012; cuota 48/49, factura electrónica N° 62505, Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., fecha de emisión 18 de diciembre de 2018, pago arriendo operación 1900, mes de noviembre, \$2.384.953, intereses \$134, total \$2.385.087 neto, IVA \$453.166, total \$2.838.253; cuota 49/49, 31 de enero 2019, pago arriendo operación 1900 mes de diciembre, \$2.383.722, mora \$67, neto \$2.383.789, IVA \$452.920, total \$2.836.570;

Documento N° 501: factura N° 2231177, Kovacs, cliente Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., 31 de mayo de 2016; camión marca Chevrolet, neto \$19.327.731, equipo de frío H500 carrocería térmica (1), neto 8.924.000; forma de pago \$6.000.000, cheque N° 7675991, Banco Chile, 26-03-2016, \$33.619.560 IVA incluido;

Documento N° 503: factura electrónica Kovacs; Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., factura electrónica N° 2231178, 31 de mayo 2016, camión marca Chevrolet y equipo de frío carrocería térmica; forma de pago: \$6.000.000, cheque 7675991, Banco Chile, 26-05-2016, total con IVA \$31.803.620;

Documento N° 531: Kovacs SPA, factura electrónica N° 2367619, cliente Sres. Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., emitida el 28 de febrero 2018, camión Chevrolet, \$18.184.980, carrocería térmica equipo frío, total IVA incluido \$30.898.326;

Documento 533: protocolización contrato de arrendamiento BBVA Chile a Asesorías, Servicios Logísticos y Transportes BM Ltda.; 3 de abril de 2018, comparece Christian Aballay Valenzuela, a cuyo requerimiento se deja constancia de la protocolización del contrato de arrendamiento entre los citados, 14 de marzo de 2018; bien arrendado camión Chevrolet NPR 816, incluye carrocería térmica con paneles, 14 de abril de 2021, renta de arrendamiento 38 cuotas, primera cuota \$3.894.447, más IVA; segunda \$756.159 más IVA, cada una, mensuales, primer vencimiento 14 de marzo de 2018; firman: Nelson Bustos Morgado, por Asesoría, Servicios Logísticos y de Transportes BM Ltda., y Pablo Bustamante y otros, por BBVA; anexo y declaración jurada de Nelson Bustos Morgado;

Documento Nº 538: certificado de fecha 8 de marzo de 2022, Carabineros de Chile, Dirección de Sanidad; licencias médicas de Christian Bustos Morgado; 1ª) autoriza licencia médica por CMC, 12 días, desde el 22-02-2012 al 4-03-2012; 2ª) autoriza licencia médica CMC, 20 días, desde el 2-2-2012 hasta el 21-2-2012, fecha licencia 1-2-2012, accidente del trabajo o del trayecto; 3ª) autoriza licencia por CMC, 20 días, 13-1-2012 hasta el 1-2-2012, fecha licencia 11-1-2012, accidente del trabajo o de trayecto; 4ª) autoriza licencia por CMC, 20 días, desde 24-12-2011 al 12-1-2012, accidente del trabajo o de trayecto; 5ª) autoriza licencia por CMC, 20 días, desde el 4-12-2011 hasta el 23-12-2011, fecha licencia 3-12-2011, accidente del trabajo o del trayecto; 6ª) autoriza licencia por CMC, 20 días del 14.-11-2011 hasta el 3-12-2011, fecha 17-11-2011, accidente del trabajo o del trayecto; 7ª) autoriza licencia por CMC, 20 días, desde el 25-10-2011 hasta el 13-11-2011, fecha 24-10-2011, accidente del trabajo o de trayecto; 8ª) autoriza licencia por CMC, 20 días, desde el 5-10-2011 hasta el 24-10-2011, fecha licencia 6-10-2011, accidente del trabajo o de trayecto; 9ª) autoriza licencia CMC, 25 días, desde el 10-09-2011 hasta el 4-10-2011, fecha licencia 13-09-2011, accidente del trabajo o de trayecto. Mayor subrogante y jefe de contraloría médica certifica que la relación de licencias médicas corresponde a las licencias registradas en los registros de la institución.

Documento Nº 551: certificado: General Motors Financiera Chile S.A., 23 de abril de 2019, certifica que Asesorías, Servicios Logísticos y Transportes BM Ltda., mantuvo un crédito por la compra de un camión marca Chevrolet, modelo NQR, placa patente GRTV90-7, otorgado por \$23.253.982, más intereses, 48 cuotas, la 1ª con vencimiento al 14-09-2014;

Documento Nº 577: infografías Cuarteles Dirección General de Carabineros, Revista de Carabineros de Chile; página 2: 44 mil y fracción funcionarios, 195 tenencias, 386 retenes.

En cuanto al hecho 2:

2°.- Otros medios de prueba: Registro de audio de cuatro audiencias de formalización y de reformalización: Nº 1: Registro de audiencia de formalización de 28 de septiembre de 2016, 8º Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2168-2014; Nº 2: Registro de audiencia de reformalización, 9 de marzo de 2018, 8º Juzgado de Garantía Santiago, RIT 2168-2014; Nº 3: Registro de audiencia de reformalización RIT 2168-2014, de 25 de mayo de 2018, 8º Juzgado de Garantía de Santiago; Nº 4: Registro de audiencia de reformalización RIT 2168-2014, de 28 de septiembre de 2018, 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

UNDECIMO: Que, la defensa del acusado Pizarro rindió la prueba que a continuación se indica:

Documento Nº 5: documento electrónico ordinario NCU 5975648, de 24 de junio de 2012; De Andrea Campusano para Carla Salinas, informativo para CPR Francisco Pizarro Dasso, Christian Bustos Morgado, Juan Socías Vargas; solicita autorización y comisión de servicios pasajes aéreos, para 24 de julio de 2012, visita a terreno Villa Ortega, Lago Castor, Coyhaique Alto y otros. Firma Andrea Campusano Muñoz, arquitecto.

Documento Nº 10: documento electrónico ordinario, NCU 8377313 de 11 de noviembre de 2012; De: Teniente Carla Salinas Jofré, encargada de inventarios Departamento L1, para L1; informativo Francisco Pizarro Dasso, Héctor Salamanca Riquelme, Christian Bustos Morgado; asunto: fiscalización de obras, constatación de reparación definitiva observaciones Retén El Blanco, Puesto Viejo, verificación de estado de avance de trabajos Retén Villa Ortega para emisión de estados de pago, y otros fines, 13 de noviembre de 2012, desde el 19 al 23 de noviembre de 2012; solicita comisión y pasajes aéreos.

Documento Nº 12: NCU 8466083, de 16-11-2012, de Departamento de Cuarteles L1; Para: Héctor Salamanca, Francisco Pizarro, Teniente Carla Salinas;

informativo: Juana Campos, Christian Bustos; 17-11-2011; en relación a su documento se comunica haber obtenido pasajes aéreos para Francisco Pizarro Dasso, Héctor Salamanca y otros; autoriza Félix Flores Santis, jefe del Departamento de Cuarteles;

Documento Nº 13: documento electrónico ordinario NCU 8749160, de 29-11-2012, de Christian Bustos Morgado; Para: CPR Francisco Pizarro; informativo; caldera Villa Ortega: se informa que el 10-11-2012, en visita a terreno, el oficial Víctor Soler Alarcón constató la ausencia de caldera, la que es esencial para el funcionamiento del Retén atendidas las condiciones climáticas de la zona; jefe del Área de Coordinación y Ejecución del Departamento de Cuarteles, Christian Bustos Morgado.

Documento Nº 14: documento electrónico ordinario NCU 8926138, de 7-12-2012,

Documento Nº16: documento electrónico ordinario, 12 de diciembre de 2012, NCU 9022390; De: Departamento de Cuarteles L1; Para: CPR Francisco Pizarro; asunto: comisión de servicios a partir del 12 de diciembre de 2012, pasajes aéreos Balmaceda – Santiago 14 de diciembre de 2012.

Documento Nº 898 (prueba documental del ministerio público): lectura íntegra: NCU 9442357, de 2 de enero de 2013, para fiscalizar desde el 8 al 10-1-2013, Villa Ortega, Lago Castor y Coyhaique Alto; De: Francisco Pizarro; Para: subteniente Luis Parra; informativo: Andrea Campusano; asunto: comisión, 2 de enero 2013; ingeniero CPR Francisco Pizarro, en atención a realizar la fiscalización mensual a la XI zona de Aysén, proyectos de reposición Villa Ortega, Lago Castor y Coyhaique Alto, solicita autorizar a Andrea Campusano a realizarla.

Documento Nº 19: documento electrónico ordinario NCU 10250752, de 6 de febrero de 2013, FPS solicita autorización para fiscalización de obras retenes Villa Ortega, Lago Castor y Coyhaique Alto; De: Carla Salinas; A: L1; informativo: Christian Bustos Morgado, Francisco Pizarro Dasso; asunto: comisión de fiscalización proyectos Aysén: se solicita autorizar comisión de servicios desde el 12 al 15 de febrero de 2013, a fin de constatar avance de obras, verificar dificultades y estado de avances, requerir pasajes aéreos, ida 11 de febrero de

2013, regreso 14 de febrero de 2013; Carla Salinas: se repite información precedente.

Documento Nº 20: documento electrónico ordinario NCU 11567612, 4 de abril 2013; de Departamento de Cuarteles L1, para DILOCAR; informativo Héctor Salamanca, Francisco Pizarro, 11ª zona Aysén, gestión financiera, Juana Campos, oficina contabilidad; asunto: revisión y fiscalización obras, sin plazo; autorizar comisión para verificación y revisión cuarteles Villa Ortega, Coyhaique Alto y Lago Castor, 8 de abril de 2013; autoriza Félix Flores Santis.

Documento Nº 21 documento electrónico ordinario NCU 11591617; De: Departamento de Cuarteles L1, A: Gestión Financiera; informativo: Sres. Salamanca, Pizarro y Juana Campos, Oficina de Cont. Presupuestaria; asunto: comisión de servicio a fin de constatar avance obras, verificar dificultades y estado de avances, requerir pasajes aéreos, 5 de abril de 2013, fecha plazo: sin plazo; referencia: tres (3) NCU; contenido: se autorizó comisión de servicios; 8 al 12 de abril los pasajes aéreos;

Documento Nº 22: documento electrónico ordinario NCU 11782986 de 11 de abril de 2013, de Luis Parra a Félix Flores Santis, solicitando autorización para fiscalización de Isla Huar; informativo Christian Bustos Morgado, Reveco, Andrea Campusano, Francisco Pizarro, Félix Flores Santis, Carla Salinas, Juan Salazar (asesor); asunto: comisión de fiscalización; fecha plazo; sin plazo; a fin de verificar en terreno el avance de las obras y participar en reuniones de coordinación región del Maule solicita comisión de servicios a región del Maule y Aysén, en vehículo institucional; obras a fiscalizar: Retén Isla Huar, Retén Santa María, subcomisaría Quillón; fecha estimada 22 al 26 de abril de 2013;

Documento Nº 984 (prueba del ministerio público): documento electrónico ordinario NCU 12637558, fecha 14 de mayo de 2013; De: Departamento de Cuarteles L1; Para: Teniente coronel Christian Bustos Morgado; informativo; gestión financiera, Luis Parra, Francisco Pizarro; asunto: comisión de fiscalización obras Aysén; 21 al 24 de mayo de 2013; unidades a fiscalizar: Lago Castor, Coyhaique Alto y Villa Ortega; por tanto se solicita autorizar a este mando para requerir pasajes aéreos para dichos profesionales.

Documento Nº 23: documento electrónico ordinario NCU 13839127, 28 de junio de 2013, de CPR Francisco Pizarro Dasso para subteniente Luis Parra; informativo: Andrea Campusano; asunto: comisión de fiscalización viernes 28 de junio 2013; fecha plazo: sin plazo; itinerario: 9 al 12 de julio 2013; objetivo: fiscalizar avance obra Retén Isla Huar para tramitar estado de pago y recepcionar las observaciones efectuadas en la recepción provisoria del Retén Santa María;

Documento Nº 27: documento electrónico ordinario NCU 15033976, de 14 de agosto de 2013, de Félix Flores Santis autoriza comisión fiscalizadora Retén Villa Ortega, Tenencia Coyhaique Alto y Retén Lago Castor para verificar el estado de avance de las obras, a cumplir por Francisco Pizarro, Andrea Campusano y Aurelio Zúñiga Rojas, desde el 19 hasta el 22 de agosto de 2013;

Documento Nº 28: documento electrónico ordinario NCU 15461783, de 30 de agosto de 2013, de Félix Flores Santis, autoriza comisión fiscalizadora Isla Huar mes de septiembre, integran comisión Félix Flores Santis, Romina Parraguez, Andrea Campusano y Francisco Pizarro Dasso, desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de septiembre 2013, para verificar el estado de avance de las obras Retén Isla Huar (“inspección avance estado de obras”) y otros; autoriza Félix Flores Santis;

Documento Nº 31: NCU 15634039 de 5 de septiembre de 2013, de Christian Bustos Morgado, jefe área coordinación y ejecución proyectos; asunto: fiscalización seremi salud e IPT trabajo; se informa que el 3 de septiembre de 2013 se constituyeron en las obras de del retén Villa Ortega, Roberto Alvarado Ainol, Inspector del Trabajo de Coyhaique, y Daniela Gallardo Hernández, Seremi de Salud de Aysén, quienes dispusieron la paralización de las obras en ejecución. Se deja constancia que hubo una fiscalización anterior de 28 de agosto del mismo año, en que se efectuaron observaciones referidas a las condiciones de trabajo y sanitarias de los trabajadores, otorgándose un plazo de diez (10) días para su subsanación; adición: Francisco Pizarro Dasso deja constancia que a las 12,15 horas de hoy se comunicó con la Seremi de salud a fin de coordinar una reunión para el día 11 de septiembre de 2013, con el objeto de resguardar los intereses institucionales, acudiendo a dicha reunión el Teniente coronel Christian Bustos Morgado y Andrea Campusano, entre otros, quedando a la espera de la confirmación de la reunión.

Documento N° 36: documento ordinario electrónico NCU 16344768, de Departamento de Cuarteles L1, para DILOCAR, informativo: sección gestión financiera, Christian Bustos Morgado, Andrea Campusano Muñoz, Romina Parraguez Robles, Francisco Pizarro Dasso, subteniente Luis Para, Juana Campos, Hector Salamanca, Karen Bascuñán (oficina de partes); 3 de octubre de 2013; 9 al 11 de octubre de 2013; se requieren pasajes aéreos fiscales para Christian Bustos Morgado y demás personas antes indicadas, para la fiscalización del término de las obras y posterior recepción de las obras Retén Isla Huar; autoriza Félix Flores Santis.

Documento N° 38: documento electrónico ordinario NCU 17074918, de 30 de octubre de 2013, de Christian Bustos Morgado informando una nota de cobro contra constructora CGM, notificada por correo; De: Christian Bustos Morgado, Para: Nicolás López; informativo: subteniente Luis Parra y CPR Francisco Pizarro; asunto: retenes Villa Ortega y Lago Castor; se recibe nota de Alcides Yévenes Sanhueza para el pago de facturas vinculadas con obras de calefacción en los citados retenes, adjudicadas a la empresa CGM Ltda.; adición: Christian Bustos Morgado, jefe área Coordinación y Ejecución Departamento de Cuarteles: “preparar respuesta”.

Documento N° 40: documento electrónico ordinario NCU 17223163; De: Departamento Cuarteles L1; Para: sección gestión financiera; informativo: Juana Campos, subteniente Luis Parra; asunto: solicitud de pasajes aéreos, 6 de noviembre de 2013; adición: jefe área coordinación y ejecución Christian Bustos Morgado; adición: a efectos de realizar trabajos de normalización Retén Villa Ortega, solicita comisión de servicio y pasajes aéreos desde el 11 de noviembre 2013 (“mañana”), regreso 22 de noviembre 2013; personal: Leandro Donoso Vilches, Juan Manuel Jeldres Aguirre, Francisco Pizarro, Ricardo Parra Ortega, Lorenzo Meliqueo Neico, David Acevedo Jara, Walter Ávila Sanz; adición: DILOCAR: autoriza; adición: Departamento Cuarteles.

Documento N° 41: documento electrónico ordinario NCU 18027732, 4 de diciembre de 2013, Departamento de Cuarteles informa a DILOCAR que obras de Villa Ortega están listas para ser recepcionadas; informativo: subteniente Luis Parra Avilés y Teniente coronel Christian Bustos Morgado, jefe de Área Coordinación y Ejecución de Proyectos; adición: para conocimiento y fines

determinados; adición jefe área Coordinación y Ejecución, Teniente coronel Christian Bustos Morgado; adición: Departamento de Cuarteles L1 PM: informa obras civiles finalizadas y recepcionadas.

Documento Nº 50: solicitud de información institucional de Francisco Pizarro, 3 de julio de 2014: proyectos Villa Ortega, Isla Huar, Coyhaique Alto; remite actas de apertura de sobres licitación, informes de evaluación jurídica, económica y técnica, informe Departamento Cuarteles L1 acerca de cómo se designan los ITO; informa que se envían antecedentes contenidos en las carpetas de dichos proyectos.

Documento Nº 52: documento electrónico ordinario NCU 20475501, de 10 de marzo de 2014, de Francisco Pizarro Dasso; solicita se indique curso de acción para recepción definitiva de Villa Ortega; dirigido a mayor Jorge Muñoz, jefe área coordinación y ejecución de proyectos; informativo: Luis Parra Avilés e Isidro Martínez; asunto: recepción definitiva de Retén Villa Ortega: solicita se indique curso de acción para recepción definitiva de Villa Ortega toda vez que no ha realizado renovación de documentos ni enviado al infrascrito ni al Departamento solicitud de recepción definitiva.

Documento Nº 54: documento electrónico ordinario NCU 20653506, 14 de marzo de 2014, de CPR Francisco Pizarro Dasso: en relación a los proyectos de reposición de los retenes Villa Ortega, Lago Castor e Isla Huar, y Tenencia Coyhaique Alto, solicita se indique el modo en que el Departamento de cuarteles L1 designa a los ITO y además envíe documentación relacionada con la resolución que declara la deserción de proyectos, actas de apertura de sobres, actas de retiro de documentación, designación de comisión evaluadora, entre otros antecedentes; Para: mayor Jorge Muñoz, jefe de área coordinación y ejecución de proyectos; referencia: NCU 20494934 de 10 de marzo 2014 y NCU 20022124 de 20 de febrero 2014, ambos de Francisco Pizarro Dasso;

Documento Nº 863 (prueba del ministerio público): copia de libreta de ahorro del acusado; libreta para la vivienda a plazo en UF reajutable; 6 de julio de 2009 fecha de apertura; plan de ahorro 200 UF; depósito mensual UF 11,11, a cumplir en 18 meses; número de cuenta 764502198; 25 de junio de 2012, saldo: \$1.1281.256, giro \$1.281.256; depósito \$1.1281.256, saldo \$1.1281.256; saldo \$11.281.256; misma fecha giro por el mismo monto; misma fecha \$15.904, mismo

saldo; misma fecha de depósito por \$117.885; 31 de julio de 2013, 2015, 2016, 2 de marzo de 2017; giro por \$157 pesos y fracción.

DECIMO: Que la defensa del encausado Gutiérrez rindió prueba testimonial y documental. En cuanto a la primera, depusieron como testigos:

1º) PEDRO LUIS BARRA BETANZO (contador General).

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respondió, en síntesis, que conocía a Gutiérrez desde el 2011 o 2012, y que en el mes de septiembre de 2012 le contó que se había ganado un proyecto en Carabineros, yéndose a trabajar con él a partir del mes de noviembre como contador general. Se encontraban trabajando Ignacio Labra y una persona de nombre Sebastián, quien estaba a cargo de adquisiciones. Cuando llegó se estaban realizando trabajos en Coyhaique, habían mandado para allá a tres (3) personas, no recordando sus nombres, eran un jefe de obras y dos maestros. Fueron a hacer las bases de los retenes. En septiembre cuando hablaron esas personas ya las habían enviado. Gutiérrez le dijo que Rojas era un prestamista que financiaba los trabajos. Se instalaron en una oficina de Rojas ubicada en Exequiel Fernández, ahí trabajaba Carlos Bustos, la hermana de Gutiérrez, Carolina, la cual trabajaba con una persona de apellido Gutiérrez, pero que no era pariente de Cristian Gutiérrez, quien le dijo que tenía que contratarlo. Se le exhibió un correo de fecha 28 de enero de 2013, asunto: contrato. Refirió el testigo que reconocía el documento, que se trataba del contrato de Miguel Gutiérrez, y que César Rojas le entregó “el contrato adjunto”; en el pie de firma aparece Miguel Gutiérrez y por el empleador la empresa CGM, pero no reconoce la firma, precisando que esa firma no era de Cristian Gutiérrez. Añadió que era Cristian Gutiérrez quien *reclutaba* los trabajadores, pero que en una oportunidad César Rojas envió diez (10) trabajadores a Isla Huar. Cristian iba a las oficinas una vez al mes. Ignacio Labra era quien iba a dejar los estados de pago a Carabineros, agregando que “yo sólo entregaba las facturas en blanco para se llenaran”. A fines de marzo empezaron los problemas, a atrasarse los estados de pago, se empezaron a factorizar las facturas. Eso lo hacía Carlos Bustos. Los dineros del factoring llegaban a la cuenta corriente del Banco Santander. En mayo Rojas le pidió un informe de los gastos en sueldos, se espantó, los encontró muy alto, dijo que había que bajarlos. Las nóminas de sueldos eran alrededor de ochenta (80) millones de pesos mensuales.

Ignacio Labra se relacionaba con Rojas para la confección de los estados de pago. Había rumores de que Miguel Gutiérrez era carabinero.

Interrogado por la fiscalía respondió que “los avances de las obras los veían Ignacio Labra y César Rojas”.

Interrogado por el querellante respondió que él no tenía contacto con Rojas, salvo la vez en que le ordenó hacer los contratos de los diez (10) trabajadores que envió a las obras.

La defensa de los acusados Bustos no interrogó al testigo.

Interrogado por la defensa del acusado Pizarro respondió en los términos anteriores a las mismas preguntas referentes a los estados de pago y el rol que tenía César Rojas. Las nóminas que confeccionaba eran de los trabajadores, pero no de los administrativos, a estos se les pagaba mediante transferencia electrónica. Reiteró que, “**yo sólo entregaba las facturas en blanco**”. Trabajó en CGM hasta el 30 de septiembre de 2013. Después que Rojas le pidió las nóminas de sueldos Gutiérrez le dijo que en lo sucesivo no le entregará más información a Rojas porque éste le quería quitar la empresa; y;

2) RAFAEL ANDRÉS MENA SOTO (obrero de la construcción).

Interrogado por la defensa del acusado Gutiérrez respondió que había trabajado para CGM en Coyhaique Alto y Lago Castor, y que conoció a Gutiérrez antes del año 2010, en una *obra grande* de urbanización, *en varias obras grandes*; Gutiérrez tenía experiencia en construcción. Señaló que indirectamente también había trabajado en Villa Ortega e Isla Huar, lugar este último desde el cual le correspondió retirar maquinaria y equipos que no estaban ocupando para llevarlos a otra obra. En cuanto a Villa Ortega le correspondió ayudar a salir de los atrasos, llegó a trabajar en enero de 2013, finalizando a fines octubre, en que Carabineros les prohibió continuar trabajando, ocurrió cuando sacó materiales y maquinaria de Isla Huar para llevarlos a Coyhaique Alto y Lago Castor, esto se lo dijo un carabinero del retén de Coyhaique Alto, quien le mostró un correo electrónico en que se ordenaba que ningún trabajador de la empresa CGM podía entrar a las obras. En julio llegó un camión bajo a retirar la retro que utilizaban, a lo que él se

opuso, pero un carabinero le dijo que *“mi Teniente” César Rojas quería hablar conmigo*; cuando hablaron Rojas se presentó con un “grado” que no recordó; Rojas le dijo que tenía que entregar la máquina porque era suya, a lo que él se negó, ante lo cual Rojas lo amenazó con meterlo preso por apropiación ilícita; media hora después apareció un padrón a nombre de César Rojas, por lo cual entregó la máquina. Cuando se le prohibió entrar a las obras el retén Villa Ortega *estaba casi terminado, un 99%, Lago Castor tenía un 80%, Coyhaique Alto un 88% o 90% e Isla Huar un 95%, le “faltaba nada”*.

Interrogado por la fiscalía, el testigo respondió que no llegó a conocer al tal César Rojas. Se **le exhibió un correo electrónico contenido en otros medios de prueba**: lo reconoció; se dio lectura: De: Rafael Mena; asunto rv: consulta materiales panel sip, con copia cgtuierrez@constructoracgm.cl, CesarRojas@vtr.net, ilabra@constructoracgm.cl y rafaelmena@constructoracgm.cl: *“estimados, podrían oficializar esto y solicitar planos ...no encuentro detalles y no entiendo....; firma Rafael Mena. Mensaje original: De César Rojas, 25 de marzo de 2013, a Rafael Mena; con copia Ignacio Labra y cgutierrez@constructoracgm.cl; contenido: escribí a Tecno Panel y esta fue la respuesta. Best Regard, César Rojas Gaete.*

La parte querellante preguntó al testigo acerca de cuál era su trabajo específico, respondiendo que era jefe de obra, informaba el avance de las obras a Santiago, pedía que le enviaran materiales y personal, entre otras cosas. Dijo no recordar los plazos de las obras.

La defensa de los acusados Bustos no formuló preguntas.

La defensa del acusado Pizarro no formuló preguntas.

A la defensa del acusado Rojas respondió no conocer el correo de Rojas, añadiendo que en el correo que se le exhibió *“si venía”*.

Conforme al artículo 329 la fiscalía interrogó nuevamente al testigo acerca de si la empresa CGM tenía la intención de terminar las obras, respondió el testigo afirmativamente. Se **le exhibe y da lectura a correo electrónico de 26 de junio de 2013** (dirigido a cgutierrez@constructoracgm.cl, de

rmena@constructoracgm.cl , asunto: problemas puntuales) “De: rmena@constructoracgm.cl; Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2013 20:47; Para: cgutierrez@constructoracgm.cl; CC:rafandresmena@gcorreo.com; Asunto: problemas puntuales: Estimado: Te comento lo que pasa, la verdad estoy muy indeciso con todo lo que está pasando, me gustaría saber tu opinión con respecto a la obra, aun no se con cuanto vamos a contar para terminarla, el compromiso esta por parte de los trabajadores y mía, pero hay que aclarar varios puntos y la verdad no sé si confiar en Carlos o Bernardo, yo no me he puesto cuatico con ellos por respeto a tu persona, pero me da la impresión que no existe el compromiso para sacar las obras adelante, he enviado correos suaves preguntando cosas y no se responde, hoy en día no tengo otro medio de comunicación que no sea este, y no sé qué está pasando ni cuál es la intención con esta obra, me gustaría saber si la intención es terminar a fines de agosto o no porque tengo la impresión de que no es la idea, los fondos al parecer se están desviando a otra parte y no se están utilizando como es debido, es solo mi impresión, pero quiero que tú me aclares el tema, no me es grato que Carlos tome decisiones y no se me consulte, creo que sólo soy un títere para él, de todas formas voy a enviar un correo para saber qué pasa, este es sólo para desahogarme Atte. Rafael Mena”. Consultado el testigo acerca del correo, respondió que lo reconocía y que él lo había enviado.

DUODÉCIMO: Que, la defensa del acusado Gutiérrez Martínez también rindió en su descargo prueba documental a la que más adelante se hará mención

DECIMO TERCERO: Que el sentenciado Rojas Gaete aportó como medio de prueba los correos electrónicos contenidos en el el N°9, del acápite otros medios de prueba de la fiscalía, siendo estos los siguientes:

1) correo electrónico: 28 de marzo de 2013; asunto: prevencionista de obras Coyhaique; De: Bernardo León (bleón@constructoracgm.cl), Para: cgutierrez@i@constructoracgm.cl; Cristian, gestionar prevencionista para obra; saluda Bernardo León, jefe de proyectos constructora CGM.

2) correo electrónico: 9 de mayo de 2013; asunto: comisión de fiscalización; De: Francisco Pizarro Dasso, Para: Constructora CGM, ilabra@constructoracgm.cl, con copia a César Rojas: Estimados, notifico que con fecha 20 de mayo 2013

viajaré para fiscalizar administrativa y técnicamente Villa Ortega, Lago Castor y tenencia Coyhaique Alto, con la finalidad de que la totalidad se encuentren en condiciones, especialmente en prevención de riesgo para cargo de un profesional ingeniero, sin observaciones de IPT, junto con cuantificar avances para posterior tramitación de pagos.

3) Correo electrónico: 14 de marzo de 2013; asunto: inf.: Víctor Ortiz Oyarce, ingeniero prevencionista en riesgo; De: Francisco Pizarro, Para Víctor Ortiz Oyarce; con copia a Constructora CGM Ltda.; Estimado, requiere envíe la siguiente información a Cristian Gutiérrez: número de teléfono celular, nombre completo, fecha de nacimiento; atento a sus comentarios Francisco Pizarro Dasso, ingeniero en construcción;

4) correo electrónico: 9 de julio de 2013, itemizados retén Coñaripe; De: Víctor Ortiz Oyarce, a ...licitación ID 3172-78-LP13, asunto: itemizados; "Cristian, ahí van los itemizados, revísalos y dame tu opinión, después lo conversamos personalmente; firma: Víctor Ortiz Oyarce; archivo adjunto: Juan Pizarro Yévenes, línea 1, reposición retén Coñaripe, propuesta empresa, Juan Pizarro Yévenes, modelos reten F15, valorizado en \$234.091.990, fecha 11 de julio de 2013.

DECIMO CUARTO: Que, esta defensa también se valió de prueba documental, siendo esta:

1°. Documento N° 98: resumen de transferencias enviadas desde la cuenta de constructora CGM, N° 45948747, banco Bci:

1) cantidad de transferencias 17, al RUT 14.004.597-7, nombre Francisca Arancibia Negrete, monto total recibido: \$2.540.000;

2) cantidad de transferencias 4, al RUT 11.248.709-3, recibe Alicia Jacqueline Arancibia Negrete, monto total recibido: \$265.622

3) cantidad de transferencias 4, al RUT 11.248.709-3, recibe Alicia Jacqueline Arancibia Negrete, monto recibido \$265.622

4) cantidad de transferencias 23, al RUT 6.379.053-2, recibe María Isabel Martínez Vidal, monto total recibido: \$11.985.000;

5) cantidad de transferencias 16, no se da lectura al RUT, recibe Manuel Martínez Miranda, monto total recibido \$5.258.621

6) cantidad de transferencias 39, no se da lectura al RUT, recibe Juan Carlos Gutiérrez Bustamante, monto total recibido: \$7.905.185

7) cantidad de transferencia 20, al RUT 13.088.858-5, recibe Juan Mauricio Gutiérrez Martínez, total \$8.987.875

8) cantidad de transferencias 23, al RUT 13.282.338-3, recibe Cristian Andrés Gutiérrez Martínez, total \$69.823.588

9) cantidad de transferencias 20, al RUT 15.366.723-3, Carolina Gutiérrez Martínez, \$15.631.075

10) cantidad de transferencias 8, al RUT 76.915.890-1, recibe Constructora CGM Ltda., monto 26.580.000

11) cantidad de transferencias 6, al RUT 76.129.865-8, recibe Hotelería y Turismo Coyhaique S.A., monto total recibido \$5.923.594

12) cantidad de transferencias 1 (uno), al RUT 13.131.987-8, recibe Víctor Ortiz Oyarce, monto total recibido \$405.000, fecha 1° de agosto de 2013.

Total, transferencias \$155.005.560

2°. Documento N° 577 (prueba del ministerio público): planilla excell:

Año 2016, reposición retén Isla Huar, contratista adjudicatario Juan Pizarro Yévenes, \$214.999.511; ITO: Jorge Santis *Requevedo*

Año 2014, construcción CCDP, contratista Juan Pizarro Yévenes, \$476.114 (no se hizo lectura a los tres últimos tres dígitos por resultar ilegibles para el abogado defensor), ITO: Marcos Pomar;

Año 2011, retén Mantuhue, contratista adjudicatario Juan Pizarro Yévenes; ITO: Francisco Pizarro Dasso

Año 2011, retén Vivanco, contratista adjudicatario Juan Pizarro Yévenes; ITO: Francisco Pizarro Dasso

Año 2011, reposición retén Púa, contratista adjudicatario Juan Pizarro Yévenes, ITO: Francisco Pizarro Dasso

Año 2013, retén Coñaripe, contratista adjudicatario Juan Pizarro Yévenes, ITO: Marcos Pomar

3°.- Documento N° 1 (prueba propia de la defensa):cinco certificados de inscripción de vehículos en el Registro de Vehículos Motorizados, a saber: 1) Certificado de inscripción vigente, vehículo placa DKBG 19, automóvil, año 2012, marca BMW, propietario actual María José Bravo, propietarios anteriores: Cristian Andrés Gutiérrez Martínez; fecha de inscripción 4 de octubre de 2011; María Isabel Martínez Miranda, 30 de abril de 2013; 2) Certificado de inscripción vigente vehículo placa WX 1072, camioneta, marca Sang Yong, propietario Evelyn Francisca Arancibia Negrete; propietarios anteriores: Cristian Andrés Gutiérrez Martínez; 3) Certificado de inscripción vigente del vehículo placa BDHS-57, Station Wagon, marca Nissan, modelo Serena 4x4, propietario Cristian Andrés Gutiérrez Martínez; 4) Certificado de inscripción vigente vehículo placa TY 4302, camioneta, Kia, modelo Frontier Super D, propietario Evelyn Arancibia Negrete, propietarios anteriores: Cristian Andrés Gutiérrez Martínez; y, 5) Certificado de inscripción vigente del vehículo placa CCZR 14, Station Wagon, marca Subaru, modelo Tribeca Limited Aut., propietario Comercial Alexander Silva; propietarios anteriores: Evelyn Arancibia Negrete, 14 de noviembre de 2012; María Isabel Martínez Miranda, 9 de octubre de 2013)

3°.- Prueba nueva (artículo 336 inciso primero, Código Procesal Penal): servicio de Registro Civil e Identificación, certificado de matrimonio, inscripción N° 2010,

nombre del marido: Víctor Roberto Ortiz Oyarce, RUT 13.131.987-8; nombre de la mujer: Romina Andrea Parraguez Robles, RUT 13.756.517-k, fecha de celebración 16 de octubre de 2010.

DECIMO QUINTO: Alegatos de cierre. Que, terminada de rendirse la prueba, y previo al cierre del debate, se ofreció a los intervinientes la palabra a fin de que expusieran sus conclusiones respecto de los medios probatorios. Al efecto, señalaron:

a) el ministerio público: inició la fiscalía su alegato de cierre evocando lo dicho en su alegato de apertura acerca del principio de probidad, enfatizando de su concepto lo concerniente a la primacía del interés General por sobre el interés particular. Refirió luego que la prueba había sido no sólo abundante sino avasalladora.

En cuanto al delito de fraude al Fisco indicó que la prueba era irrefutable y que la ejecución de las obras había demostrado una serie de situaciones irregulares con la clara intención de defraudar al Fisco por parte de los funcionarios públicos y por quienes actuaron en representación de la empresa C.G.M., como constó, v.gr., de las actas de entrega de terreno falsas, entre ellas la N° 46, correspondiente a la prueba N°574, relativa a la entrega de terreno de Lago Castor, acerca de la cual el acusado Pizarro reconoció que había sido posterior a los primeros estados de pago. Asimismo, reconoció que la entrega de terreno de Coyhaique Alto no fue hecha en las obras, sino que en las dependencias del Departamento de Cuarteles. Esto es evidente al revisar la cronología, puesto que esa entrega de terreno es de 13 de diciembre, como lo demuestra la carta de solicitud de la empresa pidiendo el primer pago el 17 de diciembre y el primer estado de pago N°1, que es el día 6 de diciembre. Del mismo modo, se acreditó que los informes técnicos del ITO fueron modificados por orden del acusado Christian Bustos para ajustarse a necesidades económicas, de la empresa CGM, tal como reconoció el propio ITO, y como además lo demostraron las inconsistencias de la prueba documental N° 875, respecto de las fechas de los documentos, en los porcentajes de los estados de avance versus los estados de pago y en las fechas de las visitas que no cuadraban con las fechas de los informes. Conocidos los informes técnicos falsos se dieron curso a ocho estados de pago que debían representar la totalidad de las construcciones. Para probar que la obra no se condecía con los pagos aprobados,

se presentaron los testigos Jorge Muñoz, Francisco Socías y Jorge Santis, quienes declararon haber formado parte de una comisión técnica que concurrió al lugar de ejecución de las obras en el mes de marzo de 2014, constatando el estado en que se encontraban, informando además que se había pagado 400 millones de pesos en exceso respecto de lo que había sido construido. El testigo Lautaro Silva, enviado por la Dirección Nacional de Logística, hizo otro tanto con Villa Ortega (prueba documental N° 1.068), dando cuenta que al 3 de marzo de 2014 la obra no estaba terminada y que se pagaron partidas que no habían sido ejecutadas. A su turno, en relación al Retén Isla Huar, la perito fotógrafa Constanza Cerpa Mena de Labocar, registró en imágenes el estado de atraso en que se encontraba dicho cuartel, relatando que ninguna de las terminaciones que aparecía pagada había sido realmente efectuada, carecía de artefactos de baño y concina, lo que no se condice con la carta de solicitud de recepción que realiza la empresa CGM y el informe técnico 755 de 3 de septiembre de 2013 del ITO Francisco Pizarro, quien asegura que la obra se encuentra en condiciones y en estado de ser recepcionada, (lo que consta en prueba N° 186). Asimismo, con motivo de estos hechos, se constituyó una comisión técnica de la Contraloría General de la República en el mes de febrero del año 2015, registrando los itemizados no ejecutados que constataron en terreno (prueba documental N°115). Los perjuicios quedaron demostrados con la prueba documental N° 1.310 y con el informe del perito Lara, quien revisó la documental N° 1.310, 36 y 875, en que consta toda la información de los cheques de tesorería pagados a CGM y, en algunas oportunidades, a un factoring. Citó además algunos de los correos de CGM, contenidos en el N° 9, de otros medios de prueba, v.gr.: *asunto: informes de avance, de Bernardo León a Cristian Gutiérrez, estado de avance al 29 de mayo: hay un 47% de atraso respecto de lo programado en la construcción del retén*. Señaló que otra situación semejante ocurrió con Villa Ortega, en que se adjuntaron imágenes mostrando el atraso considerable; *instalación faena Lago Castor*. de fecha 16 de julio 2013 empleado de nombre Tomás Pérez responde a Gutiérrez que no es posible, de ninguna manera, que el personal se aloje en las construcciones, toda vez que no cuenta con las condiciones para ello: correo de 8 de julio de 2013, Ignacio Labra señala que respecto de los informes de obra las fechas las entregará Francisco, quien debe hacer calzar el estado de avance con los estado de pago; 25 de enero 2013, asunto: estados de pago; Cristian Gutiérrez escribe a Ignacio Labra, con copia a César Rojas: necesito el estado de avance en mi correo hoy; Pamela Beltrán responde con un listado de trabajos que habían sido informados como ejecutados en circunstancias que no era así, concluyendo

que al 5 de febrero la obra recién alcanzaría el avance correspondiente al estado de pago 1. No obstante este correo, el 1º de febrero de 2013 Ignacio Labra envía correo con estado de pago 2 de Villa Ortega, Coyhaique Alto y Lago Castor. Por ende, la situación era conocida por CGM. Pero también era conocida en Cuarteles, como lo demuestran correos de Rojas a Gutiérrez, de Labra al inspector técnico de obras, con copia a Gutiérrez y Pamela Beltrán. La jefatura contaba con los informes oficiales de los estados de avance pero también estuvieron en conocimiento las personas que le acompañaron a la recepción de Villa Ortega, como constó de la prueba documental N° 1.009 (NCU 12985571) se señala que se visitaron también las obras de Coyhaique Alto y Lago Castor, por lo que en el mes de junio de 2013 se tenía conocimiento pleno del estado de las obras, lo que se vio además corroborado con las fotos que tomó Isidro Martínez. La irregularidad quedó registrada en el acta N° 53, recepción provisoria sin observaciones la que fue firmada en el Departamento de Cuarteles el 24 de junio de 2013 (N°838) En la misma constó de la vista fiscal del sumario administrativo que todos los miembros de la Comisión dijeron que había sido Bustos quien ordenó proceder de la manera que se hizo a fin de ganar tiempo para terminar las obras y evitar el cobro de multas. Todo lo anterior es corroborado en el informe jurídico N°22 (documento N°839), que son la explicación que entregan los miembros de la comisión a sus superiores. Lo anterior fue conocido también por el jefe del Departamento, Félix Flores (documentos N° 1.040, 1.012 y 1.186) quien participó en más de una Comisión. Señaló que atendido lo ocurrido con Villa Ortega la jefatura debió haber revisado el estado de todas las obras a fin de evitar que se siguiera pagando por obras no realizadas. Sin embargo, los addendum solicitando más plazo y monto, fueron aprobados con posterioridad a las visitas de la comisión, por ejemplo, el 3 de septiembre Lago Castor, 13 de septiembre Coyhaique Alto, 19 de junio 2013 y 12 de junio 2013, ambas para Lago Castor. La sola comparación de los estados de avance demostraba que son falsificadas porque las fechas en que se aprobaron fueron posteriores a la recepción de Villa Ortega y sin embargo estas obras extraordinarias se fundamentan en informes técnicos copiados. Los informes 560 y 561, de la misma fecha Coyhaique Alto y Lago Castor, son pegados, los dos están solicitando un aumento de obra exactamente igual, con los mismos argumentos. Lo mismo se aprecia de los informes técnicos de la documental N° 777 y 776, ambos de 16 de agosto de 2013, consta que se pidió ampliación de obras con los mismos argumentos. Sin embargo, consta de la documental N° 1.063 y 1.064, correspondientes a Lago Castor y Coyhaique Alto, que se pidió el término anticipado de los contratos, toda

vez que el ITO, luego de constituirse en el lugar de ejecución con fecha 6 de agosto a efectos de verificar el estado de avance, informó el atraso y escasez de personal. Al 1º de septiembre el ITO dio cuenta en sus informes del estado de atraso, por lo que las ampliaciones extraordinarias de 2 y 3 de septiembre no tienen explicación que las justifique. A mayor abundamiento, se demuestra la irregularidad el hecho de la devolución de la boleta de garantía de Villa Ortega por instrucciones del acusado Christian Bustos, conforme consta de la declaración de Luis Parra en el sumario administrativo. Del mismo modo, confirmaron la irregularidad las declaraciones de los maestros que concurrieron a la terminación, y no al hermoseamiento como se dijo, de las obras de Villa Ortega,

En cuanto a la participación de los acusados señaló:

1) Respecto de Francisco Pizarro: se le imputa incumplir dolosamente sus deberes de fiscalización y constatación del estado real de las obras. Se desempeñaba se desempeñaba como ITO y como tal suscribió falsos informes de avance de las obras, lo que él mismo reconoció. Añadió que la responsabilidad administrativa no era sólo suya, toda vez que por formar parte de una institución jerarquizada, se encontraba sobre él otra persona, en este caso el acusado Christian Bustos, quien le instruía lo que tenía que hacer y recibía sus reportes, quien estaba enterado de todo según declararon los testigos. A mayor abundamiento no existen antecedentes de que Pizarro hubiere obrado por cuenta propia. Sin embargo, y a mayor abundamiento, no existen antecedentes que den cuenta que el sr. Pizarro actuó en forma coaccionada, pudo y debió haber dado cuenta a sus superiores jerárquicos, más bien los antecedentes dan cuenta que estuvo de acuerdo con las instrucciones que le eran impartidas por Christian Bustos. Así lo demostraba el correo electrónico de fecha 30 de sep 2013, correo le dirige a C. Gutierrez, en el cual adjunta una carta de recepción de la obra de Isla Huar, de fecha, 7 de septiembre, respondiéndole Gutiérrez que le envíe una también con fecha 3 de agosto de 2013. Se ponen de acuerdo respecto de la información que entregan al Departamento de Cuarteles;

2) en cuanto al acusado Gutiérrez: a) era el dueño, representante y administrador de CGM; b) ejercía el cargo de gerente General y mantenía directa supervisión de las obras; c) en su declaración respondió a las preguntas de la fiscalía: “sí, por lo General me dedicaba a todo”, “por supuesto, yo estaba ahí, tenía que recorrer las

obras”, “en vivo y en directo, yo estaba ahí...yo estaba viendo las obras, no necesitaba fotografías para saber lo que estaba pasando”; d) dijo que por su formación y experiencia tenía conocimiento pero no obstante se presentó a las licitaciones sin tener los recursos para su ejecución, presentando a cobro facturas por obras no ejecutadas, haciendo presente en este punto la fiscalía que sin aprobación de estados de pago no había ejecución de obras; e) el mismo acusado solicitó el estado de pago N° 2, de Villa Ortega, acerca del cual Pamela Beltrán preguntó mediante correo electrónico ¿cómo solicitarlo si las obras del estado de pago N° 1 no han sido aún ejecutadas?; f) firmó todas las cartas de solicitud de revisión de las obras para los estados de pago; g) mediante correo de 10 de abril 2013, el acusado Rojas le dice a Gutiérrez “... si estás con el ITO, los porcentajes no están tan altos, se puede llegar a un 65%...”. Refirió la fiscalía que la teoría de Gutiérrez no tenía asidero al declarar que Villa Ortega estaba en un estado de avance del 99%, lo que no se correspondía con las fotos ni con el informe de la perito fotógrafo Cerpa. Al respecto, aludió un correo de fecha 19 de octubre, cuyo asunto fue “flujo término de obras”, al cual se adjuntan 2 planillas excell, una de las cuales corresponde a una línea de tiempo en la cual se detallaba la programación del término de las obras, las que, sin embargo, ya habían sido pagadas en su totalidad, lo que evidencia, además, que mantuvo contacto con el acusado Rojas después del supuesto quiebre comercial ocurrido en el mes de junio. Respecto de la imposibilidad de terminar las obras por las condiciones climáticas, ello nada tiene que ver con la imputación de haber solicitado estados de pago sin corresponderse con el verdadero estado avance de las obras;

c) acerca de Rojas: indicó que éste que había negado haber trabajado para CGM (“...yo nunca he trabajado con CGM...”), lo cual se demostró que no era verdad, v.gr., 1) con el mandato que le otorgó Gutiérrez con amplias facultades(prueba documental N° 41 del ministerio público), el cual utilizó para la contratación de la prenda sin desplazamiento, en el cual se dice que *actúa en representación de CGM conforme al citado mandato* (prueba nueva aportada por la defensa de Gutiérrez); 2) con el retiro de la retroexcavadora desde Isla Huar, en que se dejó constancia que era Rojas en definitiva quien la retiraba, sin perjuicio de la constancia que se dejó en orden a que se estaba procediendo además por instrucciones de Bustos; 3) la solicitud de primera inscripción de la retroexcavadora que efectuó Rojas en nombre de CGM; 4) correo: “hoy me junte con B, el ITO está tranquilo...”, más el adjunto con la factura de la compra en la que se incluye el correo electrónico de Rojas; 5) correo de fecha 7 de marzo de

2013, dirigido a Gutiérrez, señalando que corresponde organizar el avance, Ignacio debe centrarse en preparar la documentación, lo cual demuestra que Rojas tenía el control, manejo y dirección de las obras; 6) correo de fecha 22 de febrero de 2013, en el que se adjunta un organigrama de la empresa con él como gerente comercial. Añadió que el acusado había negado haber sabido que Flores era el jefe del Departamento de Cuarteles cuando fue a pedir antecedentes de la licitación, en circunstancias que fueron vecinos por años, lo mismo en cuanto a Bustos, en que la documental N° 862, da cuenta que estuvieron juntos en la Academia de Ciencias Policiales y que posteriormente trabajaron juntos, no obstante lo cual ambos dicen que no se conocían mayormente. 7) en otro correo Rojas le dice a Gutiérrez que le envíe antecedentes administrativos de CGM para las boletas de garantía y que pase al día siguiente a retirar las boletas; 8) su gestión en los factoring; 9) haber sido él el interlocutor válido para Carabineros de Chile, toda vez que se comunicaban con él para darle información acerca de las licitaciones; 10) correo de 16 de agosto, asunto: cambio de boleta; de Rojas a Gutiérrez: me llamaron de Carabineros para regularizar la situación de Isla Huar en relación a boleta de garantía; 11) correo de 9 de julio, "Cristian, los montos son: Aden 1 monto \$11.554.523 Boleta \$580.000 Aden 2 \$5.617.514 boleta (\$281.000)", montos que corresponden a los montos de los addendum de los contratos de obra de Coyhaique Alto y Lago Castor; 12) Lo anterior se enlaza con la declaración de Rafael Mena, diciendo que Rojas era quien manejaba los montos que había que solicitar para los estados de pago; 13) correo de 28 de enero de 2013, asunto: contrato de M. Gutiérrez; adjunto contrato, firmado por Rojas, indudablemente, en representación de CGM; 14) las transferencias y cheques (117 millones y 29 millones y fracción, respectivamente). En cuanto a sus afirmaciones, "yo no tenía conocimiento del fraude ni del avance de las obras", y que "la información que recibía de Gutiérrez permanentemente era que el estado de las obras estaba al día", se contradicen con la prueba en comentario. La afirmación que hizo respecto a que tuvo un quiebre en el mes de junio con Cristian Gutiérrez, lo que quedó desvirtuado porque aparece copiado en todos los correos electrónicos relativos al fraude y requería información a los trabajadores de la empresas y además, reconoció haber realizado el pago del empalme eléctrico de CGM, pago que justificó diciendo que se lo había hecho en apoyo a la gestión, especialmente considerando las condiciones climáticas de la zona. Citó también la fiscalía la reunión del mes de octubre de 2013, la que Rojas dijo habría sido en el mes junio, en la que participaron todos los acusados y en la cual se discutió el estado de avance de las obras, después de la cual apareció la proyección de línea

del tiempo con el avance de las obras. Su actuar doloso quedó de manifiesto con la terminación de las obras por parte de la empresa Grossman, respecto de la cual el propio Grossman dijo que había sido Rojas quien le propuso la terminación de las obras porque la empresa a cargo las había abandonado, pero nunca le dijo qué empresa era ni tampoco quién había dejado botados los trabajos. Lo anterior, teniendo en consideración el contexto en que se produjo la conversación, a saber, almorzando en un restaurante ubicado cerca del Departamento de Cuarteles, en el cual participaron Félix Flores, César Rojas y él (Grossman). Señaló también que César Rojas le había dicho que a él lo conocía el Jefe del Departamento de Cuarteles, Félix Flores. Por otro lado, Ignacio Labra culpó a Rojas expresamente ya que todos quienes trabajaban en la empresa Grossman tenían conocimiento del estado en que se encontraban verdaderamente las obras al tiempo de celebrarse el contrato. Estos dichos se vieron corroborados con las visitas que hizo Labra a Lago Castor en representación de la empresa, el cual no fue objeto de contrato por cuanto era la más atrasada obra que estaba, como lo demostraban los NCU leídos en el juicio. Indicó la fiscal que Grossman había explicado lo sucedido porque en su concepto esto *había que tapar el hoyo*. Agregó la fiscalía que este trato directo era prueba del conocimiento y del dolo de Rojas y de Bustos. A mayor abundamiento, la otra empresa que se presentó al trato directo fue FEALFRA, la que pertenecía a Osvaldo Tobar, en la que trabajaban los hermanos de Christian Bustos (prueba documental N° 1.310, en que consta que los 2 anexos de terminación para postular a Isla Huar, entre ellos la declaración de intereses, el nombre estaba en blanco cuando postuló). En cuanto a los itemizados señaló que había sido Rojas quien los hizo, como constó de la prueba documental N° 1150, en la cual aparece en el anexo el número de teléfono del acusado Rojas. Acerca de esto Grossman declaró no recordar los citados documentos y que el correo que allí aparece no es el que utiliza su empresa, y que inclusive el logo que allí aparece dijo no corresponder al de la empresa. Más aun, dijo que no se había enterado de las obras por carta de invitación. En consecuencia, concluyó la fiscalía señalando en este punto que los itemizados fueron hechos por el acusado Rojas. En cuanto al itemizado indicó que conforme a la prueba documental N° 1.310, el itemizado a ejecutar no se correspondía con el verdadero estado de las obra, tal como por lo demás dijo Labra en su declaración, y todo ello apoyado con las fotografías del estado de la obra. Al respecto, la fiscalía citó la prueba documental N° 1.240, en la que consta que el 11 de noviembre Ignacio Labra, en representación de la empresa Grossman, visitó Lago

Castor y Coyhaique Alto. Rojas era el único que podía cubrir la real situación, y ello por haber participado en el fraude con la empresa CGM;

Declaró no reconocer los correos en comento, porque no es el formato”, pero dijo que *best regard* es una firma que aparece en su casilla electrónica; no uso outlook sino vtr, no posee ese formato, no recordó que le hubieren exhibido esos correos en la declaración que prestó en la fiscalía, evidenciándose una contradicción, porque en esa oportunidad señaló que lo envió, refiriéndose a A y B, agregando que puede ser que ese correo se haya quedado pegado”); esos correos fueron aportados por Gutiérrez, que lo perjudican directamente, la crítica que se le hace no es que sean falsos sino que se entregó información parcializada, el perito dijo que difícilmente los archivos de este formato pudieren ser editados; además fueron reconocidos por Labra, Pizarro y otros, incluso en aquel que le propuso a Gutiérrez la construcción de la casa en Chicureo;

4) respecto al acusado Christian Bustos: 1º) autorizó estados de pago sobre la base de informes de estados de avances falsos; 2º) incumplió su deber de fiscalizar al ITO Pizarro; 3º) en el proyecto de reposición de Villa Ortega ordenó la aprobación de una obra incompleta y gestionó una comisión de servicios para completarla. Lo anterior consta de la declaración del acusado Pizarro, a quien Bustos supervisaba y designaba como ITO, y de las declaraciones de profesionales y del personal a quienes les impartía instrucciones.

Refirió que la teoría del acusado se basaba en la falta de conocimiento del fraude y el principio de confianza. En cuanto a este, indicó que cuando se trata de instituciones jerarquizadas lo que se busca siempre es responsabilizar *al de abajo*. Al efecto, citó al autor Klaus Roxin, para quien el principio en cuestión procede *en la medida en que concurran antecedentes que evidencien un comportamiento correcto y adecuado, que no existan circunstancias que evidencien un comportamiento incorrecto y que no exista un deber de evitar o compensar el actuar incorrecto*. En la especie, señaló la ponente, nada de ello ocurría. En lo concerniente a la falta de conocimiento del delito indicó la fiscalía que los propios dichos del acusado Bustos desvirtuaban su teoría exculpatoria, v.gr., diciendo yo *no tengo facultades para controlar la ejecución*; en el pie de firma del estado de pago N° 3 del proyecto de reposición del retén Isla Huar, consigna, bajo el nombre, la frase “Jefe Área de Coordinación y Ejecución de Proyectos”. En cuanto

a esto último, señaló, en forma de interrogante, que las distintas explicaciones que entregó el acusado acerca de este punto ¿significarían que le cambiaron el pie de firma al acusado?. Al respecto, aseveró la interviniente que la negativa del acusado no era compatible con su formación profesional, con sus credenciales, sus distinciones y su jefatura.

A mayor abundamiento, explicó que las declaraciones de testigos dieron cuenta del conocimiento que Bustos tenía en la materia, v.gr., la testigo Claudia Zenteno aseveró que Christian Bustos “llevaba todo detallado, sabía cada proyecto, manejaba todo el tema, él conformaba cada comisión de servicio”; el testigo Jorge Santis (“...tenía una pizarra en que estaban anotados los proyectos ya que él estaba a cargo de la obra...”); el testigo Fabián Gutiérrez (“... era un robot, se acordaba de todos los proyectos, de todos los detalles,...gerenció el Departamento...”; el testigo Nicolás López (“Bustos no confiaba en nadie...”). A lo anterior añadió la fiscalía que el acusado *tan jefe directo era de Pizarro, que era él quien lo evaluaba*, aludiendo y citando al efecto la evaluación de fecha 5 de septiembre de 2013 (prueba documental 1.211), en la cual Bustos calificó de sobresaliente el desempeño profesional de Pizarro. Lo anterior, en circunstancias que ya se habían detectado irregularidades, al menos en el retén Villa Ortega.

Refirió la fiscalía que los dichos del acusado, cuando señalaba que *yo no tenía facultades para conocer el real estado de avance de las obras porque los informes técnicos del ITO iban dirigidos al Jefe del Departamento, no puedo establecer el estado de avance sino con fotos, y fotos no habían, nosotros confiamos en el ITO hasta el final, siempre*, se contradijeron con las cualidades que a su respecto relataron los testigos. Su falta de conocimiento técnico no se condice con sus credenciales y cualidades, de las cuales dieron cuenta todos los testigos. El conocimiento que desplegó respecto del D.S. 294 le sirvió para ampararse y evadir su responsabilidad y hacerla de cargo del ITO.

Así, lo ocurrido con las obras por parte del ITO contraviene el principio de confianza. Así quedó además demostrado con la Comisión de recepción de Villa Ortega, para cuya designación se requería previamente una carta del contratista solicitando la recepción de las obras y un informe técnico acerca del estado de las mismas, de manera que cuando él acusado llegó con la Comisión y vio que lo informado no se condecía con lo observado, debió haberle pedido a Pizarro

inmediata cuenta de la situación, e incluso destituirlo. Agregó que las fotos de Isidro Martínez corroboraban lo recién dicho (prueba documental N°19). No existe diferencia en las fotos que se adjuntaron al correo de 24 (o 27) de mayo de 2013, con las fotografías que tomó Martínez, salvo respecto de la instalación de ventanas, lo que se vio confirmado con el correo de fecha 24 de mayo, enviado por la jefa de Villa Ortega a Marcos Valiente, en el que se dice que las ventanas estarían llegando el día anterior a la visita de fiscalización, por lo que es imposible la instalación del seading antes del arribo de la Comisión.

Continuó la fiscalía con su alegato diciendo que los actos posteriores a la citada visita sepultaban la teoría del acusado. En efecto: 1) firmó el acta de recepción provisoria sin observaciones sin haber viajado a la obra (prueba documental N° 838); 2) firmó el acta de recepción provisoria sin observaciones sin haberse constituido la Comisión, en circunstancias que el acta consigna que *la Comisión se limita a informar lo que se ve real y físicamente*; 3) prueba documental N° 1.012, NCU de 12 de junio de 2013, el acusado Pizarro le envía un correo electrónico a Luis Parra, con copia al acusado Bustos, en el cual solicita pasajes aéreos para el ITO Nadal a efectos de la fiscalización del cumplimiento de las observaciones que hizo la Comisión en la recepción provisoria, prueba que el acusado no reconoció; 4) prueba documental N°1.182 , con fecha 17 de junio de 2013, se dejó constancia en el libro de guardia del retén Villa Ortega que con esa fecha se constituyó el ITO Nadal a inspeccionar las obras; ; 5) en señal de constancia firmó al reverso de varias facturas de estado de pago, destacando al efecto la factura N° 56, de fecha 13 de junio, estado de pago N°5 de Isla Huar (prueba documental N° 977); a menos de una semana de haber viajado a Coyhaique ya estaba visando el pago de un nuevo avance, sin perjuicio de varias otras que fueron aprobadas con posterioridad, las cuales se detallan en la acusación (facturas N°55 a N°69); 6) mediante Oficio N°1046, de fecha 17 de julio de 2013, (prueba documental N° 1.022) solicitó a L8 el pago de la factura N°61, de un addendum del retén de Villa Ortega, de aproximadamente \$25.000.000; 7) en el mes de septiembre calificó a Pizarro (prueba N°1.211 en los siguientes términos: “profesional que destaca su espíritu de compromiso en las funciones encomendadas, sea como ITO o aportando con sus conocimientos en la especialidad y experiencia institucional, responsable y cooperador. Profesional con merecimientos al aumento de grado...”. Recién en el mes de enero cuando asume un nuevo jefe decide desvincular al ITO Pizarro. Lo anterior, afirmó, no fueron actos propios del principio de confianza, sino que conocimiento y dolo.

A mayor abundamiento, refirió que también hubo acciones tendientes a ocultar los hechos, v.gr., 1) contrato directo con la empresa Grossman; 2) designación de una Comisión destinada a la terminación de los trabajos de Villa Ortega; 3) dos actas que rechazan la recepción provisoria de (comisiones a) Isla Huar. El referido contrato tuvo por objeto ocultar el hecho que se habían efectuado pagos por obras no ejecutadas y ocultar el estado en que se encontraban las obras. No era posible designar a un nuevo ITO para la terminación de las obras, sino que era necesario continuar con Pizarro, ordenándosele, además, la adecuación del itemizado para así poder recurrir al trato directo, habiendo sido el acusado Rojas quien se avocó a buscar una empresa con la cual terminar las obras. Añadió que la licitación de Río Tranquilo permitiría compensar a Grossman, la que, sin embargo, no le fue adjudicada, agregando que en ese proceso intervino el acusado Bustos reuniéndose con los tres asesores, Romina Parraguez, Fabián Gutiérrez y Nicolás López, quienes llamados a evaluar e informar la empresa oponente, lo hicieron de manera negativa para la empresa Grossman.

El actuar doloso quedó también demostrado con las dos (2) actas de rechazo de la recepción de Isla Huar, acta N°64, firmada los días 4 y 10 de octubre 2014 (prueba documental 1.053 y 174). Tales actas, agregó, son idénticas, en ambas señalan que efectúa una recepción provisoria rechazada por cuanto el representante de la empresa constructora no concurrió al acto, salvo que en una no está la firma del acusado Bustos, siendo dicha acta aquella en la cual se dejó constancia que las obras habían sido abandonadas desde fines de septiembre de 2013.

En cuanto al delito de cohecho y soborno señaló que se había instalado en el Departamento de Cuarteles una forma de corrupción de las licitaciones públicas, como era el buscar empresas a quienes adjudicar, las cuales debían pagar un peaje “con Christian Bustos Morgado, y que eran captadas por uno de sus hermanos, en el hecho 2, y por el acusado Rojas, en el hecho 1.

A los efectos precedentes, refirió la fiscalía que conforme a los correos electrónicos incorporados a través de otros medios de prueba N°9, el inversionista “B” al que se hacía mención era Christian Bustos, lo que se comprobó con la declaración del acusado Gutiérrez quien aseveró que Rojas así se lo había dicho, sin perjuicio de aducir que de ello se había enterado durante la ejecución de las

obras, empero contradiciéndose con lo que había declarado anteriormente en la fiscalía: *cuando me refiera al inversionista “A”, será Félix Flores, y cuando me refiera a “B”, será Christian Bustos*. Lo dicho consta, además, en diversos correos electrónicos, v.gr, correo de 11 de enero de 2013. César Rojas le escribe a Cristian Gutiérrez diciéndole que se había juntado con B y que el lto estaba tranquilo...; cadena de correos de fecha 16 de agosto de 2012, asunto RE: revisa. Cristian Gutiérrez le escribe a CR: *“¿es posible que B nos dé un panorama de las empresas que participan con nosotros en cuanto a calidad ISO etc.? Recuerda vamos a Villa Ortega, Coyhaique, El Olivar y Puente Negro”*; La fiscalía hace presente que no se trató de un conocimiento acerca de las licitaciones, sino que también sobre la ejecución de los proyectos. No obstante que el acusado Rojas declaró que el inversionista “A” era Salomón Goldbaum y que el inversionista “B” era Eduardo Martín Aranda, lo cierto era que la prueba documental y testimonial echó por tierra esa tesis. En efecto, el testigo Goldbaum negó haber tenido contacto con el Departamento de Cuarteles y que lo único que había hecho era haber servido de prestamista a César Rojas para la compra de una maquinaria. Existen otros correos que dan cuenta que “A” está vinculado a Cuarteles: 1) correo de 31 de agosto de 2012, de CGM a César Rojas, *asunto: Datos cuenta; César, me podrían indicar tus datos para realizar transferencias electrónicas*. En el mismo correo le pregunta *cómo va Linderos*, y Rojas le responde; *respecto de Cuarteles, hable ayer con A, te cuento*; 2) correo de fecha 23 de septiembre de 2012, de César Rojas a Cristian Gutiérrez, en el que se disculpa por un atraso, agregando a continuación *“tuve problema con el cobro del vale vista, tenemos que organizarnos para lo que viene, hablé este fin de semana con A”*. Por otro lado, y si bien el testigo reconoció el pagaré de fecha 21 de agosto de 2012, lo cierto es que el no guarda relación con los correos que se revisaron. Respecto al testigo Eduardo Martín, refirió la fiscalía que con él había ocurrido otro tanto puesto que si bien había reconocido el pagaré de fecha 3 de diciembre de 2012, firmado por Rojas, en el cual Rojas se compromete al pago de \$15.000.000 al 3 de marzo de 2013, 90 días, ello no concordaba con un correo de 26 de septiembre, con el *asunto consulta*, en el que se dice que *“de acuerdo a lo conversado ayer, me preguntan por el retorno de la inversión; para ello consideremos dos cuotas, de 30 cada una, es así que eso se podría con el primer y segundo estado de avance”*. Al tenor de los citados correos que Rojas dirigió a Gutiérrez, el primero en el mes de septiembre de 2012, y el segundo el 14 de marzo de 2013, en los que dice que la inversión podría pagarse en dos (2) cuotas; se contiene un dato adjunto que dice *“el hombre de los 15 millones a 90 días cumplidos del mes de marzo no me acepta*

más chivas, y a lo menos hoy, el hombre me llamó a lo menos 10 veces, respectivamente, Entonces el inversionista “B” no pudo haber sido Eduardo Martín ya que en el último correo no se hizo mención a Martín como al inversionista “B”, sino como “el hombre”.

Continuó su alegato diciendo que el pago de *coimas* se encontraba acreditado con prueba indiciaria respecto de los pagos que se realizaron y la trazabilidad a lo menos en un caso en relación a las obras de CGM y corresponde a un pago de coimas por asesorías Inversiones B. Existen correos electrónicos que dan cuenta previamente que se deben realizar pagos, cual es primero, el correo en que se habla de las dos (2) cuotas de 30 cada una para el retorno de la inversión; otro, de 24 de enero de 2013, dirigido por el acusado Rojas al acusado Cristian Gutiérrez y a su hermana Carolina, indicándose en el *asunto*: ordenamiento de créditos Cristian Gutiérrez y CGM; acá también se hace referencia expresa para asesorías A y B; otro más, de 4 de febrero de 2013, con 2 archivos, de César Rojas a Cristian Gutiérrez, con el asunto Revisar: y en uno de los archivos, que dice Cristian febrero, en el que se dice: “hoy traté de materializar el factoring de dos (2) facturas,de este monto se debe sacar la inversión de “B”, y lo que yo te había solicitado”. Se adjunta una planilla Excell con el nombre “Febrero-costos”, en la que consta dos pestañas, Empresa A y Empresa B, en la primera pestaña de la segunda, aparece que la primera inversión corresponde al 6 de febrero de 2013 por un monto de \$4.000.000.; luego de otros espacios en blanco, se completan 24 millones de pesos que era lo que se señalaba en esa tabla que se iban a entregar a esta empresa B. Agregó que el 24 de octubre de 2013, Carolina Gutiérrez le envía a la ejecutiva del banco BCI, con copia al sr. Cristian Gutiérrez, un correo con asunto: *certificados de transferencias*, realizadas a César Rojas y Purísima Toledo, remite como archivo adjunto una planilla excell con el nombre “*transferencias junio 2012 a junio 2013*”, en la cual consta con fecha 7 de febrero de 2013 una transferencia por \$4.000.0000 a César Rojas a la cuenta corriente N°2003676-1, destacando que la glosa indica: César Rojas, “Inv B”. Agregó que lo anterior se puede apreciar en un segundo correo electrónico de fecha 3 de julio 2013, con el asunto “detalles”, como consta de la cartola 147, de la cuenta de César Rojas en el banco Santander (prueba documental N° 106). También el 8 de febrero de 2013, \$4.000.000, como consta transferencia de otro banco; luego el mismo día 8 de febrero, es decir el pago a inversiones B se materializó en la cuenta de César Rojas agregando que el mismo día 8 de febrero, en Mall Florida Center consta un cheque pagado en efectivo, por caja, por \$4.065.000, De la

prueba documental N° 94 consistente en el cheque N° 3512864 consta que César Rojas giró dicha suma en favor de sí mismo, constado al reverso su firma, número de RUT y de teléfono celular. Señaló la fiscalía que esta secuencia constituía la trazabilidad del cohecho, toda vez que el único motivo por el cual se hizo esto fue porque Rojas necesitaba efectivo para así evitar trazabilidad. Indicó que en dicho mall declaró Bustos se encontraba con Rojas cuando iba a tomar café. Añadió a lo dicho que el acusado Gutiérrez había declarado que en cierta oportunidad Rojas se jactó diciendo que eran conejos y que sabían cómo arrancarse. El mismo acusado había declarado que había tratado de sonsacarle a Rojas cómo era que hacia los pagos, explicándole Rojas que llevaba un CD que no tenía nada y un libro con eSPAcios abiertos, para hacer los pagos en efectivo a Bustos y a Flores. A mayor abundamiento, Goldbaum declaró que el día de su declaración en el tribunal Rojas le había transferido \$1.000.000 en pago de la deuda que tenía, lo cual demostraba que el cobro del cheque por caja y en dinero efectivo que hizo en aquella oportunidad fue para evitar la trazabilidad.

La infracción a los deberes del cargo, fueron relatados en todos los hechos de la acusación, destacando la entrega de información privilegiada de los procesos de licitación de Bustos a Rojas, cuyo manejo de esta quedó demostrada, sin que la explicación que ellos se obtuvieron del Banco integrado de proyectos demuestre lo contrario, toda esa explicación cae porque los montos no calzaron. Lo demuestran los correos y demás documentos; quedando demostrado que entregó información sobre los procesos de licitación, información técnica para postular, además de información sobre la etapa de ejecución y de fiscalización de las obras. Recordó el correo de fecha 5 de julio de César Rojas a Renato Méndez, asunto: “*consulta*”: (Prueba 786) esto está coordinado y puede tener una resolución favorable, lo que se viene en unos diez días más es: .. adjuntando un listado de once cuarteles a licitar, más los montos asignados a cada proyecto, lo cual no estaba publicado sino hasta el 24 de julio de 2012, (Prueba 827, Informe de Chile Compra N°1089) mismo día y listado que envió Rojas a Gutiérrez; adjuntando una planilla con el mismo listado, señalando la ID del proceso, señalando las fechas y los montos; la información era exactamente la misma. El monto de 390 millones de Villa Ortega quedó refrendado en la resolución que aprueba el contrato de CGM.

5) Tratándose del acusado César Rojas: señaló la fiscalía que él también recibía información, como consta del correo de 16 de agosto de 2012, enviado a las 22,44

horas, en el que Rojas le envía Gutiérrez detalles de la propuesta de dos (2) empresas: propuesta A, propuesta B y propuesta CGM, detallando un precio y un plazo, quedando en blanco especificaciones técnicas y comportamiento de las empresas. A las 22,52 horas Gutiérrez le responde preguntándole si “B” le puede dar información acerca de las empresas, recuerda “que vamos a Villa Ortega, El Olivar”, entre otros. Ocho (8) minutos después Rojas le respondió, “lo veo”. El acta de apertura de sobres fue el 24 de agosto (documental N° 256 de la prueba del acusado Bustos). Hizo referencia a otro correo, de fecha 13 de septiembre de 2012, *asunto: RE: listado obras*. En la planilla excell adjunta al correo se detalla, un extenso listado de obras con la información sobre el estado y situación actual de cada proceso, por ejemplo, si un proceso estaba para firma de DILOCAR o a la espera de un certificado de refrendación, o cuándo se estaba trabajando en las bases, cuándo estaban trabajando en los tratos directos (v.gr., sala de armas unidad policial en Valdivia), etc. Añadió que Rojas también recibía información técnica, por ejemplo, de otro Medios de Prueba N°9 correo 10 de junio 2013, *asunto: gas; se envía plano de vivienda unifamiliar con el logo de Carabineros*, con los pie de firma Jorge Rojas Langer, Félix Flores Santis y Christian Bustos Morgado, pero sin sus firmas y con una leyenda al centro de documento, en diagonal, que dice “Proyecto referencial debe ser aprobado por un profesional competente en el área, luego con un timbre del Departamento de Cuarteles sin fecha.” El 10 de junio de 2013, se incorporaron dos planos del retén Río Tranquilo, enviado por César Rojas a Cristian Gutiérrez, donde se lee, “Secreto según Código de Justicia Militar art. 436”. Por último, hizo referencia a correos relacionados con las etapas de ejecución y fiscalización de las obras, v.gr., correo de fecha 7 de marzo 2013, que señala: *primera medida para los proyectos del sur, Ignacio debe ocuparse de..., para la visita del Coronel a inspeccionar las faenas (Flores)* (documental N° 944, NCU 10871680). Lo anterior en circunstancias que la Comisión no había sido designada, lo que ocurrió ocho (8) horas después.

A continuación, se refirió al delito de cohecho del que se acusó a Félix Flores, César Rojas y Christian Bustos. A este respecto indicó que existía trazabilidad completa, prueba directa, como era la transferencia de \$1.000.000 que le hizo Rojas a Félix Flores el 30 de octubre de 2013 (prueba documental 103 y 133), esto en medio de las tratativas de trato directo con la empresa Grossman para la terminación de las obras de Isla Huar. La infracción que en este caso tuvo lugar, esto es la contraprestación, fue la inscripción irregular de la empresa Grossman en el registro de Carabineros. A este respecto señaló que si bien la fecha de la

resolución N° 847 (prueba documental N°1249) que autorizó la inscripción de la empresa Grossman era de 28 de octubre de 2013, lo cierto venía a ser que en la resolución se citaron como antecedentes sendos informes técnicos cuya data era 8 de noviembre de 2013. Además, en el oficio N° 273 (prueba documental N° 1.250) constaba de manera fehaciente que el abogado Nicolás López envió a Félix Flores un listado de documentos que la empresa Grossman no había enviado y que eran necesarios para su inscripción, v.gr., certificado de capital comprobado. A mayor abundamiento, el 14 de noviembre de 2013 se presentó en el Departamento de Cuarteles una carta de Carlos Grossman, en representación de la empresa Grossman, señalando que por medio de ella hacía entrega de los antecedentes que tenía pendientes para su inscripción en el Registro de Contratistas. Más aún, el 18 de noviembre de 2013, se envió una carta con el certificado de capital propio que se había pedido el 8 de noviembre. Así entonces, la fecha 28 de octubre era relevante porque estando Rojas detrás de ambas empresas (CGM y Grossman), el término anticipado de los contratos con CGM tuvo lugar el 30 de octubre de 2013. Agregó a lo dicho, que el 4 de noviembre del citado año se enviaron las cartas de invitación, por lo que la inscripción en el registro tenía que ser necesariamente con fecha anterior, lo que cobraba relevancia porque se sabe que este trato directo estaba destinado a tapar la situación anterior, esto es, encubrir lo ocurrido con la empresa CGM. El 12 de noviembre era la fecha que estaba fijada para la recepción, pero al día siguiente se presentaron sólo las empresas Grossman y FEALFRA. Por tanto, la fecha de inscripción no constituyó un error de la oficina de partes, como pretendieron hacer creer, sino que fue antedatada. El día 13 de noviembre se entregó el informe técnico de evaluación que había preparado el acusado Bustos, esto toda vez que en el ángulo inferior izquierdo aparecían escritas las iniciales CPBM: Christian Patricio Bustos Morgado. Añadió que la declaración de la testigo Claudia Zenteno dio cuenta de que el acusado Bustos la había presionado con la inscripción de Grossman. La testigo Cecilia Cortés declaró que *la apuraron con la inscripción a través del Coronel Félix Flores*, por medio del cual le llegaron los antecedentes para el análisis de la inscripción, no estando dentro de ellos todos los que se necesitaban. Así, teniendo que presente que el 22 de octubre Grossman se reunió con Flores y Rojas a almorzar (prueba documental N°832), cabe concluir que fue en esa oportunidad en la que le ofrecieron adjudicarse por trato directo las obras inconclusas, habida consideración que al día siguiente, 23 de octubre, el asesor jurídico, abogado Nicolás López, le envió un correo electrónico a Félix Flores en el cual le informó que, según lo solicitado, los documentos que la empresa

Grossman debía aportar eran los que le detalla el correo. Consignó la fiscalía en su alegato que el 8 de noviembre de 2013 existía un pago de Bustos por \$80.478 y el 14 de noviembre de 2013 otro por \$30.091, de César Rojas, ambos en el restaurant Chilenazo, de lo cual daba cuenta la prueba documental N°106. A mayor abundamiento, hizo presente que Grossman había declarado que sería Rojas quien debía ocuparse de la tramitación y que éste le pedía la documentación que para ello iba necesitando, ocultándole a Grossman que había sido él mismo quien había dejado abandonadas las obras, lo que demuestra su dolo.

Continuó la fiscalía con su alegato diciendo que respecto de los hechos consignados en el N° 2, eran estos la forma que utilizaba Bustos para perpetrar el fraude, es decir, este mecanismo de captar empresa contratistas a través de personas vinculadas a él y recibir pagos como contraprestación de adjudicarles las licitaciones. Los pagos se materializaban a través de sus hermanos. La prueba acreditó vínculos comerciales de Cristian Bustos Morgado con las empresas que se adjudicaban las obras. Así lo dijeron los testigos Juan Soto Jara y Osvaldo Tobar. Este último respondió que Rodrigo Bustos los invitó a participar en estas obras licitadas por el Departamento de Cuarteles pero que no había formado parte de la empresa porque el mismo le dijo que no podía ser socio ya que tenía un hermano que trabajaba en Carabineros. Le señaló también que los pagos se los pedía que fueran en dinero efectivo y Tobar manifestó que algunos se hacían por transferencias directas desde su cuenta. Respecto del testigo Juan Soto Jara, este había declarado que Rodrigo era quien hacía toda la parte administrativa, como ocurrió con Melosal o Hualañé, en los que las carpetas me las fue a dejar a mi casa, a la medianoche del día anterior al que se abrirían las propuestas, diciéndole que tomara atención a una modificación de última hora y que por ese motivo ninguna otra empresa la conocería y podría dejar a las demás empresas fuera de concurso, adjudicándose la licitación. Además, *me decía cuando iban a ir los ITO*. Tratándose del acusado Rodrigo Bustos, el testigo Soto declaró que *aproximadamente, una vez que me adjudiqué una obra me di cuenta que Rodrigo tenía un hermano al cual reconocí por el parecido físico que ambos tenían y por tener el mismo apellido*. Citó la prueba documental N° 1.115 (anexos a las licitaciones acerca de declaraciones de intereses). Ambos testigos manifestaron que las supuestas asesorías de Nelson y Rodrigo Bustos Morgado tuvieron lugar en FEALFRA I.E.R.L. y en FEALFRA SPA y que estas supuestas asesorías también las realizaron con la empresa Torrejón la que se adjudicó numeraciones

licitaciones. La prueba documental N° 25 y N° 27 dieron cuenta de la constitución de la sociedad FEALFRA (nombre de fantasía de la sociedad Juan Soto Jara E.I.R.L.) y de la cesión de derechos que Soto hizo a Osvaldo Tobar. La segunda da cuenta del término de esa sociedad FEALFRA E.I.R.L., transformándose en la sociedad FEALFRA SPA, en cuyo directorio se incluyó a José Vargas Silva. Posteriormente, en una segunda sesión de directorio compareció como director Miguel Torrejón (prueba documental N°34), lo cual demostraba que estaban todos vinculados. Los citados Tobar y Torrejón le daban dinero a Christian Bustos a través de los hermanos de éste. Al respecto, indicó que se rescataron 24 facturas emitidas por FEALFRA (prueba documental N° 616), las cuales fueron recibidas en representación de dicha empresa por el acusado Rodrigo Bustos, v.gr., facturas N°15698, 16042, 16035, emitidas de octubre a noviembre de 2012, por sociedad Los Maitenes, todas correspondientes al proyecto Hualañé, en las cuales aparece manuscrito en el costado superior izquierdo la leyenda “Huañalé”. Refirió que lo mismo ocurrió con las facturas N° 12123 y N° 12124, también respecto del proyecto Hualañé. Añadió que obraba como prueba la guía de despacho de 14 de noviembre de 2012, por compras para las obras de Itahue, Lontue y Coronel del Maule, todas las cuales están señaladas en la acusación. Lo anterior, sin perjuicio de una serie de comprobantes de pago con la palabra “Gigo”, abreviatura del nombre de Rodrigo Bustos. Dentro de la prueba documental N° 636, hizo mención a la factura N° 3491 de la empresa Kitchen Haus, de fecha 5 de marzo de 2013, en la que consta que fue recepcionada por Nelson Bustos, y en la cual aparece su número de RUT y firma. Señaló que el vínculo no fue esporádico sino permanente pues existen facturas del año 2014, correspondiente a la obra San Francisco de Mostazal.

Asimismo, de la prueba reseñada es posible extraer relaciones entre FEALFRA y el señor Miguel Torrejón, en concreto la factura electrónica N° 6091, de la empresa Dartell, pero que había sido emitida a Construcciones e Ingeniería Torrejon Ltda., el 24 de marzo de 2013, la cual tenía un papel que decía: *“Osvaldo, esta factura, según se me indica corresponde a materiales para obras FEALFRA, pero facturada a Torrejón porque no tenían RUT. Devolver a Torrejón.”*

Entre octubre de 2012 y marzo de 2013 se detectaron un total de once (11) transferencias entre FEALFRA y Sociedad Construcciones e Ingeniería Torrejón, y

en enero de 2014 una transferencia desde la cuenta de FEALFRA a José Vargas Silva.

Acerca de estas transferencias el acusado Bustos dijo que no tenía conocimiento que sus hermanos trabajaban para FEALFRA, tampoco conocer a Torrejón, como tampoco que Rodrigo prestaba asesoría a Juan Soto Jara a Miguel Torrejón, que no conocía al representante legal de FEALFRA, tampoco conocer a Osvaldo Tobar, ni que Tobar era el contador de su empresa; aduciendo los once (11) años de diferencia de edad que tiene con su hermano Rodrigo. Lo anterior, no obstante haber sido el acusado el primero dentro de su promoción.

Luego de exhibirle al acusado el correo electrónico contenido en otros medios de prueba N°14, no lo reconoció, señalando que nunca lo recibió, no obstante lo cual con ellos se confirma la vinculación entre los acusados y las empresas contratistas referidas. El perito informático dio cuenta que los correos habían sido efectivamente recibidos por Bustos, en la cuenta christian.bustos@vtr.net y fueron reconocidos además por Osvaldo Tobar, destacando entre ellos los siguientes correos: 1) *asunto: adjudicaciones*; 24 de abril de 2012; Osvaldo Tobar le escribió Christian Bustos diciéndole: *“Christian revisé el portal y solo pude obtener las bases administrativas de la nueva licitación y la resolución de adjudicación del retén, las resoluciones de Melosal y Hualañé no los pude encontrar; por favor mándame los PDF con esas resoluciones*; 2) correo sin indicación del *asunto*, de fecha 4 de septiembre de 2012, Tobar le escribe a Rodrigo Bustos, a Nelson Bustos y a José Vargas Silva, y les señala: *falta acordar bien el tema del capital y ver la forma de aportar el capital, pues depende de los camiones que se aporten y la forma en que se aporten, puse 80 millones en efectivo pero debemos ver bien si todo se aporta en un solo acto, no todos tienen como justificar esa plata de una vez*; 3) otro correo electrónico, sin asunto, de fecha 12 de junio de 2013, dirigido a Nelson Bustos y adjuntos en *pdf* liquidaciones de sueldo asociadas a Nelson y Rodrigo Bustos. Lo anterior, siendo a esa fecha Tobar el contador de la empresa.

En cuanto a los depósitos en efectivo, el acusado Bustos dijo que no había desempeñado o realizado ningún trabajo que le generara otros ingresos que no fueran los correspondientes a su desempeño en Carabineros desde el año 2010 a fines de 2013. No obstante, la prueba documental N°107 y 108, cartolas del banco Santander, reflejan que existieron depósitos de dinero en efectivo, por ejemplo: 23

de julio de 2012, depósito de CBM por \$6.000.000; 3 de enero de 2012, \$4.700.000; 15 de marzo de 2012, \$15.000.000; 17 de julio de 2012, \$2.000.000; 14 de agosto, \$2.000.000; 12 de septiembre, \$2.000.000; 13 de septiembre, 10.000.000; 27 de febrero, \$5.000.000; 28 de mayo, \$7.000.000. Explicó que el acusado había declarado que estos dineros provenían de créditos, no obstante lo cual el primer crédito fue solicitado el 13 de diciembre de 2011, en circunstancias que con fecha 12 de enero 2011 el acusado registra un depósito por \$4.000.000, en efectivo, realizado en la sucursal de Llole; el 18 de octubre 2011, un depósito en efectivo en esa misma sucursal, por \$4.000.000; el 3 de enero 2012, en una sucursal de Viña del Mar, un depósito por \$4.700.000. Tales depósitos no pueden justificarse con créditos, sin perjuicio que la prueba documental N° 673 dio cuenta que los depósitos se hicieron en Llole, donde tenía domicilio la empresa FEALFRA E.I.R.L.

Señaló que el perito Nelson Castro había informado en su declaración acerca de la trazabilidad de cuatro (4) pagos y de algunas triangulaciones de dineros realizados desde la empresa FEALFRA SPA al acusado Bustos, descritas en la acusación, y que correspondían a cuatro (4) grupos. La primera triangulación se inicia el 30 de agosto de 2013, la segunda el 24 de octubre de 2013, la tercera, el 25 de noviembre de 2013 y la cuarta, iniciada el 30 de diciembre de 2013. La segunda y tercera se realizó a través de los hermanos Nelson y Rodrigo, al acusado Christian Bustos.

Indicó que en el juicio había comparecido a declarar un funcionario de la Brigada Anticorrupción, el cual analizó la prueba documental N° 869, inscripciones y facturas de compras de camiones, algunos comprados en efectivo, a nombre de la sociedad Servicios de Asesoría, Logísticos y Transporte que mantienen los tres hermanos. Añadió la fiscalía que la defensa había mostrado el libro de ventas (prueba documental N° 410 de la defensa), el cual sólo dio cuenta de que en el mes de abril de 2014 aparecía registrada la primera factura a la empresa Sunpack, de José Vargas Silva, al cual, según Bustos, le había otorgado créditos y que los pagos que a él se le hacían correspondían a los arriendos de estos camiones, esto a pesar que el mismo Vargas se desempeñó como representante de la empresa FEALFRA. Asimismo, la defensa había exhibido un contrato de arriendo del mes de noviembre de 2012, suscrito entre Nelson Bustos y José Vargas (prueba documental N° 412, de la defensa), el que, sin embargo, no había sido firmado

ante notario, documento que, además, ninguna persona había comparecido reconociéndolo, ni siquiera el acusado Nelson Bustos Morgado. La situación descrita contrastaba con otros contratos de los años 2017 y 2018, de la misma sociedad, que también presentaron como prueba, los cuales, a diferencia del anterior, sí fueron firmados ante notario. Señaló que al comparar las dos actas de entrega de cheques de los años 2011 y 2012, se apreciaba que las firmas y la tinta utilizada para ello eran iguales (prueba la documental N° 412). Por otro lado, destacó que el monto del arriendo de los camiones era de \$2.000.000, lo no se condecía con varios depósitos muy superiores a esa suma.

Preguntándose cuál sería la contraprestación, hizo referencia al deber de abstención, que es la infracción al cargo que ejecutó Christian Bustos y que establece el artículo 4° de la Ley N°19.880, sobre Bases de procedimientos Administrativos, en materia de licitación públicas en la que compiten varias empresas, el principio de la imparcialidad cobra relevancia, imprescindible para tranSPArentar el proceso y da seguridad que va existir igualdad en la forma de evaluar a los oferentes. En el art. 12 se encuentra consagrado este deber de abstención, el que cobra mayor relevancia debido a las funciones que cumplía al ser el jefe y fiscalizador estas licitaciones, “las autoridades o funcionarios de la administración en quienes se den algunas de las circunstancias que se indican, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediatamente N°2: “tener parentesco o consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedad interesadas y tmb con los asesores representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento....” N°5: “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.” Consideró completamente probados ambos numerales.

En relación a lo anterior, refirió que con la prueba documental N° 886, se había constatado que ante el Servicio de Impuestos Internos Tobar era el contador de la empresa Asesorías y Servicios Logísticos Bustos Morgado.

La forma en que intervino contraviniendo su deber de abstención, se demostró al ser Bustos el jefe y fiscalizador de la forma en que se efectúan estas licitaciones

públicas, a pesar de lo cual intervino firmando el acta de la Comisión Evaluadora (prueba N° 669, resolución que nombra la Comisión Evaluadora), la cual, conforme declararon los testigos de Chile Compra, era de la mayor relevancia. En cada acta Bustos dijo que constaba su visto bueno, V°B°, por ende, avalando un procedimiento viciado. En el caso de Hualañé si bien no firmó el acta, ello se debió a que no había formado parte de la Comisión evaluadora, no obstante lo cual, como consta del respectivo informe técnico, N° 750 de fecha 3 de octubre de 2011, la Comisión dejó constancia que la licitación debía dejarse desierta y no pedir aclaraciones, como lo estaba ordenando el Comandante Christian Bustos, por lo que se le representó la orden verbal, en la que, sin embargo, insistió. A mayor abundamiento, los miembros de la Comisión declararon que conforme a las bases de la licitación no procedía aclaratoria cuando existían partidas no ofertadas. Con todo, la licitación y las obras se le adjudicaron a la empresa FEALFRA. Así, los testigos Francisco Socías, Parraguez y Fabián Gutiérrez declararon: a) el primero, que la comisión evaluadora propuso declarar desierta, que se dio una instrucción verbal en orden a pedir aclaratoria, pero que se había representado la orden en ese mismo informe ya que los sobres habían sido abiertos y por tanto se conocían los montos y los plazos, por lo que era posible deducir quién sería el adjudicado, en este caso FEALFRA; b) la segunda testigo declaró que Bustos había dicho en esa oportunidad que no podían declarar desierta la licitación, *así que teníamos que pedir aclaratoria a todas las empresas y ahí fue que Juan Francisco Socías se enojó, porque no correspondía*; entonces por eso hicimos presente en el informe, que de acuerdo a la orden que él había dado se iban a pedir las aclaratorias y así se hizo; y, c) el tercero declaró: “el Comandante Bustos pidió que por favor, para que el proyecto no se cayera, para poder cerrar el proceso financiero, que se gastaran los fondos y que el Cuartel pudiera reponerse, se les pidiera aclaratoria a todos los oferentes; siendo que ninguno había cumplido. Y por lo que recuerdo la asesora jurídica dijo que no, que no era correcto, no quería hacerlo, pero entiendo que hubo una orden directa del Comandante para que se solicitaran las aclaratorias a todos los oferentes...”

En cuanto a las licencias médicas aportadas por la defensa, éstas dieron cuenta de la ausencia del acusado por razones de salud, no obstante Gutiérrez dijo que Bustos nunca faltó al trabajo, siempre llegaba primero y que era el último que se iba, y que en esa época había trabajado de manera telemática, lo cual demostró el nivel de intervención que tenía el acusado en el Departamento de Cuarteles. La prueba documental N° 827 (informe N° 1.089 de Chile Compra) constató que

Bustos había participado e intervenido en todos los procesos cuestionados autorizando la publicación de las licitaciones.

Explicó la acusadora que la contraprestación que hubo de parte del acusado infringió el deber de abstención que establece el artículo 4º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, y el principio de imparcialidad que expresan los numerales 2º y 5º, del artículo 12 de la citada Ley. A dichos efectos, citó y reprodujo el considerando 40º (página 2.145) de la sentencia dictada con fecha 16 de abril de 2021 por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, RUN (rol único de causa) 1410025253-9, RIT (rol interno del tribunal) 309-2018, por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y otros:

“La obligación de ejercer el cargo conforme al principio de probidad, esto es, de manera honesta y leal, con preeminencia del interés General sobre el particular, además de ser un deber establecido en la propia Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en su artículo 5º A - como ya se señaló- tiene rango Constitucional en su artículo 8º inciso primero y también está recogido en varios textos administrativos como la Ley General de Bases de la Administración en su Título III “De la Probidad Administrativa” (a la época de los hechos) en los artículo 54 y siguientes, señalando que todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar cumplimiento al principio de la probidad administrativa, bajo el cual se prioriza el interés General sobre el particular.

Es más, en materia interpretativa, la ley 18. 575 de utilidad al caso, en su artículo 55 precisa que: “el interés General exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.”

En el considerando 40° del fallo referido, se cita al autor Guillermo Oliver C., quien a propósito de este elemento señala en relación al cohecho que *“un funcionario infringe los deberes de su cargo al ejecutar un acto cuando con su realización contravienen las disposiciones que regulan el desarrollo de las funciones propias del cargo o del servicio al que pertenece. Estas disposiciones pueden estar situadas en textos normativos tan diversos como una ley, un reglamento, un instructivo, una circular, etc. Contra lo que pudiera creerse esta infracción de deberes del cargo de funcionario no solo se puede presentar en el ejercicio de su actividad reglada, sino también dentro de la discrecional, particularmente esto último puede tener lugar cuando el acto discrecional que realiza importa una desviación o un exceso de poder que se le ha conferido”*. Continúa el autor argumentando que “según se razonó en el inicio del cohecho, si bien esperable de todo funcionario público que cumpla con los deberes de corrección y probidad, por ser precisamente personas que ostentan una labor de relevancia social traducido en una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal del cargo, ello no es suficiente para criminalizar una conducta, porque no se trata de un simple reproche por el cargo, sino que se requiere, además, que esa deslealtad o falta de honestidad del empleado público, citando en este punto a la profesora María Magdalena Ossandón, tenga un correlato en la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía.”

Finalmente, señaló que los hechos fueron reiterados porque la presentación de una factura daba inicio al proceso de pago por parte de Carabineros de Chile, generándose a partir de allí informes técnicos y posteriores estados de pago. En cada una de esas oportunidades los dineros quedaban disponibles para ser utilizados libremente.

b) el querellante inició su alegato destacando la contundencia del alegato de la fiscalía, el cual, además, hizo suyo, señalando que por tanto se centraría en algunas cuestiones puntuales. La primera de ellas fue el concepto de la probidad y su vinculación con los hechos de la acusación. Citó y reprodujo el artículo 54 de la Ley 18.575: *Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria*

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés General sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso). Respecto del interés General a que alude la citada disposición reprodujo y citó ahora el artículo 55 de la misma ley: *El interés General exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.* Sobre la base del interés General y del correcto y recto ejercicio de la función pública, señaló que su infracción es la que en definitiva sanciona el artículo 239 del Código Penal y, con ello, al funcionario deshonesto.

Conforme a los citados artículos el sujeto activo es un funcionario público, cuyo era el caso de Bustos y Pizarro, como demostró la prueba y reconocieron los acusados al momento de la declaración en el sentido de su condición de tales a la época de los hechos. Refirió que Bustos no fue sancionado en el sumario de Carabineros únicamente porque ya no era funcionario activo, no obstante ser culpable, conforme lo señaló la resolución del sumario.

Tratándose de Gutiérrez y Rojas, ellos no eran funcionarios públicos, pero efectivamente intervinieron en la perpetración del delito. Si Gutiérrez no hubiere emitido las facturas para los estados de pago y si Rojas no las hubiere llevaba al Departamento de Cuarteles, no se habría producido el fraude. Hizo referencia a las distintas posiciones doctrinarias que existen respecto de la participación de los particulares en el delito de fraude al Fisco, indicando que una de ellas sostiene que el delito que cometerían los particulares sería la estafa, opinión de la cual difirió por no concurrir el elemento engaño ni una falsa representación de la realidad, como exige este último delito. La condición de funcionario público no es una condición personal, ello sólo rige para las circunstancias atenuantes y agravantes. Señaló que la posición del Consejo de Defensa del Estado es la tesis de la comunicabilidad extrema. Retomando el elemento engaño señaló que

ninguno de los acusados engañó al otro ya que la prueba demostró participación y conocimiento de los cuatro acusados. El Director nacional de Logística tampoco fue engañado porque él no era quien disponía patrimonialmente de los recursos fiscales. Pero tampoco el Departamento de contabilidad fue engañado, desde que el perjuicio lo sufría el Fisco. Aludió la sentencia de 23 de marzo de 2022, dictado por la Corte suprema, rol 7006-2021, siendo de ella atinentes y relevantes los considerandos 14º y 22º, particularmente este último, en el cual se aborda la discusión en cuestión, y en el cual se cita un artículo publicado por el autor Héctor Hernández en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso (págs. 202 a 238). En la citada sentencia la Corte Suprema se dijo que *entender el delito de fraude al Fisco como estafa significaría que existe una persona natural a quien se le representa una falsa representación de la realidad con miras a una disposición patrimonial en su beneficio, lo cual es impracticable tratándose de una persona jurídica*. Citó además el querellante al autor Juan Pablo Mañalich, quien en su libro “...” (año 2012), páginas 357 a 377, señala que *el injusto está dado por el perjuicio patrimonial que se comete desde dentro y no desde fuera, a diferencia de la estafa*, como ocurrió en la especie, en que nadie engañó a nadie sino que se administró deslealmente el patrimonio fiscal. Refirió que en el citado fallo la Corte Suprema concluyó que el fraude al Fisco es un delito autónomo que no tiene nada que ver con la estafa, y que siendo autónomo corresponde determinar si la condición de funcionario público se comunica o no a los particulares. La teoría de la comunicabilidad extrema sostiene que sí se comunica. La incomunicabilidad del Código Penal, expresada en el artículo 64, sólo dice relación con circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Con la tesis de la comunicabilidad extrema se logra la unidad del título de imputación y de esa forma sancionar a todos los partícipes bajo un mismo tipo penal. A estos efectos citó la sentencia de fecha 10 de octubre de 2006, rol 5419-2013, contra Juan Pablo Dávila y otros, en la cual todos los partícipes fueron condenados como autores de negociación incompatible. En los considerandos 13º y 14º del fallo dictado contra Cruz y otros, se señala, equivocadamente, que el fraude al Fisco es un delito impropio y que tiene su correlato en la estafa, pero a continuación sostiene, esta vez acertadamente, que la condición de funcionario público sí se comunica a los particulares, ello sobre la base de que todos conocían la condición de funcionario público que tenía Cruz. En apoyo de lo anterior citó una sentencia de 17 de diciembre de 2015, rol N° 17014-2015, contra Isidoro Camacho Muñoz y otros, en la que se condenó como autores de fraude al Fisco tanto a particulares como a funcionarios públicos.

En la especie, quedó demostrado, en todos los casos, inclusive en el de Villa Ortega, habida cuenta de la Comisión que se creó para la terminación de la obra, y no para el hermoseamiento de las mismas, la cual trabajó desde el día 11 al 22 de noviembre de 2013. Esto generó un gasto de más de \$7.000.000. En septiembre de 2013 se hizo el último pago a CGM por Villa Ortega, circunstancia que resulta relevante en torno a la prescripción. Hizo presente que cada uno de los 32 estados de pago fue por más de 400 UTM, por lo que debe aumentarse en un grado la pena. Lo anterior, sin perjuicio de la reiteración del delito: hubo cuatro (4) contratos, cuatro (4) resoluciones y cinco addendum, y por ende, varias acciones defraudatorias.

Por lo anterior el único artículo aplicable a todos los acusados sería el 239 del Código Penal, en su modalidad del inciso tercero, esto es, aumentando la pena en un grado atendida la cuantía del perjuicio, superior a 9.000 UTM.

En cuanto a la prescripción de la acción penal indicó que el artículo 233 del Código Penal señala que la formalización produce el efecto de suspender la prescripción de la acción penal, pero no dice que no existan otras formas de suspensión. Hubo cuatro formalizaciones y reformatizaciones: el 16 de septiembre de 2016, el 9 de marzo de 2018, el 25 de mayo de 2018 y el 28 de septiembre de ese mismo año. El artículo 233 se remite al 96 del Código Penal, el cual prescribe que se suspende la prescripción de la acción penal cuando la investigación se dirige contra el imputado. Señaló, además, que existían querellas y ampliaciones de querellas, las cuales también producían el efecto de suspender el curso de la prescripción: la primera, de 17 de octubre de 2014, ampliación de 3 de mayo de 2016, otra de fecha 28 de noviembre de 2016, 17 de abril de 2017, 22 de junio de 2018 y, finalmente, el 16 de octubre 2018, oportunidad esta última en la que la ampliación dijo relación con una precisión jurídica. En consecuencia hubo una actividad procesal constante.

El último cohecho fue en diciembre de 2013 (Tobar), y en noviembre de 2013 el delito de fraude, los cuales hicieron perder todo el tiempo transcurrido hasta esas fechas.

En cuanto a la prescripción de la acción civil, esta tampoco concurría, aun cuando entre el 2013 y la fecha de interposición de la demanda transcurrieron 5 años,

siendo la prescripción contractual de 4 años. Citó al efecto el caso de un procedimiento abreviado, luego del cual, dos meses después él Fisco demandó a los condenados, quienes se excepcionaron alegando la prescripción, la que fue acogida en primera y segunda instancia, pero anulada el 26 de julio de 2021 por sentencia de casación rol N° 1434216-2016, caratulada Fisco con Fuentes, del 6° Juzgado Civil de Santiago, rol civil 3-2353-2017. En esta sentencia la Corte Suprema señaló que de acuerdo con los artículos 60, 61 y 63, 173 y 174 del Código Procesal Penal, la querella y su ampliación tenían la virtud de preparar la acción civil y, por ende, suspenderla. Al respecto, indicó el querellante que lo resuelto por la Corte era lógico y correcto porque la querella y las diligencias que en ella se piden tienden al establecimiento de los hechos. En la especie, la demanda civil se interpuso en la oportunidad procesal que señala el Código Procesal Penal, toda vez que era en ésta sede penal y en esta causa en la que debía interponerse la demanda.

En otro orden de ideas señaló que la intención de Gutiérrez no había sido terminar los trabajos que se adjudicó ya que las razones climáticas que adujo para no hacerlo no le habían impedido emitir los estados de pago, toda vez que las obras habrían estado paralizadas por la citada razón. Lo anterior demuestra el ánimo de defraudar.

En cuanto al “hecho 2”, indicó que los hechos constitutivos del fraude dejaban de manifiesto la conducta dolosa de los acusados. Refirió que *lo que aquí lo hubo fue que las adjudicaciones fueron hechas bajo un procedimiento viciado*. En el caso de Alejandro Soto Jara, su participación no habría sido posible sin la ayuda de Rodrigo Bustos ya que él dijo no saber nada acerca de las licitaciones y obras de Carabineros, siendo por tanto relevante la ayuda de Rodrigo y con él la de su hermano Christian Bustos. Indicó que posteriormente se incorporó Nelson Bustos. Explicó que la llegada de la empresa de Soto Jara se debió a que la empresa de Osvaldo Tobar no se encontraba inscrita en el Registro de Carabineros. Las triangulaciones aludidas por la fiscalía tuvieron lugar tanto con la llegada de Alejandro Soto Jara como con la de FEALFRA, recibiendo los hermanos Rodrigo y Nelson dineros que posteriormente transferían a su hermano Christian Bustos. Tales transferencias y depósitos son suficiente prueba de los delitos de cohecho y soborno.

Agregó que la reunión de Grossman con Flores y Rojas tuvo lugar seis (6) días antes de la terminación anticipada de los contratos y ocho (8) días antes de que Rojas depositara \$1.000.000 a la cuenta de Félix Flores. Destacó que en esa reunión se le habló de trato directo. Grossman atestiguó que no hubo otra empresa que la suya participando en el trato directo. Indicó que los *vistos* de la resolución que autorizó la inscripción de la empresa Grossman daban cuenta de informes de evaluación de fecha posterior a la de la resolución en cuestión.

c) la defensa de los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado:

Solicitó y reiteró la petición de absolución de cada uno de los acusados, toda vez que no rindió prueba legal ni suficiente para demostrar los hechos materia de la acusación ni la participación de sus representados en los mismos.

Las conclusiones los dividió en cuatro capítulos: I) medios de prueba rendidos e incorporados pero que no podrán ser valorados en esta sede penal; II) testigos que no declararon en fiscalía, que tampoco podrán ser valorados; III) promesas fácticas e inculpativas de la fiscalía en su acusación que no fueron acreditadas, señalando que en el hecho 1 son catorce (149; y, IV) en el hecho 2 se harán alegaciones de incongruencia y prescripción, infracción a los deberes del cargo, inexistencia de prueba respecto al parentesco de consanguinidad del 4to. grado entre los acusados, participación imputada a Christian Bustos Morgado y los traspasos de dineros entre ellos e inexistencia de la determinación del perjuicio.

A su parecer, los acusadores en este juicio, en las alegaciones de clausura dieron por sentado hechos y circunstancias a partir de particulares interpretaciones de la prueba rendida, efectuando una interpretación forzada, errónea e incluso apartándose de las palabras o acontecimientos vertidos en juicio.

Respecto del punto I, la prueba rendida e incorporada pero que no podrá ser valorada por infringir las normas del debido proceso, por haber sido producidos e incorporados al margen del Código Procesal Penal, señaló lo siguiente:

La prueba pericial y documental que se apartó de los artículos 79 y 180 del Código Procesal Penal, correspondería a seis documentos: 1) Prueba del

ministerio público N°1, esto es, el informe técnico N°125, correspondiente a la visita de terreno del retén Lago Castor 2) Prueba del ministerio público N°6, informe técnico N°126, visita a terreno a tenencia de Carabineros de Coyhaique Alto; de 17 de febrero de 2014; 3) prueba del ministerio público N°12, informe técnico N°127 de la misma fecha que el anterior; 4) prueba documental del ministerio público N°1.068, informe técnico de 3 de enero 2014, de Lautaro Silva Estay; 5) prueba del ministerio público N°1.069, informe técnico N°3 de 8 de enero de 2014 y sus anexos fotográficos, también de Lautaro Silva Estay; y, 6) la prueba del ministerio público N°1.076, informe de la visita efectuada a los proyectos de inversión en la XI zona de Carabineros, elaborado por Gustavo Aravena el 30 de enero de 2014.

En relación a los peritos, señaló que los cuestionamientos se efectúan al perito signado con el N°7 del auto de apertura, Ronald Saldías Toro y a la perito indicada en el N°6, Constanza Cerpa Mena.

Respecto de los informes técnicos N°125, 126 y 127, elaborados por el Departamento L1, corresponden a actuaciones realizadas al margen de las reglas contenidas en el Código, respecto a la forma en que las policías deben realizar las actuaciones de investigación, por lo tanto, no pueden ser valorados; porque no pueden realizar al arbitrio o antojo del fiscal, están reguladas en el Código y de esa forma deben establecerse. Así lo ha estimado la Excma. Corte Suprema y de modo ejemplar citó la sentencia ROL 37.213-2017, que en lo pertinente nos indica: “en lo atinente a la garantía constitucional del debido proceso, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos garantizados por la Constitución no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad y por lo tanto obligatorios para la decisión de cualquier pronunciamiento para el caso sometido a su decisión.”

En efecto, el artículo 180 del Código Procesal Penal, establece que los fiscales dirigirán la investigación por sí, o podrán encomendar estas diligencias de investigación a las policías y en este sentido el artículo 79 del mismo Código identifica a la policía como un auxiliar del ministerio público en las tareas de investigación, los cuales deberán desarrollar sus actuaciones conforme a las instrucciones que imparta la fiscal. En consecuencia, salvo los casos de flagrancia

no puede realizar de manera autónoma diligencias de investigación, salvo lo previsto en el artículo 183 del mismo cuerpo normativo.

Los mencionados informes, 125, 126 y 127, tal como lo manifestó el Coronel Muñoz Soto, Jefe de la Sección después de Christian Bustos Morgado, que esos informes fueron confeccionados el 17 de febrero por funcionarios de carabineros, miembros del Departamento L1, por orden del Coronel Águila jefe del Departamento quien tampoco declaró en el juicio; de manera que la confección de ellos fue dispuesto por una instrucción directa del mando; no fueron precedidos de una instrucción verbal o escrita de ningún fiscal. Más aún, dichos informes tampoco fueron corroborados por alguna diligencia de investigación posterior decretada por el ministerio público; ya que al ser incorporados en la respectiva denuncia que da inicio a este proceso penal, correspondía generar a partir de dichos informes otras diligencias o actuaciones válidas de investigación, por cuanto el debido proceso implica que la persecución penal del estado es reglada y si como en este caso, fueron forjados por el propio denunciante, dichas actuaciones debieron haber sido corroboradas por otros medios de prueba.

Respecto de los informes de Lautaro Silva, prueba documental N° 1068 y N°1069, manifestó que fueron elaborados al margen de los mencionados preceptos legales. Su realización fue ordenada por el Director de Logística de Carabineros en el marco de las inauguraciones de los retenes policiales, además presentan inconsistencias en su contenido. Agregó que al exhibírsele ambos documentos al declarante, reconoció las inconsistencias en las respuestas entregadas por el ITO Pizarro, y en el otro más desarrolladas, y tampoco tenían su firma. En cuanto a su testimonio, advirtió desde ya, que no había declarado ni siquiera en el sumario administrativo, tampoco en la fiscalía, infringiendo el deber de registro; quedando develado que se reunió durante el transcurso del juicio con la fiscal, lo que se profundizará más adelante.

En cuanto, al documento 1076 (informe de Gusto Aravena, visita a proyectos de inversión en la XI Zona), le hace el mismo reproche, no fue dispuesto por el MP sino por la institución policial, con la agravante que el señalado Aravena no declaró en el tribunal.

En relación a los peritos Saldías y Cerpa, ambas pericias fueron decretadas por Gutiérrez Gambaro, como fiscal sumariante de Carabineros en el marco de un proceso administrativo sancionador. Sus informes no obedecieron órdenes o instrucciones de un fiscal del ministerio público. Tampoco con posterioridad fueron citados al ministerio público a declarar, ratificar sus dichos o explicar su metodología. A pesar de lo anterior, la defensa rescató de los dichos de Ronald Saldías, en cuanto concluyó que los estados de avance informados por el ITO Pizarro eran superiores a los fondos facturados por la constructora CGM, conclusión distinta a la teoría del caso de la propia fiscalía.

Reiteró que este perito declaró con la fiscal el día antes que se presentara al juicio, cuando éste ya llevaba más de cuatro meses de desarrollo, ignorándose totalmente el contenido de la entrevista porque de aquella no hubo registro.

Concluyó que sus probanzas son forjadas u obtenidas al margen de los artículos 79 y 180 del Código Procesal Penal y respecto de los peritos, más aún, sus informes fueron obtenidos al margen de lo dispuesto en los artículos 314, 315 y 316 del Código Procesal Penal.

Como el capítulo, solicitó no ponderar testigos por cuanto en su declaración hubo intervención o influencia de otros testigos o de terceros. El artículo 329 inciso sexto, ordena que, antes de declarar los peritos y testigos no pueden comunicarse entre sí ni ser informados de lo que ocurriera en la audiencia. En el presente caso, se pudo advertir que dicha instrucción no se cumplió, ya que la fiscal en forma previa y durante el desarrollo del juicio se reunió con seis testigos y peritos, reuniones que se realizaron a instancias de la fiscal, una vez iniciado el juicio oral, habiendo prestado declaraciones otros testigos, señalando que en dichas reuniones se habló sobre hechos que motivaban la realización del juicio.

El propio agente estatal es quien decide realizar estas reuniones, a espaldas de las defensas, teniendo la obligación de cumplir e instar por el cumplimiento de las normas; generando un riesgo para el debido proceso, afectando con ello el derecho de la parte a que la declaración se haga sin intervención o influencia de terceros.

Estos testigos fueron: 1) Lautaro Silva Estay, quien, ante las preguntas de la fiscalía al exhibírsele el documento, señaló que reconocía el documento, porque están sus observaciones y sus fotografías, a pesar de indicar que no es el original porque no venían sus respuestas que estaban después de sus observaciones, agregando que había visto el documento con anterioridad, cuando conversaron. A las preguntas del querellante, reconoció haberse reunido con la fiscal sin haber declarado previamente en la fiscalía.

2) El testigo N°8, Ignacio Labra Moscoso, manifestó que se le había citado a una reunión con la fiscal, antes de la pandemia, no sabe si preparando el juicio oral, pero para saber su versión, la que relató; agregando que se habían reunido, además, hace dos semanas y la fiscal le comentó que ya se iba a retomar todo y conversaron sobre lo que había declarado. Indicó que esas reuniones fueron solo verbales, en las anteriores firmó un papel, pero en la reunión no, solo habían conversado.

3) Omar Gutiérrez Gambaro, quien señaló que no declaró, que tuvo citaciones de parte de la fiscalía cuatro veces, una vez presencial, dos virtuales y una con el Sr. Gajardo en la Fiscalía de Alta Complejidad. Agregó que con la Fiscal Encina tuvo una entrevista presencial y dos virtuales, por requerimientos de la fiscal respecto de algunas dudas del sumario administrativo que él se las tenía que aclarar. La primera, presencial fue a principios de 2020 y las otras hace 15 días atrás, duraron alrededor de una hora y media o dos horas cada una, no firmó acta y no había defensores presentes. No recordó si había una declaración escrita en el ministerio público, sin embargo, se le exhibió la declaración prestada el 20 de marzo 2018, que es la única declaración escrita en fiscalía;

4) Testigo José Henríquez Orrego, quien manifestó que no prestó declaración en fiscalía, indicando que la única huella en la investigación son sus conclusiones y dando cuenta de múltiples reuniones en la fiscalía, no solo con la fiscal del caso sino algunas de ellas con el funcionario de la fiscalía sr. Castro, sin que hubiera registro de esas reuniones en la investigación.

5) Testigo Matías Navarrete Millón, quien indicó que con la fiscal prepararon la declaración, reconociendo que se reunieron una vez antes de prestar su declaración en juicio.

6) Perito Ronald Saldías Toro, quien manifestó que no había declarado en fiscalía, agregando que telemáticamente había tenido un contacto el día de ayer con la fiscal y que no había firmado alguna constancia de esa reunión, que tampoco le exhibió los contratos ni las resoluciones que vio el día de la audiencia.

La fiscalía se extralimitó en su actuación, infringiendo el inciso sexto del artículo 329 del Código Procesal Penal, y consecuencialmente el principio de legalidad en sus actuaciones y los deberes propios del cargo. No cree que puedan ponderarse los testigos referidos.

Manifestó que así lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, citando la sentencia N° 37.213-2017, de 11 de octubre de 2017, dando lectura a lo que consideró pertinente del considerando 6to: “que la norma (refiriéndose al inciso sexto del artículo 329 del Código Procesal Penal) establece esta regla para efectos de evitar un acuerdo entre los testigos y en especial para asegurar que sus testimonios sean prestados sin influencia de terceros para que de esta manera no se afecte la exactitud y fiabilidad de la información que ellos proporcionen en el juicio oral. En el considerando 7°: Que en el caso sub-lite quedó acreditado que la fiscal se reunió con tres de ellos en dependencias del ministerio público a instancias del funcionario mencionado, una vez iniciado el juicio y que en dicha reunión se habló sobre los hechos que motivaban la realización del juicio. Considerando 8°: Con su actuar transgredió la norma citada y generó un riesgo para el debido proceso como el denunciado por la defensa en el recurso de nulidad. Concluye que se afectó el derecho de la parte respecto a que la declaración de los testigos se haga sin intervención o influencia de otros testigos o de terceros, propósito que como se expresó en el motivo sexto, tiene esta norma mencionada. Por esos motivos esa sentencia anula el juicio y ordena la realización de uno nuevo.

Como III grupo de prueba que no puede ser valorada, porque fue incorporada con infracción de garantía al traSPAsas o “trasvasijar”, sin más, la prueba de un sumario administrativo sancionador a una investigación penal. La prueba producida en el marco de un sumario administrativo no puede ser traSPAsada sin más, pura y simplemente al proceso penal, sin haberse adecuado los antecedentes a las normas que reglan el procedimiento penal. Si bien, ambas

tienen un origen común, eso no permite asimilar los principios y procedimientos de cada uno.

Existen una serie de normas y procedimientos propios del proceso penal, como por ejemplo la presunción de inocencia y el principio de inmediación material, los que no están consagrados en un proceso administrativo sancionador. La forma de rendición de la prueba en un procedimiento administrativo en General es escrita, no así en este proceso penal, que es oral mediante la exposición de los respectivos testigos y peritos para que puedan ser confrontados por las defensas a través del contra examen. Pero también, desde un punto de vista normativo, el Código Procesal Penal dispone de una serie de normas que concretizan estos principios, en el modo de obtener y producir la prueba, normas obligatorias que no existen en el proceso administrativo sancionador. Citó algunas, como el artículo 334 del Código Procesal Penal, que prohíbe, por regla General, incorporar o invocar, como medio de prueba o dar lectura durante el juicio a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o por el ministerio público; también, lo consagrado en el artículo 329 del mismo cuerpo legal, que dispone que los peritos y testigos que deben ser interrogados personalmente y su declaración no puede ser sustituida por la lectura de registros; en el mismo sentido están los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, en cuanto a la obligación de registro; lo preceptuado en el artículo 187, sobre la recolección de objetos e instrumentos de cualquier clase que puedan servir como medios de prueba, que deben ser recogidos, identificados y conservados bajo sello; el artículo 9°, que materializa el mandato, relativo a que toda actuación que pueda privar, perturbar o restringir derechos garantizados debe ser autorizados por un juez. A mayor abundamiento, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, aplicable en la especie por tratarse de documentos atinentes a planos, instalaciones y planes de operaciones o de servicio de dichas instituciones, que dispone que ciertos antecedentes que allí indica son secretos, por lo que para obtener medidas intrusivas que signifiquen su alzamiento se requiere la autorización del artículo 209 del Código Procesal Penal; lo que aquí no ocurrió.

Las pruebas obtenidas en el sumario administrativo, fueron hechas de acuerdo a los principios y reglas de ese procedimiento. Se pregunta si en un sumario administrativo puede recabar las comunicaciones internas de los funcionarios policiales documentos ordinario electrónicos (DOE) o NCU,

estimando que aquello es posible, sin embargo el fiscal del proceso penal debe solicitar las respectivas autorizaciones para obtenerlas y aquí, en cuanto a la prueba que se recabó en el sumario y se incorporó sin más, hubo un verdadero cortar y pegar probatorio, fueron traídos directamente al juicio, del cual se extrajeron peritos, fotografías, declaraciones y numerosas evidencias que se incorporaron al juicio oral.

Reconoce que en el sumario administrativo había información que pudo haberse obtenido de fuentes abiertas, como lo fueron los contratos, las bases de licitación y las resoluciones de las adjudicaciones, pero al menos los documentos ordinarios electrónicos que corresponden a comunicaciones escritas entre dos o más funcionarios de carabineros los consideró equivalentes a un correo electrónico interno, es una forma de comunicación amparada en la Constitución Política del Estado (artículo. 19 N°5), son además referentes al servicio policial, por ende, están sujetas al secreto dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Si la fiscalía estimó que los requería para su teoría del caso debió solicitar su incautación conforme lo dispuesto en el artículo 209 del Código Procesal Penal, lo que no se realizó, por lo tanto, no puede ser valorados.

Otro grupo de documentos, son la vista a fiscal de Omar Gutiérrez Gámbaro, la vista a fiscal del sumario de la contraloría, los descargos de Christian Bustos, de Félix Flores, de Luis Parra, de Francisco Pizarro, de Andrea Campusano, y otros; dentro de este grupo, solicita que por estos mismos razonamientos el informe final de investigación especial y sus anexos, en especial anexo N°4, que es el informe 283 del año 2015, emitido por la Contraloría General de la República de 16 de diciembre de 2015 y el informe referente a la vista realizada a los proyectos de inversión de la XI Región, de Gustavo Aravena.

Todos estos descargos fueron incorporados como prueba documental, infringiendo con ello el proceso penal, esa información debió ser ingresada por quienes aparecen suscribiendo esos documentos. Los citados descargos debieron incorporarse con la declaración de la persona. No son más que las versiones de los hechos, suscritas por quienes las entregan por escrito, destacando que ni siquiera declararon todas las personas que suscribieron esos descargos, como el señor Nadal, el señor Salamanca y la señora Campusano, los que consideró hubiera sido importante que comparecieran, por cuanto estuvieron en la comisión

que efectuó la recepción provisoria de Villa Ortega; y, se sustituyó en forma ilegal sus testimonios por una versión escrita entregada en un sumario administrativo, lo que no puede ser valorado, porque se burla el artículo 329 del Código Procesal Penal.

Respecto el informe final de investigación especial de la Contraloría, a su juicio la infracción es más grave, porque ese documento fue suscrito de manera genérica por Cristian Marambio Lizama, en su calidad de jefe del comité de auditoría de transporte y empresa Subdirección y Auditoría división de infraestructura y regulación de la Contraloría General de la República, el que no fue suscrito por los funcionarios que efectivamente realizaron la inspección de los retenes, ni siquiera señala el nombre de los profesionales que lo efectuaron, cuántos fueron, con quiénes concurrieron, sus competencias etc. Lo único que da cuenta la hoja 4 de dicho documento: “personal de esta entidad de control en visita a terreno efectuada los días 10, 11, 12 y 16 de febrero verificó que..” La información que contiene debió ser ingresada al juicio por el o los testigos o peritos, no se saben quiénes son, y el artículo 329 Código Procesal Penal establece que las declaraciones deben ser personales y no pueden ser sustituidas con la lectura de documentos que contuvieren esas declaraciones. Es un documento anónimo. La presentación del fiscal del sumario a la audiencia no suple esa falta y estos documentos no son útiles para fundar una sentencia penal.

El último documento que entiende que no podrá ser valorado, fue ingresado con infracción al artículo 334 del Código Procesal Penal, el cual se encuentra en el complemento del auto de apertura, con el N°917 y se refiere a dos líneas de tiempo, que dan cuenta de hechos de relevancia criminalística elaborados por el policía Henríquez. Señaló que este funcionario confeccionó estas líneas de tiempo como una actuación policial y tratándose de un registro de la investigación, que se acompañó como anexo al informe policial evacuado por dicho policía, destacando que afirmó que el principio de ejecución había sido en Tavelli de Manuel Montt, en abril de 2012.

El Segundo capítulo, serían los testigos que no declararon en la fiscalía y se presentaron en el juicio, estimando que tampoco pueden considerarse, porque se infringe la garantía del deber de registro, establecida en los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal. Si bien, el ministerio público tiene plena autonomía y

libertad para desarrollar sus investigaciones en esto tiene ciertos límites y obligaciones y la principal es la de registro y en consecuencia la presentación de testigos al juicio respecto de quienes no hay un registro previo de sus declaraciones priva a los defensores del ejercicio pleno de su derecho a defensa. Ellos son Lautaro Silva Estay y Jorge Santis Rebolledo, haciendo presente que éste fue miembro de la comisión en el mes de febrero de 2014 y que elaboró los informes 125, 126 y 127; Fabián Gutiérrez y Rodrigo Pérez Mujica. Esta falta hizo que la defensa no tuviera la posibilidad de confrontar o cuestionar sus dichos con los registros de declaración previa; siendo imposible de realizar un control cruzado de fidelidad de sus dichos. Lo anterior lo ha sostenido la Excma. C.S. en la causa Rol N° 5116-2012.

III.- proposiciones fácticas que no fue acreditadas por Fiscalía:

1°.- Respecto al Hecho 1:

La 1ª imputación se señala en el Párrafo 3° del Hecho 1, cuando se refiere a los trámites posteriores de la apertura del *“Luego, el representante del Departamento de Cuarteles L1, junto a los asesores, debían proceder a la revisión de los antecedentes de las empresas postulantes y determinar si cumplían con toda la documentación solicitada. En ese ámbito, era determinante y gravitante la intervención de los jefes superiores del Departamento de Cuarteles L1, Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, quienes tenían dichas operaciones a su cargo.”* Esa promesa fáctica se encuentra incumplida y existe prueba abundante que desvirtúa lo aseverado. Quedó de manifiesto en este juicio que después de la apertura del sobre, los profesionales que concurrían y que estaban a cargo eran de tres diferentes especialidades, elaboraban informes de las ofertas y se hacía por cada profesional en forma separada, se evaluaba por los distintos asesores, contables, jurídicos y técnicos, en base al precio, monto y comportamiento, se presentaba en una tabla de evaluación comparativa de las ofertas y se elaboraba la propuesta, proponiéndose al mando adjudicar a una empresa y era una proposición objetiva de acuerdo a los puntajes obtenidos según los criterios objetivos de evaluación.

Entre los testigos que declararon al respecto estuvo Jorge Muñoz Soto, quien sucedió inmediatamente en el cargo a Christian Bustos Morgado, como jefe

de la sección de coordinación y gestión de los proyectos y señaló que las comisiones evaluadoras la integran el personal técnico y profesional, el jefe de área no evacuaba informes de evaluación, solo daba el visto bueno que la comisión se constituyó, por transparencia.

A su turno, Juan Socías Vargas, manifestó que el jefe de sección no hacía ninguna de estas evaluaciones, la legal, la financiera o la técnica, su firma corresponde al de un ministro de fe, en el caso de las evaluaciones.

También el testigo, Isidro Bacigaluppi, refirió, que no era raro que Christian Bustos Morgado participara como jefe de estas comisiones técnicas, pero lo que hacía era validar la solemnidad del acto en sí, porque no intervenía en ninguno de los actos del proceso, nunca le obligó a aprobar una empresa jurídicamente, no le insinuó ni le pidió que designara una empresa. Cuando el jefe de sección firmaba un documento, le daba una validez. Agregó que si las empresas cumplen la parte jurídica y financiera la oficina técnica debe ver que cumplan con plazo y monto, esa es la forma de dirimir, la empresa que tiene menos oferta y menos plazo gana, es una ponderación, la oficina técnica ve si le va a dar más valor al plazo o al monto, entendía que esa evaluación la hacía un profesional, que a él le llegaba el documento para firmarlo cuando estaba aprobado y él confeccionaba la resolución, afirmando que cada profesional hacía las evaluaciones por separados. Nunca recibió presiones de Christian Bustos Morgado, respecto de Río Tranquilo y otras licitaciones.

Agregó que Christian Bustos Morgado lo que hacía era dar una validación formal de un acto sí, pero no podía evaluar una oferta. Nunca escuchó que alguien dijera que tenía predisposición hacia una empresa en particular.

Por su parte, Romina Parraguez Robles, señaló que en la apertura de sobres hay un ministro de fe, un abogado, un asesor jurídico, financiero y un técnico. Christian Bustos Morgado participaba como ministro de fe, cada documento se iba a las manos de una persona que los evaluaba, en la parte financiera y técnica. Después que se hacía la apertura de sobres esos antecedentes pasan a evaluación, Christian Bustos Morgado no tenía ninguna participación en las evaluaciones, les podía preguntar cómo iban; no recibió nunca una instrucción de beneficiar a una empresa en particular, afirmando que ella tenía

plena autonomía para hacer esas evaluaciones. Agregó que en el careo le preguntaron si el Comandante Bustos daba órdenes de cómo se tenían que adjudicar las obras, la revisión de los proyectos, respondió que no, porque él no decía como tenía que hacer su trabajo; solo las situaciones que mencionó, Río Tranquilo, Hualañé y constructora CGM.

Otro testigo de cargo, Fabián Gutiérrez Salazar, (que no declaró en la fiscalía ni ante la policía), quien señaló que la participación de Christian Bustos Morgado era velar por el procedimiento, no intervenía más, el jefe de área se presentaba y daba la bienvenida, pero era el asesor jurídico quien tomaba la guía del proceso y leía la documentación. Agregó que eran las tres cosas las que se evaluaban, los documentos legales, que estaban a cargo del asesor jurídico, los antecedentes financieros los evaluaban en la oficina de presupuesto y finalmente el expediente, que eran los que ellos revisaban y dentro de la oficina de revisión se hacía un análisis comparativo de todo lo que presentaba el oferente para ver en detalle si cumplía con lo que se había solicitado. Cada área lo hacía a puerta cerrada en su lugar de trabajo. Christian Bustos Morgado no tenía ninguna participación directamente, técnicamente la evaluación la hacían ellos y Christian Bustos Morgado fiscalizaba para que se hiciera todo correctamente, les entregaba los medios para que pudieran hacer ese trabajo y si necesitaban alguna aclaratoria ellos la pedían por documentos y él se encargaba de transmitir esto a la jefatura. El no participaba en la evaluación de los antecedentes, afirmando que nunca le ordenó evaluar alguna empresa, tenía total autonomía para realizar su trabajo.

Por su parte, Nicolás López Reyes, afirmó que el Comandante Bustos técnicamente nunca dio una orden directa más allá de priorizar una carpeta sobre otra, un trabajo sobre otro, dando una explicación razonable. La regla General era que el Comandante Bustos no intervenía en la parte de evaluación, más allá de la premura de un proyecto sobre otro. Ni Christian Bustos Morgado ni Félix Flores le ofrecieron un incentivo para favorecer a la empresa Grossman.

El testigo don Omar Gutiérrez Gambaro, manifestó que en carabineros un victo bueno significa que la persona está dando fe de que el acto administrativo se desarrolló en los términos escritos en el respectivo documento, que los intervinientes efectuaron lo que se desarrolló. Agregó que desde su génesis hasta

su licitación y adjudicación los procesos licitatorios no adolecían de irregularidades, aparentemente no tienen mayores observaciones, estas vienen porque lo que se pagó difiere de lo que estaba construido y las irregularidades en obras, por ejemplo, la falta del libro de obras.

Asimismo, Matías Navarrete Millón, quien indicó que la segunda conclusión es que no existían observaciones de norma en cuanto a las bases de las licitaciones. Había solo un aspecto particular, que, si bien no reñía con la normativa, a su juicio hacía que participaran menos proveedores, que era el requisito de estar inscrito en el registro de contratista Carabineros.

La tercera conclusión a la que llegó este testigo, fue que los criterios de evaluación eran objetivos, precio, plazo y comportamiento y en General el que preponderó era el precio y siempre ganaba la licitación el que presentó la oferta más económica. El fin que las empresas estén inscritas era que los oferentes tengan cierta calidad técnica financiera, pero no puede haber prohibiciones para contratar con el estado. No se adjudicaban de manera discrecional, se tenían que basar en la propuesta que tenía criterios objetivos. Las personas que estaban a cargo de las licitaciones debían sujetarse a la normativa.

La testigo Viviana Mora, también de Chile Compra, es conteste en señalar que los criterios de evaluación eran objetivos y cumplían con lo señalado en la Ley de compras públicas y es conteste con lo aseverado por el testigo Navarrete.

Concluyó el defensor que no había forma de manipular los procesos licitatorios, todas las licitaciones se hicieron conforme a las bases, adjudicándose las empresas que obtenía mejor puntaje, fueron diez los testigos citados que estuvieron contestes en aseverar lo anterior.

La 2ª promesa fáctica incumplida por la fiscalía. Que se encuentra en la parte final del cuarto párrafo del Hecho 1: *“Christian Bustos Morgado debía dirigir cada detalle de la ejecución de las obras que serían adjudicadas”*.

Previamente se hizo cargo de una alegación efectuada por la fiscal en la clausura, al indicar que *“las actas de entrega de terreno eran falsas”*, señalando que fue el mismo ITO quien en su declaración reconoció que la entrega de terreno

es incluso posterior, -tratándose de Lago Castor-, a la realización de los primeros estados de pago por ese mismo retén. Del mismo modo, el sr Pizarro reconoce que la entrega de terreno de Coyhaique Alto ni siquiera fue hecha en las obras como correspondía sino en dependencias del Departamento de cuarteles. Esta imputación es un hecho nuevo, puesto que en ninguna parte de la acusación se imputó que se hicieran por orden de Christian Bustos Morgado, actas de entrega de terreno falsas, este hecho vertido en el alegato de clausura no puede ser considerado en virtud del principio de congruencia. Haciéndose cargo, manifestó que la fiscalía incorporó el NCU 9022390, correspondiente a la prueba documental N°897, que da cuenta de la adquisición de los pasajes aéreos para materializar las entregas de terreno por parte de Francisco Pizarro, del 12 al 14 de diciembre, lo que coincide con la fecha del acta de entrega de terreno, que es de fecha 13 de diciembre del año 2012.

Volviendo a la acusación, manifestó que se imputó que Christian Bustos Morgado, dirigía la ejecución de cada detalle de las obras adjudicadas, frase que intenta vincular arbitrariamente al Comandante Bustos con los estados de pago que realizaba autónomamente el ITO de las obras. Tal como declararon los testigos, atendido lo dispuesto en el D.S 294, los ITOS son los responsables legalmente de la ejecución de las obras de construcción o reposición de cuarteles policiales y, además, son autónomos en el ámbito de sus especialidades en la toma de decisiones.

De acuerdo con lo señalado por el testigo Jorge Muñoz Soto, el jefe de sección también estaba a cargo de la ejecución, pero la empresa responsable era la empresa contratista con la supervisión del ITO, lo que está regulado en el D.S. 294, es el ITO quien se preocupa de los avances y que se vayan respetando con los plazos de ejecución.

Recordó también lo señalado por Juan Socías Vargas, en cuanto a que uno de los elementos en el trabajo de los ITOS es la importancia del libro de obras, por medio del cual el ITO deja las instrucciones o especificaciones técnicas a la empresa.

Asimismo Jorge Santis Rebolledo, -(quien tampoco declaró en fiscalía)- manifestó que la función principal de ITO es velar por que la construcción se

ejecute según el mandato de la institución, que los materiales sean los correctos, velar por los pagos y avances, por todo el proceso de fiscalización. La información que se entrega como ITO se supone que es verídica, el jefe nunca va a las obras a verificar lo que expone el ITO, el jefe se queda con la información que se lo entrega.

El abogado Isidro Martínez, señaló que conforme lo dispone el reglamento, es el ITO quien representa al Fisco en una obra policial y debe velar por el buen construir de esa obra. La facultad del jefe es una facultad de control, el ITO es el experto de una obra, él determina los avances conforme a los itemizados, el jefe tiene un control en la parte administrativa, que efectivamente el ITO desarrolle su trabajo conforme al reglamento, puede cambiar o nombrar otro ITO, también lo evalúa, pero no es quien está a cargo de la parte técnica.

Lautaro Silva Estay, señaló que el ITO es el nexo entre el mandante y el que ejecuta y su misión es velar por el fiel cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas. El ITO es el responsable de la ejecución y de la fiscalización.

Fabián Gutiérrez Salazar, manifestó que los ITOS podían llegar a comentarle de manera informal en el pasillo cuando volvían, le entregaban la información a Andrea Campusano y ella juntaba la información en una planilla y se la traSPAsaba al mando, se la hacía llegar a Christian Bustos Morgado. Indicó que la labor del ITO era asesorar al mando en los aspectos técnicos.

Nicolás López Reyes, manifestó que dado el principio de especialidad eran los ITOS los que estaban a cargo de fiscalizar las obras y el deber de los ITOS era ejecutar lo que está en el proyecto, en las especificaciones técnicas y en los itemizados.

Jorge Rojas Langer, también afirmó que es función del ITO velar y fiscalizar el cumplimiento de la obra, porque la obra se desarrolle en el plazo de ejecución.

Omar Gutiérrez Gambaro, indicó que en cuanto a la ejecución hay que estarse a lo que dispone el D.S. 294, que dispone que es el ITO quien está obligado a que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de

ejecución estipulado en el contrato, además es el ITO quien debe velar directamente por la correcta ejecución de las obras y por el cumplimiento del contrato.

También se incorporó como prueba documental el decreto Supremo 294.

Concluyó que todos los testigos de cargo refirieron que la persona a cargo de la ejecución de las obras nexa entre el mandante y el contratista es el ITO cuyas responsabilidades, derechos y obligaciones están establecidas en el DS 294. El control de Christian Bustos Morgado sobre los ITOS, es un control netamente administrativo o de mando, no técnico. Este control también lo tenía el jefe del Departamento L1, entre los años 2010 y 2011 Walter Spring, tío de Francisco Pizarro y también lo tuvo en los años 2012 y 2013, Félix Flores.

De acuerdo a la prueba rendida por la defensa, N°388, durante el año 2011 al 2013 se ejecutaron más de 127 proyectos de reposición de cuarteles que representan el 33% de todos los cuarteles de Carabineros que existen a nivel nacional lo largo del país, que de acuerdo a la prueba documental N°577 de la defensa, son en total 386 retenes. Todos fueron auditados y solamente presentaron problemas de ejecución cuatro de ellos.

No había motivo para desconfiar de la información que el ITO entregaba.

3ª promesa fáctica incumplida de la fiscalía: *“César Rojas Gaete tenía información privilegiada sobre los procesos de licitación a través de sus vínculos con funcionarios activos de Carabineros”*. Se señaló por la fiscalía que era Christian Bustos Morgado quien efectuaba esta suerte de información hacia César Rojas, sin embargo, pide se ponga atención en la circunstancia que esa conducta no está descrita en la acusación, porque se dijo que la información privilegiada de César Rojas provenía de sus vínculos con funcionarios activos sin identificar de quién se trataría, lo que afecta el principio de congruencia, porque no está contenida esa circunstancia particular en la acusación. Según la acusadora, la gran prueba sería un correo electrónico de principios de julio del año 2012, que habría enviado Renato Méndez (quien tampoco declaró en el juicio) a César Rojas y éste a Cristian Gutiérrez, respecto de un listado de proyectos que se iban a licitar. No se acreditó que lo consignado en ese correo electrónico fuere cierto, no se

acompañaron las fechas de las publicaciones y tampoco las bases administrativas de esos retenes para comparar los montos que se indicaban y saber si eran o no correctos. Estimó que ese correo no es autosuficiente.

Si se pudo acreditar que había una fuente de información, que quedó develada a través de unos correos electrónicos dirigidos a una persona llamada Víctor Ortiz, que gracias a la prueba nueva incorporada por la defensa del acusado Rojas, se acreditó que era cónyuge desde el año 2010, de Romina Parraguez. En la declaración de Romina Parraguez quedó establecido la relación de amistad y comercial que mantuvo la pareja con Francisco Pizarro. Lo anterior podría no haber tenido relevancia, sino fuera por los correos electrónicos de 28 de marzo de 2013, en que se solicita un prevencionista de riesgos para cumplir con las exigencias revisoras. El 14 de mayo de 2013 Francisco Pizarro le envía un correo a Víctor Ortiz, indicándole que de acuerdo a lo conversado le envíe a Cristian Gutiérrez los antecedentes para contratarlo. Después el correo de 9 de julio del año 2013, Víctor Ortiz le envía a Cristian Gutiérrez los itemizados correspondientes a la licitación ID 3172-78-LP13, señalando que se los enviaba, pidiéndole que los revisara y le diera su opinión, anunciándole que después le contaría detalles personalmente. En el correo se acompaña la propuesta, postulación y costos asociados a una licitación en pleno desarrollo, con los datos de la constructora Juan Pizarro Yévenes, el que posteriormente fue adjudicado. El 8 de agosto del año 2013, Cristian Gutiérrez le transfiere de la cuenta corriente de la constructora CGM la suma de \$405.000 a Víctor Ortiz Oyarce, destacando que Ortiz es cónyuge de Romina Parraguez quien participaba en esos momentos activamente en las comisiones evaluadoras, evaluando precisamente a las empresas en el área técnica y con total autonomía. Con lo anterior, le parece que es posible entender que eventualmente existían otras fuentes de información; en caso que se hubieren ocupado.

Para desvirtuar este presupuesto fáctico de la información privilegiada imputada genéricamente, citó las declaraciones de algunos testigos. Al respecto Juan Socías Vargas, quien indicó que el proyecto pasa a ser público desde que su publica en el portal, es de dominio de cualquier persona, también en el banco integrado de proyectos, aunque no se señala la fecha en que va ser publicado y solamente se indica el monto otorgado por las obras civiles, gastos administrativos y montos de equipamiento.

Por su parte, Jorge Santis Rebolledo, indicó que la jefatura de L1 decide cuándo se publica una licitación, pero se decide cuando llega la resolución de DILOCAR que establece que dicho proyecto debe ser publicado, no al arbitrio de Christian Bustos Morgado

Romina Parraguez ratifica lo anterior, respecto a la existencia de la resolución de DILOCAR para publicar. Fabián Gutiérrez, señaló que para que publiquen las licitaciones tiene que haber primero una resolución de DILOCAR, nunca vio casos en que Christian Bustos Morgado se guardara resoluciones y publicara otras, todo lo que llegaba de DILOCAR se publicaba inmediatamente.

Ignacio Labra Moscos, por la prensa se enteró que Rojas era amigo del Jefe de cuarteles, nunca los escuchó hablar por teléfono.

Los testigos Matías Navarrete y Viviana Mora, señalaron que los oferentes de las ofertas con la publicación y al haber revisado todas las bases de licitación todas eran prácticamente las mismas y Generalmente por los mismos montos, por lo cual, le parece a la defensa, que basta conocer las bases de una licitación de un proyecto que fuera declarado desierto para conocer los requisitos de una segunda postulación.

4ª promesa incumplida por la fiscalía: *“la empresa CGM no contaba en experiencia en construcción de la envergadura que se requería, para la ejecución de los retenes, considerando las condiciones geográficas extremas de la zona”*. Dicha afirmación fáctica se aparta de las reglas de la administración pública. Los requisitos eran tres, de carácter objetivo, plazo, monto y tiempo de ejecución. Esta exigencia no existe en las bases de la licitación pública, no había variables relativas a la experiencia en construcción en determinadas condiciones geográficas adversas, el único requisito era estar inscrito en el Registro de Constructores de Carabineros. Se reprocha algo que ni siquiera constituyó una variable objetiva a ser ponderada, esta afirmación es temeraria y se aparta de todo el proceso licitatorio.

5ª imputación fáctica contenida en la acusación: *el imputado Pizarro Dasso con la autorización de los imputados Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, cursó estados de pago fundados en informes técnicos falsos elaborados*

por él, que simulaban avances de obras que en realidad no existían, lo que se tradujo en el pago de obras no realizadas, permitiendo de este modo que se perjudicara el patrimonio fiscal. Estas conductas las realizaba por instrucciones del imputado Christian Bustos Morgado y con pleno conocimiento del imputado Flores Santis, todos ellos a cambio de recibir un beneficio económico, a cambio de infringir gravemente los deberes de su cargo.”

Al respecto no hay ninguna evidencia directa o indirecta que diera cuenta de lo afirmado en este acápite y que refrende lo afirmado por el acusado Pizarro.

La fiscalía entiende acreditado este requisito, según lo indicado en su alegato de clausura, que autorizó los estados de pago falsos e instruyó a Pizarro incumpliendo sus deberes de fiscalización, basándose en las propias citas del acusado Christian Bustos Morgado, respecto a que él no tenía el control de la ejecución de los proyectos y en la calidad profesional del acusado Christian Bustos Morgado, en cuanto al dominio de todas las materias y de la circunstancia de ser un buen funcionario y que estaba en conocimiento de todo lo que pasaba en el Departamento L1. A su parecer, la fiscalía omite hechos sentados en forma lógica, pretendiendo dar probados hechos que no se derivan de los indicios citados, por cuanto las cualidades profesionales del jefe de sección no tienen relación con ordenar, instruir confeccionar estado de pago falsos. Hay un salto entre el razonamiento y la posterior conclusión, que es que haya ordenado confeccionar los estados de pago falsos, los que serían más de treinta y dos, de acuerdo a lo declarado por el ITO y por lo señalado por los testigos, en cuanto a sus cualidades de jefe y el conocimiento de Las materias, afirmando que “debió haber impartido instrucciones ilegales”, lo que es una afirmación condicional no un juicio de certeza. Los mismos testigos declararon que nunca escucharon a CB dar una orden de ese tipo, nadie dijo que tratara mal a Pizarro, no existe prueba alguna, aparte del relato de Francisco Pizarro de estas órdenes ilegales de Christian Bustos.

A modo de ejemplo, le parece que no podía saber que el radier no era de 5 cm y que se hizo de 3 cm; si no se instalaron veinte puertas y solo cinco, si no se había avanzado en la pintura de todos los muros de acuerdo a los itemizados, era difícil que lo supiera desde Santiago. A su parecer, no había cómo saber si una vez que los ITOS volvían de las comisiones de servicios si los ITIOS cumplían con

su obligación de decir la verdad de los respectivos estados de avance, ellos son los profesionales, los ministros de fe, de acuerdo al sistema reglamentario en el Departamento de Cuarteles.

Por otra parte, los testigos que declararon nunca entregaron ningún indicio respecto de la efectividad de lo declarado por Pizarro y lo que afirma la fiscalía.

Así Jorge Muñoz Soto, como jefe de sección, era jefe de los ITOS, era un tema administrativo, no estaba en condiciones de decirle a los ITOS cuál era el porcentaje de avance correcto, no recordó haber rechazado estados de pago, tampoco los firmaba, solo los tramitaba.

Recordó que en la declaración de Francisco Pizarro, respecto a las instrucciones que se le daban por parte de Christian Bustos Morgado, respecto a la forma en que se le daban las instrucciones, señaló que le indicaba un mayor estado de avance al real, que le indicaba el monto a pagar, eran cantidades quebradas que anotaba en cualquier parte; considerando que no hay una explicación lógica que le diera en treinta y dos oportunidades este tipo de instrucciones, sin perjuicio de todos los mecanismos para representar esta órdenes ilegales.

Juan Socías señaló que Christian Bustos Morgado era un buen jefe, si bien daba instrucciones para el trabajo, procuraba mantener un buen ambiente laboral, era una persona competente, sabía lo que estaba haciendo, estaba preparado para el trabajo administrativo de las cosas que tenían que enfrentar, se agilizaron los procesos. Nunca recibió una orden de CB de autorizar un estado de Pago mayor de lo efectivamente construido. Si hubiere pasado se lo hubiere representado. Todos los funcionarios tenían acceso a las jefaturas, para representar las órdenes, podían incluso hablar con los abogados.

Jorge Santis Rebolledo, se refirió a Christian Bustos Morgado en los mismos términos que el testigo anterior, respondiendo que desde que llegó al Departamento había una política abierta, podía conversar con el jefe, incluso en el pasillo, jamás se enteró de malos tratos ni vio malos tratos hacia los empleados del Departamento, nunca recibió orden de él para hacer un acto ilegal.

Isidro Martínez, dio cuenta buen del ambiente laboral, que Christian Bustos Morgado generaba confianza. Agregó que si le hubieran dado una orden ilegal habría podido representarla con el Comandante Bustos o el Coronel Flores y si no le hubieren hecho caso hubiere escalado por conductor regular con el DILOCAR o haberlo denunciado.

Romina Parraguez Robles, manifestó que fue unos de los mejores jefes que tuvo, amable, nunca tuvo un problema con él, estaba al tanto cuándo los profesionales salían en comisión de servicios. Entre Pizarro y Christian Bustos había una buena relación.

Fabián Gutiérrez Salazar, indicó que se daban órdenes verbales que se reSPAldaban con documentos electrónicos, las que se entregaban de un oficial de carabineros a un subalterno, pero si un oficial le pide una carpeta o toda la información que está evaluando, puede negarse, porque como civil fue contratado como asesor técnico no está formado como carabinero ni obligado a seguir una orden ilegal. Como sucedió en los dos casos que mencionó, cuando se les dijo que no hicieran algo, no lo acataron porque consideraron que no era correcto, lo que no conlleva sanción.

Nicolás López Reyes, el Comandante Bustos nunca dio una orden directa de algo, más allá de priorizar una carpeta sobre otra, trataba de persuadirte con argumentos.

Jorge Rojas Langer, indica que es el ITO quien revisa los estados de pago a su conformidad y le reporta a su jefe. No se trata de comprobar y constituirse a ver los estados de avance personalmente. Nunca supo que Pizarro pidiera por conducto regular comunicarse con él.

Hay numerosa prueba positiva en el sentido de desvirtuar estas supuestas órdenes ilegales, pero, además en términos negativos se puede valorar, porque no se agregó ningún correo electrónico entre los acusados Bustos Morgado y Pizarro Dasso, tampoco mensajería telefónica que diera cuenta de alguna instrucción, o algún tráfico telefónico, transferencias de dineros, no hay testigos. CBM nunca se quedó a expensas del contratista en el hotel Dreams de Coyhaique, nunca intervino con los factoryn a favor de la constructora CGM, tampoco hay

intercambio de correos con el contratista, es decir, hay numerosa evidencia positiva y además negativa sobre la inexistencia de este tipo de instrucciones.

6ª promesa fáctica incumplida por lo acusadores: Se señaló en la acusación: *“A modo de ejemplo, los imputados Christian Bustos Morgado y Félix Flores Santis, registran durante el periodo de desarrollo de las obras, diversos depósitos de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales; en específico entre el periodo comprendido entre el año 2012 y 2013, en el cual se desarrollaron los procesos de licitación pública, adjudicación y construcción de las referidas obras, registran depósitos de dinero en efectivo por montos totales de \$217.593.500 y \$22.435.778 respectivamente; montos que no se condicen con el nivel de ingresos que habrían percibido por su desempeño como funcionarios públicos, cuyo promedio de rentas mensuales, entre el año 2010 y 2016, asciende a \$1.853.5632 en el caso de Félix Flores; y de \$2.799.023 en el caso de Christian Bustos.”*

Esta imputación fáctica viene a ser una figura penal distinta, que es un enriquecimiento injustificado, que no estaba en vigencia en los años 2012 y 2013. Aquí existe un notorio error en la acusación en cuanto a los guarismos. Se incorporaron las cartolas del Banco de Chile de Christian Bustos Morgado correspondiente al período entre enero de 2012 a diciembre 2013, y si se suman los depósitos en efectivo, estos ascienden a \$111.340.000. De la misma manera se incorporaron las cartolas de Christian Bustos Morgado del Banco Santander, del mismo período, obteniéndose que el total de depósitos en dinero efectivo asciende a \$19.505.606. El total de depósitos en efectivo de las dos cuentas es de \$130.845.600, en los guarismos que aparecen en la acusación hay una diferencia de 86.747.900.-

Se acreditó que en este mismo período Christian Bustos Morgado obtuvo innumerables créditos que fueron abonados directamente a su cuenta corriente y entregados a Rodrigo Bustos y Nelson bBstos para la adquisición de camiones y mensualmente recibía depósitos de parte de ellos para pagar estos dividendos; lo que se detallará a propósito del hecho N°2, señalando que además Christian Bustos Morgado se explayó en extenso al prestar su declaración.

7ª promesa fáctica incumplida por los acusadores: Se indicó en la acusación lo siguiente: *“El imputado Christian Bustos Morgado, en el mes de enero 2013, constituyó junto a sus hermanos Rodrigo y Nelson Bustos Morgado, la sociedad de transportes Asesorías y Servicios Logísticos, aportando en efectivo la suma de \$100.000.000, a través de la cual adquirió, entre los meses de abril y octubre del año 2013, un total de 6 camiones de construcción, avaluados en la suma de \$228.639.114, los cuales fueron pagados con dinero efectivo, y no se condicen con las utilidades registradas por esta empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, ni con los ingresos registrados ante dicha entidad por ninguno de los socios de la misma.”*

Este presupuesto fáctico es absolutamente falso y engañoso, por cuanto de la sola lectura de la escritura social queda en evidencia que el capital social fue el que ascendió a \$100.000.000, no el aporte de Christian Bustos Morgado, el cual fue de 34 millones de pesos y para enterarlo solicitó un crédito bancario por \$27.500.000 el 19 de abril del año 2013. Por su parte, Nelson Bustos solicitó otro crédito, por \$22.500.000, dineros que son los únicos montos que realmente ingresaron a la caja de la empresa, dinero con el cual se compraron dos camiones de carga terrestre, acreditado con la abundante prueba documental. Para acreditar estos dichos ni siquiera se presenta un peritaje contable objetivo y solo presentaron a un funcionario de la fiscalía como perito, en cuyo informe ni siquiera incorporó las sumas señaladas como créditos que fueron cursados por las entidades bancarias a sus representados.

Respecto a la 8ª promesa fáctica incumplida por los acusadores, señaló que está en la página 7 donde se le imputa que *“el imputado Bustos Morgado instruyó una recepción provisoria con observaciones menores, otorgando más plazo”* y, el otro grupo de conductas, relativas a la afirmación que: *“también Christian Bustos Morgado y FF gestionaron una comisión de servicios a la XI Región junto a un grupo de funcionarios de cuarteles con el objeto de terminar las obras de Villa Ortega, individualizando a seis personas, agregando que los materiales los había trasladado César Rojas en un camión”*.

En cuanto al primer aspecto, no hay ninguna prueba rendida al efecto, llamándole la atención la inactividad probatoria de la fiscalía, por cuanto no trajo a ninguna de los técnicos que estuvieron en la comisión que aprobó la recepción provisoria con

observaciones menores, nadie pudo dar fe de que fue mal o bien recepcionada y que Christian Bustos Morgado haya dado instrucciones para ello. Al contrario, existe un indicio de prueba por escrito en contrario, (a pesar de cuestionar el valor del sumario administrativo) en los descargos de Campusano, Nadal y Salamanca, quienes defienden en el sumario la recepción provisoria. Además, la Contraloría General de la República tampoco reprobó dicha recepción provisoria con observaciones, indicando solamente que haber efectuado la recepción definitiva sin ir al lugar, sí constituyó una falta administrativa.

La única prueba en contrario fueron los dichos del abogado Isidro Martínez, quien señaló que cuando llevaba solo tres meses de haber ingresado al Departamento de Cuarteles, viajó junto a la comisión pero no fue parte de ella y que no le llamó la atención que se haya hecho una recepción provisoria, afirmando que con los conocimientos que tienen en la actualidad se da cuenta que la Comisión debió haber rechazado la recepción, pero además agregó que nunca escuchó que Bustos hubiera ordenado a los demás miembros de la comisión a hacer la recepción provisoria ni tampoco que alguno hubiese representado algún tipo de orden ilegal. Por lo anterior, era relevante y necesario que hubieran concurrido a declarar los citados miembros de la Comisión, para acreditar ese hecho, llamando la atención respecto a que no se hubieren presentado puesto que a su parecer están dadas las condiciones para que lo hubieren hecho sin temer consecuencias por ello.

Respecto de lo segundo existen dos puntos que se han probado: 1) Christian Bustos no tuvo poder de decisión ni de ejecución en el envío de la Comisión, no intervino en el envío de maestros a Villa Ortega; y, 2) que estos maestros hayan realizados trabajos pagados a CGM y no ejecutados.

Estos maestros no dependían de Christian Bustos Morgado, pertenecían a la sección de mantenimiento que estaba a cargo de Carla Salinas y luego está la prueba documental N°637 y la N°687, ambos documentos electrónicos ordinarios, solicitándose mediante el primero la comisión de servicios, constatándose que fue enviado por Félix Flores Santis y la segunda autoriza la comisión de servicios, donde aparece que fue autorizado por Rojas Langer.

Tanto Isidro Martínez como Fabián Gutiérrez, manifestaron que los maestros no dependían de Christian Bustos Morgado, agregando el segundo que trabajaban en otra sección y también Romina Parraguez señaló que los maestros dependían de L1.

Dos de estos maestros se presentaron y Ricardo Parra Ortega, recordó que había ido el segundo semestre del año 2013, que Pizarro se lo había informado y no un jefe, agregando que no tuvo contacto con Christian Bustos para esa comisión. El segundo, Jaime Meliqueo, dijo que habían ido a Villa Ortega a fines del año 2013, que le había sido Pizarro quien le había comunicado de una Comisión de servicios a Coyhaique. Señaló que su jefe directo era la capitán Carla Salinas que dependía del Director del Departamento L1; en consecuencia, no hay prueba que acredite esa circunstancia.

Tampoco se acreditó que los trabajos en concreto que se hicieron fuesen partidas pagadas y no ejecutadas. Respecto del trabajo realizado, el testigo Parra indicó que había soldado todos los pasamanos, que hizo techos para los cilindros de gas y para unos calefones que había que cerrar. Se pregunta si efectivamente en los itemizados estaban incluidos los trabajos que realizaron, es algo que no se sabe. Jaime Meliqueo dijo que había fabricado e instalado aproximadamente 20 puertas para roperillos, pero tampoco se sabe si éstas estaban incluidas en los itemizados. Acusa de falta rigurosidad en la prueba rendida y, además, se sacan conclusiones de hechos de los cuales éstas no se derivan.

Faltan eslabones en la cadena de razonamiento lógico del ministerio público; echando en falta la presentación al juicio de los demás maestros de la referida comisión.

Según la numeración correlativa que le dio el defensor, corresponde a la 9° promesa fáctica incumplida por los acusadores: consignada en la página 7 del auto de apertura, párrafo 4to, donde se señala: *“y en el caso del retén de Isla Huar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del término de la obra fue devuelta a César Rojas fue devuelta a por instrucciones de Christian Bustos Morgado, la que no pudo ser cobrada pese a que los obras no fueron terminadas.”*

Lo anterior es falso porque el documento N° 1245 acredita que lo que se devolvió fue la boleta de garantía de seriedad de la oferta. Lo explicó el testigo Jorge Muñoz Soto, señalando que la boleta de seriedad de la oferta se devuelve de inmediato a las empresas que no pasan el proceso y a las que quedan se les devuelve después de la adjudicación de la obra. También se incorporó la prueba documental N° 198, que corresponde a la Resolución Exenta 851, que dispuso el término anticipado del contrato de reposición del Reten de Isla Huar y que ordena el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, ingresando esos dineros al patrimonio de Carabineros de Chile.

10° promesa incumplida por los acusadores: *“Christian Bustos Morgado, benefició la empresa CGM en las etapas de postulación, adjudicación y ejecución de las cuatro obras..”*

Hizo presente que de acuerdo a análisis previos no existió reproche administrativo por las licitaciones, conforme lo señalado por varios testigos

11° promesa fáctica incumplida por los acusadores: *“Christian Bustos Morgado, permitió que se pagaran obras que no había sido ejecutadas mediante la tramitación de estados de pago realizados sobre la base de informe técnicos falsos, elaborados por Pizarro Dasso, por instrucciones de Bustos Morgado.”*

Precisó que esta afirmación la desarrollará al final, cuando analice el perjuicio, relevando que el núcleo de la imputación es este hecho, no otros hechos que la fiscalía recién comunicó en su clausura. A su parecer la fiscalía quiere acreditar el fraude con dos nuevos hechos, los cuales rechazan desde el punto de vista del fondo, pero desde el punto de vista formal son hechos nuevos nunca comunicados.

Lo primero que se afirmó, es que se hicieron entregas de terreno falsas, con fechas antedatadas que no se hacían en el terreno, ese hecho no está incluido en la acusación. Además, quedó desvirtuado con el documento electrónico ordinario, donde consta la solicitud de pasajes para ir a hacer la entrega a terreno, el 12 de diciembre.

El segundo hecho, que tampoco puede ser usado para fundar una sentencia, son los supuestos addendum falsos, que buscaban darle más recurso y más dinero a la empresa, fundamentándolo con la prueba aportada de Ronald Saldías, que nunca declaró en la fiscalía, solicitando al tribunal que revise los informes 560, 561, 776 y 777, informes todos iguales, para establecer otro ingrediente del engaño o fraude, señalando que es un hecho nuevo, que no está en la acusación y fue concluido por la fiscal en su alegato final.

12° Promesa fáctica incumplida: indicado en el último párrafo del hecho N°1: *“por su parte los imputados Bustos Morgado y Félix Flores aceptaron recibir un beneficio económico de parte de CGM Ltda., el que fue pagado por los imputados Gutiérrez y Rojas, a cambio de ejecutar las acciones y omisiones con infracción a los deberes de su cargo, descritas precedentemente.”*

Destacó la ausencia de una descripción fáctica completa, se está imputando un soborno, lo que implica saber cuál es el monto de la coima, pero no se dice cuánto ni cómo se pagó la coima del soborno.

No existe ninguna prueba o indicio que demuestre que CGM pago coima o soborno, haciendo presente que hubo un cambio de hipótesis que tuvo la fiscalía en su alegato de clausura

Respecto de los pagos, el perito Castro concluyó que a nivel de constructora CGM tocó el tema de manera indiciario, *“por no tener suficientes elementos como para llegar a una conclusión razonable respecto de que esos movimientos son efectivos o concluyentes respecto a su origen, por eso lo señaló a modo indiciario”*, indicando que el perito terminó relativizando sus conclusiones. El sostenía que la coima se habría pagado porque Nelson Bustos tiene dos depósitos en efectivo, el 28 de junio de 2013 y el 1 de agosto de 2013, los que coincidían con la emisión de cinco facturas de CGM, las N°57, 58, 59, 65 y 67, sin embargo, cuando se le exhibieron las cartolas de la empresa CGM de 28 de julio de 2013 el perito pudo comprobar que el saldo de la cuenta era de dos millones y fracción y el 1 de agosto de 2012, el saldo de CGM era negativo.

También se demostró con Manuel Lara que la emisión de la factura no coincide con el pago efectivo, puesto que Carabineros la pagaba posteriormente y

específicamente de las facturas indicadas por el perito Castro, la 57 de Coyhaique Alto se pagó el 4 de septiembre de 2013, la 58 de Lago Castor se pagó el 25 de julio de 2013, la 59 de Isla Huar, el 25 de julio de 2013, la factura 65 de Lago Castor el 20 de agosto de 2013, y la 67 de Isla Huar se pagó el 26 de septiembre de 2013, por lo tanto ningunos de estos pagos coincide con esos dos depósitos de Nelson Bustos

Entonces la fiscal cambió la tesis, señalando que la coima se pagó en febrero de 2013, manifestando que, de acuerdo al correo de 4 de febrero de 2013, señalando que si se abría una pestaña “empresa B” de una planilla excell adjunta, se advertía que la primera inversión era del 4 de febrero por cuatro millones de pesos y en otro correo de Carolina Gutiérrez de 24 de octubre de 2013, que adjunta un certificado de transferencia, se encuentra una transferencia por cuatro millones de pesos a César Rojas, señalando que el 4 de febrero cobró un cheque por \$4.000.065.- Esto no fue referido y concluido por el perito Castro y además este hecho no está en la acusación, no estuvo en ninguna formalización ni siquiera fue anunciada en la apertura; planteando que eso los deja en la indefensión.

En segundo lugar, no se entiende cómo se realiza una concatenación lógica, puesto que César Rojas con Cristian Gutiérrez tienen decenas de transferencias entre ellos, muchos cheques cobrados, preguntándose cómo se concluye que esa es la coima y que se pagó en el mall Florida Center a su representado.

13° promesa fáctica incumplida por los acusadores: Por último, en relación a lo consignado en la página 8 del auto de apertura, en los párrafos tres, cuatro y cinco, En cuanto a la contratación de Grossman: a) hay una ausencia de participación en lo que tiene que ver con la contratación de Grossman, Bustos estuvo ausente del proceso y b) la contratación estuvo ajustada a derecho. Al dar lectura a los párrafos indicados es posible concluir que en la descripción fáctica no hay una imputación hacia Christian Bustos Morgado, todo lo que se dice ahí está referido a Félix Flores Santis, Bustos no es aludido de haber participado en esos hechos.

Recordó que varios fueron los testigos, entre éstos, Isidro Martínez, Nicolás López, Gutiérrez y el mismo Grossman que dijeron que Bustos no había participado en ese trato.

Por otra parte, la Contraloría tampoco objeto la licitud de ese trato.

En cuanto al hecho 2. Anunció que realizaran cuestionamientos formales y de fondo.

Respecto del primer tipo de cuestionamiento, indicó que esencialmente tenía que ver que ver con la prescripción extintiva de varias de las conductas imputadas. Para ello hizo referencia a las sucesivas formalizaciones que se hicieron durante la investigación, que es la circunstancia que interrumpe la prescripción. A este respecto, indicó que la primera formalización, realizada el 28 de septiembre de 2016, ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, permitió interrumpir la prescripción respecto de Christian Bustos Morgado, ya que Rodrigo y Nelson Bustos no fueron imputados en esa oportunidad.

Ese año 2016 no se comunicaron varios hechos, en consecuencia, la prescripción siguió corriendo en relación a ellos, puesto que en esa oportunidad nada se le imputó a Christian Bustos Morgado en relación a la empresa Juan Alejandro Soto Jara EIRL y en la reposición de los proyectos de los retenes de Hualañé y Loica. Tampoco se mencionó sobre los supuestos cheques que Juan Soto hubiese girado a nombre de Rodrigo Bustos el 24 de marzo de 2011 y el 8 de julio de 2011. Tampoco se comunicó que se le hubiesen hecho depósitos en efectivo por José Vargas Silva en la cuenta corriente de Christian Bustos Morgado por 22.940.000.

Lo único que se le imputó fue que tomó parte en ciertos proyectos de FEALFRA, que se indican en la acusación, de manera que respecto de ellos se interrumpió la prescripción.

En la actual acusación, en las páginas 11 y 12 se detallan las supuestas transferencias, - que agruparon en cuatro grupos-, de FEALFRA hacia Christian Bustos Morgado, detallándose las efectuadas el 30 de agosto de 2013, el 08 de abril de 2013, el 24 de octubre de 2013, 25 de noviembre de 2013 y 30 de

diciembre de 2013; sin embargo, al año 2016 esos eran hechos inexistentes, nada se dijo al respecto, no fueron comunicados.

En la segunda formalización, efectuada en el mes de marzo del año 2018, los hechos concernientes al Hecho 1 siguieron iguales y no se cuestiona la interrupción de la prescripción; en tanto que en el Hecho 2 por primera vez aparecen los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, sin embargo, los hechos siguen siendo los mismos a como fueron descritos en la acusación del año 2016.

En la tercera formalización, de fecha 25 mayo 2018, el Hecho 1 en nada cambió, en tanto que en Hecho 2, lo nuevo fue que se formalizó a Osvaldo Tobar Fernández, pero los hechos imputados siguieron siendo los mismos, se mantiene la misma descripción fáctica; de manera que, para los hechos ya referidos en los acápite precedentes, la prescripción siguió corriendo.

Respecto de la cuarta formalización, de 28 de septiembre de 2018, señaló que no tenía objeciones de fondo en relación al Hecho 1, salvo la circunstancia que, sin nuevos antecedentes, se sacó al café Tavelli de calle Manuel Montt como principio de ejecución, trasladándose a la comuna de Macul. En cuanto al Hecho 2, éste sí cambió porque se incluyeron conductas de cohecho en relación a la empresa Juan Soto Jara I.R.L. por dos depósitos efectuados a Rodrigo y Nelson Bustos Morgado, además de otras modificaciones, incluyendo los retenes Loica y Hualañé; agregando depósitos de José Vargas Silva a Christian Bustos Morgado y se hace una descripción fáctica que pretende encuadrarse en el soborno, respecto de FEALFRA SPA, entregando las cifras, los lugares donde se depositaron los cheques y quiénes efectuaban los depósitos.

Hizo presente que en este Hecho 2 el principio de ejecución estuvo dado por la intervención de Christian Bustos Morgado en todos los procesos licitatorios, siendo el último proyecto de reposición de reten, que sería el 19 de agosto del año 2013., entonces los cinco años se cumplieron el 19 de agosto de 2018. Por lo tanto, concluyó, la acción penal por estos nuevos hechos se encontraba prescrita a la fecha de la última formalización, incluyendo en el cómputo del plazo los días adicionales que debían sumarse con motivo de haberse ausentado del país los

acusados, 14 días para Christian Bustos Morgado, 32 días adicionales para Rodrigo Bustos y 19 días adicionales a Nelson Bustos.

Todas estas proposiciones fácticas que aparecieron en la última formalización, están fuera del plazo de cinco años que establece la ley como prescripción extintiva; a saber, Juan Soto Jara I.R.L, Loica, Hualañé, los dos depósitos de Juan Soto Jara a Rodrigo Bustos Morgado y los depósitos de José Vargas Silva a Christian Bustos Morgado, se encuentran prescritas.

Anunció que concentrará su alegato en la intervención de Cristian Bustos en los proyectos de la empresa FEALFRA S.P.A.

En cuanto al fondo del hecho 2, señaló que abordaría las siguientes tres (3) cuestiones:

1º) infracción a los deberes del cargo. A este respecto indicó que, desde un punto de vista formal, nunca fueron comunicados los hechos que constituirían los deberes supuestamente infringidos, puesto que nunca fue imputado en la acusación que actuaba “con infracción a los deberes de su cargo”, no se concretó respecto de cuáles son aquellos supuestamente infringidos, solo hizo una comunicación de circunstancias jurídicas, pero no fácticas. No se señaló cuál deber del cargo había sido infringido, a diferencia de lo que ocurrió con el acusado Pizarro (página 4 del auto de apertura), donde señalan concretamente dos infracciones de deberes.

Indicó que la fiscalía había dicho en su alegato de clausura, mas no en la acusación, que se habría infringido el deber de abstención que establece el artículo 12 de la Ley N°19.880, lo que a su parecer hace referencia al parentesco de consanguinidad como causal de inhabilidad. A dicho efecto, Rodrigo ni Nelson no eran los interesados en las licitaciones, ni eran los administradores ni tampoco los representantes legales; tampoco estaban a cargo del proceso de licitación, no eran quienes presentaba las ofertas, no iban a la apertura de sobres, no llevaban boletas de garantía ni participaban de otras situaciones semejantes relativas al proceso de licitación; ellos trabajaban para ambas empresas de manera remunerada. Más aún, los testigos Tobar y Soto dieron cuenta de cuáles eran las labores que aquellos realizaban en y para la empresa; Rodrigo veía las cuentas y

las finanzas y Nelson compraba materiales y se relacionaba con los proveedores, agregando que los pagos no se les hacían al inicio con las licitaciones, sino que conforme a las utilidades que generaba el proyecto. No existe prueba alguna que ellos fueran quienes intervinieran en el procedimiento licitatorio en alguna de las calidades que señala la norma.

2°) la relación de parentesco entre los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos: Las inhabilidades legales son de derecho estricto y así deben interpretarse. En cuanto a esto señaló que no se acreditó que entre unos y otros existiere el parentesco ya que no se había rendido prueba acerca que tuvieran una relación filial sanguínea, no se aportó el certificado de nacimiento de ninguno de ellos ni tampoco se había interrogado al acusado Christian Bustos cuando prestó declaración. Negó que fuese efectivo, como dijo la fiscalía, que esta circunstancia no haya sido discutida, pero que aun si así se estimase, resultaba siempre necesario acreditar los hechos que configuran el delito, toda vez que la presunción de inocencia obliga a la fiscalía a cumplir con su carga probatoria; no se indagó que fueren parientes consanguíneos, de doble o simple conjunción, no hay antecedente alguno que establezca estas circunstancias, especialmente tratándose de un aspecto normativo del tipo, estima que es necesario acreditarlo.

En cuanto a la intervención de Bustos Morgado en las negociaciones refirió que no existía prueba de que se hubiere realizado tal o cual negociación, y que en cuanto a la intervención directa y positiva que permitió la adjudicación, que le atribuye la fiscalía a Christian Bustos, ello resultó desvirtuado con la propia prueba de cargo, desde que su intervención se había visto reducida a poner su firma en el visto bueno, se trataba de una firma formal de la validación del proceso. Juan Socias dijo que Christian Bustos Morgado no formaba parte de la comisión evaluadora; lo que fue reafirmado por Isidro Martínez y Romina Parraguez Robles. A lo dicho, añadió que las empresas FEALFRA y Juan Soto Jara habían perdido más licitaciones que las que ganaron. No hay prueba de esta supuesta intervención directa y positiva, reiterando que ese es el verbo rector de la imputación y la fiscalía lo concretiza en los informes técnicos de evaluación y las resoluciones de adjudicación y se revisan las fechas que se indican desde Iloca hasta San Francisco de Mostazal, son fechas del año 2011 y la más antigua es la del 19 de agosto de 2013, entonces cualquier cosa nueva que se haya comunicado en la formalización del 28 de septiembre de 2018 está prescrita.

3°) las transferencias de dinero de Osvaldo Tobas, Juan Soto y José Vargas Silva (págs. 11 y 12 del auto de apertura), estos hechos fueron informados recién en la cuarta formalización, alegando que se encuentran prescritas. En cuanto al fondo, dividió las transferencias de Tobar en dos grupos: en el primero, transferencias desde el 30 de agosto de 2013 hasta el 30 de diciembre del mismo año. En ellas los destinatarios fueron Nelson y Rodrigo Bustos, en cuyas cuentas se depositaron los dineros correspondientes a los servicios prestados a la empresa de Tobar, sin que conste que desde allí se hubieren recibido dineros en la cuenta de Christian Bustos.

En el segundo grupo distinguió dos subgrupos: uno, transferencias desde el 24 de octubre al 5 de noviembre de 2013; el otro, desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2013. En ambos casos se imputa a Nelson Bustos, a cuenta del dinero entregado por FEALFRA que traspasó 2 millones de pesos el 5 de noviembre y otros 2 millones de pesos el 5 de noviembre, son las únicas que señaló el perito Castro logró hacer una trazabilidad, estimando que la prueba es insuficiente. Para su demostración declaró Nelson Castro Arraño y se aportaron cartolas de Bustos del Banco de Chile y BCI. Cuando se analiza el detalle y se ve la cuenta del BCI de la cuenta corriente de Nelson Bustos, en la fecha señalada se consigna: *traspaso a tercero por internet*. En la cartola del banco de Chile de Christian Bustos Morgado se consigna traspaso desde terceros por internet, sin ningún dato adicional que permita llegar a una conclusión unívoca. No están consignados los detalles de las transferencias, en ninguna de las dos cartolas se indica la hora, ni el banco desde el cual proviene, los nombres ni el RUT de quien transfiere, tampoco el número de cuenta. No se exhibieron los certificados de transferencias bancarias, en los cuales sí aparecen esos datos, ni tampoco en los correos que de manera automática genera el banco informando la transferencia. Por otro lado, con la declaración de Christian Bustos corroborada por prueba documental, se estableció que entre éste comenzó una relación empresarial con sus hermanos, solicitando créditos que se traSPAsaban a Nelson y a Rodrigo Bustos para la compra de camiones, desde el 13 de noviembre de 2013, fecha del primer crédito por la suma de \$30.000.000, a partir de lo cual comenzó un constante flujo de dineros. Un segundo crédito otorgado el 14 de agosto de 2014, acreditándose la compra del camión y luego el contrato de arriendo con Agrosuper. El tercer crédito por \$27.000.000 fue para aportarlo a la sociedad de transportes recién creada

Hizo presente que cuando Christian Bustos traspasó los \$20.500.000 lo hace a la cuenta corriente del BCI de la empresa de Transportes, se cuestionó la glosa, porque en la cartola del banco de Chile, solo decía transferencia a terceros por internet, señalando que se advierte en la prueba documental 405, en la cartola del BCI de la misma fecha indica “transferencia de C. Bustos.”

En cuanto al perjuicio sostiene que no estaba acreditado que lo haya habido, toda vez que no hay prueba que lo demuestre más allá de toda duda razonable, ni tampoco prueba para determinar en forma concreta el mismo.

Lo único que existe son los informes 125, 126 y 127, ordenados por el Coronel Óscar Águila al enviar una comisión con un estándar de denuncia. Por lo pronto no incluyeron Villa Ortega. Ya se dijo que esos informes están confeccionados al margen de lo señalado por el Código Procesal Penal, pero desde el punto de vista del fondo, tiene frente a ellos dos cuestionamientos, primero que tiene errores o fallas metodológicas evidentes y lo segundo es que no son auto-explicativos o auto-suficientes. Ninguno de los informes explica por sí mismo los perjuicios. Los cuadros ni sus anexos demuestran los pagos en excesos desde que no se entrega información respecto de los detalles, haciendo presente que hay partidas que se pagan por unidades, otras por metros cuadrados y unas que no se pagan hasta que estén completamente instaladas y nada de eso se explica. Más aun, el informante incluyó la retención del 10% dentro del monto pagado en exceso. Esos informes cumplen el estándar de denuncia, pero no más.

No se discute que no se hayan terminado de construir los retenes, pero tampoco se terminaron de pagar. El testigo Socías dijo que el avance de Lago Castor era de un 70%, pero también dijo que había quedado un remanente de \$68.342.790 del proyecto original. También estaban las retenciones, que alcanzaron la suma de \$19.738.743 y el testigo dijo que no se había pagado el addendum contemplado y autorizado por el DILOCAR de \$5.617.514, además se cobró la boleta de garantía de \$19.738.743, haciendo un cálculo total de \$132.437.790, lo que corresponde al 30% del proyecto original. No dijo a cuánto ascendía lo no pagado. En el caso de Coyhaique Alto, Francisco Socías dijo que el avance era de un 75% a 80%, por ende, faltaban un 25% o 20%, pero no se dijo cuánto exactamente era eso en dinero, de manera que no se puede saber si lo que no se pagó, más las retenciones y más las boletas de garantía cubrían lo no

construido. Lo mismo ocurrió con Isla Huar, en que se dijo que era más el porcentaje avanzado, en un 80%. Por ende, ninguno de los proyectos alcanzó el 100%, tanto en lo material como en lo financiero, sin que se sepa con exactitud si los dineros pendientes de pago fueron más o menos que los trabajos no ejecutados.

El otro elemento probatorio con que la fiscalía pretendió acreditar esta circunstancia es el informe técnico de Contraloría General de la República, especialmente su anexo 4; el cual resiste menos análisis. Lo objeta formalmente por tratarse de un informe hecho por un órgano dependiente en el marco de sus funciones de una investigación administrativo o del derecho administrativo sancionador. Es un documento anónimo, solo dice que se constituyeron un grupo de profesionales del Departamento, no se conocen el detalle de las operaciones y es firmado por el jefe del Departamento respectivo que no vino a declarar al juicio. Se pretendió con ese documento sustituir una prueba pericial, en la cual es necesario que el perito explique su metodología y conclusiones. No resulta fiable la información que allí se contiene.

En cuanto al perito Lara, este no se refirió al perjuicio, puesto que señaló que su cometido había sido constatar que las facturas emitidas se hayan pagado.

Concluyó su alegato señalando que por lo tanto no existía prueba confiable que demostrase el monto de las supuestas partidas pagadas en exceso no ejecutadas o ejecutadas parcialmente.

Debe rechazarse por la absolución alegada, y en subsidio por prescripción extintiva de 4 años que se cuenta desde la perpetración del acto, y las acciones civiles no se interrumpen con las formalizaciones, lo anterior, aun considerando la última fecha de pago, con mucho en noviembre de 2013, por lo que en noviembre del 2017 la acción civil había prescrito, toda vez que la demanda civil se interpuso con posterioridad a la última formalización, la que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018.

d) defensa del acusado Francisco Pizarro Dasso comenzó su alegato diciendo que los dichos de Pizarro fueron corroborados con la prueba que se rindió. Reiteró la petición de absolución. Este fue acusado de haber actuado...*dolosamente*... a

cambio de recibir un beneficio económico. En lo medular lo que se imputa es elaborar informes falsos que sirven de base a los estados de pago. En lo que respecta a los informes técnicos, señaló que formaba parte del tren de pago de los estados de pago, el cual comenzaba con una solicitud de revisión de las obras y terminaba con el oficio que ordenaba el pago. Sin embargo, esos informes técnicos no eran la base ya que estaban decididos desde antes en su aprobación. El engaño como elemento fundamental no se da con los informes. Las visitas a terreno fueron hechas con posterioridad a los estados de pago. Así ocurrió con Villa Ortega en 7 de los 8 estados de pago. Otro tanto ocurrió con Coyhaique Alto, en todos los estados de pago. Lo anterior demuestra que el trabajo del ITO pasaba a segundo plano cuando se trataba de pagar a la empresa. Inclusive las entregas de terreno eran de fecha posterior a los estados de pago. Lo mismo sucedió con Lago Castor e Isla Huar. Por tanto, la actuación del ITO no fue relevante, existe abundante prueba que demuestra que Pizarro comenzó a ejercer sus funciones una vez iniciadas las obras. El primer estado de pago de Villa Ortega y todos los otros se hicieron con anterioridad al inicio de las obras ya que sin ellos la empresa no podía construir. Esto demuestra la irrelevancia de la intervención de Pizarro con sus informes técnicos. La testigo Cecilia Cordero Araya y Claudia Zenteno Quiroz fueron fundamentales ya que trabajaban al lado de la oficina de Bustos y por tanto veían/escuchaban lo que allí ocurría y con quienes se reunía. El acusado Pizarro no se mandaba sólo dijeron los testigos, tanto así que no tenía salida directa para hablar con el director de DILOCAR y tampoco le reportaba directamente a él. Señaló que era ilógico, contrario a la razón, que haya sido Pizarro quien urdió o fraguó este plan. Pizarro además no disponía de tiempo por la cantidad de trabajo que llevaba y porque pasaba permanentemente en terreno haciendo fiscalización de las obras en las que estaba designado ITO. Por el contrario, como señalaron numerosos testigos era Christian Bustos quien tenía el control íntegro de lo que ocurría en el Departamento de Cuarteles. Así lo demostró la prueba documental N° 24 de la defensa (correo electrónico enviado por Bustos en horas de la noche de un día domingo en el cual imparte instrucciones a varios funcionarios en relación a las obras). Las jefaturas sí conocían el estado real de las obras, no obstante lo cual igualmente disponían los estados de pago, toda vez que conforme al numeral 11 de los otros medios de prueba de la fiscalía, Pizarro acompañaba sus informes con fotografías. Tales fotos no serían compatibles con el dolo directo que se le imputó, más aún si dichas fotos fueron las aportó el mismo al sumario. A mayor abundamiento, Pizarro manifestó su desacuerdo con las órdenes que le daba

Bustos. Se supo de gritos que salían desde la oficina de éste cuando se reunía con Pizarro.

En cuanto al beneficio económico, Pizarro no solicitó ni recibió beneficio alguno, no hubo prueba en tal sentido. La estadía en el hotel Dreams quedó desvanecida, no bastando para ello la captura de pantalla que tomó un carabinero que se constituyó en dicho lugar. Las fechas en que aparece allí alojándose no coincide con las fechas en que Pizarro estaba en comisión de servicio en esa zona. El perito Castro dio cuenta de dos transferencias por tres millones cada una, sin embargo se aportó prueba nueva que explicó el origen de esos depósitos, a saber, las propias cuentas del acusado Pizarro.

Respecto del perjuicio señaló que era un elemento relevante en el delito, el cual no estaba acreditado de manera fehaciente, no siendo suficiente para ello los informes N° 125, 126 y 127, sin perjuicio de que fueron ordenados por y para Carabineros.

En cuanto a la tipicidad y calificación jurídica de los hechos que pudieren eventualmente subsistir, y que en tal caso fueren jurídicamente relevantes, señaló el abogado defensor que el delito de fraude al Fisco revestía una especial complejidad. Los bienes jurídicos del delito son el patrimonio fiscal y la probidad, sin perjuicio de la tesis planteada por el querellante en orden a que se trataría de una administración desleal. Refirió que la estafa forma parte de la estructura del fraude al Fisco, en tanto cuanto el engaño resulta fundamental en éste delito. Así, para el caso que se produjere aquella subsistencia fáctica y jurídica, debe dilucidarse entonces si Pizarro incurrió en el engaño o si se sumó a un engaño en curso. Sostuvo que los acusadores habían hecho una interpretación extensiva e *in malam partem* del concepto de funcionario público. Si eventualmente no se le absolviera, habría entonces que considerársele no más que un encubridor. Citando a Balmaceda Hoyos, páginas 24 a 58, este llega a la misma conclusión, al igual que Laura Mayer Lux, pág. 101 a 130, quien pone en duda los grados imperfectos de ejecución en el delito de fraude al Fisco. Adujo y citó la sentencia aludida por el querellante, en la causa seguida contra la alcaldesa Rojo, en la cual se desestimó la nulidad de la sentencia. Reprodujo los considerandos 14 y 22, inciso tercero. En ellos destaca la autoría competencial que tenía la acusada en su doble rol de alcalde y además jefe de la corporación municipalidad. Sin embargo,

Pizarro no estaba en posición competencial que le hubiere permitido administrar ni disponer del patrimonio fiscal. Citó el uso abusivo del defecto organizativo como forma de estafa, pero en el cuál no era Pizarro quien se valió de este por el nivel jerárquico que ocupaba dentro de la organización. El dominio del hecho, inclusive en una organización defectuosa, no lo tenía él sino quien hacía de gerente fáctico. Concluye que la estructura de este delito es la del fraude como forma de engaño.

Sostuvo que el acusado no era funcionario público sino un servidor público y no funcionarios públicos, tal como lo ha sostenido la Contraloría a propósito de los concejales. Los deberes específicos intrapenales que habría tenido Pizarro provendrían de normas administrativas y no legales, con lo que no se cumpliría el requisito de la tipicidad. La Corte de Apelaciones ha resuelto que se trataría de *extraneus*

Planteó la posibilidad de que se tratase de una falsificación de instrumento público de autoría paralela. Al efecto, cuestionó que su intervención en los informes falsos hubiere puesto en riesgo la fe pública.

Concluyó su intervención diciendo Pizarro no era autor ni coautor del delito de fraude al Fisco ni tampoco autor paralelo de otro delito, sino que, y con mucho, un encubridor del primero de tales ilícitos;

d) defensa acusado Cristian Gutiérrez Martínez inició su alegato invocando el principio de congruencia y con este el derecho a defensa, señalando al efecto que con la acusación precluye la imputación fáctica y que no puede confundirse el objeto del proceso, cuál es la verdad de lo ocurrido, con el objeto de la acusación, siendo este el medio para llegar a lo primero. Indicó que el delito de fraude al Fisco requiere que lo cometa un funcionario público, a partir de lo cual señaló que adhería a la *teoría del tipo penal*, conforme al cual el delito de fraude al Fisco sólo es aplicable a los funcionarios públicos, por lo que quienes no lo sean no pueden ser sancionados como autores u otra forma de participación. Señaló que en la acusación no se aludía al acusado mayormente, refiriéndose al este sólo en la parte final *que Gutiérrez y Rojas* Sin embargo las acciones u omisiones de los deberes no aparecen descritos en la acusación. El acusado no cometió ningún soborno para obtener las adjudicaciones. Sólo con el alegato de clausura de la fiscalía ha podido saber cuál es el hecho punible que se le imputa y del cual debía

defenderse. Con la declaración del perito Arraño surge un monto de dinero transferido por CGM al acusado Rodrigo Bustos, el cual sirvió a la fiscalía de conjetura indiciaria del soborno, hecho que, sin embargo, no fue incluido en los hechos de la acusación. Las obras de Villa Ortega se iniciaron en octubre de 2012 con la instalación de la faena, en tanto que el primer estado de pago se hizo en diciembre del mismo año. El 25 de octubre de 2013 se le prohibió al acusado ingresar a las obras. No se rindió prueba de que Gutiérrez y Rojas se hubieren puesto de acuerdo en pagar para obtener la adjudicación de las obras. El acusado no dio nada a nadie ni tampoco consintió en que Rojas pagará a terceros. Señaló que el acusado fue engañado por Rojas para utilizar su empresa. La confección de los estados de pago no los confeccionaba Gutiérrez, salvo los últimos de Isla Huar, Coyhaique Alto y Lago Castor. Sostuvo que el Fisco no pagó demás sino que menos de lo que correspondía y que por tanto Carabineros quedó adeudando dineros a Gutiérrez. No hubo addendum por concepto de calefacción pero que igualmente CGM la había instalado. Solicitó que el sumario no fuere considerado porque era parcial a Carabineros ya que el objetivo había sido “tapar el hoyo”. No obstante que se tenía conocimiento de la existencia e intervención del acusado Gutiérrez, éste no fue citado a declarar en el mencionado sumario. En cuanto a la demanda civil solicitó su rechazo atendido el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, años 2012 y 2013. Asimismo, pidió su rechazo por no haberse acreditado el perjuicio y porque cuando se interpuso la demanda ya había transcurrido el plazo de 4 años que establece el artículo 2332 del Código Civil. Finalmente, pidió que el acusado Gutiérrez fuere absuelto por inexistencia de los hechos probados en autos como en la acusación;

e) defensa acusado César Rojas Gaete comenzó su alegato diciendo que este lo dividiría en tres partes: la 1ª, en relación a las pruebas que el tribunal no debiera considerar en la deliberación; 2ª, en relación al fondo; y 3ª, respecto del análisis jurídico que se relacionan con el acusado y los hechos y la participación.

En cuanto a lo primero: se refirió a los otros medios de prueba N° 9 de la fiscalía. Imágenes de la cuenta correo de CGM. Como sostuvo en el juicio, discutió la fidedignidad de los correos toda vez que no hubo pericia que así lo demostrara. Algunos correos tenían el mismo contenido pero distintos en su formato. Eran exhibidos impresos, exhibidos a al acusado pero exhibidos en la pantalla con otro formato, no entendiéndose el porqué de tal diferencia. El acusado desconoció

varios de los correos ya que tenían en el encabezado Constructora CGM Ltda., y otros con el nombre de la fiscal Constanza Encina. En consecuencia, no se habría acreditado su fidedignidad. Lo anterior, desde que la circunstancia de que aparezca el nombre de la fiscal del caso demuestra que los correos eran editables. Los correos que entregó Gutiérrez fueron elegidos, sólo aportó los de la bandeja de entrada y las respuestas a esos correos. Finalmente, de los más de los 5.000 correos que dijo haber aportado, más de 4.800 eran *correos basura* (publicidad). Por último, los correos no deben ser considerados porque como informó VTR los acusados Bustos y Rojas no tienen cuentas de correo y por ende documentación asociada.

En cuanto al fondo: 1) la acusación dice que *la participación de Flores y Rojas era determinante*. Lo anterior sólo se cumpliría en la medida que se demuestre la vinculación de Rojas y Bustos en función de la información privilegiada que el primero habría recibido del segundo. Al respecto Bustos dejó clara cuál era su forma de participación en las Comisiones, lo que además fue corroborado por varios de los testigos que depusieron en el juicio. Destacó que la testigo Parraguez había declarado que Bustos no tenía participación en las evaluaciones. Inclusive uno de los testigos que contrainterrogó dijo que Bustos no podía modificar lo informado por la Comisión; 2) *Rojas contactó a Gutiérrez para que participara en la licitación*. A este respecto señaló que las declaraciones de Gutiérrez y Rojas habían coincidido en varias circunstancias relacionadas con el desconocimiento que tenían el uno del otro. Gutiérrez, además, no entró al negocio de licitaciones de Cuarteles a partir de su vinculación con Rojas. Gutiérrez conoció a Rojas por medio de Carrasco, siendo éste quien lo puso en contacto con Rojas. Éste último lo que hizo fue prestar asesoría a Gutiérrez. No existe prueba que demuestre que ese conocimiento mutuo haya sido de otra forma; 3) (inaudible por inferencia registro de audio); 4) *Rojas habría tenido información privilegiada en los procesos de licitación*. Al efecto, señaló la defensa que la acusación no dijo quién habría entregado esa información privilegiada a Rojas y que tampoco se había acusado a dicha persona. Por lo anterior, sostuvo, la defensa tendría que entrar a suponer que esa persona habría sido Flores o Bustos. Agregó que a nadie se acusó por uso de información privilegiada, en circunstancias que este tipo penal recoge perfectamente los hechos que se afirmaron acerca de tal situación. Sólo se dijo que la información privilegiada había sido entregada en los *procesos licitatorios*, pero sin precisar en qué parte de esos procesos había ocurrido, esto especialmente considerando lo extenso que son estos los procesos de licitación.

Por lo anterior es que la defensa letrada no ha podido saber de qué tenía que defenderse. Más aún, el carácter *reservado* de las licitaciones de cuarteles no tiene respaldo en la ley, como quiera que no existe una norma que así lo disponga. Con todo, *suponiendo que Rojas hubiere recibido esa información privilegiada* ella no le habría sido necesaria toda vez que era una persona versada en la materia, por lo que sabía buscar información en fuentes abiertas y públicas, como lo es el Banco Integrado de Proyectos, al cual llegan todos los proyectos de inversión de fondos públicos. Por lo tanto una persona como Rojas pudo saber los montos de los proyectos.

Continuó su alegato diciendo que el acusado había entregado sus cuentas de correos y abierto sus cuentas bancarias. Respecto de lo primero no se probó que hubiere dado claves falsas, como se dijo por la fiscalía. No se verificó otra transferencia con Flores que la de un millón de pesos. En la clausura se dijo que se había detectado una transferencia de 4 millones de pesos desde la cuenta de Gutiérrez (CGM) a la cuenta de Rojas y que con ellos éste habría efectuado pagos a Bustos o Flores. No se probó sin embargo que tales dineros hubieren sido entregados a algún funcionario público. La tesis del millón de pesos no se condice con la declaración del perito aquel que sostuvo que en este tipo de delitos se trata de evitar la trazabilidad, lo que en la especie no ocurrió pues el acusado giró el cheque del millón de pesos desde su cuenta corriente. Rojas no retiró la boleta de garantía de Isla Huar, sino que lo hizo un familiar del acusado Gutiérrez, a saber, Juan Gutiérrez. Lo que retiró Rojas fue una boleta de seriedad de la oferta, lo que es notoriamente distinto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento. La prueba documental N° 1.172, acta de entrega de la boleta de garantía, aparece firmada por Rojas y en ella se dice: “seriedad de la oferta....”. Señalaron los testigos que esta boleta debe devolverse cuando el oferente no se adjudica la licitación o, en su caso, cuando se ha sido firmado el contrato y entregado la boleta de garantía de fiel cumplimiento, cuyo fue el caso de la boleta en cuestión. Se dijo en la acusación que el retiro de los materiales se hizo con un camión de César Rojas. Tal afirmación es la misma, *copia fiel*, de lo que había declarado sobre este punto el acusado Pizarro. Indicó que, no obstante, nadie dijo haber sabido que ello había sido así. Sólo un testigo refirió haber visto un camión cuando fueron a terminar Villa Ortega, pero sin recordar color, marca, modelo ni placa patente del vehículo. Con todo, y si así hubiere ocurrido, ello no sería constitutivo de delito. Se sostiene en la acusación que Rojas defraudó al Fisco usando para ello la empresa Grossman. Al respecto indicó que no hubo trato directo sino que licitación privada,

esto porque el DS 294 tiene un acápite de definiciones contenidas en el artículo 4° N° 27, en el que define lo que es una licitación privada: “se *invite a lo menos 3 empresas a que postulen....*”, lo cual, por tanto, da lugar a que se forme una Comisión. El testigo Gutiérrez Gambaro declaró que no hubo reproche en ese proceso licitatorio. Además no se citó a las otras dos empresas que fueron invitadas a participar a fin de que explicaran lo ocurrido. Lo anterior difiere del trato directo, en que no hay más que un invitado. Así lo dijeron los testigos Socías, Rojas Langer y Gutiérrez Gambaro. El abogado de Contraloría corroboró que no hubo reproche sobre este respecto, agregando que efectivamente el Decreto Supremo N° 294 tenía falencias, vacíos, pero que era la norma vigente y que había que estarse a ella. La testigo Claudio Zenteno fue quien habló de trato directo, pero sin dar razón de sus dichos y sin tener la formación o preparación para sostener su afirmación. En cuanto a la inscripción de la empresa el día 28 de octubre de 2013, dos días antes del depósito del millón de pesos que se imputó a Rojas, fue del caso que el fiscal jefe de la Contraloría y el testigo Gutiérrez Gambaro dijeron que para postular no era necesario que la empresa estuviere inscrita al momento de su postulación, pero sí al momento de firmar el contrato. En consecuencia, el conocimiento que tenía Rojas en esta materia no hacía necesario que instara por una inscripción fraudulenta, toda vez que la falta de esta no impedía postular o presentarse a una licitación.

Ley N° 21.121, de noviembre de 2018, efectuó cambios importantes en el tipo penal en orden a que a partir de ella no se requiere una causalidad en el delito, a diferencia de la ley vigente a la fecha de los hechos, en que se exigía una contraprestación en el delito de soborno, la que en este caso no había existido, toda vez que la inscripción previa no era necesaria para postular a la licitación. Con todo, el motivo de la fecha antedatada de la inscripción puede explicarse como un error, tan error como el que adujo el testigo Arraño. Lo anterior, sin perjuicio que de los errores de fecha de varios de los informes técnicos de los proyectos de reposición fueron explicados por la fiscalía como errores de tipeo, misma explicación que puede asumirse respecto de la mentada inscripción. Por otra parte, se dijo que Grossman había dejado abandonados los trabajos, no obstante lo cual su representante legal, Carlos Grossman, si bien fue citado a la investigación como imputado fue del caso que posteriormente, por razones que se desconocen, su condición había mutado a la de testigo.

El delito de fraude al Fisco requiere como elemento fundamental un detrimento económico del patrimonio fiscal. No se cuantificó el detrimento que habría causado Grossman por el abandono de las obras, cuantificación y detrimento que debieran ser los mismos que habría causado el acusado Rojas con motivo del abandono de las obras de los proyectos de reposición materia de juicio.

Señaló que en la acusación se dice que *Rojas dejó nuevamente abandonados los cuarteles*, sin que de otro lado se hubiere aportado contrato o documento alguno que demostrase alguna vinculación entre Rojas y Carabineros de Chile.

Se dijo que Flores, Bustos y Rojas favorecieron a CGM en las etapas de evaluación y adjudicación, lo cual no era efectivo. Más aun, no se demostró que hubieren recibido beneficio económico por su supuesta participación en cada una de dichas etapas. La prueba de esto era fundamental para el tipo penal.

Se dijo también en la acusación “...con infracción a los deberes de su cargo descritas precedentemente”, expresión que remite a la inscripción, evaluación, adjudicación y ejecución de los proyectos, etapa esta última en la cual no se probó el beneficio económico que habría recibido Rojas ni los demás funcionarios acusados. A dicho respecto no hubo prueba que lo demostrase. Agregó que se había afectado el derecho a defensa producto de los cambios que se hicieron en la acusación en relación a lo que había sido la formalización, en la medida que en ésta se habló de 30 millones, pero en la acusación se redujo a 1 millón “como ejemplo”. Más aún, este último monto mutó en el alegato de clausura a \$4.000.000 y posteriormente a \$4.065.000. La fiscalía y el querellante no probaron este elemento del delito y por tanto el tribunal no puede llenar tal vacío.

En cuanto a los elementos del delito de fraude y soborno reiterados hizo primeramente mención al dolo, el cual debe ser directo. A este respecto la acusación no entregó prueba del ánimo inconfundible de defraudar. Defraudar o consentir son expresiones del dolo directo. No hubo testigo ni documento que dieran cuenta de que Rojas tuvo un ánimo manifiesto de defraudar. Tratándose del delito de fraude al Fisco, distinguió entre Rojas, como potencial participe en el delito, y la empresa CGM y Grossman. Respecto del primero, Rojas no era funcionario público, de manera que no puede ser reprochado como autor del N° 1 del artículo 15 del Código Penal, pero tampoco había tenido el dominio del hecho,

toda vez que la administración la tuvo sólo el acusado Gutiérrez. Rojas no se apoderó de dineros del Fisco, sin perjuicio que entre él, Gutiérrez y CGM hubieren conflictos de dinero, cuestión que es de carácter privado. A mayor abundamiento, Rojas tampoco contrató personal. Respecto de la pérdida o privación de lucro en el caso de la empresa Grossman, indicó que no se acompañaron documentos que demostrasen que esa empresa hubiere generado pérdida o perjuicio para el Fisco. Por el contrario, no se le pagó dinero alguno y las boletas de garantía entregadas por CGM se cobraron, de manera que lo que hubo fue un enriquecimiento de Carabineros. Más aún, Grossman dijo que Rojas no había ganado pues nada se le pagó. Por lo anterior la conducta del acusado no se encuadra en el tipo penal de fraude al Fisco, sin perjuicio que el tribunal pudiese estimar que concurre la figura residual de la estafa, pero en cuyo caso la fiscalía habría tenido que demostrar cuál habría sido el ardid que se empleó. En cuanto a la empresa CGM, no se probó el delito de fraude al Fisco. Al efecto, no concurrió ningún perito a demostrar el perjuicio fiscal, en tanto que los que sí concurrieron al juicio dijeron que detectaron diferencias entre lo construido y los itemizados, empero precisando todos ellos que no habían avaluado o determinado un perjuicio fiscal. Más aún, los informes tampoco coincidieron en sus montos. Tampoco se valoraron ni rebajaron los materiales de la empresa que quedaron en las obras. En cuanto a la pérdida o perjuicio como resultado de un incumplimiento de los deberes funcionarios, esto tampoco se probó.

El delito de fraude al Fisco es un delito especial, de manera que las calidades o cualidades personales no son traspasables o comunicables. La comunicabilidad extrema a que adhirió el querellante requeriría que el legislador así lo hubiere sido establecido. Además, el tipo penal requiere que la intervención sea en razón de su cargo, lo cual no ocurre con los extraneus. Éstos sólo pueden responder como autor de un delito impropio. Señaló además que a la época de los hechos no se demostró cuáles fueron los beneficios indebidos que habría recibido Rojas como resultado de su incumplimiento de deberes, ni tampoco cuál habría sido la contraprestación que hubo de su parte que justificase la obtención del presunto beneficio económico.

En mérito de lo anterior y señalando además que entre la prueba y la acusación no había habido coherencia, reiteró su petición de absolución

DÉCIMO SEXTO: Que, en sus alegatos de réplica señalaron los intervinientes:

1) ministerio público:

a) En cuanto al hecho 1 (fraude al Fisco y cohecho).

a.1) Respecto de la defensa de Christian Bustos: vulneración a las normas del debido proceso respecto de algunas declaraciones de testigos; dijo la fiscalía “no puede esta haberse apartado de sus deberes del cargo y a la vez ella infringió los deberes de su cargo al extralimitarse en sus funciones...”. Más aún, se fundamentó en la sentencia rol 37.213-2017, de la Corte Suprema, considerandos 5°, 6°, 7°, 8° y 10° que leyó textualmente esa defensa, omitiendo el considerando 3°, que señala “que, como se desprende del recurso, la afectación en que fundamentó...se derivaría de la actuación del ministerio público...” en que prestaron declaración de otras personas dándoles a conocer los declarado por ellos, lo que influyó en sus declaraciones vertidas en el mismo juicio”, lo cual cambia la interpretación de los considerandos que le siguieron.

En cuanto a la promesa no cumplida acerca de que ninguna persona de la Comisión declaró si habían sido bien o mal recepcionadas las obras del retén Villa Ortega, indicó que alrededor de 5 testigos declararon que la recepción definitiva requiere el 100% de la obra cumplida (testigos Socías, Santis, López y Parraguez). Asimismo, el testigo Isidro Martínez tomó fotos del estado en que se encontraban las obras, siendo estas coincidentes con lo que se señala en el correo de 30 de mayo, cuyo asunto indica *avance de Villa Ortega*, en el cual Bernardo León le escribe a Cristian Gutiérrez adjuntándole un informe del estado de avance al 29 de mayo, en el que constan los atrasos de las obras. Además, la prueba documental N° 1.157 de la fiscalía, NCU de 7 de abril de 2014, en el que se da cuenta de la reunión que mantuvo el Coronel de Carabineros Óscar Águila, en la cual solicitó a Andrea Campusano que le proporcionara todos los antecedentes acerca de estas recepciones, informándole la requerida que el acta de recepción había sido firmada en el Departamento Cuarteles, sin visita a terreno y que Christian Bustos había ordenado que se firmara la citada acta, la cual Bustos había firmado como presidente de la Comisión, al igual que ocurrió con la primera acta. Agregó que el acusado Bustos, antes de firmar el acta de Isla Huar, había ordenado eliminar un párrafo.

En cuanto a la promesa no cumplida de que la terminación de las obras de Villa Ortega habría sido realizada por personal de Carabineros, de lo cual no existiría ningún antecedente que así lo demostrase, adujo en contrario el documento N° 637, NCU de 5 de noviembre de 2013, en el cual Félix Flores solicita pasajes aéreos para los días 11 y 22 de noviembre, constando, además, en la cadena de información el jefe de Área de Ejecución de Proyectos, Christian Bustos. Asimismo, aludió el NCU de 22 de noviembre de 2013, mismo día en que vuelve la comisión a Santiago, en el cual se señala como “asunto” visita retén Villa Ortega, en el cual el sargento Bobadilla de la 1era comisaría de Coyhaique había informado que los avances observados fueron considerables a la vez que solicita materiales tales como metros cúbicos de gravilla, en circunstancias que el mismo día comparecieron los miembros de la Comisión y solicitan compra de materiales, luego de lo cual Felix flores dispone se estudie la factibilidad de cargo de los fondos correspondientes con la información entregada por el Ingeniero CPR Pizarro Dasso. Lo anterior demuestra que todos estaban en conocimiento de la Comisión, del resultado y del estado en que se encontraba el retén, porque todavía se requerían materiales para efectuar arreglos en el señalado retén.

Continuó la fiscalía refiriéndose Se dijo que no se acreditó que estos maestros hubieren sido pagados por las obras

Respecto del delito de cohecho cometido por Christian Bustos, acerca del cual el abogado Sr. Fodich había calificado de absurdos los planteamientos referidos al pago que habría recibido Bustos, sin perjuicio del problema de congruencia por él aludido. El abogado Sr. Giuliano cuestionó cuál había sido la infracción del deber de cargo infringida. Al efecto, respecto del primero de los abogados mencionados, hizo referencia la fiscal: 1) a los correos de 24 de octubre y 3 de julio de 2013 y a las planillas que había elaborado la encargada de finanzas de la empresa CGM, en las que se hace mención a un pago a *Inversiones B* por 4 millones, 2) al cheque que por dicha suma CGM giro a favor de Rojas; 3) al cheque que Rojas giro a su nombre el cual cobró por caja en el Mall Florida Center, dinero con el cual, y en el mismo lugar, hizo pago de los 4 millones a Bustos. Agregó la fiscalía que dicho pago no había sido el único, los cuales, como señala la acusación, se remontan a la época de los correos en que se hace mención a “A” y a “B”. Los peritos Manuel Lara y Castro declararon y demostraron que Flores y Bustos recibieron dineros que no se condecían con sus ingresos. En cuanto a los dichos

del segundo de los referidos abogados, indicó la fiscalía que la infracción más relevante que se habían cometido había sido el incumplimiento a sus deberes de fiscalización, en el caso de Pizarro, por instrucciones de Bustos, y en el caso de éste, a cambio de un beneficio económico por parte de Gutierrez y Rojas. A tales efectos, citó los siguientes correos: correo de fecha 24 de enero 2013, concerniente al *ordenamiento de créditos* de la empresa CGM y Cristian Gutiérrez, que señala: *“hoy estuvimos hablando con Carolina,,, solo falta incluir... Además debemos incluir los pagos a los inversionistas A y B, y posiblemente I”*; correo de 25 de enero de 2013, enviado por Pamela Beltrán, con copia a Cristian Gutiérrez y César Rojas, en que señala, “cómo voy a hacer el estado de pago 2, sí ...”; correo de 28 de enero de 2013, *asunto: consulta*, de César Rojas a Cristian Gutiérrez, el cual dice “me acaban de preguntar cuándo es requerida la visita, para ver la mejor opción del estado de pago; correo de 4 de febrero de 2013, *asunto: revisar*, en el cual Rojas envía un dato adjunto: “Cristian febrero”, es un archivo en Word: a) estado de pago: tal como conversamos hoy traté de ..factoring pero por un asunto de los balances sólo llevare Villa Ortega; b) de este primer monto se debe sacar la inversión de B y lo que yo te había solicitado. Tales pagos tuvieron lugar el 8 de febrero de 2013.

a.2) en cuanto al hecho 2 (cohecho y soborno).

Refirió que en su alegato la defensa de Christian Bustos había dicho que nunca se le informó que el deber de cargo infringido había sido el de abstención, “siempre pensé que la bandera que se iba a enarbolar iba a ser la de la probidad”, pero que en la acusación se dice que el acusado Christian Bustos Morgado se había interesado en los contratos a través de su partición de las Comisiones evaluadoras, proponiendo a esta empresa, en circunstancias que debió haberse abstenido de participar por tener interés en las mismas”, señalándose que ese interés, a juicio del ente persecutor, fue participar activamente en las negociaciones y tener intervenciones directas y positivas en la adjudicación de una serie de proyectos de reposición de retenes de Carabineros de Chile, en circunstancias que mantenía vínculos de amistad con Osvaldo Tobar y éste, a su vez, con sus hermanos, siendo incluso el contador de la sociedad Frealfra SPA...” por tanto se describe en forma precisa y clara cuál fue el interés y cuáles fueron los vínculos, estimando que dichas alegaciones carecen de todo fundamento;

porque incluso se señaló que los pagos se hicieron a través de sus hermanos y de terceros vinculados a la empresa Frealfra, como lo es, José Vargas Silva.

En cuanto a la relación de parentesco, señaló que ésta se había acreditado con los dichos de Christian Bustos, cuando señaló que “nosotros tenemos una empresa familiar con mis hermanos, especialmente una del año 2013”. Consultado si esta sociedad que tenía con sus hermanos, Asesorías y Servicios Logísticos Bustos Morgado, se había constituido el año 2012, respondió “sí,..”. Por otro lado, en su alegato de apertura la defensa se refirió a los tres acusados como hermanos. Además, la prueba documental N° 869, escritura de constitución de la citada sociedad, de fecha 23 de diciembre de 2012, aparece la individualización completa del acusado y de sus hermanos. Por último, invocó el principio de libertad de prueba que señala el artículo 295 del Código procesal Penal.

El cuestionamiento de los movimientos de las cuatro triangulaciones de dinero, respecto de lo cual la defensa de Bustos había dicho que de todo el período investigado, esas eran las únicas dos en que el perito Castro pudo hacer una trazabilidad, para lo cual sin embargo se rindió prueba insuficiente, indicando, además, que en la cartola del banco Bci sólo se dice *traspaso a terceros*, sin indicar desde dónde se había hecho tal transferencia. Sin embargo, respecto de la transferencia de 24 de octubre, se contaba con la prueba documental N° 673, a saber, cheque de DILOCAR depositado en esa misma fecha en la cuenta de FEALFRA, por \$23.000.000; la cartola de FEALFRA da cuenta de dicho depósito; el 24 de noviembre consta el cobro del cheque y posteriormente un cheque girado a nombre de Migani, quien era junior de la empresa, dinero que depositó a Nelson Bustos; se contaba también con la prueba documental N° 812, boleta de depósito de Hugo Migani, de fecha 4 de noviembre por \$4.500.000 en efectivo, y, el mismo día (prueba documental N° 802), información de bci respecto de Nelson y además la boleta de depósito por 2 millones; también las cartolas de Nelson y Rodrigo Bustos Morgado. Se sabe que con fecha 5 de noviembre Nelson le transfirió a Christian Bustos la suma de \$2.000.000. La documental N° 673 se acreditó che de 25 de nov a FEALFRA, listado de transferencias de FEALFRA en que constan 2 trasferencias realizadas a la cuenta de Tobar, una por \$4.500.000 y otra por \$3.500.000, siendo la suma de ambas \$7.000.000, al igual que la triangulación, resultando relevante que el dinero era traspasado; boleta deposito anónima de 2 dic 2013 por 2 millones y boleta de depósito por (pb802) por 2,5 millones, la

cartola de Ch, aparece que el 3 de diciembre aparece el traspaso de la misma cantidad: mismo día, mismo monto y mismo monto.

En cuanto a los peritajes, estos demostraron los depósitos y transferencias de dinero de Nelson y Rodrigo. Se le entregó un crédito a José Vargas Silva, con lo cual se produjo un flujo de dinero constante con Nelson, sin embargo José Vargas Silva era director de la empresa FEALFRA, la cual se adjudicaba las licitaciones de cuarteles, y en cuyo Departamento Christian Bustos era jefe de la respectiva área, participando, además, en las Comisiones evaluadores “como ministro de fe”. Por tanto, cuestionó la legitimidad de los traspasos de dinero, 27 de febrero de 2013, por \$5.000.000; febrero 2013, por \$7.000.000; traspasos a José Vargas Silva por montos muy superiores a los \$2.000.000 millones del arriendo de camiones. Desatender lo anterior llevaría a tener que creerle a Bustos.

La proposición fáctica referida en el hecho 1 que las defensas atacaron, esto es, que “Bustos y Flores tenían una intervención gravitante en los procesos...”. Al efecto, señaló la fiscalía que las alegaciones de las defensas tendieron a sostener que no había existido una contraprestación en el cohecho. Las defensas dijeron que Bustos no tenía capacidad de intervenir en las Comisiones, olvidando, sin embargo, las licitaciones de Río Tranquilo y Hualañé, las cuales no pueden omitirse en el análisis. Su actuación en esos dos casos demuestra el dolo de Bustos y su efectiva intervención en ambos procesos, en uno de los cuales él se encontraba haciendo uso de licencia médica.

En cuanto a la contraprestación indicó que bastaba que esta sea potencial de una actividad futura por la cual se paga un precio, un beneficio económico”; este criterio de la contraprestación aparece recogido en el considerando 40° del “fallo Orpis”. En consecuencia, no es efectivo que la intervención de Bustos careciera de trascendencia.

En cuanto a la alegación de la prescripción alegada por Bustos, indicó la fiscalía que el hecho 2 no se encuentra prescrito: la suspensión tuvo lugar el 28 de septiembre de 2018, debiendo tenerse presente la última fecha de los ilícitos, el 30 de diciembre de 2013, última triangulación detectada, entre cuyas fechas no transcurrieron 5 años. Sin embargo, para el caso de computarse el plazo desde la triangulación de 25 de noviembre de 2013, a la que alude Bustos como punto de

partida, tampoco alcanzó a transcurrir el plazo de 5 años hasta el 28 de septiembre de 2018.

En cuanto al alegato de Pizarro, este hizo tres alegaciones: a) la condición de funcionario público. Al respecto, explicó que el artículo 260 del Código penal señala quiénes lo son, y que lo que importa es la función que cumple y no la vinculación contractual, por ende lo son “todos quienes desempeñen la función pública”, sin perjuicio de las diferencias administrativas, pero desde el punto de vista penal lo que importa es resguardar la función pública. La Corte Suprema así lo ha resuelto, por ejemplo, en sentencia de 19 de mayo 2018, en el caso MOP GATE, considerando 47°; b) en cuanto al fraude al Fisco como estafa, señaló que la fiscalía no alude al engaño sino más bien a una suerte de administración desleal del patrimonio fiscal, y lo que resguarda el artículo 239 del citado Código es el patrimonio fiscal y su correcta administración. Agregó que en la especie no hay engaño pues Bustos (y Flores) conocían la falsedad de los informes técnicos del ITO, por lo que lo que se imputa es un incumplimiento doloso de sus deberes debidamente señalados en la acusación. Así lo señala la Corte Suprema en el caso de la ex alcalde Karen Rojo, como también el autor Juan Pablo Mañalich (*“hay que abandonar sin reserva que el delito del artículo 239....pudiere coincidir con una estafa, lo mejor es considerar como administración y gestión desleal del patrimonio fiscal.....es irrelevante que el funcionario pueda valerse de una maniobra constitutiva o cercana a un engaño”*). En la especie, todos los acusados realizaron conductas de engaño tendientes a la obtención de los pagos.

En cuanto al alegato de Gutiérrez: en cuanto al traspaso de 1 millón de pesos a que esa defensa hizo referencia, señaló la fiscalía que no se haría cargo de ello por no corresponderle al acusado esa imputación. En cuanto a la pregunta ¿dónde está la imputación que se le hace?, señaló la fiscalía que estaba expresamente señalada en la acusación. En cuanto al principio de congruencia, explicó que este no tenía una connotación puramente gramatical, sin perjuicio que infracción debía ser tan relevante que impidiera ejercer el derecho de defensa. La Corte Suprema ha dicho a este respecto que habrá incongruencia en la sentencia *cuando modifique el objeto del juicio que hubiere permitido valerse de otros elementos probatorios...*. Señaló que el acusado Gutiérrez se ha defendido desde el primer momento de un delito de fraude al Fisco. Sus intervenciones y actuaciones durante el desarrollo del juicio dijeron relación con el delito de fraude al Fisco.

Respecto de la alegación del acusado Rojas: no indicó cuál fue la garantía de debido proceso que se infringió; hizo mención a la respuesta de VTR respecto de correos electrónicos *“los dos RUT que se mencionan no mantienen servicios con VTR*, lo cual, explicó la fiscalía, es una información que dice relación con la fecha del informe, no siendo posible retrotraer esa situación toda vez que los correos de Rojas eran VTR. Si bien inicialmente desconoció los correos que se le exhibieron, fue del caso que luego del receso comenzó a reconocer varios de ellos, v.gr., el de 9 de abril de 2013, de 19 de octubre de 2013 (asunto: RE: Flujo, línea de tiempo adjunta), aquel otro en el que se refiere a inversionista A, B y posiblemente I; el de 7 de septiembre de 2013, el de 14 de marzo 2014, el de 19 de enero 2013, otro en el que se reconoce un retorno económico en dos pagos. Sostuvo que tales correos fueron también reconocidos por varios testigos que declararon en el juicio.

En cuanto al dolo de Rojas, señaló que se hizo cargo de ello y lo explicó extensamente y en detalle en su alegato enlazando los medios de prueba con sus declaraciones, de manera que no es cierto que no se hubiere rendido prueba alguna acerca del dolo, como afirmó la defensa del acusado.

Los antecedentes que dieron cuenta del conocimiento: sabía que se estaban efectuando pagos que no correspondían y él participaba (documental N° 9, correo de 25 de enero de 2013, *asunto: cómo realizo estado de pago N° 2 sino...*; correo de 10 de abril de 2013, *asunto: dato*, Rojas le escribe a Gutiérrez, le dice *si estas con el ITO te cuento que los pagos no están tan altos*; correo de 22 de mayo de 2013, asunto:... *“si consideramos el estado de pago que se pagó al Santander, nos quedan 183 millones,,,,, creo que es difícil que el ITO aperre con eso*; correo de 19 de octubre de 2013, *asunto: flujo termino de obras*, en el cual Rojas envía una línea de tiempo con la proyección de término de las obras para las fechas que allí se indican. César Rojas buscó otra empresa para terminar las obras no concluidas. El 23 de octubre Rojas se reunió con Grossman y Flores para ofrecerle el trato directo, pero sin decirle que él había actuado por CGM y que había sido esa empresa la que había dejado botadas las obras, como le había manifestado a Grossman. Realizó todas las gestiones para la inscripción de Grossman en el registro de contratistas, presentando además documentos. Rojas sabía el estado de las obras antes de que se firmara el contrato con Carabineros, por lo que no es aceptable que ahora alegue que no lo sabía y que el ITO los había engañado (prueba documental 1.240, viaje de Labra a verificar estado en

que estaban las obras, antes de firmar el contrato). Las palabras de Grossman graficaron lo ocurrido. Rojas actuó como el hombre de atrás, no pudiendo escudarse en que él no había firmado documento alguno.

En cuanto a la información uso privilegiada, se dijo que era una acusación falsa y malintencionada, sin embargo en su apertura dijo “el ministerio público declaró reservado...sin que se demostrase el carácter reservado y secreto de la documentación, ninguno de los cuales dicen eso: correo de 10 de junio de 2013, otros medios de prueba 9, planos técnicos de obras “proyecto referencial debe ser aprobado por...”. Además en las bases se dice que es reservada toda información referida a los procesos licitatorios. Rojas efectivamente recibía información privilegiada respecto de la fecha y monto de las licitaciones, de la documentación, de las visitas de fiscalización, inclusive cuándo siquiera había sido aprobada la visita. En el correo de 24 de junio de 2013, Rojas le envía a Gutiérrez un estado completo y detallado. Asimismo, correo de 16 de agosto, en relación a proceso de Villa Ortega, en que Gutiérrez le pregunta si “...es posible que B le dé un *panorama de...*”, en circunstancias que la apertura de sobres tuvo lugar recién el 24 de agosto. La información que habría obtenido Rojas a partir del Banco Integrado de Proyectos, acerca de lo cual se rendiría un informe pericial, fue del caso que la defensa retiró ese medio de prueba.

Refirió que la defensa de Bustos había aludido a la prueba nueva de Rojas (Parraguez), diciendo que en el juicio se habría develado la verdadera fuente de información, a saber Romina Parraguez por medio de su cónyuge, lo cual, sin embargo, no era efectivo pues la información a que se aludía en el correo pertinente hacía alusión a un cuartel cuyo monto había sido publicado con anterioridad.

En cuanto al cohecho de Rojas, la fiscalía señaló: 1) que está acreditado que la inscripción de la empresa Grossman tuvo lugar antes de la resolución en la que se aprobó tal inscripción; 2) Grossman no se enteró de la licitación por medio de una carta de invitación sino que le fue dada en un almuerzo en el restaurant Chilenazo, 3) fue Flores quien ordenó la licitación; 4) el 30 de octubre tuvo lugar el pago de un millón de pesos de Rojas a Flores Santis, no siendo plausible que el depósito lo hubiere hecho su cónyuge, ello toda vez que la documentación daba clara cuenta

que la transferencia aparecía efectuada por César Rojas. En todo caso, tal alegación no formó parte de la teoría de la defensa.

En cuanto al perjuicio, refirió que no existía duda alguna de su existencia ya que constaba en los informes técnicos y en la prueba en General, respecto de los cuatro proyectos. En el caso de Villa Ortega se sumaron a lo informado por la Comisión Técnica que para estos efectos se formó en su oportunidad, los recursos fiscales que se destinaron para la realización de los trabajos de terminación de la obra a que dio lugar la respectiva Comisión de servicio que para tales efectos se designó. Señaló que el peritaje de Ronald Saldías no fue sobre los perjuicios sino que respecto de la documentación, de las facturas. Los perjuicios deben analizarse desde un punto de vista de la realidad, esto es, en consideración al estado inconcluso de las obras y no a lo facturado ni a los informes de estado de avance de las obras. Refirió que no era efectivo que el dinero que restaba fuera suficiente para terminar las obras, como lo prueba el hecho de que el itemizado del trato directo fue falsificado en su contenido. La existencia de las boletas de garantía no alteran el hecho de la ocurrencia de los delitos. No cabe descontarlas del perjuicio como tampoco las multas cobradas. Lo que sí correspondía descontar eran las retenciones, toda vez que esos dineros no ingresaron al patrimonio de CGM.

Indicó que las defensas de Rojas, Gutiérrez y Bustos sostuvieron que el sumario no podía ser valorado por no haberse incorporado como lo ordenan las normas del Código Procesal Penal, circunstancia que sin embargo no fue alegada en la audiencia de preparación de juicio oral, y que por el contrario, estuvieron de acuerdo en su incorporación como prueba N° 1 de la prueba documental del querellante, con la sola salvedad de que no se diera lectura a las declaraciones prestadas por los acusados allí sumariados. Con todo, de haber existido un vicio, es del caso que las defensas lo convalidaron al haber aceptado su incorporación en los términos ya referidos.

En cuanto a la obtención de los NCU con infracción de las garantías constitucionales, ello no es así pues la naturaleza jurídica de tales documentos es la de oficios, comunicaciones.

Respecto de la comunicabilidad, sostuvo que en la especie era aplicable la tesis de la comunicabilidad extrema, citando al efecto diversos autores que así lo sostienen, entre otros, Eduardo Novoa Monreal y Mario Garrido Montt, el cual destaca al efecto el elemento subjetivo de los participantes en el delito, por el conocimiento que se tiene respecto del delito que en específico se está realizando, relevando en tal sentido la condición que tenía Rojas como ex mayor de Carabineros. En apoyo de esto último citó la sentencia del llamado caso MOP GATE (considerandos 25° y 29°).

Concluyó su intervención diciendo que se había logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, los hechos de la acusación, solicitando en consecuencia la condena de los acusados;

2) querellante:

La parte querellante refirió en su réplica que el sumario administrativo fue acordado por todos los intervinientes en la audiencia de preparación de juicio oral, salvo la exclusión de las declaraciones de los acusados contenidas en el, lo que otorga un alto nivel de legitimidad. Recordó el principio de libertad de prueba reconocido en el artículo 275 del Código Procesal Penal, cuanto más si el mentado sumario no fue una prueba obtenida con infracción de garantías. A mayor abundamiento, las defensas se valieron en el juicio del sumario administrativo, particularmente la defensa del acusado Gutiérrez. Señaló que otro tanto cabía decir respecto de la prueba testimonial, más aún si las defensas siempre supieron de su existencia y de aquello sobre lo cual declararían, toda vez que así se señalaba en la acusación particular en la cual fueron ofrecidos los testigos. A mayor abundamiento, las defensas tuvieron la oportunidad de contrainterrogarlos. Respecto de la cuestión planteada acerca del concepto de funcionario público citó los artículos 19 y 20 del Código Civil, a partir de los cuales había que estarse a la definición que entrega el artículo 260 del Código Penal. En la misma línea hizo referencia a la cuestión concerniente a la *función pública*, refiriendo al efecto que el acusado Pizarro realizaba tal función, cuanto más si su nombramiento lo incluyó en el concepto del citado artículo 260. Respecto de la naturaleza del delito de fraude al Fisco reiteró que se trataba de un delito especial propio y que no compartía la estructura del delito de estafa, desde que el engaño no forma parte del tipo penal y porque además se correspondía con una administración desleal.

Reiteró sus afirmaciones concernientes al perjuicio, añadiendo que este era evidente ya que los retenes Lago Castor e Isla Huar y la tenencia Coyhaique Alto no se construyeron, sin perjuicio que así lo demostró la prueba de cargo. Acerca de la comunicabilidad indicó que la condición de funcionario público fue esencial para la comisión del delito, toda vez que de no haberse coordinado los particulares acusados con los acusados funcionarios públicos, el delito no habría podido cometerse. En cuanto al manejo de información privilegiada por parte de Rojas refirió que en el certificado de refrendación no estaba en el Banco Integrado. Solicitó acoger su acusación por delito de soborno respecto del acusado Rojas por la inscripción de la empresa Grossman.

En cuanto al hecho 2, se refirió a la prescripción de la acción penal, indicando que la defensa del acusado Bustos había confundido la suspensión con la interrupción. Acerca de esta última señaló que los últimos delitos fueron cometidos el 24 octubre, 25 noviembre y 30 diciembre de 2013, en tanto que los primeros los primeros ocurrieron en el año 2011, cuya prescripción se interrumpió con la perpetración de aquellos tres primeros delitos. Pero además la suspensión de la prescripción que tuvo lugar con la formalización de la investigación, el 28 de septiembre de 2018, determinó definitivamente la acción penal no prescribiera. Acerca del parentesco de los acusados Bustos, y con la libertad que establece el artículo 275 del Código Procesal Penal, dicha circunstancia fue acreditado con la prueba que se rindió, sin perjuicio del reconocimiento del parentesco que hizo el acusado Christian Bustos Morgado con los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado. A ello sumar los dichos de los testigos Osvaldo Tobar y Juan Soto Jara. Con todo, afirmó que el parentesco era en último caso irrelevante pues lo relevante fue la relación y nivel de contactos que existía entre ellos, lo que demostraba un alto nivel de amistad entre ellos tres.

Acerca de la demanda civil sostuvo que la acción civil no estaba prescrita, reiterando lo que fueron sus actuaciones en sede penal a propósito de las querellas que interpuso y de las numerosas diligencias que solicitó en el transcurso de la investigación, mediante las cuales se buscaba aclarar los hechos, preparando con ello la demanda civil y por ende interrumpiendo la prescripción. Citó la sentencia de la Corte Suprema, rol 144316-2020, de fecha 26 de julio de 2021: *la querella y ampliación son útiles, aptas para interrumpir la prescripción porque se buscaba aclarar los hechos.*

c) acusados Bustos Morgado.

Inició su réplica diciendo que la libertad probatoria tiene un límite normativo a efectos de que no se ponga en riesgo el debido proceso, artículo 295 del Código Procesal Penal. Reiteró sus objeciones a ciertos medios de prueba en orden a que no debían ser valorados. Sin embargo, los informes 125, 126 y 127 fueron evacuados a raíz de la Comisión Jorge Muñoz Soto, quien concurrió con 3 profesionales del área en cuestión. Tales informes carecen de desglose. En ellos no se incluyeron los addendum, retenciones y boletas de garantía. El profesional más importante de los tres era Pomar, por ser él constructor civil, pero que sin embargo no vino. Lo importante era saber cuáles partidas se pagaron en exceso. Cuestionó la declaración del testigo Lautaro Silva Estay, tanto en la forma como en el fondo, esto último porque en el juicio no reconoció los informes cuya autoría se le atribuían. Reiteró sus críticas acerca del informe que habría evacuado Gustavo Abarca. En cuanto al perito Ronald Saldías reiteró sus objeciones. Al igual que lo hizo con el testimonio de la perito Cerpa. En lo concerniente a los testigos que se habían reunido con la fiscalía, Lautaro Silva e Ignacio Labra Moscoso, Omar Gutiérrez Gámbaro, Navarrete, quienes dieron cuenta de tales reuniones. Destacó el considerando 7º de la sentencia de la Corte Suprema citada en la clausura sobre esta materia, añadiendo los comentarios que sobre la misma hizo la profesora Daniela Becerra en la Revista de Ciencias Penales. En lo concerniente a la sustitución de declaraciones por documentos reiteró que ello infringía el artículo 329, inciso primero, del Código Penal. Otro tanto señaló en relación al informe final de investigación de la Contraloría General de la República.

Señaló que no pasaba de ser una conclusión de la fiscalía que el acusado Christian Bustos habría ordenado eliminar un último párrafo del acta N° 54 (acta de fs 1.053, difiere en este punto del mismo documento de la foja 66, ambas contenidas en el sumario administrativo). Asimismo, la versión entregada por Gutiérrez Gámbaro y dos más prestadas en el sumario, difieren de lo dicho por Nadal y Salamanca en sus descargos a la vista fiscal, en el cual sindicaron a Pizarro como el responsable de la comisión de servicio de Nadal a efectos de verificar que se habían corregido las observaciones menores de la recepción provisoria. En cuanto al cohecho que se sustentaría en el correo de Carolina Gutiérrez, no es posible considerar sus dichos en ese medio de prueba, toda vez que dicha persona no concurrió al juicio a declarar, y aún más, la circunstancia no

fue incluido dentro de los hechos de la acusación, constituyéndose en un hecho nuevo, un hecho sorpresa, que por su trascendencia e impacto en la acusación y el derecho de defensa del acusado Christian Bustos, debió haberse incluido dentro de los hechos que se imputaron a éste.

En cuanto al hecho 2 y una eventual negociación incompatible, no se demostró que Bustos tuviere vínculos de amistad con Osvaldo Tobar. En cuanto a los 4 correos enviados por éste y recibidos por Bustos, señaló que el perito Ramos había declarado que no era lo mismo recibir que entregar, precisando que un correo puede ser recibido y quedar en la bandeja de entrada del servidor sin ser leído por el destinatario. Refutó las conclusiones de la fiscalía respecto del deber de abstención que señala el artículo 12 de la Ley 18.890, toda vez que Osvaldo Tobar no fue asesor sino el contador de una empresa de responsabilidad limitada, cuyo representante legal era otra persona que Christian Bustos Morgado, siendo este último un mero socio de dicha sociedad. El perito Castro no tomó en consideración los créditos bancarios que obtuvo Christian Bustos ni de las numerosas transferencias de carácter comercial que mantuvo con sus hermanos. No existía prueba que demostrase que las dos transferencias que analizó el perito tuvieran como destinatario el acusado Christian Bustos. Respecto de la prescripción de la acción penal y civil mantuvo sus argumentos iniciales de la clausura, agregando que las diligencias, actuaciones aludidas por el querellante para preparar su demanda civil, no fueron acreditadas en el juicio. En cuanto a las instrucciones que habría dado Bustos a Pizarro para alterar los estados de avance de las obras, tal circunstancia no se deriva de los indicios provenientes del cargo y amplitud de dominio que el acusado Bustos tenía respecto de las obras, cuanto más si la controversia en este punto decía relación con si este último había o no obligado a Pizarro a falsificar los estados de pago. Ningún testigo refirió que ello hubiera ocurrido, por el contrario, destacaron que Bustos mantenía un buen ambiente de trabajo, que no existía bulling a Pizarro y que no se les había obligado a hacer cosa alguna. Reiteró que los documentos eran preparados por Pizarro. En cuanto a que Pizarro viajaba con posterioridad a la confección de sus informes, circunstancia que fue desvirtuada por los otros ITOS, insistiendo además que no existían norma que exigiera o dijera que las actas de entrega de terreno debían realizarse in situ, en el lugar de las obras. Señaló, además, que el primer estado de pago de Villa Ortega era de fecha posterior a la visita a terreno realizada por el ITO Pizarro. En sus informes Pizarro dejaba constancia de la fecha en que había realizado las visitas, siendo estas fechas, en todos los casos,

anteriores a sus informes y posteriormente estados de pago. En cuanto a la preclusión de alegación de exclusión del sumario administrativo por no haberse solicitado en la audiencia de preparación, indicó que el fundamento de su petición en sede de juicio oral provenía de la circunstancia de no haberse incorporado dicho antecedente conforme a las reglas del procedimiento penal, como correspondía que se hiciera atendida la distinta naturaleza que tiene una investigación administrativa de una penal, como distintos eran, por ejemplo, los kilómetros de las millas y los pesos de los dólares;

d) réplica acusado Pizarro: Inició su réplica diciendo que la dinámica de ilicitud que sostuvo la fiscalía difería de la dinámica que explicó el acusado Pizarro, la cual fue demostrada con la prueba documental que se rindió en el juicio. Señaló que concordaba con la afirmación de la fiscalía en orden a que Pizarro no se mandaba sólo, de lo cual se desprendía que la responsabilidad de Pizarro era puramente administrativa, la cual ya se había hecho efectiva en su oportunidad mediante su destitución de Carabineros. No se había demostrado cuál habría sido el beneficio económico o el interés que le habría movido para incurrir en las irregularidades cometidas en sus informes. Indicó que si bien había ocurrido un incumplimiento de contrato ello no significaba que Pizarro hubiere cometido el delito de fraude. Señaló que sí existían antecedentes que demostraban la coacción de que había sido objeto en orden a confeccionar informes falsos. Los correos en que se menciona al ITO corresponden a comunicaciones entre otras personas. Pizarro fue instrumentalizado porque sin él el fraude no se hubiere podido ejecutar. No existen antecedentes que demuestren acciones de coordinación de Pizarro con los demás acusados.

La defensa señaló que, en la medida que el tribunal diere por acreditado el delito de fraude, el acusado Pizarro sería no más que un encubridor del N° 2 del artículo 17 del Código Penal, habida cuenta de no haber sido un partícipe necesario en la comisión de ese delito. Agregó que lo ocurrido era incumplimiento de deberes funcionarios, no penales. Fraude por infracción de deber, como sostienen los acusadores, sobre la base de los considerandos 21 y siguientes de la sentencia invocada por el querellante en su clausura. Citó la sentencia dictada en la causa rol 3763-2018, de fecha de 30 de septiembre de 2019, dictada por la Corte Suprema, donde se aborda el problema en los considerandos 22 al 28, en que señala que lo que da el carácter de fraude a este delito es el engaño cometido

desde el interior de la administración. El carácter de encubridor de Pizarro deviene de haber seguido un tren decisional en el cual él no había ideado. Los deberes específicos que incumplió el acusado fue el deber de veracidad, esto es, decir la verdad en los instrumentos técnicos a su cargo, se trata de un deber que viene dado de normas reglamentarias, como es el DS 294. El acusado no tenía posibilidad de actuar de otra forma que lo hizo atendido a su posición jerárquica y sus características de personalidad.

e) Réplica acusado Gutiérrez:

La defensa del acusado Gutiérrez señaló que las cartas de solicitud, estados de pago ni las facturas fueron firmadas en su totalidad por el acusado, a excepción del estado de pago N° 8, lo cual consta de la prueba documental y de algunos testigos, como Ignacio Labra. Se dijo que CGM; había abandonado las obras, en circunstancias que la propia prueba de la fiscalía daba cuenta que por orden de Félix Flores se había impedido el ingreso del acusado y su personal a las obras. Lo mismo declaró el testigo Rafael Mena. Se dijo por la fiscalía que las obras de CGM nunca alcanzó el avance de los estados de pago, circunstancia que la prueba de cargo no había acreditado. Refirió que había quedado acreditado que CGM recibió menos dinero que el monto de las obras ejecutadas. En cuanto a la determinación del perjuicio indicó que la fiscalía no había señalado cuál había sido la fuente de información desde la cual había obtenido el valor de la UTM, asistiéndole la duda si dicho valor era el de la fecha de los contratos u otras. Cuestionó los correos aludidos por la fiscalía en su alegato, relacionados con el acusado Gutiérrez, diciendo que eran correos respecto de él pero en los cuáles no aparece que él haya intervenido. En cuanto al soborno de 8 de febrero, con motivo de la transferencia de dinero de CGM a la cuenta de César Rojas, desconociéndose el destino final que tuvo este dinero. En cualquier caso no constaba que esa transferencia hubiere sido efectuada por Gutiérrez, más aún si Rojas contaba con un poder amplio que le había otorgado Gutiérrez.

f) Réplica del acusado Rojas.

La defensa refirió que las transferencias eran efectuadas por Gutiérrez, como había quedado demostrado con varios medios de prueba. Cuestionó que la fiscalía no hubiere aportado las respuestas a los correos que se le dirigieron a Gutiérrez,

sin perjuicio que esa parte no los había entregado a la fiscalía. La testigo N° 50 declaró que en el mes de noviembre Grossman envió una carta cumpliendo con ciertas observaciones efectuadas a la documentación aportada anteriormente, entre ella, el certificado de capital propio, el cual carecía de firmas y timbres del banco. Cuestionó que según Gutiérrez A y B fueran Flores y Rojas, en circunstancias que el mismo Gutiérrez dio otras dos versiones en la misma declaración, señalando, primero, que sólo en el curso de la investigación se había enterado quién era A y quien era B, y al final, diciendo que no sabía quién era A ni B. Cuestionó la indeterminación del monto del perjuicio, no bastando para ellos los informes técnicos 125, 126 y 127 y el informe final de investigación, en los cuales, además, se dijo que no se había determinado perjuicio. Acusó falta de coherencia entre los hechos de la acusación y las aseveraciones planteadas por la fiscalía en su réplica, afectándose con ello el derecho de defensa. Contrariamente al dolo inequívoco que sostuvo la fiscalía respecto del correo de César Rojas, de 19 de octubre de 2013, con el asunto “flujos”, en que se indican fechas de término de las obras inconclusas, lo cual probaba la ausencia de dicho dolo sino que su preocupación por el término de dichas obras. Más allá del hecho de haber reconocido algunos correos y otros no, refirió que lo relevante era saber si eran o no fidedignos, si habían sido o no adulterados. El testigo Socías declaró que la Comisión había dejado constancia en el acta de las instrucciones dadas por Bustos, respecto de las aclaraciones que había que pedir a los oponentes en la licitación de pero que el testigo no había dicho que la Comisión había cumplido con tales instrucciones. Citó cuatro sentencias, una de la Corte Suprema, otra de la Corte de Apelaciones de Santiago, una más de la Corte Suprema y una última de la Corte de Apelaciones de Concepción, en las que se coincide en señalar que no debe hablarse de comunicabilidad sino de incomunicabilidad, toda vez que esta es la regla General, en tanto que la comunicabilidad es la excepción. Concluyó que, en su opinión, la jurisprudencia estaría actualmente dividida en esta materia. Finalmente, afirmó que no existía prueba del dolo del acusado Rojas en el delito de fraude, en tanto que en el delito de soborno se demostró que no era necesario para obtener la inscripción de la empresa Grossman, según antes se dijo. Solicitó que, atendida la cuantía de la pena, debía aplicarse el más alto estándar de condena, a fin de que la eventual condena fuera más allá de toda duda razonable.

DÉCIMO SÉPTIMO: Palabras finales de los acusados. Que, concluido el debate se otorgó la palabra a los acusados, los cuales se dirigieron al tribunal diciendo:

- a) acusado Christian Bustos Morgado: no hizo uso de la palabra;
- b) acusado Nelson Bustos Morgado: no hizo uso de la palabra;
- c) acusado Rodrigo Bustos Morgado: no hizo uso de la palabra;
- d) acusado Francisco Pizarro Dasso, expresó sus agradecimientos hacia el tribunal;
- e) acusado Gutiérrez: manifestó sus agradecimientos para con el tribunal;
- f) acusado Rojas: expresó sus agradecimientos hacia el tribunal.

DECIMO OCTAVO: Veredicto. Que, como se diera a conocer en la oportunidad que indica el artículo 340 del Código Procesal Penal, los jueces, luego de analizar las pruebas y la declaración de los acusados, **resolvieron:**

1º.- En cuanto al hecho 1 (delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno).

1) absolver a los acusados Christian Bustos Morgado, Francisco Pizarro Dasso, Cristian Gutiérrez Martínez y César Rojas Gaete de los cargos que le formularon los acusadores fiscal y particular de ser autores de delitos reiterados de cohecho, el primero de los acusados, y delitos reiterados de soborno, los otros dos acusados;

2) condenar a los acusados Christian Bustos Morgado, Francisco Pizarro Dasso, Cristian Gutiérrez Martínez y César Rojas Gaete, como autores de cuatro delitos continuados de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, perpetrados el año 2013; y,

3) acoger la demanda civil que dedujo el consejo de defensa del estado, como querellante particular, en contra de los acusados christian bustos morgado, francisco Pizarro dasso, cristian gutiérrez martínez y César Rojas gaete, por el daño patrimonial causado al Fisco de Chile con los delitos de fraude.

2º.- En cuanto al hecho 2 (cohecho y soborno).

1) absolver a Christian Bustos Morgado, Nelson Bustos Morgado y Rodrigo Bustos Morgado, por la autoría que les cupo en los delitos de cohecho y soborno, cometidos el año 2011, por estar prescrita la acción penal.

2) condenar a Christian Bustos Morgado, Nelson Bustos Morgado y Rodrigo Bustos Morgado, por su responsabilidad como autores de cinco delitos de cohecho, el primer acusado, y cinco delitos de soborno, los otros dos, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 248 bis y 250 del Código penal,

Que, el veredicto de condena que acaba de señalarse fue el resultado de la convicción que se formó el tribunal a partir de los medios de prueba que se aportaron en el juicio, sin que a dicho convencimiento haya obstado alguna duda razonable proveniente, ya de las pruebas ofrecidas por los acusados, ya de las alegaciones que las defensas efectuaron en torno éstas y a las de cargo. Tratándose de las absoluciones, estas fueron consecuencia de la falta de prueba, en el caso de los delitos de cohecho y soborno a que se alude en el hecho 1, y de la prescripción de la acción penal, en el caso de los dos delitos de cohecho y soborno a que se refiere el veredicto en relación al hecho 2.

HECHO 1. FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y SOBORNO.

I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1.- CUESTIÓN PREVIA: PETICIÓN DE NO VALORAR DETERMINADOS MEDIOS DE PRUEBA.

DÉCIMO NOVENO: Que, las defensas de los acusados Bustos y Rojas solicitaron, como cuestión previa, no valorar ciertas y determinadas pruebas de cargo. Las pruebas y los fundamentos en cada caso fueron los siguientes:

a) Defensa de acusados Bustos Morgado:

l) Medios de prueba producidos al margen de la ley, tales como documentos y declaraciones de testigos y peritos (sentencia Corte Suprema rol 37213-2017).

Respecto del primer medio de prueba la petición recayó en los siguientes documentos:

a) Prueba documental N° 1, N° 6 y N° 12 (copias de los Informes Técnicos N° 125, 126 y 127, y sus anexos, suscritos por el jefe de área de Ejecución y Coordinación de Proyectos de Departamento de Cuarteles L1, correspondientes a las visitas a terreno realizadas con fecha 17 de febrero de 2014, al Retén de Carabineros Lago Castor, a la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto y al Retén de Carabineros Isla Huar);

b) Prueba documental N° 1.068 (informe técnico y su adjunto, de fecha 3 de abril de 2014, del Área de Gestión y Control de Proyectos del Gabinete de la Dirección Nacional de Logística, suscrito por Lautaro Silva Estay, CPR, arquitecto de Carabineros de Chile) y,

c) Prueba documental N° 1.076 (Oficio N° 1, de fecha 3 de febrero de 2014, dirigido por Gustavo Aravena Vergara, Coronel de Carabineros de Chile, Jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, a la Dirección Nacional de Logística, por el cual envía informe respecto a visitas efectuadas con fecha 30 de enero de 2014 a los Retenes Villa Ortega y Lago Castor, y Tenencia Coyhaique Alto).

En cuanto a la prueba pericial, la petición recayó en las declaraciones de Ronald Saldías Toro y Constanza Cerpa Mena.

La solicitud de no valorar las pruebas indicadas se fundamentó en que ellas tuvieron origen en un sumario administrativo que sustanció Carabineros, en el cual, el entonces Coronel Óscar Águila Galdamez dispuso la elaboración de los citados informes técnicos N° 125, 126 y 127, en tanto que el instructor, Coronel Omar Gutiérrez Gámbara, decretó de manera autónoma las pericias de que dieron cuenta Ronald Saldías Toro y Constanza Cerpa Mena. A lo anterior añadió que quienes tomaron parte en dichos informes no fueron citados a declarar a la fiscalía, otros no comparecieron en el juicio a ratificarlos.

II) Intervención o influencia de terceros con infracción de la prohibición contenida en el artículo 329, inciso sexto, del Código Procesal Penal: declaraciones de los testigos Lautaro Silva Estay, Ignacio Labra Moscoso, Omar Gutiérrez Gámbara, José Henríquez Orrego y Matías Navarrete Millón y Ronald Saldías Toro. Lo anterior, por haberse reunido o mantenido conversaciones con la fiscal a cargo del juicio, antes y durante el juicio. En apoyo de lo dicho citó los considerandos 5°, 6°, 8° y 10° de una sentencia de fecha 11 de octubre de 2017, dictada por la Corte Suprema en el rol 37.213-2017, en la cual, y a partir del inciso final del artículo 329 del Código Procesal, señaló que *la norma pretende evitar que los testigos declaren sin influencia de terceros para así evitar que se afecte la fiabilidad y exactitud de la información que proporcionan en el juicio oral; la fiscal se reunió con tres testigos, en dependencias del ministerio público, a instancias de la fiscal, habiendo prestado declaración otros testigos y que en esa reunión se habló de los hechos materia del juicio, con lo que trasgredió la norma y generó un riesgo para el debido proceso, afectándose de esa forma el derecho de la parte a que la declaración se haga sin intervención de terceros, cuyo es el propósito de la norma mencionada.*

III) no valorar como prueba documental el sumario administrativo, toda vez que había sido *trasvasiado* desde un procedimiento sumarial administrativo hasta una investigación penal sin mediar una adecuación de tal transferencia conforme a la ley, atendido el hecho que los principios del proceso administrativo sancionatorio no eran conciliables con los del proceso penal, principios estos últimos a partir de los cuales se desprendían un conjunto de prohibiciones y reglas concernientes a la recolección e incorporación de pruebas al proceso, a saber: el artículo 334, que prohíbe incorporar en el juicio documentos generados en la investigación; el artículo 329, los peritos deben ser interrogados personalmente; los artículos 227 y 228, que contienen la obligación de registro; el artículo 187, concerniente a la recolección de objetos e instrumentos que puedan servir como medios de prueba; el artículo 9°, que establece que toda actuación que pueda privar, perturbar o restringir el ejercicio de los derechos que le acuerda la Constitución Política debe ser autorizada por un juez (v.gr., documentos electrónicos y NCU son formas de comunicación internas amparadas por en el artículo 19 N° 5). A mayor abundamiento, el artículo 436 del CJM, dispone que ciertos antecedentes que allí se indican revisten carácter de secretos, por lo que las medidas intrusivas que signifiquen su alzamiento requieren la autorización del artículo 209 del Código Procesal Penal. En consecuencia, sostuvo que no podían ser valorados como

prueba: a) la vista fiscal del sumario; b) los descargos de los sumariados Christian Bustos, Félix Flores, Luis Parra, Francisco Pizarro, entre otros, quienes debieron haber comparecido al juicio; c) el Anexo 4 del Informe Final Especial de Investigación N° 283/2015, de 16 de diciembre de 2015, de la Contraloría General de la República (prueba documental N°115, de la fiscalía), toda vez que no se indicó quiénes fueron las personas que lo elaboraron, quienes tendrían que haber concurrido a declarar para dar cuenta de como llegaron a las conclusiones que se consignan en este anexo, respecto del perjuicio. Lo anterior, sin perjuicio de que no era posible contar con ese informe sino mediante la declaración de el o los peritos que lo elaboraron; d) el documento N° 917, referido a dos líneas de tiempo elaborados por el policía José Henríquez.

IV) no valorar las declaraciones de los testigos Lautaro Silva Estay, Jorge Santis Muñoz, Fabián Gutiérrez Salazar y Rodrigo Pérez Mújica, por haberse infringido el deber de registro que establecen los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, lo que habría impidiendo a la defensa contrastar los testimonios que entregaron en el juicio con sus declaraciones anteriores, y,

b) La defensa del acusado Rojas solicitó no valorar los correos electrónicos por no parecerle fidedignos, en la medida que no había habido una pericia que los hiciera confiables. Señaló que si bien algunos de esos correos tenían el mismo contenido, no ocurría otro tanto con su formato, como sucedió con aquellos que le mostraron impresos al acusado, pero que al exhibirlos en la pantalla aparecieron con otro formato. Indicó que había correos que en el encabezado decía “Constructora CGM Ltda.”, pero había otros en los cuales aparecía el nombre de la fiscal de la causa, Constanza Encina, circunstancia que demostraba que los correos eran editables y por tanto no fidedignos ni confiables.

VIGÉSIMO: Que, en lo pertinente, la fiscalía en su réplica se refirió al capítulo III (no valorar el sumario administrativo), señalando al respecto que ni la defensa de Rojas ni la de Bustos (ni tampoco la de Gutiérrez), habían alegado en la audiencia de preparación de juicio oral que el sumario administrativo, y las piezas sumariales que a ellos interesan, fuera excluido por la razón que ahora aducían, como es el hecho de que no hubiere sido incorporado a la investigación penal de la manera que dispone el Código Procesal Penal, sino que por el contrario, habían estado de acuerdo en que formara parte de la prueba documental N° 1 de la parte

querellante, con la sola excepción que no se leyera en el juicio las declaraciones de los acusados sumariados.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, la defensa de Rojas adujo en su réplica que, si bien lo anterior era correcto, la verdad era que el examen oportuno y acabado del sumario, por el volumen de este (miles de fojas), era en extremo difícil, sino imposible, que hubiere podido hacerse.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a las objeciones de los acápites I y III, éstas se apoyaron en un mismo fundamento, por lo que en las siguientes líneas se abordarán en conjunto ambos capítulos.

En primer lugar, si lo que se cuestiona con la poco feliz expresión *trasvasije* es que el ministerio público haya oficiado a la Contraloría General de la República a fin de contar en la investigación con el sumario administrativo que se llevó a efecto con motivo de las irregularidades administrativas acaecidas al interior del Departamento Cuarteles de Carabineros, sucede que dicho requerimiento forma parte de las facultades que la ley le acuerda al órgano de persecución, según dispone el artículo 19 del Código Procesal Penal, que regula las comunicaciones entre autoridades: *toda autoridad y órgano del Estado deberán proporcionar sin demora la información que les requiere el Ministerio Público.*

Con respecto a que algunas piezas del sumario administrativo hubiesen estado afectas a secreto, lo cierto es que no se incorporó al juicio ninguna que tuviese tal condición. Con todo, si eventualmente se estimase que una o más piezas sumariales tuvieron ese carácter o condición, y que por ende requerían de autorización judicial, es del caso que el tribunal no advirtió que una omisión semejante haya afectado, no en abstracto sino que concretamente, la garantía del debido proceso ni el derecho a una defensa efectiva.

En el mismo sentido, si aquello que objeta la defensa es que por no haber el ministerio público efectuado algunas diligencias o actuaciones que ese interviniente considera requisito para la valoración judicial del sumario como medio de prueba, es del caso que su aportación, de la manera que lo hizo, constituye una facultad discrecional de la fiscalía, en la medida que el ente persecutor podía o no considerar necesarias tales diligencias o actuaciones previas.

Para el tribunal, el cuestionado sumario administrativo constituyó un antecedente más de entre los numerosos que la fiscalía recabó en el curso de la investigación, cuyo contenido, en lo que a las declaraciones e informes importan a la defensa, fue valorado por los jueces con la libertad y las limitaciones que le impone el legislador en la apreciación y valoración de las pruebas aportadas en el juicio. Lo anterior, como antes se dijo, so riesgo de incurrir en un vicio que haga anulable la sentencia y el juicio por la sola razón de no valorar la totalidad de las pruebas rendidas en el juicio.

Respecto a la infracción de las normas procesales concernientes a diligencias de investigación, recolección y registro de actuaciones policiales, no se demostró que al incorporarse el sumario a la investigación, se hubieres trasgredido tales normas. En efecto, el requerimiento que hizo la fiscalía para que se les enviara el sumario, de su posterior recepción y de su registro y custodia no se indicó en concreto de qué manera o forma tales actuaciones contravinieron las normas procesales que la defensa citó, sin que la sola enunciación de disposiciones legales y la descripción de su núcleo de protección basten para concluir que con la adición del sumario a la investigación se infringieron dichas disposiciones, teniendo presente su naturaleza jurídica de prueba documental y por tanto inentendible la pretensión de que las diligencias que aparecen registradas en las piezas sumariales hubieran debido repetirse como condición de valoración judicial. La circunstancia de que el ministerio público no haya *vuelto a hacer lo que ya se había hecho* en el sumario no conlleva ni supone infracción alguna, ni tampoco le priva de recurrir a él como medio de prueba.

A mayor abundamiento, la prescindencia de valoración de prueba que se solicitó resulta inconsistente con el hecho de no haber requerido del juez de garantía, en la oportunidad que correspondía, un pronunciamiento como el que se le ha pedido a este tribunal. Además, la omisión de valoración judicial se contradice con el hecho que las defensas, haciendo uso de los derechos que les reconoce el debido proceso, hayan acudido en el curso del juicio a diversas piezas sumariales.

El Código Procesal Penal obliga a dejar constancia de todas las actuaciones que se realicen con motivo de la investigación. Esta constancia debe hacerse tan pronto como tenga lugar la actuación o diligencia de investigación, pudiendo para ello *utilizar cualquier medio* que garantice que no se afectará la

fidelidad e integridad de la información a que tiene derecho a acceder la defensa. Aunque la obligación que le cabe al ministerio público es la de garantizar el ejercicio efectivo y pleno del derecho a la defensa, es del caso que no se escucharon argumentos de la defensa en orden a no haber tenido o podido tener oportuno conocimiento del hecho de haberse agregado el mentado sumario a la investigación, de su contenido o de que éste no fuese fiel o fidedigno, por lo que no se vislumbra algún perjuicio para la defensa que pueda vincularse a una infracción concreta de una garantía constitucional que por tal motivo impida al tribunal cumplir con su deber de valorar las piezas del sumario que se incorporaron al juicio.

VIGESIMO TERCERO: Que, en lo que dice relación al cuestionamiento de las reuniones que tuvo la fiscal con algunos testigos durante el desarrollo del juicio, y sin perjuicio del efecto relativo de las sentencias que establece el artículo 3° del Código Civil, la objeción planteada en el capítulo II fue desestimada al ser el caso de marras distinto de aquel que se cita por vía jurisprudencial, cuyos supuestos difieren de este. En efecto, en la sentencia que cita la defensa se estableció que *la fiscal se había reunido con tres testigos en dependencias del ministerio público, a instancias suyas, en la cual se habló de los hechos materia del juicio cuando ya habían declarado otros testigos*. Al contrario, en ésta causa consta, de las mismas declaraciones que la propia defensa citó como prueba, que lo ocurrido fue distinto. Así consta de los dichos de los deponentes implicados: testigo Ignacio Labra Moscoso, “se me citó a una reunión con la fiscal antes de la pandemia, hace dos semanas nos reunimos”; Omar Gutiérrez Gámbara, “tuve una entrevista presencial y dos virtuales, respecto de algunas dudas del sumario, la primera a principios del año 2020 y las otras hacen 15 días atrás, duraron alrededor de 2 horas, no hubo defensores”; José Henríquez Orrego, “no declaré en fiscalía, pero sí tuve múltiples reuniones con la fiscalía; Matías Navarrete, Millón, “con la fiscal preparé la declaración; telemáticamente nos reunimos el día de ayer, no me exhibió la documentación de hoy”.

Los hechos denunciados en el recurso de nulidad de la causa en cuestión difieren con mucho de los actuales, como se desprende del Considerando Tercero de la sentencia, el que señala: *“Que como se desprende del recurso, la afectación en que la defensa fundamentó la causal principal se originaría con motivo de la actuación del fiscal del ministerio público, consistente en la realización de una*

reunión con tres testigos una vez terminado el primer día del juicio, en que prestaron declaración otras personas, dándole a conocer a estos tres individuos el contenido de ellas, permitiendo de este modo estar al tanto de lo acontecido en él y la información proporcionada por los deponentes de ese día, lo que influyó en sus declaraciones vertidas en forma posterior en el mismo juicio". Esta situación no guarda parangón con lo que relataron los deponentes implicados, sin que de otro lado alguna de las defensas, particularmente la de los acusados Bustos Morgado, los hubiere interrogado acerca del tenor de lo conversado con la fiscal, ni mucho menos respecto a las hipótesis que contempla el artículo 329 del Código Procesal Penal, concretamente, si la fiscal informó a los testigos lo que había ocurrido o estaba ocurriendo en la audiencia de juicio oral; especialmente considerando que declararon bajo juramento o promesa, impresionando en el tribunal que se trató de testimonios honestos, claros y suficientemente fundamentadas sus respuestas al indicar de manera precisa las circunstancias en las que cada uno se entrevistó con la fiscal, no deveniendo para el tribunal alguna duda que le hiciese dudar de la sinceridad y fiabilidad de los testimonios, ni hay antecedentes que sus dichos se hubiesen visto influenciados por el conocimiento de lo que otros testigos declararon en juicio que permitieran dudar de su confiabilidad.

Consecuencia de lo que se lleva dicho es que el riesgo para el debido proceso que específicamente habría generado el actuar de la fiscal en el citado caso, no se advierte que haya tenido lugar en el de marras, toda vez que la potencialidad del riesgo, al que en toda medida arguye la defensa, no basta para concluir, como lo hizo el fallo en comentario, que efectivamente *se vio afectado el derecho de la(s) parte(s) a que la declaración de los testigos se haga sin intervención o influencia de otros testigos o de terceros, cuyo es el propósito de la norma* que contiene el artículo 329 inciso sexto, del Código Procesal Penal. De tal intervención o influencia no se advierte siquiera en la concurrencia de indicios, por lo que no es posible dejar de valorar los medios de prueba atinentes, a este caso en particular, como tampoco a ningún otro, so pena de incurrir en un vicio que haga anulable la sentencia y el juicio por infracción al artículo 297 inciso segundo del Código antes citado.

VIGESIMO CUARTO: Que, en cuanto a la objeción del capítulo IV, infracción del deber de registro de las declaraciones de los testigos Silva, Santis, Gutiérrez y

Pérez, el tribunal resolvió no prescindir de sus testimonios por no advertir que de tal omisión se haya seguido una afectación concreta y sustancial al derecho a defensa.

Al efecto, la Corte Suprema, en sentencia de fecha 23 de mayo de 2012, rol 1435-2012, acogiendo un recurso de queja deducido en contra de una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, por haber acogido un recurso de nulidad fundado en que la falta de registro de declaraciones de testigos, quienes no habían atestiguado ante el ministerio público o el juez de garantía, privaba a la defensa del control de esa prueba por la vía de la lectura para apoyo de memoria, para demostrar o superar contradicciones, o para solicitar aclaraciones, dictaminó:

“Que,...no hay norma legal que imponga al ministerio público la obligación de interrogar a todos los testigos que ofrecerá en el auto de apertura del juicio oral, y si bien pudiera llegarse a interpretar que ello fuera necesario (si se tiene presente que el fiscal está obligado a señalar aquello sobre lo cual prestaran declaración los testigos), lo cierto es que junto con la acusación, la defensa recibió todos los antecedentes de la investigación, por lo que estaba en conocimiento de la existencia o inexistencia de declaración(es) previa(s) ante el fiscal de todos los testigos cuestionados, al tiempo en que ellos fueron ofrecidos en la audiencia de preparación de juicio oral, momento en que no se opuso a su incorporación, lo que resulta atinente como se verá más adelante, puesto que debió preparar una causal de nulidad en caso de considerar que con lo actuado se estaba infringiendo algún derecho de su representado” (Considerando 4°);

“Que si se pretenden afectados los derechos del defensor en la forma que señala el artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, es preciso que a éste se le haya “impedido ejercer” las facultades que la ley le otorga, esto es, requiere que aquél haya pretendido ejercerlas y que haya existido un acto por el cual tal intención le haya sido rechazada y no que se trate de una simple constatación hipotética, de un acaso, que es lo ocurrido en la especie; si no¹ existe un impedimento real, concreto y efectivo puesto al defensor para que este ejerza un derecho, el rechazo originado en el tribunal u otro interviniente que le prive del ejercicio concreto solicitado (que se haya pretendido ejercer un derecho o una facultad), no es posible concluir que se haya incurrido en la causal de nulidad alegada” (Considerando 5°);

“Que,.... aquellos jueces ..., incurrir en un yerro legal grueso que ya ha sido zanjado por esta Corte en repetidas oportunidades, puesto que el tribunal oral en lo penal no está habilitado para excluir prueba alguna y sólo tiene la facultad para valorarla negativamente, esto es, está obligado a analizar la prueba y luego de ella, si detecta la existencia de ilicitud u otro motivo que conlleve su rechazo, ha de referirlo en los motivos por los cuales le negará valor, tal como lo ordena el artículo 297 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 342 del mismo, que le obliga a hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la que hubiere desestimado,...” (Considerando 7°);

De lo anterior, el tribunal colige que por sobre el deber administrativo (y judicial) de registro se haya el deber de valorar la prueba en su totalidad, sea atribuyéndole o restándole mérito probatorio. El incumplimiento o infracción de aquél deber, como resultado de no habersele tomado declaración al testigo en el curso de la investigación, podrá encontrar correlato en la valoración y decisión que de esa prueba haga el tribunal, pero no en la omisión de valoración de la prueba, considerando al efecto que en el caso concreto ningún defensor alegó desconocimiento la materia sobre la que declararían y que pudiese haber afectado el derecho a defensa de sus representados. Más aún, las defensas conocieron oportunamente el ofrecimiento de esos testimonios como medios de prueba, pero no reclamaron, cuestionaron ni incidentaron ante el juez de garantía que estuvo a cargo de la audiencia de preparación de juicio oral, acerca del presunto vicio.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, respecto de las alegaciones de la defensa del acusado Rojas, y primeramente en cuanto a los correos electrónicos y su falta de fidedignidad, el tribunal fue de parecer desestimar su pretensión de no valoración de ese medio de prueba, primero, porque la fidedignidad que echa en falta la defensa, con motivo de la diferencia de formato entre los correos proyectados en la pantalla del tribunal durante la audiencia y los exhibidos impresos en papel, cuanto más si en en estos últimos aparece en la parte superior el nombre de la fiscal de la causa, lo que demostraría que son editables y por tanto adulterables en su contenido, encuentra razonable explicación en lo señalado por la fiscalía en orden a que siempre que se imprime un documento aparece el nombre del usuario que lo hace; segundo, porque sin perjuicio de lo anterior, el reclamo que se hace acerca de la diferencia de formato no se hace cargo del contenido del mensaje, en la medida que la defensa no cuestiona lo que en ellos se dice, salvo desde el

ángulo de la falta de fiabilidad que le reprocha al documento; tercero, porque el hecho que el acusado Rojas hubiere reconocido algunos correos y otros no, esto último únicamente a causa del formato, no explica el por qué de la diferencia, pareciendo éstas más bien acomodaticia; cuarto, porque la pericia de fidedignidad que demanda la defensa no resulta exigible sí, más allá del formato diverso, no se indica dónde o de que manera exactamente, en lo que al fondo o contenido del mensaje se refiere, se encontraría la adulteración; quinto, porque la información proporcionada por la empresa VTR, en el sentido que César Rojas Gaete (y Christian Bustos Morgado) no tenía(n) servicios contratados con ella y por lo tanto no era(n) cliente(s), resulta a todas luces incompleta, desde que el requerimiento de la fiscalía no indicó que la información debía considerar la época de los hechos en adelante y, finalmente, pero no menos importante, porque existe un documento que da cuenta de la utilización de ese correo, como es la factura electrónica N° 819976, de fecha 28 de diciembre de 2012, emitida por Salinas y Fabres S.A. a la empresa Constructora CGM Ltda., por la compra de una máquina retroexcavadora-cargadora, año 2013, nueva, por la suma de \$48.695,157, en la cual se indica como contacto un número de teléfono y un correo electrónico, cesarRojas@vtr.net, documento que fue reconocido por el acusado Cristian Gutiérrez al referirse a los problemas que tuvo con Rojas a raíz de la compra y venta de la citada máquina

En cuanto ahora a la dificultad que para su examen supuso el volumen del sumario, y que esa había sido la razón de no haberse opuesto en la audiencia de preparación a su incorporación como medio de prueba en el juicio oral, cabe por de pronto decir que tal explicación, lejos de justificar la falta de examen o revisión del medio de prueba en cuestión, no hizo sino agravar la falta. Si bien la extensión del sumario administrativo pudo y puede dificultar su revisión, lo cierto es que no se supo ni se dijo que dicho sumario hubiere sido declarado secreto durante la investigación, o que hubiere llegado intempestivamente al conocimiento de las defensas, viéndose por ello sorprendidas. Ahora bien, si la dificultad estuvo dada o acentuada por el hecho de haberse entregado el sumario de manera digitalizada, lo que por cierto puede dificultar su visualización y lectura, es del caso que su contenido pudo haber sido impreso o, en su defecto, ante lo oneroso o demandante que eso hubiere significado, bien pudieron las defensas examinar físicamente el documento original en las oficinas de la fiscalía, como quiera ello constituye una garantía del debido proceso, cual es, conocer y examinar las pruebas de cargo. Sin embargo, no se alegó ni tuvo conocimiento el tribunal de

que esta u otras defensas hubieren solicitado al juez de garantía un aumento de plazo para la realización de la audiencia de preparación, o pedido su postergación, suspensión o receso con la finalidad de tomar debido y cabal conocimiento del sumario o, en último caso, impetrado una cautela de garantía para dichos efectos.

2.- EN CUANTO AL FONDO.

2.1. Fraude al Fisco.

VIGESIMO SEXTO: Que, las pruebas aportadas en relación a los hechos concernientes a los delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno, dieron primeramente cuenta que, en el marco del proceso de construcción de cuarteles de Carabineros de Chile, a cargo del Departamento Cuarteles L1, dependiente del Departamento de Logística de Carabineros, se licitaron, adjudicaron y contrataron a partir del año 2011 diversos proyectos.

VIGESIMO OCTAVO: Que, al Departamento de Cuarteles L1 correspondía el diseño de los proyectos de reposición y su ejecución. Una vez que al proyecto se le asignaban recursos, correspondía subir los antecedentes de la licitación al portal www.mercadopublico.cl. Luego procedían diversos trámites, entre ellos visita a terreno de los interesados, apertura de sobre con la documentación requerida y la apertura de sobre con la oferta, informe técnico que analizaba el cumplimiento de los requerimientos legales, técnicos y financieros, aplicando criterios para efectuar una comparación entre los interesados, proponiendo la adjudicación a determinada empresa. Posteriormente se dictaba una Resolución Exenta mediante la cual se adjudicaba el proyecto en cuestión. A continuación se celebraba el respectivo contrato, se dictaba otra Resolución Exenta aprobando el contrato y se hacía entrega del terreno en el cual la adjudicataria debía ejecutar el proyecto.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en el desarrollo de la licitación y posterior ejecución intervinieron, debido a sus cargos, los siguientes funcionarios de Carabineros (prueba documental de la fiscalía, N° 1160, Resumen ejecutivo, año 2012, elaborado por el área de gestión de control de proyectos de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros):

1) Félix Flores Santis, entonces coronel de Carabineros, jefe del Departamento de Cuarteles L1;

2) Christian Bustos Morgado, a la fecha teniente coronel de Carabineros, jefe del Área de Gestión y Coordinación de la Ejecución de Proyectos. Bajo su supervisión estaban las áreas de Revisión de Proyectos, de Diseño de Obras y de Fiscalización de Obras.

Las funciones que específicamente le cabían a esta jefatura eran: planificar, dirigir y controlar la iniciativas de inversión; designar las iniciativas de inversión a los profesionales de su área; revisar, visar y aprobar documentación (informes técnicos, programas arquitectónicos, diseños de arquitectura, informes técnicos oferentes, etc.); confeccionar y tramitar las Bases Técnicas de Licitación de Diseño y Ejecución de las diferentes iniciativas de inversión; conformar la Comisión Licitadora, cuando correspondiere, participar de la apertura de sobres, evaluar las propuestas técnicas y económicas de los oferentes del Portal; coordinar con las empresas adjudicadas la planificación del proyecto (definición de ITOS, visitas a terreno, definición de reuniones, entrega de informes, estados de avance, etc.); tramitar y gestionar la recepción y entrega de la boleta de garantía de seriedad de las ofertas, boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y boleta de garantía de recepción de obra); materializar la planificación en la ejecución de las obras; coordinar y establecer las visitas a terreno de los ITO; controlar que los procesos y etapas de cada proyecto se ejecutaran de acuerdo a lo planificado y establecido en las bases administrativas de los procesos licitatorios de inversión; gestionar con los distintos entes involucrados los procesos de recepción provisoria, definitiva y garantía de las obras; asignación y distribución de tareas a los diferentes profesionales que se desarrollan en esta área de su competencia, optimizando los recursos, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos institucionales; revisión y aprobación de informes técnicos elaborados por los ITOS sobre el estado de ejecución de los proyectos; suministrar información actualizada y útil a las entidades que lo solicitaran; en cuanto a los hitos contractuales relacionados con obras le correspondía efectuar el ingreso, revisión y actualización de información al Banco Integrado de Proyectos; control y seguimiento de contratos, relacionado con los estados financieros de los proyectos, efectuando previamente las correspondientes constancias de los estados de pago en curso. Su responsabilidad era supervisar la correcta ejecución

de los procesos de materialización de las obras de inversión, coordinando con los distintos entes y/o Departamentos involucrados

Lo dicho consta en prueba de la fiscalía, N° 1.160, que corresponde a documento elaborado por el área de gestión de control de proyectos de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros Resumen Ejecutivo de Estudio Metodológico de Identificación de Áreas Críticas del Departamento de Cuarteles L1, para el mejoramiento de la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en Carabineros de Chile, del año 2012, a partir del cual se organizó la citada repartición con un jefe de Departamento Cuarteles L1 y un jefe de área que estaban a cargo del área de Gestión de Coordinación de la Ejecución de Proyectos y dentro de ésta la de fiscalización de obras;

3) Francisco Pizarro Dasso, ingeniero constructor, contratado por resolución (en adelante, CPR), quien intervino como inspector técnico de obras (en adelante "ITO" o "el ITO"). Así consta de la Resolución N° 180, de 15 de junio de 2009: *Carabineros de Chile, Dirección Nacional de Personal, contrátase a contar de la fecha de la total tramitación de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2009, al ingeniero constructor Francisco Pizarro Dasso, grado 12; firma Eduardo Gordón Balcarcel, General Director de Carabineros, y de la resolución Exenta N° 1.302 de fecha 9 de noviembre de 2012 por la cual se designa inspector técnico de ejecución de obra de varios proyectos (entre ellos Villas Ortega) a cuatro profesionales dentro de los que se encuentra Francisco Pizarro Dasso. (doc. 340)*

Conforme a la prueba presentada por la defensa del acusado Pizarro, documento Directiva del personal Contratado por Resolución Carabineros de Chile, a los CPR se les aplica el artículo 7 de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, quedando sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile, siendo evaluados anualmente por el respectivo mando, previo informe del jefe a cuyas órdenes se encontrare prestando servicios.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, el mandante, Carabineros de Chile, debía pagar al contratista el valor de las obras ejecutadas mediante estados de pago quincenales o mensuales (artículo 110 del Decreto Supremo N° 294), de acuerdo con el avance físico que constatará el ITO en las visitas inspectivas a que dieran

lugar las solicitudes de pago que por escrito efectuase el contratista (bases administrativas Generales de licitación pública proyectos de reposición de retenes Villa Ortega, Lago Castor e Isla Huar, y tenencia Coyhaique Alto: artículo 7.5.2. *el contratista solicitará por escrito a la unidad técnica, la cancelación de cada estado de pago, el cual el ITO revisará y procederá a su aprobación o rechazo dentro de los quince días siguientes a contar de la fecha de presentación del mismo*; artículo 7.5.3 *la solicitud de pago deberá acompañar carta de solivcitud, estado de pago según avance, con factura a nombre del mandante, certificado de la Inspección del Trabajo que no existen reclamos pendientes del personal, planillas de cotizaciones al día, resumen de estado de pago si correspondiere y pólizas de seguro contra incendio, sismo y responsabilidad civil por daños a terceros*).

Para los efectos mencionados, el ITO asignado a la obra, en cumplimiento de sus deberes funcionarios, debía concurrir al lugar de las mismas y verificar, entre otras cosas, si el estado de avance informado por el contratista en su solicitud de estado de pago correspondía al trabajo efectivamente realizado, luego de lo cual emitía un informe que era entregado al jefe del Área de Gestión y Control de Proyectos, para su debido conocimiento y visación, si procediere (Reglamento de Ejecución de Obras de Carácter Policial de Carabineros de Chile, Decreto Supremo N° 294, de 12 de enero de 1996 – artículo 62 (“Se entenderá por inspección técnica la labor que realizará el funcionario designado por la autoridad para velar directamente por la correcta ejecución de una obra y en General por el cumplimiento del contrato”), artículo 70 (“La inspección técnica de la obra se preocupará especialmente que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlará el avance contractual en relación con el avance real y deberá proponer y ordenar al contratista las medidas para manetneer el normal desarrollo de las obras. Además la inspección técnica de la obra revisará los correspondientes estados de pago en un plazo máximo de cinco días hábiles otorgando su V°B°”), artículo 75 (“La inspección técnica de la obra deberá velar porque el contratista cumpla con las disposiciones legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones y seguros que procedan con su personal”) –.

Aprobado el estado de pago se remitían los antecedentes al Departamento de Contabilidad y Finanzas L8 (en adelante, L8)) repartición que con toda la documentación remitida procedía al respectivo giro del cheque a nombre de la

empresa adjudicataria o eventualmente, a nombre de las empresas de factoring a las cuales le hubieren sido cedidas las facturas (artículo 113, DS N° 294: “Los estados de pago serán considerados como abonos parciales que efectúa la institución durante el curso de los trabajos y tendrán sólo carácter de un anticipo concedido al contratista a cuenta del valor de la obra. Se estimará este anticipo como la aceptación por parte de la institución de la calidad y cantidad de la obra ejecutada por el contratista y a la cual corresponda dicho abono”).

TRIGÉSIMO: Que, formaron parte de los proyectos a que se viene haciendo mención los concernientes a la Reposición Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto, y Reposición de los Retenes de Carabineros Villa Ortega, Isla Huar y Lago Castor, situados en la X y XI regiones del país. La adjudicación y trámites posteriores fueron los siguientes:

a) Retén Villa Ortega: mediante Resolución Exenta N° 989, de fecha 14 de septiembre de 2012, se adjudicó la obra a la empresa Constructora CGM Ltda. El contrato de obras fue suscrito el día 16 de octubre de 2012, concurriendo en representación del Fisco-Carabineros de Chile, el Director de Logística, General Inspector de Carabineros, Jorge Rojas Langer, y por la empresa Constructora CGM Ltda., su representante legal, Cristian Gutiérrez Martínez. El valor de los trabajos ascendió a \$357.948.236, y el plazo de ejecución se fijó en 140 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega del terreno. Para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato la adjudicataria hizo entrega de una boleta de garantía a la vista por la suma de \$17.897.912, con vigencia hasta 30 días corridos siguientes a la recepción definitiva de la obra. Conforme a las bases de la licitación la boleta de garantía de fiel cumplimiento no podía ser devuelta sino transcurridos 30 días corridos de efectuada la recepción definitiva, la que a su vez acontecía después de transcurridos 270 días, corridos, desde la fecha de término de las obras consignadas en el acta de recepción provisoria sin observaciones.

Posteriormente hubo dos (2) aumentos de obras, contrato de addendum, de fecha 27 de febrero de 2013, entre Fisco- Carabineros de Chile representado por Jorge Rojas Langer y la contratista constructora CGM Ltda., representada por Cristian Gutierrez Martínez, en el cual se hace referencia a las Resolución Exenta N° 106, de 14 de febrero de 2013, que autorizó un aumento de obra por \$22.390.031 y un

aumento de plazo de 38 días corridos, y la Resolución Exenta N° 167, de 22 de febrero 2013, en la cual se autorizó la modificación del ítem de calefacción en caldera a petróleo. Dispuso un aumento de obra de \$24.943.071 y un aumento de plazo de ejecución de 18 días, en total, 56 días, los que se sumarían al plazo original del contrato. El contratista hizo entrega de una nueva boleta bancaria de garantía por la suma de \$19.317.405.

Conforme consta del Acta de Entrega N° 33, de 24 de octubre de 2012, la entrega de terreno tuvo lugar en esa misma fecha.

Con el mérito del contrato de obras, addendum contractual y acta de entrega de terreno, el plazo total para la ejecución de las obras fue de 196 días corridos, con lo que su término debía ser el día 8 de mayo de 2013. Así consta en el Anexo N° 1 del Informe Final de Investigación Especial de Carabineros de Chile, de fecha 16 de diciembre de 2015, realizado por la Contraloría General de la República.

b) Tenencia Coyhaique Alto: mediante Resolución Exenta N° 1.546, de fecha 19 de diciembre de 2012, se autorizó el contrato de obra que había sido adjudicado por Resolución Exenta DILOCAR N° 1.463, de 6 de diciembre del mismo año, a la empresa Constructora CGM Ltda. El contrato de obra fue suscrito con fecha 11 de diciembre de 2012, siendo los contratantes el Fisco-Carabineros de Chile, representado por el Director de Logística, Coronel Jorge Rojas Langer, y la Constructora CGM Ltda., representada por Cristian Gutiérrez Martínez. El monto asignado para la ejecución de los trabajos fue de \$389.997.322, y el plazo de ejecución se fijó en 220 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del inmueble. Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la contratista hizo entrega de una boleta de garantía a la vista por la cantidad de \$19.499.866, con vigencia hasta 30 días corridos, siguientes a la recepción definitiva de la obra. Conforme a las bases de la licitación la boleta de garantía de fiel cumplimiento no podía ser devuelta sino transcurridos 30 días corridos de efectuada la recepción definitiva, la que a su vez acontecía después de transcurridos 270 días, corridos, desde la fecha de término de las obras consignadas en el acta de recepción provisoria sin observaciones.

Con posterioridad se autorizaron dos (2) aumentos de obra: uno, por Resolución Exenta DILOCAR N° 492, de fecha 19 de junio 2013, mediante la cual se autorizó un aumento de obra extraordinaria del contrato para la instalación de un pozo profundo con sistema de bomba, atendida la inexistencia de una red de agua potable rural. El aumento en dinero ascendió a \$11.554.523 y el plazo de ejecución se amplió en 65 días corridos. El contratista hizo entrega de una nueva boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por \$577.726; y, el otro, por Resolución Exenta DILOCAR N° 728, de fecha 13 de septiembre de 2013, se autorizó un aumento de plazo de 18 días adicionales, corridos, para el correcto desarrollo de drenajes perimetrales en terreno natural.

Conforme consta del Acta de Entrega N° 45, de fecha 13 de diciembre de 2012, la entrega de terreno tuvo lugar con esa misma fecha.

Con el mérito del contrato de obras, addendum contractual y acta de entrega de terreno aparece que el plazo original de término de la obra era el 21 de julio de 2013, y luego por los addendum el plazo de ejecución total fue de 303 días, por tanto el término de la obra debía ser el 13 octubre de 2013 (prueba documental de la fiscalía, N° 115, anexo N° 1 del Informe Final de Investigación Especial de Carabineros de Chile, de fecha 16 de diciembre de 2015, efectuado por la Contraloría General de la República, y prueba documental de la fiscalía, N° 169, Resolución Exenta DILOCAR N°859, de fecha 30 de octubre de 2013).

c) Reposición Retén Lago Castor: por medio de la Resolución Exenta N° 1.545, de fecha 9 de diciembre de 2012, se adjudicó la obra a la empresa Constructora CGM Ltda. El contrato de obras fue suscrito el 12 de diciembre de 2012, siendo sus signatarios el Director Nacional de Logística, General Inspector Jorge Rojas Langer, en representación del Fisco-Carabineros de Chile, y Cristian Gutiérrez Martínez, representante legal de la empresa Constructora CGM Ltda. Además se dio lectura resumida al contrato de obras entre Fisco-Carabineros de Chile y Constructora CGM Ltda., de fecha 12 de diciembre de 2012, El monto asignado para la realización de los trabajos ascendió a la suma de \$389.157.350, fijándose en 200 días corridos el plazo de ejecución de las obras, contado desde la fecha del acta de entrega del inmueble. Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la contratista hizo entrega de una boleta de garantía a la vista, por la cantidad de \$19.457.867. Conforme a las bases de la

licitación la boleta de garantía de fiel cumplimiento no podía ser devuelta sino transcurridos 30 días corridos de efectuada la recepción definitiva, la que a su vez acontecía después de transcurridos 270 días, corridos, desde la fecha de término de las obras consignadas en el acta de recepción provisoria sin observaciones.

Conforme consta del Acta de Entrega N° 46, de fecha 13 de diciembre de 2012, la entrega de terreno tuvo lugar con esa misma fecha.

Posteriormente hubo dos addendum o aumento de obras: 1°) Resolución Exenta DILOCAR N° 697, de fecha 3 de septiembre de 2013, autorizó un cambio de partida y un aumento de plazo del contrato para el correcto desarrollo de drenajes perimetrales en terreno natural, otorgándose un aumento de plazo de ejecución del contrato de 18 días adicionales corridos (prueba documental N° 431, de la fiscalía); y, 2°) Addendum contractual de fecha 16 de septiembre de 2013, concurriendo a su firma, por el Fisco-Carabineros de Chile, el Director Nacional de Logística, General Inspector Jorge Rojas Langer, y por la contratista, Constructora CGM Ltda., su representante legal, Cristian Gutiérrez Martínez. El aumento de obra ascendió a \$5.617.514 y de plazo de ejecución de 65 días corridos. Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la contratista se hizo entrega de una nueva boleta de garantía por la cantidad de por \$280.876 (prueba documental N° 411, de la fiscalía).

Con el mérito del contrato de obras, addendum contractual y acta de entrega de terreno aparece que el plazo original de término de la obra era el 30 de junio de 2013, y luego por los addendum el plazo de ejecución total fue de 283 días, por tanto el término de la obra debía ser el 22 de septiembre de 2013. Lo dicho consta también en anexo N° 1 del informe final de investigación especial de Carabineros de Chile, de fecha 16 de diciembre de 2015 efectuado por la Contraloría General de la República; y,

d) Retén Isla Huar: mediante Resolución Exenta DILOCAR N° 1.468, de fecha 6 de diciembre de 2012, se adjudicó el proyecto reposición Retén Isla Huar a la empresa Constructora CGM Ltda (prueba documental N° 200, de la fiscalía). Con fecha 5 de enero de 2013, se suscribió contrato de obras entre Fisco-Carabineros de Chile, representado por el Director Nacional de Logística, General Inspector de Carabineros Jorge Rojas Langer y la empresa Constructora CGM

Ltda., representada por Cristian Gutiérrez Martínez. El presupuesto asignado para los trabajos ascendió a la suma única y total de \$373.389.992, y el plazo de ejecución se fijó en 160 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega del inmueble. Con el objeto de garantizar la ejecución de las obras y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el contratista hizo entrega de una boleta de garantía a la vista por la suma de \$18.669.500 (equivalente al 5% del valor de las obras), con vigencia de 30 días corridos, contados desde la recepción definitiva de la obra. Conforme a las bases de la licitación la boleta de garantía de fiel cumplimiento no podía ser devuelta sino transcurridos 30 días corridos de efectuada la recepción definitiva, la que a su vez acontecía después de transcurridos 270 días, corridos, desde la fecha de término de las obras consignadas en el acta de recepción provisoria sin observaciones.

Conforme consta del Acta de Entrega N° 1, de fecha 18 de enero de 2013, la entrega del terreno tuvo lugar en esa misma fecha.

Existió un addendum contractual según consta en Contrato de Addendum, de fecha 16 de agosto de 2013, celebrado entre las mismas partes, concurriendo a la firma el Director Nacional de Logística, Jorge Rojas Langer, y el representante legal de la empresa CGM Ltda., Cristian Gutiérrez Martínez, El aumento ascendió a la suma de \$10.888.811 y el aumento de plazo fue de 53 días corridos. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del contrato y la oportuna y fiel ejecución de las obras, el contratista hizo entrega de una boleta de garantía por la cantidad de \$326.664.

Con el mérito del contrato de obras, addendum contractual y acta de entrega de terreno aparece que el plazo de término de la obra era el 19 de agosto de 2013, lo que también consta en anexo N° 1 del informe final de investigación especial de Carabineros de Chile, de fecha 16 de diciembre de 2015 efectuado por la Contraloría General de la República.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, la empresa CGM emitió ocho (8) facturas por concepto de ejecución de obras en cada uno de los proyectos. Cada factura dio lugar a que el Departamento L8, efectuase los correspondientes pagos, basándose para ello en los oficios que por cada una enviaba el jefe del Departamento de Cuarteles L1, Coronel Félix Flores Santis o, a falta de este, en

calidad de subrogante, el Teniente coronel Christian Patricio Bustos Morgado. El total facturado ascendió a \$405.281.335, en el proyecto Villa Ortega, a \$365.064.862, en el proyecto Isla Huar, \$321.095.435, en el proyecto Lago Castor, y \$307.995.824, en el proyecto de reposición Tenencia Coyhaique Alto.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en lo pertinente, los oficios remitidos por el Departamento L1 al Departamento L8 señalaban lo siguiente: *Adjunto se remite a esa repartición contable factura que más abajo se señala, correspondiente al primer estado de pago (y así sucesivamente) por la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, obras que se encuentran en etapa de ejecución conforme y sin observaciones. En consecuencia, solicita a esa repartición contable tener a bien disponer de quien corresponda, lo conveniente con la finalidad de proceder a la cancelación del señalado documento. Remite la factura con la debida constancia en su reverso y los antecedentes que reSPALdan dicha cancelación.* La referencia que hacían los oficios acerca de *la ejecución conforme y sin observaciones*, por un lado, y a *la debida constancia al reverso de la factura*, por otro, correspondían, respectivamente, al ITO Francisco Pizarro y al jefe del Área de Gestión y Coordinación de la Ejecución de Proyectos, Teniente coronel Christian Patricio Bustos Morgado.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, *la ejecución conforme y sin observaciones* que señalaban los oficios decía relación con los Informes Técnicos de avance de obras que elaboraba el ITO Pizarro, en los cuales se señalaba haberse constituido en terreno a inspeccionar las obras y que había *corroborado*, in situ, el estado de avance de las faenas, aprobando por tanto el estado de pago e indicando, además, el monto que se debía pagar al contratista. Los pagos se efectuaron mediante cheques que fueron girados a nombre de la empresa contratista, CGM, como también a nombre de las empresas de factoring, Interfactor S.A. y Bice Factoring S.A., en cuanto cesionarias de algunas facturas.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, *la debida constancia al reverso de la factura*, en la cual se indicaba el monto de dinero a pagar y el porcentaje de avance de la obra, correspondía efectuarla, entre otros, al jefe de Área de Gestión y Coordinación de la Ejecución de Proyectos.

Se exhibió al acusado Christian Bustos constancia del anverso de fecha 13 de junio de 2013, de la factura N° 56 de fecha 12 de junio de 2013 por la suma de \$70.554.210, tercer estado de pago por el 65% de avance obra reposición reten Isla Huar, reconociendo el documento, señalando que, si bien su firma en dicha constancia no era una obligación legal, fue instruido así por la jefatura. Documental 977.

Se exhibieron e incorporaron otras constancias del anverso de las facturas 35, 36, 38, 44, 45, 54, 56 y 58 donde aparecen firmadas por Christian Bustos Morgado como jefe de Departamento algunas y como jefe de área en otras.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, con fecha 23 de mayo de 2013, se dictó la Resolución Exenta N° 381, suscrita por Jorge Enrique Rojas Langer, Director Nacional de Logística, mediante la cual se designó una Comisión para la recepción provisoria del proyecto Retén Villa Ortega, y también para la revisión de los proyectos de reposición Retén Lago Castor, Tenencia Coyhaique Alto, entre otros (prueba documental N° 1.010 de la fiscalía). Mediante NCU 12985571, de 28 de mayo de 2013, del Departamento Cuarteles, se solicitó a la Sección Gestión Financiera una comisión de servicios a la XI Región y autorización de pasajes, con fecha de salida el 4 de junio de 2013 y regreso el 7 de junio del mismo año, a efectos de proceder a la recepción provisoria del proyecto de Reposición Retén Villa Ortega y revisión de los proyectos Retén Lago Castor, Tenencia Coyhaique Alto y sector La Tapera (prueba documental N° 1009);

La Comisión se constituyó en terreno el día 7 de junio de 2013, recibiendo las obras de Villa Ortega con observaciones *menores*, otorgándosele al contratista un plazo de diez (10) días para subsanarlas (documento N° 837, prueba de la fiscalía, acta N°46 de recepción provisoria, de fecha 7 de junio de 2013, en la que consta que en Villa Ortega la empresa constructora CGM Ltda. hace entrega de los trabajos de reposición del retén de Carabineros Villa Ortega al Teniente coronel Christian Bustos Morgado, jefe Área de Coordinación de la Ejecución de Proyectos del Departamento Cuarteles L1, recibándose la obra por parte de la Comisión de manera provisoria, con las siguientes observaciones *menores*: *pintado y limpieza de guardapolvos, reemplazar film de puertas y ventanas mal cortados, reparar muro sector rack, agregar protección extra para bosca por cercanía a muro, dar otra mano de pintura a cantos de puertas, mejorar*

terminación pileta baño público, mejorar terminación marco de ventanas, colocar cubre juntas en cada cambio de materialidad en pisos, incorporar mano extra de pinturas, mejora terminación de rejilla piso en calabozo, reubicar segundo plano dispensador de papel en calabozos, topes de goma en puertas de celdas, mejorar terminaciones en calabozos, mejorar terminaciones en muebles y pisos de cocina, mejorar terminaciones en sala de archivos, fraguado en General, reemplazar percha en baño, reemplazar polín dañado en cierre perimetral, reemplazar sifón plástico lavadero, repara llave de jardín, fijar bien motobomba y reparar sobrecimientos en cierre perimetral. Para la subsanación de las observaciones se otorgó a la empresa contratista un plazo de 10 días corridos.

El acta de recepción provisoria aparece firmada por Cristian Gutiérrez Martínez, representante de CGM Ltda., y recibiendo las obras de manera provisoria, Andrea Campusano Muñoz, arquitecto, Héctor Salamanca Riquelme, ingeniero eléctrico, Guillermo Nadal Agost, constructor civil. Presidió la Comisión y firmó el acta el jefe Área de Coordinación y Ejecución de proyectos L1., Christian Bustos Morgado, Teniente coronel , presidente de la Comisión (prueba documental N° 837, de la fiscalía).

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en las observaciones *menores* no se incluyeron aquellas que en tres fotografías registró, a título personal, Isidro Martínez Bacigaluppo, integrante de la Comisión, según NCU 12985571 de fecha 28 de mayo de 2013, quien, al serle exhibidas las imágenes, las reconoció, explicando que correspondían a las que había tomado en aquella oportunidad, explicando que una de ellas concernía a *la parte posterior de la obra*, “muros externos con revestimiento hasta la mitad”. Explicó que el concepto de “*observación menor*” era algo *subjetivo, que va a depender de la Comisión, pero que no dificulta ocupar el retén, v.gr., una ventana que no cierra por falta de picaporte, una puerta que esté englobada a causa de la humedad, porcelanato trizado, etc.* Añadió que en ese tiempo no sabía qué significaba la frase *observaciones menores*, ni tampoco sabía bien qué debía hacer la Comisión, ni cuál era su rol. Señaló el deponente que con el transcurso del tiempo se dio cuenta que lo que correspondía en aquella oportunidad era rechazar la recepción de la obra de Villa Ortega atendido el estado en que se encontraba. Agregó que las actas de recepción deben firmarse en el lugar de las obras.

A las referidas fotografías hizo referencia el testigo Omar Gutiérrez Gambaro, señalando al efecto que en el marco del sumario administrativo de Carabineros que estaba sustanciando, Isidro Martínez Bacigaluppo hizo entrega de las fotos a través de un oficio dirigido a su nombre, cuyo tenor fue: *“por iniciativa propia, sin que nadie me lo ordenara, tomé tres fotografías del retén, una de la parte trasera y dos de su interior”*. El testigo Gutiérrez Gámbara declaró: *“está en evidencia el notable estado de abandono de las obras”, “la foto es evidente”, desde el sólo punto de vista formal una obra no puede ser recibida en ese estado; además, atendidas las condiciones climáticas no puede funcionar; esas obras no están en condiciones de que el personal de Carabineros “pueda cumplir adecuadamente sus funciones”* Agregó que, conforme al estado de las obras a Pizarro *“Bustos debió haberlo destituido”* (prueba documental N° 66, sumario administrativo de Carabineros, fojas 2.610).

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, a objeto de constatar en terreno la subsanación de las observaciones indicadas en la recepción provisoria, se solicitó una comisión de servicio para el CPR Guillermo Nadal, constructor civil, la que se ejecutó los días 17 y 18 de junio de 2013 (documento electrónico ordinario NCU 13382145 de fecha 12 de junio de 2013; *de Francisco Pizarro Dasso al subteniente Luis Parra Avilés, con informativo a Christian Bustos, Andrea Campusano y Guillermo Nadal; asunto: constatación de subsanación de observaciones menores derivadas de recepción provisoria: “en atención a constatar en terreno la subsanación de observaciones realizadas en la recepción provisoria de obra reposición Villa Ortega, se solicita autorizar comisión de servicios a la XI Zona de carabineros Aysén a contar del 17 de junio de 2013 al 18 de junio de 2013, para el CPR Guillermo Nadal, con la finalidad de constatar las observaciones consignadas en el acta*). En el libro de guardia del retén Villa Ortega se dejó constancia que con fecha 17 de junio del citado año, Guillermo Nadal se constituyó en la obra con la finalidad de inspeccionarlas (prueba documental de la fiscalía N°1.012 y N° 66, fojas 2.060).

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, la vista fiscal del sumario de Carabineros consignó que *luego de la visita del constructor Guillermo Nadal a terreno para verificar si se habían corregido las observaciones detectadas por la Comisión, informó que no presentaba ninguna mejoría, corroborando Andrea Campusano y Francisco Pizarro que el Teniente Bustos había tomado conocimiento de aquello, no*

obstante lo cual autorizó el acta de recepción provisoria del proyecto Villa Ortega, sin observaciones y sin que la Comisión se hubiese constituido en el terreno.

El testigo Omar Gutiérrez Gambaro declaró que en el marco del sumario administrativo que le correspondió diligenciar le tomó declaración a Guillermo Nadal, quien le manifestó, respecto del proyecto Villa Ortega, que percibió un “*evidente retraso de la obra*”, pero cumplió la orden del Coronel Bustos para recepcionar la obra.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, el 24 de junio de 2013, en dependencias del Departamento Cuarteles L1, se firmó el acta N° 53, correspondiente a al acto de recepción provisoria de la obra Retén Villa Ortega, sin observaciones. La entrega de los trabajos la llevó a cabo el representante legal de la empresa CGM, Cristian Gutiérrez Martínez, y su recepción estuvo a cargo de *Andrea Campusano Muñoz, arquitecto, Héctor Salamanca Riquelme, ingeniero eléctrico, Guillermo Nadal Agost, constructor civil, y Christian Bustos Morgado, jefe Área Coordinación Ejecución y Proyectos L1* (acta N° 53, 24 de junio de 2013: recepción provisoria sin observaciones: En Villa Ortega la empresa constructora CGM Ltda. hace entrega de los trabajos de reposición del retén de Carabineros Villa Ortega al Teniente coronel Christian Bustos Morgado, jefe área de coordinación de la ejecución de proyectos del Departamento Cuarteles L1. La comisión receptora concluye que, conforme a lo revisado, efectúa una recepción sin observaciones. Firman entregando conforme Cristian Gutiérrez Martínez representante de CGM, recibe Andrea Campusano Muñoz, arquitecto, Héctor Salamanca Riquelme, ingeniero eléctrico, Guillermo Nadal Agost, constructor civil, y Christian Bustos Morgado, jefe área Coordinación Ejecución y Proyectos L1).

CUADRAGÉSIMO: Que, con fecha 12 de julio de 2013, la empresa Constructora CGM Ltda. presentó una carta de solicitud para que se le hiciere pago de las retenciones de las obras del Retén Villa Ortega, siendo recepcionada por Francisco Pizarro Dasso. Mediante acta de aprobación de estado de pago N° 117, de 16 de agosto de 2013, Francisco Pizarro Dasso aprobó el estado de pago por concepto de devolución de retenciones a la empresa CGM (conforme a las bases de la licitación debía efectuarse en cada uno de los estados de pago cursados en favor de la empresa una retención equivalente al 5% de cada estado), correspondientes a los trabajos de reposición Villa Ortega, por un monto

de \$2.999.526, documento que fue firmado por Francisco Pizarro Dasso y Juan Gutierrez B., este último en representación de la empresa Constructora CGM.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, los correos electrónicos contenidos en el N° 9, del acápite otros medios de prueba de la fiscalía, dan cuenta de lo siguiente:

a) correo de fecha 30 de julio de 2013; *asunto: solicitud de materiales retén Villa Ortega; de Marcos Valiente a Cristian Gutiérrez: “Cristian, Pamela está solicitando estos materiales, los puedes revisar e indicar si los debemos comprar: perfiles, planchas de acero, cerradura, tubos redondos de tres pulgadas por dos milímetros, pomel, celosía, tubo de gas de 45 ks lleno, arriendo de motosierra, guardapolvos, cerrojo carcelero, plancha lisa de zinc, pilares para acmafor 60 x 60, cerco acmafor;*

b) correo de fecha 5 de agosto de 2013: *asunto, soldador; De Pamela Beltrán, Para Carlos Albistur y Cristian Gutiérrez: “Carlos, podemos cordinar la subida derl soldador a Villa Ortega, ya tengo el material y la soldadora, favor confirmar para programar, lo ideal sería que subiere mañana, y lo mismo sería para el mueblista, ya creo hay que presionar, se está demorando demasiado, ya lleva dos meses en la elaboración y aun no ha terminado ninguno, favor coordinar la terminación al menos de las cocinas, closets y roperillos, estos ya tienen gran parte de la estructura en obras; y,*

c) correo de fecha 19 de octubre de 2013: *de César Rojas a Constructora CGM Ltda.; asunto: flujo término de obra, dato adjunto escala de tiempo de proyectos, final proyectos; cuadro adjunto: terminación Villa Ortega, fin: 1° de noviembre de 2013.*

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, mediante oficio N° 1.157, de fecha de 2 de agosto de 2013 (prueba documental de los acusados Bustos, N° 259), dirigido por el Departamento Cuarteles a Constructora CGM, se informa el cobro de una multa correspondiente al proyecto de Reposición Retén Villa Ortega: *por incumplimiento de contrato debe pagar una multa por 12 días de atraso por un monto de \$5.211.050, la que deberá ser pagada mediante vale vista, firma Christian Bustos Morgado, jefe subrogante Departamento de Cuarteles.*

Posteriormente la empresa CGM presentó el vale vista N° 243515, del Banco Santander, de fecha 6 de agosto de 2013, por la suma requerida a título de multa, \$5.211.050.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en el documento electrónico ordinario NCU 15634039, de fecha 5 de septiembre de 2013 (prueba documental N° 31 del acusado Pizarro), consta la siguiente información: *de, Christian Bustos Morgado, jefe Área Coordinación y Ejecución Proyectos, para, Francisco Pizarro; asunto: fiscalización Seremi Salud y Dirección de Trabajo de Coyhaique; el 3 de septiembre de 2013 se constituyó en las obras de construcción del nuevo cuartel del retén Villa Ortega cuya faena esta a cargo de la empresa CGM, Roberto Alvarado Ainol, fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Coyhaique quien decretó la suspensión de las faenas por malas condiciones laborales e higiénicas.*

CUADRAGESIMO CUARTO: Que, mediante el Acta de Entrega a Uso N° 72, de fecha 1° de octubre de 2013, Francisco Pizarro hizo entrega a uso al suboficial mayor Javier González Mancilla, del retén de carabineros Villa Ortega, sin observaciones.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, en el documento electrónico ordinario NCU 16536953, de 10 octubre de 2013, consta la siguiente comunicación: *Teniente coronel Christian Bustos a Francisco Pizarro y subteniente Luis Parra; asunto: retén Villa Ortega, informa observaciones detectadas en la entrega: la prefectura de Aysén indica las siguientes observaciones a la obra: puertas descuadradas que no cierran, falta instalación de llaves de lavaplatos, problemas eléctricos (luces no encienden), falta terminar cierre perimetral, no se puede verificar instalación de gas, detalles de terminaciones interiores, detalle en pintura, terreno dispar, falta capa de estabilizado de gravilla. Fecha final fijada para la recepción el 21 de diciembre de 2013, fecha en la cual la empresa se hará cargo de subsanar los detalles post venta (“Autorizado por Felix Flores Santis”).*

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en el documento electrónico ordinario NCU 17194904, de fecha 5 de noviembre de 2013, dirigido por el Departamento Cuarteles al Director Nacional de Logística, con informativo para Francisco Pizarro, Christian Bustos, Subteniente Luis Parra, consta: *asunto: solicitud de pasajes aéreos para trabajos de normalización de obras exteriores de proyecto reposición Reten Villa Ortega, para gestionar la rápida inauguración; salida 11*

de noviembre de 2013, regreso 22 de noviembre de 2013; comisión de servicio para Leandro Donoso Viulches, pintor, Juan Jeldres Aguirre, eléctrico, Francisco Pizarro, ingeniero constructor, Jaime Meliqueo Neico, David Acevedo Jara y Walter Avila Saenz. Autorizado por Felix Flores, jefe depto. Cuarteles L.1. El día 11 de noviembre de 2013 se constituye en el Retén Villa Orterga la citada Comisión y el ITO Francisco Pizarro Dasso.

CUADRAGESIMO SÉPTIMO: Que, en Acta de Entrega N° 766, de 6 noviembre de 2013, se dejó constancia: 1) que se hizo entrega de distintos materiales de construcción para su utilización en la reparación y mejora de la casa anexa y retén Villa Ortega; 2) que *se accedió a lo pedido por orden superior del jefe de Departamento Félix Flores Santis, quien la suscribió*; 3) que *la entrega de los materiales la efectuó el encargado de bodega, cabo 1° de Carabineros, Leandro Donoso.*

Los materiales que se señalan en el Acta fueron valorizados en tres cotizaciones, dos emitidas por la empresa SODIMAC, el 10 de octubre de 2017, por \$2.388.197 y \$1.088.260, y la tercera por la empresa EASY, el 13 de octubre de 2017, por la suma de \$2.674.986. Las citadas cotizaciones fueron exhibidas a Manuel Lara Cerda, perito contable de LABOCAR, quien la reconoció y señaló que los materiales y montos que allí se indican fueron los requeridos para la terminación de Villa Ortega.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, con fecha 6 de noviembre de 2013, la Dirección General de Carabineros de Chile, sección Gestión Financiera, emitió una orden de compra a la empresa SKY Airline S.A. para la adquisición de siete (7) pasajes aéreos, por un total de \$1.579.137. Los usuarios de tales pasajes fueron David Acevedo, Leandro Donoso, Juan Jeldres, Ricardo Parra, Jaime Meliqueo, Walter Ávila y Francisco Pizarro.

Los viáticos que devengó la “comisión de servicio para la normalización de obras”, se encuentran registrados en sendas planillas de fecha 31 de diciembre de 2013, elaboradas por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de DILOCAR. El monto que se pagó por los viáticos ascendió a \$2.607.989 (prueba documental N° 643 y 645 de la fiscalía).

CUADRAGESIMO NOVENO: Que, hicieron uso de los tickets áereos los testigos Ricardo Parra Jorquera (soldador) y Jaime Meliqueo Neico (carpintero), trabajadores dependientes de la sección Mantenimiento y Reparación del Departamento Cuarteles, quienes formaron parte de la denominada Comisión de Normalización de Obras Exteriores del Retén Villa Ortega (NCU 17194904, de 5 de noviembre de 2013), Al respecto declararon:

1º) Ricardo Parra: *mi jefe era el Coronel Flores y “después de él venía el Sr. Bustos”; tuvimos que ir a Villa Ortega, fue una comisión de servicio; fue en el segundo semestre. La comisión me la informó el Sr Francisco Pizarro, me dijo que iban a hacer unos trabajos en Coyhaique, las comisiones las dan por documento, a mi sólo se me informó, no ví documento alguno. En la Comisión fueron el Sr. Donoso, el Sr. Walter Ávila, Jaime Meliqueo, el Sr. Juan Jeldres, David Acevedo, y él; todos ellos eran trabajadores; iba dirigiendo el Sr. Francisco Pizarro; era una construcción nueva, se estaba armando, era como un retén; cuando llegamos estaba más o menos un 90% construido; soldé “todo lo que era pasamanos”, hice un portón para las caballerizas, unos techos para unos cilindros de gas que había que cerrar; los materiales que ocupé estaban ahí; duró 15 días la Comisión; me pagaron un viático, también los pasajes de avión; alojamos en la misma construcción, habían camas; el horario de trabajo era de 8,30 a 6,30 horas, pero había que trabajar sobretiempo porque “era mucho trabajo, era mucho trabajo”; todos tuvimos que trabajar sobretiempo, David en albañilería, había un carpintero, un eléctrico, un pintor y un gáster; el pintor pintó un calabozo; habían materiales pero no habían más cosas que las que él ocupó y unas pocas latas de pintura; no nos dijeron qué empresa estaba a cargo de la obra; no es habitual ir a terminar obras, lo que nos corresponde es trabajar en obras que ya están hechas, el lugar no estaba en condiciones de ser ocupado o inaugurado; el material que había era fierro, las herramientas “las llevé de aquí, son fiscales”, las llevé en avión; el carpintero tuvo que hacer unos muebles; el domingo trabajamos medio día; los demás días trabajábamos hasta las 9 de la noche; Carla Salinas era la encargada de la sección reparaciones y mantenciones; 13 personas trabajaban en esa sección; la Comisión fue por 15 días; previo a una inauguración van a hacer las mantenciones que correspondan, para ver que todo esté funcionando, y si algo no está hecho hay que hacerlo; cuando íbamos a trabajar en las inauguraciones no nos pagaban viáticos; cuando estábamos trabajando llegó un camión, no supe que había adentro; no recuerdo la marca ni el color; Pizarro ayudó en los trabajos; había que terminar el retén, “no creo” que mantención sea lo mismo que*

reparación; usé fierros redondos, cuadrados, ángulos; con los trabajos que hicimos el retén quedó en situación de ser inaugurado;

2°) Jaime Meliqueo Neico: desde hace diez (10) años que trabajo en el área de mantención y reparación; mis jefes en esa época era el Coronel Flores y el Comandante Bustos; lo que ocurrió fue que tuvimos que ir a terminar un cuartel, unas terminaciones, fue una comisión de servicio; fue el año 2013, casi a fines de año; fuimos a Villa Ortega; el Sr. Pizarro me dijo que tenía una comisión de servicio a Coyhaique, no me mostró algún papel al respecto; no lo hablé con mis jefes, fuimos varios compañeros: Parra, Ávila, Jeldres, Donoso, Acevedo; todos eran trabajadores; a cargo de nosotros estuvo el Sr. Pizarro; llegamos en avión y después un móvil nos trasladó hasta el retén; la construcción “la vi en un 70 a 80%”; me correspondió instalar unas puertas de closet, unos roperillos, “como les dicen”; eran como 30 puertas, la Comisión estuvo alrededor de 12 días; la instalación de las puertas era harto trabajo porque había que hacer las puertas, cortar maderas, dimensionar; aparte de esto no hice otras obras; trabajé apurado por el plazo que teníamos de la comisión; los compañeros hicieron pintura, pegaron cerámico, por ejemplo; el material de los closet provino de un camión que trajo la plancha, no supo de dónde venía; me pagaron la comisión, el viático; el pasaje lo pagó Carabineros; dormimos en el mismo cuartel, “en la misma construcción nueva”; las reparaciones y mantenciones que habitualmente hacemos es poner piso flotante, repisas, tabiques; en algún momento me tocó ir a terminar obras, consistía en hacer “reparaciones de retenes ya construidos”; trabajábamos todo el día, “ocho de la noche”; las Comisiones no tienen horario; las condiciones de trabajo eran regulares, nosotros mismos comprábamos los alimentos; no sé qué empresa fue la que estuvo a cargo de las obras; el material que usé fue melanina; no había agua caliente; el cuartel no estaba en condiciones de ser inaugurado, la sección en que trabajo presta servicios “donde se requiera”; el trabajo que hice fue una obra mayor, por la cantidad y tiempo que se me dio para hacerlo; en la sección trabajaban alrededor de 15 personas y que cerca de de 6 personas fuimos en la Comisión; no recuerdo el color del camión, tampoco si tenía un logo de la institución; Pizarro también trabajó en las obras, ayudaba; había materiales en la obra; esos trabajos no eran los “habituales” que se hacían para una inauguración de los cuarteles, los trabajos que hice no fueron detalles.

QUINCUGÉSIMO: Que, en el documento ordinario electrónico NCU N° 21383223, de fecha 7 de abril de 2014 (prueba documental de la fiscalía N° 1.157), dirigido por el Departamento de Cuarteles L1 a la Subdirección Drogas e Investigación Criminal, con informativo a la Dirección Nacional de Logística, con el “asunto: recepción definitiva Villa Ortega” (informa al respecto), consta que se informó acerca de una reunión a cargo del jefe del Área Coordinación Ejecución Proyectos, Mayor de Carabineros Jorge Muñoz Soto, en la cual participaron el subteniente Luis Parra, la arquitecto Andrea Campusano Muñoz, la ingeniero civil Romina Parraguez. En dicha reunión se recopiló la información existente, conforme a la cual se estableció:

a) que el ITO a cargo la obra de reposición Retén Villa Ortega había sido el ingeniero constructor Francisco Pizarro Dasso;

b) que el 23 de abril de 2013 se recibió una carta de la empresa CGM, solicitando la recepción provisoria de la obra;

c) que el 23 de mayo de 2013 se dictó la Resolución N° 381, mediante la cual se nombró la Comisión de recepción provisoria, la que estuvo conformada por el Teniente coronel Christian Bustos Morgado, a cargo de la Comisión, la arquitecta Andrea Campusano, el constructor civil Guillermo Nadal y el ingeniero eléctrico Héctor Salamanca;

d) que mediante acta N° 46, de 7 de junio de 2013, tuvo lugar la recepción provisoria con observaciones, la que fue suscrita por todos los integrantes de la Comisión y por el representante legal de la empresa CGM, Cristian Gutiérrez Martínez; y,

e) que el 19 de junio de 2013, se recibió una carta de la empresa CGM señalando haber subsanado las observaciones, por lo que se solicitó una comisión de servicio para el constructor civil Guillermo Nadal a fin de verificar si efectivamente las observaciones habían sido subsanadas, constatando que no lo habían sido. Respecto de esta constatación, la funcionaria Andrea Campusano señaló en la reunión que de lo informado por Nadal “no hay respaldo en el archivador”.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que, el 7 de enero de 2014, con motivo de la interposición de cinco (5) demandas laborales en contra de CGM y de DILOCAR, la Dirección Nacional de Logística requirió que se le informará ampliamente acerca de los contratos de adjudicación a la empresa CGM, el estado de ejecución de las obras, el estado actual de pagos y retenciones, y los vínculos laborales existentes con ex funcionarios de la institución. Mediante oficio N° 1, de 29 de enero de 2014 (prueba documental N° 1.075 de la fiscalía), el Teniente de Carabineros, asesor jurídico, Hugo Araneda Allel, dio respuesta a lo ordenado remitiendo al efecto lo informado por el ITO Francisco Pizarro Dasso en relación a los cuatro proyectos, quien señaló, entre otras cosas, que el subteniente Luis Parra Ávila, encargado de proyectos y custodia de las boletas de garantía, había declarado que en atención a la finalización de las obras del Retén Villa Ortega, y por existir observaciones, se debió reajustar la fecha de la vigencia de la boleta de garantía, requiriéndose este cambio al contratista, Cristian Gutiérrez Martínez, gerente General de CGM, y a Francisco Luis Gutiérrez Gutiérrez, quienes debían hacer la renovación la última semana de septiembre o la primera de octubre, ante lo cual manifestaron que el banco no les renovarían la boleta si no presentaban la que actualmente se mantenía en custodia, ello con el fin de liberar los fondos para tomar una nueva boleta, con nueva vigencia. Tal situación le fue informada al Teniente coronel Bustos Morgado, quien le manifestó que les diera las facilidades y que entregara la boleta, lo que se hizo, sin que posteriormente ese documento, debidamente renovado, fuere devuelto.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en su declaración el acusado Christian Bustos señaló: *la boleta de garantía de Villa Ortega fue devuelta porque el banco la exigía para renovarla; anteriormente se había procedido de la misma forma sin que se hubieran generado problemas; en el caso de Villa Ortega no se pudo cobrar la boleta de garantía, pero las obras ya estaban finalizadas.*

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, en la vista fiscal del sumario administrativo de Carabineros, de fecha 22 de agosto de 2014 (documento N° 66, prueba de la fiscalía), el fiscal instructor Omar Gutiérrez Gambaro propuso para el (sub)Teniente Luis Alberto Parra Ávila una sanción de reprensión, fundado en que en el mes de julio del año 2013, encontrándose bajo su custodia la boleta de garantía de fiel cumplimiento del proyecto reposición Retén Villa Ortega, y sin que hubiere transcurrido el plazo de 270 días corridos, contados desde la fecha de la

recepción provisoria de las obras, el cual se cumplía el 21 de marzo de 2014, procedió a hacer devolución de la boleta de garantía a un tercero de nombre Luis Gutiérrez Gutiérrez, para los efectos de renovar el documento, pero que la nueva boleta no fue reingresada por el contratista.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que, el Informe Final de Investigación Especial de Carabineros de Chile, N° 238/2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, de la Contraloría General de la República, estableció que la boleta de garantía N° 361351 del Banco Security por \$19.320.000 con vencimiento el 27 de febrero de 2014, presentada por CGM Ltda. para caucionar la correcta ejecución y fiel cumplimiento del contrato Reposición Retén Villa Ortega, fue devuelta al contratista en septiembre de 2013, por el subteniente Luis Parra Ávila, con autorización del Teniente coronel Christian Bustos Morgado, pero sin contar con el acta de recepción definitiva de las obras o con un certificado de recepción conforme emitido por la unidad técnica.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de la inconsistencia que se advierte en la fecha en que habría sido devuelta la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento, lo cierto es que haya sido en una u otra la devolución tuvo lugar antes de la fecha que correspondía de acuerdo con los términos del contrato.

QUINCUAGESIMO SEXTO: Que, en la Resolución Exenta N° 381, de 23 de mayo de 2013, antes citada, el Director Nacional de Logística, Jorge Rojas Langer, dispuso que la Comisión designada para la recepción provisoria de las obras del proyecto Retén Villa Ortega (integrada por Andrea Campusano Muñoz, arquitecto, Héctor Salamanca Riquelme, ingeniero eléctrico, Guillermo Nadal Agost, constructor civil y presidiendo la Comisión el jefe Área de Coordinación y Ejecución de proyectos L1., Christian Bustos Morgado, Teniente coronel) incluyese la revisión de los proyectos de Reposición Retén Lago Castor, Tenencia Coyhaique Alto y sector La Tapera a fin de verificar el estado de avance de las obras y proceder con los estados de pago. La Comisión se constituyó en el retén Villa Ortega el día 7 de junio de 2013, trasladándose posteriormente a las mencionadas unidades policiales.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, con fecha 10 de octubre de 2013, a fin de proceder a la recepción provisoria de las obras correspondientes a los proyectos de reposición Tenencia Coyhaique Alto y Retenes Isla Huar y Lago Castor, se constituyó en terreno una Comisión designada al efecto, la cual rechazó la

recepción de las obras que estaba ejecutando la empresa Constructora CGM Ltda., por no estar concluidas. A esos efectos, el ITO Francisco Pizarro elaboró dos informes técnicos, signados con los números 1.063 y 1.064, ambos de fecha 25 de octubre de 2013, concernientes al término anticipado de las obras Retén Lago Castor y Tenencia Coyhaique Alto. En ambos señaló: 1°) que la empresa CGM no había enviado la carta que debía deSPAchar solicitando la recepción de la obra; 2°) que el 6 de agosto de 2013 constató in situ que en dicho lugar sólo había 4 trabajadores y que no estaban realizando faenas, informándole uno de los trabajadores que la inactividad se debía a las malas condiciones climáticas; 3°) que el 1° de septiembre de 2013 verificó en terreno que no había nadie en el lugar de las obras, que éstas no se encontraban terminadas, estimando el avance de las mismas en un 90%, y que el libro de obras no se encontraba en el lugar de las faenas; y, 4°) que se debía estudiar la factibilidad de dar término anticipado a las obra

Los citados informes motivaron el término anticipado de los contratos, lo que se materializó en tres (3) resoluciones dictadas por Jorge Rojas Langer, General Inspector, Director Nacional De Logística de Carabineros. Éstas fueron:

1ª) Resolución Exenta N° 851, de 30 de octubre de 2013, proyecto Retén Isla Huar. Dispuso el término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, citó antecedentes de la adjudicación y el contrato, el acta de entrega de terreno de fecha de 18 de enero de 2013, los Informes Técnicos elaborados por el ITO de la obra, Francisco Pizarro, números 755, 974 y 1.064, de 3 de septiembre, 23 de septiembre y 25 de octubre de 2013, respectivamente, y el acta de recepción provisoria rechazada. Indicó que el plazo de ejecución de las obras era 160 días corridos, contados desde la fecha del acta entrega de terreno, y que hubo un addendum por \$10.888.811 con un aumento de plazo de 53 días, según Resolución Exenta N° 429, de 12 de junio de 2013. Consignó, además, que una vez vencido el plazo y habiendo concurrido la Comisión receptora el 10 de octubre de 2013, el contratista no había dado cumplimiento a las observaciones por lo que la obra no podía entenderse ejecutada en su totalidad, rechazándose la recepción provisoria. Agregó que no se encontraba el contratista en las obras y que el personal que sí estaba indicó que las faenas se encontrarían paralizadas desde fines de septiembre y que estaban en el lugar sólo por la posibilidad de que la empresa se apersonara y ellos recibir los pagos de remuneraciones pendientes.

Concluyó la Resolución diciendo que la empresa había incurrido en un incumplimiento contractual al no cumplir las órdenes del ITO, por no mantener el

libro de obras y por extenderse injustificadamente el desarrollo de éstas, habiendo, además, hecho abandono aparente de las mismas.

Por lo anterior, dispuso el término anticipado del contrato y ordenó proceder a la liquidación, al cobro de multas y a hacer efectiva la boleta garantía de \$18.996.164, ordenando asimismo mantener las retenciones y notificar los resuelto a la empresa;

2ª) Resolución Exenta N° 859, de 30 de octubre de 2013, proyecto Tenencia Coyhaique Alto.

Dispuso el término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, haciendo mención de los antecedentes de la adjudicación, del contrato, de la entrega de terreno mediante acta N° 45, de 13 de diciembre de 2012, y del Informe Técnico N° 1064, elaborado por el ITO de la obra, Francisco Pizarro.

Se señala que el plazo de ejecución de los trabajos eran 220 días corridos, contados desde la entrega de terreno, que por Resolución Exenta N° 492, de fecha 19 de junio de 2013, se autorizaron obras extraordinarias por la suma de \$11.553.523, y un aumento de plazo de 65 días; y que por Resolución Exenta N° 728, de 13 de septiembre de 2013, se otorgó un aumento de plazo de 18 días.

La Resolución consigna que el 6 de agosto de 2013, el ITO Pizarro había constatado que en la obra solo había una cuadrilla de trabajadores, quienes le manifestaron que por el mal clima no estaban trabajando. Asimismo, indica que el 1° de septiembre de 2013, el mencionado ITO se constituyó nuevamente, en comisión de servicio, a fin de constatar avances de la obra y posterior tramitación de estados de pago, oportunidad en la que no se encontró a ningún trabajador, había desorden y gran cantidad de acopio de material, verificando que las obras no estaban terminadas y que su avance efectivo era de un 90%.

En consecuencia, dio por establecido el incumplimiento de la empresa por abandono de las obras, por no mantener libro de obras y por no cumplir con la finalización de los trabajos, disponiendo el término anticipado del contrato, la liquidación y cobro de multas, hacer efectivas las boletas de garantía de \$19.550.000 y \$530.000, y notificar a la empresa; y,

3ª) Resolución Exenta N° 860, proyecto Retén Lago Castor.

Dispuso el término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, haciendo mención de los antecedentes de la adjudicación del proyecto

y del contrato de obra, del plazo de ejecución, 200 días corridos, contados de la fecha del acta entrega terreno, de 13 de diciembre de 2012, de la Resolución Exenta N° 697, que autorizó un aumento de obra con un plazo de 66 días, y de la Resolución Exenta N° 491, que autorizó un cambio de partida con un aumento de plazo de 18 días, extendiéndose, por tanto, la entrega hasta el 22 de septiembre de 2013. Consigna también que empresa debía enviar una carta solicitando la recepción provisoria de la obra a más tardar el día 7 de septiembre de 2013, lo que no hizo.

Hizo referencia al Informe Técnico N° 1063, de fecha 25 de octubre de 2013, elaborado por el ITO de la obra, Francisco Pizarro, quien constató que en la faena había sólo una cuadrilla de trabajadores, quienes no estaban trabajando debido a las malas condiciones climáticas, según le señaló quien en ese momento actuaba como representante de la empresa. Posteriormente, el 1° de septiembre de 2013, en visita a terreno para constatar los avances de la obra y tramitación de estados de pago, el ITO verificó que no había trabajadores en la obra y que ésta no se encontraba terminada, estimando que su avance alcanzaba al 90%. En ambas visitas constató que no estaba el libro de obras. Por lo anterior, el ITO recomendó el término anticipado de estas.

En mérito de lo anterior se estimó que la empresa contratista había incurrido en grave incumplimiento contractual por no haber terminado la obra dentro de plazo, por no contar con el libro de obras en el lugar de las faenas e incurrir en falta grave por no pagar los sueldos de los trabajadores, disponiendo el término anticipado del contrato, proceder a la liquidación y cobro de multas devengadas, hacer efectivas las boletas bancarias de garantía de \$19.500.000 y \$240.000, mantener las retenciones para responder del mayor precio que pudieran costar las obras hechas por administración o por un nuevo contrato, eliminar del Registro de Contratistas a la empresa CGM Ltda., y notificarla de lo resuelto.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Inscripción empresa Grossman S.A. en el Registro de Carabineros. Que, mediante Resolución Exenta DILOCAR N°847, 28 de octubre de 2013, se aprobó inscripción de la empresa constructora Grossman S.A. en el Registro General de Contratistas de Carabineros de Chile. En ella se hace mención a los siguientes antecedentes: 1) carta de fecha 16 de septiembre

de 2013, de la mencionada empresa; 2) oficio N° 277, de fecha 8 de noviembre de 2013, del asesor jurídico Nicolás López Reyes; y, 3) oficio N° 101 de fecha 8 de noviembre de 2013, elaborado por el asesor de control de riesgos Pedro Jofré Montero, en relación a la solicitud de inscripción de la empresa Grossman, concluyendo que la sociedad puede ser inscrita en el Registro de Contratista ya que califica en obras mayores segunda categoría, especialidad obras de arquitectura.

QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que, con fecha 15 de noviembre de 2013 se autorizó un trato directo para la terminación de los proyectos de reposición Retén Isla Huar y Tenencia Coyhaique Alto, adjudicándose los trabajos la empresa Constructora Grossman S.A., representada por Carlos Grossman Badrián. El día 27 de noviembre de 2013 se suscribieron los correspondientes contratos. El 10 de febrero de 2014 se puso término anticipado a ambos contratos por incumplimiento del contratista. Lo anterior consta de los antecedentes que a continuación se indican:

1. Proyecto de Reposición Tenencia Coyhaique Alto:

1.1. Resolución Exenta N° 940, de fecha 15 de noviembre de 2013 (prueba documental de la fiscalía N° 1.057) suscrita por Jorge Rojas Langer, Director Nacional de Logística, en la cual se señala: a) que se exime del trámite de llamado a propuesta pública y o privada y determina, en consecuencia, un trato directo para terminación del proyecto; b) que existen recursos asociados al proyecto por \$83.474.957; c) que el 4 de noviembre de 2013 se enviaron cartas de invitación para participar a las empresas FEALFRA SPA, Grossman S.A., Olga Garfías Fuentes y Coserco Ltda., interesándose sólo las dos primeras; d) que se efectuaron las evaluaciones jurídica, financiera y técnica que correspondían; e) que se sugirió contratar mediante Trato Directo a la empresa Grossman S.A., la cual ofertó un monto de \$83.240.915, con un plazo de ejecución de 50 días corridos; f) que se resolvió eximir del llamado a propuesta pública y o privada la ejecución del proyecto, determinándose, en consecuencia, un Trato Directo con la empresa constructora Grossman S. A.; y, g) que se ordenó publicar la Resolución y el contrato en el portal Mercado Público;

1.2 Contrato de obras para la terminación de la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto, de fecha 27 de noviembre de 2013, suscrito entre el Fisco-Carabineros de Chile y la empresa Constructora Grossman S.A., representados por el Director Nacional de Logística, General Jorge Rojas Langer, y Carlos Grossman Badrián, respectivamente. El monto del contrato fue de \$83.340.915 y el plazo de ejecución 70 días corridos, contado desde la fecha del Acta de Entrega de terreno. El precio se pagaba mediante la presentación de estados de pago mensuales de acuerdo al avance físico de la obra, el cual debía ser visado por el respectivo ITO. El precio incluyó materiales, remuneraciones, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos Generales y utilidades.

1.3 Resolución Exenta N° 1.027, de 10 de diciembre de 2013, en la que se aprueba el contrato de obra Terminación de la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto, suscrito con la constructora Grossman S.A. (prueba documental N° 1.059 de la fiscalía)

1.4 Resolución Exenta N° 104, de fecha 10 de febrero de 2014, firmada por Marcos Tello Salinas, Director Nacional de Logística, mediante la cual se dispuso el término anticipado del contrato de obra, de fecha 27 de noviembre de 2012, por incumplimiento del contratista. Hace mención al Informe Técnico N° 43, de fecha 22 de enero de 2014, elaborado por Romina Parraguez, ingeniero civil, y Héctor Salamanca, ingeniero eléctrico. El plazo de ejecución de las obras era 70 días corridos, el cual venció el 2 de febrero de 2014.

2. Proyecto de reposición Retén Isla Huar:

2.1. Resolución Exenta N° 941, de fecha 15 de noviembre de 2013, (prueba documental N° 1.058), firmada por Jorge Rojas Langer, director nacional de Logística, mediante la cual se exime del trámite de llamado a propuesta pública y o privada, y determina un Trato Directo para el Proyecto de Terminación del Retén Isla Huar. Indica que existen recursos asignados al proyecto por \$19.213.940. Hace referencia a que el día 4 de noviembre de 2013 se remitieron cuatro cartas de invitación a participar a las empresas constructoras FEALFRA SPA, Grossman S.A., Olga Garfías Fuentes y Coserco Ltda., interesándose solamente las dos primeras. Se deja constancia que se efectuó la evaluación jurídica, financiera y técnica, cumpliendo ambas empresas. Se sugirió contratar

mediante la modalidad Trato Directo a la empresa Constructora Grossman S.A., la cual ofertó \$19.130.505 y un plazo ejecución de 50 días corridos.

2.2. Contrato de obras para la terminación del Reten de Carabineors Isla Huar, de fecha 27 de noviembre de 2013 (prueba documental de la fiscalía N°1.155), suscrito entre el Fisco-Carabineros de Chile, representado por Jorge Rojas Langer, General, Director Nacional de Logística, y la empresa Constructora Grossman S.A., representada por Carlos Grossman Badrián. El monto pactado en el contrato fue de \$19.130.505, incluidos materiales, remuneraciones, pagos de honorarios e impuestos. El plazo de ejecución se fijó en 50 días, contados desde la fecha del Acta de Entrega de terreno.

2.3. Resolución Exenta N° 1.025, de fecha 10 de diciembre de 2013 (prueba documental N° 1.060, de la fiscalía), en la cual se aprueba el contrato de obra Terminación del Retén de Carabineros Isla Huar, suscrito entre el Fisco-Carabineros de Chile y la empresa.

2.4. Resolución Exenta N° 211, de fecha 14 de marzo de 2014 (prueba documental N°), firmada por Marcos Tello Salinas, director nacional de Logística, mediante la cual se dispuso el término anticipado de contrato de obra para la terminación del retén de Carabineros Isla Huar, de fecha 27 de noviembre de 2013, por incumplimiento del contratista. Se hace referencia a lo constatado con fecha 16 de enero de 2014, por el ITO Marco Pomar Cisterna, en cuanto a que la obra no se encuentra en condiciones de ser recepcionada, y al Informe Técnico 127, de 17 de febrero de 2014.

SEXAGÉSIMO: Boletas de Garantía. Devolución. Que, la testigo Cecilia Cordero declaró que trabajaba desde hace 13 años, aproximadamente, en la oficina de kardex, en recursos humanos. Explicó que cuando una boleta de garantía era retirada se confeccionaba un acta y se le pedía a la persona que hacía el retiro que presentara su cédula de identidad y el RUT de la empresa.

Se le exhibió el documento N° 1.243 (NCU 19123658 de Claudia Zenteno Quiroz, de fecha 16.01.2014; que remite NCU 18972043 y 19049535): lo reconoció y señaló que *es el documento en que informe todo lo que le pareció irregular*, por ejemplo: la entrega de la boleta de garantía, se hace presente que no se registra RUT de la empresa ni poder del Sr. Rojas; explicó que la persona tiene

que ir con el RUT de la empresa o ser parte de la empresa, en este caso CGM. Excepcionalmente a Rojas por ser conocido no se le exigía esa documentación.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Devolución boleta de garantía de seriedad de la oferta proyecto Retén Isla Huar. Que, en el acta de entrega de boleta bancaria N° 69, de fecha 9 de enero 2013, consta:

1) que la boleta de garantía de seriedad de la oferta del proyecto Isla Huar, N° 1689517, del Banco Security, por la suma de \$10.230.000, tomada el día 9 de noviembre de 2012, a la orden de DILOCAR, con vencimiento el 15 de enero de 2013, fue devuelta por el subteniente de carabineros Luis Parra Ávila a la empresa constructora CGM;

2) que la entrega la hizo siguiendo instrucciones del jefe de la oficina de Gestión y Coordinación de Proyectos del Departamento de Cuarteles L1, teniente coronel Christian Bustos Morgado, y,

3) que la boleta de garantía fue recibida por César Orlando Rojas Gaete.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, a la testigo Claudia Zenteno se le exhibió la citada acta N° 69, la cual reconoció e indicó que se trataba de una boleta de garantía que le fue entregada a César Rojas. Del documento hizo la siguiente lectura: *“...conforme a lo dispuesto por el teniente coronel Christian Bustos Morgado, se hizo entrega de la boleta de garantía que garantiza la seriedad de la oferta del proyecto Isla Huar, a la Constructora CGM Ltda. Recibe César Orlando Rojas Gaete y entrega Luis Parra Ávila*

SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, el perito documental, Jorge Muñoz Neira, examinó la boleta de garantía N° 1689517, del Banco Security, antes individualizada, concluyendo que era falsificada.

SEXAGESIMO CUARTO: Que, el Banco Security informó mediante oficio de fecha 22 de enero de 2018, suscrito por Alan Turner Infante, subgerente de administración, que el N° 1689517, de la boleta de garantía consultada, por su numeración no correspondía a las del banco.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, el documento le fue exhibido el acusado César Rojas, quien lo reconoció cuando prestó declaración, explicando que el retiro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta había sido procedente por cuanto el proyecto ya había sido adjudicado. Dijo no saber que la boleta era falsificada y que “de hecho” había sido él quien la había entregado a la Policía de Investigaciones, PDI.

SEXAGÉSIMO SEXTO: Devolución boleta de garantía de seriedad de la oferta proyecto Tenencia Coyhaique Alto. Que, la boleta de garantía de seriedad

de la oferta del proyecto Coyhaique Alto fue devuelta al acusado César Rojas. Así consta de la copia de acta de entrega N° 61, de fecha 13 de diciembre de 2012, suscrita por Lorena Morales C.: *“...conforme a lo dispuesto por el jefe de Gestión de Coordinación y Ejecución, Teniente coronel Christian Bustos Morgado, la Sargento 2º infrascrita, hace entrega a la empresa Constructora CGM, de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, según el siguiente detalle: boleta 1689519, emisión 9 de noviembre de 2012, Banco Security, monto \$11.701.000, seriedad de la oferta del proyecto de Reposición de la Tenencia de Carabineros Coyhaique Alto. Recibí conforme: Claudia Segura Lezana, firma legible, entregó conforme Lorena Morales C.”* (fs. 1.634 del sumario administrativo, prueba documental N° 66 de la fiscalía).

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, los signatarios del acta N° 53, de 24 de junio de 2013, entre ellos el acusado Christian Bustos Morgado, jefe de la Comisión de Recepción, correspondiente a las obras del Retén Villa Ortega y su recepción provisoria sin observaciones, faltaron a la verdad respecto a la ausencia de observaciones al momento de efectuarse la recepción provisoria, como lo demuestra de manera irrefutable las numerosas diligencias, actuaciones y documentos a que se ha venido haciendo mención. Tales antecedentes dan cuenta que las obras no estaban concluidas, tanto así que algunos trabajadores de la sección Mantenimiento y Reparación del Departamento Cuarteles L1, a saber, Ricardo Parra Jorquera (soldador), Jaime Meliqueo Neico (carpintero), Donoso, Walter Ávila, Juan Jeldres, David Acevedo, además del ITO Pizarro, fueron enviados en comisión de servicio al Retén Villa Ortega desde el día 11 al 22 de noviembre de 2013, periodo en el cual completaron las obras que faltaban. El tiempo que tomaron estos trabajos, las extensas jornadas laborales, los trabajos que describieron los testigos Parra y Meliqueo haber realizado (*eran como 30 puertas, la instalación de las puertas era harto trabajo porque había que hacer las puertas, cortar maderas, dimensionar*), les llevó a decir que los trabajos que realizaron no fueron *obras menores* ya que había sido *mucho, mucho trabajo*, más de lo que les correspondía hacer en el desempeño de sus funciones en la sección de Mantenimiento y Reparación.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, los referidos testigos declararon que habían utilizado materiales que se encontraban en el lugar, además de otros que fueron llevados hasta allí en un camión: *el material de los closets provino de un camión que trajo la plancha*. La procedencia de estos últimos aparece explicada en el acta de entrega N° 766, de 6 noviembre de 2013, la que da cuenta del hecho que el cabo Leandro Donoso, *por orden superior del jefe de Departamento Félix*

Flores Santis, hizo entrega de materiales de construcción para ser utilizados en la reparación y mejora de la casa anexa y retén Villa Ortega.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, los antecedentes latamente reseñados no dejan eSPAcio para dudar que la Comisión que se envió a Villa Ortega no estuvo destinada a realizar trabajos de normalización de obras exteriores, como antojadizamente se la apellidó en los documentos oficiales internos del Departamento Cuarteles L1. Al contrario, su finalidad no fue otra que terminar los trabajos que la empresa CGM había dejado inconclusos. Esto último, no obstante haber recibido del mandante, Fisco-Carabineros de Chile, el pago íntegro del total asignado para la ejecución de las obras, incluidas las retenciones que en cada estado de pago debían efectuarse conforme estipulaban las bases administrativas de la licitación. Respecto de estos pagos, consignar desde ya que ellos se efectuaron a solicitud del contratista, sobre la base de falsos informes de avance de obras que elaboraba el ITO, Francisco Pizarro Dasso, los que posteriormente, incluso en algunas oportunidades el mismo día o al siguiente, eran aprobados por el jefe de Área, Christian Bustos Morgado.

SEPTUAGÉSIMO: Que, lo anterior se vio agravado por el hecho de que el contratista, mucho antes del plazo que estipulaban las bases administrativas (30 días después de la recepción definitiva de las obras, la que procedía transcurridos 270 días corridos desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones), solicitó la devolución de la boleta de garantía, petición a la cual accedió el mandante por instrucciones que, en exceso de sus atribuciones, fuera del marco de los derechos y obligaciones del respectivo contrato de obra y sin velar por los intereses de la institución policial, Carabineros de Chile, impartió el acusado Christian Bustos al encargado de la custodia de esa clase de documentos, subteniente Luis Parra Ávila. Las razones que para ello argumentó el acusado, antes y durante el juicio, que por lo demás se estableció era un argumento falso (el retén estaba terminado) nada importan a la hora de contrastarlas con los severos deberes funcionarios que traía aparejado la jefatura que ostentaba el acusado Bustos, siendo este el único corolario posible de conformidad con lo que dispone el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, los estados de pago que generaron las solicitudes del mismo nombre, fueron posibles, por un lado, gracias a la adulteración de los informes de estado de avance de las obras que elaboraba el ITO Pizarro, quien incluía en ellos una mayor cantidad de trabajo realizado que el verdaderamente ejecutado, y de otro, por la visación que efectuaba el acusado

Christian Bustos, a sabiendas de la falsedad, de la improcedencia de los pagos y de la consecuencia que pecuniaria que de ello se seguiría.

El procedimiento descrito dio lugar a que el contratista percibiera, en cada estado de pago, una mayor cantidad de dinero de la que correspondía pagar en relación a los trabajos ejecutados, lo que explica la razón por la cual las inspecciones técnicas de obra no siempre se hacían, pues no era necesario ir a terreno si los informes técnicos del ITO se hacían en base a avances que no eran reales. Tales pagos en exceso provocaron que al vencimiento del plazo del contrato, incluidos los aumentos por concepto de addendum, el presupuesto asignado ya hubiere sido pagado en su totalidad, pero sin que el contratista hubiere cumplido con la contraprestación que esos pagos exigían, habida cuenta que la obras no habían sido ejecutadas, ni parcialmente, al momento de generarse los estados de pago, ni íntegramente, al cabo de todos ellos. Satisfechos los estados de pago que requería el contratista, pagadas las retenciones y devuelta la boleta de garantía, estando inconclusas las obras, el Fisco resultó perjudicado en todo aquello que, por encima del presupuesto asignado en la licitación, terminó sufragando para la terminación de los trabajos inconclusos del Retén Villa Ortega.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, al incumplimiento precedente debe sumarse ahora el hecho de que el acta de recepción provisoria “sin observaciones”, N° 53, de fecha 24 de junio de 2013, fue firmada al interior del Departamento Cuarteles L1, y no en el lugar en que se encontraban las obras, como quedó establecido en el sumario administrativo de Carabineros y de la Contraloría General de la República. Así por lo demás lo declaró el acusado Cristian Gutiérrez, quien al exhibírsela reconoció su firma en el documento. El mismo reconocimiento hizo el testigo Omar Gutiérrez, quien refirió que como constaba en la vista fiscal, en la que se propusieron medidas disciplinarias para los sumariados Nadal, Salamanca, Campusano y y Henry Hanstch Salinas, estos también los reconocieron, el fundamento de ello había estado en el hecho de haber firmado el acta en el Departamento Cuarteles, sin haber concurrido a terreno a verificar si las observaciones habían sido subsanadas.

Cabe señalar que resulta nuevamente irrelevante la urgencia, rapidez, los costos o la inneCesariedad que quiera atribuírsele a la recepción provisoria in situ que ordenaban las bases de la licitación. Tales consideraciones no sólo no formaban parte de las facultades del acusado, sino que además se alejaban, y lo alejaron, por su propia decisión, del cumplimiento de sus expresos deberes funcionarios, al punto que de tal inobservancia devino perjuicio al patrimonio fiscal por concepto

de adquisición de 7 pasajes aéreos por un total de \$1.579.137, pago de viáticos para el personal comisionado, David Acevedo, Leandro Donoso, Juan Jeldres, Ricardo Parra, Jaime Meliqueo, Walter Ávila y Francisco Pizarro, ascendente a \$ 2.607.989, como consta de la planilla emitida por el Departamento de Contabilidad y Finanzas DILOCAR el 31 de diciembre de 2013, y por concepto de material fiscal retirado desde la bodega de Cuarteles para ser utilizado en los trabajos de terminación de Villa Ortega, los que fueron valorizados por la empresa SODIMAC en la suma de \$3.476.447, y en \$2.674.986, la tienda Easy. Considerando esta última cotización, el monto de los perjuicios de los rubros indicados ascendió a \$7.663.573 Lo anterior, sin perjuicio del testimonio del perito contable, Francisco Manuel Lara Cerda, quien confirmó los ítems y montos.

Sin perjuicio de lo argumentado, las explicaciones del acusado Christian Bustos respecto a los motivos de la firma de la referida acta en Cuarteles no gozaron de credibilidad, considerando que, como se señaló en consideraciones anteriores, se pudo establecer que el ITO Guillermo Nadal concurrió a Villa Ortega a constatar el cumplimiento de las observaciones derivadas de la recepción provisoria efectuada en Villa Ortega, informando que aquellas no habían sido subsanadas, no obstante lo cual se firmó el acta de recepción sin observaciones por todos los integrantes de la comisión, incluido Guillermo Nadal.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que, en lo que concierne a los proyectos de Reposición de la Tenencia Coyhaique Alto y de los Retenes Isla Huar y Lago Castor, el procedimiento de pago que se empleó fue el mismo que el utilizado en el Retén Villa Ortega, empero, con dos notables diferencias: por un lado, los dineros asignados a las obras no alcanzaron a pagarse en su totalidad, y por otro, el costo de ejecución de las obras inconclusas rebasaban con mucho el monto de los dineros insolutos, incluidas las retenciones y las boletas de garantía de fiel cumplimiento y ejecución.

Tratándose del proyecto de Reposición Retén Lago Castor, la desproporción entre el retraso de las obras y lo pagado hasta el momento en que se puso término anticipado al contrato fue de tal magnitud que no fue posible adjudicarlas mediante trato directo. Ello quedó de manifiesto con la declaración del constructor Jorge Santis quien explicó que Generalmente en el estado de pago N° 8 se cancelan etapas de terminación y pudo ver en terreno que estaba en etapas

de obra gruesa. Estaba a medio construir, había solo partes de las fundaciones de las caballerizas, lo que resultó coincidente con lo expuesto por la arquitecta Romina Parraguez quien indicó que lo que quedaba de dinero disponible no alcanzaba para trato directo.

De acuerdo al valor de las facturas que fueron pagadas por los estados de pago de Lago Castor y el monto del contrato de obra y addendum, se dispuso aproximadamente del 80% del presupuesto destinado a la construcción.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que, como antes se dijo, la terminación de los proyectos Isla Huar y Coyhaique Alto fue adjudicada a la empresa constructora Grossman S.A., asignándoseles para ello los montos insolutos de cada uno de esos proyectos, los cuales, sin embargo, resultaron insuficientes, por lo que el contratista no pudo terminar los trabajos que se le habían adjudicado por trato directo. A este respecto, resultó gravitante la circunstancia de que los itemizados de las obras, esto es, la descripción y detalle de las partidas por ejecutar, fue menos de lo que verdaderamente restaba por construir. La elaboración de estos itemizados estuvo a cargo del ITO Francisco Pizarro, quien, siguiendo las instrucciones de su jefe, Christian Bustos Morgado, adecuó los trabajos faltantes (itemizados) a las sumas de dinero que restaban por pagarse a CGM Ltda., para lo cual redujo aquellos a fin de que calzaran con los dineros que quedaban.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO: Que, la insuficiencia de los dineros adjudicados a los contratos de terminación de los proyectos Isla Huar y Coyhaique Alto, fue denunciada por el contratista al jefe de Departamento Cuarteles de la época, Óscar Águila Galdames, a quien le solicitó un aumento del monto de dinero asignado para la terminación de los trabajos y un aumento de plazo, peticiones a las que esa jefatura se negó, exigiéndole al contratista apegarse al contrato y cumplir lo pactado. Atendido lo oneroso de esto último, la adjudicataria, Grossman S.A., decidió abandonar las obras y asumir la pérdida de lo que hasta ese momento había invertido en compra de materiales, pago de sueldos, etc. La asunción de la pérdida fue completa, toda vez que durante la vigencia del contrato no recibió del mandante pago alguno por los trabajos que estaba ejecutando. A la pérdida en cuestión, debió sumar el contratista el pago de multas.

Ante este nuevo incumplimiento el mandante dispuso el término anticipado de estos dos contratos, por lo que a partir de ese momento las obras quedaron paralizadas indefinidamente.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO: Que, los pagos indebidos que se hacían en los estados homónimos tuvieron lugar gracias a la intervención fraudulenta de los acusados Francisco Pizarro y Christian Bustos, siendo sus actuaciones igualmente relevantes, en la medida que sin la participación de uno no era posible la del otro: sin estados de avance adulterados el visado que hacía el jefe de Área terminaba siendo correcto, cualquiera hubiere sido su ánimo, y cualquiera hubiere sido el nivel de fiscalización desplegado. Tales pagos habrían sido, ni más ni menos, que el cumplimiento de lo debido, y por ende ningún perjuicio habría podido causar al erario fiscal. Y a la inversa, los estados de avance adulterados que generó el ITO, tampoco habría causado perjuicio al erario fiscal si el funcionario encargado de fiscalizar el trabajo del ITO, en toda su extensión, hubiere cumplido con sus deberes funcionarios.

En la especie, la falsedad de los informes del ITO fue avalada con la visación conforme que, al margen de cualquiera fiscalización, el jefe de Área realizó, permitiendo con ese acto administrativo que se cumplieran los propósitos trazados por los acusados gracias a los pagos que hacía el mandante por concepto de obras pendientes de ejecución, primeramente, y con posterioridad, por trabajos que en la realidad no habían sido realizados. Así, el acusado Gutiérrez, proveerse de dinero para ejecutar las obras y pagar a los inversionistas que le había conseguido Rojas; el acusado César Rojas Gaete, pagar a estos financistas su inversión; el acusado Christian Bustos, permitir que se concretara el financiamiento que Rojas le había ofrecido a Gutiérrez; y, el acusado Pizarro, satisfacer, a título gratuito u oneroso, los requerimientos de falta de probidad que le hacía el acusado Bustos, en una primera etapa, falseando los estados de avance de las obras y los estados de pago, y posteriormente, adulterando los itemizados de los trabajos inconclusos a fin de adecuarlos al monto de los dineros que no habían alcanzado a pagarse a la empresa CGM, ya que se utilizarían en los tratos directos de terminación de las obras inacabadas.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en lo que toca al acusado Gutiérrez, quedó demostrado que antes de participar en las licitaciones de los

cuatro proyectos de reposición de los cuarteles, ya tantas veces mencionados, no disponía de recursos financieros con los cuales afrontar siquiera la contratación de las boletas bancarias de garantía que exigían las bases administrativas de las licitaciones. . Tanto el acusado Rojas como Gutierrez coincidieron en que el primero facilitó los dineros para que Gutierrez fuera a visitar los cuarteles para determinar si convenía presentarse a la licitación.

Asimismo, quedó demostrado que la liquidez la obtuvo por intermedio del acusado Rojas quien ofreció financiarlo como inversionista. El trato con Rojas, según los dichos de Gutierrez, era un porcentaje de la rentabilidad, un 20% de las utilidades. Quedó también demostrado que fue por medio del acusado Rojas que obtuvo las boletas de garantía que se requerían para participar, y también quedó demostrado que la solvencia posterior que se requería para la ejecución de las obras provino de los dineros que periódicamente fue recibiendo del mandante, como contraprestación de trabajos que no habían sido ejecutados en la cantidad o extensión que informaban los estados de avance de las obras.

Del mismo modo, se demostró que una vez que el ITO elaboraba los informes de avance de las obras, la empresa CGM emitía facturas por montos que se correspondían exactamente con estos informes falsos, previo envió de carta solicitando pago que en algunas oportunidades fueron firmadas por Gutierrez y otras por poder, percibiendo de esa manera dineros que excedían la cantidad de trabajo efectuado. Al respecto, resulta ilustrativo lo ocurrido con el primer estado de pago del proyecto Coyhaique Alto, en el cual la solicitud de pago del primer estado homónimo se hizo el 17 de diciembre de 2012, en circunstancias que la entrega de terreno, según el acta respectiva, había tenido lugar el 13 de diciembre de 2012, es decir, sólo 4 días antes. Más aún, el informe técnico del ITO Pizarro es de fecha 27 de diciembre de 2012, misma fecha en que éste remitió al Departamento Cuarteles L1 la documentación que se debía adjuntar a la solicitud de pago, misma fecha también en que aparece la constancia al reverso de la factura N° 30 que emitió el contratista, firmada por Christian Bustos Morgado y con el visto bueno de Félix Flores Santis, y misma fecha de emisión de dicha factura.

Lo anterior demuestra que la falsedad de los informes que elaboraba el ITO no sólo provenía de el sino también de los funcionarios que le seguían en orden ascendente, primero Bustos Morgado y luego Flores Santis. Si de lo anterior

quedasen dudas, los documentos que a continuación se citan terminan por despejarlas completamente: 1) Oficio de fecha 24 de diciembre de 2012, del Departamento Cuarteles L1 dirigido al Departamento de Contabilidad L8, mediante el cual solicitó la cancelación de la factura N° 30; y, 2) NCU 9442357, de 2 de enero de 2013, por el cual se solicitó la comisión de fiscalización mensual para los destacamentos de Aysén, entre ellos Coyhaique Alto, por los días 8 al 10 de enero de 2013, información documentaria esta última que se aviene con lo que declaró el acusado Pizarro en cuanto a que la primera visita de fiscalización a los cuarteles Villa Ortega, Lago Castor y Coyhaique Alto, fue el 8 de enero de 2013.

A lo dicho debe agregarse lo concerniente al proyecto Lago Castor, en el que el acta de entrega de terreno es de fecha 13 de diciembre de 2012 y la solicitud de pago se hizo el 17 del mismo mes y año, en tanto que el informe técnico del ITO, la factura del contratista y el oficio remitido en el cual este envió al Departamento Cuarteles L1 la documentación requerida para el pago aparecen todos ellos datados con fecha 27 de diciembre de 2012, en circunstancias que el Oficio remitido de L1 a L8 es de fecha anterior, 19 de diciembre de ese año. A esta manifiesta irregularidad cabe agregar que el estado de pago carece de fecha y no cuenta con firma de ninguna jefatura.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: Que, la mendacidad del acusado, y con ello el conocimiento que negó haber tenido respecto del motivo por el cual se estaban pagando dineros en exceso de lo que se había trabajado, se vio reflejada en la explicación que acerca de esta mayor cantidad de dinero entregó en su declaración, en la que señaló que si bien le había sorprendido que le hubieran pagado más de lo que correspondía, se conformó con la respuesta que le entregó Rojas a su pregunta acerca de este punto: *“se cuenta el milagro pero no el santo”*. Esta explicación contradice la experiencia, y por ende el conocimiento que en materia de obras públicas dijo positivamente haber tenido por haber participado anteriormente en licitaciones de obras públicas municipales. Cualquiera sea el mandante de una obra pública, las licitaciones serán siempre de la misma naturaleza, de suerte que los pagos indebidos, por excesivos, y su recepción por el contratista, en exceso de lo construido, no encuentra justificación plausible ni lícita en las palabras del acusado, y, al contrario, dan cuenta e informan de su participación dolosa en una dinámica administrativa lícita.

Atendida la profesión y experiencia laboral que dijo el acusado haber tenido en materia de obras públicas, no es posible entonces calificar como lícita la emisión de facturas por montos que sólo guardaban correspondencia con los informes de avance de obras, pero no con la realidad de éstas. Con todo, y considerando lo vacilante de la declaración del acusado que en momentos manifiesta conocer lo que ocurría y otros negarlo, no resulta aceptable que si eventualmente pudiere aceptarse que los dineros recibidos en los estados de pago confeccionados por montos superiores a las obras ejecutadas hubieren sido sólo el resultado de la ignorancia, sería del caso que tan favorable casualidad tendría que ceder a favor de la mendacidad, desde que, como se dijo, fue el contratista, Cristian Gutiérrez, quien, a sabiendas del atraso de las obras, emitía por sí o por poder las facturas que posteriormente le eran pagadas.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO: Que, acerca de la emisión de las facturas de la empresa CGM, estuvo en lo correcto el acusado cuando aseveró que él había emitido sólo algunas facturas, particularmente, en el caso de Villa Ortega, la primera y la última, correspondientes al primer y octavo estados de pago. Sin embargo, erró el acusado cuando, a partir de lo anterior, negó su responsabilidad respecto a facturas emitidas por terceros a nombre de la empresa, yerro que se explica por el hecho que estos últimos las emitieron y firmaron “por poder”, fuere éste el que otorgó por escritura pública al acusado Rojas, o el que ratificó con los actos jurídicos de disposición de los dineros recaudados con las facturas en cuestión, estimándose irrelevante, por esta misma misma razón, que esos actos jurídicos no los hubiere realizado él directamente.

OCTOGÉSIMO: Que, el conocimiento del acusado no sólo dijo relación con los pagos en exceso y su recepción conforme y satisfactoria, sino que también incluyó las acciones fraudulentas que Rojas y Bustos desplegaron durante la etapa de ejecución de las obras, como asimismo la falsedad que, en su beneficio y el de los demás acusados, cometía Pizarro en cada estado de pago al informar avances de obras que no se correspondían con la realidad.

Si bien Gutiérrez, por la ostensibilidad de las falsedades que cometía Pizarro, no podía ignorarlas, cuanto más si usufructuaba maliciosamente de ellas, es del caso que de su parte no hubo desconocimiento ni ignorancia respecto de las conductas

fraudulentas que realizaba Rojas en concomitancia con un funcionario público que trabajaba al interior del Departamento Cuartel.

OCTOGÉSIMO PRIMERO: Que, el conocimiento que le cupo a Gutiérrez respecto de la intervención del funcionario público, Christian Bustos Morgado, comenzó a formarse cuando su inicial inversionista, César Rojas, se substituyó a sí mismo por otros. Rojas le informó de la participación de estos, señalándole que en lo sucesivo serían individualizados como inversionistas “A” y “B”, como consta de la prueba documental, correos electrónicos que a continuación se citan:

i) correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2012, de Cristian Gutiérrez a César Rojas, “es posible que B nos dé un panorama de las empresas que participan con nosotros, en cuanto a calidad, ISO, etc.”;

ii) correo electrónico en respuesta del anterior, de fecha 17 de agosto de 2012, de César Rojas a Cristian Gutiérrez: “Lo veo”;

iii) correo de fecha de 23 de septiembre de 2012, de César Rojas a constructora CGM, asunto: transferencia (“....necesitamos organizar lo que viene, hablé este fin de semana con “A”....”);

iv) correo de fecha 7 de enero de 2013, de César Rojas a CGM, asunto: revisar; datos adjuntos (“...planilla sobre compromisos de pago: intereses “A” e intereses “B”...);

v) correo de 11 de enero de 2013, de César Rojas a CGM, asunto: casa; “.....hoy me junté con “B”, me comentó que el ITO está tranquilo, dice que nos falta pero que vamos bien, que se veía avance, está preocupado por Isla Huar;

vi) correo de 24 de enero de 2013, de César Rojas a Cristian Gutiérrez, asunto: ordenamiento de créditos; Cristian, hoy estuvimos hablando del tema con Carolina y programando los pagos, sólo falta incorporar tus créditos personales y los míos, además debemos considerar los pagos a los inversionistas “A” y “B”, y posiblemente “I”);

vii) correo de fecha 4 de febrero de 2013, de César Rojas a CGM (“asunto: revisar; con dato adjunto; Cristian, creo que vamos bien, te pido que revises las 4 hojas de excell y word que te envió...; de este primer monto se debe sacar la inversión de “B” y lo que yo te había solicitado...”). Según lo declarado por Gutiérrez, al consultarle a Rojas por los nombres de “A” y “B”, este último le respondió que *contaba el milagro pero no el santo*.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO: Que, el conocimiento de Gutiérrez acerca de la intervención de Bustos terminó de completarse con la revelación que sobre el particular le hizo Rojas en algunas oportunidades: una, en que le señaló que sus inversionistas sabían mucho de la parte técnica; otra, cuando declaró en fiscalía diciendo que César Rojas le había dicho que cuando él se refiriera a ellos los llamaría “A” y “B”; “A” Coronel Flores, y “B” Cristian Bustos; otra más, cuando luego de una reunión en el Departamento Cuarteles, a la que asistieron él y Rojas, entre otras personas, este último le dijo que Bustos que era su contacto e inversionista y que había pagarle \$30.000.000.

La veracidad de esta revelación se vio confirmada con el propio testimonio de Gutiérrez, quien en su declaración refirió que cuando se fue de la oficina de Rojas, y este le pidió la empresa, el le ofreció que se hiciera socio por \$100.000.000, oferta que Rojas desestimó, argumentando que su verdadero capital eran sus contactos, señalándole posteriormente que se trataba de Christian Bustos, a la vez que se jactó del poder que tenía en Carabineros

OCTOGÉSIMO TERCERO: Que, si bien el acusado Gutiérrez pudo inicialmente no haber sabido de la existencia de este funcionario público, lo cierto es que a poco andar sí supo de él, del lugar en que trabajaba y, especialmente, del conocimiento e información que manejaba en relación a las licitaciones que llevaba el Departamento Cuarteles L1, toda vez que el acusado Rojas le reveló posteriormente el nombre de ese funcionario.

Con dicha información el acusado Gutiérrez sumó a su voluntad de formar parte de la dinámica de pagos fraudulentos el conocimiento cierto de la participación que en tales irregularidades estaba teniendo un determinado funcionario público. Esto último, con independencia del momento, oportunidad, lugar, circunstancias o fecha en que llegó a conocerlo personalmente.

Así entonces, la voluntad decidida de Gutiérrez, en orden a hacer y seguir haciendo durante meses aquello que ya se ha dicho, unida al conocimiento de las circunstancias de hecho en las cuales sus actuaciones estaban teniendo lugar, muestran que de su parte existió una clara conciencia de la ilicitud en que estaba incurriendo, cúmulo que permite imputarlo, de facto y de iure, y adjudicarle el tipo penal correspondiente a esos hechos, sin que para ello se interpongan circunstancias que lo eximan de responsabilidad por falta de antijuridicidad de su conducta.

OCTOGÉSIMO CUARTO: Que, la falsedad de los informes que confeccionaba Pizarro y el visado que de ellos hacía el jefe de Área, Christian Bustos, permitió a Rojas obtener el dinero que se requería para ejecutar las obras que, formal y oficialmente, habían sido adjudicadas a Gutiérrez.

La total falta de recursos económicos fue reconocida por el acusado Gutiérrez, quien sobre este punto declaró que cuando el acusado Rojas le propuso participar en las licitaciones de los proyectos le respondió que aunque le interesaban no disponía de dinero para participar en ellas. Más aún, Gutiérrez declaró en el tribunal que *respecto del primer estado de pago de Villa Ortega se atrasó por falta de capital para adquirir los materiales; César Rojas necesitaba el primer estado de pago para recuperar sus dineros y comprar materiales; “ahora entiendo eso”; hubo un acumulado de atrasos por falta de dinero; necesitaba recibir dineros y avanzar las obras y eso se arrastró todo el tiempo.*

En lo que respecta a a Rojas, su iliquidez quedó demostrada con el hecho de haber recurrido a terceros inversores que financiaran los proyectos, esto en circunstancias que, como ya se ha dicho, fue el quien ofreció a Gutiérrez proveer los recursos económicos que hacían falta. Lo anterior, no obstante la alegación que hizo aquél respecto de las boletas bancarias de garantía que dijo haber tomado con el dinero del desahucio a que dio lugar su jubilación.

OCTOGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio del cuestionamiento que Gutiérrez hizo a Rojas, es del caso que en lo que a los hechos de la acusación importa el cambio de inversionistas no pareciera admitir otro reparo que la inexistencia de estos, puesto que ni “A”, ni “B”, ni Eduardo Martín ni Salomón Goldbaum lo fueron, en estricto y lícito sentido, los dos primeros, y en sentido alguno los dos últimos.

Al respecto, sostuvo Rojas que los inversionistas “A” y “B” habían sido Eduardo Martín y Salomón Goldbaum, quienes le habían prestado sendas sumas de dinero, las cuales habían sido debidamente y oportunamente documentadas en sendos instrumentos cambiarios suscritos ante notario, a saber: a) notario Juan Facuse: pagaré a plazo de 3 de diciembre de 2012, suscrito por Rojas en favor de Eduardo Martín Aranda, por la suma de \$15.000.000 millones, obligándose a pagar dicha suma el 3 de marzo de 2013; b) notario Elena Torres: pagaré suscrito el 21 de agosto de 2012, por Rojas en favor de Salomón Goldbaum Molina, por la suma de \$32.000.000, pagadero a la vista. Ambos documentos fueron exhibidos y reconocidos por sus respectivos beneficiarios.

Llamados a estrados, Martín y Goldbaum confirmaron los contratos de mutuo, reconocieron los documentos mercantiles y ratificaron los pagos aducidos por el acusado, señalando respecto de esto último que las obligaciones cambiarias mencionadas habían sido pagadas en la fecha estipulada y en su totalidad, en el caso de Eduardo Martín, pero sólo parcialmente, en el caso de Goldbaum, señalando este último que Rojas le había efectuado ocho pagos por un total de \$23.600.000, que faltaban \$8.400.000 por pagar y que el día anterior a su concurrencia al tribunal le había transferido \$1.000.000. Exceptuado este último, los anteriores pagos fueron verificados con el informe de estado de cuenta auxiliar de la sociedad comercial Millennium Ltda. (prueba documental de la fiscalía N° 829).

Estos testigos también declararon acerca de las circunstancias y época en que habían conocido a Rojas Gaete, a saber, en la Subdirección de Compras de Carabineros, en la que este trabajaba y con la cual ellos se relacionaban por haber sido proveedores de armamento y elementos de seguridad para dicha institución.

OCTOGÉSIMO SEXTO: Que, los documentos mercantiles en que se habrían plasmado los contratos de mutuo hicieron creíbles las declaraciones de los testigos Martín y Goldbaum, sin que de tales documentos ni de estas personas se colija, necesariamente, que ellos hayan sido los inversores “A” y “B” que financiaron la postulación de Gutiérrez y particularmente la posterior e inicial puesta en marcha de los trabajos que este último se adjudicó. El hecho de que le hubieran prestado dinero a Rojas no basta para concluir que fueron sólo

esos mutuos los que sirvieron a la causa del “financiamiento de CGM”, y, por esa misma razón, tampoco puede concluirse que ellos fueron los inversores “A” y “B”, cuanto más si existen pruebas que contradicen ese corolario.

Por otro lado, nada se les preguntó por las defensas a los referidos prestamistas de existir algún acuerdo de confidencialidad entre Rojas que justificaran no señalar sus nombres a Gutierrez y/o no consignarlos en documentos o comunicaciones.

Aún en el caso de considerar los dichos de Rojas que también aportó dineros de su jubilación, tampoco eran suficientes para inyectar recursos para el inicio de la construcción.

De otra parte, mediante correo de fecha 22 de mayo de 2013, César Rojas se dirige a Cristian Gutiérrez diciéndole, entre otras cosas, que se adeudan \$45.000.000 por concepto de remuneraciones y \$17.000.000 por imposiciones.

En lo que respecta a los correos electrónicos, en dos de ellos se evidencia una abierta contradicción. En efecto, mientras que el correo de fecha 24 de enero de 2013, concerniente al *ordenamiento de créditos*, Rojas hace referencia a “A”, “B” y posible “I”, en otro posterior, de 14 de marzo de 2013, llamando a uno de los inversionistas como *el hombre de los 15 millones*: “el hombre de los 15 millones ya no me aguanta más chivas”. Respecto de este correo, el acusado Rojas lo reconoció y declaró que la persona a la cual hace mención correspondía a Eduardo Martin.

La proposición de pago que da cuenta el correo de fecha 26 de septiembre de 2012, no se corresponde con la cuantía, con el acreedor ni con la oportunidad en que Rojas le requirió dinero a Gutiérrez para pagarle al hombre de los 15 millones: *de César Rojas a constructora CGM; asunto: consulta: “Cristian, de acuerdo a lo conversado ayer, me preguntan por el retorno de la inversión. Para ello consideremos dos cuotas de 30 cada una. Es así que esto se podría con el primer y segundo estado de avance.*

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO: Que, además de la manifiesta inconsistencia que evidencian los correos citados, de ellos se desprende que la

designación de “A” y “B” que dispuso Rojas para sus inversionistas constituyó un ocultamiento de identidad tendiente a impedir que las personas a quienes se escondía bajo tales designaciones pudieran llegar a asociarse a las licitaciones que llevaba el Departamento Cuarteles, debiendo además descartarse que ellos hayan sido Martin y Goldbaum, toda vez que, además de lo dicho anteriormente, no se demostró que hubiere existido algún motivo que justificase ocultar sus nombres, más aún si los propios *beneficiados* con la medida cautelar no dijeron haberla solicitado ni tampoco sabido que Rojas se refería a ellos en esos términos.

OCTOGÉSIMO OCTAVO: Que, aparece entonces inconcuso que las designaciones de “A” y “B”, y posible “I”, no dijeron relación con los citados prestamistas, ni tampoco específicamente con estos cuatro proyectos, sino que con personas que de haber sido asociadas a las licitaciones habrían dejado en entredicho la transparencia, objetividad y fiabilidad de los procesos licitatorios que llevaba el Departamento Cuarteles L1 y con ello comprometidas sus responsabilidades al quedar expuestos a reproche in extenso por haberse involucrado indebidamente en esos procesos. Resulta evidente que el primer nivel de cuestionamiento, el institucional, no puede tener origen sino en personas cuyas acciones tengan una capacidad real de dañar en tan alto grado la imagen de la institución. Tal espectro de daño no parece compatible con acciones desviadas o derechamente ilícitas que puedan realizar personas que no formen parte de la institución, salvo en cuanto tales acciones las lleven a cabo mancomunadamente con personas que sí forman parte de ella.

La responsabilidad administrativa y penal que a este último le cabría, para el caso que fuere descubierto, constituye motivo suficiente para querer ocultar su identidad, pues de esa forma podría intentar eludir los forzosos reproches que habrían de hacersele por involucrarse indebidamente en procesos licitatorios o, si fuere el caso, por no sustraerse de participar en ellos. Lo anterior, especialmente considerando la penalidad asignada a las defraudaciones fiscales.

En la especie, no consta que Eduardo Martín ni Salomón Goldbaum hubieran tenido, siquiera potencialmente, alguna capacidad de causar daño a la imagen de Carabineros que hubiere justificado, razonablemente, designarlos “A”, “B”, o incluso “I”, menos aún si ambos declararon haber participado con anterioridad a los hechos en licitaciones de Carabineros relacionadas con la provisión de

armamento. En el caso de Goldbaum, adjudicándose proyectos durante varios años, y en el caso de Martín, sin éxito, pero ambos postulando sin ocultar sus identidades.

OCTOGÉSIMO NOVENO: Que, no habiéndose hallado ni aportado antecedentes ni pruebas que justificaran, o al menos hicieren plausible, que el nombre de los *santos inversionistas* que el acusado Rojas quiso inicialmente proteger de la curiosidad de Gutiérrez, hubieran sido Eduardo Martín o Salomón Goldbaum, forzoso es descartarlos como tales y, consecuentemente, centrar la búsqueda de “A” y “B” en quienes acusadores, acusados o testigos señalado.

Al efecto, tratándose de los acusados, salvo Rojas, los demás no imputaron la condición de inversionista a persona alguna. En cuanto a los testigos, incluidos los peritos, ninguno declaró haber sabido de alguien que hubiere apoyado con recursos propios a la empresa CGM ya fuera en el proceso de licitación o en alguna de las etapas que siguieron a la adjudicación.

NONAGÉSIMO: Que, si Eduardo Martín y Salomón Goldbaum no fueron los inversionistas que adujo Rojas, si tampoco se supo de otras personas que lo hubieren sido, si en la cuentas de la empresa CGM o de su representante legal, Cristian Gutiérrez Martínez, no constan que hubieren ingresado, directa o indirectamente dineros de terceros, incluido el acusado Rojas – sin perjuicio de la provisión que obtuvo para las boletas de garantía – y, si finalmente, la empresa tuvo los recursos financieros que necesitaba para poder dar inicio a los trabajos, fuerza reconocer entonces que la propuesta imputativa plasmada en la acusación fue, primero, consistente, y posteriormente, corroborada con los medios de prueba que se aportaron en el juicio, pudiendo entonces concluirse, fuera de toda duda razonable, que las obras que se adjudicó CGM se iniciaron con el dinero que recibió el adjudicatario del primer estado de pago de cada obra y que además se necesitaban los otros estados de pago para seguir avanzando. Lo último aparece de manifiesto en el correo de fecha 22 de mayo de 2013 de César Rojas a Constructora CGM en que plante *“Si consideramos el estado de pago que ya se cargó a la cuenta Santander, queda por financiar los 180 millones que nos deja que con los dos estados de pago (Castor y Huar) deberíamos enterar la cantidad, creo que es difícil que el ITO aperre con esto...todo dependerá del monto de los estados de pago, para Huar no debería ser menos de 100 y en Castor General algo parecido.* Resulta evidente que no se está planificando el estado de pago de

acuerdo al avance de las obras, sino de la necesidad de financiamiento, lo que permite concluir el conocimiento que tenían tanto Rojas como Gutierrez de la falsedad documentaria de los estados de avance de las obras, y su correlato en los estados de pago, generó para la empresa ingresos superiores a los que honestamente le correspondían en cada estado de pago, los cuales fueron parcialmente utilizados, sino desviados, para pagar a los *inversionistas* “A” y “B”, y *posible* “I” sus inexistentes aportes dinerarios, pues, como acaba de decirse, los dineros con que se iniciaron las obras provinieron precisamente de los primeros estados de pago de cada proyecto.

NONAGÉSIMO PRIMERO: Que, los dineros que sirvieron para tomar las boletas de garantía de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato no obstan a lo antes señalado puesto que, quién quiera que haya sido el proveedor y cualquiera haya sido el título jurídico bajo el cual fueron proveídos, lo cierto es que no fueron esos dineros los que hicieron posible dar inicio a las obras sino aquellos provenientes de los primeros estados de pago de cada proyecto. Más aún, el origen espurio que pudieron haber tenido los dineros de las boletas de garantía no tiene incidencia en los hechos propiamente constitutivos del delito de fraude, toda vez que las boletas de garantía no bastaban, por sí solas, para provocar un perjuicio al patrimonio fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de lo ilustrativo que resultaron para mejor explicar el origen de los delitos.

NONAGÉSIMO SEGUNDO: Que, si bien el entonces jefe del Departamento Cuarteles, Félix Flores Santis, a esa época Coronel y posteriormente nombrado General, actualmente en retiro, fue condenado en procedimiento abreviado por estos hechos, es del caso que los supuestos inversionistas fueron dos, “A” y “B”, por lo que aún resta identificar al segundo, sea que corresponda a “A” o a “B”.

Descartados los inversionista que propuso el acusado Rojas, incluido él, por no haber contado con los recursos – económicos – suficientes para la puesta en marcha de las obras; descartado también el condenado Flores, por haber sido más de uno los inversionistas; no habiendo otras personas a quienes se les hubiere atribuido esa cualidad; no advirtiendo el tribunal otros posibles inversionistas; y, no pudiendo haber sido tales financistas (falsos e inexistentes, como se ha venido diciendo) sino personas que por su extrema cercanía con la institución policial, y particularmente con el Departamento Cuarteles L1, hubieren

podido comprometer, mucho más que la imagen institucional, su propia responsabilidad, tanto administrativa como penal, forzoso resulta entonces concluir que el posible segundo inversionista, fuere “A” o fuere “B”, tuvo que haber sido uno de los dos funcionarios por el caso de marras, Pizarro y Bustos, ambos vinculados con ese Departamento y específicamente con los proyectos Villa Ortega, Isla Huar, Lago Castor y Coyhaique Alto. Las pruebas aportadas por los intervinientes obligan (obligaron) a prescindir del primero y concluir, no por descarte sino por convicción basada en la prueba, que el segundo de esos funcionarios corresponde al falso y oculto inversionista.

NONAGÉSIMO TERCERO: Que, tratándose del acusado Pizarro, no hubo en su contra otras pruebas que aquellas que sirvieron para corroborar su confesión de haber falseado los informes de avance de obras y de estados de pago. Pruebas y razones que a excepción de la falsedad documentaria, no lo vincularon con otras partes o etapas del proceso defraudatorio ni con uno de los participantes de la defraudación, como fue el acusado Rojas Gaete. De las acciones y conducta de éste, Pizarro no podría haber estado ajeno si hubiere sido el otro falso e inexistente inversionista. A este respecto, cabe señalar que entre ambos no hubo correos electrónicos que demostrasen que se comunicaban o intercambiaban información relacionada con los proyectos, como tampoco de otros temas. El conocimiento que tuvieron el uno del otro se redujo a la sola vez en que coincidieron en el centro comercial “Mall Florida Center”, hasta donde llegó Pizarro, a instancia de Bustos, acompañándolo, sin haber sabido o informado que también estaría el acusado Rojas. El tópico de la conversación dijo relación con la intención de Rojas en participar como empresario en las licitaciones de los proyectos de reposición de cuarteles.

Los acusados Bustos y Rojas – sus defensas – incriminaron a Pizarro sosteniendo, en toda medida, que habría recibido dinero por elaborar informes de avances de obras y de estados de pago falsos. Sin embargo, no se acreditó que tales pagos se hubieren efectuado. Los movimientos de dinero que se registraron en las cuentas del acusado Pizarro, más allá de las explicaciones que éste entregó en su declaración, y por insolitos que se consideren, lo concreto es que no se demostró que hubieran estado vinculados con los estados de pago de CGM.

A mayor abundamiento, si bien Pizarro y Gutiérrez mantuvieron contacto durante la etapa de ejecución de las obras, lo que era de esperarse ya que uno de ellos era el ITO de los proyectos y el otro el representante legal de la adjudicataria, lo cierto es que además de esta obligada interrelación no se supo de otros contactos que demostrasen que Pizarro habría sido el inversionista “A” o “B”, aseveración a la que no se opone el hecho de que este último haya aceptado alojarse, a instancia de Gutiérrez y con cargo al peculio de éste, en el hotel Dreams de Coyhaique. Aunque este hecho fue reconocido por ambos acusados, es del caso que esa sola circunstancia, cualquiera haya sido el número de veces que hubiere acontecido (v.gr., desde el 11 al 19 de febrero de 2013, el 9 abril del mismo año y desde el 6 al 9 de mayo de 2013, días y fechas coincidentes con la duración de las comisiones de servicio) no convierte a Pizarro en inversionista, ni antes ni ahora, ni real ni imaginario.

NONAGÉSIMO CUARTO: Que, el acusado Pizarro no fue inversionista real o verdadero porque, así como no se demostró que hubiese recibido dineros de Gutiérrez, u otros, tampoco se comprobó que lo hubiere ayudado económicamente, sin perjuicio del beneficio que tangencial e indirectamente pudo haberle traído la adulteración de los estados de pago, en la medida que eran otras personas los destinatarios finales de los dineros en cuestión.

Pero Pizarro tampoco fue el falso inversionista del que se viene tratando, puesto que la provisión de dineros en exceso de lo que correspondía requería de varios pasos, siendo el primero de ellos el de Pizarro, a saber, adulterar la información de los estados de avance de obras y estados de pago. El paso siguiente escapaba de su ámbito de acción, ya que era a su jefe inmediato y directo, Christian Bustos, a quien correspondía darlo mediante la visación del informe de ese subalterno. Respecto del paso que venía a continuación, este correspondía al jefe del Departamento Cuarteles L1, Félix Flores Santis, Coronel a esa época y General en retiro a la fecha, el cual firmaba y enviaba al Departamento de Contabilidad L8 la documentación que Bustos Morgado, y no Pizarro, le preparaba para la firma. Con este último paso, el estado de pago quedaba en condiciones de materializarse mediante el giro del cheque correspondiente. De consiguiente, la intervención de Pizarro como presunto y único inversionista, era imposible, salvo la hipótesis del engaño que sostuvo Bustos, pero que, como se verá más adelante, el tribunal desestimó.

NONAGÉSIMO QUINTO: Que, al no ser el citado Flores parte en este juicio procede entonces omitir mayores o más específicas referencias acerca de las circunstancias bajo las cuales suscribía la remisoria con los antecedentes del estado de pago, salvo para consignar que a causa de esta obligada omisión de referencia no procede parangonar su situación con la del jefe de Área, Christian Bustos. En otras palabras, la fe (plena) que uno y otro pudieron haber hecho respecto de las actuaciones de sus subalternos, Bustos de Pizarro, y Flores de Bustos, no puede servir como punto de referencia para establecer cuál de los dos, o ambos, pudieron haber sido o no engañados, resultando por tanto carente de mayor relevancia la situación del citado Félix Flores, en la medida que el enjuiciado en esta causa ha sido Christian Bustos Morgado, entre otros.

NONAGÉSIMO SEXTO: Que, la tesis del engaño del cual Bustos habría sido víctima por parte de Pizarro no encontró respaldo en los medios de prueba, quedando relegada la tesis a un mero, parcial y acomodaticio argumento.

Al efecto, la teoría del engaño no halla cabida ante los expresos deberes y obligaciones funcionarias que el cargo de jefe de Área le imponía al acusado Christian Bustos, a los cuales el tribunal ya hizo anteriormente extensa y detallada mención. El incumplimiento de esos deberes y el perjuicio al patrimonio fiscal que de ello se siguió no fue el resultado de una simple negligencia funcionaria consistente en haber omitido los deberes que Bustos tenía respecto del trabajo de Pizarro. Un solo incumplimiento podría llegar a serlo, pero una treintena desborda con creces la negligencia, a la vez que evidencia un expreso consentimiento, sino derechamente un propósito, para defraudar el patrimonio fiscal.

Cabe consignar que la preparación y experiencia, sobradamente atestiguada por quienes conocieron de cerca el trabajo de Bustos (testigos Isidro Martínez, Romina Parraguez, Jorge Rojas Langer, Fabián Gutiérrez, Nicolás López Reyes), impiden considerar su conducta como puramente omisiva y negligente, y autorizan a calificarla como dolosa. El alto nivel de eficiencia, de conocimiento, de dedicación y de preparación, entre otros atributos, echa por tierra cualquier posibilidad de que Pizarro hubiere podido engañarlo. El argumento que a dicho efecto esgrimió el acusado, esto es, que la ejecución de las obras era un área técnica en la cual no tenía conocimiento ni formación, de manera que no era factible que hubiere podido fiscalizar el trabajo del inspector técnico de obras, no

supera siquiera el estándar de plausibilidad que requiere cualquier argumentación, más aún si las pruebas que se rindieron contradijeron la imposibilidad en que quiso situarse.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, las declaraciones de los testigos mencionados y el juicio que hizo el testigo Isidro Martínez, en orden a que *el Comandante Bustos es una persona inteligente más que confiada, sabía los pormenores de las obras y no se iba a dejar engañar por lo que le dijera un funcionario. Definio a Bustos con un “gerente”, le interesaba que el trabajo se hiciera; no era fácil engañar a Bustos, él sabía, no se podía ir donde el con cuentos, no se le podía “cuentear”, como asimismo lo dicho por el abogado Nicolas Lopez que con Bustos se discutía el tema de atrasos, tenía control y conocimiento de los proyectos, sabía lo que se pagaba por los ITOS “era difícil ocultarle información”,* desmienten de manera palmaria el impedimento que adujo el acusado haberle afectado, a lo cual debe añadirse la corroboración que de tales testimonios hicieron los testigos Claudia Zenteno, Francisco Socías y Jorge Santis, quienes declararon que el acusado Bustos tenía en su oficina un pizarrón en el cual anotaba y registraba pormenorizadamente las obras licitadas y el estado en que se encontraban.

A lo anterior debe sumarse *la preocupación* y compenetración que mantenía con su trabajo, lo que se desprende de lo declarado por el Coronel Jorge Muñoz Soto, quien expuso que fue Bustos quien propició la metodología de rápida construcción con paneles SIP, innovando el sistema antiguo. Además, consta que envió instrucciones a sus colaboradores incluso en día domingo. Lo dicho se evidenciaba también en sus actuaciones respecto de los proyectos, cualquiera fuera la etapa en que se encontraran. Así ocurrió, por ejemplo, con el proyecto de reposición del Retén Río Tranquilo, acerca del cual los testigos Romina Parráquez, Nicolás López y Fabián Gutiérrez relataron que cuando Bustos supo que la empresa Grossman estaba quedando fuera del proceso de evaluación ya que no había acompañado toda la documentación que requerían las bases administrativas, intervino solicitando que paralizaran el proceso en espera de que la documentación faltante llegara, aduciendo que Flores Santis tenía un compromiso con esa empresa, agregando los testigos que ante su negativa Bustos se molestó mucho, llamándole fuertemente la atención a Parráquez, a quien López dijo haber visto muy afectada, como también a él, pudiendo él mismo apreciar que estaba muy molesto. Los deponentes declararon que no obstante lo

ocurrido ellos sostuvieron su criterio y enviaron rápidamente por vía electrónica su informe a fin de solucionar el problema y a la vez hacer oficial la información.

Al respecto declaró el abogado Nicolás López que Bustos por regla General no intervenía en los informes, más allá de la premura de un proyecto. Sin embargo, en el caso de Río Tranquilo, en el que participaron las empresas Crispi y Grossman, al revisar la carpeta del registro del contratista faltaban documentos por lo cual conversó con Romina Parraguez para que quedara fuera del proceso licitatorio y en ese sentido hizo el informe respectivo. Bustos llamó para persuadirlo que cambiara el informe, *no con coacción, sino con argumentos*. Le indicó que se había comprometido el jefe del Departamento y el ITO Pizarro. Estuvo 20 minutos tratando de convencerlo. Se negó, además el informe se había mandado por correo electrónico y lo consideró improcedente porque era un privilegio frente a otras empresas. Por dos semanas no le dirigió la palabra. En fiscalía el testigo indicó que también Bustos estaba comprometido con la empresa.

NONAGÉSIMO OCTAVO: Que, el cabal entendimiento y comprensión que tenía Bustos también quedó demostrado con lo ocurrido en el proyecto de reposición del Retén Hualañé, demostrado con lo ocurrido en el proyecto de reposición del Retén Hualañé, en que el informe técnico de evaluación de las ofertas es de fecha 3 de octubre de 2011, época en que, conforme a la copia de certificado emitido por Carabineros de Chile, Dirección de Salud de fecha 8 de marzo de 2022 (prueba documental N° 538, de la defensa), Bustos estuvo con licencia médica por accidente de trayecto, desde el 13 de septiembre de 2011 hasta el 4 de marzo de 2012, no obstante lo cual intervino en el trabajo de la Comisión Evaluadora (encargada de analizar a las empresas que postulaban y proponer a aquella que cumpliendo todos los requisitos hubiese obtenido el mayor puntaje), ordenándoles, por intermedio de la jefe de la oficina Control de Proyectos, la capitán de Carabineros Patricia Albornoz Venegas, que debían solicitar aclaración a las empresas oponentes respecto de ciertos ítem que, no obstante haber sido señalados en las bases administrativas de la licitación, ninguna de las proponentes lo había considerado en sus propuestas, razón por la cual la Comisión informaría que debía declararse desierta la licitación de este proyecto. Si bien la presidente de esa instancia le representó a Bustos la irregularidad en que estaba incurriendo, éste insistió y mantuvo la orden, allanándose a ella los miembros de la Comisión, sin perjuicio de dejar constancia

en el Informe Técnico N° 750, de 3 de octubre de 2011, lo que había acontecido (prueba documental de la fiscalía N° 827)

NONAGESIMO NOVENO: Que, en lo que respecta a los cuatro proyectos de marras, el agudo conocimiento de Bustos aparece reflejado en el documento electrónico ordinario, NCU 13887745, de 30 de junio de 2013, día domingo, 12:31 horas, cuyo tenor es el siguiente: *De: Teniente coronel Christian Bustos Morgado, Para: subteniente Luis Parra; informativo Andrea Campusano arquitecto, Francisco Pizarro ingeniero, Isidro Martínez abogado y Nicolás López abogado; Asunto: instrucciones; “Tener presente los plazos, las recepciones de proyectos y definiciones de plazos, reunión con abogados de quienes tengan que declarar. Solicitar comisión de servicio para Andrea y Héctor Salamanca para Coyhaique para martes 9, reagendado el 11. Nicolás debe generar un oficio solicitando formalmente lo que debe especificar Pizarro, dando 5 días hábiles de plazo, ellos saben. Remitir, de acuerdo a lo que está preparando Nicolás con Isidro, observaciones Contraloría, licitar Rozas Bugueño con las modificaciones de bases Generales, especiales y otros que están directamente relacionados con observaciones de Contraloría. Cualquier detalle, me escriben al correo, mensaje y te llamo. Si me acuerdo de algo más llamo”. Firma, Christian Bustos Morgado* (prueba documental N° 24 de la defensa del acusado Pizarro).

A mayor abundamiento, indicar que el citado documento fue exhibido al acusado Pizarro, quien lo reconoció, declarando que en el se da cuenta de una de las formas de comunicación por las cuales Christian Bustos daba órdenes y que algunas eran verbales. A su turno, el acusado Bustos reconoció el documento, señalando que no se acordaba del contexto en que había sido enviado, pero que no había dado instrucciones técnicas.

Las precisas y detalladas instrucciones que contiene el documento transcrito dan cuenta del conocimiento acabado que tenía el acusado Bustos de los proyectos en ejecución. También dan cuenta de esto los documentos electrónicos ordinarios que envió Bustos: 1) NCU 15634039, dirigido por él a Pizarro, de fecha 5 de septiembre de 2013, sobre fiscalización del SEREMI de Salud y de la Dirección del Trabajo decretando la suspensión de las faneas por malas condiciones laborales e higiénicas, lo que motivó la coordinación de una reunión con la SEREMI a la que acudieron, según adición del referido NCU, Christian Bustos Morgado y Andrea

Campusano (salta a la vista que si a esa fecha se había recepcionado la obra sin observaciones no tendrían porqué haber existido faenas en el lugar); y, 2) NCU 17074918, de 30 de octubre de 2013, en el que Bustos informa a Nicolás López, con informativo además a Pizarro, comunicando que *se recibe nota de Alcides Yévenes Sanhueza para el pago de facturas vinculadas con obras de calefacción en los retenes Villa Ortega y Lago Castor que la empresa CGM no ha pagado en la forma pactada, “preparar respuesta”*.

CENTÉSIMO: Que, obra además el documento electrónico ordinario NCU 8749160, de fecha 29 de noviembre de 2012, del siguiente tenor: *De: Christian Bustos Morgado; Para: CPR Francisco Pizarro; informativo; asunto: caldera Villa Ortega: “Se informa a ese mando de repartición que con fecha 10 de noviembre de 2012 el oficial jefe infrascrito, en su calidad de coordinador zonal de proyectos de la zona Aysén, se constituyó en Retén Villa Ortega, dependiente de la 1ª Comisaría de Coyhaique, con la finalidad de fiscalizar las obras del nuevo cuartel, quien en entrevista con el encargado de la obra, Marcerlo Latorre López, señaló que el citado proyecto no tiene contemplada la instalación de una caldera. Se solicita a esa superioridad tener a bien presentar esta situación al Departamento de Cuarteles a fin de que el nuevo cuartel retén Villa Ortega cuente con ese elemento para el bienestar del personal”* (prueba documental N° 13 del acusado Pizarro).

CNETÉSIMO PRIMERO: Que, por otra parte, los deberes funcionarios que respecto de la ejecución de las obras y del ITO traía aparejado el cargo que ostentaba Bustos como jefe de Área, pormerizadamente señaladas en los considerandos que anteceden, respondían al perfil del funcionario que habría de servirlo, es decir, al nivel de formación y capacitación que debía tener. La extensa exposición que hizo el acusado respecto de su trayectoria funcionaria, comenzando por su paso en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, de la cual egresó con la primera antigüedad de su promoción, hasta su arribo al Departamento Cuarteles L1, en el mes de abril del año 2010, como Jefe de Área, confirman, fuera de toda duda, que el acusado Bustos reunía los requisitos que este cargo requería.

A mayor abundamiento, la declaración del propio acusado avala lo que se viene señalando, en cuanto declaró que durante el período en que sirvió el cargo se

ejecutaron más de 300 proyectos de reposición sin que dentro de ese universo se supiera de otros casos como los cuatro proyectos de marras. Este antecedente viene a confirmar que el acusado Bustos sabía y conocía de inicio a fin el estado de los proyectos a su cargo, ya que de lo contrario difícilmente habría podido alcanzar el nivel de eficiencia del cual presumió. Tan alto grado de eficacia corrobora la competencia, claramente superlativa, que tenía Bustos para el desempeño del cargo y desvirtúa la tesis del engaño del que Pizarro lo habría hecho víctima. Con todo, el descubrimiento del delito de fraude de estos cuatro proyectos no obsta a que en los demás no pudiese haberse utilizado el mismo modus operandi que en estos, sino sólo que en esos otros el fraude no llegó a ser descubierto, de haberse cometido.

CÉNTÉSIMO SEGUNDO: Que, los informes falsos que elaboraba el ITO Pizarro no pudieron haber sido fraguados por él, en la medida que antes de estas cuatro licitaciones no habría conocido al contratista que se vería beneficiado con tales falsedades, circunstancia que razonablemente priva de motivo o causa a la hipótesis de favorecimiento, ya fuere a título gratuito u oneroso, esto último en atención a que, como antes se dijo, no se comprobó que hubiere recibido otro beneficio que haberse alojado algunas veces en el hotel Dreams, eventualmente por cuenta del contratista, lo cual no llegó a demostrarse.

Por el contrario, concurriendo en el acusado Bustos al menos un motivo para haber visado los informes falsos de Pizarro, no resulta entonces antojadizo concluir que fue él quien, en concomitancia con el acusado Rojas, fraguó y puso en marcha las acciones fraudulentas que permitieron al contratista, antes del inicio de las obras, percibir los recursos económicos que por contrato le pertenecían, aunque por parcialidades y conforme a los avances de las obras. Lo anterior, además de los pagos que se harían a los falsos inversionistas.

CENTÉSIMO TERCERO: Que, lo dicho hasta ahora demuestra que el entonces Teniente coronel de Carabineros, Christian Bustos Morgado, a la sazón jefe del Área de Gestión y Coordinación de la Ejecución de Proyectos, quebrantó el bien jurídico que la norma penal buscaba proteger, desde que la desviación del fin condujo a la creación de un perjuicio por causa de un incorrecto desempeño de la función pública, al hacer abandono premeditado y doloso de uno de sus principales deberes, como era el de fiscalizar los proyectos adjudicados a la contratista CGM,

infringiendo de paso, de manera grave y delictuosa, el principio probidad que vincula a los poderes públicos con los ciudadanos.

CENTÉSIMO CUARTO: Que, se dijo y probó que las falsedades de Pizarro, autorizadas por Bustos y refrendadas por Flores, tuvieron como destinatarios, primero e ineludiblemente, a la empresa CGM., por ser ésta la adjudicataria de los proyectos, y luego, a los acusados Gutiérrez y Rojas, quienes sin lugar a dudas compartieron la administración de la empresa y tuvieron acceso a los dineros que percibió la empresa por los estados de pago.

CENTÉSIMO QUINTO: Que, el acusado César Rojas Gaete declaró que conocía al Jefe del Departamento Cuarteles L1, Felix Flores, como también al jefe de Área, Christian Bustos Morgado. Al primero, por haber sido su vecino y porque su cónyuge, Purísima Toledo, había sido compañera de él en la Escuela de Suboficiales. Al segundo, por haber trabajado en la Dirección de Compras Públicas, lugar en el cual también se desempeñaba Christian Bustos: *dependíamos ambos de la repartición pero trabajábamos en secciones distintas; pude haber tenido contacto con él en alguna reunión de trabajo, en el cecino o en celebraciones.*

Acerca de este punto declaró y desmintió lo dicho por Rojas, el testigo Jorge Joaquín Muñoz Soto, Coronel de Carabineros, a quien correspondió reemplazar en su cargo al acusado Christian Bustos Morgado. Declaró este testigo que en el año 2007 había trabajado en la Subdirección de Adquisiciones de Carabineros y que en este lugar había conocido a Christian Bustos Morgado, el cual llegó a trabajar en esa repartición como jefe de la Subdirección de Control. Añadió que la Sección de Adquisiciones estaba a cargo de los procesos de licitación y que allí también trabajaba César Rojas Gaete. Agregó también que *entre los Departamentos había un flujo armónico y que Bustos y Rojas tenían comunicación, coincidían en reuniones de trabajo, tomaban decisiones en conjunto, había confianza, conversaban y tenían almuerzos juntos.*

CENTÉSIMO SEXTO: Que, el acusado Rojas declaró que en el desarrollo de los proyectos de reposición de la Tenencia Coyhaique Alto y de los Retenes Villa Ortega, Lago Castor e Isla Huar, como asimismo en los proyectos de Terminación de las Obras de la primera y última unidades policiales, había realizado gestiones en el Departamento Cuarteles L1, tanto para la empresa constructora CGM, a la cual asesoraba, en cuya administración había participado

y de la cual era inversionista, como también para la empresa Grossman S.A., de la cual era miembro del directorio y encargado de gestionar la realización de las obras. Sobre el particular declaró: *En Cuarteles, después que pedí información sobre los proyectos, supe que Flores estaba a cargo; tampoco supe que Bustos estaba a cargo de un área. Al inicio no concurrí a hablar con Bustos, luego hablé con él, fui su subalterno y lo fui a saludar por respeto, pero no me reuní con él durante los procesos de licitación. Estuve con él en la oficina pero no a puerta cerrada. Me junté algunas veces con Bustos en el “Mall”, pero no fueron reuniones, solo coincidimos, nos encontramos.*

CENTÉSIMO SÉPTIMO: Que, por su parte el acusado Christian Bustos declaró que César Rojas no fue su compañero en la Escuela de Suboficiales y que no tenían la misma antigüedad, pero que sí lo conocía, que *lo ubicaba*. No trabajaron juntos, si bien ambos estaban en compras públicas tenían distintos jefes y estaban en diferentes pisos. Lo vio 2 o 3 veces. Luego, se lo encontró en Cuarteles y no tuvo con él reuniones a puerta cerrada. Se le exhibió parte de su declaración de fecha 3 de febrero de 2016 en la que señaló “recuerdo en una primera oportunidad a César Rojas que fue a entrevistarse con Flores y con él sobre licitaciones”.

CENTÉSIMO OCTAVO: Que, sin perjuicio del conocimiento recíproco que Bustos y Rojas reconocieron haber tenido entre sí, de las razones que dieron acerca de porqué se conocían y de la información que Rojas había recabado en el Departamento L1 acerca de las licitaciones, la cual el acusado Bustos negó que hubiere sido por intermedio suyo, empero, contradiciéndose con su declaración anterior de 3 de febrero de 2016, lo cierto es que buscaron minimizar al máximo ese conocimiento mutuo – hecho notorio al interior del Departamento Cuarteles LI, por lo que de poco servía negado – para lo cual negaron haberse reunido en relación con los procesos de licitación durante la fase de tramitación, ya fuese en la oficina de Bustos – al menos a puerta cerrada, como ambos precisaron en sus declaraciones –, ya fuese en otro lugar fuera del Departamento, reconociendo Rojas en este punto que los encuentros en el “Mall” Florida Center sí habían tenido lugar, pero de manera casual.

Cabe señalar que el acusado Rojas reconoció haberse encontrado con Bustos y Pizarro en el Mall, sosteniendo una conversación con el ITO, a la que no se habría quedado Bustos, en la cual le pidió información sobre los procesos de cuarteles, lo que habría sido con posterioridad a la firma del proyecto Villa Ortega, situación que no parece un “encuentro casual” a la luz de todos los antecedentes que se han ventilado en el juicio.

CENTÉSIMO NOVENO: Que, poco importaría la circunstancia que Bustos y Rojas se hubieran conocido desde la época en que fueron alumnos en la Escuela de Suboficiales, en la que coincidieron durante algún tiempo, y que se repitió años más tarde en la Subdirección de Adquisiciones de Carabineros, si no fuera porque Rojas participaba activamente en la empresa CGM y porque Bustos estaba en conocimiento de esta participación, como se colige de los testimonios de algunos funcionarios del Departamento Cuarteles, quienes refirieron al tribunal que Rojas frecuentaba las dependencias del Departamento y que se reunía con Bustos en su oficina. Así lo declaró la testigo Cecilia Cordero, quien señaló haber conocido a César Rojas porque éste había tenido reuniones con Bustos, lo cual le constaba porque su oficina estaba al lado de la oficina de Bustos, añadiendo que eran reuniones a puerta cerrada y bastante largas. En igual sentido declaró la testigo Claudia Zenteno, quien dijo que César Rojas era conocido porque *era* Mayor de Carabineros, que lo había visto varias veces en el Departamento, que en el período en que se *realizaron los procesos de la causa* Rojas iba a visitar al Comandante Bustos, que se reunían en su oficina, algunas veces eran reuniones extensas, otras eran cortas; que se reunían a puerta cerrada por lo que desconocía de qué hablaban, y que habían comentarios de pasillo respecto a la relación que ambos tenían. A su turno, el testigo Omar Gutiérrez Gambaro declaró que en el sumario que le correspondió instruir, Pizarro había declarado que Bustos y Rojas se reunían muchas veces a tomar café en un Mall. Por último, el testigo Francisco Socías declaró que al acusado Rojas lo había conocido en Carabineros cuando éste trabajaba en la institución, y que en el Departamento de Cuarteles lo vio en la oficina de Christian Bustos y también en la sala de reuniones.

CENTÉSIMO DÉCIMO: Que, el conocimiento mutuo y las reuniones que mantuvieron al interior del Departamento Cuarteles antes de las licitaciones, conforme expresó Rojas, y después de ellas, como declararon las testigos presenciales Zenteno y Cordero, entre otros, constituyen indicios graves de que los fraudes de marras fueron el resultado de la suma premeditada que hicieron los acusados de tales circunstancias, primero, fraguando el *modus operandi* delictivo, y segundo, poniéndolo en práctica, en la forma que se ha venido señalando, resultando en cualquier caso irrelevante cuál de los dos propuso al otro la perpetración de los delitos, puesto que ambos acusados tomaron parte en su ejecución de manera inmediata y directa.

Y también constituyen indicios del acuerdo entre Rojas y Bustos (además del Jefe del Departamento Cuarteles L1) para contar con dineros para iniciar y avanzar en las obras, los actos que ambos ejecutaron tendientes a evitar que dicha situación saliera a la luz pública. Bustos, instando a una recepción provisoria de Villa Ortega sin observaciones, en circunstancia que sabía que las obras no se habían concluido y que incluso había faenas trabajando con posterioridad a dicho acto; entregando su opinión como evaluador en el proceso de calificación del año 2013 del ITO Pizarro con “merecimiento a aumento de grado”, en circunstancia que era el ITO quien informaba que la obra estaba en condiciones de ser recibida, pero que, en el caso de Villa Ortega, al constituirse la Comisión, de la cuál formó parte, verificó que no estaba terminada y que las otras obras presentaban atraso. Acerca de este punto, resultó relevante la declaración del testigo Isidro Martinez (miembro integrante de la Comisión de Recepción de Villa Ortega), el cual atestiguó, como testigo presencial del hecho, que Bustos estaba muy molesto con la situación, lo que le llamó la atención porque era muy tranquilo. Añadió que de regreso a Santiago *se siguió un procedimiento normal y no se removió al ITO* – más aún, consta de la prueba, que se designó nuevamente a Pizarro como ITO en los contratos de terminación de las obras –, gestionándose posteriormente una “Comisión de Hermosamiento”. Acerca de esa Comisión, quedó establecido que su verdadera finalidad era terminar las partidas no ejecutadas en el proyecto Villa Ortega, y que su financiamiento se hizo con cargo a fondos y materiales del Fisco. De lo anterior Bustos estaba en pleno conocimiento, como dan cuenta los NCU 17194904, de 5 de noviembre de 2013, y NCU 17210650, de 8 de noviembre de 2013. Añadir a estos antecedentes que el acusado Bustos efectuó actuaciones propias de su cargo para terminar las obras mediante trato directo con montos de dinero que eran insuficientes para cumplir ese fin, para lo cual se levantaron itemizados falsos a fin de poder cuadrar con los dineros disponibles, dejando fuera de ellos los trabajos inconclusos de las caballerizas y la casa anexa. En este punto manifestó la ingeniera civil Romina Parraguez que cuando concurrieron a recepcionar Isla Huar junto con Christian Bustos, las obras no estaban terminadas, se encontraban abandonadas y no se hallaba *in situ* el representante legal de la empresa, motivo por el cual se rechazó la recepción de la obra, *diciendo Bustos que había que buscar una solución rápida, un trato directo y utilizar los materiales que habían quedado en el lugar. Luego, estando en la oficina, dijo que ya tenía la empresa que podía ejecutar el trabajo, que se llamaba Grossman. Esto lo dijo antes de enviar las cartas de invitación.*

Respecto de Rojas, una vez que terminó su relación con la empresa CGM por los múltiples conflictos que se generaron en la administración, consiguió otra empresa constructora, Grossman S.A., la cual estaba *sin movimiento*, reuniéndose a almorzar con el dueño de la empresa, Carlos Grossman, y con el jefe de Departamento Cuarteles, Félix Flores, durante el cual se conversó acerca del trato directo, después de lo cual se obtuvo una rápida inscripción de la empresa en el Registro de Carabineros (declaró el abogado Isidro Martínez que tal celeridad no era habitual, tampoco que Bustos y Flores recopilaban datos para la inscripción de una empresa, ni tampoco que una empresa desconocida fuera elegida para “*apagar el incendio*”) y luego de ello la adjudicación de los tratos directos antes referidos, todo ello con pleno conocimiento de Rojas en orden a que los itemizados no se correspondían con el estado de las obras, como le informó oportunamente Ignacio Labra, al cual había comisionado para viajar y verificar el estado en que se encontraban las obras, conforme testificó el propio Labra). Así las cosas, resultó acertada la expresión que utilizó el dueño de la empresa, Carlos Grossman, cuando afirmó que, *mirándolo hoy, sí había problemas, algo tenía que construirse, “había que tapar” el problema anterior*.

CENTÉSIMO DÉCIMO PRIMERO: Perjuicio. Que, la circunstancia de que los proyectos de reposición de las cuatro unidades policiales no hubieren llegado a término, ni conforme a lo pactado ni tampoco fuera de lo convenido, produjo perjuicios al patrimonio fiscal como daño emergente.

Al respecto, tratándose del proyecto Retén Villa Ortega, este perjuicio se tradujo en los gastos que la Comisión de terminación de los trabajos inconclusos generó para el erario del Estado, los que consistieron en la compra de pasajes aéreos para el traslado de personal institucional, indebidamente comisionado para ese fin, en el pago de viáticos y en el uso de materiales que habían sido adquiridos con dineros del Fisco. El monto de tales perjuicios ascendió a \$7.663.573, como antes se explicó.

CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO: Que, tratándose de los proyectos Isla Huar y Coyhaique Alto, los perjuicios que se generaron para el Fisco estuvieron dados por los pagos que hizo el mandante, Carabineros de Chile, a partir de informes técnicos falsos elaborados por el ITO Pizarro y luego avalados por el jefe de Área, Cristian Bustos Morgado, este último a sabiendas de su falsedad, toda vez que

había sido él quien ordenó al ITO adulterar sus informes mediante la inclusión de trabajos que no habían sido ejecutados.

CENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO: Que, los proyectos no fueron terminados por la empresa CGM ni tampoco por la empresa constructora Grossman S.A, adjudicataria para la terminación de las obras bajo la modalidad de Trato Directo.

En el caso de la primera de esas empresas, y sin perjuicio de lo que haya sido la conducción administrativa de la empresa, el incumplimiento se debió al hecho de que una parte relevante del presupuesto no se aplicó a la finalidad que perseguían los contratos de adjudicación.

Tratándose de la empresa constructora Grossman S.A., el incumplimiento se debió a la insuficiencia de los recursos asignados para la terminación de los cuarteles Isla Huar y Coyhaique Alto, cuyos itemizados no se condecían con la realidad de lo que faltaba por construir, y habían sido acomodados al presupuesto sobrante, en lo que, como se dijo, participaron también los funcionarios públicos que formaban parte de la institución policial, Francisco Pizarro Dasso y Christian Bustos Morgado.

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTO: Que, lo ocurrido con la empresa Grossman S.A., quedó demostrado de manera fehaciente con los siguientes medios de prueba:

1) documento electrónico ordinario NCU 19532724 y NCU 19523765, de 3 de febrero de 2014 en los que consta que el acusado Pizarro, dando respuesta a lo instruido por la jefatura del Departamento Cuarteles (*“en relación al proyecto Tenencia Coyhaique Alto, usted procederá a ratificar por escrito lo señalado en reunión sostenida el día de hoy en la oficina del oficial superior que suscribe, en donde manifestó que el itemizado elaborado por usted para dicha obra y para el trato directo, no se ajustaba a la realidad, indicando pormenores sobre el particular y quién le dispuso que así lo hiciera”*), informó: *“referente a itemizado elaborado para realizar trato directo por concepto de término de tenencia Coyhaique Alto, se informa que este fue confeccionado en un primera instancia en base a las obras que estaban restaban por ejecutar; el oficial jefe de área de coordinación de proyectos L1, de ese entonces, el Teniente coronel de Carabineros, Christian*

Bustos Morgado, me ordenó confeccionar un nuevo itemizado relacionado con los montos retenidos a la empresa constructora CGM Ltda., por concepto de estado de pago, retenciones y addendum no ejecutado; según me fue comunicado por el jefe de área de coordinación de proyectos L1 de ese entonces, al mando del Departamento, efectuó un compromiso con la empresa constructora Grossman SA, en particular con su representante, para estos efectos, César Rojas Gaete con el finde realizar los tratos directos necesarios para terminar las obras que dejó incompletas la la empresa constructora CGM Ltda, en el sur de Chile;

2) Oficio N° 9, de fecha 22 de enero de 2014, de asesoría jurídica L1 a jefe subrogante Departamento Cuarteles L1, referencia: reunión de 22 de enero de 2014, entre Departamento Cuarteles e Ignacio Labra en representación de la empresa Grossman, en relación al proyecto Retén Isla Huar, en la cual participaron el Coronel Edgardo Osses, jefe subrogante del Departamento, Ignacio Labra, Marcos Pomar (ITO de la obra), Héctor Barría y Nicolás López, abogados de Carabineros. En este documento se dejó constancia que Ignacio Labra, en representación de la empresa Grossman, se apersonó en el Departamento diciendo que no le era posible terminar los trabajos ya que los itemizados no correspondían a los trabajos inconclusos, por lo que el dinero asignado para estos efectos y el plazo otorgado para su ejecución eran insuficientes;

3) Informe técnico N°154, de fecha, 21 de febrero de 2014, en que se informa visita a terreno Isla Huar suscrito por el ITO Marcos Pomar Cisterna: se deja constancia que el día 13 de febrero de 2014, junto al arquitecto Francisco Socías, dibujante Jorge Santis, y el mayor Jorge Muñoz Soto, se constituyeron en terreno y se corroboró un 17,5% de avance de la obra por Trato Directo, a 18 días del término del plazo de ejecución, evidenciándose un evidente atraso. El porcentaje que señala este informe fue reevaluado en un informe posterior, N° 201 de 10 de marzo de 2014, en el cual se da respuesta a las consultas de la empresa Grossman, en el cual se consigna que revisada la obra con todos los itemizados se determinó un avance de 15,5%, equivalente a \$2.609.214 (prueba documental N° 1.310 de la fiscalía);

CENTÉSIMO DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto al proyecto Lago Castor, el atraso que exhibía era de una envergadura tal que no dio lugar a que se

gestionara su terminación bajo la modalidad de Trato Directo, como se había hecho con Isla Huar y Coyhaique Alto.

Acerca del atraso de estas obras, declaró el testigo Ignacio Labra, que *había visitado las obras a fin de evaluar la posibilidad de abordar la terminación, lo que no le pareció una buena alternativa de trabajo, que era “un cacho”, señalando, además, que se lo había manifestado a Rojas, quien le señaló que era una posibilidad para entrar a Carabineros. Añadió el testigo que los montos asignados eran bajos y que según su visita los itemizados no correspondían con lo que debía hacerse, precisando que los montos no alcanzaban para cubrir las obras y tampoco el plazo. Respecto de los itemizados, el testigo agregó se los había entregado César Rojas, pero que imaginaba que los había confeccionado Carabineros.*

En el mismo sentido declaró el testigo Jorge Muñoz Soto, quien como jefe del Área de Gestión y Coordinación de la Ejecución de Proyectos visitó el retén Lago Castor el día 10 de febrero de 2014, refiriendo: *la situación era desoladora, no habían movimientos ni trabajos, las obras estaban paralizadas, había desgaste de los materiales por las inclemencias del tiempo, lo más avanzado era la casa anexa donde se guarecían los maestros; respecto de las caballadas se había cursado el 100% de los pagos y sólo estaba la enfierradura del radier, y en el cuartel los paneles estaban muy dañados; había materiales tales como paneles SIP y baldosas eSPArcidas por el lugar sin protección; otros materiales estaban en un container; la idea era lograr un proyecto de normalización, que fue muy difícil y que aún hay tentativas.* Lo dicho por el testigo pudo apreciarlo el tribunal en las fotografías que se le exhibieron.

CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO: Que, la situación que se viene describiendo produjo perjuicios al erario fiscal, los que fueron analizados formal y oficialmente por dos entidades diferentes, por un parte, la Contraloría General de la República, y por otra, una Comisión Evaluadora que Carabineros dispuso para estos efectos.

En el caso de la Contraloría, la información de los perjuicios, su análisis y la cuantía de éstos se encuentran plasmados en el anexo N° 4 del Informe Final de la Investigación Especial N° 283/2015, de 16 de diciembre de 2015, de la División de Infraestructura, Regulación, Subdivisión de la Contraloría General de la

República (prueba documental N° 115 de la fiscalía). Acerca del contenido del citado anexo declaró el testigo Henry Hanstch Salinas, abogado Jefe de la Unidad de Sumarios., quien refirió que se trataba de un análisis muy específico que realiza el equipo de fiscalización de la Contraloría, en el cual se establecen y detallan los montos de cada partida, como también aquella que fueron pagadas pero no ejecutadas. Habiendo la defensa impugnado este informe por no constar quién o quienes lo habían elaborado y siendo efectivo el fundamento de la objeción, toda vez que el citado testigo al ser consultado acerca de la identidad de las personas que lo elaboraron respondió no saberlo, sumado al hecho de que el documento carece de firmas ni pie de firmas, el tribunal resolvió acoger la objeción y restarle mérito probatorio a este documento, desestimándolo como fuente de información fidedigna para la determinación de los perjuicios.

CENTÉSIMO DÉCIMO SÉPTIMO: Que, tratándose ahora de lo informado por la Comisión Evaluadora de Carabineros, esta se formó por instrucciones del entonces Coronel Óscar Águila Galdamez, a raíz de denuncias de irregularidades en la construcción de cuarteles en la zona sur del país. La Comisión estuvo constituida por el jefe Área Coordinación Ejecución de Proyectos, Mayor de Carabineros, Jorge Muñoz Soto, como ministro de fe, por el arquitecto Juan Francisco Socías Vargas, el ingeniero en construcción Marcos Pomar Cisterna y el dibujante Jorge Santis Rebolledo, quienes se constituyeron en terreno en el mes de febrero de 2014, constatando in situ el estado en que se encontraban los proyectos de reposición Lago Castor, Coyhaique Alto e Isla Huar. Lo que observaron los miembros de la Comisión y las conclusiones a que arribaron dio lugar a tres informes, uno por cada cuartel, signados con los números 125, 126 y 127, todos de fecha 17 de febrero de 2014.

CENTÉSIMO DÉCIMO OCTAVO: Que, habiéndose desestimado en su oportunidad la objeción de la defensa del acusado Bustos, en cuanto a no valorar los informes técnicos recién mencionados, corresponde ahora referirse a su mérito probatorio.

Al respecto, de la sola circunstancia que los informes y sus informantes no constituyan pericias ni peritos, no obsta a restarles mérito por ese solo motivo. La libertad de prueba se impone no sólo al tribunal sino también a los intervinientes. En la especie, se trata de personas que fueron comisionadas para constituirse en

tres distintos cuarteles a fin de que verificaran el estado en que se encontraban las obras para luego contrastar esa información con la oficial que había hasta ese momento y posteriormente valorizar en dinero las diferencias que pudieren existir, determinando, además, si se habrían efectuado pagos indebidos por oconcepto de obras no ejecutadas. En cumplimiento de este cometido, se constituyeron, observaron, evaluaron e informaron lo que se les pedía, originándose de esa manera los informes en cuestión.

Cabe consignar que la designación de la Comisión Evaluadora no fue sino el cumplimiento del deber de fiscalización que se imponía a la jefatura del Departamento, de manera que los informes técnicos cuestionados no adolecen de ilicitud en cuanto a su origen, ni tampoco en cuanto a su utilización como medio de prueba en sede penal ya que, por un lado, no era necesario que se cumplieran las formas procesales que alegó la defensa debían de cumplirse para su ponderación, argumento del cual el tribunal ya se hizo cargo anteriormente, y de otro, porque los medios de prueba propiamente tal, concerniente a los perjuicios que nos ocupan, vienen a ser, en todo caso, las declaraciones de quienes dieron cumplimiento al cometido, cuyas observaciones y conclusiones fueron registradas en los citados informes técnicos, sirviendo estos a los acusados, aunque casual e impensadamente, como medio de contrastar los dichos de los informantes. Sin la materialidad de los informes la objeción vendría a ser la falta de registro de diligencias de investigación.

Por otro lado, los testimonios de los miembros de esta Comisión Evaluadora fueron valorados sólo como testigos conocedores, algunos muy conocedores, de una determinada materia o área, especialmente en lo que respecta a los proyectos de reposición de cuarteles que en aquella época llevaba el Departamento Cuarteles. En la especie, a excepción del testigo Jorge Muñoz Soto, quien actuó como ministro de fe de la Comisión, los demás miembros fueron convocados en consideración a su formación “técnica” (en palabras del testigo Francisco Socías, arquitecto), dos de los cuales concurren al tribunal a prestar declaración. Cabe destacar el conocimiento profundo que el testigo Jorge Santis (constructor civil que se había desempeñado en las áreas de diseño y de revisión de proyectos) dijo haber tenido respecto a lo que se les había pedido evaluar e informar, señalando a estos efectos que *había participado en el diseño de los cuarteles por lo que los conocía perfectamente y por lo mismo sabía qué partidas correspondían en cada*

etapa de ejecución de las obras, lo que ayudó a ilustrar y aclarar a los demás miembros de la Comisión. Resulta entonces coherente lo aseverado por el testigo Socías respecto a la metodología que se había seguido para determinar el perjuicio, explicando para ello que se había trabajado sobre una planilla excell en la que se registraban los avances informados para cada estado de pago y con documentos relacionados tanto con la constructora CGM como con la empresa Grossman, verificando de esa forma que no correspondían con lo que aparecía informado.

Los tres testigos que se vienen mencionando, Muñoz, Santis y Socías, reconocieron los informes técnicos y sus anexos (“análisis financiero”). En el caso de Socías, éste explicó de qué manera estaba configurada la planilla de análisis, a saber: columnas de estados de pago, tipo de construcción, monto aprobado por el ITO, monto determinado por la Comisión febrero 2014, diferencia Comisión versus ITO, total aprobado ITO, total Comisión febrero 2014, total diferencia Comisión / ITO. Aclaró que a los totales informados se dedujo la retención de 19 millones y fracción, por lo que el perjuicio se valorizó en alrededor de 16 millones de pesos. Incluso se le exhibió el itemizado del estado de pago N° 7 de Isla Huar, Cohyaique Alto y Lago Castor dando ejemplos de las partidas que el ITO informó ejecutadas en un 100%, pero que lo estaban, explicando cómo pudo entonces establecerse el valor de lo pagado en exceso.

CENTÉSIMO DÉCIMO NOVENO: Que, consecuencia de lo que se lleva dicho es que los informantes y sus informes constituyeron prueba admisible y valorable que permitió tener por cierto, y por las razones que en cada caso se señalan en los propios informes, la ocurrencia de perjuicios para el Fisco y los montos a que en cada caso ascendieron, a saber:

1°) Retén Lago Castor: Informe técnico N° 125, de 17 de febrero de 2014. Informe visita a terreno del retén Lago Castor, efectuada el día 10 de febrero de 2014, por el mayor Jorge Muñoz Soto, jefe Área Coordinación Ejecución de Proyectos, arquitecto Juan Francisco Socías Vargas, ingeniero en construcción Marcos Pomar Cisterna y dibujante Jorge Santis Rebolledo. Se informó: a) adjudicataria, constructora CGM; monto original asignado \$389.157.350; plazo de ejecución 200 días corridos desde la entrega del terreno el 12 de diciembre de 2012; b) análisis técnico de las obras (cuartel, casa anexa y caballadas): se hicieron una serie de

reparos a la construcción, concluyendo: b.1) respecto del retén, debe considerarse el desarme de la totalidad de la estructura de paneles SIP, incluyendo muros soportantes y entrepiso, y el retiro del radier existente; b.2) respecto de la casa anexa, es factible continuar con el proceso de terminación, b.3) en cuanto a las caballadas, existe un escaso avance en la ejecución de la obra y lo que hay no es recuperable; c) análisis financiero con el detalle de los estado de pagos aprobados por el ITO en comparación con el estado de avance efectivo y comprobado en terreno por la Comisión; se hizo un desglose por cada estado de pago, considerando lo que aprobó el ITO respecto del cuartel, vivienda anexa, y caballadas, estableciendo el monto total pagado. La Comisión hizo un estimado de los valores de acuerdo al avance real y ejecutado existente en el terreno, estableciendo las diferencias de los valores pagados y el que debía pagarse. De la tabla que para estos efectos se confeccionó se pudo observar que desde el 1er estado de pago éstos fueron hechos en exceso. Hubo ocho estados de pago, facturándose un total de \$320.814.560, lo que implica un pago en exceso a la empresa CGM de \$166.605.221, conforme a la tabla que confeccionó la Comisión, en la cual se valorizó sólo lo realmente ejecutado. Se hizo un inventario de materiales acopiados en el terreno, los que habían sido adquiridos por la empresa CGM. De acuerdo con el listado de especies retiradas del retén Lago Castor por la empresa Grossman, consta que con fecha 14 de noviembre de 2013 el acusado Pizarro retiró materiales con destino a Villa Ortega, y que en varias oportunidades, en los meses de diciembre de 2013, y enero y febrero de 2014, Ignacio Labra y Eduardo Curiqueo retiraron materiales con destino a Coyhaique Alto.

2º) Tenencia Coyhaique Alto: Informe técnico N° 126, de fecha 17 de febrero de 2014. Informe visita a terreno de la tenencia Coyhaique Alto, el día 11 de febrero de 2014, realizada por el mayor Jorge Muñoz Soto, jefe Área Coordinación Ejecución de Proyectos, arquitecto Juan Francisco Socías Vargas, ingeniero en construcción Marcos Pomar Cisterna y dibujante Jorge Santis Rebolledo. Se informó: a) Proyecto original: adjudicado a la empresa CGM por la cantidad de \$389.997.322, plazo de ejecución 220 días corridos desde fecha entrega terreno, el 13 de diciembre de 2012. Término anticipado del contrato, se notifica al jefe de obras, Eduardo Curiqueo Figueroa, que debe César los trabajos; b) Trato Directo con empresa Grossman S.A. para la terminación de las obras inconclusas de CGM, monto asignado \$83.340.915, plazo de jecución 70 días corridos a contar entrega de terreno el 13 de diciembre 2012 (NOTA: por favor ayúdenme a confirmar esta fecha); c) Análisis Técnico: existen diferencias entre los enunciados

del ítemizado del Trato Directo y lo que verdaderamente existe en la realidad, a modo de ejemplo, reemplazo fragüe porcelanato, en circunstancia que la partida porcelanato no está instalada; limpieza, ajuste y reemplazo de quincallería dañadas, en circunstancia que no se encuentran instalada las puertas; reemplazo de espejos dañados, en circunstancia que no existe el revestimiento cerámico de muros y menos el espejo a reemplazar. En cuanto a la casa anexa, según el ítemizado para Trato Directo no se consideró la ejecución o terminación de ésta, pese a lo cual existen significativos avances y esfuerzo por parte de la empresa para continuar trabajos en este inmueble en circunstancia que los trabajos debían cifrarse sólo en el cuartel; d) Análisis Financiero: se hizo un desglose por cada estado de pago, considerando lo que aprobó el ITO respecto del cuartel, vivienda anexa, y caballadas, estableciéndose el monto total pagado. La Comisión hizo un estimado de los valores de acuerdo al avance real y ejecutado existente en el terreno, estableciendo las diferencias de los valores pagados y el que debía pagarse. De la tabla realizada se pudo observar que desde el 1er estado de pago éstos fueron hechos en exceso. Hubo ocho estados de pago, facturándose un total de \$327.495.690, lo que implica, de acuerdo a la tabla confeccionada, en la cual se valorizó los trabajos realmente ejecutados, un pago en exceso a la empresa CGM de \$126.296.000. En el trato directo el estado de avance al día de poner término al contrato era de 8,84%, equivalente a \$7.367.450.

3°) Retén Isla Huar: Informe técnico N° 127, de 17 de febrero de 2014. Informe visita a terreno del retén Isla Huar realizada el día 13 de febrero de 2014, efectuada por el mayor de Carabineros, Jorge Muñoz Soto, jefe Área Coordinación Ejecución de Proyectos, arquitecto Juan Francisco Socías Vargas, ingeniero en construcción Marcos Pomar Cisterna y dibujante Jorge Santis Rebolledo. Se informó: a) Proyecto original: adjudicado a la empresa CGM por la cantidad de \$373.389.992, plazo de ejecución 160 días corridos desde fecha entrega terreno, el 18 de enero de 2013; b) Trato Directo con empresa Grossman S.A. para la terminación de las obras inconclusas de CGM, monto asignado \$19.130.505, plazo de de ejecución 50 días corridos a contar entrega de terreno el 6 de diciembre de 2013; c) análisis técnico: existen diferencias entre los enunciados del ítemizado del Trato Directo y lo que verdaderamente existe en la realidad, a modo de ejemplo, limpieza de sumideros, en circunstancia que se observó que la partida no se encuentra instalada; no se verifica la construcción del pozo absorbente y drenes; ajustes y reemplazo de puertas dañadas de muebles en obra, en circunstancia que no se encuentra el mobiliario de cocina, ni módulos aéreos, ni

muebles de base de cocina; limpieza y regulación sistema sanitario, en circunstancia que ni siquiera existen las tuberías del sistema sanitario exterior. En cuanto a la casa anexa, el itemizado para Trato Directo no consideró la ejecución o terminación de la casa anexa, pero se encuentran pendientes algunas terminaciones e instalaciones sanitarias y eléctricas; existen significativos avances, en circunstancia que los trabajos de debían cifrarse sólo en el cuartel. Esta misma situación se da en relación con las caballadas; d) análisis financiero: se hizo un desglose por cada estado de pago considerando lo que aprobó el ITO respecto del cuartel, vivienda anexa y caballadas, estableciéndose el monto total pagado. La Comisión hizo un estimado de los valores de acuerdo al avance real y ejecutado existente en el terreno, estableciendo las diferencias entre los valores pagados y los que debían pagarse. De la tabla realizada se observa que desde el 1er estado de pago hubo pagos en exceso. Hubo ocho estados de pago, facturándose un total de \$384.278.804, lo que implica, de acuerdo a la tabla confeccionada, que hubo un pago en exceso a la empresa CGM de \$159.633.794. En el Trato Directo el estado de avance, al día en que se puso término al contrato, era de 17,75%, equivalente a \$3.396.344.

DERECHO APLICABLE Y RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO: Fraude al Fisco. Que, lo dicho hasta ahora constituyen las razones que tuvo en consideración el tribunal para dar por establecidos los hechos reseñados en el veredicto, razones de hecho a las cuales deben ahora sumarse las consideraciones de derecho que llevaron a condenar a los acusados Pizarro, Gutiérrez, Rojas y Bustos Morgado, como autores de cuatro delitos continuados y reiterados de fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal.

Al respecto, comenzar señalando que el Título V, Libro II del Código Penal, se intitula “Fraudes y exacciones ilegales”, como. En el párrafo 6º de este Título se halla el artículo 239 del Código penal, en el que se regula de manera específica el delito de fraude al Fisco. A la data de los hechos, la norma citada prescribía: *El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de....”.*

Del tenor del artículo se desprende que la existencia del delito requiere un objeto material, un sujeto activo, una conducta típica y un elemento subjetivo, o en otras palabras, perjuicio, sujeto calificado, conducta activa o pasiva de parte del sujeto y una voluntad expresamente manifestada.

En lo que respecta al objeto material, el legislador no ha señalado sobre qué ha de recaer materialmente la acción delictiva, por lo que su connotación es excesivamente amplia. A este respecto la doctrina concluye: Primero: que la *“conducta típica...no necesita recaer sobre cosas determinadas, pudiendo incluso recaer exclusivamente en el pasivo de dicho patrimonio”* (HERNÁNDEZ B., Héctor., “La administración desleal”, pág. 235, citado por BALMACEDA H., G., “La malversación de caudales públicos y el fraude al Fisco en el Derecho penal chileno”, Revista de Derecho Universidad de San Sebastián, 20/2014, pág. 112); y, Segundo: que *“no se restringe el catálogo de acciones con las cuales se puede llevar a cabo”* el delito de fraude (VIDELA B., L.G., “Aproximación a la Doctrina y Jurisprudencia chilena sobre delitos funcionarios. Malversación de caudales públicos y Fraude al Fisco”, Revista Derecho 2009 YK., 19-05-2010, pág. 96).

Vinculado con lo anterior se halla la exigencia del *perjuicio, ya sea como pérdida directa o como privación de un lucro legítimo, para lo cual es necesario que concurren disposiciones patrimoniales contrarias al interés del Estado, al cual el agente está llamado a preservar en razón de sus deberes funcionarios* (HERNÁNDEZ, Héctor, “La administración desleal en el derecho penal chileno”, en *Revista de Derecho PUCV* XXVI, (2005), p. 238, ob. cit. OSANDON WIDOW, M., “Malversación y fraude al Fisco”, en *Revista de Derecho y ciencias penales*”, Vol. I-2002, pág.163 A 180).

En cuanto al sujeto activo del delito, éste ha de ser un *empleado público* – aquella persona que desempeña un cargo o función pública (artículo 260 del Código Penal) o, lo que es igual, quien se desempeña o participa en el ejercicio de la función pública (VIDELA B., L.G., “Aproximación a la Doctrina y Jurisprudencia chilena sobre delitos funcionarios. Malversación de caudales públicos y Fraude al Fisco”, Revista Derecho 2009 YK., 19-05-2010, pág. 62) – y que intervenga en operaciones *por razón de su cargo*, y no de manera casual, ilegal o antirreglamentaria, sino que precisamente en razón de sus *funciones*.

Concerniente a las expresiones “función” y “operaciones”, el Código penal no proporciona un concepto que precise qué debe entenderse por “función” *pública*, sin perjuicio de lo cual se cuenta con la definición que entrega el artículo 1º de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Decreto Supremo N° 1879, de 29 de octubre de 1998, Diario Oficial de 2 de febrero de 1999): *función pública* es “Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de los niveles jerárquicos”.

En lo tocante a las “operaciones”, éstas deberán consistir en “*negociaciones o contratos provistos de un contenido económico que se celebren, desarrollen o ejecuten entre un particular y un ente público* (GUZMÁN D., J.L. “El tipo”, citado por BALMACEDA, pág. 235).

Con todo, *el punto de partida debe ser la aptitud o capacidad del funcionario público para lesionar el bien jurídico en cada caso concreto*. Uno de los elementos esenciales para delimitar en qué consiste la participación en el ejercicio de la función pública debe ser un criterio de índole material o, lo que es lo mismo, de *capacidad de afectar* al bien jurídico protegido”, “(...) debe actuarse en el ámbito del ejercicio de una función, aunque no sea exactamente el titular de la misma”, “la actividad profesional del sujeto debe desenvolverse en el ámbito de una función, por ser esto lo que lo deja en situación de lesionar el bien jurídico” (RODRÍGUEZ, L.; OSSANDÓN, M., “*Delitos contra la Función Pública*”, Editorial Jurídica de Chile, 2008, Op. Cit. pp 125-126, citando a REBOLLO VARGAS).

En relación con la conducta típica, esta admite dos modalidades de comisión: una activa y la otra activa-pasiva, *defraudar y consentir en que se defraude*.

Acerca del elemento subjetivo del delito, se requiere que esté como dolo directo presente en ambas modalidades comisivas.

Finalmente, hay que precisar que el *ánimo de lucro* no forma parte del elemento volitivo puesto que el tipo penal no lo exige.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO: Bien jurídico y sujeto activo. Que, resulta determinante el esclarecimiento del bien jurídico que busca proteger el tipo penal

del artículo 239, tanto en lo que respecta a la participación punible, como también en cuanto a la pena.

Al respecto, se advierte que en el Título V del Libro Segundo del Código se verifican dos situaciones: una, que los delitos que allí se tipifican coinciden en cuanto a la condición del sujeto activo (funcionario público), y otra, que en el citado Título no se incluyen todos los delitos en los que el sujeto activo es un funcionario o empleado público. Sobre el particular Etcheberry ha señalado que, “... *el legislador debe haber tenido en consideración algún bien jurídico particular dentro del Título V, ya que encontramos en varios otros títulos del Código diversas infracciones que también son cometidas por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, y que no se reglamentan en este título. En tal sentido, el epígrafe del mismo no resulta exacto y peca por defecto*” (ETCHEBERRY, Alfredo, *Derecho Penal Parte Especial*, t. IV, 3ª edición, (Santiago, 1998), p. 203; y, similar, BUNSTER BRICEÑO, Álvaro, *La malversación de caudales públicos*, (Santiago, 1948), p. 9, citados por OSSANDÓN WIDOW, M. Magdalena, en *Malversación y fraude al Fisco*, VIII Jornadas Chilenas de Ciencias Penales, Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, Vol. I - 2012, página 164).

No obstante, la existencia del perjuicio que refiere el artículo 239 denota un evidente carácter patrimonial, lo que hace necesario considerar al patrimonio como posible o eventual bien jurídico, sea en forma aislada o juntamente con otro.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al común denominador que el delito de fraude al Fisco comparte con los demás ilícitos del Título V (empleado público y/o funcionario público), resulta coherente pensar que el bien jurídico común a todos estos delitos funcionarios es la “infracción a un *deber personal de corrección y probidad* que pesa sobre quienes ejercen un cometido de especial relevancia social, como lo es la función pública”, (...) “deber que consistiría en observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo, respetando la preeminencia del interés General sobre el particular”. Sin embargo, como no es posible considerar la lealtad como un bien jurídico penalmente tutelable, atento por un lado el riesgo que importa sancionar como delito *una mera reprobación moral de la conducta*, y por otro, la falta de “correlato en la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía”, ha de entenderse entonces que ese deber de

corrección y probidad deviene en *“la sumisión del agente público a la ley en el cumplimiento de objetivos de interés General.*

En todo caso, ni “el vínculo jurídico existente entre la Administración y las personas que de ella dependen”, ni *el prestigio, la confianza y/o la conservación del respeto por la autoridad de la Administración* constituyen bienes jurídicos en sí mismos, en la medida que lo determinante es el ejercicio de la función administrativa, es decir, “el propio desempeño de la *función pública*, por ser esto lo que puede llegar a afectar - en términos de perjuicio o beneficio – a la ciudadanía” (OSSANDÓN). Lo anterior, no obstante que ese vínculo y sus notas distintivas se encuentren naturalmente incorporados en tal desempeño, tanto para explicar el origen del sometimiento, cuanto para ilustrar algunas de las consecuencias que de él emanan.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO: Que, se verifica entonces que el *“correcto desempeño de la función pública” será lo que permita explicar el sentido de protección de todas las figuras del Título V del Libro II CP*”, eso sí, entendido en referencia a la “función de prestación a los ciudadanos y al cumplimiento de los criterios objetivos correspondientes a los fines del Estado social y democrático de Derecho, que se concreta en los principios de *objetividad, imparcialidad y eficacia* que informan la actuación de las Administraciones públicas. (OSSANDÓN). Los artículos 7°, inciso primero, y 1°, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, corroboran lo señalado.

Agregar a lo anterior que a la base de estos delitos se encuentra la probidad administrativa, la que *obliga a los funcionarios públicos a comportarse de un determinado modo, por el hecho de revestir un particular rol social al que están ligados una serie de cometidos y expectativas.*

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO: Que, la reafirmación y vigencia de la norma penal en el delito de farude se cumplirá con la acción u omisión típicas del destinatario directo de la norma, como también con la conducta de todo aquel cuya intervención signifique la infracción del deber de resguardo que, como bien jurídico, el legislador busca proteger. Al respecto, la doctrina ha señalado que “si han participado varias personas y la intervención de cada una ha configurado de algún modo la conducta típica, puede afirmarse que el hecho típico es de todos”

(OSSANDÓN WIDOW, M. Magdalena, *Malversación y fraude al Fisco*, VIII Jornadas Chilenas de Ciencias Penales, Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, Vol. I - 2012, página 171).

Ahora bien, desde un punto de vista ontológico, resulta innegable que quienes no detentan la calidad de empleado público (*extraneus*) pueden igualmente intervenir en la ejecución del delito tomando parte activa en su ejecución. Esta intervención en la infracción del *intraneus* será, sin embargo, en calidad de partícipe (en sentido amplio), en consideración a la colaboración que hubieren prestado al autor, en sentido estricto, de la infracción del deber del funcionario.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO: Que, lo anterior conduce a la cuestión concerniente a lo que impropriamente se ha llamado “comunicabilidad” del delito, impropiedad terminológica que por sus consecuencias jurídicas obliga centrar el problema de fondo en la intervención del *extraneus* en los delitos funcionarios.

En efecto, el asunto no es, ni se trata, de si al *extraneus* se le *comunica*, extiende o transmite *la calidad de funcionario público (empleado público en el caso del delito de fraude al Fisco)*, sino que de establecer si puede o no imputarse a una persona en virtud de un tipo penal determinado, pese a que éste aparezca en principio dirigido sólo a determinados sujetos”. Dicho de otra forma, se trata de determinar si es o no “posible configurar un deber jurídico penal para un *extraneus* vinculado con un delito especial”. “*Si ese deber existe para el partícipe que no posee la calidad de funcionario, entonces podrá ser castigado conforme al mismo título aplicable respecto del autor que sí la posee*” (GÓMEZ, pág. 21). En palabras de BALMACEDA (antes citado), se trata de *determinar los efectos que esta limitación tiene respecto a la posibilidad o imposibilidad de imputación a terceros que no reúnan dicha condición.*

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO: Que, la doctrina ha proporcionado importantes argumentos en pro de la responsabilización del *extraneus*. Así, por ejemplo, se sostiene que “el *extraneus* que participa en el hecho delictivo de un empleado público se identifica con ese hecho, se incorpora a él y coopera eficazmente a su producción, conducta que justifica que el legislador le otorgue el mismo tratamiento que al *intraneus*”. (SCHEPELER). Asimismo, sobre la base de los fines del derecho Penal, se ha señalado que “*si este fin es la protección de bienes*

jurídicos de gran valía social, entonces la ley al tipificar un delito – aunque sea restringiéndolo a determinadas personas –, está proponiendo que el hecho típico no sea realizado, ni por el calificado por sí solo ni acompañado por otras personas” (NOVOA Monreal, Eduardo (2005) *Curso de Derecho Penal Chileno*, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. T. II., SCHEPELER..., ob. cit. BALMACEDA Hoyos, Gustavo, “*Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública. Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al Fisco.*”, *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte* - Año 19 N° 2 (2012), págs. 61 y siguientes).

Ahora bien, recurriendo por vía de ejemplo a los delitos de prevaricación y de falso testimonio, la doctrina ha dicho que, “no es posible ignorar el injusto que encierra la *conducta del que dolosamente colabora con el juez en la redacción y fundamentación de la sentencia contraria a la ley expresa y vigente, o la del que instruye a sabiendas al testigo para que preste una declaración mendaz*” (Cury Urzúa, Enrique (2005) *Derecho Penal Parte General*, 7ª Ed. Santiago de Chile: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, ob. cit. BALMACEDA Hoyos, Gustavo, “*Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública. Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al Fisco.*”, en *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte* - Año 19 N° 2 (2012), pág. 66). En abono de lo anterior, indicar que *el elemento relevante es el dolo del partícipe, según el cual el cómplice y el instigador “responderán del tipo penal en que hayan intervenido, tanto objetiva como subjetivamente; el instigador por el hecho que instigó, y el cómplice por aquél en que colaboró, considerando su subjetividad, o sea el dolo de su particular acción de inducción o colaboración* (GARRIDO M., M., citado por Balmaceda Hoyos, Gustavo, en “*Comunicabilidad de la calidad...*”, ob. cit., pág. 63).

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, sólo recurriendo a una interpretación literal-formal, puramente exegética, se podría llegar a sostener que el extraneus se encuentra, *per se*, excluido del tipo penal y de su consecuencia punitiva, tesis que mediante el razonamiento *reductio ad absurdum*, se comprueba lo irrazonable que resulta, por la absurda implicancia que de ella se seguiría para el Derecho Penal. En efecto, y si es cierto que los fines de esta rama del Derecho es la protección de bienes jurídicos considerados fundamentales para la socialidad (premisa), resulta entonces insostenible concluir, a partir de esta misma premisa, que el

tercero extraño no puede afectar con su conducta los bienes jurídicos que el legislador tuvo en vista al tipificar los delitos funcionarios, entre ellos, el delito de fraude al Fisco.

La realidad demuestra, y la jurisprudencia así lo ha sancionado en los delitos especiales de posición institucional, como los el de fraude al Fisco, que en estos pueden efectivamente intervenir terceros extraños en la producción del injusto, además del *intraneus*. Al respecto, la Excma. Corte Suprema, en causa rol N° 25.378-2014, declaró "... que existiendo un fraude al Fisco, ideado y llevado a cabo por funcionarios públicos, pero que habría sido absolutamente imposible de cumplir sin el acuerdo o consentimiento previo de los consultores,...., lo coloca en la categoría de coautores a que se refiere el artículo 15 del Código Penal, aplicándoseles la comunicabilidad" (Considerando 97°); que la "...imputación que se atribuye a (...), de haberse concertado con malicia cierta con funcionarios públicos, siendo él un *extraneus*, y por ello ese particular elemento del fraude al Fisco, se le comunica por el solo hecho de haber intervenido en el contrato por el cual funcionarios públicos se aprovecharon..." (Considerando 102°).

La citada sentencia confirma entonces que la premisa concerniente a los fines del Derecho Penal, justifica y autoriza la punición del *extraneus* por su intervención en el hecho del *intraneus*.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en cuanto a la pena que debe aplicarse al *extraneus* ésta ha de ser precisamente la del delito de fraude al Fisco, desestimándose, por las razones que se dirán, la penalidad del delito de estafa, como algunos sostienen fundados en la tesis de la *comunicabilidad relativa*, considerando para ello a la estafa como *figura* residual sobre la cual, afirman, estaría construido el delito de fraude al Fisco. Tal planteamiento es dogmáticamente insostenible por los serios e insalvables yerros en que incurre.

En efecto, destacando el engaño como elemento central de la estafa, esta ha sido definido como "*conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que, determinando un error en una o varias personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero*" (ANTÓN O., J., cit. (n. 56), p. 61, "*Elemento específico de la estafa es la conducta engañosa, consistente en una simulación o disimulación capaz de*

inducir a error a una o varias personas”, citado por BALMACEDA HOYOS, GUSTAVO, La Malversación de Caudales Públicos y el Fraude al Fisco en el derecho penal chileno, Proyecto de Iniciación en Investigación Conicyt-Fondecyt de Chile, 2011-2013, N° 11110015, titulado: “Malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. Divisibilidad de los títulos de imputación y comunicabilidad de la calidad del sujeto activo”, pág. 90).

Siendo entonces el engaño el elemento esencial en el delito de estafa (*no hay estafa sin engaño*), resulta claro que ese elemento no aparece en el delito de fraude al Fisco, por lo que no es sostenible que la estafa constituya la *figura residual* de este último. Sobre el particular, la doctrina ha señalado que *“Este delito puede cometerse tanto defraudando como consintiendo que se defraude. En el primer supuesto, creemos que el defraudar no debe necesariamente realizarse mediante un engaño. Si se parte de un concepto amplio de defraudación, entendida como el “ataque contra el patrimonio no se realiza por comportamiento o medios materiales (aprehensión de la cosa, violencia o intimidación, ocupación), sino por medios intelectuales”, parece que la estafa no es sino una forma de defraudación, es decir, existe una relación de especie a género entre ambos conceptos. Esto puede verse en que el engaño es requisito esencial para la existencia de una estafa, aunque no lo es para toda clase de defraudación, como sería el caso del fraude al Fisco. Por su parte, en la segunda hipótesis comisiva (consentir que se defraude) aparece aún más claro que no es necesario engaño alguno para que se sancione al empleado público a título de fraude al Fisco, en tanto se trata de un tercero quien defrauda (BUSTOS R., Juan, Manual de Derecho penal. Parte especial, 2ª edición, Barcelona, Ed. Ariel, 1991, p. 189, para quien las defraudaciones se cometen fundamentalmente mediante el uso “del engaño, del abuso de confianza o de procedimientos semejantes que impliquen la elaboración de una determinada maquinación del sujeto activo en contra del patrimonio de otro”)*

A mayor abundamiento, el autor BALMACEDA HOYOS ha dicho a este mismo respecto que *“El fraude al Fisco tiene su fundamento no en un engaño, sino que en una administración desleal por parte del funcionario público del patrimonio público, la que eventualmente puede realizarse tanto por un engaño como por abuso de confianza; ...La doctrina mayoritaria llega a soluciones inconsistentes en relación a la entidad del “engaño” que se exige para el delito de fraude al Fisco*

frente al exigido en la estafa, pues mientras que en el segundo se requeriría de una mise en scène, en el primero se ha estimado que ella no es necesaria”. (BALMACEDA H., G., “Comunicabilidad de la calidad...”, ob. cit.).

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO: Que, la ausencia del engaño como elemento esencial en el delito de fraude al Fisco redundará, primero, en la falta de identidad entre ambos delitos, y segundo, en la irrelevancia que tiene el origen de la puesta en riesgo del bien jurídico por *incumplimiento de los deberes propios del cargo, pudiendo consistir, indistintamente, en un ardid, una mentira, una omisión, u otra situación semejante* (Etcheberry, Alfredo, *Derecho Penal en la Jurisprudencia*, 2ª ed., Ed. Jurídica de Chile, Santiago, reimpresión 2005, tomo IV, p. 532, ob.cit. en Malversación y fraude al Fisco, M. Magdalena Ossandón Widow).

Con todo, *la determinación de la penalidad de la estafa frente al fraude al Fisco también demuestra la diferencia que subyace a ambas figuras. En el tipo básico de estafa, establecido en el artículo 468 del Código Penal, la pena se regula directamente en relación con el monto defraudado, en la forma dispuesta en el artículo 467 CP. En el fraude al Fisco, en cambio, el monto de lo defraudado no determina la pena aplicable (cfr. artículo 239 inciso 1° CP) y solo tiene relevancia para efectos de agravar la pena (cuando dicho monto exceda las cuarenta o las cuatrocientas unidades tributarias) y para determinar la multa aplicable.*

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO: Que, la tesis de la comunicabilidad relativa, a partir de la cual se recurre a la estafa como delito residual, y con ello a la pena aplicable al extraneus, también ha sido analizada por la jurisprudencia a propósito del delito de parricidio, la cual mayoritariamente ha reconocido en el homicidio la figura residual del delito de parricidio, sancionando al extraneus como responsable únicamente de homicidio. Tal reconocimiento, a diferencia del delito de marras, resulta coherente puesto que *“es partir de ese hecho ejecutivo, que es el ocurrido en la vida real, que se examina el comportamiento típico del no vinculado y, por mandato del artículo 64, está vedado comunicarle una circunstancia personal calificante, de la que no es portador. Para el extraño, ese hecho delictivo efectivamente producido, en el cual ha participado a algún título, es un homicidio”* (Sentencia rol 3417-1998, Corte de Apelaciones de San Miguel, voto disidente del abogado integrante Carlos Künsemüller Loebenfelder).

Tratándose del delito de fraude al Fisco, la calidad de empleado público no constituye una causa o circunstancia personal del agente, sino un mero accidente (advierte GÓMEZ, que “...*la esencia del dominio del riesgo típico no reside en la formalidad del status, sino en la función materialmente realizada por el sujeto...*”), a diferencia de lo que ocurre con el parentesco en el parricidio, en que por tratarse de un vínculo personalísimo entre el agente y la víctima, el homicidio muta a parricidio y la pena base de éste delito se aumenta. A contrario sensu, en ausencia de los especiales lazos que ligan a la víctima con el victimario (como sería el caso del *extraneus* que interviene junto al *intraneus*), fuerza concluir que para este último, el *matar a otro* continuará siendo homicidio. Por el contrario, el delito de fraude al Fisco adquiere existencia sólo a partir de la intervención del empleado público, puesto que únicamente él puede poner en riesgo el bien jurídico que busca amparar el artículo 239 del Código penal. En su ausencia, el ilícito no se configurará, o como antes se dijo, *será un simple tipo agravado por razón de la mayor facilidad de ejecución de la que se favorece el funcionario público*.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, las razones legales y doctrinales que anteceden persuaden al tribunal respecto a la aplicación de la mal llamada *comunicabilidad*, habiendo sido esta el motivo por el cual se decidió condenar también a los acusados *extraneus*, Gutiérrez y Rojas, como autores de fraude al Fisco.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, resultó especialmente relevante lo referente al dolo con el que actuaron los enjuiciados Gutiérrez y Rojas, pudiendo a este respecto destacar:

1) En cuanto al acusado Gutiérrez, la tesis del conocimiento sobreviniente que alegó haber tenido a raíz de la investigación, en cuanto a que había un funcionario público involucrado en los hechos, cuyo nombre supo era Christian Bustos Morgado, no resulta aceptable por encontrarse en contradicción con la prueba y porque, además, la intervención de funcionario público en la irregularidad de los pagos en exceso la supo desde el primer momento. Respecto de esto último, Gutiérrez tuvo positivo e inequívoco conocimiento desde que recibió el primer estado de pago, toda vez que el origen de ese exceso estuvo en los falsos informes de avance de las obras, de los cuales Gutiérrez tuvo cabal conocimiento

cuando emitió las primeras facturas, o en su defecto, el cual no existe, cuando recibió el pago de los dineros. Acerca de estos, el acusado declaró falsamente diciendo que se había visto sorprendido que el pago hubiese sido por más dinero del que correspondía (*me sorprendí por el mayor pago*), sorpresa que, sin embargo, no existió ya que fue él quien facturó los montos que más tarde recibió, de suerte que fue él mismo el autor de su sorpresa.

Por otra parte, si fuese cierto, pero no lo es, que Gutiérrez supo tardíamente que el funcionario público Bustos Morgado había tenido intervención en los hechos, lo determinante termina siendo, en lo que al dolo se refiere y a la comunicabilidad respecta, que el acusado siempre supo que en los hechos de marras había un funcionario público involucrado, como lo fue el ITO Francisco Pizarro. Por lo demás, así lo ha resuelto la Excm. Corte en sentencia de casación concerniente al delito de fraude al Fisco y otros, en la que, a propósito de la comunicabilidad, decidió: *que para que exista la comunicabilidad que hace valer el Fisco en su recurso, es indispensable que se encuentre establecido en la sentencia recurrida que los reos (Berríos y Parraguez) conocían las calidades y circunstancias que concurrían en los autores principales del delito; esto es, el conocimiento de la función o condición que tipifica el hecho delictual (ETCHEBERRY O., ALFREDO, “El Derecho Penal en la Jurisprudencia”, Tomo IV, página 533, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición, enero 2002; SCS contra GUILLERMO RODRÍGUEZ SOTO Y OTROS)*. Así las cosas, el conocimiento en comento satisfará la exigencia del dolo y determinará la comunicabilidad.

De la sentencia que antecede resulta, además, especialmente relevante la extrema semejanza de los hechos ventilados en ese proceso con los de este caso, los cuales reproduce sucintamente el citado autor: “La Municipalidad de La Cisterna llamó a propuestas públicas para la instalación de de rejas en diversas plazas; se presentó a ella el reo PARRAGUEZ; le fueron adjudicadas las obras; recibió el 25% del valor de estas; las rejas no fueron entregadas, total ni parcialmente”. Luego, hechos semejantes, conclusiones semejantes.

Con todo, el conocimiento tardío o sobreviniente que dijo haber tenido de la existencia del funcionario público Christian Bustos Morgado, es un argumento que carece de plausibilidad, como lo demuestra el correo de fecha 16 de agosto de 2012, de Cristian Gutiérrez a César Rojas, “es posible que B nos dé un panorama

de las empresas que participan con nosotros, en cuanto a calidad, ISO, etc.”; información que evidentemente era entregada desde el interior de cuarteles, por una persona que se individualizó solo con una inicial, que razonablemente puede concluirse que se hizo así para no dejar constancia en un antecedente escrito quién era. Además, del correo de fecha 11 de enero de 2013 en que Rojas le dice “hoy me junte con B y me comentó que el ITO esta tranquilo, dice que nos falta, pero vamos bien...”, se desprende indudable el conocimiento que tenía Gutierrez de las gestiones que estaba haciendo Rojas, con el mentado sujeto B, que estaba al interior de cuarteles, que además, tenía una relación con el ITO y que estaba en conocimiento de los avances de las obras, lo que permite dudar de la veracidad de los dichos de Gutierrez en este punto; y,

2) En lo que respecta al acusado Rojas, los correos antes referidos y la respuesta de Rojas al requerimiento de Gutierrez mediante correo de fecha 17 de agosto de 2012, de César Rojas a Cristian Gutiérrez: “Lo veo”, demuestra que conocía a una persona que trabajaba dentro del Departamento Cuarteles a la cual recurría para obtener información relevante y reservada, vinculada, principalmente con la tramitación de los estados de pago. Ello queda de manifiesto con el correo de fecha 22 de mayo de 2013 en que aquél indica que “queda por financiar los 182 millones que nos deja que con los estados de pago (Cartor y Huar) deberíamos enterar la cantidad, creo que es difícil que el ITO aperre con esto...”

Agregar que ya se consignó las razones por las cuales se descartó la versión de Rojas respecto a que A y B eran los inversionistas que le facilitaron dinero. Además, fue claro el testigo Ignacio Labra, que trabajó en CGM a cargo de las obras, al indicar que cuando Gutierrez se fue a trabajar a las obras, Rojas supervisaba, le preguntaba por las obras, los estados de pago, se preocupaba por los factoring, además le enviaba correos. Le correspondió tramitar estados de pago en Cuarteles donde conversaba con el ITO. Rojas y Gutierrez le solicitaban esa gestión. Afirmó que comenzaron a construir tarde Villa Ortega y todos en la constructora lo sabían. Los estados de pago estaban anticipados para tener liquidez lo que estaba en conocimiento de Rojas y Gutierrez.

Dicho testimonio unido a los documentos referidos, permiten desvirtuar la versión entregada por Rojas del desconocimiento que sostuvo tener del estado de las obras y de los pagos por obras no ejecutadas.

3) En lo que toca al acusado Bustos, su actuar doloso aparece manifiesto de inicio a fin, como quedó demostrado con las reuniones que mantuvo con Rojas antes y después de la adjudicación de los proyectos de marras, pero especialmente por lo ocurrido con la recepción provisoria de las obras del retén Villa Ortega, instancia en la cual conoció personal y positivamente el serio estado de atraso en que se encontraban los trabajos. De este conocimiento expreso dieron cuenta el testigo Isidro Martínez y el acusado Francisco Pizarro, integrantes de la Comisión Evaluadora. Los dichos de este último, en cuanto declaró que Bustos había visto en terreno el atraso ostensible de las obras, fueron confirmados con la declaración del testigo Martínez y con el registro fotográfico de las obras que realizó este último.

A mayor abundamiento, el conocimiento pleno que tuvo Bustos del atraso manifiesto de los trabajos quedó demostrado, además, por la circunstancia de haber sido él quien presidía la Comisión en su condición de jefe de Área, no resultando atendible sus descargos en cuanto señaló, por un lado, que había formado parte de la Comisión únicamente como ministro de fe, y de otro, que carecía de conocimientos propios del área de la construcción que le hubieren permitido opinar respecto del estado de las obras. Estas explicaciones carecen de credibilidad, primero, porque el rol de ministro de fe no era sino residual de las funciones y deberes que le imponía el cargo, según se explicó anteriormente; segundo, porque el papel decorativo que se atribuyó en este y otros temas, v.gr., nada menos que en el visado que le tocaba hacer de los informes del ITO, no encontró en el juicio más respaldo que sus solos dichos, obrando en contra de estos las extensas descripciones que de su profesionalismo, dedicación, conocimiento, etc., hicieron aquellos testigos que conocieron su trabajo; tercero, porque la falsedad de lo que informó en el acta de recepción provisoria se vio refrendada con las declaraciones del acusado Pizarro y Martínez, y con los testimonios Jaime Meliqueo y Ricardo Parra, integrantes de la Comisión que se creó para la terminación de las obras del retén Villa Ortega, inconclusas precisamente desde la recepción provisoria con observaciones “menores”; cuarto, con lo atestiguado por Romina Parraguez, quien declaró que tanto ella como Pizarro supieron que el ITO Guillermo Nadal, comisionado especialmente para verificar si las observaciones “menores” habían sido subsanadas, le había informado a Bustos que se encontraban en el mismo estado en que al momento de la recepción provisoria con *observaciones menores*; quinto, porque no obstante lo anterior, y sin haberse constituido nuevamente la Comisión, en terreno como lo

disponía las bases Generales de licitación que disponía que si los defectos no afectan la eficiente utilización de la obra y pueden ser reparados fácilmente, la comisión podrá recibirla con reservas y fijar un plazo al contratista para efectuar las reparaciones, vencido el plazo la comisión “deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las obras” y levantar acta de recepción provisoria. No obstante Bustos sin dar estricto cumplimiento al contrato, ordenó que se confeccionara un acta de recepción provisoria sin observaciones y que fuera firmada por los entonces miembros de la Comisión Evaluadora, instrucción que cumplieron sin haber previamente verificado, in situ, la veracidad de lo que se decía en el acta.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO: Que, acerca de la firma de la citada acta de recepción provisoria sin observaciones, no puede pasarse por alto que el fundamento de la sanción que se les impuso en el sumario instruido por Carabineros, no fue otro que el hecho de haber firmado dicha acta en las oficinas del Departamento Cuarteles y no en el lugar de las faenas, como debía ser, pero sin referirse a la cuestión de fondo que supuestamente se estaba investigando, lejos más grave que haber firmado el acta en un lugar que no correspondía. Si bien el sumariante no podía pronunciarse respecto del delito de fraude, ello no lo exoneraba de incluir los graves hechos que los sumariados, vis a vis, le estaban dando cuenta en las declaraciones que iban prestando, las que incluyeron mucha más información que el hecho mencionado, sobre el cual se fundamentaron los cargos y la posterior sanción disciplinaria. Lo anterior, exceptuado el subteniente Luis Parra Ávila, el CPR Francisco Pizarro Dasso y el jefe de Área Christian Bustos Morgado, respecto de quienes el fundamento de la sanción fue, en el caso del primero, haber devuelto indebidamente una boleta de garantía, para el segundo, haber falsificado los informes técnicos, y para el tercero, haber dispuesto que se confeccionara el acta de recepción provisoria sin observaciones, sin haberse constituido nuevamente la Comisión Evaluadora en el retén Villa Ortega.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en cuanto a lo ocurrido con los otros tres proyectos de reposición, cuyo estado de atraso dio lugar al término anticipado de los contratos, cabe señalar que la adjudicación por Trato Directo a la empresa constructora Grossman S.A., constituyó una nueva fase de la conducta fraudulenta de los acusados Bustos y Rojas.

En efecto, encontrándose ya consumados los ilícitos, perjuicios incluidos, los acusados intervinieron abiertamente en el proceso evidenciando con ello, una vez más, el dolo que guiaba sus conductas. Así, en el caso de Bustos, éste ordenó a Pizarro adulterar los itemizados en el sentido de adecuar los trabajos inconclusos a las cantidades de dinero que se utilizarían en las adjudicaciones, provenientes, como ya se dijo, de los montos de las retenciones y de las boletas de garantía de la empresa CGM, y además, del monto insoluto en el caso de Coyhaique Alto. El objetivo último que perseguían estas nuevas falsedades no era otro que evitar que se supiera de los pagos en exceso efectuados a la empresa CGM y, por añadidura, los de los falsos inversionistas, para lo cual resultaba indispensable que las obras concluyeran.

Acorde con los montos que ya habían sido pagados a CGM, y por su intermedio los falsos inversionistas, las obras tendrían que haber estado cuantitativamente muy próximas a su finalización, irrealidad que fue traSPAsada a los informes de itemizados que Bustos le ordenó a Pizarro confeccionar. El resultado de la falsedad vino a ser la imposibilidad en que se vio la nueva adjudicataria de poder cumplir con el contrato de obra, lo que dio lugar a una nueva terminación anticipada de los contratos y al abandono de hecho de los proyectos de Isla Huar y Coyhaique Alto, quedando expuestos a ser escrutados. En la especie, la interposición de las demandas laborales dio lugar al escrutinio y, acto seguido, a la develación de los hechos, la que alcanzó no sólo a esos dos proyectos sino también al de Lago Castor y Villa Ortega.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO: Que, el incumplimiento en que incurrió la empresa Grossman guarda razonable relación con lo ocurrido en la licitación del retén Río Tranquilo, en la cual, como se explicó anteriormente, la empresa quedó eliminada en la fase de evaluación, atendido los informes desfavorables que se emitieron a su respecto, no obstante los esfuerzos que desplegó Bustos para persuadir a los informantes que detuvieran el proceso de evaluación a la espera de que la empresa completara los antecedentes que le faltaban, y por los cuales estaba siendo informada de manera desfavorable. En este intento fallido, Bustos adujo un compromiso que tenía el entonces jefe de Departamento, Félix Flores Santis, *con Grossman*, el cual no pudo ser otro que adjudicarle el proyecto Río Tranquilo y así compensarlo económicamente por los mayores gastos en que,

ciertamente, habría de incurrir con los trabajos de terminación de los cuarteles Isla Huar y Villa Ortega.

No se encuentra otra explicación como no sea la supuesta componenda a que aludió Bustos, pero no necesariamente con Grossman, toda vez que de su participación puede existir duda razonable que no permite afirmarlo (aunque tampoco descartarlo, habida cuenta de la reunión almuerzo que sostuvo con Flores y Rojas en un restaurant en la comuna de Macul pocos días antes de la adjudicación por trato directo, como consta de la prueba documental 832 consistente en estado de cuenta nacional de tarjeta de crédito titular Carlos Grossman, en que aparece el día 22 de octubre de 2013 un pago en el restaurante Chilenazo de \$48.489, que fue reconocido por aquél como el pago de la cuenta de mentada reunión con Rojas y Flores. En efecto, el testigo Grossman en su declaración aseveró reiteradamente que había accedido a la proposición de Rojas, en orden a postular a su empresa constructora a las licitaciones de cuarteles que Carabineros estaba llevando a cabo, esto a condición de que tendría que ser Rojas el que estuviera al frente de todo ya que él no tenía tiempo ni interés en hacerlo, condición que aquél cumplió, por lo cual se mantuvo ignorante durante un tiempo de lo que estaba ocurriendo con su empresa y con Rojas, v.gr., la promesa de adjudicación del proyecto Río Tranquilo.

Así las cosas, habiéndose restado Grossman de la administración de su empresa y quedado a cargo de ella el acusado Rojas, cabe concluir: primero, que la promesa de Río Tranquilo a la que Bustos hizo referencia no existió; segundo, que la adjudicación de ese proyecto perseguía obtener recursos financieros para terminar las obras inconclusas, toda vez que siempre se supo que los montos asignados para la terminación de Isla Huar y Coyhaique Alto no iban a ser suficientes. Así quedó demostrado con el falseamiento de los itemizados que ordenó Bustos y con su intervención directa y decidida en el proceso de evaluación del proyecto Río Tranquilo, intentando convencer a los informantes, primero amablemente y luego en forma agresiva, que paralizaran el proceso; y, tercero, que el destinatario formal y oficial de estos nuevos recursos habría de ser la empresa Grossman, en tanto que la libre administración de ellos estaría en manos Rojas; y, cuarto, que ad portas de que fueran descubiertos los hechos constitutivos de fraude consumado, forzoso es conjugar las acciones que a posteriori desplegaron Bustos y Rojas, ya latamente expuestas. De esta

conjugación deviene el encubrimiento que intentaron hacer de los delitos y el dolo con el que siempre y de consuno actuaron.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en cuanto al acusado Rojas, cabe agregar para mayor abundamiento que su actuación dolosa quedó aún más en evidencia por haber sido él quien interesó a Carlos Grossman Badrian, dueño de la empresa constructora Grossman S.A., en adjudicarse los tres proyectos que estaban inconclusos. Habiendo logrado que se interesara, se integró al directorio de la empresa, sumando en esa misma condición al arquitecto Ignacio Labra Moscoso, quien hasta hacía poco se había desempeñado como tal en los cuatro proyectos de CGM, los que abandonó por la precaria situación económica que estaba atravesando la empresa, según sus dichos.

Ahora bien, si lo anterior hubiere constituido un hecho único y aislado podría entonces, eventualmente, prescindirse de él como prueba de la conducta dolosa de Rojas. La realidad de lo ocurrido impide desecharlo, en la medida que el acusado intervino de manera inmediata y directa en la conducción de CGM, por lo que siempre estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo con los proyectos, de manera que cuando decidió retirarse de la empresa sabía positivamente el estado de atraso en que se encontraban las obras, procediendo dolosamente a contactar a Carlos Grossman para interesarlo en la terminación de los tres proyectos – Isla Huar, Lago Castor y Coyhaique Alto –. El verdadero estado de avance de las obras no llegó a ser conocido por Grossman, ya que Rojas lo impidió mediante el subterfugio de contratar a Labra Moscoso e incorporarlo como miembro del directorio, encomendándole que en su calidad de arquitecto *visitase* los tres cuarteles e informase al respecto. Efectuadas las *visitas* recomendó postular a la terminación de los proyectos Isla Huar y Coyhaique Alto, y descartar Lago Castor por el mayor estado de atraso que exhibía.

De lo anterior se colige que el propósito de Rojas fue, como dijo Grossman, “tapar el hoyo”, a costa del propio Grossman, valiéndose para ello de los falsos itemizados de Pizarro y del falso visado de Labra. Si no hubiese sido esa la finalidad, entonces el motivo del engaño quedaría sin explicación, ni razonable ni irrazonable, lo que no es aceptable. Al respecto, no existe otra que haber tratado de impedir que se descubrieran los delitos de fraude que él y Bustos habían

fraguado, y posteriormente ejecutados con el concurso de Gutiérrez y de Pizarro, sin los cuales no era posible perpetrarlos.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a la participación en calidad de encubridor que argumentó la defensa de Pizarro, el tribunal la desestimó por no reunirse los presupuestos de esa forma de intervención criminal, sino las propias de la autoría.

Al efecto, en lo que respecta al encubrimiento, el solo tenor del artículo 17 del Código penal excluye la posibilidad que el acusado Pizarro hubiere intervenido bajo este título, en cuanto señala (sino derechamente exige, para el caso que esta forma de intervención criminal se la considere un delito en sí mismo): *son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autor ni como cómplice, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes*. Ahora bien, los hechos que se han tenido por establecidos demuestran que el acusado no intervino en los fraudes con posterioridad a su ejecución, sino que con anterioridad, en calidad de autor. Acerco de esto refiere Cury que *la doctrina mayoritaria está conteste en calificar como autor a “quien realiza todos o parte de los presupuestos típicos de un delito determinado”, desde un punto de vista natural, precisando posteriormente, ahora desde un punto de vista normativo (artículo 15, inciso primero, “se consideran autores”), que son autores “Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea...” (Nº 1, artículo 15, ya citado)*. En cuanto a esta primera hipótesis de autoría, el citado autor añade que *“En estos casos, el coautor ejecutor no realiza completamente el tipo delictivo, sino sólo parte de él, siempre que su conducta se materialice en actos incorporados al tipo respectivo y exista acuerdo o concierto previo entre los partícipes”* (CURY URZÚA, ENRIQUE, “Texto y Comentario del Código Penal Chileno”, Tomo I, Libro Primero-Parte General, Título II, “De las personas responsables de los delitos”, Editorial Jurídica de Chile, primera edición 2002, páginas 231, 237 y 238).

Los hechos que se dieron por acreditados, y las razones que para ello tuvo el tribunal, evitan mayores comentarios en cuanto a que Pizarro no realizó completamente el tipo delictivo sino sólo una parte y que su conducta se materializó en actos que se incorporaron en el tipo penal de fraude al Fisco

(informes de avance de obras y estados de pago falsos que al ser visados por Bustos dieron lugar a los pagos que éste le informaba a su jefatura). En lo que respecta al acuerdo o concierto previo, es del caso que si bien el acusado negó esta circunstancia, alegando que había sido conminado por Bustos, y que su defensa sostuvo que la personalidad de su representado, unido a la jerarquía del mando a que se encontraba sometido por parte de Bustos, determinaron que hiciera lo que este último le ordenaba (falsear los informes técnicos de avances de obras y posteriormente los estados de pago), es del caso que se desconoce cuál es o cuál era la personalidad de Pizarro, resultando insuficientes los testimonios de quienes trabajaron con él a la época de los hechos. Estos testimonios ilustraron al acusado como una persona de bajo perfil, pero no por ello carente de suficiente voluntad como para haberse negado a cumplir las órdenes que le daba Bustos, sustrayéndose de participar reiteradamente en los delitos a que daban inicio formal sus falsos informes. Los malos tratamientos de palabra de que habría sido víctima Pizarro a manos de Bustos, y las discusiones que había entre ambos, a puerta cerrada en la oficina de uno u otro, conforme informaron los testigos haberse percatado, no revisten la gravedad y seriedad que se requiere para calificar al primero como un mero instrumento de la conducta ilícita de Bustos. Al respecto, la declaración de Pizarro, en orden a que había informado al entonces Coronel Félix Flores acerca de lo que estaba ocurriendo en el Departamento, es prueba suficiente de esa voluntad mínima que se requería para haberse negado a participar en los fraudes, los cuales, sin embargo, continuó igualmente cometiendo después de su denuncia, sin que las palabras que le habría proferido el jefe del Departamento luego de escuchar su relato – *Flores me manifestó que tenía que cumplir con lo ordenado por el Comandante Bustos* – sirvan para eximirlo de responsabilidad. La personalidad pusilánime bajo la cual se presentó el acusado Pizarro podría eventualmente justificar en él una voluntad obsecuente, en tanto en cuanto aceptó sumarse a las del resto, pero en caso alguno una voluntad anulada.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, el delito de fraude al Fisco no requiere que sus autores obren movidos por ánimo de lucro, ni que se enriquezcan con la perpetración del ilícito, lo que en el caso de Pizarro no se probó que hubiere ocurrido. Sin embargo, y en aras de dilucidar el o los motivos que habría tenido el acusado para incurrir en las falsedades, no puede pasarse por alto la excelente calificación funcionaria que de él hizo el acusado Bustos en el mes de septiembre del año 2013, particularmente teniendo presente que en dicha evaluación propuso para aquel un ascenso de grado, como consta de la hoja de calificación (prueba

documental N° 1.211, de la fiscalía), la que señala: *“profesional que destaca su espíritu de compromiso en las funciones encomendadas ya sea como ITO como aportando con sus conocimientos en la especialidad y experiencia institucional, responsable y cooperador. Profesional con merecimientos al aumento de grado...”*.

Lo anterior constituye un correlato razonable de las falsedades que reconoció haber cometido en cumplimiento, según sus dichos, a las instrucciones que le impartía su superior jerárquico inmediato, Christian Bustos Morgado.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO: Que, en lo que respecta al acusado Gutiérrez, no puede menos que decirse que éste, y su defensa, confundieron el objetivo del juicio penal con lo que consideraron habría sido un mero caso de incumplimiento de contrato. Producto de esta confusión fue que los alegatos, los contrainterrogatorios, los exámenes directos y, muy especialmente, la extensa declaración que entregó el acusado acerca de los hechos, tuvieron como principal norte demostrar cuál había sido el grado de avance que habían alcanzado los trabajos al momento en que se dio término anticipado a los contratos. De esta manera fue que ignoró el hecho que más allá del estado de avance que pudieron haber alcanzado las obras, lo que estaba en discusión era la existencia de sendos delitos penales y la participación culpable que se le estaba atribuyendo, no como contratista ni como representante legal de la empresa CGM, sino como sujeto activo en los ilícitos imputados, siendo por tanto irrelevante el nivel o grado de cumplimiento de las obligaciones que asumió con Carabineros en los contratos de adjudicación de los proyectos de reposición, situación jurídica de cuyo conocimiento se encuentran a cargo los tribunales con competencia civil.

El mayor o menor grado de cumplimiento de los contratos, y con ello el estado de avance en que se encontraban las obras, constituyó para el acusado su principal argumento defensa, lo que le llevó a efectuar permanentes estimaciones y cálculos porcentuales de las obras, valiéndose para ello de un sin fin de fotos que nada podían aportar a su causa, pero sí, impensadamente para él, a la constatación del perjuicio como elemento configurativo del delito de fraude. Las fotos en cuestión fueron suficientes para demostrar que ninguno de los cuarteles había sido terminado, ni en las fechas previstas ni más allá de ellas. En este sentido, las extensas audiencias y las discusiones acerca de lo que mostraban las

fotografías resultaron mayoritariamente infructuosas, toda vez que nadie dijo, ni podía decir, que las obras que allí se mostraban correspondían, exactamente, a tal o cual porcentaje, sino, con mucho, a un aproximado, de suyo subjetivo. Con todo, exacto o aproximado el porcentaje, ninguna fotografía exhibió obras íntegramente concluidas.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO: Que, sobre la tesis del incumplimiento a que se habría visto forzado el acusado por culpa del mandante, quien le había impedido continuar trabajando al prohibirle ingresar al lugar en que se estaban ejecutando los trabajos, Gutiérrez levantó otro argumento en su defensa, como fue las relaciones comerciales que hubo entre él y el acusado Rojas Gaete.

Aunque las malogradas relaciones personales entre ambos tuvieron origen en los proyectos de reposición de cuarteles, en cuya ejecución se imputaron recíprocamente responsabilidad, ya fuere por el mal manejo administrativo de la empresa, o por el desvío de fondos para fines personales, v.gr., compra de autos, o por la administración fraudulenta que se imputó a Rojas, lo cierto es que éste mutuo reproche termina siendo una cuestión accesorio al negocio principal, como era el de defraudar al Fisco. Lo anterior, sin perjuicio de haber sido esos reproches la causa inmediata y directa de la develación de los delitos, en la medida que el mal manejo administrativo, el desvío de fondos para fines personales o la administración fraudulenta dio lugar a que los trabajadores que habían sido contratados para la ejecución de las obras interpusieran sendas demandas laborales en contra de la empresa CGM y de Carabineros por no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Por último, en cuanto a la administración fraudulenta en que habría incurrido Rojas, es del caso consignar que no pasó inadvertido para el tribunal la propuesta que le hizo al acusado Gutiérrez para solucionar el atraso de las obras, a saber, que le vendiera la empresa. Esta solución propositiva Rojas la dio conocer en aquella reunión efectuada en el Departamento Cuarteles, organizada y presidida por el jefe de Área, Christian Bustos, cuyo objetivo era analizar el grave retraso que mostraban las obras adjudicadas a CGM, cuyo remedio habría estado, según el proponente, en la adquisición de la empresa CGM.

PRUEBAS DE LOS ACUSADOS.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: **Pruebas de descargo acusados Bustos.** Que, la defensa de los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado rindió prueba documental y un registro de audio. En cuanto al primer medio de prueba es del caso señalar:

1) La **prueba documental signada con los números 332, 333, 330 y 335**, por decir relación mayormente con antecedentes personales del enjuiciado Christian Bustos fueron tenidos en consideración en la etapa de determinación de la pena;

2) En cuanto a los Informes Técnicos N° 13 y 14, de 13 de noviembre 2013, correspondientes a los proyectos Retén Isla Huar y Coyhaique Alto, elaborados para su adjudicación por trato directo, estos ya fueron considerados anteriormente por haber sido incorporados como prueba de la fiscalía;

3) Que en cuanto a la prueba documental **N° 35, 181, 256**, de la defensa, correspondiente a las actas de apertura de sobres de las licitaciones de los proyecto de reposición de los retenes Lago Castor, Isla Huar, Villa Ortega (anteriormente exhibido para reconocimiento por el acusado Cristian Gutiérrez Martínez), y a los documentos de los numerales **178, 23, 245, 253 concernientes a actas de aprobación de estados de pago** de los cuarteles de marras, no proporcionaron mayor información que la que ya había aportado la prueba documental de los acusadores;

4) Que la misma conclusión expresada a propósito del documento N° 8, debe hacerse extensiva a la prueba documental propia de la defensa, **N° 379, N° 381 y N° 385**, toda vez que se trata de Resoluciones Exentas (N° 984, N° 592 y N° 593, todas del año 2012) por medio de las cuales se adjudicaron proyectos de reposición en los que la empresa CGM participó, pero no se los adjudicó (tenencia El Olivar y retén Bajos de Lircay). En el mismo sentido, la prueba signada con el **N° 383**, correspondiente a una Resolución Exenta, N° 601, de 19 de junio de 2012, que declaró desierta la licitación del proyecto retén La Mina;

5) Tratándose de la documental **N° 259 y 260**, relacionada con el cobro y pago de multas de la empresa CGM, por incumplimiento del plazo de entrega de las obras de Villa Ortega, estas pruebas sólo sobreabundaron en información que la prueba de los acusadores ya había proporcionado al tribunal;

6) En lo que concierne al **documento N° 356**, “Tabla N° 12, correspondiente al juicio de cuentas de la Contraloría General de la República, rol expediente 40-2016”, ninguna información se obtuvo de ella que fuese pertinente al núcleo fáctico de la acusación;

7) En cuanto al correo electrónico enviado a la fiscalía por la empresa VTR, de fecha 23 de diciembre de 2013 (**documento N° 571**, prueba propia de la defensa), en el que da respuesta al requerimiento de información que le hiciera el ministerio público mediante oficio N° 3.164, informando al efecto que los acusados Christian Patricio Bustos Morgado y César Orlando Rojas Gaete no registran servicios VTR y por ende no hay correspondencia asociada a cuentas de correo que ellos tuvieran con esa empresa a la fecha del informe, es del caso que respecto a esta prueba el tribunal ya se refirió, sin perjuicio de reiterar el yerro de la fiscalía al haber requerido información de hechos en tiempo presente en circunstancias que se trataba de hechos pretéritos;

8) Respecto del **documento N° 572** (Libro Proyecto de Infraestructura de Dirección General de Santiago, Carabineros de Chile, 2 de marzo 2011), el tribunal no halló en él información alguna que esclareciera los hechos, ni tampoco la tesis de la defensa;

9) Que la conclusión a que en su momento llegó el tribunal, en orden a descartar que el acusado Pizarro hubiere recibido beneficio pecuniario directo por su participación en los delitos de fraude, sin perjuicio del beneficio indirecto que Bustos le habría prometido por la vía de un ascenso, tuvo lugar teniendo en consideración, entre otros antecedentes, parte de la prueba documental que la defensa de Bustos aportó como propia (numerales **11, 13, 564 y 388**), pero que antes ya había sido recibida con ocasión de la declaración del propio acusado Pizarro, de manera que ahora, esas mismas pruebas, ni las otras que se les aparejaron, permiten arribar a una conclusión distinta, como fue: 1) la copia de un contrato de compraventa y mutuo hipotecario, de 31 de mayo de 2013, entre inmobiliaria BRIMAC y Francisco Pizarro y Patricia Quijada Encalada; 2) boletas de depósito en cuenta corriente de la inmobiliaria BRIMAC, por \$7.150.000, el 31 de julio 2012, efectuado por Francisco Pizarro, y otro de 3 de abril de 2013, por \$6.000.000, como abono de precio de un inmueble (“departamento 904”); 3) certificado de inscripción de dominio vigente del CBR de Santiago, 17 de julio de

2013; y 4) anexos de informe pericial criminalístico (certificado de anotaciones vigentes en el Registro de Vehículo Motorizados, del vehículo PPU FBCB.29-5, e informe patrimonial de Patricia Quijada Encalada).

A mayor abundamiento, ha de decirse que estos documentos no arrojan por sí solos la conclusión que de ellos quiso extraer la defensa, como fue demostrar que el único autor *intra neus* de los delitos de fraude habría sido Pizarro, tesis que fue desechada por las razones que han sido latamente explicadas;

10) Respecto del **documento N° 388**, cuadro demostrativo de licitación de cuarteles en los años 2011 a 2013, estando el acusado Christian Bustos Morgado a cargo de su administración, esta prueba resultó del todo irrelevante, como quiera que sólo se refiere a las licitaciones de numerosos proyectos de reposición de cuarteles que tuvieron lugar en aquellos años, sin que la participación del acusado en esos procesos conduzca a una conclusión favorable para la teoría del engaño que dijo haber sido víctima:

11) Respecto del **documento N° 577** (infografías Cuarteles Dirección General de Carabineros, Revista de Carabineros de Chile; página 2: 44 mil y fracción funcionarios, 195 tenencias, 386 retenes), sólo cabe decir, para que no se olvide o confunda, que la acusación fue dirigida en contra del entonces funcionario de Carabineros, Christian Patricio Bustos Morgado, por los delitos de fraude y cohecho que cometió en relación a los cuarteles policiales tantas veces citados; y,

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, respecto de las pruebas aportadas por la defensa del acusado Pizarro cabe señalar:

1°.- Que la prueba documental que presentó la defensa como prueba propia (numerales **5, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27 y 28, 36 y 40**) y la documental de la fiscalía (**N° 898 y N° 984**), que hizo suya la defensa, consistente en numerosos documentos electrónicos ordinarios (NCU) en los que constan solicitudes de comisiones de servicio para visitas de fiscalización de las obras y compra de pasajes aéreos, resultó sobreabundante, en la medida que la información relacionada con tales comisiones y solicitudes ya había sido proporcionada al tribunal con ocasión de la recepción de las pruebas de la fiscalía y el querellante.

2°.- En cuanto al documento electrónico ordinario NCU 17074918, de fecha 30 de octubre de 2013 (**documental N° 38** de la prueba de la defensa), en el que el acusado Christian Bustos Morgado da cuenta a otros funcionarios del Departamento Cuarteles L1 acerca de una nota de cobro enviada por un proveedor de la empresa CGM, vinculada a dos de las obras de marras, recibida por correo electrónico, resultó irrelevante por no guardar relación directa con los hechos enjuiciados.

3°.- El documento electrónico ordinario NCU 18027732, 4 de diciembre de 2013 (prueba **documental propia de la defensa, N° 41**), mediante el cual se informa que las obras de Villa Ortega están finalizadas y en condiciones de ser recepcionadas, no resultó relevante en lo que a la configuración del delito y la participación de los acusados decía relación, misma condición en la que se encuentra la prueba documental N° 13, de sus medios de prueba (NCU 8749160, de 29 de noviembre de 2012; de Christian Bustos Morgado; Para: CPR Francisco Pizarro; informativo; caldera Villa Ortega: se informa que el 10-11-2012, en visita a terreno, el oficial Víctor Soler Alarcón constató la ausencia de caldera, la que es esencial para el funcionamiento del cuartel).

4°.- Tratándose del **documento N° 31**, de sus medios de prueba, confirmó más aún la falsedad del contenido del acta de recepción provisoria sin observaciones, que a fines del mes de junio de 2013, suscribió el acusado Christian Bustos, además de otros funcionarios a quienes, por intermedio del acusado Pizarro, les ordenó que también lo hicieran. En efecto, la información que se contiene en el NCU 15634039, de 5 de septiembre de 2013, emanado del acusado Christian Bustos Morgado, con el asunto *fiscalización SEREMI de Salud e IPT del Trabajo*, en el que da cuenta que el 3 de septiembre de 2013, se constituyeron en las obras del retén Villa Ortega un Inspector del Trabajo de Coyhaique y la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Aysén, quienes dispusieron la paralización de las obras en ejecución, dejándose además constancia de una fiscalización anterior, el 28 de agosto del mismo año, en la que se efectuaron observaciones referentes a las condiciones de trabajo y sanitarias en que se encontraban trabajando los trabajadores, confirma de manera definitiva que el acusado Bustos siempre estuvo enterado que los trabajos no habían concluido y que por tanto falsificó, e hizo a otros falsificar, el contenido de la información que se registró en el acta de *recepción provisoria sin observaciones* del retén Villa Ortega.

5°.- En cuanto a los **documentos** signados con los numerales **50, 51 y 54**, relacionados con solicitudes de información que en el año 2014 hizo el acusado Pizarro al jefe del Departamento Cuarteles, Jorge Muñoz Santis, con la finalidad de aportar dicha información al Sumario Administrativo, ninguna relevancia llegó a tener en el juicio de marras, cuanto más si no la información en cuestión no terminó por aportarse como medio de prueba.

6°.- Respecto del **documento N° 863**, de la prueba documental del ministerio público, consistente en una libreta de ahorro para la vivienda, perteneciente al acusado Pizarro, en la que constan diversos depósitos y giros de dinero, nada en concreto pudo el tribunal concluir de dicho documento, en la medida que se presentó de una información aislada, no vinculada con los hechos sub lite a través de otros medios de prueba, tales como, por ejemplo, una pericia contable u otra, como habría sido de esperar.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, en cuanto a la prueba testimonial que rindió la defensa del sentenciado Gutiérrez Martínez, cabe señalar que tales declaraciones provienen de dos personas que fueron testigos presenciales y directos de circunstancias y hechos que formaron parte del debate relacionado con la participación del sentenciado Rojas. Al respecto, el primero de los deponentes relató particulares circunstancias en las que les tocó relacionarse con el acusado Rojas, las que si bien fueron acotadas a dos o tres casos puntuales, lo cierto es que confirmaron lo que varios de los testigos de cargo ya habían antes afirmado respecto de la activa participación del acusado en la empresa y en la administración de los dineros, pues no fue sino un acto de administración la intervención que tuvo en la rebaja de sueldos de los trabajadores, incluido el testigo y en la orden que le impartió respecto de la escrituración de un contrato de trabajo a una persona de nombre Miguel Gutiérrez, aclarando el testigo que este no era pariente de Gutiérrez y que había sido llevado por Rojas a trabajar con Carolina Gutiérrez,. Otro tanto puede decirse de los trabajadores que reclutó con destino a las obras que se estaban ejecutando.

La declaración del testigo Mena confirmó que en el mes de octubre de 2013 los trabajos en Villa Ortega no habían concluido.

Por su parte, la información que contienen los correos que se le exhibieron confirman que Rojas formaba parte de los destinatarios de los correos, sin perjuicio que en uno de ellos aparece reenviando un correo que le había sido dirigido directamente a él por un proveedor de los materiales que se utilizaban en la construcción de los cuarteles. Resulta asimismo destacable el correo que a fines del mes de junio de 2013, envió el testigo al acusado Gutiérrez, en el que le expresa su preocupación por el atraso de las obras y por las serias dudas que tenía respecto del verdadero ánimo que habría existido en terminar las obras, en atención a los hechos que se estaban suscitando. Este correo deja en evidencia que el ánimo que refirieron Rojas y Gutiérrez por concluir los trabajos fueron versiones acomodaticias, particularmente en el caso de Rojas, toda vez que se demostró mediante instrumentos públicos que a esa época ya estaba en contacto con la empresa que el mismo había buscado para concluir los trabajos de CGM, toda vez que sabía positivamente que las obras no podrían ser concluidas.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, acerca de la prueba documental aportada por la defensa Gutiérrez, el tribunal arribó a las siguientes conclusiones:

1) Prueba documental propia de la defensa, **Nº 63**, libro mayor de la contabilidad de la empresa CGM y el balance tributario, ambos del año 2012, y numerosas facturas relacionadas con obras públicas municipales, y **Nº 97**, consistente en cartolas, cheques, depósitos y transferencias efectuadas desde y hacia la cuenta corriente de la empresa CGM en los años 2012 y 2013, no explican otra cosa que lo que habría sido la situación financiera de la empresa CGM en ese año, en el caso de los documentos contables y facturas, y los movimientos bancarios que registró su cuentas corrientes en ese mismo período, en el caso de los documentos bancarios;

2) Prueba documental signada con el **Nº 66** (prueba de la fiscalía), consistente en 8 tomos del sumario administrativo realizado por Carabineros, este medio de prueba se descompuso en cinco fojas, a saber:

1ª. **foja 186**, correspondiente a una querella interpuesta por el acusado Gutiérrez Martínez, carente de timbre y fecha de recepción por parte de algún tribunal, no pasa de constituir una denuncia en contra de terceras personas en relación a estos hechos;

2ª. **foja 1.634**, consistente en un acta de entrega, de fecha 13 de diciembre de 2012, en la que se registró que la Sargento 2º de Carabineros, Lorena Morales C, procedió *“conforme a lo dispuesto por el Sr. jefe de la oficina Gestión y Coordinación de Proyectos, Teniente coronel Christian Bustos Morgado”*, a hacer entrega de una boleta de garantía de seriedad de la oferta de la Constructora CGM (proyecto Coyhaique Alto), a Claudia Segura Lezana – colaboradora del acusado Rojas – , se confirma con ella, una vez más, el nivel de ingerencia y de participación e interés personal que tenía este funcionario público en los proyectos de reposición que fueron materia de este juicio;

3ª. **foja 2.842**, acta de entrega de una boleta de garantía de seriedad de la oferta, correspondiente al proyecto Isla Huar, por parte del funcionario Luis Parra Ávila al acusado César Rojas Gaete, *“conforme lo dispuesto por el Sr. jefe de la oficina Gestión y Coordinación de Proyectos del Departamento de Cuarteles, Christian Bustos Morgado”*, corrobora lo dicho precedentemente, a la vez que demuestra que la participación del acusado Rojas fue más allá que la de un mero y casual inversionista-financista de la empresa CGM, y, además, confirma que la relación que el y Bustos mantuvieron, y a la cual numerosos testigos se refirieron diciendo que era *vox populi*, excedió con creces una sana camaradería.

4ª. En cuanto a la **foja 2.816** del sumario administrativo DILOCAR, referente a un documento electrónico ordinario (NCU 16946780), esta prueba resultó sobreabundante y por tanto innecesaria, toda vez que el hecho del que da cuenta ya había sido lata y reiteradamente demostrado con los medios de prueba aportados anteriormente por aquellos intervinientes que le antecedieron en esta del juicio: *“de prefectura Aysén, para mayor César Bodilla, comisario; asunto: instrucciones L1 informa, 25 de octubre de 2013: mediante el presente documento se informa a esta superioridad que se recibió llamado telefónico del subteniente Luis Parra, informando que por orden del Coronel Félix Flores no podían ingresar trabajadores de la empresa CGM o ex-trabajadores a la constructora nueva, a las obras de Coyhaique Alto ni a Lago Castor, como tampoco pueden retirar materiales o especies de construcción, en atención a que dicha empresa no dio cumplimiento al contrato de Carabineros por lo que se encuentra en trámite la desvinculación legal con dicha empresa y la licitación de una nueva empresa que termine las obras....”*

5ª. Respecto de la **foja 2.837**, por su relevancia se transcribirá en lo pertinente: en referencia: reducción a escritura pública sesión de directorio empresa Grossman: *Raúl Undurraga Laso, notario público, repertorio 5795-3, sesión de directorio, construcciones Grossman. En Santiago, a 2 de octubre de 2013, ante mí..., comparece don Arie Miss Raji Waizer, abogado, viene en reducir acta de sesión de directorio de la sociedad Grossman, siendo su tenor el siguiente:: **Santiago, 1º de julio de 2013, tiene lugar sesión de directorio de la sociedad Grossman , asisten los directores** Hernán Colodro R., quien presidió “accidentalmente”, Carlos Grossman Badrián, **César Rojas Gaete**, Ignacio Labra y Alfredo Segao K; 1º) apertura de la sesión; 2º) designación de presidente, de gerente general, poderes, etc.; por unanimidad se acordó designar presidente y gerente General a Carlos Grossman Badrián. Cierre y firma de los comparecientes.*

Éste documento confirma que la intervención de la empresa Grossman se fraguó mucho tiempo antes de ser *invitada* a participar en la licitación para la terminación de los cuarteles Isla Huar y Coyhaique Alto, toda vez que con anterioridad al día 1º de julio de 2013, César Rojas – e Ignacio Labra – formaba parte del directorio de dicha empresa, hecho a partir del cual se desprende: 1º) que es falso lo dicho por el acusado Rojas en orden a que siempre su principal preocupación fue que se terminaran los trabajos y que se cumplieran los contratos celebrados con Carabineros; 2º) que el acusado Rojas había decidido abandonar la empresa CGM mucho antes del término anticipado de los contratos, aunque ya habiendo recuperado, tanto él como los falsos inversionistas, “A” y “B”, sus respectivas inversiones, además de las ganancias que dijo haber pactado, pero de cuyos verdaderos términos sólo él y los falsos inversores sabían; y, 3º) que es correcta la conjetura que extrajo Carlos Grossman respecto de cuál había sido el objetivo que se tuvo en vista para que su empresa participara en las licitaciones para el término de las obras de Isla Huar y Coyhaique Alto, ya que tendría que concluir obras pendientes no incluidas en el itemizado. En sus palabras, “*lo que se hizo fue tratar de “tapar un hoyo” mediante la contratación de su empresa*”.

Más allá de lo acertado de la conjetura, aparece indesmentible que la misma no nació con posterioridad al contrato que suscribió con Carabineros, sino antes de firmarlos, como lo demuestra el documento que a se viene haciendo referencia, en el que aparece el nombre de César Rojas Gaete como miembro del directorio de

la empresa Grossman que sesionó el 1° de julio de 2013. En efecto, al contrastar esta información con lo que fue su declaración en el juicio, resulta forzoso concluir: 1) que Carlos Grossman siempre supo lo que estaba ocurriendo con CGM; 2) que conocía el estado del negocio en el que próximamente sería “invitado” a participar; 3) que sabía que Rojas formaba parte de la empresa CGM; 4) que su intervención en el negocio fraudulento no fue sobreviniente al quiebre de la relación de Rojas y Gutiérrez, ocurrida el 4 de julio de 2013, esto es, tres días después de la sesión del directorio de 1° de julio; 5) que su participación no fue sobreviniente al término anticipado de los contratos de CGM en el mes de octubre de 2013, ni tampoco a la reunión-almuerzo que sostuvo con el jefe de Departamento, Félix Flores, y con el sentenciado Rojas, en un restaurante el día 22 de octubre de 2013.

Ahora bien, teniendo presente la fuerza probatoria que el artículo 1700 del Código Civil asigna al instrumento público, como lo son las escrituras públicas, fuerza concluir que no fue cierto lo que Grossman declaró al tribunal acerca de cómo, en qué circunstancias y época fue que llegó a participar en las licitaciones de estos cuarteles, v.gr., cuando dijo, *esto comienza el último trimestre de 2013; Rojas me dijo que había algo en el rubro de construcciones, preguntándome si tenía vigente la empresa; Rojas me dijo que había una oportunidad porque Carabineros había tenido problemas con dos obras que habían sido abandonadas, por lo que se requería una empresa que las terminara; llegué al Departamento Cuarteles, donde me reuní con cinco personas que no había visto anteriormente; respecto de las personas que ejecutarían la obra, Rojas me mencionó que tenía un arquitecto de apellido Labra, quien posteriormente le fue presentado en una oportunidad, y que sería éste quien estaría cargos de las obras y de su inspección técnica; la remuneración de Rojas, se le dijo que si habían utilidades él recibiría un porcentaje de ellas, fue un acuerdo de palabra, se materializaría a través de una cuenta en participación mediante una anotación contable; se pactó un 25 a 30%; se le incluyó en el directorio de la empresa porque era la mejor forma de justificar “en el futuro” cualquier pago que se le llegara a hacer.*

A mayor abundamiento, se demostró que tampoco fue cierta su negativa respecto a la representación de la empresa que le habría dado a Rojas. En efecto, consta de la prueba documental N° 843, de la fiscalía, que el 18 de diciembre de 2013, en representación de Constructora Grossman S.A., le otorgó un poder especial a

César Rojas Gaete y otros. La veracidad del contenido del documento y su firma fueron reconocidos por el deponente, Carlos Grossman.

6ª. Por último, la **foja 1.491** del citado sumario, en la que se registra un estado de pago a la empresa Grossman correspondiente a los contratos de terminación de las obras de Isla Huar y Coyhaique Alto, fue desestimada por el tribunal, habida cuenta de su notoria impertinencia, especialmente en relación a su teoría del caso.

3) Documento **Nº 106** (prueba de la fiscalía), relacionado con cartolas, cheques, depósitos realizados desde la cuenta Banco Santander 2003676-1, del acusado César Rojas Gaete y Purísima Toledo. Al respecto, esta prueba no fue de utilidad para el tribunal ya que para su debida inteligencia eran necesarios otros medios de prueba que informasen su contenido desde un punto de vista contable, financiero o patrimonial, y no sólo literal.

4) Acerca del documento **Nº 41** (prueba de la fiscalía), consistente en un mandato general otorgado por escritura pública en favor del sentenciado Rojas, el día 24 de diciembre de 2012, por el acusado Gutiérrez, en representación de la empresa CGM Ltda., este medio de prueba resultó sobreabundante, en la medida que ya se contaba con otros que habían demostrado su existencia, la que por lo demás el propio Rojas había reconocido que existía, no obstante negar haber hecho uso del mandato, negativa que, sin embargo, desmintió por completo la prueba de cargo y alguna de descargo aportada por el sentenciado Gutiérrez.

5) Respecto de la prueba documental **Nº 11** (prueba propia de la defensa), consta de esta que el mandato en comentario fue revocado por escritura pública de 4 de julio de 2013 (*Gloria Ortiz Carmona, notario público, reportorio Nº 334-13; 4 de julio de 2013*), resultando relevante de este acto jurídico la fecha de otorgamiento del instrumento público, la que es coincidente con los hechos acaecidos en esos mismos días, en relación al retiro de \$60.000.000 desde la cuenta corriente del Banco Santander que Gutiérrez le imputó a Rojas haber realizado sin su consentimiento, y coincidente, además, especialmente, con la incorporación de Rojas al directorio de la empresa Grossman antes del quiebre, lo que demuestra sus intenciones no iban en la dirección de terminar los trabajos y cumplir con los contratos de Carabineros.

6) En cuanto a la **prueba nueva** (documento incorporado mediante el artículo 336 CPP, durante la declaración de César Rojas Gaete), consistente en una copia de escritura pública suscrita con fecha 15 de enero de 2013, ante la 13ª notaría, repertorio 265-3, denominada “prenda sin desplazamiento constructora CGM Ltda., a Sociedad Salinas y Fabres S.A.”, ésta prueba permitió desvanecer cualquier duda acerca del empleo que negó haber hecho del mandato antes mencionado. En efecto, al tenor de lo que fue su lectura se demostró el uso que hizo del poder conferido, cual gerente de la empresa: *comparece Cristian Salinas Carvallo y Sergio Yates Bravo, en representación de Salinas y Fabres S.A., en adelante la acreedora o SALFA, por una parte, y por la otra CGM Ltda., en adelante el constituyente o deudor, representado por César Orlando Rojas Gaete, chileno, constructor civil, cédula nacional de identidad N° 10.966.672-6, ambos domiciliados en ruta 150, km 10.5, sitio 12, comuna de Lampa, de tránsito en esta; cláusula 1ª) Constructora CGM Ltda. es dueña de maquinaria industrial marca John Dere, modelo 310K, número de motor PE4045G874767, color amarillo gris, año 2013, patente DTDH.36-5, en adelante el vehículo; 2ª) Por el presente instrumento CGM Ltda., constituye a favor de Salinas y Fabres S.A. prenda sin desplazamiento sobre el “vehículo”, y SALFA acepta para si la prenda sin desplazamiento; el vehículo no podría ser enajenado; cláusula 3ª) la prenda señalada se constituye con el objeto de garantizar a SALFA el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones que emanan de las letras de cambio N° 066229 y N° 066230, suscritas por el deudor el 11 de enero de 2013, cada una por \$10.689.618; personería: la de César Rojas Gaete consta en escritura pública de 24 de diciembre de 2012; firma ilegible, nombre César Orlando Rojas Gaete, estampado de huella dactilar, mismo RUT de la comparecencia; “por” Constructora CGM Ltda;*

7) Los documentos **N° 32 y 54**, correos electrónicos dirigidos por el acusado Gutiérrez a Rojas, y por Rojas a Gutiérrez, el 22 de enero 2013, el primero, y el 11 de abril de 2013, el segundo, constituyen y prueban únicamente que se comunicaban por esa vía, tanto respecto a cuestiones relacionadas con la empresa (de cgutierrez@constructoracgm.cl, a cesarRojas@vtr.net: *César, se debe adoptar una forma adecuada de comunicación en la que se mantenga el respeto. Las órdenes de compra debe firmarlas Carolina, a quien yo designé. Ignacio es el encargado de recabar antecedentes, y si yo se los pido él debe darlos. No es mi intención entorpecer el flujo de inversión*), como también sobre asuntos personales (de cesarRojas@vtr.net, a constructora CGM Ltda.: *Te*

recuerdo que debes viajar a Santiago para firmar el patrocinio al abogado que te representará en la audiencia de abril. Mañana te envío copia del documento. Firma: César Rojas Gaete);

8) En cuanto a los correos electrónicos contenidos en el acápite otros medios de prueba de la fiscalía, constó de su lectura que eran meras comunicaciones internas entre quienes trabajaban en la empresa CGM, por lo que no tuvieron mayor relevancia, salvo para confirmar que la relación de Rojas con la empresa CGM no se limitó sólo al rol de inversionista-financista que él adujo, sino que incluyó la administración de esta, como lo demuestra la circunstancia que en dos de estos correos aparece incluido el del acusado Rojas entre aquellos a quienes se enviaba copia. En cuanto inversionista-financista, estas comunicaciones internas no le competían. En cuanto administrador de facto, sí. Así consta de los correos en comentario: 1) 17 de abril 2013; de Alcides Yévenes Sanhueza a Ignacio Labra; asunto: estado de pago 1: *envío estado de pago 1 por avance calefacción Coyhaique Alto*; 2) 24 de abril 2013, de Alcides Yévenes a Ignacio Labra: *Don Ignacio, hoy no se hizo el depósito*; 3) 24 de abril de 2013; de ilabra@constructoracgm.cl a Carolina Gutiérrez, cesarRojas@vtr.net, Pedro Barra; asunto: responder a ilabra@constructoracgm.cl; 4) 6 de mayo de 2013, de carlosbustosprat@gcorreo.com, para Pedro Barra; asunto: nómina de trabajadores, con copia a cesarRojas@vtr.net, ilabra@constructoracgm.cl; 5) de 3 de mayo de 2013, de Juvenal Valderrama a carlosbustosprat@gcorreo.com; asunto: nómina de trabajadores; 6) 24 de mayo de 2013, de Carolina Gutiérrez a Cristian Gutiérrez; asunto: *compromiso de proveedores*; 7) 8 de mayo de 2013, de Pamela Beltrán a Alcides Yévenes Sanhueza; asunto: *EPP; “adjunto epp para que firme la factura*); 8) cadena de correos que se inicia el 28 de mayo de 2013, enviado por Carolina Gutiérrez a Bernardo León, con copia cgutierrez@constructora.cl; asunto: detalle de pagos Alcides Yévenes; 9) 29 de agosto de 2013, asunto: imagen de WhatsApp; De: Carlos Albistur; Para: Daniela Paz Gallardo; con copia a cgutierrez@constructoracgm.cl; 10) 19 de octubre de 2013, asunto: *asistencia a Villa Ortega*; De: Alejandro Morales Ponce, Para: Carolina Gutiérrez, Carlos Albistur, cgutierrez@constructoracgm.cl; asunto: *RV: asistencia Villa Ortega*; y,

9) **Respecto de la transcripción de dos registros de audio de los N° 16 y N° 17** de sus medios de prueba, estos fueron desestimados por tratarse de registros

de conversaciones entre el acusado Gutiérrez y terceros ajenos a los hechos de la acusación. Lo anterior, sin perjuicio de la reproducción que de tales audió se realizó en el transcurso de su declaración, los cuales resultaron inaudibles.

. **CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO:** Que, el análisis de la prueba de la defensa del sentenciado Rojas, permite señalar:

1°. En cuanto a los correos electrónico de fecha *28 de marzo de 2013, 9 de mayo de 2013, 14 de marzo de 2013 y 9 de julio de 2013*, *estos no guardan* no guardan relación con los hechos de marras, salvo el segundo, de fecha 9 de mayo, en el que el aviso que envió el acusado Pizarro al correo de CGM y de ilabra@constructoracgm.cl, anunciando que el 20 de mayo de 2013 visitaría a fiscalizar administrativa y técnicamente las obras de Villa Ortega, Isla Huar y Coyhaique Alto, fue copiado a César Rojas, de lo cual se colige que quienes participaban en el negocio tenían conocimiento de la próxima visita del ITO, lo cual refleja el grado de coordinación con el que operaban los acusados. En lo que a Rojas respecta, valga lo que se dijo a propósito de la prueba de Gutiérrez, en cuanto a la confirmación de su participación en el delito, como se desprende, entre otros varios antecedentes que han venido citándose, el hecho de habersele incluido entre los destinatarios de los correos, ya como destinatario principal, ya como destinatario secundario por vía informativa.

En cuanto a la conexión que existiría entre estos correos y el hecho que Romina Parraguez Robles fuera casada con Víctor Roberto Ortiz Oyarce (vínculo que quedó acreditado con el certificado de matrimonio de ambos que aportó al defensa como prueba nueva), al cual Pizarro le escribió para que contactara a Gutiérrez por una eventual contratación como prevencionista de riesgo en su empresa, debe señalarse que la vinculación entre ellos tres encontró explicación razonable en la declaración de la testigo y del acusado, quienes, en síntesis, dijeron haber sido amigos en esa época, por lo que, a falta de otras pruebas que hubieren corroborado que la fuente de información de Rojas no era Bustos sino Romina Parraguez, como sostuvo la defensa de Christian Bustos, y siendo el juicio de marras un juicio de pruebas, es de concluir que las probabilidades no tienen cabida como fuente de duda razonable.

2°.- En cuanto a los **documentos del N° 98** (resumen de transferencias enviadas desde la cuenta de constructora CGM, N° 45948747, banco Bci): De esta prueba no fue posible obtener conclusiones por tratarse de guarismos y nombres que al no estar conectados con otros medios de prueba que explicasen su sentido y alcance, resultaron ininteligibles para el tribunal.

3°.- En cuanto a los **documentos N° 577, prueba de la fiscalía, y N°1 de sus medios de prueba**, valga para ellos lo ya dicho en relación a la prueba documental N° 98.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, fueron las razones expuestas las que llevaron al tribunal a condenar a los acusados Francisco Pizarro, Cristian Gutiérrez, Christian Bustos y César Rojas como autores de sendos delitos consumados, continuados y reiterados de fraude al Fisco. La calificación de delitos continuados y reiterados obedece a que fueron cuatro los proyectos de construcción y a que en cada uno de ellos se realizaron conductas tendientes a un mismo objetivo, como era el que cada acusado se beneficiara. Respecto del beneficio que perseguían los acusados, el tribunal ya se pronunció con anterioridad.

Ahora bien, cada proyecto de reposición de cuarteles tenía asignado un monto de dinero que estaba destinado a sufragar los costos de las obras y remunerar al contratista. Estos pagos debían hacerse en parcialidades, conforme al avance de las obras. Estaba previsto por Rojas remunerarse en un cierto porcentaje calculado sobre el monto asignado a cada proyecto, para lo cual se hacía pagar con cargo a los estados de pago que se iban generando a lo largo del tiempo, pero además, con cargo a estos mismos disponía cuánto dinero retornar a los falsos inversionistas, “A” y “B”, por sus inexistentes inversiones. A su turno, Gutiérrez percibía dineros en cada estado de pago, con cargo al cual él, al igual que los otros dos, se hacía pago de sus honorarios. Una vez concluidas las obras el proyecto habría redituado a cada acusado el total de lo que esperaba obtener en cada proyecto, independientemente el uno del otro.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, respecto del delito continuado, huelga referirse mayormente a él en lo que respecta al hecho de no encontrarse recogido en nuestra legislación y de su amplia aceptación tanto por la doctrina

como la jurisprudencia. Acerca de esta última Etcheberry señala: “Nuestra jurisprudencia se ha dividido en torno a su reconocimiento, pero además suele dar el nombre de delito continuado, y tratar como un solo delito, a una situación particular que se presenta cuando está acreditado que el resultado delictivo final se produjo a través de varios actos separados en el tiempo, pero es imposible determinar el número de estos actos y la fracción o parte del resultado que se produjo en cada uno de ellos. Esto ocurre, como se comprende, particularmente en los delitos no violentos contra la propiedad o de significación patrimonial, como estafas, apropiaciones indebidas, hurtos o malversaciones” (ETCHEBERRY O., ALFREDO, *“El Derecho Penal en la Jurisprudencia”, Tomo IV, página 189, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición, enero 2002*).

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, el instituto en cuestión se ha venido empleando desde hace años de manera que no cabe dudar de su aplicación, en la medida que en los hechos se hallen presentes los requisitos que uniformemente exige la jurisprudencia: 1°) fraccionamiento de la conducta (fraccionamiento externo de los actos, o pluralidad de acciones delictuales, o conexión entre las acciones); 2°) unidad de resolución criminal (o unidad de propósito criminal); 3°) identidad de bien jurídico o precepto violado (o unidad de lesión jurídica); 4°) violación por un mismo individuo de una idéntica norma penal (unidad de sujeto activo y pasivo).

La Corte Suprema, a fin de descartar el delito continuado y confirmar que se trataba de delitos reiterados, resolvió: “Es cierto también que este Tribunal ha aceptado excepcionalmente la existencia del delito continuado, pero en tal caso se debió (sic) a que *no fue posible establecer que se sustrajeron en una o en múltiples ocasiones diferentes cantidades de dinero, o que en un día determinado se sustrajo una cantidad de dinero también determinada, por lo que no fue posible constatar los diversos actos de apropiación por parte del agente, individualizados en la forma y en el tiempo. Pero en el caso de autos, cada uno de los actos delictivos está debidamente determinado en su monto, en su época y respecto de las distintas personas que, haciendo confianza en el reo, le entregaron sus cheques.... De este modo, han quedado perfectamente determinados todos esos actos delictivos y su reiteración, por lo que no sería posible todos esos hechos punibles como un solo delito continuado.*” (ETCHEBERRY O., ALFREDO, *“El Derecho Penal en la Jurisprudencia”, Tomo IV, páginas 193 y 531, Editorial*

Jurídica de Chile, segunda edición, enero 2002, SCS, contra CARLOS HETTICH N.).

En esa línea la Corte ha dicho que procede dar aplicación al instituto delito continuado *“cuando no pueden ser fijadas con exactitud las fechas de comisión de los distintos hechos delictivos que integran el acto delictuoso, ni puede ser individualizado su número, el valor de lo sustraído en cada ocasión o cualquiera otra modalidad que pueda particularizar cada una de las partidas en que se fraccionó la realización de la totalidad del acto delictuoso”* (ETCHEBERRY O., ALFREDO, *“El Derecho Penal en la Jurisprudencia”*, Tomo IV, página 193, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición, enero 2002, SCS, contra ENRIQUE ARNOLDO MARDONES CASTRO).

En la especie, no quedan dudas que los hechos de marras satisfacen los requisitos indicados, y que por tanto deben ser calificados, en lo que a cada proyecto de construcción se refiere, como delito continuado, sin perjuicio que por haber sido cuatro los proyectos, se cometieron cuatro delitos (uno por cada proyecto), de manera que deben castigarse como delitos reiterados de fraude al Fisco y fijar el quantum de pena con arreglo al artículo 74 del Código Penal o, si fuere más favorable a los sentenciados, al artículo 351 del Código Procesal Penal, por tratarse de delitos de la misma especie.

2.2. Cohecho y soborno. Absolución.

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO: Que, en cuanto a los delitos de fraude al Fisco cometidos en relación a los cuarteles tantas veces mencionados, los enjuiciados Christian Bustos, Cristian Gutiérrez y César Rojas, fueron acusados, además, como autores de los delitos de cohecho, el primero, y soborno los dos últimos, por los cuales fueron absueltos en atención a las siguientes consideraciones:

1°. En cuanto a Rojas: el tribunal hizo suyos los argumentos de su defensa en cuanto a que efectivamente no hubo pruebas que demostraran que Rojas entregó o dió dineros al entonces jefe del Departamento, Félix Flores, ni tampoco al acusado Bustos. Al efecto:

1) Entrega de dineros a Bustos:

Sostuvo la fiscalía que Rojas se transfirió desde la cuentade CGM a la suya la cantidad de \$4.000.000, proveniente de un reciente estado de pago, dinero que retiró al día siguiente de la transferencia, para lo cual giró a su nombre un cheque por \$4.065.000, el que cobró por ventanilla, el cual habría posteriormente se lo entregó en dinero efectivo al acusado Bustos.

Acerca de lo anterior, la defensa reclamó acertadamente: primero, que se trataba de una imputación no contenida en la acusación; segundo, que esa imputación, por vía de conjetura, no podía incorporarse a través de los alegatos de cierre; y, tercero, que se afectaría gravemente el derecho a defensa si el hecho en cuestión se entendiese incluído en la frase, “por vía de ejemplo”, que utilizó la acusación para referirse específicamente a una (1) transferencia de dinero, entre Rojas y Flores. Sobre el particular el tribunal coincidió con estas objeciones, las que acogió, desestimando por tanto la imputación de este hecho. En tal sentido se comparte la conclusión de indefensión que sostuvo la defensa, pues, efectivamente, la expresión, “por vía de ejemplo”, que se usó para citar un (1) caso, impide defenderse de otros que no se señalan pero que se quisieran incluir al amparo de esa frase.

Lo anterior, sin perjuicio de la flagrante infracción en que se incurriría en relación al principio de congruencia, esto para el caso que el tribunal dictase condena, toda vez que lo estaría haciendo respecto a hechos no contenidos en la acusación.

Con todo, puede señalarse que la afirmación que hizo la fiscalía constituye una conjetura de su parte, pero sin otro respaldo que sus dichos. Acerca de esto, lo único cierto termina siendo que Rojas obtuvo esa cantidad de dinero girando dicho documento contra su propia cuenta corriente, después de haberse transferido \$4.000.000 desde la cuenta corriente de la empresa CGM a la suya. a la conclusión única de que ese dinero sea la prueba de la inocencia de estos acusados;

2) Entrega de dineros a Félix Flores:

Sostuvo la fiscalía la existencia de una transferencia de \$1.000.000 a la cuenta corriente del ex Coronel Félix Flores, que Rojas había realizado desde su cuenta corriente.

El tribunal desestimó esa operación como prueba del delito de soborno, habida cuenta que acerca de esa transferencia el acusado Rojas proporcionó un argumento plausible, como fue que ese dinero correspondía al pago de un mueble que le había vendido Flores, lo que resultó verosímil pues el mueble, meses después de la transferencia de dinero, fue hallado en posesión de Rojas.

Por otro lado, si bien el hecho de la transferencia de dinero quedó demostrado con las pruebas de cargo, no hubo, sin embargo, otras que corroboraran que ese dinero correspondía al soborno de Flores por haber hecho posible la inscripción de la empresa Grossman S.A., de la que Rojas era uno de sus directores, en el Registro de Contratistas de Carabineros, dejándola de esa forma en condiciones de adjudicársele la terminación de los trabajos de Isla Huar y Coyhaique Alto. No obsta a lo dicho, la circunstancia de que la transferencia de dinero se haya efectuado escasos días después de efectuarse la inscripción;

2°. En cuanto al acusado Gutiérrez: no se probó que las acciones u omisiones en que incurrieron Bustos y Pizarro, hubieren sido el resultado de haberseles ofrecido o consentido en darles un beneficio económico.

En efecto, si bien las conductas de Bustos y Pizarro fueron constitutivas de fraude al Fisco, no se comprobó, sin embargo, que sus acciones u omisiones hubieren sido precedidas de ofrecimientos de Gutiérrez, en orden a darles o consentir en darles algo, ni tampoco sucedidas de dádivas por haberlas realizado o incurrido en ellas.

Aunque el tipo penal del delito de fraude vigente a la época de los hechos no exigía que el sujeto activo obtuviese algún beneficio económico a cambio de defraudar o consentir que se defraudara, no ocurría lo mismo con el delito de soborno, en que el beneficio económico constituía un elemento del tipo. En el caso *sub lite*, no constan las dádivas que Gutiérrez habría dado a esos dos funcionarios públicos, ni tampoco promesa alguna de su parte en dárselas, debiendo en todo caso descartarse como beneficio económico constitutivo de soborno los

alojamientos de Pizarro en el hotel Dreams, por las razones que anteriormente se expusieron a propósito del delito de fraude.

Con todo, si fuere el caso que se estimase constitutivo de beneficio económico la favorable consecuencia pecuniaria que podría haber traído aparejado el ascenso que propuso Bustos para Pizarro en la calificación funcionaria del año 2013, habría igualmente de prescindirse de ello por no provenir dicha proposición del sujeto activo que indica el artículo 250 (“El que...”), entendiendo la propuesta como el cumplimiento de una promesa potencial para la obtención de un beneficio futuro. En otras palabras, promesas o dádivas de un funcionario público a otro no eran (son) constitutivas del delito de soborno del artículo 250 del Código penal (vigente a la época de los hechos); y,

3°. En cuanto al acusado Christian Bustos: valga lo dicho antes a propósito del acusado César Rojas, en el sentido que respecto de éste no se probó que Bustos hubiere sido el destinatario final de los \$4.065.000 que Rojas retiró personalmente, por ventanilla. Si no se probó que este último le entregó ese dinero a Bustos, tampoco podía probarse que éste lo hubiere recibido.

En lo que dice relación al delito de soborno que Gutiérrez podría haber cometido, por haber dado o prometido dar un beneficio económico a Bustos a cambio de sus acciones y omisiones, es del caso que no hubo pruebas de ello, ni tampoco prueba de que entre ambos hubiere habido más contacto que las veces en que coincidieron en el lugar en que se ejecutaban las obras o en el Departamento Cuarteles.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO PRIMERO: Que, la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado en conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 número 9, 6, 18 y 24 del D.F.L. (H) N°1 de 1993, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado; artículos 59, 60 y 261 del Código Procesal Penal; artículos 1.437, 2.314, 2.316, 2.317 y 2.329 del Código Civil; y artículo 254 del Código de Procedimiento Civil interpuso demanda de indemnización de perjuicios, respecto de los delitos signados en la acusación como hecho 1, en contra de los acusados Francisco Jose Pizarro Dasso, Cristian Andrés Gutierrez

Martínez, César Orlando Rojas Gaete y Christian Patricio Bustos Morgado, que emana de su calidad de autores de los delitos por los cuales se les ha acusado, en mérito de los hechos constitutivos de los mismos que se consignan en la acusación y que configuran ilícitos reiterados de fraude al Fisco, cohecho y soborno, previstos y sancionados en los artículos 239, 248 bis y 250 todos del Código Penal, respectivamente, según se explicó en cada caso, cometido por los acusados y demandados y en grado de desarrollo de consumado. El Fisco de Chile ha sido afectado patrimonialmente producto de la comisión de los ilícitos, naciendo la obligación civil de los demandados de indemnizar íntegramente los perjuicios causados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.437, 2.314, 2.316, 2.317 y 2.329 del Código Civil, siendo los demandados plenamente capaces e imputables, existiendo una directa relación de causa a efecto entre el actuar dañoso e ilícito. Los demandados están obligados a la reparación íntegra de los perjuicios por lo que solicita condenar solidariamente a Francisco Jose Pizarro Dasso, Cristian Andres Gutierrez Martínez, César Orlando Rojas Gaete, Christian Patricio Bustos Morgado a pagar la suma de \$504.498.310 (quinientos cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos diez pesos) cantidad que debe ser reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor I.P.C., contados desde la fecha en que ocurrieron los hechos y hasta la fecha del pago efectivo y al pago de los intereses corrientes desde que incurran en mora en el pago de dicha cantidad, esto es, desde el día siguiente a aquél en el cual quede ejecutoriada la sentencia y la del pago efectivo de las mismas, aplicado sobre las sumas demandadas debidamente reajustadas, con costas.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: La defensa de Christian Bustos Morgado solicitó el rechazo de la demanda civil fundado en que operó íntegramente la prescripción extintiva de cuatro años, considerando para ello que dicho plazo venció el año 2017, toda vez que los últimos hechos son de octubre o noviembre de 2013.

EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, ha de tenerse presente que el último cheque correspondiente a pagos por avance de obra fue el octavo estado de pago del proyecto de reposición del retén Isla Huar correspondiente a la factura

N° 69 de fecha 3 de septiembre de 2013 por la suma de \$44.622.227, la que se canceló mediante cheque N° 280 del Banco Estado de la cuenta corriente N° 9002600, emitido el 17 de octubre de 2013, fecha desde la cual debe contarse el plazo de prescripción por ser la fecha en que se consumó el último ilícito, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil que establece un plazo de prescripción de cuatro años para el caso de daño que provenga de un delito, contado desde la perpetración del acto. Ello además en concordancia con el artículo 96 del Código Penal que establece que la prescripción se interrumpe perdiéndose el tiempo transcurrido siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito.

El artículo 60 del Código Procesal Penal señala que la demanda civil en el procedimiento penal deberá deducirse por el querellante juntamente con su escrito de adhesión o acusación, lo que sucedió, conforme da cuenta el auto de apertura, con fecha 7 de junio de 2019.

Por su parte, el artículo 61 del referido Código indica que la preparación de la demanda civil interrumpe la prescripción.

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO CUARTO: Que, consta de los audios de formalización que fueron incorporados al juicio, que el Consejo de Defensa del Estado concurrió a dichas audiencias como querellante. La primera formalización fue por cuatro delitos de fraudes al Fisco en contra de Bustos, Pizarro, Rojas y Gutiérrez, y tuvo lugar en audiencia de fecha 28 de septiembre de 2016.

Es del caso que el Consejo de Defensa del Estado se querelló solicitando diligencias para acreditar los hechos fundantes de su demanda civil, por lo que concurre el supuesto del citado artículo 61 de preparación de la demanda civil y la interrupción hizo perder todo el tiempo transcurrido.

Así las cosas, desde el 17 de octubre de 2013, en que comenzó a correr el plazo de prescripción, y la primera formalización, el 28 de septiembre de 2016, no habían transcurrido cuatro años. Luego que operó la interrupción en dicha fecha y comenzó a correr un nuevo plazo, se interpuso la acción civil de indemnización de perjuicios el 7 de junio de 2019, habiendo transcurrido menos de cuatro años, por

lo cual la demanda fue interpuesta dentro de plazo y procede por tanto rechazar la alegación de la defensa de haber operado la prescripción.

EN CUANTO AL FONDO

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO QUINTO: Que, respecto a la legitimación activa, el artículo 109 del Código Procesal Penal entre los derechos que reconoce a la víctima esta el de intervenir en el procedimiento penal y ejercer contra el imputado las acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible, idea que es reiterada en el artículo 59, inciso 2º, del referido cuerpo legal.

Por su parte la letra d) del artículo 261 el Código Procesal Penal, expresamente dispone la facultad que existe respecto al querellante para deducir en autos su demanda civil.

Ahora bien, al Consejo de Defensa del Estado, conforme dispone el D.F.L. N°1 de fecha 28 de Julio de 1993, le corresponde ejercer la acción penal tratándose de delitos que pudieran acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado, y como indica el artículo 3, numeral 9, del citado decreto, también le corresponde el ejercicio de la acción civil que nazca de los delitos en que el Consejo haya sostenido la acción penal, cuando ello sea conveniente para el interés del Estado. En este caso fue directamente ofendido por los ilícitos al haber sufrido un detrimento patrimonial con motivo de los delitos, por lo que siendo víctima está habilitada para demandar.

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que, en cuanto a la legitimación pasiva, Christian Bustos, César Rojas, Cristian Gutiérrez y Francisco Pizarro fueron imputados en esta causa y condenados como autores de cuatro delitos del fraude al Fisco y en dicha calidad están obligados a responder del daño causado por su actuar, siendo procedente la demanda que se ha dirigido en su contra.

En efecto el artículo 59 del Código Procesal Penal se refiere a la acción civil que la víctima ejercita en contra del imputado, ello en concordancia con lo dispuesto en *el artículo 2.314 del Código Civil, que dispone:* “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización;

sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”, indemnización que debe ser completa, abarcar todo el daño causado.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, respecto a la acreditación del daño causado producto de los delitos, se estableció que Carabineros de Chile pagó en los proyectos Villa Ortega, Lago Castor, Isla Huar y Coyhaique Alto por trabajos no ejecutados por la empresa CGM, esto sobre la base de estados de pago falsos que autorizó el ITO de las obras por instrucciones del jefe de área de Cuarteles. Los proyectos no fueron terminados por la empresa CGM ni por la empresa que se adjudicó la terminación del retén Isla Huar y tenencia Coyhaique Alto.

Lo que ocurrió entonces fue que parte del presupuesto, en cada uno de las obras, no se destinó al fin propuesto en los contratos de adjudicación, que contemplaban la posibilidad de pagos parciales pero siempre en razón del porcentaje de obra ejecutada, estableciéndose con la prueba rendida el monto de los dineros pagados en exceso, los que, de haberse sujetado los funcionarios públicos involucrados al fiel cumplimiento del contrato y sus obligaciones, nunca debieron haber salido de las arcas fiscales, DILOCAR, a la empresa encargada de la construcción o a la empresa de factoring, conducta que provocó un perjuicio patrimonial al Fisco.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Que, respecto de la reposición del retén Lago Castor, conforme a lo declarado por José Muñoz Soto, Juan Francisco Socías Vargas y Jorge Santis Rebolledo, y lo consignado en el informe técnico N° 125, de fecha 17 de febrero de 2014, se pudo establecer que se pagó en exceso, por partidas no ejecutadas, \$166.605.221, suma a la que se descontará el monto de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato por \$19.457.868 que son dineros de la empresa que son ejecutables en caso de incumplimiento, determinándose el perjuicio causado en la suma de \$147.147.353.

En cuanto al retén Isla Huar, los testigos antes referidos y lo establecido en el informe técnico N° 127, de 17 de febrero de 2014, se estableció un pago en exceso por partidas no ejecutadas por \$159.633.749, monto al que se le descontará la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato por la suma de \$18.669.500, que de acuerdo con la Resolución Exenta N° 851, de fecha 30 de

octubre de 2013, se hizo efectiva y son dineros de la empresa que en caso de incumplimiento se destinan al termino de las obras, quedando determinado el total del perjuicio en \$140.964.249.

Relativo al proyecto de Coyhaique Alto, los mismos testigos, unido al informe técnico N° 126, de fecha 17 de febrero de 2014, permitieron acreditar que el exceso de pago por partidas no ejecutadas fue de \$126.296.000, monto al que se le descontará la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato por la suma de \$ 19.550.000, que de acuerdo con la Resolución Exenta N° 859, de fecha 30 de octubre de 2013, se hizo efectiva y son dineros de la empresa que en caso de incumplimiento se destinan al termino de las obras, quedando determinado el total del perjuicio en \$106.746.000.

Si bien en estos dos últimos proyectos se hizo el informe cuando se encontraba trabajando en las obras la empresa Grossman, es del caso que a ésta no se le efectuó pago alguno, de manera que no existe posibilidad de haber considerado partidas no ejecutadas pagadas a otra empresa.

CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que, finalmente, en relación con el proyecto retén Villa Ortega, fue del caso que se le pagó a la empresa CGM el 100% del dinero asignado a las obras, se le hizo devolución de las retenciones y de la boleta de garantía, y como las obras no estaban íntegramente concluidas se utilizaron fondos fiscales para que personal del Departamento Cuarteles fuera a terminar los trabajos inconclusos, de lo que dieron cuenta el acusado Francisco Pizarro, el carpintero Jaime Meliqueo Neico y el soldador Ricardo Parra Ortega, quienes refirieron los trabajos que desarrollaron y los materiales empleados.

Se acreditó el monto de los gastos en que dicha comisión incurrió, a saber: 1) orden de compra de la Dirección General de Carabineros de Chile sección gestión financiera a SKY Airleine S.A., de fecha 6 de noviembre de 2013, por la adquisición de 7 pasajes aéreos por un total de \$1.579.137; 2) planilla de personal de Cuarteles que concurrió a Villa Ortega (David Acevedo, Leandro Donoso, Juan Jeldres, Ricardo Parra, Jaime Meliqueo, Walter Ávila y Francisco Pizarro); y, 3) planilla de viáticos devengados por el personal referido, emitida por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de DILOCAR, con fecha 31 de diciembre de 2013, que en total ascendió a la suma de \$2.607.989.

Se contó también con el acta de entrega de materiales de fecha 6 de noviembre de 2013, en la que se dejó constancia de distintos materiales de construcción que serían utilizados en casa anexa y retén Villa Ortega para reparación y mejoras, como también de que se accedió a la entrega por orden superior: *Entrega el cabo primero de carabineros Leandro Donoso, encargado de bodega*. En relación con dichos materiales, y a fin de avaluarlos, se acompañaron dos cotizaciones de fecha 10 de noviembre de 2017 de la empresa Sodimac, uno por \$2.388.197 y el otro por \$1.088.260. Asimismo, se obtuvo y acompañó otra cotización, esta vez de la empresa Easy, por la suma de \$2.674.986. Al efecto, y a falta de otros antecedentes que justifiquen el mayor valor de los dos primeros, el tribunal optará por el de la empresa Easy, por ser más económico.

Conforme a lo expuesto, se determinó que en el caso del retén Villa Ortega el monto del perjuicio fiscal ascendió, a lo menos, a la cantidad de \$7.663.573, suma que corresponde a lo que se acreditó que debió gastarse para completar las obras que no ejecutó la empresa CGM, no obstante haber cobrado y recibido el dinero equivalente al total de estas obras.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO: Que, la relación causal del daño con el perjuicio aparece de manifiesto porque las actuaciones realizadas por los cuatro demandados, Gutiérrez y Rojas conociendo, aprobando y solicitando estados de pago por montos superiores a lo que sabían estaba construido, y Bustos y Pizarro desde el interior de Cuarteles realizando acciones directas e incumpliendo sus deberes del cargo, permitieron que salieran de las arcas fiscales dineros que nunca debieron ser pagados a la empresa CGM, toda vez que no correspondían a montos que se le adeudaran por trabajos efectivamente realizados.

Corresponde en este caso, en el que son cuatro personas las que cometieron los ilícitos, que de conformidad con el artículo 2.317 del Código Civil, que cada una de ellas sea solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del delito.

La suma total a que serán condenados los demandados deberá ser reajustada conforme a la variación del IPC desde la fecha en que ocurrieron los hechos y hasta el pago efectivo, además del pago de intereses corrientes desde que se constituyan en mora y hasta el pago efectivo de lo adeudado.

HECHO 2:

COHECHO Y SOBORNO.

CENTÉSIMO SEXAGÉMINO PRIMERO: Que, las pruebas aportadas en relación con los delitos de cohecho y soborno que se describen en el “Hecho 2”, demostraron que efectivamente estos acaecieron, de la manera y en las circunstancias que se indican en la acusación.

Cabe destacar que el contexto en que tuvieron lugar estos delitos fue el mismo que el de los delitos del “Hecho 1”, esto es, que a partir del año 2012, Carabineros de Chile dio inicio a un proceso de reparación y reposición de cuarteles policiales a lo largo del país, en el que la planificación, los llamados a licitación y la fiscalización del cumplimiento de los contratos estuvo a cargo del Departamento Cuarteles, dependiente del Departamento de Logística de Carabineros.

A diferencia de los proyectos de los cuatro cuarteles policiales del “Hecho 1”, los referentes al “Hecho 2” se desarrollaron en la VI región, siendo estos proyectos los de reposición de los retenes Loica, Hualañé, coronel del Maule, Itahue, Lontué, la Islita y la subcomisaría San Francisco de Mostazal. Los dos primeros fueron adjudicados el año 2011, a la Sociedad Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara, nombre de fantasía “FEALFRA EIRL”, representada legalmente por Juan Alejandro Soto Jara. La adjudicación de los demás proyectos tuvo lugar en los años 2012 y 2013, y la adjudicataria fue la empresa FEALFRA SPA, representada por Osvaldo Tobar Fernández, continuadora de FEALFRA EIRL.

La autoría de estos delitos se atribuyó a los acusados Christian Bustos Morgado, Nelson Bustos Morgado y Rodrigo Bustos Morgado.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, del tenor de la acusación consta que se imputaron a los acusados una serie de hechos, los cuales, como se verá, fueron demostrados con las pruebas proporcionadas por los intervinientes, a las que el tribunal se referirá en lo que sigue.

Lo anterior, sin perjuicio que la defensa no controvertió de manera sustancial los hechos que indica la acusación como “Hecho 2”, limitándose a realizar alegaciones vinculadas: primero, con cuestiones de orden *formal*, como denominó lo relativo a las infracciones de los debres del cargo que habría incumplido el acusado Christian Bustos, toda vez que no habrían sido indicadas en la acusación, sino sólo en los alegatos de clausura de la fiscalía, en que referió al deber de abstención; y, segundo, alegaciones en torno a la interpretación de los efectos que habrían producido, o dejado de producir, las pruebas que se rindieron en el juicio.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO TERCERO: Que, en la acusación se dijo, y se probó, que desde el año 2011 a 2013, Christian Bustos Morgado, en su calidad de Jefe de Área de Coordinación, Ejecución y Gestión de Proyectos del Departamento Cuarteles L1, intervino en la adjudicación de los mencionados proyectos de reposición de retenes al integrar las respectivas Comisiones Evaluadoras y posteriormente recomendar su adjudicación a las empresas “Juan Alejandro Soto Jara EIRL”, nombre de fantasía “FEALFRA E.I.R.L.”, cuyo dueño, hasta el día 29 de febrero de 2012, era Juan Alejandro Soto Jara, y a la Sociedad Constructora “FEALFRA SPA”, RUT 76.071.037-7, de propiedad de Osvaldo Tobar Fernández.

Al efecto:

1°. En cuanto a que, a la época de los hechos Christian Bustos Morgado habría sido el jefe de Área, este hecho fue reconocido por el propio acusado y, además, acreditado con las declaraciones de los testigos que depusieron en relación al “hecho 1”, quienes dieron cuenta del arribo del ex Comandante Bustos al Departamento Cuarteles como jefe de esa Área, en el año 2010 en el que se mantuvo hasta el mes de enero del año 2014, en que fue trasladado a otra dependencia institucional;

2°. Respecto a la intervención del acusado Christian Bustos en la adjudicación de los proyectos de reposición, se comprobó fehacientemente que éste formó parte de las Comisiones Evaluadoras que se crearon para tales efectos, las cuales posteriormente emitían los correspondientes Informes Técnicos recomendando a cuál empresa adjudicar el respectivo proyecto, a saber: 1) empresa Juan Alejandro Soto Jara EIRL, nombre de fantasía “FEALFRA EIRL” (Informes Técnicos N° 117,

de 24 de marzo de 2011, y N° 750, de 3 de octubre de 2011, retenes Loica y Hualañé, respectivamente); y, 2) empresa constructora “FEALFRA SPA” (Informes N° 848, de 10 de septiembre de 2012, N°846 y N°847, ambos de 6 de septiembre de 2012, N° 339, de 10 de abril de 2013, y N°5, de fecha 14 de agosto de 2012) correspondientes a los proyectos Coronel del Maule, Itahue, Lontué, La Isleta y Subcomisaría San Francisco de Mostazal, respectivamente). La participación del acusado aparece registrada en el documento con su Visto Bueno (V°B°).

3°. En relación a que los propietarios de las citadas empresas eran Juan Alejandro Soto Jara, en el caso de FEALFRA EIRL, y Osvaldo Tobar Fernández, en el de FEALFRA SPA, se probó: 1) con las declaraciones de Juan Alejandro Soto Jara y de Osvaldo Tobar Fernández, quienes declararon: el primero, que había constituido la empresa FEALFRA EIRL el año 2009, y que posteriormente, el año 2012, a instancia de Rodrigo Bustos Morgado, tuvo que vendérsela a Tobar Fernández; el segundo declaró que el año 2012, a instancia de Rodrigo Bustos Morgado, compró la empresa FEALFRA EIRL a Juan Soto Jara y se modificó la razón social a FEALFRA SPA; 2) con la prueba documental N° 25 y N° 27, de la fiscalía:

Copia de escritura pública de fecha 29 de febrero de 2012, que puso término a la empresa individual de responsabilidad limitada Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara EIRL y se constituyó la sociedad por acciones Constructora FEALFRA SPA. Juan Soto transfiere el 87% de sus derechos sociales a Osvaldo Tobar Fernandez y se estableció una administración provisoria por un directorio compuesto por Osvaldo Tobar Fernández, José Vargas Silva y Alejandro Soto Jara, fijando la sociedad domicilio en Viña del Mar. Dicho documento fue exhibido a Osvaldo Tobar y Juan Soto, siendo reconocido por ambos, indicando Juan Soto que no se le pagó la suma indicada en el contrato por el traspaso, hubo un compromiso de devolverle la empresa y finalmente fue presionado para ceder el porcentaje mínimo que le quedó. Lo dicho resultó concordante con el documento que se incorporó y el mismo reconoció, relativo a la compra venta de acciones, de fecha 1 de mayo de 2012 en que Juan Soto vende 1.300 acciones de FEALFRA SPA a Miguel Torrejón en \$3.900.000

Da cuenta la escritura pública de fecha 23 de julio de 2012 que en acta de sesión de directorio de la Sociedad FEALFRA SPA de fecha 5 de julio

de 2012 fue designado por el directorio conformado por Miguel Torrejón Mendoza, Francisco Fuentes Vilches y Osvaldo Tobar Fernande que se designa generente General a Osvaldo Tobar.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO CUARTO: Que, en la acusación se dijo que en las licitaciones en las que participó la empresa Juan Alejandro Soto Jara EIRL, el acusado Christian Bustos había integrado las Comisiones Evaluadoras, lo cual resulta cierto en todos los casos que se citan, a excepción del retén Hualañé, toda vez que a esa época se encontraba haciendo uso de licencia médica, lo que sin embargo no lo inhibió de intervenir de facto, y por tanto indebida e ilícitamente, ordenando a la presidente de la Comisión y a sus miembros que pidieran *aclaratorias* a fin de que la licitación no fuese declarada desierta, que la empresa FEALFRA EIRL pudiese cumplir todas las exigencias de las bases de licitación y de esa manera adjudicarse la licitación, toda vez que ya se sabía que su oferta económica era la más baja.

En cuanto los demás proyectos, estos fueron:

1º) Reposición Retén Loica (ID 3172-14LP11): monto asignado \$234.071.395, Informe Técnico de Evaluación N° 117, de 24 de marzo del año 2011, suscrito por el imputado Christian Bustos Morgado, adjudicado a FEALFRA EIRL mediante Resolución Exenta DILOCAR N° 340.

Lo dicho consta en Resolución Exenta N°340 DILOCAR de fecha 1º de abril de 2011 que adjudica licitación pública de reposición retén Loica a la empresa contratista Juan Alejandro Soto Jara EIRL, representada por Juan Alejandro Soto Jara, por la suma única de \$234.071.395 y con un plazo ejecución de 130 días corridos; y en el contrato de obras celebrado con fecha 30 de abril de 2011 entre Carabineros de Chile y Sociedad Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara EIRL o FEALFRA EIRL. suscrito por Eduardo Muñoz Poblete, Director de Logística, General Inspector de Carabineros y Osvaldo Tobar Fernández en representación de la sociedad. Precio de la obra \$234.071.395, plazo de ejecución 130 días corridos desde fecha acta de entrega. Se entrega boleta de garantía de fiel cumplimiento equivalente al el 10% del valor total de la obra, esto es, \$23.407.140;

E informe técnico de evaluación de ofertas presentadas, oficio N°117 de fecha 24 de marzo de 2011, el que consigna que se presentaron como oferentes Constructora FEALFRA, Proas Limitada, Altosur Limitada y Alerco Limitada. No hubo rechazos en acto de apertura. Las empresas cumplen con la documentación jurídica requerida. Evaluación financiera y técnica no presentan observaciones. Evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. Consta tabla de evaluación comparativa de oferta. FEALFRA tiene un puntaje de 102,22%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA por ser la empresa que cumple todos los requisitos exigidos. Firmado por Fabián Gutiérrez Salazar, Romina Parraguez Robles, Patricia Albornoz Venegas y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de proyectos, firma entre la sigla VB.

2°) Reposición Retén Hualañé (ID 3172-143LP11) (monto asignado \$287.715.531: Informe Técnico de Evaluación N° 750, de 3 de octubre del año 2011, suscrito por el acusado Christian Bustos Morgado, adjudicado a FEALFRA EIRL por Resolución Exenta de DILOCAR N°1.247, de fecha 19 de octubre de 2011.

Lo dicho consta en la **documental N°827 y N° 586**: 1) Informe técnico N° 750 de ofertas presentadas en la licitación del proyecto de reposición tenencia Hualañé, de fecha 3 de octubre de 2011, que da cuenta de la evaluación de 4 ofertas recibidas (entre ellas FEALFRA E.I.R.L), todas las cuales fueron rechazadas técnicamente, estimando la comisión evaluadora que correspondía declarar desierta la licitación porque las empresas no ofertaron partidas por tanto no procede solicitar aclaratorias. Se representa la orden verbal emanada del Teniente coronel Christian Bustos, en cuanto a que la totalidad de las empresas presentaron deficiencias en su oferta, disponiendo solicitar aclaratorias sin modificar precio ni plazo, ya que se encontraban todas en igualdad de condiciones. La orden nace producto que los recursos económicos asociados al proyecto corresponden al año presupuestario 2011, los cuales deben ser comprometidos mediante firma de contrato. Firmado por los arquitectos Juan Socias Vargas, Fabián Gutiérrez Salazar, ingeniero civil Romina Parraguez Robles, abogada María Cabello Pino abogada, y capitán de carabineros Patricia Albornoz Venegas, oficina control de proyectos; y, 2) Contrato de obras de fecha 7

de noviembre de 2011 entre Carabineros de Chile y Sociedad Constructora e Inversiones Juan Alejandro Soto Jara o FEALFRA EIRL, suscrito por Eduardo Muñoz Poblete Director de Logística, General Inspector de Carabineros y en representación de la sociedad, Osvaldo Tobar Fernández. Precio de la obra \$287.715.531, plazo de ejecución 100 días corridos desde fecha acta de entrega. Boleta de Garantía de fiel cumplimiento el 5% del valor total de la obra, se entrega boleta por \$14.385.77.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, además, en la acusación se dijo, y se acreditó, que en las licitaciones en las que participó la empresa FEALFRA SPA, el acusado Christian Bustos integró las Comisiones Evaluadoras, las cuales, en sus Informes Técnicos, suscritos por los miembros de la Comisión y visados por él, recomendaron adjudicar las obras a dicha empresa. Estos proyectos e Informes Técnicos fueron los siguientes:

1) Proyecto retén coronel del Maule (ID 3172-95-LP12) (monto asignado \$214.999.954): Informe Técnico de Evaluación N° 848, de fecha 10 de septiembre de 2012; adjudicado por Resolución Exenta DILOCAR N° 980, de fecha 14 de septiembre de 2012.

Así consta de la prueba documental N°655 y N°656 de la fiscalía: Resolución Exenta N° 980 de fecha 14 de septiembre de 2012 que se adjudica la licitación pública del proyecto Coronel del Maule a la empresa contratista constructora FEALFRA SPA representada por Osvaldo Tobar Fernández por la suma única de \$214.999.954, con un plazo de 100 días corridos. Firma Jorge Rojas Langer, General, Director Nacional de Logística; e Informe técnico de evaluación de propuestas N° 848 de fecha 10 de septiembre de 2012, en el que se indica que hubo 5 oferentes Constructora FEALFRA, Olga Garfias Fuentes, Constructora Alto Sur, Constructora Ricardo Fernández y Constructora Proas Ltda. No hubo empresas rechazadas en acto de apertura ni administrativamente. Evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. Consta tabla comparativa de ofertas, teniendo FEALFRA el puntaje más alto 101%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA. Firmado por Juan Francisco Socías Vargas arquitecto, Fabián Gutiérrez Salazar arquitecto, Romina Parraguez Robles

ingeniero civil, Isabel Ojeda Palma abogado y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de proyectos.

2) Proyecto retén Itahue (ID3172-93-LP12) (suma asignada \$212.792.021): Informe Técnico N° 846, de 6 de septiembre de 2012; proyecto adjudicado por Resolución N° 981, de fecha 14 de septiembre del año 2012.

Así consta de la prueba documental N°658 y N°659, de la fiscalía: Resolución Exenta N° 981 de fecha 14 de septiembre de 2012, que la licitación pública del proyecto retén Itahue a la empresa contratista Constructora FEALFRA SPA, representada por Osvaldo Tobar Fernández por la suma única de \$212.792.021, con un plazo de 100 días corridos. Firma Jorge Rojas Langer, General Director Nacional de Logística; e Informe técnico de evaluación de propuestas N° 846 de fecha 6 de septiembre de 2012 que da cuenta que hubo 3 oferentes Constructora FEALFRA, Olga Garfias Fuentes y Constructora Fepa Ltda. Fueron rechazadas en acto de apertura la segunda y tercera. No hubo rechazos administrativamente. En la evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. FEALFRA tiene un puntaje de 104%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA por ser la empresa que cumple todos los requisitos exigidos. Firmado por Juan Francisco Socías Vargas arquitecto, Fabián Gutiérrez Salazar arquitecto, Romina Parraguez Robles ingeniero civil, Isabel Ojeda Palma abogado y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de Proyectos, firma entre las siglas VB.

3) Proyecto Retén Lontué (ID 3172-92LP12) (monto asignado \$291.002.153): Informe Técnico de Evaluación N° 847, de 6 de septiembre de 2012; adjudicado mediante Resolución Exenta N° 982, de 14 de septiembre de 2012.

Así consta de la prueba documental N°661 y N°662 de la fiscalía: Resolución Exenta N° 982 de fecha 14 de septiembre de 2012, que adjudicó la licitación pública del proyecto reposición retén Lontué a la empresa contratista Constructora FEALFRA SPA, representada por Osvaldo Tobar Fernández por la suma única de \$291.002.153 con un plazo de ejecución de 140 días corridos. Firma Jorge Rojas Langer, director nacional de Logística; e Informe técnico de

evaluación de propuestas N° 847 de fecha 6 de septiembre de 2012, el que señala que hubo dos (2) oferentes Constructora FEALFRA y Sociedad Vallejos Garfias Ltda. Esta última fue rechazada en acto de apertura. No hubo rechazo administrativamente. En evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. FEALFRA tiene un puntaje de 104%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA por ser la empresa que cumple todos los requisitos exigidos. Firmado por Juan Francisco Socías Vargas arquitecto, Fabián Gutiérrez Salazar arquitecto, Romina Parraguez Robles ingeniero civil, Isabel Ojeda Palma, abogado, y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de Proyectos, firma entre las siglas VB.

4) Proyecto retén la Islita (ID 3172-31-LP13) (monto asignado \$261.900.587): Informe Técnico de Evaluación N° 339, de 10 de abril de 2013; adjudicado por Resolución Exenta N° 394, de 24 de mayo del año 2013.

Así consta de la prueba documental N°664 y 665 de la fiscalía: Resolución Exenta N°394 de fecha 24 de mayo de 2013 que se adjudica licitación pública reposición retén La Islita a la empresa contratista Constructora FEALFRA SPA, por la suma única de \$261.900.587 con plazo ejecución de 140 días corridos. Firma Jorge Rojas Langer, general, Director Nacional de Logística; e Informe técnico de evaluación de propuestas N°339 de fecha 10 de abril de 2013 el que indica que hubo cinco (5) oferentes, Constructora FEALFRA, Ricardo Fernández Gamboa, Coserco Ltda., Proas Ltda., Altosur Ltda. y Alerco Ltda. Coserco y Proas fueron rechazadas en apertura de sobre. Alerco y Ricardo Fernández fueron rechazadas administrativamente. En la evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. FEALFRA obtiene un puntaje de 104%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA por ser la empresa que cumple todos los requisitos exigidos. Firmado por Fabián Gutiérrez Salazar, Romina Parraguez Robles, Isidro Martínez Bacigaluppi, Luis Parra Ávila, Pedro Cofré Montero y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de proyectos, firma entre las letras V y B.

5) Proyecto de reposición Subcomisaría San Francisco de Mostazal (ID 3172-79-LP13) (monto asignado \$385.829.542): Informe Técnico N° 5 de fecha 14 de agosto de 2013, adjudicado por Resolución Exenta N° 653, de 19 de agosto de 2013.

Así consta de la prueba documental N°667 y N°668 de la fiscalía: Resolución Exenta N°653 de fecha 19 de agosto de 2013, que adjudica la licitación pública de la subcomisaria de San Francisco de Mostazal a la empresa contratista Constructora FEALFRA SPA, por la suma única de \$385.829.542 con un plazo de ejecución de 260 días corridos. Firma Jorge Rojas Langer, General, Director Nacional de Logística; y del contrato de obras entre Fisco- Carabineros de Chile y Constructora FEALFRA SPA de fecha 12 de septiembre de 2013, suscrito por Jorge Rojas Langer Director de Logística y FEALFRA SPA representada legalmente por Osvaldo Tobar Fernández por el monto y plazo indicados.

Se dio lectura al Informe técnico de evaluación de propuestas N° 5 de fecha 14 de agosto de 2012 el que indica que hubo cuatro (4) oferentes, Constructora FEALFRA, Proas Ltda. Altosur Ltda., y Alerco Ltda. No hubo rechazos en acto de apertura. Las empresas cumplen con la documentación jurídica requerida. Evaluación financiera y técnica no presentan observaciones. En la evaluación técnica se contemplan criterios de oferta económica, plazo de entrega, calidad de la empresa y calidad técnica. Consta tabla de evaluación comparativa de oferta. FEALFRA tiene un puntaje de 102,22%. Se agrega información relacionada con comportamiento del contratista. Concluye sugiriendo la adjudicación a la empresa Constructora FEALFRA por ser la empresa que cumple todos los requisitos exigidos. Firmado por Fabián Gutiérrez Salazar, Romina Parraguez Robles, Luis Parra Ávila, Isidro Martínez Bacigaluppi, Héctor Nail Bravo y Christian Bustos Morgado, jefe Área Gestión y Coordinación de Proyectos, firma entre las siglas VB.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEXTO: Que, en la acusación también se dijo que el monto en dinero de las obras que se adjudicaron a las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA, ascendió a una suma cercana a los \$1.366.524.257.

Para tales efectos el ministerio público acompañó los contratos de obras de los siete proyectos referidos, en los que constan los montos por los cuales se

celebraron los contratos, con la contratista FEALFRA, documental de la fiscalía del N° 580 al N°587. Retén Loica por \$234.071.395 con fecha 30 de abril de 2011; tenencia Hualañe por la suma de \$ 287.715.531 con fecha 7 de noviembre de 2011; retén Itahue por la suma de \$212.792.021 con fecha 5 de octubre de 2012; retén Coronel de Maule por la suma de \$214.999.954 con fecha con fecha 5 de octubre de 2012; reten Lontué por la suma de \$291.002.153 con fecha 5 de octubre de 2012,; retén La Islita por la suma de \$261.715.531 con fecha 3 de junio de 2013; y la subcomisaría de San Fransico de Mostazal por la suma de \$385.829.542 con fecha 12 de septiembre de 2013.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en la acusación también se dijo, y la prueba lo corroboró, que el dueño y representante de la empresa FEALFRA SPA, Osvaldo Tobar Fernández, mantenía vínculos de amistad, empresariales y profesionales con los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, como también con la sociedad Inversiones Bustos Morgado Ltda., RUT 76.669.180-3, sociedad que los tres acusados habían constituido y cuyo contador y representante ante el Servicio de Impuestos Internos era el mismo Osvaldo Tobar Fernández.

Lo anterior consta de la declaración del mismo Tobar Fernández, quien al respecto señaló: conoce a Rodrigo Bustos y son amigos desde la enseñanza media, la amistad se mantuvo hasta el 2016. También conocía a su hermano Nelson y a su madre. Le presentó a Juan Soto quien tenía una empresa constructora con problemas personales y financieros y le compró la empresa. Juan contruía principalmente obras de carabineros. No tiene certeza que Rodrigo trabajara con Juan Soto pero sí sabía que hicieron juntos algunos proyectos. Rodrigo no formó parte de la sociedad, siempre imaginó el negocio con él, pero no fue así. Le dijo que no podía ser miembro de la sociedad porque tenía un hermano en carabineros. Era importante que él participara por el conocimiento que tenía y le pidió que lo asesorara y accedió. No le hizo contrato. Se enteró del cargo que tenía el hermano de Rodrigo, Christian, cuando modificó la sociedad y concurrió a cuarteles a entregar la escritura, como a mediados del año 2012 y vio pasar a una persona muy parecida e intuyó que podía ser el hermano de Rodrigo, le preguntó y ahí le dijo que era uno de los jefes de cuarteles. Tuvo la sensación que la situación podía traerle algún problema y decidió pagar a Rodrigo y a Nelsón, que se incorporó a la empresa en logística, desde su cuenta corriente. Les pagaba una

remuneración fija mensual entre \$1.800.000 y \$2.000.000 aproximadamente. **Se evidenció una contradicción** con su declaración en fiscalía donde indicó *que parte de la remuneración era una suma variable que se determinaba de acuerdo al resultado de las adjudicaciones, le pagaba una suma de dinero mayor a Rodrigo porque el le presentó el negocio*. Indicó que algunas veces le pedía a su secretaria, Natalia Lara, y a Hugo Migami, junior de la empresa, que cobraran un cheque y les depositaran en efectivo. En este punto también **se evidenció una contradicción** con su declaración en fiscalía donde señaló que, *los pagos ellos me pedían que los hiciera en efectivo y otros por transferencia a efectos de evitar que los vincularan con la empresa.*; exhibición de la prueba documental N° 616 (factura recepcionada por *Rodrigo Morgado*, arriba dice “Yiyo”; factura, de fecha 5 de marzo de 2013, recibe a nombre de FEALFRA, Nelson Bustos).

Señaló también que a Miguel Torrejón lo conoció en la universidad, después se lo encontró en el Departamento de Cuarteles, Rodrigo conocía a Torrejón, ellos tenían vínculos de amistad y vínculos comerciales porque “hacían cosas” juntos; me juntaba a jugar fútbol con Rodrigo y Nelson. Se le exhibió del acápite otros medios de prueba, el N° 14, correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2012: de oTobar@altazar.cl a chbustos, rbustos, busto.morgado; asunto: sociedad de transportes; “*Estimados, adjunto borrador de la sociedad de transporte...*”.

Además dijo que existían camiones que se iban a traspasar, algunos eran de IBM, era una empresa que utilizaba Rodrigo para la construcción, los socios de estas eran Christian, Rodrigo y Nelson; estos mismos serían los socios de la empresa que se estaba formando; a la época del correo yo sabía que Christian formaba parte del Departamento de Cuarteles; se dio lectura al correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2013: de oTobar@altazar.cl a nelson.bustos@logisticabm.cl; asunto, *publicación*; documento adjunto: publicación en el Diario Oficial de la constitución de la sociedad Asesorías, Servicios Logísticos y de Transportes BM Limitada. Al respecto refirió “*actué como contador externo de esta empresa, IBM y de Logística BM*”; podía acceder al Servicio de Impuestos Internos a través de la clave, eso como contador externo; lo anterior mientras FEALFRA participaba en los procesos de licitación de Cuarteles; Rodrigo percibía dineros por su sociedad y además por los pagos de FEALFRA por las asesorías que le hacía; *Bustos y Mejías Ltda., se modificó a Inversiones*

Bustos Morgado Ltda., formaban parte de la anterior Hugo Andrés Mejías Llano, y de la nueva los tres hermanos Bustos; desde esa fecha comencé a ayudar a Rodrigo con la contabilidad..

Se le exhibió de *otros medios de prueba N° 14*: a) correo electrónico de 24 de abril de 2012: de, oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net; materia: adjudicaciones; *“Christian, revisé el portal y sólo pude obtener las bases administrativas de las nuevas licitaciones y la resolución de adjudicación de Loica, las resoluciones de Hualañé y Melosas no las pude encontrar. Por favor, mándame los pdf con esas resoluciones. Gracias. Ot”*; b) correo electrónico de fecha 3 de julio de 2012: asunto: firma; de oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net con copia a rbustos@inversiones.cl; *“Christian, la dirección de la sucursal es San Joaquín Av. Vicuña Mackenna 4860, teléfono 6875300, ahí debes hablar con Sergio Ramírez, está cerca de metro san Joaquín;* c) correo electrónico de 20 de marzo de 2012: asunto: se le exhibió y lo reconoce, después señaló que era un correo de oTobar@altazaor.cl a rbustos@inversionesbm.cl; *balance IBM, “compadre estoy haciendo las declaraciones juradas: balance IBM año anterior, que te entregue año anterior; venta camioneta chica; venta camioneta grande; registros gastos con facturas año pasado, este año te puse con boletas de honorarios de una de la empresas que manejo para generarte un poco más de renta \$5,2 millones, cuando llegué la devolución arreglamos. Mándame los datos apenas los tengas, sobre todo el balance para cerrar el año; saludos Ot”*.

Asimismo, declaró: *modificamos la sociedad FEALFRA SPA con la finalidad que que ingresara yo como socio y Juan Soto Jara, pero eso en lo formal porque estaba Rodrigo Bustos, con 50%, yo un 37% y un 13% Juan Soto (declaración de fecha 2 de febrero de 2017); Rodrigo era un apoyo externo, Nelson tenía acceso a la logística ya que había trabajado en una ferretería, conocía a los proveedores;*

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que, asimismo, se dijo en la acusación que Rodrigo Bustos Morgado, hermano del acusado Christian Bustos Morgado, mantenía una relación comercial informal con el dueño de la empresa FEALFRA EIRL, Juan Alejandro Soto Jara, de quien recibía pagos en dinero por cada proyecto de licitación que la empresa se adjudicaba.

Así consta de consta de la declaración de Juan Alejandro Soto Jara, quien señaló:

- que en el año 2010 trabajó con Rodrigo Bustos en Viña del Mar reparando unos edificios; él me dio la idea de ingresar a Cuarteles, diciéndole que como tenía la empresa aprovecharan la oportunidad;
- que lo conoció en transportes Olivares, porque era su Supervisor.
- que Rodrigo Bustos veía todos los temas administrativos, el papeleo y las finanzas de la empresa;
- que tenían un trato de palabra, porque se ganaba un 20 a 30 % de las utilidades, por cada proyecto;
- que no tenía ningún conocimiento ni idea de las licitaciones;
- que Rodrigo Bustos también veía la parte financiera, para los pagos le firmaba los cheques y Rodrigo los endosaba para pagar a los proveedores y a los trabajadores;
- que después los cheques se los entregaba sólo con su firma;
- que me presentaba a las licitaciones con todas las carpetas que preparaba Rodrigo;
- que no sabía que Rodrigo Bustos tenía vínculos con Carabineros de Chile, se enteró de ello cuando se adjudicó una obra en Hualañé y Melozal;
- que además de encargarse la parte administrativa, Rodrigo sabía cuándo los ITO iban a efectuar las visitas y se preparaba; contactaban a Rodrigo;
- que para las licitaciones de Melozal o Hualañé, Rodrigo le fue a entregar las carpetas a su casa, eran aproximadamente las once de la noche; las bases de la licitación se cerraban a la medianoche, y él debía presentarse a las nueve de la

mañana; le advirtió que tomara nota de una modificación que se había puesto a última hora, y que como se había incorporado a última hora nadie lo sabía; en la mañana, ocurrió que nadie la llevaba y él se adjudicó la licitación;

- que cuando estaban en Hualañé se integró Nelson Bustos, otro hermano de Rodrigo, quien veía las compras de los materiales, se le pagaba con un cheque que él le firmaba a Rodrigo Bustos;

- se le exhibió la prueba documental N° 790, dos cheques: 1) cheque firmado por él; reconoció su firma, fechado el 26 de diciembre de 2011, girado por la suma \$6.232.299 a nombre de Rodrigo Bustos; la letra no es mía; aparece el N° de RUT 9.450.127-2, de quien cobró el cheque, y además un RUT N° 10.285.773-9; Este cheque no lo giré yo; y, 2) cheque de la Sociedad Constructora Juan Alejandro Soto Jara, girado por la suma de \$4.000.000, a nombre de Nelson Bustos; corresponde al N°750873, de la misma cuenta corriente, fecha 10 de febrero de 2012; al reverso aparece el N°10.286.188-4, corresponde al RUT de la persona que lo cobró;

- tuve un problema familiar (ex mujer lo acusó de violencia intrafamiliar), Rodrigo me dijo que no podía ser la cara visible de la empresa, Carabineros no lo permitía; me dio la opción que le cediera la empresa mientras yo regularizaba mi situación y después me la devolvía; me dijo que tenía un amigo, compañero de universidad, que tenía muchas lucas, que haría de pantalla, y que él continuaría trabajando, el amigo se llamaba Osvaldo Tobar fernández ; cedió la la empresa (se le exhibieron los documentos N°25 y N°27, los reconoció, dijo que eran los documentos de traspaso de la empresa, de él a Osvaldo Tobar;

- Torrejón conocía Rodrigo por haber sido compañeros de universidad, al igual que Osvaldo Tobar;

- Rodrigo Bustos también trabajaba en paralelo para Torrejón y para la empresa inversiones Bustos Morgado (IBM);

- cada quince días Bustos le decía “tenís que firmar estos cheques” para pagar.;

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO NOVENO: Que, en la acusación se imputó, y la prueba demostró, que el acusado *Christian Bustos Morgado* aceptó recibir beneficio económico de *Juan Soto Jara* y *Osvaldo Tobar Fernández*, los cuales le eran entregados a través de sus hermanos, *Rodrigo* y *Nelson Bustos Morgado*, como también por medio de terceros vinculados con la empresa *FEALFRA SPA*. Los beneficios económicos consistieron en sumas de dinero que provenían de las empresas *FEALFRA EIRL* y *FEALFRA SPA*, las cuales le eran pagadas a través de depósitos en efectivo y transferencias bancarias a las cuentas del acusado *Christian Bustos Morgado*, durante el periodo de ejecución de las obras y de los correspondientes avances de pagos de las obras adjudicadas. Los depósitos y transferencias bancarias fueron:

i) Con fecha 24 de marzo del año 2011, *Juan Soto Jara*, representante legal de la empresa de construcción *JUAN SOTO JARA EIRL*, giró un cheque por \$12.577.950 pesos a favor *Rodrigo Bustos Morgado*

Así lo demostró la prueba documental N° 790 (cheque de la empresa *FEALFRA EIRL*, de 24 de marzo de 2011, serie 248718, girado a nombre de *Rodrigo Bustos Morgado*, por \$12.577.950; documento informado en el Oficio S/N del Banco Santander, de fecha 20 de junio de 2018, mediante el cual remitió en un CD (NUE 2098245) documentos e información bancaria de *Juan Alejandro Soto Jara* y de la Sociedad *Juan Alejandro Soto Jara EIRL*).

Ese mismo día, 24 de marzo de 2013, *Christian Bustos Morgado* suscribió el Informe Técnico de Evaluación de la Licitación, N° 117, recomendando la adjudicación del proyecto a la empresa de propiedad de *Juan Soto Jara*.

ii) Durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 *Rodrigo Bustos* recibió depósitos en su cuenta corriente de la empresa *FEALFRA EIR*.

Así consta del Oficio S/N, Banco Santander, de fecha 20 de junio de 2018, prueba documental N° 790, antes citada, donde consta que en los meses referidos la Sociedad Constructora *Juan Alejandro Soto Jara EIRL*, giró nueve cheques a *Rodrigo Bustos Morgado*, cuyos montos fueron por las sumas de \$ 419.469, \$1.000.000, \$4.000.000, \$1.300.000, \$4.200.000, \$500.000, \$5.000.000,

\$6.232.299 y \$15.852.275, este último girado el 29 de noviembre de 2011, justamente el mes en que se celebró el contrato de obras de reposición del retén Hualañe, que fue el 7 de noviembre de 2011

iii) Con fecha 30/08/2013 Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 de Corpbanca abono por la suma de \$ 30.000.000, efectuado de la cuenta corriente del Banco Santander perteneciente a FEALFRA E.I.R.L, de la cual Constructora FEALFRA SPA es continuadora;

Así consta de los documentos contenidos en la prueba documental N° 673 de la fiscalía (cheque por \$30.700.000, girado contra la cuenta corriente de FEALFRA EIRL 63-75521-4, a nombre de Constructora FEALFRA SPA, cobrado el 30 de agosto de 2013, y cartola bancaria N° 14, de la empresa FEALFRA SPA, Banco Corpbanca, cuenta corriente N° 38557983, depósito por \$30.700.000, el 30 de agosto de 2013);

iv) con igual fecha 30/08/2013 Osvaldo Tobar realiza deposito en efectivo, anónimo, por la suma de \$ 2.000.000 en la sucursal Viña Libertad del Banco de Chile, en la cuenta corriente del mismo Banco, perteneciente a Nelson Bustos Morgado;

Así consta de la prueba documental N° 812, _depósito de \$2.000.000, efectuado el 30 de agosto de 2013 por Hugo Darío Migani, a la cuenta corriente del Banco Chile, N° 580382909, de Nelson Bustos Morgado, y cartola N° 8, Banco Chile, cuenta corriente N° 580382909, de Nelson Bustos Morgado, depósito de \$2.000.000, en dinero en efectivo.

v) El mismo día 30/08/2013, Hugo Migani, tercero vinculado a los imputados, deposita en la cuenta corriente del Banco BCI de Rodrigo Bustos Morgado, en la sucursal “Libertad” de Viña del Mar, la suma de \$2.500.000

vi) Con fecha 24/10/2013 Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente 38-557983 del Banco Corpbanca, pago de la Dirección de Logística de Carabineros por un monto de \$103.214.759, correspondiente al pago de obras de retenes.

Así consta de la prueba documental N° 673 (cheque de fecha 24 de octubre de 2013, mgirado por la DILOCAR a favor de FEALFRA SPA, por \$103.214.759, cobrado el 24 de octubre de 2013, y cartola bancaria de la cuenta corriente de la Sociedad FEALFRA SPA, N° 38557983, Banco Corpbanca;

vii) Con fecha 04/11/2013, Hugo Migani, quien trabajaba como Junior en FEALFRA (según declaró Tobar) cobró en efectivo un cheque de la constructora FEALFRA SPA, cheque pagado por caja, en la Sucursal Viña del Mar por un monto de \$ 7.800.000.

Así consta de la prueba documental N° 673, de la fiscalía (cheque de la Sociedad Constructora FEALFRA SPA, por \$7.800.000, cobrado por Hugo Darío Migani, el día 4 de noviembre de 2013, en la sucursal Viña del y del estado de cuenta de la cuenta de Corpbanca de FEALFRA SPA, folio 17, registra cheque pagado por caja por \$7.800.000, el 4 de noviembre de 2013.

Posteriormente Hugo Migani deposita ese mismo día 04/11/2013 en la oficina denominada Viña Arlegui, en efectivo el monto de \$ 4.500.000 en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente al imputado Nelson Bustos Morgado;

Así consta de la prueba documental N° 812, de la fiscalía (colilla de depósito de fecha 4 de noviembre de 2013, efectuado en la cuenta corriente del Banco Chile, N° 580382909, de Nelson Bustos Morgado, por \$4.500.000, sucursal Arlegui, Viña del Mar, y cartola bancaria N° 11 (período 30 de octubre de 2013 al 29 de noviembre de 2013) de la cuenta corriente de Nelson Bustos Morgado, N° 580382909, del Banco Chile; 4 de noviembre de 2013, abono por \$4.500.000)

El mismo día 04/11/2013, Hugo Migani depositó en la cuenta corriente del Banco BCI, sucursal de Viña del Mar, perteneciente a Rodrigo Bustos Morgado, la suma de \$2.500.000.

Así consta de la prueba documental N° 802, de la fiscalía (boleta de depósito BCI, en efectivo, por la suma de \$2.500.000, nombre depositante Hugo Migani, fecha 4 de noviembre de 2013, a la cuenta corriente de Rodrigo Bustos Morgado, N°88158811, y cartola N° 10, banco Bci, de la citada cuenta período del 30 de

octubre de 2013 al 29 de noviembre del mismo año) que registra depósito efectivo por caja, 4 de noviembre de 2013, sucursal Viña del Mar por \$2.500.000.

viii) Con fecha 05/11/2013, Nelson Bustos Morgado, a cuenta del depósito ya referido por la suma de \$4.500.000, ya que antes de este movimiento no mantenía saldo suficiente en su cuenta, realizó una transferencia por la suma de \$2.000.000, desde su cuenta del Banco de Chile, a la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente al acusado Christian Bustos Morgado.

Así consta de la prueba documental de la fiscalía, N° 812 (cartola bancaria N° 11, período 30 de octubre 2013 al 29 de noviembre de 2013, cuenta corriente de Nelson Bustos Morgado, N° 580382909, Banco Chile: transferencia efectuada el día 5 de noviembre, traspaso a terceros por internet, sucursal central, por \$2.000.000 y documental N° 792 listado de movimientos moneda nacional del Banco De Chile de Christian Bustos Morgado, N° 5890810, Banco Chile: 5 de noviembre 2013, registra abono por concepto de traspaso desde terceros por internet oficina central por \$2.000.000, que es posible establecer que por la fecha, detalle de la transacción, sucursal y monto fue *efectuado por Nelson Bustos, desde su cuenta corriente.*

ix) Con fecha 25/11/2013 Constructora FEALFRA SPA recibió en su cuenta corriente N° 38-557983, Banco Corpbanca, de la Dirección de Logística de Carabineros, \$60.351.091, en pago por la construcción de retenes;

Así consta de la prueba documental N° 673, de la fiscalía (cheque de la DILOCAR por \$60.351.091, depositado en la cuenta de constructora FEALFRA SPA, el 25 de noviembre de 2013, y estado de cuenta corriente N° 38557983, correspondiente a la sociedad FEALFRA SPA; folio N° 17, abono de la DILOCAR en la cuenta de FEALFRA SPA, por la suma de \$60.351.091 con la misma fecha.

x) con fecha 02/12/2013 Osvaldo Tobar transfirió \$ 4.500.000 y \$3.300.000, desde la cuenta de FEALFRA SPA, a su cuenta en el Banco Chile Edwards.

Así consta de la prueba documental N° 673, de la fiscalía estado de cuenta Corpbanca, folio N° 18, sociedad FEALFRA SPA, Osvaldo Tobar Fernández,

realizó dos transferencias desde la cuenta de esa empresa a su cuenta personal en el Banco Chile, \$4.500.000 y \$3.300.000).

Posteriormente, ese mismo día, 02/12/2013, en la sucursal Viña Edwards, depositó en dinero efectivo la cantidad de \$4.500.000 en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente a Nelson Bustos Morgado.

Así consta de la prueba documental N° 812 (boleta única de depósito, en efectivo, a nombre de Nelson Bustos Morgado, Banco Chile, por \$4.500.000, fecha 2 de diciembre de 2013, sucursal Viña del Mar-Edwards, nombre depositante en blanco, y cartola bancaria cartola N° 12, período 29 de noviembre 2013 al 30 de diciembre de 2013, cuenta corriente del Banco Chile, perteneciente a Nelson Bustos Morgado, abono en dinero por la suma de \$4.500.000, recibido el 2 de diciembre de 2013)

Este mismo día 02/12/2013, depositó la suma de \$ 2.500.000, en la cuenta de Rodrigo Bustos Morgado, del Banco BCI, sucursal de calle 8 Norte, de Viña del Mar.

Así consta de la prueba documental N° 802, de la fiscalía (boleta de depósito a nombre de Rodrigo Bustos Morgado, en la cuenta del Banco Bci N° 88158811, por \$2.500.000, en dinero efectivo) y cartola N° 11, del Banco Bci, cuenta correspondiente a Rodrigo Bustos Morgado, período 29 de noviembre 2013 al 30 de diciembre del mismo año: 2 de diciembre de 2013, depósito en efectivo por caja por la suma de \$2.500.000, efectuado en la sucursal 8 Norte, de Viña del Mar).

xi) *Con fecha 03/12/2013, un día después de recibido el depósito en efectivo de Tobar, Nelson Bustos Morgado, a cuenta del depósito que había recibido de Osvaldo Tobar, ya que antes de este movimiento no mantenía saldo suficiente su cuenta realizó una transferencia de \$ 2.000.000, desde su cuenta del Banco de Chile a la cuenta que Christian Bustos Morgado mantenía en este mismo banco.*

Así consta de la prueba documental N° 812, de la fiscalía estado de cuenta corriente del Banco de Chile de Nelsón Bustos Morgado en que consta con

fecha 3 de diciembre de 2013 traspaso a terceros por internet, sucursal central, por \$2.000.000. El saldo anterior, correspondiente al día 29 era de \$22.757; y documental N° 792, listado de movimientos moneda nacional de la cuenta de Christian Bustos Morgado que consigna con fecha 3 de diciembre de 2013, traspaso desde terceros por internet, oficina central por la suma de \$2.000.000. Considerando la fecha de los movimientos bancarios, el monto, el detalle de la transacción y la sucursal, pudo establecerse que el depósito fue efectuado por Nelson Bustos Morgado a su hermano Christian.

xii) Con fecha 30/12/2013 Constructora FEALFRA SPA recibe en su cuenta corriente N° 38-557983, Banco Corpbanca, \$117.090.206, correspondiente a un pago que le hizo Carabineros de Chile por concepto de construcción de obras de cuarteles.

Así consta de la prueba documental N° 673 (cheque de la DILOCAR por \$117.090.206, girado a nombre de Constructora FEALFRA SPA, de fecha 26 de diciembre de 2013, con timbre de caja del banco Corpbanca con fecha 30 de diciembre de 2013; y estado de cuenta corriente de la empresa FEALFRA SPA, Banco Corpbanca, folio N° 18, abono depósito con documento otro banco por la suma de \$117.090.206, el 30 de diciembre de 2013.

Con igual fecha, Osvaldo Tobar cobró en la Sucursal Libertad de la ciudad de Viña del Mar, por caja y en dinero efectivo, un cheque de la cuenta de FEALFRA SPA, por \$ 7.800.000.

Así consta de la prueba documental de la fiscalía, N° 673 (cheque nominativo de la empresa FEALFRA SPA, girado a nombre de Osvaldo Tobar por la cantidad de \$7.800.000, con timbre de caja de fecha 30 de diciembre de 2013 sucursal Libertad en la sucursal Libertad; y estado de cuenta corriente de la empresa FEALFRA SPA, Banco Corpbanca, folio N° 18, fecha 30 de diciembre de 2013, cargo por \$7.800.000, cheque pagado por caja.

Posteriormente, en la misma fecha, Osvaldo Tobar realizó un depósito anónimo, en la oficina Viña Edwards (a cuerdas de la institución bancaria de donde se realizó el cobro del cheque), por \$ 4.500.000 en la cuenta corriente del Banco de Chile, perteneciente a Nelson Bustos Morgado.

Así consta de la prueba documental N° 812 (estado de cuenta corriente de Nelson Bustos Morgado, Banco de Chile (período 29 de noviembre 2013 a 30 de diciembre de 2013): 30 de diciembre abono por \$4.500.000, depósito en efectivo, realizado en la sucursal Viña, en la que Osvaldo Tobar Fernández cobró el cheque de la sociedad FEALFRA SPA, por \$7.800.000.

Ese mismo día, 30/12/2013, se le depositó, en forma anónima, en la cuenta del imputado Rodrigo Bustos Morgado, del Banco BCI, sucursal Libertad, en la ciudad de Viña del Mar, la suma de \$2.500.000.

Así consta de la prueba documental N° 802 (boleta de depósito en dinero efectivo, por la cantidad de \$2.500.000, efectuado con fecha 30 de diciembre de 2013, a la cuenta corriente de Rodrigo Bustos Morgado, N° 88158811, Banco Bci, con el nombre del depositante en blanco; y cartola de cuenta corriente, N° 11 (período 29 de noviembre al 30 de diciembre de 2013), del Banco Bci, correspondiente a Rodrigo Bustos Morgado: depósito en efectivo por caja, por \$2.500.000, 30 de diciembre de 2013, sucursal Libertad, Viña del Mar – misma sucursal en la que Tobar Fernández, ese mismo día 30 de diciembre, había cobrado por caja el cheque nominativo de \$7.8000.000, antes mencionado).

Resulta relevante indicar que el 3 de junio de 2013 se celebró contrato de obras entre el Fisco de Chile y la Constructora FEALFRA por el proyecto retén La Islita por la suma de \$ 261.715.531; y el 12 de septiembre de 2013 se suscribió el contrato entre el Fisco de Chile y la Constuctora FEALFRA SPA por la suma de \$385.829.542, de manera que puede razonablemente vincularse los pagos, con esos proyectos.

Respecto de las transacciones antes referidas, declaró el perito Nelson Castro, quién efectuó análisis de los abonos de las cuentas corrientes de los hermanos Bustos Morgado en los bancos Santander, Chile y BCI, durante el período 1 enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013, dando cuenta de la trasbilidad de los dineros en relación cpn las transferencias de que da cuenta la documental N°673, 812, 802, 792, 673, ya referida, pudiendo concluir que los dineros que recibieron Rodrigo Bustos, Nelson Bustos y Christian Bustos correspondientes a noviembre y diciembre de 2013 tienen su origen en los recursos que recibió FEALFRA provenientes de Carabineros de Chile.

xiii) *En la acusación se sostuvo que durante el año 2013, el acusado Christian Bustos Morgado recibió de la sociedad Asesorías Servicios Logísticos, RUT 76.235695-3, transferencias de dineros efectuadas por sus hermanos, los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, socios de dicha sociedad, por un total de \$135.350.840, afirmación que no se pudo tener por acreditada con la prueba rendida por los acusadores, considerando que de la información que se dio lectura de los depósitos en las cuentas corrientes del Banco de Chile y Banco Santander durante el año 2013, si bien existen depósitos por transferencias por internet y transferencias de otros bancos, por aproximadamente \$30.000.000, en las cartolas respectivas no hay información que permita establecer que esos dineros fueron depositados por la sociedad referida.*

También se afirmó en la acuación, que en el año 2013 se registran ocho depósitos de dinero en efectivo en la cuenta corriente del Christian Bustos Morgado, por un total de \$22.940.000, que fueron realizadas por José Vargas Silva quien fue director de la empresa FEALFRA SPA en el año 2012.

No fue controvertida la existencia de los depósitos en efectivo que hizo José Vargas al acusado Christian Bustos Morgado, sin embargo, la prueba de cargo fue insuficiente para poder concluir, más allá de toda duda razonable, que esos depósitos correspondían al pago de dineros que Christian Bustos aceptó recibir por favorecer a la empresa FEALFRA en las antes referidas licitaciones.

Para ello se tuvo presente que acompañó la defensa de Bustos documental N° 414, anexo 13, acta de entrega, con fecha 20-03-2012, en la ciudad de Viña del Mar, Nelson Bustos Morgado hace entrega de cheque N° 2541574 del titular Christian Bustos Morgado de la cuenta corriente N° 5890810 del Banco de Chile, por el monto de \$8.000.000 a José Vargas Silva con el fin de adquirir un camión de transporte, debiendo restituir dentro del plazo de ocho meses la misma cantidad. Firma ilegible y recibí conforme: y documental N°419, cheque serie N° 2541574 de fecha 22 de marzo de 2012 a nombre de José Vargas Silva por la suma de \$8.000.000; y cheque serie 2541572 de fecha 1 de enero de 2012 a la orden de José Vargas Silva por la suma de \$10.000.000.

Con los citados documentos no puede descartarse, que los depósitos que José Vargas Silva en efectivo a Christian Bustos en sean devolución de dichos dineros.

Además, la documental de la defensa N°21, N°27, N°29 y N° 30 da cuenta de contratos de prestación de servicios a comisión como vendedor, transportista independiente entre Agrosuper y la sociedad comercial Sunpack representada por José Vargas Silva de fechas 1 de abril de 2007, 1 de agosto de 2009, 1 de abril de 2016, lo que permite establecer que José Vargas tenía una actividad comercial y dentro del giro estaba el transporte de mercadería, lo que hace factible, como sostuvo el acusado Christian Bustos, que le hubiese ofrecido hacer un negocio con Bustos en esa área, lo que es coherente con la adquisiciones de camiones y semirremolques por las sociedades de los hermanos Bustos, como consta de la prueba presentada tanto por la fiscalía como la defensa y con el documento N° 412, contrato de arrendamiento de tracto camión, Viña del Mar a 10 de diciembre de 2012 entre Nelson Bustos que entrega en arriendo a José Vargas Silva el vehículo patente WX6414-3, fecha inició 10 de diciembre de 2012, mont, o de la renta \$2.000.000 mensuales, vehículo adquirido por la sociedad Inversiones Bustos Morgado con fecha 6 de diciembre de 2012.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO: Que, las pruebas que se han venido señalando demuestran de modo fehaciente que entre los años 2011 y 2013, las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA fueron adjudicatarias de siete proyectos de reposición de cuarteles, las cuales fueron recomendadas en los Informes Técnicos que emitieron las Comisiones Evaluadoras, en todas las cuales el acusado Christian Bustos Morgado intervino directamente, tanto de manera oficial, en seis de los siete proyectos, y no oficial, como aconteció con el proyecto de reposición del retén Hualañé, en el cual, no obstante encontrarse con licencia médica médica (según consta de la prueba presentada por la defensa de Bustos documental N° 538 de las licencias médicas registradas por aquél en la dirección de salud de Carabineros), se inmiscuyó en el proceso de evaluación que estaba haciendo la respectiva Comisión, ordenándole que no declararan desierta la licitación, como en derecho correspondía que ocurriese (las empresas no había incluido ciertos ítems en sus propuestas) y que en cambio requirieran “aclaratorias” a las empresas. De esta indebida e improcedente intervención la Comisión dejó registro escrito en el acta respectiva.

En cuanto a su participación oficial, ésta tuvo lugar al haber integrado las Comisiones evaluadoras de los otros seis proyectos, y posteriormente visado los Informes Técnicos que se emitieron.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, la prueba documental demostró que las operaciones bancarias a que antes se hizo mención, tuvieron lugar, en algunos casos, coetáneamente con los pagos que hacía la DILOCAR a las adjudicatarias, y en otros, coetánemanete con la fecha de los Informes Técnicos de Evaluación que debía emitir la Comisión Evaluadora de licitación por cada proyecto.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que, a la época de los hechos los acusados Christian, Rodrigo y Nelson Bustos Morgado tenían relaciones comerciales con Juan Alejandro Soto Jara, dueño de FEALFRA EIRL, y con Osvaldo Tobar Fernández, dueño de FEALFRA SPA, continuadora de la primera. Así consta en sus declaraciones, a saber:

1º) Juan Soto Jara dijo que antes de las licitaciones había trabajado en otra empresa, Transportes Olivares, en la cual su supervisor había sido el acusado Rodrigo Bustos. Habiendo posteriormente constituido la citada empresa, su ex supervisor lo alentó a participar en las licitaciones que estaba realizando Carabineros, primero en obras menores y posteriormente en la construcción de cuarteles, entre ellos, los retenes Loica y Hualañé. Habida cuenta que Soto le dijo a Bustos que no tenía conocimiento en materia de licitaciones de Carabineros, este se ofreció a asesorarlo, merced a lo cual se adjudicó numerosas obras menores y posteriormente obras mayores, como era el caso de la construcción de cuarteles. La asesoría que le prestó incluyó, entre otras cosas, la inscripción de la empresa en el registro de Carabineros (“yo no hice nada”) y la preparación de las carpetas de antecedentes que debían presentarse a las propuestas, las cuales el testigo dijo haber sido siempre él quien se apersonó en las oficinas de Cuarteles, tanto para entregar las carpetas como en el acto de apertura de sobres. Después de un tiempo, cedió una parte importante de sus derechos sociales a Osvaldo Tobar Fernández, quien le fue propuesto por Bustos, diciéndole éste que tenía un amigo con muchas lucas, el que haría de pantalla por un tiempo, mientras él solucionaba una situación personal relacionada con una denuncia por hechos de violencia intrafamiliar, por lo que no podía seguir siendo la cara visible de la

empresa, que Carabineros no lo permitía. El traspaso de la empresa sería temporal ya que posteriormente Tobar se la devolvería, y que en el intertanto él continuaría trabajando en la empresa por un sueldo. Posteriormente cedió el resto de sus derechos en la sociedad. En las escrituras de cesión apareció el nombre de Miguel Torrejón, quien era amigo de Tobar y de Rodrigo Bustos por haber sido compañeros de universidad. Finalmente, habiéndole reclamado a Bustos que la remuneración que se le estaba pagando no era la acordada (\$2.000.000 versus \$800.000) y que tampoco se le estaba pagando el arriendo (\$800.000) por un camión que les había entregado en arrendamiento, le dijeron que si quería irse, que se fuera, que la empresa era de Torrejón, Ingeniería Torrejón. Relató que en una oportunidad el Comandante Christian se apersonó en las obras (Meloza y Hualañé), cuyo parecido y apellido lo llevaron a pensar que era hermano de Rodrigo Bustos. Pregunto a algunas personas, las cuales le confirmaron que Christian y Rodrigo eran hermanos. Consultado este último, confirmó lo anterior, agregando que cuando le preguntó porqué no se lo había dicho antes, éste le respondió que *por eso no podía ser contratado y que trabajaba en forma anónima*;

2°) Osvaldo Tobar Fernández declaró que durante los años 2010 y 2011 tuvo un restaurant en Concepción, y que en el último año había quebrado. En ese entonces se contactaba con Rodrigo Bustos, se juntaban dos o tres veces en el mes, se conocían por haber sido compañeros en la época de la enseñanza media. Dijo que también conocía a su hermano Nelson y a la madre de estos, sin saber de otros hermanos. Rodrigo le propuso que fuera inversionista en una empresa constructora que estaba en malas condiciones comerciales. La empresa se llamaba FEALFRA EIRL y el dueño era Juan Soto, la cual le compró mayoritariamente y le cambió la razón social a FEALFRA SPA. Se incluyó entre los directores provisorios a José Vargas Silva. Con posterioridad se incorporaron en la misma calidad Miguel Torrejón y Francisco Fuentes Vilches. El acusado Rodrigo Bustos no se incorporó como socio de FEALFRA SPA, como él pensaba que iba a ocurrir, toda vez que declinó su ofrecimiento diciéndole Bustos que no podía aparecer ya que tenía un hermano que era carabinero, pero sin decirle quién. A cambio aceptó asesorarlo en las licitaciones de Carabineros ya que él no tenía conocimiento en el rubro de la construcción, por lo que la asesoría de Rodrigo fue relevante. Refirió también que este último conocía a Torrejón, tenían vínculos de amistad y comerciales ya que “hacían cosas juntos”, no sabiendo qué exactamente. A José Vargas Silva dijo que lo conocía desde la etapa de colegio, además se juntaban a jugar fútbol con Rodrigo y Nelson. Supo que Vargas Silva

tenía relaciones comerciales con Rodrigo y Nelson. En cuanto a él, dijo que desde el año 2010 había sido el contador de la empresa Inversiones Bustos Morgado Ltda., en la que eran socios los tres hermanos Bustos. La antecesora de esta sociedad había sido la compañía “Bustos y Mejías Ltda.”, de la cual eran socios Rodrigo Bustos Morgado y Hugo Mejías Llanos, quienes hicieron cesión de derechos a Nelson y Christian Bustos Morgado, modificándose la razón social a “Inversiones Bustos Morgado Ltda.”, nombre de fantasía fue “BM Ltda.”. No obstante que negó que en ese entonces hubiere conocido al acusado Christian Bustos, como tampoco haberle prestado asesoría contable, su negativa quedó desmentida con los correos electrónicos que se le exhibieron durante su declaración, de los cuales se hizo la siguiente lectura: 1) correo electrónico de fecha 24 de abril de 2012; de: oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net; *materia: adjudicaciones; “Christian, revisé el portal y sólo pude obtener las bases administrativas de las nuevas licitaciones y la resolución de adjudicación de Loica. Las resoluciones de Hualañé y Melozal no las pude encontrar. Por favor, mándame los pdf con esas resoluciones. Gracias. Ot”*; y, 2) correo de fecha 3 de julio de 2012; asunto: firma; de oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net con copia rbustos@inversiones.cl; *“Christian, la dirección de la sucursal es San Joaquín Av. Vicuña Mackenna 4860, teléfono 6875300, ahí debes hablar con Sergio Ramírez. Está cerca de metro San Joaquín”*. Respecto de este último, la explicación que entregó dejó fuera de toda duda que sí conocía a este acusado y que le prestaba asesoría contable: *Este correo “corresponde a la firma de un documento bancario ya que Rodrigo, ...la sociedad, estaba solicitando un crédito bancario y para otorgarlo le pidieron avales y que firmaran los socios”*.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que, en retribución de las gestiones y acciones que realizaban para las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA, los acusados Rodrigo y Nelson Bustos recibieron dinero proveniente de los pagos que hacía Carabineros a las citadas empresas por las obras ejecutadas. Tales dineros les eran entregados por Juan Alejandro Soto Jara y Osvaldo Tobar Fernández, dueños de dichas empresas, sin mediar contratos escritos de trabajo, ni boletas de honorarios que justificasen la existencia y cuantía de los estipendios que percibían.

Los testimonios de Juan Soto Jara y Osvaldo Tobar Fernández, y los documentos ya referidos, demostraron que los acusados Rodrigo y Nelson Bustos tenían

acordado como pago adicional un porcentaje de las utilidades de cada proyecto, el que, como explicó Tobar, se pagaba “como bono” al final de las obras. Con esas mismas declaraciones y la prueba documental latamente reseñada, se acreditó que a solicitud de los acusados los estipendios les eran pagados en dinero efectivo. En el caso de Juan Alejandro Soto Jara, éste le entregaba cheques al acusado Rodrigo Bustos, documentos que inicialmente giró nominativos y posteriormente sólo con su firma, los que este procedía a cobrar. Tratándose de Osvaldo Tobar, refirió éste que desde la cuenta de la empresa FEALFRA SPA transfería dinero a su cuenta personal, con cargo a la cual procedía posteriormente a girar cheques, algunos de los cuales los cobraba por caja, personalmente, y otros por terceros (José Vargas Silva, Pedro Vargas Silva y Hugo Miggani), procediendo a continuación, a veces el mismo día y en sucursales bancarias próximas, a depositar esos dineros en las cuentas corrientes de los acusados Rodrigo y Nelson Bustos, desde las cuales estos últimos traSPAsaban dinero al acusado Christian Bustos, ya fuera mediante depósitos de dinero efectivo, ya mediante transferencias electrónicas.

Los traspasos de dinero aludidos se hicieron por los montos, en las fechas, por las personas y en las cuentas bancarias que indica la acusación, a las cuales el tribunal ya hizo mención extensa y detallada al referirse a los medios de prueba que acreditaron tales circunstancias.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que, tratándose del acusado Christian Bustos Morgado, los hechos que anteceden son constitutivos del delito de cohecho (a la data de los hechos el artículo 248 bis del Código Penal, preceptuaba, *“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de....”*).

En cuanto a los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, los hechos en cuestión son constitutivos del delito de soborno (a la época de los hechos el artículo 250 del Código Penal prescribía, *“El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en*

los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado...”).

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO QUINTO. Que, efectivamente, la conducta del acusado Christian Bustos se encuadra en el tipo penal del cohecho, en tanto en cuanto se acreditó que *a cambio de haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo, aceptó recibir beneficios económicos para sí.*

La infracción en cuestión recayó en el deber de abstención que establecen los artículos 4° y 12 de la ley que regula las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, Ley N° 19.880, de los cuales, debe recordarse, forman parte las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, como es el caso de Carabineros de Chile, según dispone expresamente el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: *La Administración del Estado estará constituida por....., las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública,*

A mayor abundamiento, el artículo 2°, de la citada Ley Orgánica Constitucional, no deja duda acerca de la aplicación de la Ley 19.880, a Carabineros de Chile: *“Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.*

Las normas legales que vienen citándose no son sino la concreción de lo que señalan los artículos 7° y 8°, de la Constitución Política de la República: Artículo 7°, *“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley (inciso primero). Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes (inciso segundo). Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale (inciso tercero); Artículo 8°, “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus*

titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el encausado Christian Bustos Morgado, en el ejercicio de sus funciones estaba supeditado al deber de abstención, por lo que no debió intervenir en los procedimientos administrativos concernientes a las licitaciones en que participaron las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA, atendido que, por una parte, sus hermanos, Rodrigo y Nelson, prestaban servicios para éstas, y por otra, el mismo mantenía relaciones de servicio con el dueño y socio de FEALFRA SPA, Osvaldo Tobar Fernández, encargado de la contabilidad de las empresas de que sus hermanos y él eran dueños, y únicos socios.

Las circunstancias descritas configuran las causales de inhabilidad de los numerales 2 y 5, del citado artículo 12, mediante las cuales se busca asegurar el principio de abstención: *“Artículo 12. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes: N° 2, Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,...; N° 5, Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.*

En la especie, la infracción del principio de abstención y su correlato con el deber de abstención de los citados numerales 2º y 5º, repercutió negativa y gravemente en el principio de imparcialidad que establece el artículo 4º de la Ley 18.575, que señala: Artículo 11, “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

Ahora bien, la infracción del deber de abstención y su repercusión en el principio cardinal de la imparcialidad a que están sometidos los procedimientos administrativos, son por si solos suficientes para incurrir en responsabilidad administrativa, pero no bastan para configurar el tipo penal de cohecho, toda vez que para ello es necesario que, además, se vean afectados o puesto en riesgo los bienes jurídicos que el legislador busca proteger con este tipo penal. Al respecto, resulta útil reproducir la mención doctrinal que se hace en el considerando 40°, de la la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha 16 de abril de 2021 (RUC 1410025253-9, RIT 309-2018, seguida por delitos de cohecho, fraude al Fisco y otros), en el cual se cita al autor Guillermo Oliver: *“...., si bien esperable de todo funcionario público que cumpla con los deberes de corrección y probidad, por ser precisamente personas que ostentan una labor de relevancia social traducido en una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal del cargo, ello no es suficiente para criminalizar una conducta, porque no se trata de un simple reproche por el cargo, sino que se requiere, además, que esa deslealtad o falta de honestidad del empleado público (citando a la profesora María Magdalena Ossandón), tenga un correlato en la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía.”*

En el caso que nos ocupa, la afectación de los derechos y de las legítimas expectativas de la ciudadanía constituye una realidad innegable, desde que los oponentes que se presentaron a las licitaciones se vieron privados del derecho a que el procedimiento en que estaban inmersos fuere llevado con arreglo al principio de objetividad, entre otros. En efecto, quedó establecido que la actuación del acusado Bustos al interior de la Comisión Evaluadora adolecía de falta de imparcialidad pues concurrían en él las circunstancias impeditivas de los números 2° y 5°, del artículo 12, ya citado, conforme a las cuales debió inhabilitarse. Al no haberlo hecho, el acusado incurrió en una infracción funcionaria que devino en denegación de la objetividad e imparcialidad a que tenían derecho los otros oponentes que FEALFRA EIR y FEALFRA SPA. Prueba palmaria de esta denegación y de la grave afectación que significó para esos otros postulantes fue la adjudicación de los proyectos a esas dos empresas, no siendo óbice a esta conclusión la circunstancia que otras licitaciones no les hayan sido adjudicadas, puesto que la acusación no lo fue por esas otras sino por éstas

Se colige entonces que la conducta del acusado excedió con creces la sola falta de corrección y probidad que debía imprimir a los actos que le tocaba realizar en el ejercicio de sus funciones, traspasando de esa forma la línea que divide la responsabilidad administrativa de la penal.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto al cuestionamiento que hizo la defensa su alegato de cierre, afirmando que *sólo en el juicio, particularmente en el alegato de clausura de la fiscalía, habrían sido comunicados los hechos constitutivos de los deberes supuestamente infringidos, “puesto que nunca fue imputado en la acusación que actuaba con infracción a los deberes de su cargo”, ni tampoco cuáles habría sido éstos, sino que sólo se hizo una comunicación de circunstancias jurídicas, pero no fácticas*, debe señalarse:

En primer lugar, esta alegación adolece de la misma falta que reprocha al texto de la acusación ya que no indica cuál o cuáles habrían sido los derechos supuestamente amagados y los perjuicios que de ello habrían derivado para su representado. Faltando estas precisiones, no puede el tribunal pronunciarse a partir de lucubraciones propias, cuanto más si en su alegación la defensa no le pidió nada en concreto.

No obstante lo anterior, ha de decirse que si el correlato del alegato fuese la indefensión del acusado, por no haber cumplido la acusación con la exigencia de la letra b) del artículo 259 del Código Procesal Penal (“La acusación deberá contener en forma clara y precisa: *La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica*”), sería del caso que este eventual incumplimiento hubiere sido planteado, o ante al Juez de Garantía en la audiencia de preparación de juicio oral, ya como corrección de vicios formales (que no parece ser el caso del cuestionamiento de la defensa), ya como cautela de garantías, o ante este Tribunal de Juicio Oral en el alegato de apertura, pues la cuestión principal que se echa en falta ya era conocida por la defensa en ese momento.

Por otro lado, si bien la estrategia de defensa y teoría del caso las decide únicamente el letrado que representa al acusado, no por ello puede ignorarse que cualquiera sea la que en definitiva adopte, incidirá, en toda medida, en el razonamiento y convicción que se forme el tribunal. En este sentido, cobra

aplicación y extrema relevancia la presunción de conocimiento de la ley que establece el artículo 8° del Código Civil, la que en el caso del acusado se ve reforzada de manera importante atendida su calificada y vasta formación profesional y académica. Tratándose de la defensa, el reforzamiento resulta superlativo, situando su conocimiento de la ley al borde una presunción de derecho, habida cuenta de su condición de abogados y dilatada experiencia profesional. En cualquier caso, los argumentos que siguieron al cuestionamiento confirmaron la presunción y desvirtuaron una eventual indefensión.

Finalmente, si el cuestionamiento de la defensa hubiese estado dirigido a demostrar la incongruencia en que incurriría la sentencia por decir cuál o cuáles fueron las infracciones a los deberes del cargo en que incurrió el acusado, correspondería en tal caso que en su oportunidad se recurriese en contra de ésta, pero no que el tribunal omitiere pronunciarse por el derecho aplicable a los hechos de la acusación.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: Que, acerca del parentesco, es del caso señalar que la defensa de los acusados refutó el vínculo por falta de prueba, lo cual no es efectivo ya que acerca de esta circunstancia obraron abundantes medios de prueba que demostraron el vínculo en cuestión, pudiendo citarse, entre otros, las escrituras y extractos de las sociedades que formaron los tres acusados, una por vía principal, asociándose directamente, y la otra por vía de cesión de derechos. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento expreso que hizo el acusado en varios pasajes de su declaración.

Por último, la exigencia que planteó la defensa en orden a que, más allá de lo dicho por su representado, era necesario probar cuál era el grado de parentesco, si este era por consanguinidad o afinidad, si era de doble o simple conjunción, etc. Al respecto, la libertad de prueba de que gozan los intervinientes y la libertad de apreciación que de ella se otorga al tribunal permiten afirmar, más allá de alguna duda razonable, que los medios de prueba y la declaración del acusado demostraron que los acusados Christian, Rodrigo y Nelson Bustos Morgado son parientes por consanguinidad, en segundo grado, en línea recta, ergo, hermanos, y, además, de doble conjunción, por lo que se encuentran incluídos en la causal 2ª de inhabilidad del artículo 12, antes citado.

CENTÉSIMO SEPTUAGÉSIMO NOVENO: Que, el

desconocimiento que alegó el acusado Christian Bustos respecto a la participación de sus hermanos en las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA, no puede ser atendido, como quiera que la declaración de Tobar Fernández puso en duda la negativa de aquel, la cual finalmente el propio testigo desvaneció, aunque en desmedro del acusado, al reconocer la existencia y contenido de los correos electrónicos que en su declaración le exhibió la fiscalía, siendo él el remitente y Christian Bustos el destinatario. El texto de una de estas misivas no deja espacio para dudar que efectivamente se conocían y que mantenían relaciones, no del todo comerciales: 24 de abril de 2012; de: oTobar@altazor.cl a christian.bustos@vtr.net; materia: adjudicaciones; “Christian, revisé el portal y sólo pude obtener las bases administrativas de las nuevas licitaciones y la resolución de adjudicación de Loica. Las resoluciones de Hualañé y Meloza no las pude encontrar. Por favor, mándame los pdf con esas resoluciones. Gracias. OT”.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO: Que, la circunstancia que el acusado Christian Bustos recibió un beneficio económico quedó de manifiesto al haberse acreditado que aquél recibió los depósitos y transferencias de dinero en sus cuentas bancarias, a los cuales ya antes se hizo mención. Sus explicaciones y la documental acompañada por su defensa pretendiendo justificar todos los depósitos recibidos en sus cuentas corrientes personales en los negocios que él y sus hermanos realizaron con la empresa Sunpack, no permite explicar, ni tampoco justifican, por qué los dineros a que se ha hecho referencia fueron sucesivamente transferidos desde la empresa FEALFRA, contratista de Carabineros que se adjudicó las obras, o su representante legal, hasta llegar a él.

Además, lo afirmado por el acusado Christian Bustos, en cuanto a que los depósitos que sus hermanos le hicieron en dinero en efectivo en su cuenta corriente del Banco de Chile, durante el año 2012 y 2013, por un total de \$34.700.000, corresponderían al pago que le hacían sus hermanos de las cuotas de los créditos que él habría solicitado para la empresa, y que ellos debían pagarle, es una versión que no sostuvieron ni siquiera sus hermanos, quienes no prestaron declaración en la causa, sin que tampoco exista información del monto de las cuotas de los créditos, fechas de pago y tampoco información contable clara y precisa que pudiera relacionarse respecto a que los referidos pagos

provenían de retiros de dineros de la sociedad Inversiones Bustos Morgado Ltda o de la sociedad Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda.

En este sentido, la prueba documental N° 406, de la defensa, consistente en balances tributarios de la empresa Asesorías y Servicios Logísticos BM, giro transporte, en los que se informa que en los años 2013, 2014 y 2015 la empresa obtuvo ganancias, no permite concluir que los pagos en efectivo que hicieron Nelson y Rodrigo a su hermano Christian provenían de dichos ingresos.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO PRIMERO: Que, no puede dejar de señalarse que los créditos bancarios que dijo el acusado Christian Bustos haber solicitado en beneficio de la sociedad que tenía con sus hermanos (y que habrían sido destinados a la compra de camiones o a capital de trabajo), la documentación relacionada con sus cuentas sus cuentas corrientes, las facturas y contratos de compra de vehículos y posterior arriendo a la empresa Sunpack, ni tampoco la documentación contable de la empresa, permiten corroborar sus afirmaciones, toda vez que el análisis de la información que contienen tales documentos requiere de conocimientos específicos y más extensos que la sola observación y/o apreciación de los jueces.

En tal sentido, las acertadas objeciones de forma y fondo que planteó la defensa en relación al denominado Informe Final de Investigación Especial de la Contraloría General de la República, concerniente al “Hecho 1”, objeciones que el tribunal acogió, desestimando en consecuencia las conclusiones que allí se señalaban, obligan ahora, por esas mismas razones de fondo, tener que desestimar estos documentos.

En efecto, la prueba documental que aportó la defensa contiene información dispersa, parcial e inorgánica, desprovista de una mínima, pero necesaria, concatenación que la haga coherente e inteligible para cualquier persona, y en especial para el tribunal. Careciendo esta prueba de las condiciones apuntadas, no es posible entonces compartir la tesis del círculo virtuoso que en toda medida planteó la defensa, al sostener que los dineros que el acusado Christian Bustos recibió en sus cuentas corrientes no eran sino el reflejo de los créditos bancarios que solicitó, de los depósitos que recibió de sus hermanos en pago de las cuotas

de esos mismos créditos y de los ingresos que obtenía la empresa familiar por el arriendo de los vehículos que con tales créditos iban comprando.

Más aún, para que la tesis del virtuosismo pudiera haberse aceptado como fuente de duda razonable, era necesario demostrarla con prueba ad hoc y de calidad, como habría sido, por ejemplo, una pericia contable, más la declaración del respectivo perito en que diere cuenta de la metodología empleada y de las conclusiones a que habría llegado, conforme al objetivo que se le hubiere encomendado. En la especie, la ausencia de una prueba como esta, u otra igualmente capaz de informar de manera inteligible la documentación aportada por las defensas, no se puede pretender que sea el tribunal quien supla el déficit probatorio obligándolo a razonar sobre algo que le es inasible, al menos de la manera que propuso la defensa.

La carga de la prueba de los hechos que se imputan a título de delito recae en los acusadores, en tanto que la demostración de la teoría del caso que presentan los acusados y sus defensas es de cargo de estos. En este sentido, no resulta aceptable valerse de la presunción de inocencia y de la carga de la prueba de los hechos de la acusación para pretender construir sobre ellas una duda razonable afincada en la carencia o defecto de sus propios medios de prueba. La ininteligibilidad de un medio probatorio es de la sola responsabilidad de quien lo aporta, sin que de otro lado el tribunal esté autorizado para desentrañar su coherencia, hipotética, más aún si la libertad de apreciación de la prueba limita con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y con los conocimientos científicamente afianzados. Haber arribado a la conclusión del círculo virtuoso que sostuvo la defensa, o a cualquiera otra que se quisiera sustentar en los documentos en comentario, constituiría una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEGUNDO: Que, en relación con la documental N° 8, de la prueba de la defensa, esto es, el Oficio N° 781, del Departamento de Cuarteles, de fecha 24 de mayo de 2018, mediante el cual remite a la fiscalía los antecedentes de los procesos licitatorios en que participó la empresa FEALFRA SPA entre los años 2012 a 2018, en el que se informan procesos licitatorios en los que el acusado Christian Bustos aparece suscribiendo los Informes Técnicos, pero en los cuales los proyectos licitados no le fueron

adjudicados a la empresa FEALFRA SPA, en nada altera ni genera duda en el tribunal respecto a lo ocurrido con los procesos licitatorios que fueron materia de juicio y fundamento de esta sentencia.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO TERCERO: Que, aun cuando la conducta del acusado Christian Bustos se corresponde con la hipótesis de haber *aceptado recibir para sí un beneficio económico, para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo*, es del caso que la infracción en que incurrió fue lucrativa no sólo para él, sino también para sus consanguíneos en segundo grado, Nelson y Rodrigo, quienes, antes que él, reportaron provecho económico con la adjudicación de los proyectos a las empresas a cuyos dueños “asesoraban”. Respecto de estos propietarios cabe señalar que la malicia o buena fe bajo la cual retribuyeron económicamente a esos dos acusados, en nada cambia el hecho de que estos últimos recibieron el beneficio económico y que posteriormente lo utilizaron para retribuir al funcionario público infractor de su deber de abstención.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO CUARTO: Que, siendo el cohecho consecuencia del soborno, cabe concluir que los hechos que se dieron por establecidos en relación al primero de tales ilícitos, constituyeron para los acusados Nelson y Rodrigo Bustos delito de soborno, por haber sido estos quienes *dieron al empleado público, Christian Bustos, beneficioS económicos para provecho de éste, además del suyo propio*.

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO CUARTO BIS. Que, en cuanto a la prueba documental y registros de audio que aportó la defensa del acusado Christian Bustos, cabe señalar:

1) Los antecedentes que se adjuntaron al oficio enviado por el Departamento L1 a la fiscalía, relacionados con procesos licitatorios en los cuales la empresa Constructora FEALFRA había participado, pero no se había adjudicado los proyectos concursados (**prueba documental N° 8, de la defensa**), a saber, proyectos retén Niebla, Punucapa, Pintué, Santa Ana de Lobos, La Huerta, Chicureo), de ellos no se desprende otra cosa que no sea el hecho que la empresa mencionada no se adjudicó los proyectos licitados, hecho negativo del

cual el tribunal no colige uno positivo que desvirtúe la prueba de los hechos que fueron imputados a los acusados Bustos;

2) En cuanto a los Informes Técnicos N° 13 y 14, de 13 de noviembre 2013, correspondientes a los proyectos Retén Isla Huar y Coyhaique Alto, elaborados para su adjudicación por trato directo, estos ya fueron considerados anteriormente por haber sido incorporados como prueba de la fiscalía;

3) Tratándose de los **documentos N° 380, 382 y 384**, prueba documental propia de la defensa, relacionados con Informes Técnicos de Evaluación del año 2012, de los proyectos de reposición retenes de los retenes El Olivar y Bajos de Lircay, y del proyecto tenencia Reina Luisa, en los cuales figuran como oferentes las empresas FEALFRA y CGM, en el primero, y CGM en los dos últimos, y como miembro de la Comisión Evaluadora el acusado Christian Bustos, lo único cierto que de ellos se puede colegir es que el acusado Bustos integró las Comisiones Evaluadoras, no debiendo haberlo hecho, en el caso de FEALFRA;

4) Respecto del **documento N° 572** (Libro Proyecto de Infraestructura de Dirección General de Santiago, Carabineros de Chile, 2 de marzo 2011), el tribunal no halló en él información alguna que esclareciera los hechos, ni tampoco la tesis de la defensa;

5) En cuanto a los **documentos N° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33**, estos resultaron impertinentes e irrelevantes para la formación de la convicción del tribunal por no guardar relación directa con los delitos de cohecho y soborno que se indican en el “Hecho 2” de la acusación, como tampoco directamente con los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado;

6) Que, los documentos **N° 365, 367 y 368**, consistentes en certificados de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados, correspondientes a las placas patentes de los vehículos que en ellos se individualizan, en los que los propietarios inscritos resultan ser las empresas de los tres acusados Bustos, como asimismo los documentos **423, 124, 486, 491, 495, 496, 501, 503, 531, 533 y 551** (facturas de venta directa, facturas y contratos leasing, contratos de leasing de los camiones adquiridos por las sociedades de los acusados Bustos y certificado de otorgamiento y pago de crédito de General

Motors Financial Chile S.A., de 23 de abril de 2019), **447 y 456** (solicitudes de primera inscripción de los vehículos en comento), no tuvieron incidencia en la decisión, toda vez que tales antecedentes no formaron parte de la convicción de condena, en tanto en cuanto esta se limitó a las transferencias y depósitos que en concreto describió la acusación, conclusión que por la misma razón se hizo extensiva a la prueba documental signada con los números **409** (certificado de inscripción de iniciación de actividades de la empresa Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda., fecha de inicio 9 de enero 2013), **410** (registro de operaciones de servicios de venta de la empresa Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda.), **412** (anexo peritaje contable, contrato de arrendamiento de tracto camión entre Nelson Bustos Morgado y José Mauricio Vargas Silva; 10-12-2012, por un tracto camión, color blanco, año 2007, diesel, placa patente WK6414-3, por plazo indefinido y una renta mensual de \$2.000.00), **413** (anexo peritaje de los trabajos realizados por la empresa Transportes Vargas, en relación con el vehículo placa patente WK6414, que le habría sido arrendado a José Vargas Silva), **414** (acta de entrega de cheque 2541574, cuenta titular Christian Bustos Morgado 58908-10, Banco de Chile, \$8.000.000; 29-12-2012: *Nelson Bustos Morgado hace entrega del cheque que se detalla a José Vargas Silva, con el fin de adquirir un camión de transporte: cheque 2541572, titular Christian Busto Morgado, cuenta corriente 58908-10, \$10.000.000*), **415** (Informe DICOM de José Vargas Silva, fecha, de fecha 24 de junio de 2016), **416** (contrato de arriendo de seis camiones, placa patente HXRK79, GRTV91, GRTV90, HXRK80, GSBF84 y GSPF82, por la suma de \$7.021.000 mensuales, suscrito entre Asesorías y Servicios Logísticos BM Ltda. y Sunpack Ltda., suscrito ante notario en enero de 2017, representadas por Nelson Bustos Morgado y Pedro Arturo Vargas Silva, respectivamente) y **417** (contrato de arrendamiento de seis camiones, placa patente HXRK79, GRTV91, GRV90, HXRK80, GPPF84, GPPF.82, arrendados en la cantidad de \$7.021.000 mensuales, suscrito el 24 de enero de 2019, entre Servicios Logísticos BM Ltda., representada por Nelson Bustos Morgado, y la empresa José Vargas Silva EIRL, representada por José Mauricio Vargas Silva;

7) Acerca de la escritura pública de constitución de la sociedad Asesorías, Servicios Logísticos y de Transportes Ltda., o Servicios LogísticosBM Ltda., (**prueba documental Nº 437**), es del caso que la información que se contiene en este documento ya había sido incorporada anteriormente por los acusadores y considerada por el tribunal;

8) Tratándose del certificado de licencias médicas del acusado Christian Bustos Morgado, extendido por la Dirección de Sanidad de Carabineros de Chile con fecha 8 de marzo de 2022 (**prueba documental Nº 538**), el tribunal ya se hizo cargo de este documento en las consideraciones que anteceden;

9) Respecto del **documento Nº 577** (infografías Cuarteles Dirección General de Carabineros, Revista de Carabineros de Chile; página 2: 44 mil y fracción funcionarios, 195 tenencias, 386 retenes), sólo cabe decir, para que no se olvide o confunda, que la acusación fue dirigida en contra del entonces funcionario de Carabineros, Christian Patricio Bustos Morgado, por los delitos de fraude y cohecho que cometió en relación a los cuarteles policiales tantas veces citados; y,

10) En relación a los audios de los registros de las audiencias de formalización y de las tres de *reformatización* que le siguieron, efectuadas ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, los días 28 de septiembre de 2016, 9 de marzo de 2018, 25 de mayo de 2018 y 28 de septiembre de 2018, sólo señalar que dicha prueba fue analizada en su oportunidad a propósito de los delitos de cohecho y soborno cometidos el año 2011, en relación a los proyectos de reposición de los retenes Loica y Hualañé, los cuales, a sugerencia de la Comisión Evaluadora, integrada por el acusado Christian Bustos, fueron adjudicados a la empresa FEALFRA EIRL, en la que prestaban servicios sus hermanos, los acusados Nelson y Rodrigo Bustos;

CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO QUINTO: Prescripción. Que, respecto de los delitos de cohecho y soborno cometidos en relación con los retenes Loica y Hualañé, el tribunal hará lugar a la petición de la defensa en cuanto a declarar la prescripción de la acción penal por haber transcurrido, desde su perpetración y la fecha en que fueron formalizados los acusados, el plazo que señala la ley para el ejercicio oportuno de la acción.

Al respecto, dispone el artículo 95 del Código Penal, que “El término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito”, lo que en el caso sub lite corresponde a la fecha de los Informes Técnicos de Evaluación, ya que en ellos se plasmó la participación del acusado Christian Bustos en la Comisión Evaluadora visando esos Informes, a excepción de Hualañé, en el que el acusado, como ya se dijo, obró de facto y no oficial ya que

no se encontraba en funciones por estar haciendo uso de licencia médica. Consta que el último de estos Informes, y por ende el último de los delitos, tuvo lugar en el mes de agosto de 2013, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de prescripción. Consta de la prueba de la defensa (registros de audio de cuatro audiencias de formalización) que el 28 de septiembre de 2018, los tres acusados fueron formalizados: Nelson y Rodrigo Bustos por delitos soborno en los siete proyectos de reposición de retenes (Loica, Hualañé, Lontué, La Islita, Coronel del maule y subcomisaría San Francisco de Mostazal), y Christian Bustos por delitos de cohecho de los retenes Loica y Hualañé, ya que por los otros cinco cuarteles había sido formalizado con anterioridad, el 9 de marzo de 2018.

En consecuencia, habiéndose, por un lado, ejercido el 28 de septiembre de 2018 la acción penal, por los delitos vinculados a los hechos de los retenes Loica y Hualañé, y por otra, cometido el último de los siete delitos en el mes de agosto de 2013 (subcomisaría San Francisco de Mostazal), se concluye que la formalización que tuvo lugar en aquella fecha no interrumpió el plazo de prescripción que venía corriendo desde la última data, toda vez que ese plazo ya se había completado al haber transcurrido más de los cinco años que señala el artículo 95 del Código Penal para la prescripción de la acción penal, incluida la rebaja del cómputo que ordena el artículo 100, inciso primero, del mismo Código, atendidas las ausencias de los acusados del territorio nacional, las cuales, en todos los casos, fue por un número de días inferior a los que habían transcurrido entre el último delito (19 de agosto de 2013) y la formalización de la investigación (28 de septiembre de 2018), como consta del Oficio Ord. N° 3426, de fecha 29 de marzo 2018, de la Policía de Investigaciones (prueba documental de la fiscalía, N° 698), en el cual se informan los siguientes movimientos migratorios de los acusados: 1) Christian Bustos Morgado: 1.1) Salida 17-8-2013, destino Ecuador - Entrada 25-8-2013, desde Perú; 1.2) Salida 1-12-2014, destino España - Entrada el 16-12-2014, desde España; 1.3) Salida 15 de febrero 2016, hacia Argentina - Entrada 20 de febrero de 2016, desde Argentina); 2) Rodrigo Bustos Morgado: 2.1) Salida 12 de junio de 2012, hacia a Argentina, Entrada 18 de junio de 2012, desde Argentina; 2.2) Salida 17 de agosto de 2013, hacia Ecuador - Entrada 25 de agosto de 2013, desde Ecuador; 2.3) Salida 29 de octubre de 2013, hacia Argentina - Entrada 30 de octubre de 2013, desde Argentina; 2.4) Salida 17 de junio 2014, hacia Brasil - Entrada 24 de junio 2014, desde Brasil; 2.5) Salida el 18 de abril de 2015, hacia Brasil - Entrada el 25 de abril de 2015, desde Brasil; 2.6) Salida 16 de noviembre 2015, hacia Brasil - Entrada el 24 de noviembre de 2015,

desde Brasil; 2.7) Salida 31 de mayo 2016, hacia EEUU - Entrada 19 de junio 2016, desde EEUU; 2.8) Salida 28 de mayo 2017, hacia Colombia - Entrada el 31 de mayo 2017, desde Colombia; 2.9) Salida 7 de octubre de 2017, hacia Argentina - Entrada 12 de octubre de 2017, desde Argentina; y, 3) Nelson Bustos Morgado: 3.1) Salida 28 de noviembre de 2011, hacia Panamá - Entrada 5 de diciembre 2011, desde Cuba; 3.2) Salida 12 de junio 2012, hacia Argentina - Entrada 18 de junio 2012, desde Argentina; 3.3) Salida 17 de agosto 2013, hacia Ecuador - Entrada 25 de agosto 2013, desde Ecuador; 3.4) Salida 14 de junio 2015, hacia España - Entrada 29 de junio de 2015, desde Brasil.

CENTÉSIMO OCTAGÉSIMO SEXTO: Que, los hechos enjuiciados configuraron siete delitos de cohecho y soborno, en dos de los cuales, como acaba de decirse, la acción penal estaba prescrita en el momento en que se la puso en marcha, por lo que en la determinación de la pena se considerarán sólo cinco delitos cohecho y cinco de soborno, por cada proyecto. Entonces, tratándose de delitos reiterados el quantum de pena se determinará con arreglo al artículo 74 del Código Penal o al artículo 351 del Código Procesal Penal, por tratarse de delitos de la misma especie. Lo anterior, según mejor convenga a los sentenciados.

CENTÉSIMO OCTAGÉSIMO OCTAVO: **Audiencia de determinación de pena y forma de cumplimiento. Peticiones.** Que, luego de comunicado el veredicto de condena se dio la palabra a las defensas para que expusieran lo conveniente a los factores y circunstancias relevantes para la determinación de la pena y la forma de cumplimiento de estas, las cuales señalaron:

a) el ministerio público: Solicitó para los condenados por los delitos de fraude al Fisco la pena de 10 años de presidio, multa e inhabilitación absoluta temporal, más costas. Hizo presente que el quantum de la pena decía relación con la mayor extensión del mal causado que refiere el artículo 69 del Código Penal.

Respecto de Pizarro Dasso, reconoció la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, por lo que pidió para él una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa y accesorias legales, sin costas. Señaló que la

colaboración de Pizarro fue sustancial desde que permitió que saliera a la luz este caso de corrupción.

En lo que respectaba a los demás acusados indicó que no hubo tal colaboración sustancial, habida cuenta de las teorías alternativas que sostuvieron, por ejemplo, en cuanto a los correos electrónicos. Refirió que el acusado Rojas había entregado una clave de sus correos electrónicos que no correspondía por lo que para su obtención se debió recurrir a otros medios o fuentes de información. El acusado Christian Bustos Morgado no accedió a la apertura de sus cuentas personales ni de las sociedades, como tampoco autorizó examinar la contabilidad de las empresas. En cuanto a Gutiérrez Martínez, los correos electrónicos que proporcionó fueron parciales, tanto así que la fiscalía debió obtenerlos por cuenta propia, en muchos de ellos, sin perjuicio de haber negado su responsabilidad en el delito de fraude.

En lo concerniente a las penas del delito de cohecho, pidió 4 años de presidio para Christian Bustos Morgado y una multa equivalente al duplo de lo aceptado, más las penas accesorias y el pago de las costas.

Para los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, por el delito de soborno, solicitó la misma pena que para él anterior.

Por último, reconoció que en todos los acusados concurría la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal.

b) la parte querellante: La parte querellante, aduciendo las mismas razones que la fiscalía, adhirió a las penas principales y accesorias solicitadas por ésta, y agregó que no procedía calificar la citada atenuante 6ª del artículo 11 por cuanto no había nada especial en las conductas pretéritas de los acusados que justificase reconocer a esa circunstancia una condición especial o superior. Concordó con la fiscalía respecto de la procedencia de la atenuante 9ª del citado artículo, en el caso del acusado Pizarro, y la improcedencia de esta respecto de los demás acusados.

c) la defensa de los acusados Christian, Nelson y Rodrigo Bustos Morgado:

La defensa de los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado solicitó que se reconociera en favor de estos, además de atenuante 6ª, la media prescripción que establece el artículo 103 del Código Penal, toda vez que a la fecha de la formalización había transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción. Por lo anterior, solicitó para ambos una pena de 61 días de presidio y su sustitución por la pena remisión condicional.

En cuanto al acusado Christian Bustos, tratándose del hecho 1, solicitó, además de la circunstancia 6ª la atenuante 9ª del artículo 11, ya que éste había prestado declaración, tanto en el juicio como en la investigación, además había accedido a abrir sus cuentas corrientes y, en el hecho 2, había reconocido en su declaración ante el tribunal el vínculo del parentesco que tenía con los acusados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado. En consecuencia, por concurrir dos circunstancias atenuantes, pidió, respecto al hecho 1, imponer una pena de 3 años y 1 día de presidio menor y la multa en el mínimo (equivalente al 10%), haciendo presente al efecto que a la data de los hechos la pena asignada al delito de fraude era un grado de una pena divisible. Tratándose del hecho 2, solicitó que en virtud de las referidas dos atenuantes y a la media prescripción del antes citado artículo 103, ya que los hechos fueron recién formalizados en el año 2018, esto es, cuando ya habían transcurrido 2 años y medio de la fecha de su ocurrencia. Requirió que el acusado Christian Bustos fuere condenado, en el delito de cohecho, a la pena de 61 días de presidio y a una multa del 10% del provecho obtenido.

En subsidio, y para el caso que el tribunal no diere por concurrente la minorante 9ª, solicitó que la atenuante 6ª se la tuviese como muy calificada, habida cuenta que a la edad del acusado esta era la primera vez en que se veía implicado en un delito.

Solicitó que ambas penas le fueren sustituidas por libertad vigilada intensiva, para lo cual hizo lectura resumida de un informe social pericial del acusado Christian Bustos, en el cual se señala que el informado contaba con un sólido arraigo social, familiar y laboral, al igual que su familia de arraigo.

Por último, pidió que no fuere condenado en costas, ello en atención a que había sido absuelto de varios de los cargos que se le hicieron y al hecho de que el acusado había tenido motivo plausible para litigar.

d) la defensa del acusado Francisco Pizarro Dasso:

Su defensa invocó las siguientes tres atenuantes: circunstancia 6ª, para cuya demostración dio lectura al extracto de filiación y de antecedentes penales del acusado); la circunstancia 9ª, sirviéndole de fundamento las razones que habían expuesto los acusadores, agregando, además, que su relato había sido completo y complejo, había develado los hechos y sus circunstancias, y había aportado antecedentes relevantes, en particular la documental N° 28 de sus medios probatorios, añadiendo que en la minorante en cuestión era de una gran entidad; y, por último, la eximente incompleta del artículo 11 N° 1 en relación al artículo 10 N° 1 del Código Penal, estos es, haber obrado por miedo insuperable, por una fuerza irresistible, en tanto cuanto fuerza moral, en la medida que había estado inmerso en una institución jerarquizada, dentro de la cual el acusado Christian Bustos Morgado había hecho valer su jerarquía ante él mediante maltratos e imposición de las conductas incurridas por Pizarro.

La pena asignada al delito al tiempo de los hechos era presidio mayor en grado mínimo, pero concurriendo tres atenuantes, una de ellas de gran entidad, pidió rebajar la pena en dos grados e imponer la pena de 541 días de presidio menor. En subsidio, 3 años y un día. En subsidio, 5 años. En cuanto a la pena de multa, solicitó que le fuera impuesta en el mínimo. Asimismo, que no fuere condenado en costas. Además solicitó reconocer como abono 140 días de arresto domiciliario más el tiempo de reclusión nocturna. Finalmente, pidió sustituir la pena de presidio por la de remisión condicional. A tales efectos aportó un peritaje social de fecha 22 de abril de 2022, elaborado por la asistente social, perito judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Laura del Carmen Serrano. En subsidio, la pena substitutiva de libertad vigilada, y en subsidio de ésta, libertad vigilada intensiva.

e) la defensa del acusado Cristian Gutiérrez Martínez: Pidió reconocer las atenuantes 6ª y 9ª antes mencionadas, y que la primera de ellas fuera considerada muy calificada, atendida la edad del acusado sin haber sido

antes objeto de condenas. Respecto de la minorante 9ª pidió tenerla como muy calificada, atendida la entrega de sus correos en el período correspondiente a los hechos, toda vez que sin esos correos aparecía dudoso que se hubiere podido alcanzar la convicción que se obtuvo. Tales correos fueron utilizados por la fiscalía, la cual no solicitó más información respecto de ellos. Añadió que dentro de los correos que entregó había varios que lo perjudicaban, pero de los cuales no hizo retiro. Abrió sus cuentas corrientes del Banco Santander y BCI correspondientes a la empresa CGM y, además, hizo entrega de la contabilidad de la empresa. Adujo que la interposición de la querella había develado los hechos.

En consecuencia, solicitó rebajar la pena en dos grados e imponer la de presidio menor en grado medio, o en subsidio, si la rebaja fuere de un grado, la pena de presidio menor en su grado máximo, y sustituirla por la pena de remisión condicional. En subsidio, sustituirla por libertad vigilada. En subsidio de ésta, libertad vigilada intensiva. En cuanto a la multa solicitó que le fuere impuesta en el mínimo, sin costas.

f) la defensa del acusado César Rojas Gaete: pidió rechazar la pena solicitada por la fiscalía, atento para ello a la penalidad vigente a la fecha de los hechos, presidio mayor en su grado mínimo. Pidió aplicar el artículo 67, y en consecuencia imponer la pena en el tramo más bajo.

Invocó las atenuantes 6ª y 9ª del artículo 11 del Código Penal, esta última en atención a que la colaboración no debía analizarse sólo en función del juicio oral sino también en lo que había sido la investigación, en la cual el acusado declaró numerosas veces, tanto ante la policía como la fiscalía, inclusive accedió a un peritaje caligráfico. Negó que el acusado hubiere entregado una clave de correos que no correspondía. Por otro lado, abrió todas sus cuentas corrientes, personales y de su empresa, inclusive la de su cónyuge. La sola teoría del caso alternativa que planteó no era óbice a una colaboración sustancial.

En subsidio, solicitó que la atenuante 6ª se la tuviere como muy calificada, habida consideración de haber participado en la guerra de Bosnia en representación del país, entre otras circunstancias.

De concurrir las dos atenuantes, pidió que la pena se impusiere en el mínimo, y sustituirla libertad vigilada o, de ser el caso, libertad vigilada intensiva. En apoyo de esto adujo un informe pericial en el que señaló en sus conclusiones que Rojas no presentaba condiciones de riesgo alguno que pudieren poner en riesgo el cumplimiento de la pena sustitutiva que se le impusiere. Señaló, a mayor abundamiento, que el acusado era alumno regular de la carrera de Derecho, cursando el quinto año. Lo anterior, sin perjuicio de sus cualidades académicas.

Pidió no condenarlo en costas pues no había sido condenado por todos los delitos de que se le acusó

Por último, solicitó abonar el tiempo que estuvo en prisión preventiva, entre el 28 de septiembre de 2016 y el 18 de enero de 2017, y el tiempo de reclusión domiciliaria, desde el 18 de enero de 2017 hasta el 28 de agosto de 2017, sumando entre ambos abonos 223 días.

Se dio traslado a la fiscalía, la que se opuso a que la atenuante de irreprochable conducta anterior, requerida por todas las defensas, fuere considerada muy calificada, atento para ello, en el caso de Bustos y Rojas, a la condición de funcionarios y ex funcionarios públicos que tenía a la época de los hechos, de la cual se habían beneficiado. Asimismo, las teorías alternativas que plantearon los acusados, a excepción de Pizarro, habían constituido una negativa de responsabilidad. En cuanto al acusado Gutiérrez, se opuso a la pena sustitutiva ya que no había aportado antecedentes que demostrasen que era merecedor de tal sustitución. Los antecedentes aportados por las defensas de Bustos y Rojas no acreditaban un efectivo arraigo social, cuanto más si este último señaló en la entrevista con el asistente social que estaba siendo injustamente acusado.

La parte querellante, evacuando el traslado que le dio el tribunal de las alegaciones de los acusados, señaló que se oponía al reconocimiento de la atenuante 9ª, salvo en el caso de Pizarro, reiterando sus argumentos y los de la fiscalía.

Se dio traslado de los planteamientos precedentes, el que evacuaron las defensas de los acusados Bustos Morgado, Gutiérrez y Rojas reiterando sus argumentos iniciales. La defensa del acusado Pizarro no hizo uso de su derecho.

CENTÉSIMO OCTAGÉSIMO NOVENO: Que, se llamó a los intervinientes a aclarar sus peticiones de pena respecto del delito de fraude al Fisco, toda vez que en ellas no se habría considerado el hecho que la condena que se había pronunciado era por cuatro (4) delitos de fraude, cada uno continuado. Al efecto señalaron:

a) La fiscalía: por tratarse de cuatro (4) delitos continuados, reiterados, dijo que mantendría las penas solicitadas en la acusación, salvo en el caso del acusado Pizarro, para el cual corrigió su petición inicial de pena reduciéndola a 5 años de presidio, por las razones antes expresadas;

b) El querellante: a virtud de la aclaración efectuada por el tribunal mantendría las penas requeridas en su acusación particular, petición que posteriormente modificó, plegándose a lo que había pedido la fiscalía;

c) La defensa del acusado Pizarro: rebajar la pena en dos grados e imponerla en un quantum de 3 años y 1 día de presidio y sustituirla por la pena de libertad vigilada intensiva;

d) La defensa del acusado Christian Bustos Morgado: solicitó rebajar la pena en dos grados, habida cuenta de la atenuante 6ª muy calificada;

e) La defensa del acusado Gutiérrez: solicitó que con la concurrencia de las atenuantes impetradas y la entidad de las mismas, la pena fuere rebajada en dos grados, imponiendo, en consecuencia la de presidio menor en su grado medio o, en subsidio, en grado máximo, y, en uno u otro caso, sustituirlas con las penas anteriormente indicadas;

f) La defensa del acusado Rojas: pidió rebajar la pena en dos grados a virtud de las atenuantes invocadas.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO: **Circunstancias modificatorias de responsabilidad. Decisión.** Que, por no registrar ninguno de los acusados condenas anteriores en sus extractos de filiación y de antecedentes, se les reconoce la circunstancia atenuante 6ª del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior.

Tratándose de la circunstancia minorante 9ª del citado artículo 11, el tribunal la reconoce sólo en el caso de los sentenciados Pizarro y Gutiérrez, la que se tuvo configurada con el mérito de sus declaraciones en el juicio.

Respecto del primero, éste reconoció de manera franca y sin dobleces su participación en los hechos, explicando en qué había consistido esta e informando al respecto las falsedades de sus informes de avance de obras. Cabe decir que no obstó a este reconocimiento la circunstancia de haber querido exonerarse, o al menos buscar minimizar su participación, responsabilizando al acusado Christian Bustos, diciendo para ello que las falsificaciones las había cometido porque aquel lo había obligado, alegación que el tribunal desestimó. Añadir a lo dicho que, en todo caso, su declaración no fue suficiente para comprender de manera más acabada las circunstancias en que habían ocurrido los hechos criminosos, ni tampoco la participación dolosa de los demás acusados, en particular la de aquellos que negaron haber intervenido dolosamente en los hechos.

Tratándose del sentenciado Gutiérrez, su declaración, si bien fue menos sustancial que la de Pizarro, coadyuvó en la formación de la convicción judicial al haber aportado antecedentes que, unidos a los dichos de este último, permitieron al tribunal lograr una composición más próxima de lo ocurrido y del modus operandi que se había utilizado para defraudar al Fisco. Al igual que en el caso del sentenciado Pizarro, no obstó a esta colaboración el hecho que haya sostenido y reiterado un sin número de veces, majaderamente, que el responsable de lo que a él le había ocurrido era el acusado Rojas, quien lo había engañado. La circunstancia de que Gutiérrez hubiere enfrentado la imputación penal y el juicio de manera tan desacertada, planteándose como si se hubiese tratado de una demanda civil por incumplimiento de contrato, no impide reconocer que dentro de su declaración hubo aspectos que resultaron relevantes para la convicción que finalmente se formó el tribunal.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PRIMERO: Que, en el caso de los acusados **Bustos y Rojas**, al tenor de lo que fueron sus declaraciones en el juicio se desestimó para ellos la minorante 9ª.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEGUNDO: Artículo 68 bis del Código Penal. Calificación de atenuantes. Que, habiéndose hecho lugar a las dos atenuantes

que solicitaron las defensas de Pizarro y Gutiérrez, no procede referirse a la petición subsidiaria en torno al artículo 68 bis del Código del Ramo.

Tratándose de los sentenciados Bustos y Rojas, por haberse desestimado la circunstancia atenuante 9ª, resulta atingente el artículo 68 bis del Código Sustantivo, a cuya aplicación se hará lugar en consideración lo que fue su desempeño en Carabineros durante el tiempo que allí sirvieron.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO TERCERO: Eximente incompleta. Que, en cuanto a la eximente incompleta del artículo 11 N° 1 en relación al artículo 10 N° 1, del Código Penal, que alegó la defensa de Pizarro, el tribunal la desestimó por las razones expresadas en el análisis que anteriormente se hizo acerca de su participación.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO CUARTO: Media prescripción. Que, en relación al “Hecho 2”, la defensa de los acusados Bustos solicitó reconocer en favor de estos el instituto de la media prescripción que establece el artículo 103 del Código Penal, el que señala, “Si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los arts. 65, 66, 67 y 68, sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta”.

Por no reunirse las exigencias que indica el citado artículo, no se hará lugar a su aplicación. En efecto, en lo que toca a la prescripción de la acción penal, el instituto se encuentra construido a partir de la ausencia del imputado, quien por dicha causa ha sido declarado rebelde, luego de lo cual se entrega o es habido, habiendo en el intertanto transcurrido la mitad del plazo que señala la ley para prescripción de la acción, cinco o diez años, según se trate de un crimen o simple delito. En la especie, los acusados no se encontraban en rebeldía cuando fueron formalizados.

Acerca del vocablo “ausencia” y su entendimiento, la doctrina, y por medio de ésta la jurisprudencia, han señalado: “...la Corte Suprema ha afirmado

expresamente desde el año 1929 que “la disposición del artículo 103 se refiere sólo a los reos ausentes” (S.C.S. 23.07.1929, En: Gaceta Jurídica, Santiago, Diciembre 1929, p. 248), lo que es obvio en la medida que al dirigirse el procedimiento en contra de un sujeto presente en el juicio, se entiende suspendido el plazo de prescripción y tal suspensión afecta también a la prescripción gradual o incompleta (NOVOA MONRREAL, E., Curso de Derecho Penal Chileno, 2 vols., 1ª edición, Santiago, Ediar Conosur, t. II, 1985, p. 501, nota 31). Además, la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema ha resuelto que, para que un reo se tenga por no presente en un juicio criminal, debe haber sido declarado rebelde por ausencia, conforme a las normas del Código de procedimiento penal, declaración a la cual debe seguir un sobreseimiento temporal.

El concepto de ausencia permite comprender los relevantes beneficios que respecto de la envergadura de la pena se derivan de la prescripción gradual, los que están asociados al hecho que un sujeto que no estaba presente en un juicio, impidiendo su prosecución, se entregue o sea encontrado. Y es que este requisito fue establecido por el legislador en miras a que la sanción debe ser más o menos exigente según sea la menor o mayor posibilidad de llegar a someter a la persona del delincuente al régimen natural del proceso (Parte final del considerando 224º, sentencia de primera instancia dictada por el Ministro Sr. Adolfo Bañados Cuadra, el 12.11.1993, en el caso Orlando Letelier del Solar, sentencia citada en la Revista Fallos del Mes, año XXXV, Santiago, Noviembre 1993) (FERNÁNDEZ NEIRA, KARINNA “La prescripción gradual, aplicada a los delitos de lesa humanidad”, Tesis para optar al Grado de Magíster en Derecho, Santiago 2010, Facultad de Derecho, Universidad de Chile).

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO QUINTO: Penas asignadas por la ley a los delitos de fraude, cohecho y soborno. Que, a la época de los hechos el Código Penal prescribía para los delitos de marras, lo siguiente:

a) fraude al Fisco, artículo 239:

“El empleado público que en las operaciones en que interviniera por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles

pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior.

Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

En todo caso, se aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo”;

b) cohecho, artículo 248 bis:

“El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y, además, con la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en cualquiera de sus grados y multa del tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado.

Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargo u oficio público, perpetuas, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente”; y,

c) soborno, artículo 250:

“El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por

haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido.

Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, el sobornante no podrá ser sancionado adicionalmente, por la responsabilidad que le hubiere cabido en el crimen o simple delito cometido por el funcionario”.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEXTO: Fraude al Fisco. Determinación legal y judicial de la pena. Que, los perjuicios causados al Fisco, en el caso del retén Villa Ortega, ascendió a \$7.663.573, los que se consumaron en el mes de noviembre de 2013, en que viajó la Comisión a terminar los trabajos que estaban inconcluso. El monto indicado comprendió el derecho a viático de los trabajadores, el dinero que se pagó por los pasajes aéreos y la pérdida del material fiscal que se extrajo desde las bodegas del Departamento Cuarteles para ser utilizados en la terminación de las obras. El valor de la unidad tributaria mensual (UTM) al mes de noviembre era \$40.731, por lo que los perjuicios equivalieron a 188,22 UTM.

Tratándose de los otros proyectos, los perjuicios ascendieron a \$166.605.221, en el caso de Lago Castor, a \$126.296.000, en el de la Tenencia Coyhaique Alto y a \$159.633.794, en el retén Isla Huar. Tales perjuicios se consumaron en el mes de octubre de 2013, en que se puso término anticipado a los contratos, quedando pendiente trabajos por realizar. El valor de la UTM al mes de octubre de 2013 era de \$40.528, por lo que los perjuicios equivalieron a 4.110,86 UTM, en el caso de Lago Castor, a 3.116,26 UTM, en el de Coyhaique Alto, y a 3.938,85 UTM, en el caso de Isla Huar.

Ahora bien, teniendo presente las equivalencias precedentes, la pena corporal privativa de libertad que asigna la ley corresponde, en el caso de Villa Ortega, a presidio menor en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de la facultad del tribunal para aumentarla en un grado, de la que no se hará uso por la menor cuantía del perjuicio. Tratándose de los proyectos de Lago Castor, Coyhaique Alto e Isla Huar, los perjuicios superaron, en cada uno de ellos, las 400 UTM, por lo que la pena corporal que señala la ley corresponde a presidio mayor en su grado mínimo.

Lo anterior, sin perjuicio de la pena pecuniaria de multa, del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado, y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, considerando la mayor entidad que alcanzó la circunstancia 9ª del artículo 11, en los casos de Pizarro y Gutiérrez se decidió rebajar la pena en dos grados y a continuación determinar su quantum con arreglo al artículo 351, inciso primero del Código Procesal Penal, por resultarles más favorable. Así, la pena por los cuatro delitos de fraude, considerados como uno solo, y aumentada en un grado, corresponde a presidio mayor en su grado medio (10 años y un día hasta 15 años), la cual, como acaba de decirse se rebajará en dos grados, determina un marco penal final de presidio menor en grado máximo (3 años y un día a 5 años). Dentro de este grado, considerando la mayor extensión del mal producido por tres de los cuatro los delitos, se les impondrá la pena en el máximo.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO OCTAVO: Que, por resultarles más favorable a los sentenciados Bustos y Rojas la mencionada regla del artículo 351, se determinará la pena por los cuatro delitos de fraude, considerados como uno solo, y aumentada en un grado, resultando de ellos una pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día hasta 15 años), la que se rebajará en un grado por aplicación del artículo 68 bis, quedando situado el marco penal en presidio mayor en su grado mínimo. Dentro de éste, y considerando, por un lado, la mayor extensión del mal producido por tres de los cuatro los delitos, y por otro, la efectiva privación de libertad a que se verán sometidos los sentenciados, la pena se les impondrá en el mínimo.

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO NOVENO: Cohecho. Determinación legal y judicial de la pena. Que, por tratarse de cinco delitos de cohecho, resulta más favorable para el sentenciado Christian Bustos la norma del artículo 351, de manera que la pena por los cinco delitos de cohecho, considerados como uno solo, aumentada en un grado, y posteriormente rebajada en otro, conforme ordena el artículo 68 bis, determina que el marco penal sea la reclusión menor en su grado medio.

DUCENTÉSIMO: Soborno. Determinación legal y judicial de la pena. Que, el artículo **250** del Código Penal prescribe(ía) que las sanciones aplicables al delito de soborno son, primero, “...*las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas*” en los artículos 248, 248 bis y 249; y, segundo, “*Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, en el caso del beneficio ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido*”

Tratándose de los delitos de soborno, habiéndose acreditado que el sobornado realizó actos con infracción a los deberes de su cargo, de suyo comisivo, las penas de multa e inhabilitación que indica el artículo 248 bis ya citado serán las que se impondrán a los sobornantes.

Por otro lado, las acciones que realizó el sobornado fueron a cambio del beneficio económico que le ofrecieron los sobornantes, y no los sobornantes quienes consintieron en dar al sobornado beneficios económicos que éste les hubiera solicitado a cambio de infringir sus deberes funcionarios, hipótesis inaplicable al caso que nos ocupa, ya que se demostró que la participación de los sobornantes en las empresas FEALFRA EIRL y FEALFRA SPA, se debió al conocimiento que a sus dueños dijeron tener en el área de licitaciones de cuarteles de Carabineros, en el caso de Rodrigo Bustos, y de administración de recursos, en el caso de su hermano Nelson, constituyendo por tanto las asesorías que el primero le ofreció a Soto Jara y a Tobar Fernández el punto de partida de los delitos de soborno, en la medida que las asesorías tuvieron necesariamente que preceder, en orden cronológico, a las infracciones a los deberes del cargo de Christian Bustos, para lo cual sus hermanos lo sobornaron ofreciéndole beneficios económicos a cambio.

En consecuencia, habiendo sido los acusados Rodrigo y Nelson Bustos Morgado quienes ofrecieron beneficios económicos a su hermano Christian Bustos Morgado, a cambio de que éste infringiese los deberes de su cargo en las acciones que le tocaba realizar, la pena corporal corresponde a la de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, además de la accesoria de inhabilitación y multa del artículo 248 bis.

DUCENTÉSIMO PRIMERO: Que, resulta más favorable para los sentenciados Nelson y Rodrigo Bustos que la determinación de la sanción se haga de acuerdo con el artículo 351, esto es, considerando los cinco delitos de soborno como uno solo y aumentar la pena en un grado, quedando de esta forma fijada la pena en presidio menor en su grado máximo, dentro del cual se excluiría la parte superior.

DUCENTÉSIMO SEGUNDO: **Penas sustitutivas.** Que, se sustituirá la pena privativa de libertad a los sentenciados Pizarro y Gutiérrez por cumplirse respecto de ellos las exigencias que señala el artículo 15 de la Ley 18.216, sobre penas sustitutivas de las privativas o restrictivas de libertad, cuales son: 1) no haber sido antes condenado por crimen o simple delito; 2) la pena que se impondrá será superior a dos años y no excederá de cinco; y, 3) haber aportado antecedentes que demuestran que por sus características de personalidad y por la naturaleza, modalidades y móviles determinantes que concurrieron en los delitos de que fue hallado culpable, puede presumirse que una intervención individualizada en los términos que señala el artículo 16 de esta ley (intervención individualizada por un plazo igual al que le correspondería si tuviera que cumplir efectivamente la pena privativa de libertad) sería eficaz en su caso, para su efectiva reinserción social.

Los condenados Nelson y Rodrigo Bustos deberán cumplir efectivamente la pena impuesta por no haber aportado los antecedentes mencionados a propósito de los encausados Pizarro y Gutiérrez.

Por último, los acusados Rojas y Christian Bustos deberán cumplir de manera real y efectiva las penas que se les impondrán, toda vez que excederán el plazo de cinco años que refiere el artículo 15 de la Ley 18.216.

DUCENTÉSIMO TERCERO: Que, se reconoce a los sentenciados los abonos que fueron certificados por el ministro de fe del tribunal, los que se indicarán en la parte resolutive.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 15, 28, 29, 30, 49, 50, 66, 67, 68, 68 bis, 69, 70, 74, 93 N° 6, 94, 95, 96, 100, 103, 67, 68, 68 bis, 69, 70, 239, 248 bis, 250 del Código Penal; 45, 52, 59, 60, 61, inciso final, 229, 233, 295, 297, 324, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 351 del Código Procesal Penal; 3º, 2314, 2317, 2332 del Código Civil; 144 del Código de Procedimiento Civil; Leyes N° 18.575, 18.961, 19.880; y DS 294, de 12 de enero de 1996, se resuelve:

I. EN CUANTO AL HECHO 1.

1. FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y SOBORNO.

ACCIÓN PENAL

1) DELITOS DE COHECHO Y SOBORNO.

SE ABSUELVE a los acusados **CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO, CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE Y CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**, de los cargos que les formuló la fiscalía y el querellante, de ser autores de delitos reiterados de cohecho, el primero, y delitos reiterados de soborno, los dos últimos.

2) DELITO DE FRAUDE AL FISCO

SE CONDENA a los acusados **FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO, CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO Y CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE**, como autores de cuatro delitos de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, perpetrados el año 2013, los días 2 de julio, 20 de agosto, 4 de septiembre y 17 de octubre, con motivo de los proyectos de reposición del retén Villa Ortega, Lago Castor, tenencia Coyhaique Alto y retén Isla Huar, respectivamente, a cumplir las siguientes penas:

1) FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO y CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, cada uno, a la pena de CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, multa de \$40.252.117, correspondiente al diez por ciento del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.

Reuniendo los sentenciados las condiciones que exige el artículo 15 de la Ley 18.216, se les sustituye la pena corporal privativa de libertad impuesta, por la de libertad vigilada intensiva, fijándose en cinco años el plazo de intervención al que quedarán sujetos con motivo del cumplimiento del programa de actividades que en su oportunidad deberá elaborárseles para alcanzar su efectiva reinserción social en los ámbitos personal, comunitario y laboral, mediante la intervención individualizada que para ello serán objeto, quedando además obligados a cumplir con todas las exigencias a que se refiere el artículo 17 y con la obligación de cumplir programas formativos de ética y formación cívica, conforme ordena el artículo 17 ter, letra d).

Dentro del plazo de quinto día de que se encuentre ejecutoriada esta sentencia, los condenados deberán presentarse a Gendarmería de Chile a fin de dar inicio al cumplimiento de la pena de libertad vigilada intensiva, bajo apercibimiento de disponerse su detención para el caso que así no lo hicieren.

Si por cualquier motivo se revocare la pena sustitutiva y tuvieran por ello los condenados tener que ingresar a cumplir de manera efectiva la pena corporal inicialmente impuesta, les servirán de abono el tiempo que permanecerían privados de libertad con motivo de esta causa, Pizarro, ciento cuarenta y dos (142) y Gutiérrez, 78 días.

Ofíciase en su oportunidad a Gendarmería de Chile, para que designe un delegado que en el plazo máximo de cuarenta y cinco días desde que la presente sentencia quede ejecutoriada proponga a este Tribunal un Plan de Intervención Individual, el cual que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social de los sentenciados y cumplir las demás exigencias a que se refiere la ley.

2) CHRISTIAN BUSTOS MORGADO, SEIS AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, multa de \$40.252.117, correspondiente al diez por ciento del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.

La pena impuesta se contará desde que el sentenciado se presente o sea habido, y le servirán de abono los ciento trece (113) días que permaneció privado de libertad con motivo de esta causa, de acuerdo con la certificación efectuada por el ministro de fe del tribunal.

3) CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE, CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, multa de \$40.252.117, correspondiente al diez por ciento del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo.

La pena impuesta se contará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono ciento trece (113) días que permaneció privado de libertad en esta causa, de acuerdo con la certificación efectuada por el ministro de fe del tribunal.

ACCIÓN CIVIL.

EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

SE RECHAZA la excepción de prescripción por las razones que se dieron en su oportunidad.

EN CUANTO AL FONDO.

SE ACOGE LA DEMANDA CIVIL que interpuso el Consejo de Defensa del Estado, como querellante particular, en contra de los acusados CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO, FRANCISCO JOSÉ PIZARRO DASSO, CRISTIAN ANDRÉS GUTIÉRREZ MARTÍNEZ Y CÉSAR ORLANDO ROJAS GAETE, y se les condena a pagar por el daño patrimonial causado al Fisco de Chile por los delitos de fraude, las siguientes cantidades, en cada uno de los

proyectos de Reposición: retén Villa Ortega, \$7.663.573, retén Lago Castor, \$147.147.353; retén Isla Huar \$140.964.249, y tenencia Coyhaique Alto, \$106.746.000. Estas sumas dinerarias deberán ser pagadas debidamente reajustadas de acuerdo con la variación que haya tenido el IPC (Índice de Precios al Consumidor) desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta su pago efectivo, más intereses corrientes desde que se constituyan en mora y hasta el pago efectivo de lo adeudado. Asimismo, se les condena al pago de las costas.

II. EN CUANTO AL HECHO 2.

EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

Se declara PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL ejercida en contra de CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO, NELSON ANDRÉS BUSTOS MORGADO Y RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO, por la autoría que les cupo en los delitos de cohecho y soborno cometidos el año 2011, en relación con los proyectos de reposición de los retenes Loica y Hualañé.

EN CUANTO AL FONDO:

1) DELITO DE COHECHO.

SE CONDENA a CHRISTIAN PATRICIO BUSTOS MORGADO como autor de cinco delitos de cohecho, ilícito previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, perpetrados los días 6 de septiembre de 2012 (proyecto retén Itahue y proyecto Retén Lontué), 10 de septiembre de 2012 (proyecto retén Coronel del Maule), 10 de abril de 2013 (Proyecto retén la Islita) y 14 de agosto de 2013 (proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal), a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MEDIO, inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en su grado máximo y multa de \$8.000.000, equivalente duplo del provecho aceptado.

Teniendo presente la cuantía de la pena que se le impuso por los delitos de fraude y lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley 18.216, el condenado Christian Bustos deberá cumplir de manera real y efectiva esta segunda pena, a continuación de la primera sin solución de continuidad.

2) DELITO DE SOBORNO.

SE CONDENA a NELSON ANDRÉS BUSTOS MORGADO como autor de cinco delitos de soborno, previsto y sancionado en el 250 del Código Penal, perpetrados perpetrados los días 6 de septiembre de 2012 (proyectos retén Itahue y proyecto Retén Lontué), 10 de septiembre de 2012 (proyecto retén Coronel del Maule), 10 de abril de 2013 (Proyecto retén la Islita) y 14 de agosto de 2013 (proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal), a la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en su grado máximo y multa de \$8.000.000, equivalente duplo del provecho ofrecido.

El condenado deberá cumplir la pena corporal de manera efectiva, la que se le computará desde que se presente o sea habido, sin abonos por no haber estado privado de libertad por estos hechos.

3) SE CONDENA a RODRIGO ANTONIO BUSTOS MORGADO, como autor de cinco delitos de soborno, previsto y sancionado en el 250 del Código Penal, perpetrados los días 6 de septiembre de 2012 (proyectos retén Itahue y proyecto Retén Lontué), 10 de septiembre de 2012 (proyecto retén Coronel del Maule), 10 de abril de 2013 (Proyecto retén la Islita) y 14 de agosto de 2013 (proyecto Subcomisaría San Francisco de Mostazal), a la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios públicos temporales en su grado máximo y multa de \$8.000.000, equivalente duplo del provecho ofrecido.

El condenado deberá cumplir la pena corporal de manera efectiva, la que se le computará desde que se presente o sea habido, sin abonos por no haber estado privado de libertad por estos hechos.

III.- Habiendo sido condenados los sentenciados Francisco Pizarro Dasso, Cristian Gutiérrez Martínez, Christian Bustos Morgado y César Rojas Gaete por delitos a los cuales la ley les asigna pena aflictiva, y los sentenciados Nelson y Rodrigo Bustos Morgado condenados a pena aflictiva, cúmplase oportunamente por este tribunal con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18.556, modificado por la ley 20.568, oficiándose al efecto al Servicio Electoral.

IV.- Atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 del Código Penal, habiéndose condenado a Christian Bustos Morgado y César Rojas Gaete a penas de cumplimiento efectivo, y a Nelson Bustos, Rodrigo Bustos, Francisco Pizarro y Cristian Gutiérrez, a la pena de reclusión menor en grado máximo, los dos primeros, y a una pena más grave que ésta, los dos últimos, se les exime del apremio que señala el inciso segundo de la citada disposición, debiendo perseguirse la satisfacción de la multa conforme a las reglas generales, en caso de no pago.

V.- No se condena en costas a los intervinientes por haber resultado igualmente perdidosos como gananciosos.

Acordada la calificación de la atenuante de irreprochable conducta anterior y la aplicación del artículo 68 bis del Código Penal, con el voto en contra del magistrado Sr. Toledo, quien estuvo por rechazar tal calificación por no haberse aportado antecedentes que demostraran una mayor o superior entidad de esta circunstancia minorante, sin que pueda considerarse para estos efectos lo concerniente a la formación académica e institucional de los acusados Bustos y Rojas, y menos aún los servicios que prestaron en Carabineros de Chile. Al respecto, entiende el disidente, que de ser tomadas en cuentas estas circunstancias se incurriría en arbitrariedad y se infringiría el principio de igualdad ante la ley, toda vez que se estaría discriminando a quienes no se encontrasen en dicha situación por decisión personal, o, porque habiéndolo sido, no llegó a concretarse por razones ajenas a su sola voluntad.

A lo anterior debe añadirse que dentro del acotado universo del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, el criterio del voto de mayoría conduciría a discriminar, por segunda vez, entre servidores de la patria con mayor grado de responsabilidad, de otros con menor grado, distinción cuyo único motivo radicaría en la mayor o menor graduación dentro de sus respectivos escalafones, en circunstancias que unos y otros son servidores de la patria.

De lo anterior colige el disidente que los de mayor graduación tendrían un verdadero derecho adquirido a que su conducta pretérita fuere, per se, merecedora de la calificación en cuestión, con el agravante de la reducción de pena que ordena el artículo 68 bis. Por otro lado, a una misma razón debe seguirle

la misma resolución, con lo cual el primer mandatario y sus ministros de Estado, los legisladores, los jueces y en general los funcionarios públicos de alta dirección tendrían derecho al mismo reconocimiento y a la misma rebaja de pena por no otra razón que una circunstancia de vida laboral. De seguirse el criterio que plantea la mayoría, se estaría en buena medida reeditando conceptos propios de una sociedad de clases, ya abandonados desde hace mucho, e incluso proscritos en el ordenamiento jurídico nacional, como quiera que unos pocos se verían favorecidos, pero muchos otros desfavorecidos.

A mayor abundamiento, la condición de oficial y ex oficial de Carabineros que tenían los acusados a ese entonces, y el hecho de que hubieren recibido formación profesional universitaria y capacitación institucional dentro y fuera del país, con el sólo objeto de que cumplieran de mejor forma sus deberes policiales, impide calificar sus conductas en la medida que tales circunstancias fueron utilizadas en perjuicio de la institución policial y de la comunidad a la que alguna vez juraron proteger de los delincuentes. Lo anterior, más aun si para perpetrar los delitos de que han sido hallados culpables se valieron del conocimiento y experiencia que habían adquirido al interior y al amparo de la institución en el área de adquisiciones y compras públicas.

Tratándose del sentenciado Rojas, cabe señalar que los servicios que prestó en el extranjero, cualquiera hayan sido estos y las circunstancias en que lo hizo, sólo formaron parte de las funciones y deberes que le imponía su cargo, por lo que no puede ahora el cumplimiento del deber servir de fundamento para calificar su conducta.

Por las razones precedentes, el voto de minoría, junto con disentir de la calificación de la conducta anterior estuvo por imponer a los acusados Christian Bustos y César Rojas la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio como autores del delito reiterado de fraude al Fisco y, además, al primero, la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo como autor de delitos reiterados de cohecho.

Ejecutoriada, remítase copia autorizada al Juzgado de Garantía que corresponda para la oportuna ejecución de lo resuelto.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactó José María Toledo Canales, Juez del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

RIT 273-2019

RUC 1410006643-3

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL SÉPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, SRA. BERNARDITA GONZÁLEZ FIGARI, SRA. OLGA ORTEGA MELO Y JOSÉ MARÍA TOLEDO CANALES. NO FIRMAN LAS MAGISTRADOS GONZÁLEZ Y ORTEGA POR ENCONTRARSE HACIENDO USO DE FERIADO LEGAL, LA PRIMERA, Y CON LICENCIA MÉDICA, LA SEGUNDA.